I N D I C E
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Decreto por el que se concede permiso al Embajador Antonio Guillermo Villegas Villalobos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador 3

Decreto por el que se concede permiso al ingeniero Andrés Eduardo Engels Errass, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Suiza en Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León 3

Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Lauro Alvarez Gordillo, para prestar distintos servicios en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador para los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente; así como en consulados en diversos estados y en la Embajada de dicho país en México 3

Decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Embajador Javier Barros Valero y al General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz Orta, para aceptar y usar las condecoraciones que en distintos grados les confieren los Gobiernos del Reino de Suecia y de la República de Chile, respectivamente 4

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Helénica para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el treinta de noviembre de dos mil 5

Decreto por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gran Ducado de Luxemburgo para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y Sobre el Capital, firmado en la ciudad de Luxemburgo, el siete de febrero de dos mil uno 5

Decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil 6

Decreto por el que se aprueba el Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil 6

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras 7

Decreto por el que se expide la Ley de Sociedades de Inversión 28

Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas 53

Oficio mediante el cual se concede autorización a Bank of Antigua Limited, para establecer en territorio nacional una oficina de representación 90

Tasas de recargos para el mes de junio de 2001 90

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica 91

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 92

Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional 93

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 93

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

Sentencia pronunciada en el juicio agrario número 147/94, relativo a la segunda ampliación de ejido, promovido por un grupo de campesinos del poblado Francisco Sarabia, Municipio de Tuzantán, Chis. 93

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 108

TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ENERGIA

Reglamento Interior de la Secretaría de Energía 190

AVISOS

Judiciales y generales 43

Internet: www.gobernacion.gob.mx Esta edición consta de tres secciones
Correo electrónico: dof@rtn.net.mx *Informes, suscripciones y quejas: 5592-7919 / 5535-4583*

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

DECRETO por el que se concede permiso al Embajador Antonio Guillermo Villegas Villalobos, para aceptar y usar la Condecoración que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al Embajador ANTONIO GUILLERMO VILLEGAS VILLALOBOS, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional "José Matías Delgado", en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador.

Mexico, D.F., a 19 de abril de 2001.- Dip. **Ricardo Francisco García Cervantes**, Presidente.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Dip. **Bernardo Borbón Vilches**, Secretario.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se concede permiso al ingeniero Andrés Eduardo Engels Errass, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Suiza en Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al Ingeniero ANDRES EDUARDO ENGELS ERRASS, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Suiza en Monterrey, con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León.

México, D.F., a 19 de abril de 2001.- Dip. **Ricardo Francisco García Cervantes**, Presidente.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Dip. **Bernardo Borbón Vilches**, Secretario.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas**"**.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se concede permiso a los ciudadanos cuya lista encabeza Lauro Alvarez Gordillo, para prestar distintos servicios en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador para los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, respectivamente; así como en consulados en diversos estados y en la Embajada de dicho país en México.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano LAURO ALVAREZ GORDILLO, para prestar servicios como Técnico en Ingeniería, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano ANTONIO GONZALEZ CABRERA, para prestar servicios como Supervisor de Mantenimiento, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano LEONEL LOPEZ CASTELLANOS, para prestar servicios como Técnico en Ingeniería, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso al ciudadano OCTAVIO MACIAS MORENO, para prestar servicios como Jefe del Departamento de Mantenimiento Preventivo, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano RICARDO VALDES RUIZ, para prestar servicios como Técnico en Ingeniería, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso al ciudadano JOSE MIGUEL CORTES ORTEGA, para prestar servicios como Empleado de Mantenimiento, en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano JORGE DE JESUS DIAZ PASCACIO, para prestar servicios como Jefe del Departamento de Ecología, en la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador para los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

ARTICULO OCTAVO.- Se concede permiso al ciudadano ENRIQUE NAVA LOPEZ, para prestar servicios como empleado de Oficina del Departamento de Servicios Generales, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.

ARTICULO NOVENO.- Se concede permiso al ciudadano LESTER HIRAM NUÑO NUÑEZ, para prestar servicios como Encargado de Almacén, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

ARTICULO DECIMO.- Se concede permiso al ciudadano SERGIO CARDOSO JUAREZ, para prestar servicios como Chofer, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano ARMANDO ZEPEDA SALAS, para prestar servicios como Ayudante de Mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano JUAN JOSE MARTINEZ RIVAS, para prestar servicios como Telefonista/Operador, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- Se concede permiso a la ciudadana MIRSA BELTRAN FOSADO, para prestar servicios como Asistente de Beneficios Federales, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

México, D.F., a 19 de abril de 2001.- Dip. **Ricardo Francisco García Cervantes**, Presidente.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Dip. **Carolina Viggiano Austria**, Secretario.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas**"**.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se concede permiso a los ciudadanos Embajador Javier Barros Valero y al General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Filiberto Paz Orta, para aceptar y usar las condecoraciones que en distintos grados les confieren los Gobiernos del Reino de Suecia y de la República de Chile, respectivamente.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Embajador JAVIER BARROS VALERO, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Estrella Polar, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia.

ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano General Brigadier Diplomado de Estado Mayor FILIBERTO PAZ ORTA, para aceptar y usar la Condecoración Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en Grado de Gran Estrella al Mérito Militar, que le confiere el Gobierno de la República de Chile.

México, D.F., a 27 de abril de 2001.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Dip. **Ricardo Francisco García Cervantes**, Presidente.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretario.- Dip. **Manuel Medellín Milán**, Secretario.- Rúbricas**"**.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Helénica para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el treinta de noviembre de dos mil.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 76 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA HELENICA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES, firmado en la Ciudad de México, el treinta de noviembre de 2000.

México, D.F., a 26 de abril de 2001.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Sen. **Sara Castellanos Cortés**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gran Ducado de Luxemburgo para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos Sobre la Renta y Sobre el Capital, firmado en la ciudad de Luxemburgo, el siete de febrero de dos mil uno.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 76 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION Y PREVENIR LA EVASION FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL CAPITAL, firmado en la ciudad de Luxemburgo, el siete de febrero de dos mil uno.

México, D.F., a 25 de abril de 2001.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 76 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS DE LA ASOCIACION EUROPEA DE LIBRE COMERCIO, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil.

México, D.F., a 30 de abril de 2001.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se aprueba el Acuerdo sobre Agricultura entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Islandia, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA CAMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONCEDE EL ARTICULO 76 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

ARTICULO UNICO.- Se aprueba el ACUERDO SOBRE AGRICULTURA ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPUBLICA DE ISLANDIA, firmado en la Ciudad de México, el veintisiete de noviembre de dos mil.

México, D.F., a 30 de abril de 2001.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se **REFORMAN** los artículos 5; 15; 16, fracción III; 17, párrafos primero, segundo y tercero y fracciones I a V; 19, párrafo segundo; 22, párrafo primero, actual tercer párrafo se convierte en sexto y se reforma; 23, párrafo primero; 24, párrafo primero y fracciones I, III y IV segundo párrafo; 25, párrafos primero, segundo y último; 27, fracción I; 28, fracción II; 29, párrafo primero y fracciones I a IV; 45-I primer párrafo; 45-K, párrafo primero, actual segundo párrafo se convierte en tercero y se reforma, actual tercero se convierte en cuarto y se reforma, actual quinto se convierte en octavo y se reforma y actual sexto se convierte en noveno y se reforma; 45-N, párrafo primero; 46, fracción XXV; 50, párrafos primero, segundo y tercero; 51, párrafo primero; 52, párrafo primero; 63,

párrafos segundo y actual tercero se convierte en cuarto y se reforma; 64, párrafos primero, segundo, actual tercero se convierte en quinto y se reforma y actual quinto se convierte en séptimo y se reforma; 73, párrafo primero, actual segundo se convierte en tercero y se reforma y actual tercero se convierte en cuarto y se reforma, las fracciones I, II, III, V y VII; 81, párrafo segundo; 85 Bis, párrafo primero; 87, párrafos primero, segundo y cuarto; 89, párrafo tercero; 93, párrafos primero y tercero y fracción II; 96, párrafo tercero; 101, párrafos primero, segundo, tercero y actual cuarto párrafo se convierte en quinto y se reforma; 102, párrafo primero; 106, párrafos segundo y tercero, y fracciones IV, XIII en su párrafo primero, XV, XVI, XVII en sus incisos a) y c), y XVIII; 138; 143 párrafo primero; se **ADICIONAN** el artículo 5 Bis; 5 Bis 1; 5 Bis 2; 5 Bis 3; 5 Bis 4; 16 Bis; el párrafo cuarto al artículo 17; los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 21; los párrafos segundo, tercero, cuarto y fracciones I a VIII, el actual segundo párrafo se convierte en quinto del artículo 22; el párrafo segundo, el actual segundo párrafo se convierte en tercero, el actual tercer párrafo se convierte en cuarto y se adicionan fracción VIII al artículo 23; 24 Bis; un tercer párrafo al artículo 25; 27 Bis; un último párrafo al artículo 29; los párrafos segundo, quinto fracciones I a VIII y sexto, el actual cuarto párrafo se convierte en séptimo, el actual séptimo párrafo se convierte en décimo del artículo 45-K; un último párrafo al artículo 45-N; las fracciones XXVI y XXVII y un último párrafo al artículo 46; los párrafos tercero y cuarto al artículo 52; los párrafos segundo con dos fracciones, tercero, cuarto, quinto y sexto, al artículo 57; el párrafo tercero al artículo 63; los párrafos tercero y cuarto y el actual cuarto párrafo se convierte en sexto del artículo 64; 64 Bis; el párrafo segundo y un segundo párrafo a la fracción quinta del artículo 73; 73 Bis; 73 Bis 1; los párrafos cuarto y sexto al artículo 101; las fracciones XV Bis, XV Bis 1, XV Bis 2, un segundo párrafo al inciso c) de la fracción XVII y fracción XX al artículo 106; 117 Bis; el párrafo tercero del artículo 133; 134 Bis; 134 Bis 1; 140 Bis y los párrafos segundo y tercero al artículo 143; y se **DEROGAN** las fracciones VI a VIII del artículo 17; el artículo 17 Bis; el último párrafo del artículo 24; las fracciones I a V del artículo 25; las fracciones III y V, y el último párrafo del artículo 45-I; el artículo 45-J; el segundo párrafo de la fracción XXIV del artículo 46; el artículo 49; el cuarto párrafo del artículo 50; el cuarto, quinto y sexto párrafos, y la fracción VI del artículo 73; el quinto párrafo del artículo 87; y el segundo párrafo del artículo 102, de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue:

Artículo 5.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá interpretar para efectos administrativos, los preceptos de esta Ley, así como las disposiciones de carácter general que emita la propia Secretaría en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la presente Ley.

Artículo 5 Bis.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar la opinión del Banco de México, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley, lo estime procedente.

Asimismo, la Secretaría podrá consultar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los casos en que requiera su opinión y de conformidad con las atribuciones conferidas a esta última.

Artículo 5 Bis 1.- Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, éste no podrá exceder de tres meses para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad competente que deba resolver, conforme al Reglamento Interior respectivo. Igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado, se fincará en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable.

Los requisitos de presentación y plazos, así como otra información relevante aplicables a las promociones que realicen las instituciones de crédito deberán precisarse en disposiciones de carácter general.

Cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que dentro de un término que no podrá ser menor de diez días hábiles subsane la omisión. Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, dicha prevención deberá hacerse a más tardar dentro de la mitad del plazo de respuesta de la autoridad y, cuando éste no sea expreso, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación del escrito inicial.

Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el término señalado las autoridades desecharán el escrito inicial.

Si las autoridades no hacen el requerimiento de información dentro del plazo correspondiente, no podrán rechazar el escrito inicial por incompleto.

Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que las autoridades contesten empezarán a correr el día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente.

Artículo 5 Bis 2.- El plazo a que se refiere el artículo anterior no será aplicable a las promociones donde por disposición expresa de esta Ley las autoridades administrativas deban escuchar la opinión de otras autoridades, además de aquéllas relacionadas con las autorizaciones relativas a la constitución, fusión, escisión y liquidación de instituciones de crédito. En estos casos no podrá exceder de seis meses el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda, siendo aplicables las demás reglas que señala el artículo 5 Bis 1 de esta Ley.

Artículo 5 Bis 3.- Las autoridades administrativas competentes, a solicitud de parte interesada podrán ampliar los plazos establecidos en la presente Ley, sin que dicha ampliación exceda, en ningún caso, de la mitad del plazo previsto originalmente en las disposiciones aplicables, cuando así lo exija el asunto y no tengan conocimiento de que se perjudica a terceros en sus derechos.

Artículo 5 Bis 4.- No se les aplicará lo establecido en los artículos 5 Bis 1, 5 Bis 2 y 5 Bis 3 a las autoridades administrativas en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión, inspección y vigilancia.

Artículo 15.- Para efectos de lo previsto en la presente Ley, por inversionistas institucionales se entenderá a las instituciones de seguros y de fianzas, únicamente cuando inviertan sus reservas técnicas; a las sociedades de inversión comunes y a las especializadas de fondos para el retiro; a los fondos de pensiones o jubilaciones de personal, complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social y de primas de antigüedad, que cumplan con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como a los demás inversionistas institucionales que autorice expresamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 16.- ...

I.- y II.- **...**

III.- Contendrán el respectivo orden del día.

...

...

Artículo 16 Bis.- En el orden del día se deberán listar todos los asuntos a tratar en la asamblea de accionistas, incluso los comprendidos en el rubro de asuntos generales. La documentación e información relacionada con los temas a tratar en la correspondiente asamblea de accionistas, deberán ponerse a disposición de los accionistas por lo menos con quince días de anticipación a su celebración.

Artículo 17.- Cualquier persona física o moral podrá adquirir mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, el control de acciones de la serie "O" del capital social de una institución de banca múltiple, en el entendido de que dichas operaciones deberán obtener la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando excedan del cinco por ciento de dicho capital social, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 13 de la presente Ley.

En el supuesto de que uno o más accionistas pretendan obtener el control de la administración en una Institución, deberá acompañar a su solicitud, según corresponda:

I. Relación de las personas que, en su caso, pretendan adquirir el control de la institución de banca múltiple de que se trate indicando el capital que suscribirán, la forma en que lo pagarán, así como el origen de los recursos con los que se realizará dicho pago;

II. Relación de los consejeros y directivos que nombrarían en la institución de banca múltiple de la que pretenden adquirir el control;

III. Plan general de funcionamiento de la institución de banca múltiple de que se trate, el cual deberá contemplar los aspectos señalados en el artículo 10 fracción II;

IV. Programa estratégico para la implementación del gobierno corporativo, y

V. La demás documentación conexa que requiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de evaluar la solicitud correspondiente.

VI. a VIII. (Se derogan)

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que se obtiene el control de una institución de banca múltiple cuando se adquiera el treinta por ciento o más de las acciones representativas del capital social de la propia institución, se tenga el control de la asamblea general de accionistas, se esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, o por cualquier otro medio se controle a la institución de banca múltiple de que se trate.

Las instituciones deberán proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información que ésta les requiera con respecto a las personas que directa o indirectamente hayan adquirido las acciones representativas de su capital social, en la forma y sujetándose a las condiciones que establezca la propia Comisión mediante reglas de carácter general.

Artículo 17 Bis.- (Se deroga)

Artículo 19.- ...

En el transcurso del primer trimestre de cada año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dará a conocer mediante publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, el monto del capital mínimo con el que deberán contar las instituciones, a más tardar el último día hábil del año de que se trate.

...

...

...

...

Artículo 21.- ...

El consejo de administración deberá contar con un comité de auditoría, con carácter consultivo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá, en las disposiciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 22 de esta Ley, las funciones mínimas que deberá realizar el comité de auditoría, así como las normas relativas a su integración, periodicidad de sus sesiones y la oportunidad y suficiencia de la información que deba considerar.

El director general deberá elaborar y presentar al consejo de administración, para su aprobación, las políticas para el adecuado empleo y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de la institución, las cuales deberán considerar el uso racional de los mismos, restricciones para el empleo de ciertos bienes, mecanismos de supervisión y control y, en general, la aplicación de los recursos a las actividades propias de la institución y a la consecución de sus fines.

El director general deberá en todos los casos proporcionar datos e informes precisos para auxiliar al consejo de administración en la adecuada toma de decisiones.

Artículo 22.- El consejo de administración de las instituciones de banca múltiple estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros propietarios, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.

Por consejero independiente, deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración de la institución de banca múltiple respectiva, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante disposiciones de carácter general, en las que igualmente se establecerán los supuestos bajo los cuales, se considerará que un consejero deja de ser independiente, para los efectos de este artículo.

En ningún caso podrán ser consejeros independientes:

I. Empleados o directivos de la institución;

II. Accionistas que sin ser empleados o directivos de la institución, tengan poder de mando sobre los directivos de la misma;

III. Socios o empleados de sociedades o asociaciones que presten servicios de asesoría o consultoría a la institución o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del cual forme parte ésta, cuyos ingresos representen el diez por ciento o más de sus ingresos;

IV. Clientes, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, deudor o acreedor importante de la institución.

Se considera que un cliente o proveedor es importante cuando los servicios que le preste la institución o las ventas que le haga a ésta, representan más del diez por ciento de los servicios o ventas totales del cliente o del proveedor, respectivamente. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento de los activos de la institución o de su contraparte;

V. Empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos importantes de la institución.

Se consideran donativos importantes a aquellos que representen más del quince por ciento del total de donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles de que se trate;

VI. Directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo consejo de administración participe el director general o un directivo de alto nivel de la institución;

VII. Cónyuges o concubinarios, así como los parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado respecto de alguna de las personas mencionadas en las fracciones III a VI anteriores, o bien, hasta el tercer grado, en relación con las señaladas en las fracciones I, II y VIII de este artículo, y

VIII. Quienes hayan ocupado un cargo de dirección o administrativo en la institución o en el grupo financiero al que, en su caso, pertenezca la propia institución, durante el año anterior al momento en que se pretenda hacer su designación.

El consejo deberá reunirse por lo menos trimestralmente y en forma extraordinaria, cuando sea convocado por el Presidente del consejo, al menos el veinticinco por ciento de los consejeros, o cualquiera de los comisarios de la institución. Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración se deberá contar con la asistencia de cuando menos el cincuenta y uno por ciento de los consejeros, de los cuales por lo menos uno deberá ser consejero independiente.

...

El Presidente del consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 23.- Los nombramientos de consejeros de las instituciones de banca múltiple deberán recaer en personas que cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o administrativa.

Los consejeros estarán obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interés. Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la institución de banca múltiple de que sea consejero, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el consejo, sin perjuicio de la obligación que tendrá la institución de proporcionar toda la información que les sea solicitada al amparo de la presente Ley.

...

I. a VII. **...**

VIII. Quienes participen en el consejo de administración de entidades financieras pertenecientes, en su caso, a otros grupos financieros, o de las sociedades controladoras de los mismos, así como de otras entidades financieras no agrupadas.

...

Artículo 24.- Los nombramientos del director general de las instituciones de banca múltiple y de los funcionarios que ocupen cargos con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de éste; deberán recaer en personas que cuenten con elegibilidad crediticia y honorabilidad, y que además reúnan los requisitos siguientes:

I. Ser residente en territorio mexicano, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación;

II. **...**

III. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señalan las fracciones III a VIII del artículo anterior, y

IV. **...**

Los comisarios de las instituciones deberán cumplir con el requisito establecido en la fracción I anterior.

(Se deroga)

Artículo 24 Bis.- La institución de banca múltiple de que se trate, deberá verificar que las personas que sean designadas como consejeros, director general y funcionarios con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de este último, cumplan, con anterioridad al inicio de sus gestiones, con los requisitos señalados en los artículos 23 y 24 de esta Ley. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, los criterios mediante los cuales se deberán integrar los expedientes que acrediten el cumplimiento a lo señalado en el presente artículo.

En todo caso, las personas mencionadas en el párrafo anterior deberán manifestar por escrito:

I. Que no se ubican en ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones III a VIII del artículo 23, tratándose de consejeros y III del artículo 24 para el caso del director general y funcionarios a que se refiere el primer párrafo de este artículo;

II. Que se encuentran al corriente de sus obligaciones crediticias de cualquier género, y

III. Que conocen los derechos y obligaciones que asumen al aceptar el cargo que corresponda.

Las instituciones de banca múltiple deberán informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los nombramientos de consejeros, director general y funcionarios con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de este último, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisitos aplicables.

Artículo 25.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá en todo tiempo determinar que se proceda a la remoción o suspensión de los miembros del consejo de administración, directores generales, comisarios, directores y gerentes, delegados fiduciarios y

funcionarios que puedan obligar con su firma a la institución, así como imponer veto de seis meses hasta cinco años a las personas antes mencionadas, cuando considere que no cuentan con la suficiente calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio para el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven. En los dos últimos supuestos, la propia Comisión podrá además, inhabilitar a las citadas personas para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero mexicano, por el mismo periodo de seis meses hasta cinco años, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables. Antes de dictar la resolución correspondiente, la citada Comisión deberá escuchar al interesado y a la institución de banca múltiple de que se trate.

La propia Comisión podrá, también con el acuerdo de su Junta de Gobierno, ordenar la remoción o suspensión de los auditores externos independientes de las instituciones de banca múltiple, así como imponer veto a dichas personas por el periodo señalado en el párrafo anterior, cuando incurran de manera grave o reiterada en infracciones a esta Ley o las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, sin perjuicio de las sanciones a que pudieran hacerse acreedores.

Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere este artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llevará un listado de las personas cuya participación en el sector financiero, por razón de sus antecedentes, no se considere conveniente.

I. a V. (Se derogan)

Las resoluciones a que se refiere este artículo, podrán ser recurridas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se hubieren notificado. La propia Secretaría podrá revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida, previa audiencia de las partes.

Artículo 27.- ...

I. Las sociedades presentarán a la propia Secretaría los proyectos de los acuerdos de las asambleas de accionistas relativos a la fusión, el convenio de fusión, plan de fusión de las sociedades respectivas con indicación de las etapas en que deberá llevarse a cabo, estados contables que presenten la situación de las sociedades, estados financieros proyectados de la sociedad resultante de la fusión y la información a que se refieren las fracciones I, II y IV del artículo 10 de esta Ley;

II. a V. **...**

Artículo 27 Bis.- Para la escisión de una institución de banca múltiple, se requerirá autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien oirá la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La sociedad escindente presentará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el proyecto de acta de asamblea que contenga los acuerdos de su asamblea general extraordinaria de accionistas relativos a su escisión, proyecto de reformas estatutarias de la sociedad escindente, proyecto de estatutos sociales de la sociedad escindida, estados contables que presenten la situación de la sociedad escindente, estados financieros proyectados de las sociedades que resulten de la escisión, y la demás documentación conexa que requiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de evaluar la solicitud respectiva.

La propia Secretaría, al autorizar la escisión, cuidará en todo tiempo la adecuada protección de los intereses del público, así como de los trabajadores de las sociedades, en lo que corresponda a sus derechos.

La autorización a que se refiere este artículo y los acuerdos de la asamblea de accionistas relativos a la escisión y la escritura constitutiva de la escindida, se inscribirán en el Registro Público de Comercio. A partir de la fecha en que se inscriban surtirá efectos la escisión.

Una vez hecha la inscripción anterior, los acuerdos de escisión adoptados por la asamblea de accionistas de la sociedad escindente se publicarán en el **Diario Oficial de la Federación** y en dos periódicos de amplia circulación en la plaza en que tenga su domicilio social la escindente.

Durante los noventa días naturales siguientes a partir de la fecha de publicación a que se refiere la fracción anterior, los acreedores de la sociedad escindente podrán oponerse judicialmente a la misma, con el objeto de obtener el pago de sus créditos, sin que esta oposición suspenda la escisión.

La sociedad escindida no se entenderá autorizada para organizarse y operar como institución de banca múltiple.

Con motivo de la escisión, a la sociedad escindida no se le podrán transmitir operaciones activas ni pasivas de las instituciones de crédito, salvo en los casos en que lo autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 28.- ...

I. **...**

II. Si los accionistas, en asamblea general extraordinaria, resuelven solicitarla;

III. a IX. **...**

...

Artículo 29.- La disolución y liquidación de las instituciones de banca múltiple, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y en los Capítulos X y XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con las siguientes excepciones:

I. El cargo de liquidador recaerá en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a partir de que la institución se encuentre en estado de liquidación o se declare en concurso mercantil, según se trate;

II. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán solicitar la declaración en concurso mercantil;

III. En los fideicomisos en los que la institución que se encuentre en liquidación o en concurso mercantil, actúe como fiduciaria en los términos de esta Ley, el liquidador o síndico, según se trate, podrá convenir con alguna otra institución la sustitución de los deberes fiduciarios;

IV. A partir de la fecha en que entre en liquidación una institución o se declare en concurso mercantil, los pagos derivados de sus operaciones se suspenderán hasta en tanto el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario resuelva lo conducente, y

V. **...**

...

El concurso mercantil de una institución de banca múltiple se regirá por lo señalado en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y el Título Octavo, Capítulo II de la Ley de Concursos Mercantiles.

Artículo 45-I.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar a las Instituciones Financieras del Exterior, a las Sociedades Controladoras Filiales o a las Filiales, la adquisición de acciones representativas del capital social de una o más instituciones de banca múltiple o de una o más sociedades financieras de objeto limitado, según corresponda, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. y II. **...**

III. (Se deroga)

IV. **...**

V. (Se deroga)

(Se deroga)

Artículo 45-J.- (Se deroga)

Artículo 45-K.- El consejo de administración de las instituciones de banca múltiple filiales estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros propietarios, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.

Su nombramiento deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, así como a aquellas que tengan el propósito de designar comisarios por cada serie de acciones, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El accionista de la serie "F" que represente cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital social pagado designará a la mitad más uno de los consejeros y por cada diez por ciento de acciones de esta serie que exceda de ese porcentaje, tendrá derecho a designar un consejero más. Los accionistas de la serie "O", designarán a los consejeros restantes. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.

El consejo de administración deberá estar integrado por al menos el veinticinco por ciento de consejeros independientes, que serán designados en forma proporcional conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden. Por consejero independiente, deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración de la institución de banca múltiple filial respectiva, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 22 de esta Ley, en las que igualmente se establecerán los supuestos bajo los cuales, se considerará que un consejero deja de ser independiente para los efectos de este artículo.

En ningún caso podrán ser consejeros independientes:

I. Empleados o directivos de la institución;

II. Accionistas que sin ser empleados o directivos de la institución, tengan poder de mando sobre los directivos de la misma;

III. Socios o empleados de sociedades o asociaciones que presten servicios de asesoría o consultoría a la institución o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del cual forme parte ésta, cuyos ingresos representen el diez por ciento o más de sus ingresos;

IV. Clientes, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, deudor o acreedor importante de la institución.

Se considera que un cliente o proveedor es importante cuando los servicios que le preste la institución o las ventas que le haga a ésta, representan más del diez por ciento de los servicios o ventas totales del cliente o del proveedor, respectivamente. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento de los activos de la institución o de su contraparte;

V. Empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos importantes de la institución.

Se consideran donativos importantes a aquellos que representen más del quince por ciento del total de donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles de que se trate;

VI. Directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo consejo de administración participe el director general o un directivo de alto nivel de la institución;

VII. Cónyuges o concubinarios, así como los parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado respecto de alguna de las personas mencionadas en las fracciones III a VI anteriores, o bien, hasta el tercer grado, en relación con las señaladas en las fracciones I, II y VIII de este artículo, y

VIII. Quienes hayan ocupado un cargo de dirección o administrativo en la institución o en el grupo financiero al que, en su caso, pertenezca la propia institución, durante el año anterior al momento en que se pretenda hacer su designación.

El consejo deberá reunirse por lo menos trimestralmente y de manera adicional, cuando sea convocado por el Presidente del consejo, al menos una cuarta parte de los consejeros, o cualquiera de los comisarios de la institución. Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración, se deberá contar con la asistencia de cuando menos el cincuenta y uno por ciento de los consejeros, de los cuales por lo menos uno deberá ser consejero independiente.

...

El presidente del consejo deberá elegirse de entre los propietarios de la serie "F", y tendrá voto de calidad en caso de empate.

En el caso de las instituciones de banca múltiple Filiales en las cuales cuando menos el noventa y nueve por ciento de los títulos representativos del capital social sean propiedad, directa o indirectamente, de una Institución Financiera del Exterior o una Sociedad Controladora Filial, podrá determinar libremente el número de consejeros, el cual en ningún caso podrá ser inferior a cinco, debiendo observarse lo señalado por los párrafos primero, tercero y cuarto del presente artículo.

...

Artículo 45-N.- Respecto de las Filiales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá todas las facultades que le atribuye la presente Ley en relación con las instituciones de banca múltiple y las sociedades financieras de objeto limitado. Cuando las autoridades supervisoras del país de origen de la Institución Financiera del Exterior propietaria de acciones representativas del capital social de una Filial o de una Sociedad Controladora Filial, según sea el caso, deseen realizar visitas de inspección, deberán solicitarlo a la propia Comisión. A discreción de la misma, las visitas podrán hacerse por su conducto o sin que medie su participación.

...

I. y II. **...**

A solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las autoridades que realicen la inspección deberán presentarle un informe de los resultados obtenidos.

Artículo 46.- ...

I. a XXIII. **...**

XXIV. **...**

(Se deroga)

XXV. Realizar operaciones financieras conocidas como derivadas, sujetándose a las disposiciones que expida el Banco de México escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

XXVI. Efectuar operaciones de factoraje financiero, y

XXVII. Las análogas o conexas que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La realización de las operaciones señaladas en las fracciones XXIV y XXVI de este artículo, así como el cumplimiento de las obligaciones de las partes, se sujetarán a lo previsto por esta Ley y, en lo que no se oponga a ella, por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Artículo 49.- (Se deroga)

Artículo 50.- Las instituciones de crédito deberán mantener un capital neto en relación con los riesgos de mercado, de crédito y otros en que incurran en su operación, que no podrá ser inferior a la cantidad

que resulte de sumar los requerimientos de capital por cada tipo de riesgo, en términos de las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para las instituciones de banca múltiple por un lado, y para las instituciones de banca de desarrollo por otro.

El capital neto será el que se obtenga conforme a lo que establezca la propia Secretaría en las mencionadas disposiciones.

Al ejercer las atribuciones que le confiere este artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá tomar en cuenta los usos bancarios internacionales respecto a la adecuada capitalización de las instituciones de crédito, y deberá escuchar la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

(Se deroga)

Artículo 51.- Al realizar sus operaciones las instituciones de banca múltiple deben diversificar sus riesgos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con acuerdo de su Junta de Gobierno determinará mediante reglas generales:

I. a II. **...**

...

Artículo 52.- Las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público, mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, estableciendo en los contratos respectivos las bases para determinar lo siguiente:

I. a III. **...**

...

La instalación y el uso de los equipos y medios señalados en el primer párrafo de este artículo, se sujetarán a las Reglas de carácter general que en su caso, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades con que cuenta el Banco de México para regular las operaciones que efectúen las instituciones de crédito relacionadas con los sistemas de pagos y las de transferencias de fondos en términos de su ley.

Artículo 57.- ...

Las instituciones de crédito podrán cargar a las cuentas de sus clientes, el importe de los pagos que realicen a proveedores de bienes o servicios autorizados por dichos clientes, siempre y cuando:

I. Cuenten con la autorización del cliente de que se trate, o

II. El cliente autorice directamente al proveedor de bienes o servicios y éste a su vez instruya a la institución de crédito para realizar el cargo respectivo. En este caso, la autorización podrá quedar en poder del proveedor de los bienes o servicios.

En el evento de que el cliente cuya cuenta hubiere sido cargada en términos del párrafo anterior, objete dicho cargo dentro de los noventa días naturales siguientes a la fecha en que éste se haya realizado, la institución de crédito respectiva deberá abonarle en la cuenta de que se trate, a más tardar el día hábil bancario inmediato siguiente a aquél en que se efectúe la objeción, la totalidad de los cargos.

Para efectos de cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior, la institución de crédito estará facultada para cargar a la cuenta que lleve al proveedor de los bienes o servicios, el importe correspondiente. Cuando la cuenta del proveedor de bienes o servicios la lleve una institución de crédito distinta, ésta deberá devolver a la institución en que tenga su cuenta el cliente los recursos de que se trate, pudiendo cargar a la cuenta del proveedor de los bienes o servicios respectivo el importe de la reclamación. Para estos efectos, la institución de crédito y el proveedor deberán pactar los términos y condiciones que serán aplicables.

Las instituciones de crédito deberán pactar con los proveedores el procedimiento para efectuar los cargos a que se refiere el párrafo anterior, cuidando en todo momento que no causen daño al patrimonio de dichas instituciones.

Las autorizaciones, instrucciones y comunicaciones a que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo por escrito con firma autógrafa o a través de los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que previamente convengan las partes, debiendo contar las instituciones de crédito con los registros, archivos u otros medios que les permitan presentar ante la autoridad competente, la fecha y demás características principales de las reclamaciones que, en su caso, presenten los usuarios.

Artículo 63.- ...

I. a IX. **...**

Podrán tener anexos cupones para el pago de intereses y, en su caso, recibos para las amortizaciones parciales. Los títulos podrán amparar uno o más bonos. Las instituciones emisoras tendrán la facultad de amortizar anticipadamente los bonos, siempre y cuando en el acta de emisión, en cualquier propaganda o

publicidad dirigida al público y en los títulos que se expidan, se describan claramente los términos, fechas y condiciones de pago anticipado.

Cualquier modificación a los términos, fechas y condiciones de pago deberán realizarse con el acuerdo favorable de las tres cuartas partes, tanto del consejo de administración de la institución de que se trate, como de los tenedores de los títulos correspondientes. La convocatoria de la asamblea correspondiente deberá contener todos los asuntos a tratar en la asamblea, incluyendo cualquier modificación al acta de emisión y publicarse en el **Diario Oficial de la Federación** y en algún periódico de amplia circulación nacional por lo menos con quince días de anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse.

La emisora mantendrá los bonos en custodia en alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas en la Ley del Mercado de Valores, entregando a los titulares de los mismos, constancia de sus tenencias.

Artículo 64.- Las obligaciones subordinadas y sus cupones serán títulos de crédito con los mismos requisitos y características que los bonos bancarios, salvo los previstos en el presente artículo. Las obligaciones subordinadas podrán ser no susceptibles de convertirse en acciones; de conversión voluntaria en acciones y de conversión obligatoria en acciones. Asimismo, las obligaciones subordinadas según su orden de prelación, podrán ser preferentes o no preferentes.

En caso de liquidación o concurso mercantil de la emisora, el pago de las obligaciones subordinadas preferentes se hará a prorrata, sin distinción de fechas de emisión, después de cubrir todas las demás deudas de la institución, pero antes de repartir a los titulares de las acciones o de los certificados de aportación patrimonial, en su caso, el haber social. Las obligaciones subordinadas no preferentes se pagarán en los mismos términos señalados en este párrafo, pero después de haber pagado las obligaciones subordinadas preferentes.

La institución emisora podrá diferir el pago de intereses y de principal, cancelar el pago de intereses o convertir anticipadamente las obligaciones subordinadas.

En el acta de emisión relativa, en el prospecto informativo, en cualquier otra clase de publicidad y en los títulos que se expidan deberá constar en forma notoria, lo dispuesto en los párrafos anteriores.

Estos títulos podrán emitirse en moneda nacional o extranjera, mediante declaración unilateral de voluntad de la emisora, que se hará constar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previa autorización que otorgue el Banco de México. Al efecto, las solicitudes de autorización deberán presentarse por escrito al citado banco, acompañando el respectivo proyecto de acta de emisión e indicando las condiciones bajo las cuales se pretendan colocar dichos títulos. Asimismo, las instituciones de crédito, además de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 63 de este ordenamiento, requerirán la autorización del Banco de México para pagar anticipadamente las obligaciones subordinadas que emitan.

...

La inversión de los pasivos captados a través de la colocación de obligaciones subordinadas, se hará de conformidad con las disposiciones que el Banco de México, en su caso, dicte al efecto. Dichos recursos no podrán invertirse en los activos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 55 de esta Ley, salvo aquellos que provengan de la colocación de obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a títulos representativos de capital.

Artículo 64 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, reglas para la organización y el régimen de inversión de los sistemas de pensiones o jubilaciones que, para el personal de las instituciones de crédito se establezcan en forma complementaria a los contemplados en las leyes de seguridad social.

Artículo 73.- Las instituciones de banca múltiple requerirán del acuerdo de, por lo menos, tres cuartas partes de los consejeros que estén presentes en las sesiones del consejo de administración, para aprobar la celebración de operaciones con personas relacionadas.

Serán operaciones con personas relacionadas, las celebradas por las instituciones de banca múltiple, en las que resulten o puedan resultar deudores de las mismas, las personas que se indican a continuación:

I. Las personas físicas o morales que posean directa o indirectamente el control del dos por ciento o más de los títulos representativos del capital de la institución, de la sociedad controladora o de las entidades financieras y empresas integrantes del grupo financiero al que, en su caso, pertenezca la propia institución, de acuerdo al registro de accionistas más reciente;

II. Los miembros del consejo de administración, de la institución, de la sociedad controladora o de las entidades financieras y empresas integrantes del grupo financiero al que, en su caso, ésta pertenezca;

III. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco con las personas señaladas en las fracciones anteriores;

IV. **...**

V. Las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas, en las que la institución o la sociedad controladora del grupo financiero al que, en su caso, pertenezca la propia institución, posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital.

La participación indirecta de las instituciones de crédito y de las sociedades controladoras a través de los inversionistas institucionales que prevé el artículo 15 de esta Ley, no computarán para considerar a la empresa emisora como relacionada;

VI. (Se deroga)

VII. Las personas morales en las que cualesquiera de las personas señaladas en las fracciones anteriores, así como las personas a las que se refiere la fracción VI del artículo 106 de este ordenamiento posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital.

Los consejeros y funcionarios se excusarán de participar en las discusiones y se abstendrán de votar en los casos en que tengan un interés directo.

En todo caso, las operaciones con personas relacionadas no deberán celebrarse en términos y condiciones más favorables, que las operaciones de la misma naturaleza que se realicen con el público en general.

(Se deroga)

(Se deroga)

(Se deroga)

Artículo 73 Bis.- Las operaciones con personas relacionadas que deban ser sometidas a la aprobación del consejo de administración, se presentarán por conducto y con la opinión favorable del comité de crédito respectivo. De otorgarse la aprobación, la institución deberá presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada del acuerdo en el que conste la aprobación del consejo e informarle del otorgamiento y, en su caso, renovación, así como la forma de pago o extinción de estos créditos, en los términos que señale la propia Comisión.

Las operaciones con personas relacionadas cuyo importe en su conjunto no exceda de dos millones de Unidades de Inversión o el uno por ciento de la parte básica del capital neto de la institución, el que sea mayor, a otorgarse en favor de una misma persona física o moral o grupo de personas físicas o morales que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes para una institución de crédito, no requerirán de la aprobación del consejo de administración, sin embargo, deberán hacerse de su conocimiento y poner a su disposición toda la información relativa a las mismas.

El consejo de administración de las instituciones podrá delegar sus facultades a un comité de consejeros, cuya función será exclusivamente la aprobación de operaciones con personas relacionadas, en aquellas operaciones donde el importe no exceda de seis millones de Unidades de Inversión o el cinco por ciento de la parte básica del capital neto. Dicho comité se integrará por un mínimo de cuatro y un máximo de siete consejeros, de los cuales, por lo menos, una tercera parte deberán ser consejeros independientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la presente Ley.

En dicho comité no podrá haber más de un consejero que, a la vez, sea funcionario o empleado de la institución, de los integrantes del grupo financiero al que ésta pertenezca, o de la propia sociedad controladora.

Las resoluciones del comité a que se refiere el párrafo anterior, requerirán del acuerdo de las tres cuartas partes de los miembros presentes en la sesión.

El citado comité deberá presentar un informe de su gestión al consejo de administración con la periodicidad que éste le indique, sin que ésta exceda de seis meses.

La suma total de los montos de crédito dispuestos, más las líneas de apertura de crédito irrevocable otorgados a personas relacionadas, no podrá exceder del setenta y cinco por ciento de la parte básica del capital neto de la institución, señalado en el artículo 50 de la presente Ley.

En todos los casos de operaciones con personas relacionadas, se informará al comité de crédito de la institución de que se trate o al consejo de administración, según sea el caso, el monto agregado de otras operaciones de crédito otorgadas a personas que sean consideradas como relacionadas con el funcionario, consejero o accionista de que se trate.

Para los efectos de los párrafos anteriores, la parte básica del capital neto que deberá utilizarse será la correspondiente al último día hábil del trimestre calendario inmediato anterior a la fecha en que se efectúen los cálculos.

Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dictará disposiciones de carácter general, tendientes a regular las operaciones con personas relacionadas señaladas en los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1.

Las instituciones deberán solicitar la información correspondiente, a las personas a que se refieren las fracciones de la I a la VII del artículo 73, de conformidad con las reglas mencionadas en el párrafo anterior.

No se considerarán operaciones con personas relacionadas, las celebradas con:

a) El Gobierno Federal y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y

b) Las empresas de servicios complementarios o auxiliares de la banca, a que se refiere el artículo 88 de esta Ley.

Artículo 73 Bis 1.- Para los efectos señalados en los artículos 73 y 73 Bis, se entenderá por:

a) Parentesco.- al que existe por consanguinidad y afinidad en línea recta en primer grado, y por consanguinidad y afinidad en línea colateral en segundo grado o civil.

b) Funcionarios.- al director general o el cargo equivalente y a los funcionarios que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de aquél.

c) Interés Directo.- cuando el carácter de deudor en la operación con personas relacionadas, lo tenga el cónyuge del consejero o funcionario, o las personas con las que tenga parentesco, o bien, una persona moral respecto de la cual alguna de las personas antes mencionadas, detente directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital.

Artículo 81.- ...

Las instituciones de crédito, con sujeción a las disposiciones de carácter general que expida el Banco de México, podrán realizar operaciones de reporto y préstamo de valores por cuenta de terceros, sin la intermediación de casas de bolsa.

Artículo 85 Bis.- Para poder actuar como fiduciarias de los fideicomisos de garantía las instituciones a que se refieren las fracciones II a V del artículo 399 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, deberán contar con el capital mínimo adicional que, para este efecto, determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, previa opinión de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y de Seguros y Fianzas, según corresponda en virtud de la institución de que se trate, así como con la autorización que otorgará discrecionalmente el Gobierno Federal, a través de dicha Secretaría.

...

...

Artículo 87.- Las instituciones de banca múltiple deberán dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e insertar en una publicación periódica de amplia circulación de la localidad de que se trate, un aviso dirigido al público que contenga la información relativa a la apertura, reubicación o clausura de las sucursales respectivas, con una anticipación de treinta días naturales a la fecha en que se tenga programada.

Las instituciones de crédito requerirán autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el establecimiento, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficinas en el extranjero, así como para la cesión del activo o pasivo de sus sucursales.

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oirá la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para autorizar lo señalado en los dos párrafos precedentes.

(Se deroga)

Artículo 89.- ...

...

Las instituciones de banca múltiple podrán invertir en el capital social de sociedades de inversión, sociedades operadoras de éstas, administradoras de fondos para el retiro, así como en el de sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro en los términos de la legislación aplicable y, cuando no formen parte de grupos financieros, en el de organizaciones auxiliares del crédito e intermediarios financieros no bancarios, que no sean casas de bolsa, instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

...

...

...

...

Artículo 93.- Las instituciones de crédito sólo podrán ceder o descontar su cartera con el Banco de México u otras instituciones de crédito o con los fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá, mediante reglas de carácter general autorizar excepciones a este artículo.

...

I. **...**

II. Su cartera u otros activos, tratándose de la transmisión o suscripción de un porcentaje significativo de su capital social o de la sociedad controladora del grupo financiero al que pertenezca. Para dar a conocer la información respectiva deberá obtenerse la autorización previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Durante los procesos de negociación a que se refiere este artículo, los participantes deberán guardar la debida confidencialidad sobre la información a que tengan acceso con motivo de los mismos.

Artículo 96.- ...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá dictar mediante reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas básicas de seguridad que establezcan las instituciones de crédito.

...

Artículo 101.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante disposiciones de carácter general, señalará las bases a que se sujetará la aprobación de los estados financieros por parte de los administradores de las instituciones de crédito; su difusión a través de cualquier medio de comunicación incluyendo a los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; así como el procedimiento a que se ajustará la revisión que de los mismos efectúe la propia Comisión.

La Comisión establecerá mediante disposiciones de carácter general, la forma y el contenido que deberán presentar los estados financieros de las instituciones de crédito, de igual forma podrá ordenar que los estados financieros se difundan con las modificaciones pertinentes y en los plazos que al efecto establezca.

Los estados financieros anuales deberán estar dictaminados por un auditor externo independiente, quien será designado directamente por el consejo de administración de la institución de que se trate.

Los mencionados auditores deberán suministrar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los informes y demás elementos de juicio en los que sustente sus dictámenes y conclusiones. Si durante la práctica o como resultado de la auditoría encontrara irregularidades que afecten la estabilidad o solvencia de las citadas instituciones, los auditores estarán obligados a comunicar dicha situación a la aludida Comisión.

La propia Comisión, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer las características y requisitos que deberán cumplir los auditores externos independientes; determinar el contenido de sus dictámenes y otros informes; dictar medidas para asegurar una adecuada alternancia de dichos auditores en las instituciones de crédito, así como señalar la información que deberán revelar en sus dictámenes, acerca de otros servicios y, en general, de las relaciones profesionales o de negocios que presten o mantengan con las instituciones de crédito que auditen, o con empresas relacionadas.

Artículo 102.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores fijará las reglas para la estimación máxima de los activos de las instituciones de crédito y las reglas para la estimación mínima de sus obligaciones y responsabilidades.

(Se deroga)

Artículo 106.- ...

I. a III. **...**

IV. Operar directa o indirectamente sobre los títulos representativos de su capital, salvo lo dispuesto por el último párrafo de los artículos 19 y 38 de esta Ley y por el Capítulo IV, Título Segundo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, así como otorgar créditos para la adquisición de tales títulos;

V. a XII. **...**

XIII. Adquirir directa o indirectamente con recursos provenientes de sus pasivos, títulos, valores o bienes de los señalados en las fracciones I y III del artículo 55 de esta Ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá autorizar excepciones, mediante reglas de carácter general.

...

XIV. **...**

...

XV. Pagar anticipadamente, en todo o en parte, obligaciones a su cargo derivadas de depósitos bancarios de dinero, préstamos o créditos;

XV Bis. Pagar anticipadamente operaciones de reporto, salvo aquellas celebradas con el Banco de México, otras instituciones de crédito o casas de bolsa;

XV Bis 1. Pagar anticipadamente obligaciones a su cargo derivadas de la emisión de bonos bancarios, salvo que cumplan con los requisitos señalados, para tal efecto, en el artículo 63 de esta Ley;

XV Bis 2. Pagar anticipadamente obligaciones a su cargo, derivadas de la emisión de obligaciones subordinadas salvo que la institución cumpla con los requisitos señalados, para tal efecto, en el artículo 64 de este ordenamiento;

XVI. Adquirir directa o indirectamente títulos o valores emitidos o aceptados por ellas, obligaciones subordinadas emitidas por otras instituciones de crédito o sociedades controladoras; así como readquirir créditos a cargo de terceros que hubieren cedido, salvo el caso de las operaciones previstas en el artículo 93 de esta Ley;

XVII. **...**

a) Los pasivos a que se refiere la fracción IV del artículo 46 de esta Ley, a su cargo, a cargo de cualquier institución de crédito o de sociedades controladoras;

b) **...**

c) Acciones de instituciones de banca múltiple o sociedades controladoras de grupos financieros, propiedad de cualquier persona que detente el cinco por ciento o más del capital social de la institución o sociedad de que se trate.

Tratándose de acciones distintas a las señaladas en el párrafo anterior, representativas del capital social de instituciones de crédito, de sociedades controladoras o de cualquier entidad financiera, las instituciones deberán dar aviso con treinta días de anticipación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XVIII. Celebrar operaciones u ofertas por cuenta propia o de terceros, a sus depositantes para la adquisición de bienes o servicios en las que se señale que, para evitar los cargos por dichos conceptos, los depositantes deban manifestar su inconformidad;

XIX. **...**

XX. Proporcionar la información que obtengan con motivo de la celebración de operaciones con sus clientes, para la comercialización de productos o servicios, salvo que cuenten con el consentimiento expreso del cliente respectivo.

El Banco de México podrá autorizar mediante reglas generales excepciones a lo dispuesto en las fracciones II, XV y XV Bis de este artículo, con vistas a propiciar el sano desarrollo del sistema financiero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar excepciones a lo dispuesto en la fracción I de este artículo siempre y cuando sea para coadyuvar a la estabilidad de las instituciones de crédito o del sistema bancario.

Artículo 117 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para proporcionar a autoridades financieras del exterior, información sobre las operaciones y servicios previstos en el artículo 117, así como en la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, que reciba de las instituciones de crédito, siempre que tenga suscritos con dichas autoridades acuerdos de intercambio de información en los que se contemple el principio de reciprocidad, debiendo en todo caso abstenerse de proporcionar la información cuando a su juicio ésta pueda ser usada para fines distintos a los de la supervisión financiera, o bien, por causas de orden público, seguridad nacional o por cualquier otra causa prevista en los acuerdos respectivos.

Artículo 133.- ...

...

Cuando en el ejercicio de la función prevista en este artículo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así lo requiera, podrá contratar los servicios de auditores y de otros profesionistas que le auxilien en dicha función.

Artículo 134 Bis.- En el ejercicio de sus funciones de vigilancia, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante reglas de carácter general, clasificará a las instituciones en niveles, según su adecuación a los requerimientos de capitalización emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las cuales podrán tomar en cuenta indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia de cada institución.

Las citadas reglas establecerán medidas correctivas que las instituciones de crédito, en su caso, deberán adoptar de acuerdo al nivel en que hubiesen sido clasificadas y los plazos para su cumplimiento, entre las cuales se encuentran:

I. Suspender el pago de dividendos, recompras de acciones y cualquier otro mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales a los accionistas;

II. Presentar un plan de restauración de capital que deberá ser aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oyendo la opinión de la Secretaría;

III. Revisar e instrumentar adecuaciones a las políticas de compensaciones adicionales y extraordinarias al salario de los funcionarios de niveles superiores de las instituciones de crédito, así como a las políticas de contratación de personal de la misma;

IV. Diferir el pago de principal de las obligaciones subordinadas que haya emitido, o en su caso, convertirlas anticipadamente en acciones, y

V. Abstenerse de realizar operaciones que impliquen disminución en el índice de capitalización de la institución.

Artículo 134 Bis 1.- Las instituciones de crédito que no cumplan con los requerimientos de capitalización establecidos por esta Ley y las disposiciones que de ella emanen, deberán suspender el pago de dividendos, las operaciones de adquisición de acciones por la propia institución o por la sociedad controladora del grupo al que aquélla, en su caso, pertenezca y cualquier otro acto que implique beneficios patrimoniales para los accionistas, diferir o cancelar el pago de intereses, o diferir el pago de principal de las obligaciones subordinadas que haya emitido, o en su caso convertirlas anticipadamente en acciones, presentar un plan de restauración de capital que deberá ser aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, oyendo la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y abstenerse de celebrar operaciones adicionales con las personas a que se refiere el artículo 73 de esta Ley.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo, así como de las disposiciones que de él emanen.

Artículo 138.- Cuando a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, existan irregularidades de cualquier género en las instituciones de crédito que afecten su estabilidad o solvencia y pongan en peligro los intereses del público o acreedores, el Presidente de dicho órgano podrá proponer a la Junta de Gobierno, la declaración de intervención con carácter de gerencia de la institución de que se trate y designar a la persona física que se haga cargo de la institución con el carácter de interventor-gerente.

En caso de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, considere que una institución de banca múltiple es susceptible de ser intervenida, deberá informar la situación financiera de la misma al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

A la sesión de la Junta de Gobierno que acuerde la declaración de la intervención gerencial acudirá la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, quien deberá aportar elementos para la toma de esta decisión.

Artículo 140 Bis.- Los interventores a que se refieren los artículos 137 a 140 anteriores, deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 24 de esta Ley, sin que sea aplicable lo dispuesto en la fracción VI del artículo 23 del mismo ordenamiento. Asimismo, sólo podrán obtener de las instituciones de crédito préstamos, o adquirir el carácter de deudores de tales instituciones por cualquier título, en los mismos términos que, en su caso, apruebe la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para sus empleados.

Artículo 143.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores acordará levantar la intervención con carácter de gerencia cuando las irregularidades que hayan afectado la estabilidad o solvencia de la institución se hubieran corregido.

En caso de que las operaciones que hubieren motivado la intervención gerencial no quedaran normalizadas en un plazo de hasta seis meses, deberá procederse conforme a lo señalado por la Ley de Protección al Ahorro Bancario. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá de manera excepcional ampliar el plazo mencionado, por una sola vez y hasta por tres meses.

Cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acuerde levantar la intervención con carácter de gerencia, lo comunicará así al encargado del Registro Público de Comercio que haya hecho la anotación a que se refiere el artículo 141 de esta Ley, a efecto de que cancele la inscripción respectiva.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se **REFORMA** el artículo 5; el artículo 7 segundo párrafo; párrafos primero, tercero y las fracciones I a IV del artículo 20; la fracción I del artículo 22; párrafos primero, el actual segundo párrafo se convierte en cuarto y se reforma, y el actual tercer párrafo se convierte en quinto y se reforma del artículo 24; párrafo primero del artículo 25; párrafos primero, fracciones I y IV y párrafo segundo del artículo 26; párrafo primero, el actual segundo párrafo se convierte en cuarto y se reforma del artículo 27; párrafo primero, el actual segundo párrafo se convierte en tercero y se reforma, el actual tercer párrafo se convierte en cuarto y se reforma, el actual cuarto párrafo se convierte en sexto y se reforma, el actual quinto párrafo se convierte en séptimo y se reforma del artículo 27-L; párrafo primero del artículo 27-Ñ; y párrafo segundo del artículo 30; se **ADICIONAN** los artículos 5 Bis, 5 Bis 1, 5 Bis 2 y 5 Bis 3; los párrafos cuarto y quinto del artículo 20; el artículo 22 Bis; los párrafos segundo y tercero y las fracciones I a VIII del artículo 24; el párrafo segundo, la fracción VI, el actual segundo párrafo se convierte en tercero y el actual tercer párrafo se convierte en cuarto del artículo 25; el artículo 26 Bis; el artículo 26 Bis 1; los párrafos segundo, tercero y el actual tercer párrafo se convierte en quinto del artículo 27; los párrafos segundo, quinto con las fracciones I a VIII y el actual párrafo sexto se convierte en octavo del artículo 27-L; el último párrafo del artículo 27-Ñ; y se **DEROGAN** las fracciones V y VI y el segundo párrafo del artículo 20; el artículo 20 Bis; el tercer párrafo del artículo 26; el artículo 27-K; y el artículo 27-M, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para quedar como sigue:

Artículo 5.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá interpretar para efectos administrativos, los preceptos de esta Ley, así como las disposiciones de carácter general que emita la propia Secretaría en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la presente Ley.

Artículo 5 Bis.- Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, éste no podrá exceder de tres meses para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad competente que deba resolver, conforme al Reglamento Interior respectivo. Igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado, se fincará en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable.

Los requisitos de presentación y plazos, así como otra información relevante aplicables a las promociones que realicen las sociedades controladoras deberán precisarse en disposiciones de carácter general.

Cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que dentro de un término que no podrá ser menor de diez días hábiles subsane la omisión. Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, dicha prevención deberá hacerse a más tardar dentro de la mitad del plazo de respuesta de la autoridad y, cuando éste no sea expreso, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación del escrito inicial.

Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el término señalado las autoridades desecharán el escrito inicial.

Si las autoridades no hacen el requerimiento de información dentro del plazo correspondiente, no podrán rechazar el escrito inicial por incompleto.

Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que las autoridades contesten empezarán a correr el día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente.

Artículo 5 Bis 1.- El plazo a que se refiere el artículo anterior no será aplicable a las promociones donde por disposición expresa de esta Ley las autoridades administrativas deban escuchar la opinión de otras autoridades, además de aquéllas relacionadas con las autorizaciones relativas a la constitución, fusión, escisión y liquidación de sociedades controladoras. En estos casos no podrá exceder de seis meses el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda, siendo aplicables las demás reglas que señala el artículo 5 Bis de esta Ley.

Artículo 5 Bis 2.- Las autoridades administrativas competentes, a solicitud de parte interesada podrán ampliar los plazos establecidos en la presente Ley, sin que dicha ampliación exceda, en ningún caso, de la mitad del plazo previsto originalmente en las disposiciones aplicables, cuando así lo exija el asunto y no tengan conocimiento de que se perjudica a terceros en sus derechos.

Artículo 5 Bis 3.- No se les aplicará lo establecido en los artículos 5 Bis, 5 Bis 1 y 5 Bis 2 a las autoridades administrativas en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión, inspección y vigilancia.

Artículo 7o.- ...

El grupo financiero podrá formarse con cuando menos dos tipos diferentes de las entidades financieras siguientes: instituciones de banca múltiple, casas de bolsa e instituciones de seguros. En los casos en que el grupo no incluya a dos de las mencionadas entidades, deberá contar por lo menos con tres tipos diferentes de entidades financieras de las citadas en el párrafo anterior que no sean administradoras de fondos para el retiro.

...

Artículo 20.- Cualquier persona física o moral podrá adquirir mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, el control de acciones de la serie "O" del capital social de una sociedad controladora, en el entendido de que dichas operaciones deberán obtener la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la opinión de la Comisión Nacional que supervise a la controladora, cuando excedan del cinco por ciento de dicho capital social, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 18 de la presente Ley.

(Se deroga)

En el supuesto de que uno o más accionistas pretendan obtener el control de la administración en una sociedad controladora, deberá acompañar a su solicitud, según corresponda:

I. Relación de las personas que, en su caso, pretendan adquirir el control de la sociedad controladora de que se trate indicando el capital que suscribirán, la forma en que lo pagarán, así como el origen de los recursos con los que se realizará dicho pago;

II. Relación de los consejeros y directivos que nombrarían en la sociedad controladora de la que pretenden adquirir el control;

III. Programa estratégico para la implementación del gobierno corporativo, y

IV. La demás documentación conexa que requiera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de evaluar la solicitud correspondiente.

V. y VI. (Se derogan)

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que se obtiene el control de una sociedad controladora cuando se adquiera el treinta por ciento o más de las acciones representativas del capital social de la propia sociedad, se tenga el control de la asamblea general de accionistas, se esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, o por cualquier otro medio se controle a la sociedad controladora de que se trate.

Las sociedades controladoras deberán proporcionar a la Comisión Nacional que las supervise, la información que ésta les requiera con respecto a las personas que directa o indirectamente hayan adquirido las acciones representativas de su capital social, en la forma y sujetándose a las condiciones que establezca la propia Comisión mediante las reglas de carácter general a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 20 Bis.- (Se deroga)

Artículo 22.- ...

I. Señalar de manera notoria la denominación de la controladora, así como la respectiva orden del día;

II. a III. **...**

...

...

Artículo 22 Bis.- En el orden del día se deberán listar todos los asuntos a tratar en la asamblea de accionistas, incluso los comprendidos en el rubro de asuntos generales.

La documentación e información relacionada con los temas a tratar en la correspondiente asamblea de accionistas, deberán ponerse a disposición de los accionistas por lo menos con quince días de anticipación a su celebración.

Artículo 24.- El consejo de administración de las sociedades controladoras estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros propietarios, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.

Por consejero independiente, deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración de la sociedad controladora respectiva y de las entidades que integren al grupo financiero de que se trate, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Instituciones de Crédito, en las que igualmente se establecerán los supuestos bajo los cuales, se considerará que un consejero deja de ser independiente, para los efectos de este artículo.

En ningún caso podrán ser consejeros independientes:

I. Empleados o directivos de la sociedad controladora;

II. Accionistas que sin ser empleados o directivos de la sociedad controladora, tengan poder de mando sobre los directivos de la misma;

III. Socios o empleados de sociedades o asociaciones que presten servicios de asesoría o consultoría a la sociedad controladora o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo financiero del cual forme parte ésta, cuyos ingresos representen el diez por ciento o más de sus ingresos;

IV. Proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, deudor o acreedor importante de la sociedad controladora.

Se considera que un proveedor es importante cuando las ventas que le haga a la sociedad controladora filial, representan más del diez por ciento de las ventas totales del proveedor. Asimismo, se considera que un acreedor es importante cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento de los activos de su contraparte;

V. Empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos importantes de la sociedad controladora.

Se consideran donativos importantes a aquellos que representen más del quince por ciento del total de donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles de que se trate;

VI. Directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo consejo de administración participe el director general o un directivo de alto nivel de la sociedad controladora;

VII. Cónyuges o concubinarios, así como los parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado respecto de alguna de las personas mencionadas en las fracciones III a VI anteriores, o bien, hasta el tercer grado, en relación con las señaladas en las fracciones I, II y VIII de este artículo, y

VIII. Quienes hayan ocupado un cargo de dirección o administrativo en la sociedad controladora o en alguna de sus entidades integrantes, durante el año anterior al momento en que se pretenda hacer su designación.

El consejo deberá reunirse por lo menos trimestralmente y en forma extraordinaria, cuando sea convocado por el Presidente del consejo, al menos el veinticinco por ciento de los consejeros, o cualquiera de los comisarios de la sociedad. Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración se deberá contar con la asistencia de cuando menos el cincuenta y uno por ciento de los consejeros, de los cuales por lo menos uno deberá ser consejero independiente.

El Presidente del consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 25.- Los nombramientos de consejeros de las sociedades controladoras deberán recaer en personas que cuenten con elegibilidad crediticia y honorabilidad, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o administrativa.

Los consejeros estarán obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interés. Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la sociedad controladora de que sea consejero, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el consejo, sin perjuicio de la obligación que tendrá la sociedad controladora de proporcionar toda la información que les sea solicitada al amparo de la presente Ley.

...

I. a V. **...**

VI. Quienes participen en el consejo de administración de entidades financieras pertenecientes, en su caso, a otros grupos financieros, o de las sociedades controladoras de los mismos, así como de otras entidades financieras no agrupadas.

...

Artículo 26.- Los nombramientos del director general de las sociedades controladoras y de los funcionarios que ocupen cargos con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de éste; deberán recaer en personas que cuenten con elegibilidad crediticia y honorabilidad, y que además reúnan los requisitos siguientes:

I. Ser residente en territorio mexicano, en términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación;

II. a III. **...**

IV. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señalan las fracciones III a VI del artículo anterior.

Los comisarios de las sociedades controladoras deberán cumplir con el requisito establecido en la fracción I anterior.

(Se deroga)

Artículo 26 Bis.- Las sociedades controladoras deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 25 y 26 de esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, director general y funcionarios con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de este último, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión Nacional que las supervise podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, los criterios mediante los cuales se deberán integrar los expedientes que acrediten el cumplimiento a lo señalado en el presente artículo.

En todo caso, las personas mencionadas en el párrafo anterior deberán manifestar por escrito:

I. Que no se ubican en ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones III a VI del artículo 25, tratándose de consejeros y IV del artículo 26 para el caso del director general y funcionarios a que se refiere el primer párrafo de este artículo;

II. Que se encuentran al corriente de sus obligaciones crediticias de cualquier género, y

III. Que conocen los derechos y obligaciones que asumen al aceptar el cargo que corresponda.

Las sociedades controladoras deberán informar a la Comisión Nacional que las supervise los nombramientos de consejeros, director general y funcionarios con las dos jerarquías inmediatas a las de este último, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisitos aplicables.

Artículo 26 Bis 1.- El órgano de vigilancia de la controladora, estará integrado por lo menos por un comisario designado por los accionistas de la serie "O" y, en su caso, un comisario designado por los de la serie "L", así como de sus respectivos suplentes. El nombramiento de comisarios deberá hacerse en

asamblea especial por cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Artículo 27.- La Comisión que supervise a la controladora, con acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá en todo tiempo determinar que se proceda a la remoción o suspensión de los miembros del consejo de administración, directores generales, comisarios, directores y gerentes y funcionarios que puedan obligar con su firma a la sociedad, así como imponer veto de seis meses hasta cinco años a las personas antes mencionadas, cuando considere que no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones, o no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley o a las reglas generales que de ella deriven. En los dos últimos supuestos, la propia Comisión podrá además, inhabilitar a las citadas personas para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero mexicano, por el mismo periodo de seis meses a cinco años, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables. Antes de dictar la resolución correspondiente, la citada comisión deberá escuchar al interesado y a la sociedad controladora de que se trate.

La propia Comisión podrá, también con el acuerdo de su Junta de Gobierno, ordenar la remoción o suspensión de los auditores externos independientes de las sociedades controladoras, así como imponer veto a dichas personas por el periodo señalado en el párrafo anterior, cuando incurran de manera grave o reiterada en infracciones a esta Ley o las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, sin perjuicio de las sanciones a que pudieran hacerse acreedores.

Para el ejercicio de las atribuciones que le confiere este artículo, la Comisión Nacional que supervise a la sociedad controladora llevará un listado de las personas cuya participación en el sector financiero, por razón de sus antecedentes, no se considere conveniente.

Las resoluciones de la Comisión se tomarán considerando, entre otros, los elementos siguientes: la gravedad de la infracción y la conveniencia de evitar tales prácticas; el nivel jerárquico, antecedentes, antigüedad y demás condiciones del infractor; las condiciones exteriores y medidas para ejecutar la infracción; si hay o no reincidencia, y en su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivados de la infracción.

...

Artículo 27-K.- (Se deroga)

Artículo 27-L.- El consejo de administración de las sociedades controladoras filiales estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros propietarios, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.

El nombramiento de los consejeros deberá hacerse en asamblea especial por cada serie de acciones. A las asambleas que se reúnan con este fin, así como a aquellas que tengan el propósito de designar comisarios por cada serie de acciones, les serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las asambleas generales ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El accionista de la serie "F" que represente cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital social pagado designará a la mitad más uno de los consejeros y por cada diez por ciento de acciones de esta serie que exceda de ese porcentaje, tendrá derecho a designar un consejero más. Los accionistas de la serie "O", designarán a los consejeros restantes. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás de la misma serie.

El consejo de administración deberá estar integrado por al menos el veinticinco por ciento de consejeros independientes, que serán designados en forma proporcional conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden. Por consejero independiente, deberá entenderse a la persona que sea ajena a la administración de la sociedad controladora filial respectiva y de las entidades que integren al grupo financiero filial de que se trate, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Instituciones de Crédito, en las que igualmente se establecerán los supuestos bajo los cuales, se considerará que un consejero deja de ser independiente, para los efectos de este artículo.

En ningún caso podrán ser consejeros independientes:

I. Empleados o directivos de la sociedad controladora filial;

II. Accionistas que sin ser empleados o directivos de la sociedad controladora filial, tengan poder de mando sobre los directivos de la misma;

III. Socios o empleados de sociedades o asociaciones que presten servicios de asesoría o consultoría a la sociedad controladora filial o a las empresas que pertenezcan al mismo grupo financiero del cual forme parte ésta, cuyos ingresos representen el diez por ciento o más de sus ingresos;

IV. Proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, deudor o acreedor importante de la sociedad controladora filial.

Se considera que un proveedor es importante cuando las ventas que le haga a la sociedad controladora filial, representan más del diez por ciento de las ventas totales del proveedor. Asimismo, se considera que un acreedor es importante cuando el importe del crédito es mayor al quince por ciento de los activos de su contraparte;

V. Empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos importantes de la sociedad controladora filial.

Se consideran donativos importantes a aquellos que representen más del quince por ciento del total de donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles de que se trate;

VI. Directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo consejo de administración participe el director general o un directivo de alto nivel de la sociedad controladora filial;

VII. Cónyuges o concubinarios, así como los parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta el primer grado respecto de alguna de las personas mencionadas en las fracciones III a VI anteriores, o bien, hasta el tercer grado, en relación con las señaladas en las fracciones I, II y VIII de este artículo, y

VIII. Quienes hayan ocupado un cargo de dirección o administrativo en la sociedad controladora filial o alguna de sus entidades integrantes, durante el año anterior al momento en que se pretenda hacer su designación.

El consejo deberá reunirse por lo menos trimestralmente y de manera adicional, cuando sea convocado por el Presidente del consejo, al menos una cuarta parte de los consejeros, o cualquiera de los comisarios de la sociedad. Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración, se deberá contar con la asistencia de cuando menos el cincuenta y uno por ciento de los consejeros, de los cuales por lo menos uno deberá ser consejero independiente.

En el caso de las sociedades controladoras filiales en las cuales cuando menos el noventa y nueve por ciento de los títulos representativos del capital social sean propiedad, directa o indirectamente, de una Institución Financiera del Exterior o una Sociedad Controladora Filial, podrá determinar libremente el número de consejeros, el cual en ningún caso podrá ser inferior a cinco, debiendo observarse lo señalado por los párrafos primero, tercero y cuarto del presente artículo.

...

Artículo 27-M.- (Se deroga)

Artículo 27-Ñ.- La inspección y vigilancia de las Sociedades Controladoras Filiales estará a cargo de la Comisión que supervise a la entidad financiera integrante del grupo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine como la preponderante dentro del propio grupo, en los términos de esta Ley. Cuando las autoridades supervisoras del país de origen de la Institución Financiera del Exterior propietaria de acciones representativas del capital social de una Sociedad Controladora Filial o de una Filial, según sea el caso, deseen realizar visitas de inspección, deberán solicitarlo a las mencionadas Comisiones Nacionales, las cuales, en el respectivo ámbito de su competencia, determinarán los casos en los que dichas visitas deberán hacerse por su conducto, o sin que medie su participación.

...

I. y II. **...**

A solicitud de las Comisiones Nacionales mencionadas en el primer párrafo del presente artículo, las autoridades que realicen la inspección deberán presentarles un informe de los resultados obtenidos.

Artículo 30.- ...

La contabilidad del grupo financiero, la controladora y subsidiarias del grupo, deberá sujetarse a las reglas que al efecto autorice la citada Comisión, quien además fijará las reglas para la estimación de sus activos. Adicionalmente, la Comisión, a través de reglas de carácter general, podrá establecer medidas de regulación prudencial que tengan como propósito, entre otros, evitar la transmisión de riesgos entre integrantes del grupo y de éstas con la controladora.

...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- Lo dispuesto por los artículos 5 Bis 1, 5 Bis 2, 5 Bis 3 y 5 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como por los artículos 5 Bis, 5 Bis 1, 5 Bis 2 y 5 Bis 3 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, entrará en vigor el primero de enero del año 2002.

TERCERO.- Las disposiciones contenidas en el artículo 134 Bis que se adiciona a la Ley de Instituciones de Crédito, no serán aplicables a títulos que hubieren sido emitidos con anterioridad a la fecha en que entre en vigor el presente decreto.

CUARTO.- Los nombramientos de consejeros, director general y funcionarios con las dos jerarquías inmediatas inferiores a la de este último, correspondientes a instituciones de banca múltiple y sociedades controladoras de grupos financieros que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto se encuentren en proceso de aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el caso de instituciones de banca múltiple, o de la Comisión que corresponda cuando se trate de sociedades controladoras, se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 24 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 26 Bis de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras respectivamente, contando la institución de banca múltiple o la sociedad controladora respectiva con un plazo de 15 días hábiles a partir de esa fecha, para manifestar a la Comisión que corresponda, que han llevado a cabo la verificación a que se refieren los últimos párrafos de los artículos 24 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 26 Bis de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, respectivamente.

QUINTO.- Lo señalado por el artículo 134 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, en cuanto a la suspensión del pago de intereses y principal, no será aplicable a títulos que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

SEXTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y de conformidad con lo establecido en la Manifestación Tercera del "Decreto de Promulgación de la Convención de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos", publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 5 de julio de 1994, México extenderá los beneficios de las medidas de liberalización que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte prevé en relación con el establecimiento de y la inversión directa en instituciones financieras domiciliadas en el territorio de algún miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

México, D.F., a 30 de abril de 2001.- Dip. **Ricardo García Cervantes**, Presidente.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Dip. **Manuel Medellín Milán**, Secretario.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas**"**.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se expide la Ley de Sociedades de Inversión.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

ARTICULO 1. La presente Ley es de interés público y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las sociedades de inversión, la intermediación de sus acciones en el mercado de valores, así como los servicios que deberán contratar para el correcto desempeño de sus actividades.

En la aplicación de esta Ley, las autoridades deberán procurar el fomento de las sociedades de inversión, su desarrollo equilibrado y el establecimiento de condiciones tendientes a la consecución de los siguientes objetivos:

I. El fortalecimiento y descentralización del mercado de valores;

II. El acceso del pequeño y mediano inversionista a dicho mercado;

III. La diversificación del capital;

IV. La contribución al financiamiento de la actividad productiva del país, y

V. La protección de los intereses del público inversionista.

ARTICULO 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Activos Objeto de Inversión: Los valores, títulos y documentos a los que les resulte aplicable el régimen de la Ley del Mercado de Valores inscritos en el Registro Nacional o listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, otros valores, los recursos en efectivo, bienes, derechos y créditos, documentados en contratos e instrumentos, incluyendo aquéllos referidos a operaciones

financieras conocidas como derivadas, así como las demás cosas objeto de comercio que de conformidad con el régimen de inversión previsto en la presente Ley y en las disposiciones de carácter general que al efecto expida la Comisión para cada tipo de sociedad de inversión, sean susceptibles de formar parte integrante de su patrimonio;

II. Comisión: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y

III. Registro Nacional: Al Registro a que se refiere el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores.

ARTICULO 3. La Ley del Mercado de Valores, la legislación mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y la legislación del orden común, serán supletorios de la presente Ley, en el orden citado.

Asimismo, será aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para efectos de las notificaciones, recursos y ejecución de las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley.

ARTICULO 4. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá interpretar para efectos administrativos los preceptos de esta Ley.

ARTICULO 5. Las sociedades de inversión tendrán por objeto, la adquisición y venta de Activos Objeto de Inversión con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista, así como la contratación de los servicios y la realización de las demás actividades previstas en este ordenamiento.

Las acciones representativas del capital social de sociedades de inversión se considerarán como valores para efectos de la Ley del Mercado de Valores.

ARTICULO 6. Para la organización y funcionamiento de las sociedades de inversión se requiere previa autorización de la Comisión.

Las autorizaciones son intransmisibles y se referirán a alguno de los siguientes tipos de sociedades:

I. Sociedades de inversión de renta variable;

II. Sociedades de inversión en instrumentos de deuda;

III. Sociedades de inversión de capitales, y

IV. Sociedades de inversión de objeto limitado.

Las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro se regirán por lo señalado en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

ARTICULO 7. Las sociedades de inversión deberán adoptar alguna de las siguientes modalidades:

I. Abiertas: aquellas que tienen la obligación, en los términos de esta Ley y de sus prospectos de información al público inversionista, de recomprar las acciones representativas de su capital social o de amortizarlas con Activos Objeto de Inversión integrantes de su patrimonio, a menos que conforme a los supuestos previstos en los citados prospectos, se suspenda en forma extraordinaria y temporal dicha recompra, y

II. Cerradas: aquellas que tienen prohibido recomprar las acciones representativas de su capital social y amortizar acciones con Activos Objeto de Inversión integrantes de su patrimonio, a menos que sus acciones se coticen en una bolsa de valores, supuesto en el cual se ajustarán en la recompra de acciones propias a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores.

La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, clasificaciones de sociedades de inversión, atendiendo a criterios de diversificación, especialización y tipificación del régimen de inversión respectivo.

ARTICULO 8. Las personas que soliciten autorización para constituir una sociedad de inversión, se sujetarán a los requisitos siguientes:

I. Acompañar a la solicitud el proyecto de escritura constitutiva, que contendrá los elementos a que se refiere el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en lo conducente, las reglas especiales establecidas en el presente ordenamiento;

II. Señalar los nombres, domicilios y ocupaciones de los socios fundadores y consejeros, así como la experiencia que dichas personas tengan en el mercado de valores, acreditando su calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como sus conocimientos y experiencia en materia financiera o administrativa;

III. Presentar proyecto de prospecto de información al público inversionista a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, señalando el tipo, modalidad y clasificación de la sociedad de inversión;

IV. La denominación social o nombre de las personas que le vayan a prestar a la sociedad de inversión los servicios referidos en el artículo 32 de esta Ley, y

V. Presentar un proyecto de manual de conducta al que se sujetarán los consejeros de la sociedad de inversión y las personas que habrán de prestarle los servicios señalados en el artículo 32 del presente ordenamiento. Dicho manual deberá ser parte integrante de los contratos que las sociedades de inversión suscriban con las citadas personas.

El citado manual deberá contener políticas y lineamientos sobre las inversiones que podrán realizar las personas que participen en la determinación y ejecución de operaciones de la sociedad de inversión, así como para evitar en general la existencia de conflictos de intereses, delimitando responsabilidades y señalando sanciones.

Las sociedades de inversión que gocen de la autorización a que se refiere este artículo, deberán inscribir las acciones representativas de su capital social en la Sección de Valores del Registro Nacional. Tratándose de sociedades de inversión de capitales y de objeto limitado, sólo estarán sujetas a dicho requisito, en el caso de que pretendan cotizar sus acciones en alguna bolsa de valores.

ARTICULO 9. Los prospectos de información al público inversionista de las sociedades de inversión, así como sus modificaciones, requerirán de la previa autorización de la Comisión, y contendrán la información relevante que contribuya a la adecuada toma de decisiones por parte del público inversionista, entre la que deberá figurar como mínimo la siguiente:

I. Los datos generales de la sociedad de inversión de que se trate;

II. La política detallada de venta de sus acciones y los límites de tenencia accionaria por inversionista de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de esta Ley;

III. La forma de negociación y liquidación de las operaciones de compra y venta de sus acciones, atendiendo al precio de valuación vigente y al plazo en que deba ser cubierto;

IV. Las políticas detalladas de inversión, liquidez, adquisición, selección y, en su caso, diversificación o especialización de activos, los límites máximos y mínimos de inversión por instrumento y cuando así corresponda, las políticas para la contratación de préstamos y créditos, incluyendo aquéllas para la emisión de valores representativos de una deuda a su cargo;

V. La advertencia a los inversionistas de los riesgos que pueden derivarse de la inversión de sus recursos en la sociedad, tomando en cuenta para ello las políticas que se sigan conforme a la fracción anterior;

VI. El método de valuación de sus acciones, especificando la periodicidad con que se realiza esta última y la forma de dar a conocer el precio;

VII. Tratándose de sociedades de inversión abiertas, las políticas para la recompra de las acciones representativas de su capital y las causas por las que se suspenderán dichas operaciones. Lo anterior, atendiendo al importe de su capital pagado, a la tenencia de cada inversionista y a la composición de los activos de cada sociedad de inversión, y

VIII. La mención específica de que los accionistas de sociedades de inversión abiertas, tendrán el derecho de que la propia sociedad de inversión, a través de las personas que le presten los servicios de distribución de acciones, les recompre a precio de valuación hasta el cien por ciento de su tenencia accionaria, dentro del plazo que se establezca en el mismo prospecto, con motivo de cualquier modificación al régimen de inversión o de recompra.

La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, las características que deberán reunir los referidos prospectos de información al público inversionista y señalar requisitos adicionales a los previstos en este artículo.

Las personas que presten a las sociedades de inversión los servicios de distribución de sus acciones, deberán estipular con el público inversionista, por cuenta de éstas, al momento de la celebración del contrato respectivo, los medios a través de los cuales se tendrán para su análisis, consulta y conformidad, los prospectos de información de las sociedades de inversión cuyas acciones al efecto distribuyan y, en su caso, sus modificaciones, acordando al mismo tiempo, los hechos o actos que presumirán su consentimiento respecto de los mismos.

ARTICULO 10. Las sociedades de inversión harán llegar a sus accionistas, por medio de las sociedades que les presten los servicios de administración de activos o, en su caso, de distribución de acciones, estados de cuenta en los que se dé a conocer lo siguiente:

I. La posición de las acciones de las cuales sea titular, valuada al último día del corte del período que corresponda y la del corte del período anterior;

II. Los movimientos del período que corresponda;

III. En su caso, los avisos sobre las modificaciones a sus prospectos de información al público inversionista, señalando el lugar o medio a través del cual los accionistas podrán acceder a su consulta;

IV. El plazo para la formulación de observaciones sobre la información señalada en las fracciones I a III anteriores;

V. En su caso, la información sobre la contratación de préstamos o créditos a su cargo, o bien, sobre la emisión de valores representativos de una deuda, y

VI. Cualquier otra información que la Comisión determine mediante disposiciones de carácter general, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Las sociedades de inversión podrán estipular en los contratos que al efecto celebren con sus accionistas, a través de las personas que les presten servicios de distribución de sus acciones, la periodicidad, medios de comunicación en los que harían llegar dichos estados de cuenta o, en su caso, las instrucciones que observarán al respecto.

Cuando se cumplan los requisitos para la remisión del estado de cuenta en donde se contenga, entre otra, la información a que se refiere el presente artículo, o bien, cumplidas las instrucciones giradas por el accionista de que se trate, los registros que figuren en los mismos, así como en la contabilidad de la sociedad de inversión, se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo, sin perjuicio de quedar a salvo el ejercicio de las acciones que por otros conceptos o agravios competa ejercer al accionista.

ARTICULO 11. Las expresiones sociedades de inversión, fondos de inversión u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, por las que pueda inferirse el ejercicio de actividades reservadas por esta Ley a las sociedades de inversión que gocen de autorización, no podrán ser usadas en el nombre, denominación social, publicidad, propaganda o documentación de personas y establecimientos distintos de las propias sociedades de inversión.

La Comisión podrá ordenar la intervención administrativa del establecimiento infractor para que deje de usar la expresión indebidamente empleada, sin perjuicio de la aplicación de la multa prevista en el artículo 86, fracción I del presente ordenamiento.

Se exceptúa de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades de inversión a que se refiere esta Ley, así como a las asociaciones de sociedades de inversión y las demás personas que sean autorizadas por la Comisión para estos efectos, siempre que no realicen operaciones propias de las sociedades de inversión u operadoras y distribuidoras señaladas.

ARTICULO 12. Las sociedades de inversión deberán organizarse como sociedades anónimas, con arreglo a las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes reglas especiales:

I. La denominación social deberá ir seguida invariablemente del tipo al cual pertenezca la sociedad de inversión de las referidas en el artículo 6 de esta Ley.

Tratándose de sociedades de inversión cuyos prospectos de información al público, prevean políticas para la contratación de préstamos o créditos a su cargo, incluyendo la emisión de valores representativos de una deuda, adicionalmente deberán incluir en su denominación, seguida del tipo social que le corresponda, las palabras "con financiamiento";

II. Su duración podrá ser indefinida;

III. El capital mínimo totalmente pagado será el que establezca la Comisión, mediante disposiciones de carácter general, para cada tipo de sociedad;

IV. El capital deberá ser variable. Las acciones que representan el capital fijo serán de una sola clase y sin derecho a retiro, mientras que las integrantes del capital variable, podrán dividirse en varias clases de acciones con derechos y obligaciones especiales para cada una, ajustándose para ello a las estipulaciones que se contengan en el contrato social;

V. El capital fijo de la sociedad estará representado por acciones que sólo podrán transmitirse en propiedad o afectarse en garantía o fideicomiso, previa autorización de la Comisión.

El monto del capital fijo no podrá ser inferior al capital mínimo a que se refiere la fracción III de este artículo;

VI. Podrán mantener acciones en tesorería, que serán puestas en circulación en la forma y términos que señale el consejo de administración;

VII. El pago de las acciones se hará siempre en efectivo;

VIII. En caso de aumento de capital, las acciones se pondrán en circulación sin que rija el derecho de preferencia establecido por el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

IX. En ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital fijo de estas sociedades las personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, directamente o a través de interpósita persona;

X. El consejo de administración estará integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince consejeros propietarios, de los cuales cuando menos el treinta y tres por ciento deberán ser independientes. Por cada consejero propietario se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter. Sólo podrá revocarse el nombramiento de los consejeros independientes, cuando se revoque igualmente el nombramiento de todos los demás consejeros.

Los consejeros independientes de las sociedades de inversión deberán ser personas que seleccionadas por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, reúnan los requisitos que para consejeros independientes de sociedades emisoras de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores define la Ley del Mercado de Valores.

En ningún caso podrán ser consejeros:

a) El cónyuge y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil, con cualquier consejero;

b) Las personas que tengan litigio pendiente con la sociedad de inversión de que se trate;

c) Las personas condenadas por sentencia irrevocable por delitos intencionales de carácter patrimonial y las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano;

d) Los concursados que no hayan sido rehabilitados;

e) Los servidores públicos que realicen funciones de inspección, vigilancia o regulación de las sociedades de inversión a que se refiere esta Ley, y

f) El contralor normativo de la sociedad operadora que preste servicios a la sociedad de inversión de que se trate.

XI. No estarán obligadas a constituir la reserva legal establecida por la Ley General de Sociedades Mercantiles;

XII. La disolución y liquidación, así como el concurso mercantil de las sociedades de inversión, se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles y, en su caso, por la Ley de Concursos Mercantiles, con las siguientes excepciones:

a) El cargo de liquidador, conciliador o síndico, corresponderá a alguna institución de crédito o a la persona física o moral que para tal efecto autorice la Comisión en un plazo máximo de diez días hábiles, quedando desde luego sujetos a su vigilancia. Las instituciones o personas que tengan un interés opuesto al de la sociedad de inversión de que se trate, deberán abstenerse de aceptar dicho cargo, manifestando tal circunstancia, y

b) La Comisión podrá solicitar la declaratoria de concurso mercantil de las sociedades de inversión, y

XIII. Los estatutos de las sociedades de que se trata y sus modificaciones, deberán ser aprobados por la Comisión. Dictada dicha aprobación, la escritura o sus reformas podrán ser inscritas en el Registro Público de Comercio.

En todo caso, las sociedades de inversión deberán proporcionar a la Comisión el testimonio notarial o póliza expedida por notario o corredor público, en que conste la formalización de los estatutos o sus modificaciones y, cuando proceda, copia del instrumento público expedida por fedatario público, relativa a las actas de sus asambleas.

ARTICULO 13. El consejo de administración además de cumplir con las obligaciones que le señalan ésta y otras leyes, deberá:

I. Aprobar por mayoría de votos, siempre que se cuente adicionalmente con el voto favorable de la mayoría de los consejeros independientes:

a) El manual de conducta a que se refiere la fracción V del artículo 8 de esta Ley;

b) La contratación de las personas que presten a la sociedad de inversión los servicios a que se refiere esta Ley, evaluando, por lo menos anualmente, el desempeño de tales personas, notificando de dicha circunstancia a sus accionistas a través de los medios de comunicación que se hubieren contemplado en el prospecto de información al público inversionista,

c) Las normas para prevenir y evitar conflictos de intereses, y

d) Las operaciones con personas que mantengan nexos patrimoniales, de responsabilidad o de parentesco, con accionistas del capital fijo o miembros del consejo de la sociedad de inversión o con los accionistas de la sociedad operadora que le preste servicios o con los de la sociedad controladora del grupo financiero y entidades financieras integrantes del grupo al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora;

II. Establecer las políticas de inversión y operación de las sociedades de inversión, así como revisarlas cada vez que se reúna;

III. Dictar las medidas que se requieran para que se observe debidamente lo señalado en el prospecto de información al público inversionista;

IV. Analizar y evaluar el resultado de la gestión de la sociedad de inversión, y

V. Sesionar por lo menos cada tres meses y en forma extraordinaria, cuando sea convocado por el presidente del consejo, al menos el veinticinco por ciento de los consejeros, o cualquiera de los comisarios de la sociedad de inversión. Para la celebración de las sesiones ordinarias y

extraordinarias del consejo de administración se deberá contar con la asistencia de cuando menos el cincuenta y uno por ciento de los consejeros, de los cuales por lo menos uno deberá ser independiente, a menos que sea para tratar los asuntos a que se refiere la fracción I de este artículo.

El presidente del consejo de administración de la sociedad de inversión tendrá voto de calidad en caso de empate.

ARTICULO 14. Las sociedades de inversión, a través de sus consejos de administración, establecerán límites máximos de tenencia accionaria por inversionista y determinarán políticas para que las personas que se ajusten a las mismas, adquieran temporalmente porcentajes superiores a tales límites, debiendo esto contenerse en sus prospectos de información al público inversionista.

Las sociedades operadoras o las personas que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión, deberán implementar por cuenta de éstas, mecanismos que permitan a sus accionistas, contar con información oportuna relativa al porcentaje de su tenencia accionaria, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo.

ARTICULO 15. Las sociedades de inversión sólo podrán realizar las operaciones siguientes:

I. Comprar, vender o invertir en Activos Objeto de Inversión de conformidad con el régimen que corresponda de acuerdo al tipo de sociedad;

II. Celebrar reportos y préstamos sobre valores a los que les resulte aplicable la Ley del Mercado de Valores con instituciones de crédito o casas de bolsa, pudiendo actuar como reportadoras o, en su caso, prestatarias o prestamistas;

III. Adquirir las acciones que emitan, sin que para tal efecto sea aplicable la prohibición establecida por el artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Lo anterior, no será aplicable a las sociedades de inversión de capitales y cerradas, a menos que sus acciones coticen en bolsa, supuesto en el cual podrán recomprarlas ajustándose para ello al régimen previsto en la Ley del Mercado de Valores para las sociedades emisoras;

IV. Comprar o vender acciones representativas del capital social de otras sociedades de inversión sin perjuicio del régimen de inversión al que estén sujetas;

V. Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito, intermediarios financieros no bancarios y entidades financieras del exterior;

VI. Emitir valores representativos de una deuda a su cargo, para el cumplimiento de su objeto, y

VII. Las análogas y conexas que autorice la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

En la realización de las operaciones a que se refiere este artículo, las sociedades de inversión se sujetarán a las disposiciones de carácter general que expida la Comisión, salvo tratándose de las operaciones de reporto, préstamo de valores, préstamos y créditos, emisión de valores y la celebración de operaciones financieras conocidas como derivadas y con moneda extranjera, en cuyo caso deberán ajustarse a las disposiciones de carácter general que al efecto expida el Banco de México.

En el evento de que la Comisión pretenda incorporar en el régimen de inversión de las sociedades de inversión de cualquier tipo, la celebración de operaciones financieras conocidas como derivadas o con moneda extranjera, deberá obtener la opinión favorable del Banco de México.

La Comisión estará facultada para expedir disposiciones de carácter general a las que deberán ajustarse las sociedades de inversión para la adquisición y venta de las acciones que emitan. Como consecuencia de la compra de sus propias acciones, las sociedades de inversión procederán a la reducción del capital en la misma fecha de la adquisición, convirtiéndolas en acciones de tesorería y sin que para el efecto sea aplicable la obligación establecida en la fracción III del artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Asimismo, la Comisión mediante disposiciones de carácter general podrá limitar o prohibir a las sociedades de inversión la adquisición o participación en aquellas operaciones que determine que impliquen algún conflicto de intereses, contando con facultades para resolver en casos de duda.

ARTICULO 16. Los valores, títulos y documentos inscritos en el Registro Nacional, que formen parte del activo de las sociedades de inversión, deberán estar depositados en una cuenta que para cada sociedad se mantendrá en alguna institución para el depósito de valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores. Igual obligación deberá observarse tratándose de las acciones representativas del capital social de esas sociedades, sin perjuicio de los servicios de custodia que respecto de dichas acciones se contraten con terceros.

Cuando se trate de Activos Objeto de Inversión distintos de los señalados en el párrafo anterior, que por su naturaleza no puedan ser depositados en alguna institución para el depósito de valores, nacional o extranjera, se mantendrán en los términos que señale la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

ARTICULO 17. Las sociedades de inversión deberán obtener una calificación otorgada por alguna institución calificadora de valores, que refleje los riesgos de los activos integrantes de su patrimonio y de las operaciones que realicen, así como la calidad de su administración, cuando así lo determine la Comisión mediante disposiciones de carácter general, en las que también señalará la periodicidad con que ésta se llevará a cabo, así como los términos y condiciones en que dicha información deberá ser difundida.

ARTICULO 18. Las sociedades de inversión tendrán prohibido:

I. Recibir depósitos de dinero;

II. Dar en garantía sus bienes muebles, inmuebles, valores, títulos y documentos que mantengan en sus activos, salvo que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de obligaciones a cargo de la sociedad, producto de la realización de las operaciones a que se refiere el artículo 15, fracciones II, V y VI de esta Ley, así como aquéllas en las que puedan participar y que de conformidad con las disposiciones que les sean aplicables a dichas transacciones deban estar garantizadas;

III. Otorgar su aval o garantía respecto de obligaciones a cargo de un tercero;

IV. Recomprar o vender las acciones que emitan a precio distinto al que se señale conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley considerando las comisiones que correspondan a cada serie accionaria. Tratándose de sociedades de inversión que coticen en bolsa, se ajustarán al régimen de recompra previsto en la Ley del Mercado de Valores aplicable a las sociedades emisoras;

V. Practicar operaciones activas de crédito, excepto préstamos y reportos sobre valores, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 15 de esta Ley, y

VI. Lo que les señale ésta u otras leyes.

ARTICULO 19. Cada sociedad de inversión determinará sus políticas de selección de Activos Objeto de Inversión de acuerdo con su régimen de inversión, las disposiciones legales y administrativas aplicables y en concordancia con su prospecto de información al público inversionista.

ARTICULO 20. El régimen de inversión de las sociedades de inversión, deberá observar los lineamientos siguientes, sin perjuicio de las disposiciones aplicables según el tipo, modalidad o clasificación que les corresponda:

I. Por lo menos el noventa y seis por ciento de su activo total deberá estar representado por Activos Objeto de Inversión incluyendo las cuentas por cobrar derivadas de operaciones de venta de activos al contado que no les hayan sido liquidadas y los intereses devengados acumulados no cobrados sobre los activos integrantes de la cartera, y

II. Hasta el cuatro por ciento de la suma del activo total, en gastos de instalación, mobiliario y equipo.

En casos excepcionales, la Comisión podrá autorizar variaciones a los límites previstos en este artículo, considerando el tipo de sociedad de inversión, el monto del capital constitutivo y las condiciones de la plaza en que se ubique el domicilio social.

ARTICULO 21. Cuando una sociedad de inversión haya adquirido algún Activo Objeto de Inversión dentro de los porcentajes mínimo y máximo que le sean aplicables, pero que con motivo de variaciones en los precios de los mismos o, en su caso, por compras o ventas significativas e inusuales de acciones representativas de su capital pagado, no cubra o se exceda de tales porcentajes, deberá ajustarse a las disposiciones de carácter general que para tal efecto expida la Comisión, a fin de regularizar su situación.

Capítulo Segundo De las Sociedades de Inversión de Renta Variable

ARTICULO 22. Las sociedades de inversión de renta variable operarán con Activos Objeto de Inversión cuya naturaleza corresponda a acciones, obligaciones y demás valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero en los términos del artículo siguiente, a los cuales se les designará para efectos de este capítulo como Valores.

ARTICULO 23. Las inversiones que realicen las sociedades de este tipo, se sujetarán al régimen que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general, y que deberán considerar, entre otros:

I. El porcentaje máximo del activo total de la sociedad que podrá invertirse en Valores de un mismo emisor;

II. El porcentaje máximo de Valores de un mismo emisor que podrá ser adquirido por una sociedad de inversión;

III. El porcentaje mínimo del activo total de la sociedad que deberá invertirse en Valores y operaciones cuyo plazo por vencer no sea superior a tres meses, y

IV. El porcentaje mínimo del activo total de la sociedad que deberá invertirse en acciones y otros títulos o documentos de renta variable.

Al expedir las disposiciones a que se refiere este artículo, la Comisión podrá establecer regímenes diferentes, atendiendo a las políticas de inversión, liquidez, selección y, en su caso, diversificación o

especialización de activos, así como prever la inversión en otros valores, bienes, derechos, títulos de crédito, documentos, contratos, depósitos de dinero y demás cosas objeto de comercio.

Capítulo Tercero De las Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda

ARTICULO 24. Las sociedades de inversión en instrumentos de deuda operarán exclusivamente con Activos Objeto de Inversión cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero, a los cuales se les designará para efectos de este capítulo como Valores.

ARTICULO 25. Las inversiones que realicen las sociedades de este tipo, se sujetarán al régimen que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general, y que deberán considerar, entre otros:

I. El porcentaje máximo del activo total de la sociedad que podrá invertirse en Valores de un mismo emisor;

II. El porcentaje máximo de Valores de un mismo emisor que podrá ser adquirido por una sociedad de inversión, y

III. El porcentaje mínimo del activo total de la sociedad que deberá invertirse en Valores y operaciones cuyo plazo por vencer, no sea superior a tres meses.

Al expedir las disposiciones a que se refiere este artículo, la Comisión podrá establecer regímenes diferentes, atendiendo a las políticas de inversión, liquidez, selección y, en su caso, diversificación o especialización de activos, así como prever la inversión en otros valores, bienes, derechos, títulos de crédito, documentos, contratos, depósitos de dinero y demás cosas objeto de comercio.

Capítulo Cuarto De las Sociedades de Inversión de Capitales

ARTICULO 26. Las sociedades de inversión de capitales operarán preponderantemente con Activos Objeto de Inversión cuya naturaleza corresponda a acciones o partes sociales, obligaciones y bonos a cargo de empresas que promueva la propia sociedad de inversión y que requieran recursos a mediano y largo plazo.

ARTICULO 27. Las inversiones que realicen las sociedades de este tipo, se sujetarán al régimen que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general, y que deberán considerar, entre otros:

I. Las características genéricas de las empresas en que podrá invertirse el activo total de las sociedades de inversión, a las que se conocerá como empresas promovidas;

II. El porcentaje máximo del activo total de las sociedades de inversión que podrá invertirse en acciones o partes sociales de una misma empresa promovida;

III. El porcentaje máximo del activo total de las sociedades de inversión que podrá invertirse en obligaciones y bonos emitidos por una o varias empresas promovidas, y

IV. El porcentaje máximo del activo total de las sociedades de inversión que podrá invertirse en acciones emitidas por empresas que fueron promovidas por dichas sociedades de inversión.

Los recursos que transitoriamente no sean invertidos con arreglo a las fracciones precedentes, deberán destinarse a la constitución de depósitos de dinero, así como a la adquisición de acciones representativas del capital social de sociedades de inversión de renta variable o en instrumentos de deuda, de valores, títulos y documentos objeto de inversión de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda y de otros instrumentos que al efecto prevea la Comisión, mediante disposiciones de carácter general.

Al expedir las disposiciones a que se refiere este artículo, la Comisión podrá establecer regímenes diferentes, atendiendo a las políticas de inversión, liquidez, selección y, en su caso, diversificación o especialización de activos, así como prever la inversión en otros valores, bienes, derechos, títulos de crédito, documentos, contratos, depósitos de dinero y demás cosas objeto de comercio.

ARTICULO 28. Las sociedades de inversión de capitales celebrarán con cada una de las empresas promovidas, un contrato de promoción que tendrá por objeto la estipulación de las condiciones a las que se sujetará la inversión y que deberá reunir los requisitos mínimos que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general.

La citada Comisión podrá objetar los términos y condiciones de los contratos de promoción a que se refiere el párrafo anterior, en caso de que no reúnan los requisitos mínimos que la misma establezca, así como ordenar se realicen las modificaciones que estime pertinentes.

Las empresas promovidas por sociedades de inversión de capitales, estarán obligadas a proporcionar a la Comisión, la información que al efecto les solicite, debiendo contemplarse dicha obligación en los contratos de promoción respectivos.

ARTICULO 29. Cuando las acciones de una empresa promovida sean inscritas en el Registro Nacional, la sociedad de inversión de capitales podrá mantener las acciones emitidas por aquélla hasta por los porcentajes y plazos que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general.

Capítulo Quinto De las Sociedades de Inversión de Objeto Limitado

ARTICULO 30. Las sociedades de inversión de objeto limitado operarán exclusivamente con los Activos Objeto de Inversión que definan en sus estatutos y prospectos de información al público inversionista.

ARTICULO 31. Las inversiones que realicen las sociedades de este tipo, se sujetarán al régimen que la Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general y a los prospectos de información al público inversionista, en los que se deberá de contemplar el porcentaje que de su patrimonio habrá de estar representado por los Activos Objeto de Inversión propios de su actividad preponderante, sin perjuicio de que los recursos transitoriamente no invertidos, se destinen a la constitución de depósitos de dinero, así como a la adquisición de acciones representativas del capital social de sociedades de inversión de renta variable o en instrumentos de deuda, y de valores, títulos y documentos objeto de inversión de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda.

Capítulo Sexto De la Prestación de Servicios a las Sociedades de Inversión

Sección I De los Servicios

ARTICULO 32. Las sociedades de inversión en los términos y casos que esta Ley señala, para el cumplimiento de su objeto deberán contratar los servicios que a continuación se indican:

I. Administración de activos de sociedades de inversión;
II. Distribución de acciones de sociedades de inversión;
III. Valuación de acciones de sociedades de inversión;
IV. Calificación de sociedades de inversión;
V. Proveeduría de Precios de Activos Objeto de Inversión;
VI. Depósito y custodia de Activos Objeto de Inversión y de acciones de sociedades de inversión;
VII. Contabilidad de sociedades de inversión;
VIII. Administrativos para sociedades de inversión, y
IX. Los demás que autorice la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

Las sociedades de inversión de capitales no estarán obligadas a contratar los servicios señalados en las fracciones II, IV y V de este artículo, pero en todo caso deberán ajustarse en materia de valuación a lo establecido en el artículo 44 de esta Ley. La Comisión podrá exceptuar, mediante disposiciones de carácter general, a las sociedades de inversión de objeto limitado, de la contratación de algunos de los servicios a que se refiere este precepto.

ARTICULO 33. Para organizarse y funcionar como sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras o valuadoras de acciones de sociedades de inversión, se requiere autorización que compete otorgar a la Comisión.

Por su naturaleza estas autorizaciones serán intransmisibles.

Sólo gozarán de autorización, las sociedades anónimas organizadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles en todo lo que no esté previsto en esta Ley.

La Comisión podrá autorizar a las mencionadas sociedades operadoras, distribuidoras o valuadoras, la realización de actividades que sean conexas o complementarias a las que sean propias de su objeto, así como la prestación de servicios que auxilien a los intermediarios financieros en la celebración de sus operaciones, mediante disposiciones de carácter general.

ARTICULO 34. La solicitud de autorización para constituirse como sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras o valuadoras de acciones de sociedades de inversión, deberá acompañarse de lo siguiente:

I. Proyecto de estatutos sociales;
II. Programa general de funcionamiento que comprenda por lo menos las bases relativas a su organización y control interno;
III. Manual de operación y funcionamiento;
IV. Relación de accionistas, consejeros y principales funcionarios, así como la composición del capital social;
V. Tratándose de sociedades operadoras de sociedades de inversión, el nombre de la persona que fungiría como contralor normativo, quien será responsable de:
  a) Establecer procedimientos para asegurar que se cumpla con la normatividad externa e interna aplicable, así como la adecuada observancia del prospecto de información al público inversionista de las sociedades de inversión a las que les presten servicios, y para conocer de los incumplimientos;
  b) Proponer al consejo de administración de la sociedad operadora el establecimiento de medidas para prevenir conflictos de interés y evitar el uso indebido de la información;
  c) Recibir los informes del comisario y los dictámenes de los auditores externos, para su conocimiento y análisis;

d) Documentar e informar al consejo de administración de las irregularidades que puedan afectar el sano desarrollo de la sociedad, y

e) Las demás que se establezcan en los estatutos sociales para el adecuado desempeño de sus responsabilidades.

Las funciones del contralor normativo se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan al comisario y al auditor externo de la sociedad operadora respectiva, de conformidad con la legislación aplicable, y

VI. En el caso de sociedades operadoras, el procedimiento para que el consejo de administración designe, suspenda, remueva o revoque el nombramiento de contralor normativo, así como la forma en que este último reportará al propio consejo acerca del ejercicio de sus funciones. El contralor normativo podrá asistir a las sesiones del consejo con voz y sin voto.

Cuando se trate de sociedades de capital variable, el capital mínimo obligatorio con arreglo a la Ley estará integrado por acciones sin derecho a retiro. El monto del capital variable en ningún caso podrá ser superior al del capital pagado sin derecho a retiro.

El consejo de administración de las sociedades operadoras de sociedades de inversión se integrará en los mismos términos establecidos en el artículo 12, fracción X, primer y segundo párrafos de esta Ley, sin que por ello se entienda que estas sociedades se encuentran sujetas al requisito de designar consejeros independientes.

Tratándose del director general y funcionarios que ocupen el cargo inmediato inferior al del director general, en las citadas sociedades operadoras de sociedades de inversión, así como los de las distribuidoras o valuadoras de acciones de sociedades de inversión, en ningún caso podrán ocupar algún empleo, cargo o comisión, en sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros, instituciones de fianzas, sociedades financieras de objeto limitado, organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio.

La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, establecerá el monto del capital mínimo de las sociedades a que se refiere este artículo, el cual deberá estar en todo momento íntegramente pagado.

ARTICULO 35. Las sociedades operadoras de sociedades de inversión, así como las distribuidoras y las entidades financieras que lleven a cabo la distribución de acciones de sociedades de inversión, deberán utilizar los servicios de personas físicas autorizadas por la Comisión para celebrar con el público operaciones de asesoría, promoción, compra y venta de acciones de sociedades de inversión. En todo caso deberán otorgarse los poderes que correspondan.

Dicha autorización se otorgará a juicio de la citada Comisión, a las personas físicas de que se trata, siempre que acrediten contar con honorabilidad e historial crediticio satisfactorios y capacidad técnica necesaria para llevar a cabo las actividades referidas en el párrafo anterior.

ARTICULO 36. Los estatutos de las sociedades a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley, así como sus modificaciones, deberán ser aprobados por la Comisión. Con esta aprobación, los estatutos o sus reformas podrán ser inscritos en el Registro Público de Comercio.

En todo caso, las sociedades de que se trata, deberán proporcionar a dicha Comisión el testimonio notarial o la póliza expedida por notario o corredor público, en que conste la formalización de los estatutos sociales o sus modificaciones y, cuando proceda, copia del instrumento público expedida por fedatario público, relativa a las actas de sus asambleas.

ARTICULO 37. La transmisión de acciones de sociedades operadoras de sociedades de inversión, así como de las distribuidoras y valuadoras de acciones de sociedades de inversión, requerirá de la previa autorización de la Comisión.

En ningún momento podrán participar en el capital de las sociedades a que se refiere el párrafo anterior las personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, directamente o a través de interpósita persona, por lo que toda adquisición efectuada en contravención de lo aquí establecido, se considerará nula, bajo la pena de perder en beneficio de la sociedad de que se trate, el importe de sus aportaciones.

La sociedad de que se trate deberá abstenerse de inscribir en el registro de sus acciones, las adquisiciones que se realicen en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, debiendo rechazar su inscripción.

Las instituciones de crédito, casas de bolsa, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado e instituciones de seguros, requerirán de la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para participar en el capital social de las sociedades operadoras de sociedades de inversión a que se refiere la presente Ley. En todo caso, las inversiones que realicen deberán ser con cargo a su capital de conformidad a lo previsto en las disposiciones legales y administrativas que les sean aplicables.

ARTICULO 38. Las personas que proporcionen los servicios a que se refiere el artículo 32, fracciones I, II y VI de esta Ley, que por las actividades que desempeñen en favor de la sociedad de inversión que los hubiere contratado, deban actuar frente a terceros, en todo momento deberán contar con el mandato o comisión mercantil, según sea el caso, para celebrar los actos jurídicos correspondientes a nombre y por cuenta de la sociedad de inversión mandante o comitente.

Sección II De la Administración de Activos

ARTICULO 39. Los servicios de administración de activos consistirán en la realización de las actividades siguientes:

I. La celebración de las operaciones a que se refiere el artículo 15, fracciones I, II, IV y V de esta Ley, a nombre y por cuenta de la sociedad de inversión a la que se le otorguen servicios, así como, en su caso, la gestión de la emisión de los valores a que se refiere la fracción VI del citado artículo, y

II. El manejo de carteras de valores en favor de sociedades de inversión y de terceros, ajustándose a lo establecido en la Ley del Mercado de Valores.

Las personas que otorguen servicios de administración de activos deberán estar constituidas como sociedades operadoras de sociedades de inversión, y contarán con todo tipo de facultades y obligaciones para administrar, como si se tratara de un apoderado con poder general para realizar actos de tal naturaleza, debiendo observar en todo caso, el régimen de inversión aplicable a la sociedad de inversión de que se trate, así como su prospecto de información al público inversionista, salvaguardando en todo momento los intereses de los accionistas de la misma, para lo cual deberán proporcionarles la información relevante, suficiente y necesaria para la toma de decisiones.

Las sociedades operadoras de sociedades de inversión podrán prestar a las sociedades de inversión, en forma conjunta, los servicios referidos en las fracciones I y II de este artículo y aquéllos a que se refiere el artículo 32, fracciones II, VI, VII y VIII de esta Ley, debiendo observar en lo conducente, las disposiciones aplicables al tipo de servicio que corresponda de conformidad a lo previsto en la presente Ley y en la Ley del Mercado de Valores. Asimismo, dichas sociedades operadoras podrán otorgar el servicio de valuación de acciones en los términos de este ordenamiento, previa autorización de la Comisión y sujetándose a las disposiciones de carácter general que al efecto expida.

Las instituciones de crédito, casas de bolsa, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio, sociedades financieras de objeto limitado e instituciones de seguros, sólo podrán ofrecer a las sociedades de inversión los servicios a que se refiere el presente artículo, a través de sociedades operadoras que constituyan para tal efecto, rigiéndose para ello por la presente Ley y las disposiciones legales que les son aplicables a dichas entidades financieras.

Sección III De la Distribución

ARTICULO 40. Los servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión, comprenderán la promoción, asesoría a terceros, compra y venta de dichas acciones por cuenta y orden de la sociedad de inversión de que se trate y, en su caso, la generación de informes y estados de cuenta consolidados de inversiones y otros servicios complementarios que autorice la Comisión, mediante disposiciones de carácter general.

Las actividades de distribución a que se refiere este artículo podrán ser llevadas a cabo por sociedades distribuidoras autorizadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley, las cuales podrán ser entidades integrantes de sociedades controladoras de grupos financieros.

Las instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio y sociedades financieras de objeto limitado, podrán proporcionar de manera directa, a las sociedades de inversión servicios de distribución de acciones, sin perjuicio de que para ello se ajusten a esta Ley y a las disposiciones legales que les son aplicables, quedando en todo caso, sujetas a la supervisión de la Comisión en la realización de dichas actividades.

En ningún caso las sociedades distribuidoras podrán operar por cuenta propia con el público, sobre acciones de sociedades de inversión.

Las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión podrán celebrar contratos con personas físicas y morales que cuenten con personas físicas que las auxilien en el desempeño de sus actividades, siempre que éstas acrediten cumplir con lo dispuesto en el artículo 35 de esta Ley.

En ningún caso, la distribución de acciones de sociedades de inversión podrá efectuarse a precio distinto del precio actualizado de valuación que sea aplicable para el día en que se celebren las operaciones de compra o venta.

ARTICULO 41. Los accionistas de sociedades de inversión, podrán estipular en cualquier tiempo con la sociedad operadora o con la persona que proporcione los servicios de distribución de acciones de la sociedad de inversión que corresponda, la designación o sustitución de beneficiarios, así como la modificación, en su caso, de la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de fallecimiento del titular de que se trate, la sociedad distribuidora, una vez realizadas las operaciones necesarias, entregará el importe correspondiente a los beneficiarios que el titular hubiere designado expresamente y por escrito para tal efecto, sin exceder el mayor de los límites siguientes:

I. El equivalente a 20 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, por sociedad de inversión, o

II. El equivalente al 75% del importe de las acciones que se mantuvieran en cada sociedad de inversión.

El beneficiario tendrá derecho a elegir entre la entrega de las acciones de las sociedades de inversión correspondientes y el importe de su recompra, con sujeción a los límites señalados.

El excedente, en su caso, deberá devolverse de conformidad con la legislación común.

ARTICULO 42. Las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, al celebrar operaciones con el público, deberán utilizar documentación que contenga información relacionada con su personalidad jurídica y el carácter con el que comparecen en dichos actos, destacando la denominación de la sociedad de inversión por cuenta de la cual se actúa.

ARTICULO 43. La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer requerimientos de capital adicionales a los previstos en el último párrafo del artículo 34 de esta Ley, aplicables a las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión que manejen recursos de terceros, producto de la realización de operaciones de compra y venta de dichas acciones.

Sección IV De la Valuación

ARTICULO 44. El servicio de valuación de acciones representativas del capital social de sociedades de inversión, será proporcionado por sociedades valuadoras o por sociedades operadoras de sociedades de inversión que se encuentren autorizadas para tal fin, con el objeto de determinar el precio actualizado de valuación de las distintas series de acciones en los términos de las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión.

Tratándose de las sociedades de inversión de capitales y de objeto limitado, el precio de las acciones representativas de su capital social, podrá ser determinado por sociedades valuadoras o bien, por comités de valuación designados por aquéllas.

Para determinar el precio de las acciones de las sociedades de inversión, los responsables de prestar este servicio, utilizarán precios actualizados de valuación de los valores, documentos e instrumentos financieros integrantes de los activos de las sociedades de inversión, que les sean proporcionados por el proveedor de precios de dichas sociedades; o bien, los precios que se obtengan mediante el método que establezca o autorice la Comisión tratándose de activos que por su propia naturaleza no puedan ser valuados por dichos proveedores.

La valuación de las inversiones que las sociedades de inversión de capitales mantengan en empresas promovidas, se ajustará a los lineamientos que para tal efecto establezca la Comisión, mediante disposiciones de carácter general.

ARTICULO 45. Los precios actualizados de valuación de las acciones de las sociedades de inversión, se darán a conocer al público a través de medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, pero en todo caso los responsables de prestar este servicio, proporcionarán dichos precios a la Comisión, a la bolsa de valores que corresponda y a las personas a que se refiere el artículo 32, fracciones I, II, VII y VIII de esta Ley. Asimismo, la citada Comisión en protección de los intereses del público, establecerá mediante disposiciones de carácter general diferenciales máximos de precios que las sociedades de inversión podrán aplicar al precio actualizado de valuación de las distintas series de acciones que emitan, para la realización de operaciones de compra y venta sobre sus propias acciones.

Lo señalado en este artículo no será aplicable a las sociedades de inversión de capitales y de objeto limitado cuando así lo determine la Comisión, mediante disposiciones de carácter general.

ARTICULO 46. En las sociedades de inversión abiertas, la asignación de utilidades o pérdidas netas entre los accionistas, será determinada con la misma periodicidad con que se valúen sus acciones sin necesidad de celebrar asamblea de accionistas, mediante la determinación del precio que por acción les dé a conocer la sociedad valuadora que al efecto les preste servicios.

ARTICULO 47. Las sociedades valuadoras, las sociedades operadoras que actúen con tal carácter y los comités de valuación deberán tener en todo momento a disposición de la Comisión, los informes relativos a la valuación de las acciones representativas del capital social de las sociedades de inversión. Tratándose de comités de valuación, adicionalmente se deberá contar con las actas de las juntas que celebren.

Sección V De la Calificación

ARTICULO 48. Los servicios de calificación de sociedades de inversión serán otorgados por instituciones calificadoras de valores, las cuales en la realización de sus actividades, deberán ajustarse a las disposiciones legales y administrativas que les resulten aplicables.

Sección VI De la Proveeduría de Precios

ARTICULO 49. El servicio de proveeduría de precios se realizará por sociedades cuyo objeto sea exclusivamente la prestación habitual y profesional del servicio de cálculo, determinación y suministro de precios actualizados para valuación de valores, documentos e instrumentos financieros, que se organicen y funcionen con arreglo a las disposiciones legales y administrativas que les resulten aplicables.

ARTICULO 50. El proveedor de precios deberá resolver las objeciones que le formulen las sociedades de inversión usuarias de sus servicios, sobre los precios actualizados para valuación, el mismo día de su entrega, cuando a su juicio existan elementos que permitan suponer una incorrecta aplicación de la metodología o modelos de valuación que se utilicen para el cálculo y determinación de dichos precios o bien, éstos no representen adecuadamente los niveles de mercado, debiendo informar de ello a la Comisión, con la misma oportunidad.

Cuando se modifique algún precio actualizado para valuación, el proveedor de precios comunicará la modificación correspondiente a todas las sociedades de inversión usuarias de sus servicios y a la mencionada Comisión, en la misma fecha en que resuelva su procedencia.

Sección VII Del Depósito y Custodia

ARTICULO 51. Los servicios de depósito de las acciones representativas del capital de sociedades de inversión, así como de los valores que integran su activo, serán proporcionados por las instituciones para el depósito de valores a que se refiere el artículo 16 de esta Ley.

Sólo las instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades operadoras de sociedades de inversión y distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, podrán otorgar a los titulares de las acciones de sociedades de inversión, los servicios de depósito y custodia de conformidad con lo establecido en las leyes especiales que las rigen, la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Capítulo Séptimo Disposiciones Comunes

ARTICULO 52. En ningún caso, las personas que otorguen servicios de calificación, de valuación y de proveeduría de precios, podrán adquirir acciones de las sociedades de inversión que las contraten. Lo anterior, no será aplicable a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, autorizadas para prestar servicios de valuación, cuando se trate de tenencia de acciones del capital fijo o por operaciones de recompra por cuenta de la sociedad de inversión a la que, en su caso, le presten este servicio.

ARTICULO 53. Las personas que presten servicios contables y administrativos, así como las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras y valuadoras de acciones de sociedades de inversión, estarán obligadas a restituir a la sociedad de inversión contratante, los daños que, en su caso, le causen con motivo de la incorrecta prestación de sus servicios.

ARTICULO 54. Las controversias que puedan presentarse entre la sociedad de inversión y sus accionistas, así como entre estos últimos y las personas que les proporcionen los servicios a que se refiere el artículo 32, fracciones I, II y VI de esta Ley, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

ARTICULO 55. Las sociedades de inversión y las personas que les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, en ningún caso podrán dar noticias o información de las operaciones o servicios que realicen o en las que intervengan, sino al titular o beneficiario de las acciones representativas del capital social de la sociedad de inversión de que se trate, a sus representantes legales o quienes tengan otorgado poder para disponer de dichas acciones, salvo cuando las pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular sea parte o acusado y las autoriades hacendarias federales por conducto de la Comisión, para fines fiscales.

Los empleados y directivos de las sociedades de inversión y de las personas que les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, serán responsables en los términos de las disposiciones aplicables, por la violación del secreto que se establece en este artículo y las sociedades y personas señaladas estarán obligadas, en caso de revelación del secreto a reparar los daños y perjuicios que se causen.

Lo anterior no afecta, en forma alguna, la obligación de las sociedades de inversión y personas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 32 de esta Ley, de proporcionar a la Comisión toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren.

La Comisión estará facultada a proporcionar a las autoridades financieras del exterior, información sobre las operaciones que reciba de las sociedades de inversión y de las personas prestadoras de los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, siempre que tenga suscritos con dichas autoridades acuerdos de intercambio de información en los que se contemple el principio de reciprocidad, debiendo en todo caso abstenerse de proporcionar la información cuando a su juicio ésta pueda ser usada para fines

distintos a los de la supervisión financiera, o bien por causas de orden público, seguridad nacional o por cualquier otra causa convenida en los acuerdos respectivos.

ARTICULO 56. Los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, podrán ser prestados por una o más personas, siempre que conforme con lo establecido en la misma, se encuentren en la posibilidad de proporcionarlos.

Los servicios a que se refiere el citado artículo 32 podrán ser objeto de subcontratación, exclusivamente con personas que cuenten con la capacidad legal para otorgarlos, en cuyo caso se deberá obtener el consentimiento previo de la sociedad de inversión de que se trate y notificar a la Comisión tal circunstancia. Los servicios referidos en las fracciones I y III a V del artículo 32 de esta Ley no podrán ser objeto de subcontratación.

Cuando exista la subcontratación de servicios, la sociedad subcontratada responderá solidariamente de la responsabilidad imputable a la subcontratante, ante la sociedad de inversión y sus accionistas.

ARTICULO 57. La Comisión podrá autorizar que una persona pueda proporcionar uno o más de los servicios señalados en el artículo anterior, siempre que éstos sean compatibles entre sí. Los servicios a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 32 de esta Ley no serán compatibles con ningún otro servicio.

ARTICULO 58. La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, determinará las características de las operaciones que celebren las sociedades de inversión, así como las que realicen las sociedades operadoras de sociedades de inversión y distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, con el público inversionista.

ARTICULO 59. Las comisiones y remuneraciones que las sociedades de inversión o sus accionistas cubrirán a las personas que proporcionen los servicios a que se refiere el presente capítulo, así como las que deban pagar los mencionados prestadores de servicios entre sí, deberán sujetarse a las disposiciones de carácter general que al efecto dicte la Comisión, atendiendo a criterios de equidad y transparencia, entre otros.

ARTICULO 60. Las sociedades operadoras de sociedades de inversión y las distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, al celebrar operaciones con el público inversionista, podrán pactar el uso de equipos y sistemas automatizados o de telecomunicación, siempre que se establezca en los contratos respectivos lo siguiente:

I. Las bases para determinar las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;

II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades correspondientes a su uso, y

III. Los medios por los que se haga constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trata.

El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto en este artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La instalación y el uso de equipos y sistemas automatizados o de telecomunicación, que se destinen a la celebración y a la prestación especializada de servicios directos al público, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que, en su caso, dicte la Comisión.

ARTICULO 61. Los nombramientos de consejeros, contralor normativo director general y directivos que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de este último, de las sociedades de inversión, operadoras de sociedades de inversión y distribuidoras y valuadoras de acciones, deberán recaer en personas que acrediten contar con honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera o administrativa.

Los consejeros estarán obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interés. Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos que no se hayan hecho del conocimiento público, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el consejo, sin perjuicio de la obligación que tendrán las sociedades arriba citadas de proporcionar toda la información que les sea solicitada al amparo de la presente Ley.

Las personas que sean designadas como consejeros, contralor normativo, director general y directivos que ocupen la jerarquía inmediata inferior a la de este último, deberán acreditar a la sociedad de que se trate, con anterioridad al inicio de sus gestiones, del cumplimiento de los requisitos señalados en el primer y segundo párrafos de este artículo. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios, mediante los cuales se deberán integrar los expedientes que acrediten el cumplimiento a lo señalado en el presente artículo.

En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior, deberán manifestar:

I. Que no se ubican en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 12 fracción X, tercer párrafo, tratándose de consejeros de sociedades de inversión y 34, tercer párrafo, en el caso de contralor normativo, director generales y directivos que ocupen el cargo inmediato inferior al de este último de las sociedades a que se refiere el artículo 33 de este ordenamiento, y

II. Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias de cualquier género.

Las sociedades a que se refiere este artículo deberán informar a la Comisión los nombramientos de consejeros, contralor normativo, director general y directivos del nivel inmediato inferior al de este último, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisistos aplicables.

Capítulo Octavo De las Filiales de Instituciones Financieras del Exterior

ARTICULO 62. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Filial: La sociedad mexicana autorizada para organizarse y funcionar, conforme a esta Ley, como sociedad de inversión, sociedad operadora de sociedades de inversión o distribuidora de acciones de sociedades de inversión, en cuyo capital participe una Institución Financiera del Exterior, una Sociedad Controladora Filial o sociedad operadora de sociedades de inversión Filial, en los términos del presente capítulo;

II. Institución Financiera del Exterior: La entidad financiera constituida en un país con el que México haya celebrado un tratado o acuerdo internacional en virtud del cual se permita el establecimiento en territorio nacional de Filiales; y

III. Sociedad Controladora Filial: La sociedad mexicana autorizada para constituirse y operar como sociedad controladora en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, y en cuyo capital participe una Institución Financiera del Exterior.

ARTICULO 63. Las Filiales se regirán por lo previsto en los tratados o acuerdos internacionales correspondientes, el presente capítulo, las disposiciones contenidas en esta Ley aplicables a las sociedades de inversión, a las sociedades operadoras de sociedades de inversión o distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, según corresponda, y las reglas para el establecimiento de Filiales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para interpretar para efectos administrativos las disposiciones sobre servicios financieros que se incluyan en los tratados o acuerdos internacionales a que hace mención el párrafo anterior, así como para proveer a su observancia.

ARTICULO 64. Para organizarse y funcionar como Filial se requiere autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar a la Comisión. Por su naturaleza estas autorizaciones serán intransmisibles.

ARTICULO 65. Las autoridades financieras, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán el cumplimiento de los compromisos de trato nacional que en su caso sean asumidos por México, en los términos establecidos en el tratado o acuerdo internacional aplicable.

Las Filiales podrán realizar las mismas operaciones que las sociedades de inversión, las sociedades operadoras de sociedades de inversión o distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, según corresponda, a menos que el tratado o acuerdo internacional aplicable establezca alguna restricción.

ARTICULO 66. Para adquirir una participación mayoritaria en el capital social de una Filial, cuando ésta tenga el carácter de sociedad operadora de sociedades de inversión o distribuidora de acciones de sociedades de inversión, la Institución Financiera del Exterior deberá realizar, en el país en el que esté constituida, directa o indirectamente, de acuerdo con la legislación aplicable, el mismo tipo de operaciones que la Filial de que se trate esté facultada para realizar en México, de conformidad con lo que señalen la presente Ley y las reglas a que se refiere el primer párrafo del artículo 63.

La adquisición de acciones del capital fijo de una Filial que tenga el carácter de sociedad de inversión, sólo podrá realizarse por las Instituciones Financieras del Exterior citadas en el párrafo anterior, o por una Filial autorizada como sociedad operadora de sociedades de inversión.

ARTICULO 67. La solicitud de autorización para organizarse y funcionar como Filial deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y en las reglas a las que se refiere el primer párrafo del artículo 63.

ARTICULO 68. Una Institución Financiera del Exterior, directa o indirectamente, o bien, una Sociedad Controladora Filial o una sociedad operadora de sociedades de inversión Filial, deberá ser en todo momento propietaria de acciones que representen cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital mínimo fijo de las sociedades de inversión Filiales o del capital social de las sociedades operadoras de sociedades de inversión Filiales o de distribuidoras de acciones Filiales, según corresponda.

ARTICULO 69. Las acciones representativas del capital mínimo fijo de sociedades de inversión Filiales o del capital social de sociedades operadoras de sociedades de inversión o distribuidoras de acciones de sociedades de inversión Filiales, podrán ser enajenadas por una Institución Financiera del Exterior o por una Sociedad Controladora Filial, previa autorización de la Comisión.

Salvo en el caso en que el adquirente sea una Institución Financiera del Exterior, una Sociedad Controladora Filial, una sociedad operadora de sociedades de inversión Filial o una distribuidora de acciones Filial, para llevar a cabo la enajenación deberán modificarse los estatutos sociales de la Filial cuyas acciones sean objeto de la operación, a efecto de cumplir con lo dispuesto en los artículos 12, fracción V, 14 y 37, primer párrafo, de la presente Ley.

Cuando el adquirente sea una Institución Financiera del Exterior, una Sociedad Controladora Filial, una sociedad operadora de sociedades de inversión Filial o una distribuidora de acciones Filial, deberá observarse lo dispuesto en la fracción I del artículo 70.

ARTICULO 70. La Comisión podrá autorizar a las Instituciones Financieras del Exterior, a las Sociedades Controladoras Filiales y a las sociedades operadoras de sociedades de inversión Filiales, la adquisición de acciones representativas del capital mínimo fijo de una sociedad de inversión, y del capital social de una sociedad operadora de sociedades de inversión o distribuidora de acciones de sociedades de inversión, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

I. La Institución Financiera del Exterior, la Sociedad Controladora Filial, la sociedad operadora de sociedades de inversión Filial o la distribuidora de acciones Filial, según sea el caso, deberá adquirir acciones que representen cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital mínimo fijo o del capital social, según corresponda; y

II. Los estatutos sociales de la sociedad de inversión, de la sociedad operadora de sociedades de inversión o de la distribuidora de acciones de sociedades de inversión, cuyas acciones sean objeto de enajenación, deberán modificarse a efecto de cumplir con lo dispuesto en el presente capítulo.

ARTICULO 71. Las Filiales no podrán establecer sucursales o subsidiarias fuera del territorio nacional.

ARTICULO 72. Las sociedades de inversión Filiales y sociedades operadoras de sociedades de inversión Filiales, en la integración de sus consejos de administración, se ajustarán, según corresponda, a lo previsto en los artículos 12, fracción X, 34, tercer párrafo y 61 de esta Ley.

ARTICULO 73. Los directores generales de las Filiales, los funcionarios que ocupen el cargo inmediato inferior y las personas encargadas de llevar a cabo la promoción y venta de acciones de sociedades de inversión Filiales, deberán cumplir con los requisitos previstos en los artículos 34, cuarto párrafo, 35 y 61 de la presente Ley, según corresponda, así como residir en territorio nacional.

ARTICULO 74. Las sociedades operadoras filiales contarán con un contralor normativo, cuya designación, responsabilidades y ejercicio de funciones, se sujetarán a lo previsto por el artículo 34, fracción V de esta Ley.

ARTICULO 75. Respecto de las Filiales, la Comisión tendrá todas las facultades que le atribuye la presente Ley en relación con las sociedades de inversión, las sociedades operadoras de sociedades de inversión y las distribuidoras de acciones de sociedades de inversión. Cuando autoridades supervisoras del país de origen de la Institución Financiera del Exterior propietaria de acciones representativas del capital social de una Filial o de una Sociedad Controladora Filial, según sea el caso, deseen realizar visitas de inspección, deberán solicitarlo a la propia Comisión. A discreción de la misma, las visitas podrán hacerse por su conducto o sin que medie su participación.

La solicitud a que hace mención el párrafo anterior deberá hacerse por escrito, cuando menos con treinta días naturales de anticipación y deberá acompañarse de lo siguiente:

I. Descripción del acto de inspección a ser realizado, y

II. Las disposiciones legales pertinentes al acto de inspección objeto de la solicitud.

Capítulo Noveno De la Contabilidad, Inspección y Vigilancia

ARTICULO 76. Las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, deberán llevar el sistema de contabilidad que previene el Código de Comercio y los registros y auxiliares que ordene la Comisión.

Los registros que deberán llevar las citadas sociedades, se ajustarán a los criterios contables que al efecto establezca la propia Comisión.

ARTICULO 77. La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, señalará las bases a las que se sujetará la aprobación de los estados financieros mensuales y anuales de las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, por parte de sus respectivos consejos de administración. La referida aprobación deberá contar, en todo caso, con el voto favorable de la mayoría de los consejeros independientes.

Los estados financieros anuales deberán estar dictaminados por un auditor externo independiente, quien será designado directamente por el consejo de administración de las referidas sociedades.

Los mencionados auditores deberán suministrar a la Comisión los informes y demás elementos de juicio en los que sustenten sus dictámenes y conclusiones. Si durante la práctica o como resultado de la

auditoría encontraren irregularidades que afecten la estabilidad o solvencia de las citadas sociedades, los auditores estarán obligados a comunicar dicha situación a la aludida Comisión. La propia Comisión, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer las características y requisitos que deberán cumplir los auditores externos, así como sus dictámenes.

ARTICULO 78. Los libros de contabilidad y los registros a que se refiere esta Ley, deberán conservarse disponibles en las oficinas de la sociedad de inversión, sociedad operadora de sociedades de inversión o de la sociedad distribuidora de acciones de sociedades de inversión.

ARTICULO 79. Las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, deberán publicar en medios impresos o electrónicos de amplia circulación o divulgación, los estados financieros trimestrales y anuales, formulados de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de esta Ley. Tales publicaciones serán bajo la estricta responsabilidad de los administradores y comisarios de las sociedades que hayan aprobado y dictaminado la autenticidad de los datos contenidos en dichos estados financieros. Ellos deberán cuidar que éstos revelen efectivamente la verdadera situación financiera de las sociedades y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esta situación. Se exceptúa a las sociedades de inversión y a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, de lo establecido en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por lo que corresponde a la publicación de los estados financieros en el **Diario Oficial de la Federación**.

Las sociedades de inversión de capitales sólo estarán obligadas a publicar el estado financiero anual ajustándose a lo previsto en el párrafo anterior y a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión. Tratándose de sociedades de inversión de capitales cuyas acciones coticen en bolsas de valores, deberán publicar los estados financieros trimestrales y anuales, conforme a lo señalado en este artículo, así como ajustarse a las disposiciones aplicables a las sociedades emisoras de valores de conformidad con la Ley del Mercado de Valores.

La Comisión podrá ordenar correcciones a los estados financieros que, a su juicio, fueren fundamentales, así como acordar que se publiquen con las modificaciones pertinentes.

ARTICULO 80. La inspección y vigilancia de las sociedades de inversión, de las personas que otorguen los servicios a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 32 de esta Ley, así como de las instituciones de seguros en cuanto a las actividades que éstas realicen en materia de distribución de acciones de sociedades de inversión, corresponderá a la Comisión, a la que deberán proporcionar la información y documentos que requiera para tal efecto.

Asimismo, en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, la Comisión podrá:

I. Dictar normas en materia de registro contable aplicables a las sociedades de inversión y operadoras de sociedades de inversión, así como disposiciones de carácter general conforme a las cuales las sociedades de inversión, por conducto de sus sociedades operadoras, deberán dar a conocer al público la composición de los activos integrantes de su patrimonio;

II. Revisar los estados financieros mensuales y anuales de las sociedades de inversión y de las sociedades operadoras de sociedades de inversión, así como, en su caso, ordenar las publicaciones establecidas en el artículo 79 de esta Ley;

III. Determinar que se proceda a la remoción o suspensión de los miembros del consejo de administración, comisarios, contralor normativo, director general, funcionarios que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de aquél, apoderados autorizados para operar con el público y auditores externos de sociedades de inversión, operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras y valuadoras de acciones, así como imponer veto de seis meses hasta cinco años a las personas antes mencionadas, cuando considere que no cuentan con la suficiente calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio para el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven. En los dos últimos supuestos, la propia Comisión podrá además, inhabilitar a las citadas personas para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero mexicano, por el mismo periodo de seis meses hasta cinco años, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables. Antes de dictar la resolución correspondiente, la citada Comisión deberá escuchar al interesado y a la sociedad de que se trate;

IV. Ordenar visitas de inspección a las sociedades de inversión, a las personas que presten los servicios señalados en el artículo 32 de esta Ley, así como a las instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio y sociedades financieras de objeto limitado, en cuanto a las actividades que éstas lleven a cabo en materia de distribución de acciones de sociedades de inversión;

V. Intervenir administrativamente a las sociedades de inversión, operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras y valuadoras de acciones de sociedades de inversión, con objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o aquéllas violatorias de la presente Ley, de la Ley del Mercado de Valores o de las disposiciones de carácter general derivadas de ambos ordenamientos legales;

VI. Suspender y ordenar la normalización de las actividades que las instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros, organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio y sociedades financieras de objeto limitado, lleven a cabo en materia de distribución de acciones de sociedades de inversión;

VII. Emitir disposiciones de carácter general acerca de los términos y condiciones a los que deberá sujetarse toda clase de propaganda e información dirigida al público, tanto de las sociedades de inversión, como de las sociedades operadoras de sociedades de inversión y las personas que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión, quedando prohibido a las primeras anunciar su capital autorizado sin consignar el capital pagado.

Tales disposiciones deberán procurar que la propaganda e información se exprese en forma clara y precisa, a efecto de que no se induzca al público a engaño, error o confusión sobre la prestación de los servicios que ofrecen las sociedades de inversión y las personas que les prestan servicios a estas últimas.

La Comisión podrá ordenar, previa audiencia de la parte interesada, la suspensión o rectificación de la propaganda o información que a su juicio considere sea contraria a lo previsto en este artículo;

VIII. Determinar los días en que las sociedades de inversión, operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras y valuadoras de acciones de sociedades de inversión, deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones;

IX. Imponer sanciones pecuniarias por infracciones a la presente Ley o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven;

X. Vigilar el debido cumplimiento de lo establecido por cada sociedad de inversión en sus prospectos de información al público inversionista;

XI. Autorizar los prospectos de información al público inversionista emitidos por las sociedades de inversión y sus modificaciones;

XII. Ordenar la suspensión temporal de la colocación de acciones representativas del capital de sociedades de inversión ante condiciones desordenadas de mercado o, en su caso, temporal o definitiva, por la celebración de operaciones no conformes a sanos usos o prácticas de mercado o bien, cuando a su juicio, la composición de los Activos Objeto de Inversión integrantes de su patrimonio, así lo amerite;

XIII. Formular las observaciones u objeciones que considere convenientes a los intereses del público inversionista, acerca de la valuación de las acciones representativas del capital social de sociedades de inversión;

XIV. Suspender el servicio de valuación respecto de alguna sociedad de inversión, cuando a su juicio exista conflicto de intereses entre ésta y la sociedad valuadora, y

XV. Ejercer las demás facultades que se le atribuyen en este ordenamiento legal y las que le son aplicables supletoriamente.

Los procedimientos de autorización, registro, inspección y vigilancia, investigación, amonestación, imposición de multas administrativas, remoción, veto e inhabilitación, intervención, así como de suspensión, revocación y cancelación de autorizaciones y registro, a que se refiere esta Ley, son de orden público.

La facultad de la Comisión para imponer las sanciones de carácter administrativo previstas en esta Ley, caducará en un plazo de tres años, contado a partir de la realización de la infracción. El plazo de caducidad establecido en este párrafo se interrumpirá al iniciarse los procedimientos relativos.

ARTICULO 81. Cuando en virtud de la inspección y vigilancia que realice la Comisión, resulte que una sociedad de inversión o alguna de las personas que presten los servicios señalados en el artículo 33 de esta Ley, se encuentran en cualquiera de los supuestos contenidos en la fracción V del artículo 80 anterior, dicha Comisión, atendiendo a las irregularidades observadas, podrá ejercer las facultades consignadas en las fracciones I a IV del artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, siendo aplicable a la intervención que, en su caso, determine, lo prescrito en los artículos 48 de dicho ordenamiento y 16, fracción III de la Ley de la Comisión.

Capítulo Décimo De la Revocación de las Autorizaciones y de las Sanciones

ARTICULO 82. La Comisión, oyendo previamente a la sociedad de inversión interesada, podrá declarar revocada la autorización en los siguientes casos:

I. Si la sociedad respectiva no presenta a la aprobación de la propia Comisión el testimonio de la escritura constitutiva, dentro de los tres meses siguientes de otorgada la autorización o si no inicia sus operaciones, previa la inscripción de las acciones representativas de su capital en el Registro Nacional y obtiene la aprobación de los documentos necesarios para iniciar dichas operaciones, dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de su escritura constitutiva, o si al iniciar sus operaciones no está totalmente pagado el capital mínimo a que se refiere la fracción III del artículo 12;

Los plazos establecidos por esta fracción, podrán ser ampliados con motivo fundamentado, por la Comisión;

II. Si opera con un capital inferior al mínimo legal y no lo reconstituye dentro del plazo que fije la citada Comisión;

III. Si infringe lo establecido por la fracción IX del artículo 12 o si la sociedad establece relaciones evidentes de dependencia con las personas mencionadas en dicha fracción;

IV. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones de la Comisión, la sociedad excede los porcentajes máximos de inversión o no mantiene los mínimos previstos por las disposiciones de carácter general que deriven de esta Ley o del prospecto de información al público inversionista; si efectúa operaciones distintas a las permitidas por esta Ley, o bien, si a juicio de dicha Comisión, no cumple adecuadamente con las funciones para las que fue autorizada por mantener una situación de escaso incremento en sus operaciones;

V. Cuando por causas imputables a la sociedad no aparezcan debida y oportunamente registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado;

VI. Si la sociedad reiteradamente omite proporcionar la información a que está obligada de acuerdo a esta Ley o las disposiciones de carácter general derivadas de la misma, y

VII. Si es declarada en concurso mercantil, entra en un procedimiento de disolución y liquidación, salvo que declarado el concurso éste se dé por terminado por convenio concursal y la Comisión resuelva que continúe la operación de la sociedad de inversión de que se trate.

ARTICULO 83. La Comisión podrá revocar la autorización a las sociedades a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, previa audiencia del interesado, cuando a su juicio:

I. Incurran en infracciones graves o reiteradas a lo dispuesto en esta Ley, la Ley del Mercado de Valores, o las disposiciones de carácter general que deriven de ambos ordenamientos;

II. Desempeñen las actividades propias de su objeto en forma inadecuada o bien, ofrezcan servicios distintos de los previstos en la autorización otorgada conforme a lo establecido en el artículo 33 de esta Ley;

III. Proporcionen a la Comisión información falsa;

IV. Intervengan en operaciones que no se apeguen a las sanas prácticas del mercado de valores;

V. Incumplan reiteradamente, a pesar de las observaciones de la Comisión, lo señalado en el prospecto de información al público inversionista de las sociedades de inversión a las que presten sus servicios;

VI. Falten por causa que les sea imputable al cumplimiento de las obligaciones contratadas, y

VII. Si son declaradas en concurso mercantil, entran en un procedimiento de disolución y liquidación, salvo que declarado el concurso éste se dé por terminado por convenio concursal y la Comisión resuelva que continúe la operación de la sociedad de que se trate.

ARTICULO 84. Las infracciones a esta Ley o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven, serán sancionadas con multa que impondrá administrativamente la Comisión a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal cuando se realice la infracción, siempre que la presente Ley no disponga otra forma de sanción.

La reincidencia se podrá sancionar con multa cuyo importe sea equivalente hasta el doble de la prevista originalmente.

En el caso de personas morales, estas multas podrán ser impuestas tanto a dichas personas como a sus administradores, funcionarios, empleados o apoderados que sean responsables de la infracción.

Para la imposición de las multas correspondientes, la Comisión deberá oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta los antecedentes personales y condición económica del mismo, así como la naturaleza y gravedad de la infracción. Atendiendo a las circunstancias de cada caso, la citada Comisión podrá además amonestar al infractor, o bien solamente amonestarlo.

En protección del interés público, la Comisión podrá divulgar las sanciones que al efecto imponga por infracciones a esta Ley, una vez que dichas resoluciones hayan quedado firmes o sean cosa juzgada, señalando exclusivamente la persona sancionada, el precepto infringido y la sanción.

Las multas que la citada Comisión imponga deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación. Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los mismos términos que establece el Código Fiscal de la Federación para estos casos.

Las sanciones administrativas a que se refiere esta Ley, no afectarán el procedimiento penal que, en su caso, corresponda.

ARTICULO 85. Las infracciones que consistan en realizar operaciones prohibidas o no autorizadas, o en exceder los porcentajes máximos o en no mantener los mínimos previstos por las disposiciones de carácter general que deriven de esta Ley, o bien, por los prospectos de información al público inversionista respectivos, serán sancionadas con multa de 100 a 10,000 días de salario.

Las multas a que se refiere este capítulo, previa audiencia, serán impuestas a la sociedad operadora de sociedades de inversión, distribuidora y valuadora de acciones de sociedades de inversión o demás personas que resulten responsables de las infracciones.

ARTICULO 86. Las infracciones a que se refiere este artículo se sancionarán como sigue:

I. Multa de 2,000 a 4,000 días de salario, a la persona que infrinja lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 11 de esta Ley, sin perjuicio de la intervención administrativa a que se refiere el mismo precepto;

II. Pérdida de la participación de capital en beneficio de la Nación, cuando se infrinja lo dispuesto en los artículos 12, fracción IX y 37 de esta Ley;

III. Multa de 100 a 10,000 días de salario, al que resulte responsable por causas que le sean imputables, cuando se exceda el límite de tenencia accionaria permitido de conformidad con el artículo 14 de esta Ley, conforme a la valuación que de esas mismas acciones se haya practicado en la fecha de su adquisición, así como multa por la cantidad equivalente al precio actualizado de valuación de las acciones, cuando se adquieran en contravención de lo dispuesto en el artículo 52 de este ordenamiento. Sin perjuicio de la multa establecida en esta fracción, las acciones indebidamente adquiridas deberán liquidarse en el plazo de treinta días a partir de su adquisición, vencido el cual, si no se ha efectuado la venta, la Comisión ordenará la disminución del capital necesaria para amortizar dichas acciones al precio de valuación vigente en la fecha de pago y el procedimiento para su pago;

IV. Multa de 2,000 a 4,000 días de salario, a la sociedad operadora de sociedades de inversión o valuadora de acciones de sociedades de inversión, que infrinja lo establecido en el artículo 46 de esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad exigible en los términos del artículo 53 del presente ordenamiento;

V. Multa de 4,000 a 20,000 días de salario, a las sociedades operadoras de sociedades de inversión y a las personas que presten servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión, que incumplan lo señalado en los prospectos de información al público inversionista;

VI. Multa de 2,500 a 5,000 días de salario, a las sociedades a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, que incurran en alguno de los supuestos establecidos por las fracciones III, IV y VI del artículo 82 de la presente Ley;

VII. Multa de 2,500 a 5,000 días de salario, a las sociedades operadoras de sociedades de inversión, los auditores de éstas y las personas que presten servicios contables y administrativos a las sociedades de inversión, que falseen, oculten, omitan o disimulen los registros contables y estados financieros de dichas sociedades, independientemente de las responsabilidades civiles o penales en que incurran;

VIII. Multa de 2,000 a 4,000 días de salario, a las sociedades operadoras de sociedades de inversión y distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, que infrinjan lo dispuesto en la fracción VII del artículo 80 de esta Ley;

IX. Multa de 100 a 10,000 días de salario, a las sociedades referidas en el artículo 33 de esta Ley, que omitan proporcionar en tiempo y forma la información a que están obligadas de acuerdo a la presente Ley o las disposiciones administrativas aplicables derivadas de la misma, o ésta sea falsa;

X. Multa de 10,000 a 100,000 días de salario, a las personas que realicen actos de los reservados por este ordenamiento legal a las sociedades de inversión, operadoras de sociedades de inversión o distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, sin que para ello se cuente con la autorización correspondiente en los términos de la presente Ley;

XI. Multa de 1,000 a 50,000 días de salario, a las personas que desempeñen funciones directivas, empleos, cargos o comisiones en una sociedad de inversión o sociedad operadora de sociedades de inversión, que dispongan de los activos integrantes del patrimonio de la sociedad de inversión

a la que pertenezcan, aplicándolos a fines distintos a los que se prevean en el prospecto de información al público inversionista;

XII. Multa de 1,000 a 50,000 días de salario, a los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados, apoderados para celebrar operaciones con el público, comisarios o auditores externos de una sociedad de inversión, sociedad operadora de sociedades de inversión o sociedad distribuidora que omitan registrar en los términos del artículo 76 de esta Ley, las operaciones efectuadas por la sociedad de inversión de que se trate, o alteren dichos registros, y

XIII. Multa de 100 a 3,000 días de salario, a los infractores de cualquiera otra disposición de esta Ley o de las disposiciones de carácter general que de ella deriven, que no tengan sanción especialmente señalada en este ordenamiento.

ARTICULO 87. El cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones de carácter general que de ella deriven es de interés general y orden público.

Contra los actos a que se refieren los artículos 82 a 86 de esta Ley, los afectados podrán acudir en defensa de sus intereses, interponiendo recurso de revocación, mismo que deberá presentarse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que sean notificados del acto o actos que se reclaman, sin que ello suspenda tales actos.

El recurso señalado deberá interponerse ante la Junta de Gobierno de la Comisión, cuando la sanción haya sido emitida por ese cuerpo colegiado o por el Presidente de la Comisión, o ante este último cuando se trate de sanciones impuestas por otros servidores públicos de ese Organismo. El escrito en que la parte afectada interponga el recurso, deberá contener la descripción del acto impugnado y de los agravios que el mismo cause, acompañando las pruebas que al efecto se juzguen convenientes.

Cuando no se señale el acto impugnado o no se expresen agravios, la autoridad competente desechará por improcedente el recurso interpuesto. Si se omitieron las pruebas se tendrán por no ofrecidas.

La resolución del recurso de revocación podrá desechar, confirmar, revocar, o mandar reponer por uno nuevo que lo sustituya, el acto impugnado y deberá ser emitida en un plazo que no exceda a los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha en que se interpuso el recurso, cuando deba ser resuelto por el Presidente de la Comisión, ni a los sesenta días hábiles cuando se trate de recursos que sean competencia de la Junta de Gobierno.

El recurso de revocación establecido en este precepto deberá agotarse por el interesado, previamente a la interposición de cualquier otro medio de defensa legal.

ARTICULO 88. Serán sancionadas con prisión de cinco a quince años las personas que realicen actos de los reservados por este ordenamiento legal a las sociedades de inversión, operadoras de sociedades de inversión o distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, sin que para ello se cuente con la autorización correspondiente en los términos de la presente Ley.

Igual pena será aplicable a las personas que constituyan o actúen en el desempeño de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuyo objeto sea invertir o administrar cualquier clase de valores, ofreciendo a persona indeterminada participar de las ganancias o pérdidas producto de la adquisición y, en su caso, enajenación de los valores objeto de inversión o administración. Se considerará que se está en presencia de persona indeterminada, cuando al constituir el fideicomiso o celebrar el mandato o comisión, las personas que participen no se encuentren plenamente identificadas al momento de celebrar el contrato respectivo y, en su caso, se permita la adhesión de terceros una vez constituidos o celebrados.

La sanción a que se refiere el párrafo anterior, no será aplicable a las personas que de conformidad con las leyes aplicables, actúen en el desempeño de fideicomisos, mandatos o comisiones que tengan por objeto la emisión, adquisición, enajenación o administración de valores, títulos y documentos, ajustándose para ello a los términos y condiciones que al efecto establezcan las leyes.

ARTICULO 89. Serán sancionadas con prisión de cinco a quince años las personas que desempeñen funciones directivas, empleos, cargos o comisiones en una sociedad de inversión o sociedad operadora de sociedades de inversión, que dispongan de los activos integrantes del patrimonio de la sociedad de inversión a la que pertenezcan, aplicándolos a fines distintos a los que se prevean en el prospecto de información al público inversionista.

ARTICULO 90. Serán sancionados con prisión de dos a diez años los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados, apoderados para celebrar operaciones con el público, comisarios o auditores externos de una sociedad de inversión o sociedad operadora de sociedades de inversión que intencionalmente:

I. Omitan registrar en los términos del artículo 76 de esta Ley, las operaciones efectuadas por la sociedad de inversión de que se trate, o que mediante maniobras alteren o permitan que se alteren los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas de orden o resultados, y

II. Inscriban u ordenen que se inscriban datos falsos en la contabilidad o que proporcionen o permitan que se incluyan datos falsos en los documentos o informes que deban proporcionarse a la Comisión.

ARTICULO 91. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión, dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las sociedades de inversión, en las sociedades operadoras de sociedades de inversión y en las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, actos u operaciones, que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, incluyendo la obligación de presentar a la Secretaría, por conducto de la citada Comisión, reportes sobre las operaciones y servicios que realicen con sus accionistas, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan.

Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de los accionistas de las sociedades de inversión, que consideren sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones e instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con las actividades de éstos; las plazas en que operen, y las prácticas comerciales y bursátiles que priven en las mismas; la debida y oportuna capacitación de su personal; y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias sociedades de inversión. El cumplimiento de la obligación de presentar reportes previstos en tales disposiciones no implicará transgresión a lo establecido en el artículo 55 de esta Ley.

Las disposiciones señaladas deberán ser observadas por las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, así como por los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, directivos, apoderados para celebrar operaciones con el público y empleados de las citadas entidades; la violación de dichas disposiciones será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa de 200 a 100,000 días de salario o del diez al cien por ciento del monto de la operación de que se trate, conforme al procedimiento establecido en el artículo 84 de esta Ley.

Las mencionadas multas podrán ser impuestas tanto a las sociedades operadoras de sociedades de inversión y las sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, como a las personas físicas y morales que en razón de sus actos hayan ocasionado o intervenido para que dichos intermediarios incurrieran en la irregularidad o resulten responsables de la misma.

Las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión y los miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, directivos, apoderados para celebrar operaciones con el público y empleados de las entidades a que se refiere este artículo, deberán abstenerse de dar noticia o información de las operaciones previstas en el mismo a personas, dependencias o entidades, distintas de las autoridades competentes expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

ARTICULO 92. Los delitos previstos en esta Ley únicamente se perseguirán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la Comisión, o bien, por querella del ofendido.

ARTICULO 93. La acción penal en los delitos previstos en esta Ley, prescribirá en tres años contados a partir de la comisión del delito.

Capítulo Undécimo Disposiciones Finales

ARTICULO 94. Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, éste no podrá exceder de cuatro meses para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponde. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad competente que deba resolver, conforme al reglamento interior o acuerdo delegatorio respectivo; igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado, se fincará, en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable.

Los requisitos de presentación y plazos, así como otra información relevante aplicables a las promociones que realicen las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras y valuadoras de acciones de sociedades de inversión, deberán precisarse en disposiciones de carácter general.

Cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que dentro de un término que no podrá ser menor de diez días hábiles subsane la omisión. Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, dicha prevención deberá hacerse a más tardar dentro de la mitad del plazo de respuesta de la autoridad y cuando éste no sea expreso, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación del escrito inicial.

Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el término señalado, las autoridades desecharán el escrito inicial.

Si las autoridades no hacen el requerimiento de información dentro del plazo correspondiente, no podrán rechazar el escrito inicial por incompleto.

Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que las autoridades contesten empezarán a correr el día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente.

ARTICULO 95. El plazo a que se refiere el artículo anterior no será aplicable a las promociones donde por disposición expresa de esta Ley las autoridades administrativas deban escuchar la opinión de otras autoridades, además de aquellas relacionadas con las autoridades relativas a la constitución y liquidación de las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades distribuidoras y valuadoras de acciones de sociedades de inversión. En estos casos no podrá exceder de ocho meses el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda, siendo aplicables las demás reglas a que se refiere el artículo 94 de esta Ley.

ARTICULO 96. Las autoridades administrativas competentes, a solicitud de parte interesada, podrán ampliar los plazos establecidos en la presente Ley, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la mitad del plazo previsto originalmente en las disposiciones aplicables, cuando así lo exija el asunto y no tengan conocimiento de que se perjudica a terceros en sus derechos.

ARTICULO 97. No se les aplicará lo establecido en los artículos 94 a 96 a las autoridades administrativas en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión, inspección y vigilancia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto por el que se expide la Ley de Sociedades de Inversión, entrará en vigor seis meses después de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, con excepción de los artículos 61 y sexto transitorio, cuya vigencia iniciará a partir de la publicación respectiva, para los efectos establecidos en este último artículo.

Lo dispuesto en los artículos 94 a 97 entrará en vigor el 1 de enero del año 2002.

SEGUNDO. A la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley de Sociedades de Inversión publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 14 de enero de 1985, y se derogan los incisos m) y n) del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.

TERCERO. Las sociedades de inversión que tengan dividido su capital fijo en dos o más clases de acciones, contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto, para convertir dichas acciones en una sola serie accionaria, sin que para ello requieran del acuerdo de asamblea de accionistas, así como para realizar el canje respectivo conforme a lo siguiente:

I. El canje se formalizará a petición que realice la sociedad de inversión, a la institución para el depósito de valores en que se mantengan depositadas las acciones objeto del canje;

II. Las acciones que resulten del canje, deberán representar la misma participación del capital pagado que las acciones canjeadas;

III. No se considerará que existe enajenación de acciones, para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, siempre y cuando el canje a que se refiere este artículo no implique cambio del titular de las acciones, y

IV. Para efectos de la fracción anterior, el costo promedio de las acciones que resulten del canje, será el que corresponda a las acciones canjeadas.

CUARTO. Las sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades valuadoras previamente autorizadas, deberán cumplir con lo establecido en este Decreto, una vez iniciada su vigencia.

Las sociedades de inversión que a la entrada en vigor de este Decreto, efectúen modificaciones a sus prospectos de información al público inversionista, a fin de ajustarse a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Sociedades de Inversión que se expide mediante el presente Decreto, podrán dar a conocer dichas modificaciones, por conducto de su sociedad operadora o de las personas que les presten servicios de distribución de acciones y a través de medios de comunicación masiva, sin necesidad de cumplir con alguna otra formalidad.

QUINTO. En tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dicta las disposiciones de carácter general a que se refiere la Ley de Sociedades de Inversión que se expide mediante el presente Decreto, seguirán aplicándose las expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

SEXTO. Los nombramientos de consejeros, director general y directivos con la jerarquía inmediata inferior a la de este último, de las sociedades de inversión y operadoras de sociedades de inversión, que a la fecha de publicación en el **Diario Oficial de la Federación** del presente Decreto, se encuentren en proceso de aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Sociedades de Inversión que se expide mediante este Decreto, contando esas sociedades con un plazo de treinta días hábiles a partir de dicha fecha, para manifestar a la citada Comisión que han llevado a cabo la verificación a que se refiere dicho artículo.

México, D.F., a 28 de abril de 2001.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Dip. **Ricardo Francisco García Cervantes**, Presidente.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretario.- Dip. **Manuel Medellín Milán**, Secretario.- Rúbricas**"**.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

DECRETO por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE EXPIDE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la siguiente

LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único

Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto:

I. Regular, promover y facilitar el servicio de captación de recursos y colocación de crédito por parte de las entidades de ahorro y crédito popular; la organización y funcionamiento de las Federaciones y Confederaciones en que aquéllas voluntariamente se agrupen;

II. Regular las actividades y operaciones que las entidades de ahorro y crédito popular podrán realizar con el propósito de lograr su sano y equilibrado desarrollo;

III. Proteger los intereses de quienes celebren operaciones con dichas entidades, y

IV. Establecer los términos en que las autoridades financieras ejercerán la supervisión del Sistema de Ahorro y Crédito Popular.

Esta Ley es de orden público y observancia general en todo el territorio nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el órgano competente para interpretar a efectos administrativos los preceptos de la presente Ley y, en general, para todo cuanto se refiera a los sujetos de la misma.

Artículo 2o.- El Sistema de Ahorro y Crédito Popular estará integrado por las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las sociedades financieras populares que sean dictaminadas favorablemente por una Federación y autorizadas para operar como entidades de ahorro y crédito popular, en los términos de esta Ley; por las Federaciones que estén autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ejercer las funciones de supervisión auxiliar de las entidades referidas, así como por las Confederaciones autorizadas por la propia Comisión para que administren sus respectivos fondos de protección.

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

III. Entidad, en singular o plural, a las personas autorizadas para que operen como Entidades de Ahorro y Crédito Popular en los términos de esta Ley;
IV. Cooperativa, en singular o plural, a las sociedades constituidas y que operen conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a esta Ley, que tengan por objeto realizar exclusivamente operaciones de ahorro y préstamo;
V. Sociedades Financieras Populares, en plural o singular, a las sociedades anónimas constituidas y que operen conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a esta Ley;
VI. Fondo de Protección, en singular o plural, a los sistemas de protección que se constituyan de conformidad con lo señalado en el Título Tercero de esta Ley, con el propósito de procurar cubrir a los ahorradores sus depósitos de dinero en los términos y con las limitaciones señalados en el mismo.
VII. Organismo de Integración, en singular o plural, a las Federaciones y Confederaciones autorizadas por la Comisión, para ejercer de manera auxiliar la supervisión de las Entidades y para administrar el Fondo de Protección a que se refiere esta Ley, respectivamente;
VIII. Socios, a las personas que participen en el capital social de las Entidades;
IX. Clientes, a las personas físicas y morales que utilizan los servicios que prestan las Sociedades Financieras Populares;
X. Comité Técnico, al comité técnico correspondiente al Fondo de Protección a que se refiere esta Ley;
XI. Comité de Supervisión, al órgano de las Federaciones encargado de ejercer la supervisión auxiliar de las Entidades en términos de esta Ley, y
XII. Nivel de Operaciones, al nivel de operaciones asignado, de entre cuatro niveles, por la Comisión a la Entidad, de conformidad con esta Ley y con las reglas de carácter general que emita la propia Comisión.

Artículo 4o.- Las Entidades tendrán por objeto el ahorro y crédito popular; facilitar a sus miembros el acceso al crédito; apoyar el financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y, en general, propiciar la solidaridad, la superación económica y social, y el bienestar de sus miembros y de las comunidades en que operan, sobre bases educativas, formativas y del esfuerzo individual y colectivo.

Se entenderá como ahorro y crédito popular la captación de recursos en los términos de esta Ley provenientes de los Socios o Clientes de las Entidades, mediante actos causantes de pasivo directo o, en su caso contingente, quedando la Entidad obligada a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados, así como la colocación de dichos recursos hecha entre los Socios o Clientes.

Artículo 5o.- Las operaciones que realicen las Entidades, únicamente estarán respaldadas por los Fondos de Protección con los límites y en los términos previstos en el Título Tercero de esta Ley, por lo que el Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las Entidades ni los Organismos de Integración, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus Socios o Clientes.

Artículo 6o.- Las palabras Entidad de Ahorro y Crédito Popular, Sociedad de Ahorro y Préstamo, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Sociedad Financiera Popular, caja popular, caja de ahorro u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo podrán ser usadas en la denominación de las Entidades que se autoricen para operar en los términos de esta Ley. Se exceptúa de la aplicación de lo anterior, a las Federaciones y Confederaciones autorizadas en los términos de esta Ley.

Las cajas de ahorro a que hace mención la legislación laboral, no estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 7o.- Para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, se considerará a las Entidades como intermediarios financieros, por lo que queda prohibida a cualquiera otra persona física o moral distintas a las señaladas en la citada fracción I del artículo 103, la captación de recursos del público de manera directa o indirecta en el territorio nacional, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, obligándose a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

Artículo 8o.- En lo no previsto por la presente Ley, a los sujetos de la misma se les aplicarán en el orden siguiente:

I. La Ley General de Sociedades Cooperativas, únicamente para las Cooperativas y en todo lo que no se oponga a la presente Ley;
II. La legislación mercantil;
III. El Código Civil Federal;
IV. Los usos y prácticas imperantes entre las Entidades;
V. El Código Fiscal de la Federación para efectos de las notificaciones a que se refiere esta Ley, y

VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en sus Títulos Tercero A, referente a la mejora regulatoria, y Sexto, relativo al recurso de revisión.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES
Capítulo I
Disposiciones Comunes

Artículo 9o.- Se requerirá dictamen favorable de una Federación y autorización de la Comisión, para la organización y funcionamiento de las Entidades. Por su propia naturaleza las autorizaciones serán intransmisibles.

Para obtener la autorización de la Comisión para operar como Entidad, las solicitudes deberán presentarse ante una Federación, quien elaborará un dictamen respecto de la procedencia de la solicitud.

La Comisión resolverá las solicitudes de autorización que se acompañen del dictamen favorable de la Federación respectiva. Las Federaciones remitirán a la Comisión las solicitudes, acompañando su dictamen y a su vez la Comisión entregará su resolución a través de dichas Federaciones.

Tratándose de aquellas sociedades que opten por el régimen de no afiliadas, podrán acudir directamente ante la Comisión, a efecto de que ésta designe a la Federación que se encargará de emitir el dictamen correspondiente, y en caso de ser favorable, encargarse de su supervisión auxiliar, continuando con el procedimiento señalado en el párrafo anterior.

En caso de que la sociedad reciba un dictamen desfavorable de la Federación, podrá solicitar la revisión de éste ante la misma Federación. De ratificarse el dictamen desfavorable, la sociedad podrá solicitar la revisión de su solicitud ante la Comisión quien deberá resolver sobre la misma. Las sociedades contarán con un plazo de quince días hábiles a partir de la fecha en que se les notifique la ratificación del dictamen desfavorable, para presentar directamente a la Comisión dicha solicitud de revisión.

Las Federaciones contarán con un plazo de noventa días naturales para elaborar su dictamen y la Comisión contará con un plazo de ciento veinte días naturales para emitir resolución respecto de las solicitudes de autorización que le hayan sido presentadas. Dichos plazos comenzarán a contar, respectivamente, a partir de la fecha en que sean presentadas las solicitudes a las Federaciones y recibidas éstas por la Comisión con toda la información y documentación a que se refiere el artículo 10.

Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido afirmativo la solicitud de autorización acompañada por el dictamen favorable de una Federación, si no comunica lo contrario a la sociedad, a través de la Federación correspondiente, dentro del periodo mencionado. Asimismo, se entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo la solicitud de autorización presentada directamente por una sociedad que hubiera obtenido un dictamen desfavorable, si no comunica lo contrario a la sociedad dentro del periodo mencionado.

Cualquier requerimiento de información o documentación que realice la Comisión a la Federación o sociedad, suspenderá el cómputo del plazo con el que cuenta la Comisión para emitir su resolución. Dicho plazo comenzará a computarse nuevamente a partir de que se reciba la información o documentación requerida.

Las autorizaciones, así como las modificaciones a las mismas deberán publicarse en el **Diario Oficial de la Federación** y en dos periódicos de amplia circulación del ámbito geográfico en que vaya a operar. Las Entidades a las que se asigne el Nivel de Operaciones I estarán exceptuadas de la publicación en los periódicos de amplia circulación.

La Federación en su dictamen propondrá a la Comisión el Nivel de Operaciones que podrá asignarse, en su caso, a la sociedad. Cuando la Comisión otorgue la autorización referida, clasificará a la Entidad asignándole uno de entre cuatro niveles de operación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de esta Ley. Para que la Entidad cambie de Nivel de Operaciones se requerirá de la aprobación de la Comisión, previo dictamen de la Federación con quien tenga celebrado el contrato de afiliación o supervisión auxiliar.

Artículo 10o.- La solicitud de autorización deberá acompañarse de lo siguiente:

I. El proyecto de estatutos o bases constitutivas, que deberán apegarse a las disposiciones y mecanismos que la presente Ley establece y en el que deberá indicarse el número de socios;

II. Las recomendaciones de dos Entidades;

III. El programa general de operación, que permita a la Comisión evaluar si la sociedad podrá cumplir adecuadamente con su objeto. Dicho programa deberá contener, por lo menos:

   a) Las regiones y plazas en las que pretenda operar;

   b) Un estudio de viabilidad financiera y organizacional de la sociedad;

   c) Las bases para la aplicación de excedentes o dividendos, y en su caso, para su distribución, y

d) Las bases relativas a su organización y control interno.

IV. La relación de socios fundadores y monto de su aportación, así como de probables administradores, principales directivos y personas que integrarán los órganos a que se refiere esta Ley;

V. La indicación del capital social mínimo fijo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de esta Ley, así como la propuesta de Nivel de Operaciones que le asignará la Comisión;

VI. El acreditar la solvencia económica de la sociedad, debiendo comprobar fehacientemente su capacidad para cumplir con la regulación prudencial que establece esta Ley de acuerdo al Nivel de Operaciones que se proponga;

VII. El acreditar la solvencia moral y económica de los principales funcionarios de conformidad con el Nivel de Operaciones que se proponga y las reglas de carácter general que emita la Comisión;

VIII. El proyecto de contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, que en su caso, celebrará la sociedad con una Federación, incluyendo la aceptación por parte de ésta para celebrarlo. Los citados contratos deberán contemplar la estipulación relativa a la aplicación de penas convencionales por parte de las Federaciones respectivas;

IX. La aceptación de una Confederación para que la Entidad participe en el Fondo de Protección administrado por aquélla, o en su caso, la información sobre el sistema de protección a los ahorradores a que se refiere el último párrafo del artículo 105, y

X. La demás documentación e información que a juicio de la Federación se requiera para tal efecto, así como la que en su caso establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

Cualquier modificación a la escritura constitutiva de la Entidad y a sus estatutos o bases constitutivas, deberá ser sometida al previo dictamen favorable de la Federación correspondiente, en términos del contrato de afiliación o supervisión auxiliar, según sea el caso. Una vez obtenido, en su caso, el dictamen favorable de la Federación, lo remitirá junto con la solicitud a la aprobación de la Comisión.

La escritura o sus reformas, aprobada por la Comisión, deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio del domicilio social correspondiente, debiendo exhibirse el testimonio respectivo dentro de un término de ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada.

En ningún momento la denominación de la Entidad podrá formarse con el nombre, palabras, siglas o símbolos que la identifique con socios o partidos políticos.

Artículo 11.- La admisión y retiro de Socios, se realizará de conformidad con lo dispuesto en los estatutos o bases constitutivas de la Entidad, informándose en todo caso al consejo de administración.

Las Cooperativas en sus estatutos o bases constitutivas deberán prever que los Socios podrán solicitar su retiro de la Entidad en cualquier tiempo, siempre y cuando no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente, así como que dichos Socios no podrán solicitar el retiro de sus aportaciones si con ello la Cooperativa incumple con las disposiciones aplicables relativas al capital social mínimo fijo o al índice de capitalización que deba mantener.

Artículo 12.- Las Entidades deberán constituir los fondos sociales siguientes:

I. De reserva, y

II. De obra social.

Las Cooperativas además deberán constituir un fondo de educación cooperativa.

Artículo 13.- El fondo de reserva deberá constituirse por lo menos con el diez por ciento de los excedentes tratándose de Cooperativas, o de las utilidades por lo que se refiere a las Sociedades Financieras Populares, que se obtengan en cada ejercicio social, hasta alcanzar un monto equivalente a, por lo menos, el diez por ciento del capital contable de la Entidad.

Dicho fondo deberá estar invertido en valores gubernamentales de amplia liquidez y sólo podrá ser afectado cuando lo requiera la Entidad para afrontar pérdidas o restituir, en su caso, el capital de trabajo, debiendo ser reintegrado en ejercicios subsecuentes con cargo a los excedentes o utilidades. Se entiende por capital de trabajo a la diferencia entre activos y pasivos a plazo menor de un año.

Artículo 14.- El fondo de obra social se constituirá con la aportación anual que resulte de aplicar el porcentaje que sobre los excedentes o utilidades, en su caso, sea determinado por la asamblea general y se aplicará en los términos del artículo siguiente.

El fondo de obra social que se constituya conforme a este artículo, será administrado por el consejo de administración de la Entidad. Dicho consejo deberá elaborar un informe anual sobre la realización de obras sociales, el cual se integrará al informe anual de la Entidad que será hecho del conocimiento de su asamblea y de la Secretaría.

Artículo 15.- El fondo de obra social se destinará a la realización de obras sociales y adicionalmente en el caso de las Cooperativas, podrá destinarse a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de Socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubrirán: gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educativas para los Socios y sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones

de previsión social de naturaleza análoga en los términos que establezcan las bases constitutivas y sus estatutos.

Al inicio de cada ejercicio la asamblea ordinaria de la Entidad, fijará las prioridades para la aplicación de este fondo, de conformidad con las perspectivas económicas de la Entidad.

Artículo 16.- Las Entidades contarán, cuando menos, con lo siguiente:

I. Asamblea general;
II. Consejo de administración;
III. Consejo de vigilancia o comisario;
IV. Comité de crédito o su equivalente, y
V. Un director o gerente general.

La Comisión, de acuerdo a los criterios que determine en reglas de carácter general, podrá exceptuar a las Entidades de lo señalado en la fracción IV, dependiendo del Nivel de Operaciones asignado y del índice de capitalización con el que cuenten.

Artículo 17.- La asamblea ordinaria de las Entidades conocerá de todos los asuntos que le corresponda conforme a la ley y a los estatutos sociales o bases constitutivas que las rijan, pero será facultad exclusiva de la asamblea extraordinaria decidir sobre los asuntos siguientes:

I. Aumento o disminución del valor de los certificados de aportación o de las acciones, en su caso;
II. Remoción y sustitución por causas extraordinarias de los miembros del consejo de administración y de vigilancia que deban ser designados por la asamblea;
III. Modificación de estatutos sociales o bases constitutivas, y
IV. Fusión, escisión, transformación o disolución de la Entidad.

Las decisiones de la asamblea extraordinaria serán tomadas por el voto en el mismo sentido del setenta y cinco por ciento de:

a) cuando menos, la mitad más uno de los Socios tratándose de las Cooperativas, y

b) del capital social, en el caso de las Sociedades Financieras Populares.

A las asambleas deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la Federación que la supervise de manera auxiliar.

Será nulo todo acuerdo tomado en asamblea ordinaria o extraordinaria que contraviniendo las sanas prácticas financieras o las condiciones prevalecientes en el mercado, tenga como propósito provocar un deterioro en la condición financiera de la Entidad.

Artículo 18.- El consejo de administración de las Entidades estará integrado por no menos de cinco personas ni más de quince.

Para el caso de las Cooperativas, los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección y deberá ser electo el cincuenta por ciento de los miembros del consejo cada mitad del periodo que en su caso determine la Entidad. En caso de que el consejo esté integrado por un número impar de personas, éstos serán electos de acuerdo a lo que determine la Cooperativa en sus bases constitutivas tomando en consideración lo antes señalado.

Lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará a consejeros que representen personas físicas en las Sociedades Financieras Populares.

Artículo 19.- Las Entidades a través de su asamblea, podrán designar consejeros independientes para que participen en los trabajos del consejo de administración, en igualdad de circunstancias que el resto de los consejeros.

Se entenderá por consejero independiente a la persona que sea ajena a la administración de la Entidad, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión, mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 20.- Los consejeros de la Entidad deberán reunir los requisitos siguientes:

I. Acreditar conocimientos y experiencia en materia financiera y administrativa;
II. No tener alguno de los impedimentos señalados en el artículo siguiente, y
III. Los demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 21.- En ningún caso podrán ser consejeros de Entidades:

I. Las personas que desempeñen simultáneamente otro cargo en la Entidad de que se trate, así como en otras Entidades;
II. Las personas inhabilitadas para ejercer el comercio;
III. Las personas sentenciadas por delitos intencionales patrimoniales;
IV. Las personas que tengan litigio pendiente con la Entidad;

V. Las personas que hayan sido inhabilitadas para ejercer cualquier cargo, comisión o empleo en el servicio público Federal, Estatal o Municipal, en el Sistema Financiero Mexicano, en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular o conforme a esta Ley;

VI. El cónyuge o las personas que tengan parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad hasta el segundo grado, o civil con el director o gerente general de la Entidad, o con alguno de los miembros del consejo de vigilancia o comisario de la misma;

VII. Cualquier persona que celebre con la Entidad, directa o indirectamente, contratos de obras, servicios, suministros o cualquier otro de naturaleza análoga, o que participen en empresas con las que la Entidad, celebre cualquiera de los actos antes señalados, y

VIII. Cualquier persona que desempeñe un cargo público, de elección popular o dirigencia partidista.

Los mismos impedimentos se aplicarán, cuando corresponda, a los casos de Federaciones y Confederaciones.

La Comisión, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá exceptuar a las Entidades del Nivel de Operaciones I, de cumplir con el requisito señalado en la fracción VIII anterior, por lo que se refiere al desempeño de un cargo público.

Artículo 22.- Son facultades y obligaciones indelegables del consejo de administración:

I. Establecer las políticas generales de administración de la Entidad, así como las políticas para otorgamiento de crédito;

II. Acordar la creación de los comités que sean necesarios para el correcto desarrollo de las operaciones de la Entidad;

III. Autorizar los reglamentos que propongan los comités respectivos y los que el propio consejo determine;

IV. Instruir la elaboración y aprobar los manuales de administración y operación, así como los programas de actividades;

V. Autorizar las operaciones que, de acuerdo a los estatutos o bases constitutivas de la Entidad y por su monto o importancia, necesiten tal autorización;

VI. En su caso, aprobar y hacer del conocimiento de la asamblea general los estados financieros del ejercicio;

VII. Informar a la asamblea sobre los resultados de su gestión;

VIII. Atender las observaciones por irregularidades detectadas por el consejo de vigilancia o comisario;

IX. Nombrar al director o gerente general y acordar su remoción, en este último caso previa opinión del consejo de vigilancia, de acuerdo al procedimiento que establezcan los estatutos o bases constitutivas de la Entidad;

X. Otorgar poderes generales o especiales al director o gerente general;

XI. Autorizar los contratos que las Entidades celebren con las empresas o sociedades con las que tengan nexos patrimoniales en los términos de las disposiciones de carácter general que emita la Comisión, o tengan el control administrativo conforme a lo señalado en el artículo 53 fracción I, y

XII. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 23.- El director o gerente general de la Entidad, deberá reunir los requisitos siguientes:

I. Tener conocimientos y experiencia de por lo menos tres años en materia financiera y administrativa, con excepción de las Entidades con Nivel de Operaciones I, en cuyo caso, deberán acreditar conocimientos en materia financiera y administrativa a satisfacción de la Federación;

II. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el artículo 21, y

III. Los demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 24.- Son facultades del director o gerente general:

I. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del consejo de administración y de los comités de la Entidad, y

II. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 25.- El director o gerente general tendrá las siguientes obligaciones:

I. Ejecutar las políticas establecidas por el consejo de administración, por el comité de crédito o su equivalente y los demás comités operativos que se establezcan en la Entidad, actuando en todo momento con apego a los estatutos o bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable;

II. Preparar y proponer el presupuesto de cada ejercicio;

III. Informar mensualmente de la situación financiera de la Entidad al consejo de administración;

IV. Presentar al consejo de administración, para su aprobación, los estados financieros que deban ser aprobados por el mismo;
V. Representar a la Entidad en los actos que determine el consejo de administración;
VI. Aplicar los reglamentos y manuales operativos;
VII. Llevar y mantener actualizados los libros y registros contables y sociales de la Entidad, y
VIII. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 26.- El comité de crédito o su equivalente, o las personas que éstos autoricen al efecto, serán los encargados de analizar, y en su caso, aprobar las solicitudes de crédito que presenten a la Entidad los Socios o Clientes, así como las condiciones en que éstos se otorguen, de acuerdo a las políticas que apruebe el consejo de administración.

Dicho comité estará integrado por no menos de tres personas ni más de siete, que serán designadas y aprobadas por el consejo de administración. Éstos no deberán tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el artículo 21, a excepción de la fracción I, siempre y cuando no exista conflicto de interés.

Artículo 27.- Los miembros del comité de crédito o su equivalente, en su caso, serán removidos de su cargo a propuesta del director o gerente general y/o por acuerdo del consejo de administración.

El consejo de administración emitirá los reglamentos y manuales operativos a los cuales deberá ajustarse el comité de crédito o su equivalente.

Artículo 28.- El consejo de vigilancia o comisario será el encargado de supervisar el funcionamiento interno de la Entidad y el cumplimiento de sus estatutos, políticas, lineamientos y de las disposiciones aplicables. Tratándose del consejo de vigilancia, estará integrado por no menos de tres personas ni más de siete nombradas y removidas por la asamblea general, las cuales no deberán tener alguno de los impedimentos que para ser consejero señala el artículo 21. Las mismas restricciones serán aplicables en el caso del comisario.

Para el caso de las Cooperativas, los consejeros fungirán por un periodo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección y deberá ser electo el cincuenta por ciento de los miembros del consejo cada mitad del periodo que en su caso determine la Entidad. En caso de que el consejo esté integrado por un número impar de personas, éstos serán electos de acuerdo a lo que determine la Cooperativa en sus bases constitutivas tomando en consideración lo antes señalado. Las mismas restricciones serán aplicables en el caso del comisario.

Artículo 29.- Son facultades del consejo de vigilancia o comisario:

I. Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones del consejo de administración;
II. Solicitar al consejo de administración, al director o gerente general o a los comités de la Entidad, la información que requiera para el correcto desempeño de sus funciones;
III. Para las Entidades ubicadas en el Nivel de Operaciones que establezca la Comisión en las reglas de carácter general, solicitar al auditor externo nombrado, la información sobre el desarrollo y resultados de la auditoría;
IV. Convocar a asamblea ordinaria y/o extraordinaria a falta de convocatoria expedida por el consejo de administración;
V. Proponer la remoción del director o gerente general, o en su caso, emitir la opinión a que se refiere la fracción IX del artículo 22, y
VI. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 30.- Son obligaciones del consejo de vigilancia o comisario:

I. Vigilar que los actos de todos los órganos de la Entidad se realicen con apego a los estatutos o bases constitutivas de la misma y a la normatividad aplicable;
II. Presentar a la asamblea un informe anual sobre su gestión y la del consejo de administración, del director o gerente general y de los comités que la Entidad establezca;
III. Informar a la asamblea de la Entidad y al Comité de Supervisión de la Federación sobre las irregularidades detectadas en la operación de los órganos de gobierno de la Entidad;
IV. Supervisar que las observaciones efectuadas se atiendan y las irregularidades detectadas se corrijan;
V. En su caso, recomendar a la asamblea y justificar la aceptación o rechazo de los estados financieros del ejercicio y del informe del consejo de administración, y
VI. Las demás que esta Ley, la asamblea o los estatutos o bases constitutivas de la Entidad determinen.

Artículo 31.- Las Entidades deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario y director o gerente general, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración de la documentación comprobatoria relativa.

En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Entidad de que se trate y bajo protesta de decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refieren el artículo 21.

Las Entidades deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, director o gerente general, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación.

Tratándose de consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, director o gerente general, la Comisión tendrá la facultad de veto.

Artículo 32.- La Comisión expedirá las reglas de carácter general para el funcionamiento de las Entidades, en las que se determinarán las operaciones activas, pasivas y de servicios que éstas podrán realizar de acuerdo al Nivel de Operaciones que les sea asignado, así como las características de dichas operaciones y los requisitos para celebrarlas. Las reglas generales que establezcan los criterios para asignar el Nivel de Operaciones de cada Entidad deberán considerar entre otros elementos, el monto de activos y pasivos de la Entidad; el número de Socios o Clientes; el ámbito geográfico de las operaciones; y la capacidad técnica y operativa de la Entidad.

Las Entidades que se ubiquen en el Nivel de Operaciones IV que establezca la Comisión, estarán obligadas a llevar a cabo un programa de auditoría legal en los términos que indique la propia Comisión mediante disposiciones de carácter general, debiendo proporcionar a la Federación el dictamen de su auditor legal externo.

Artículo 33.- Las Entidades no podrán celebrar operaciones en las que se pacten condiciones y términos que se aparten significativamente de las prácticas del mercado que de manera general aplican las Entidades del mismo tipo, ni tampoco podrán otorgar créditos distintos de los que correspondan a su objeto social o al Nivel de Operaciones que les hubiere asignado la Comisión.

Los intereses de las operaciones pasivas a cargo de las Entidades que no tengan fecha de vencimiento, y que en el transcurso de cinco años, contados a partir del último movimiento del Socio o Cliente, no hayan tenido movimientos por retiros o depósitos y con un saldo que no exceda del equivalente a una vez el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, podrán ser abonados en una cuenta global que llevará la Entidad para ese efecto.

Cumplido el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, cuando el Socio o Cliente se presente para actualizar su estado de cuenta o realice un depósito o retiro, la Entidad deberá retirar de la cuenta global los intereses devengados, a efecto de abonarlos a su cuenta y de acuerdo con la parte proporcional que le corresponda, actualizando el saldo a la fecha.

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de cinco años contados a partir de que estos últimos se abonen en la cuenta global, cuyo importe conjunto por operación no sea superior al equivalente de trescientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la Entidad.

Los contratos en los que se hagan constar los créditos que otorguen las Entidades, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por el consejo de administración de la Entidad, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.

El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los deudores.

Artículo 34.- Las Entidades en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al Cliente, depositante, deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de los recursos ahorrados o para intervenir en la operación o servicio, salvo en los casos en que proporcionen información a las Federaciones en términos de esta Ley, así como en los casos previstos en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 35.- Las Entidades requerirán del acuerdo de, por lo menos, las tres cuartas partes de los consejeros que estén presentes en las sesiones del consejo de administración, para aprobar la celebración de operaciones con personas relacionadas.

Serán operaciones con personas relacionadas, las celebradas por las Entidades en las que resulten o puedan resultar deudores de las mismas, las personas que se indican a continuación:

I. Las personas físicas o morales que posean directa o indirectamente el control del dos por ciento o más de los títulos representativos del capital de la Entidad de que se trate, de acuerdo al registro de Socios más reciente;
II. Los miembros del consejo de administración de la Entidad;
III. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco con las personas señaladas en las fracciones anteriores;
IV. Las personas distintas a los funcionarios o empleados que con su firma puedan obligar a la Entidad;
V. Las personas morales, así como los consejeros y funcionarios de éstas, en las que la Entidad posea directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital, y
VI. Las personas morales en las que cualesquiera de las personas señaladas en las fracciones anteriores, así como los funcionarios, comisarios, los ascendientes y descendientes en primer grado, así como sus cónyuges, posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por:

a) Parentesco.- al que existe por consanguinidad y afinidad en línea recta en primer grado, y por consanguinidad y afinidad en línea colateral en segundo grado o civil.

b) Funcionarios.- al director o gerente general y a los funcionarios que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de aquél.

Las operaciones con personas relacionadas cuyo importe en su conjunto no exceda de cien mil unidades de inversión o el uno por ciento del capital social pagado de la Entidad, el que sea menor, a otorgarse en favor de una misma persona física o moral o grupo de personas físicas o morales que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes para una Entidad, no requerirán de la aprobación del consejo de administración, sin embargo, deberán hacerse de su conocimiento y poner a su disposición toda la información relativa a las mismas.

La suma total de los montos dispuestos y las líneas de crédito irrevocables contratadas de las operaciones con personas relacionadas, no podrá exceder del cincuenta por ciento del capital social pagado incluidas las reservas de capital y los remanentes o utilidades acumulados de la Entidad.

La Comisión emitirá disposiciones de carácter general para establecer la forma y términos en que deberán ser aprobadas las operaciones con personas relacionadas.

Artículo 36.- Las Entidades, dependiendo del Nivel de Operaciones que les sea asignado, podrán realizar las operaciones siguientes:

I. Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y retirables en días preestablecidos;
Las anteriores operaciones se podrán realizar con menores de edad, siempre y cuando éstos actúen a través de sus representantes legales en términos de la legislación común aplicable;
II. Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, fideicomisos de fomento y organismos e instituciones financieras internacionales, así como de sus proveedores nacionales y extranjeros;
III. Otorgar a las Entidades afiliadas a su Federación, previa aprobación del consejo de administración de ésta y con cargo a sus excedentes de capital, préstamos de liquidez, mismos que deberán descontar de su capital, debiendo sujetarse a los requisitos y condiciones que mediante reglas de carácter general establezca la Comisión;
IV. Recibir créditos de las Federaciones a las que se encuentren afiliadas, en términos del artículo 52, fracción III;
V. Celebrar, como arrendatarias, contratos de arrendamiento financiero sobre equipos de cómputo, transporte y demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social, y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos;
VI. Celebrar como arrendatarias, contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles para la consecución de su objeto;
VII. Prestar su garantía en términos del artículo 92 de esta Ley;
VIII. Recibir o emitir órdenes de pago y transferencias en moneda nacional. Las mismas operaciones en moneda extranjera podrán realizarse únicamente para abono en cuenta en moneda nacional. En todos los casos, las Entidades tendrán prohibido asumir posiciones en moneda extranjera;
IX. Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito, y afectar los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus Socios o Clientes o de las operaciones autorizadas con las personas de las que reciban financiamiento;
X. Realizar, por cuenta de sus Socios o Clientes, operaciones con empresas de factoraje financiero;

XI. Emitir títulos de crédito, en serie o en masa, para su colocación entre el gran público inversionista;

XII. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito;

XIII. Otorgar descuentos de toda clase, reembolsables a plazos congruentes con los de las operaciones pasivas que celebren;

XIV. Constituir depósitos a la vista o a plazo en instituciones de crédito;

XV. Otorgar préstamos o créditos a sus Socios o Clientes, sujetos a plazos y montos máximos;

XVI. Realizar inversiones en valores;

XVII. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda;

XVIII. Otorgar créditos de carácter laboral a sus trabajadores;

XIX. Realizar inversiones permanentes en otras sociedades mercantiles, siempre y cuando les presten servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario;

XX. Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente;

XXI. Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito;

XXII. Celebrar, como arrendador, contratos de arrendamiento financiero;

XXIII. Recibir donativos;

XXIV. Prestar servicios de caja de seguridad;

XXV. Ofrecer el servicio de abono y descuento en nómina;

XXVI. Fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros, siempre que lo anterior no implique para la Entidad la aceptación de obligaciones directas o contingentes;

XXVII. Expedir y operar tarjetas de débito;

XXVIII. Prestar servicios de caja y tesorería, y

XXIX. Realizar la compra-venta de divisas por cuenta de terceros.

La Comisión podrá autorizar a las Entidades la realización de operaciones análogas o conexas a las señaladas en este artículo, incluyendo el otorgamiento de garantías a que se refiere el artículo 92 de esta Ley.

Las Entidades únicamente podrán recibir depósitos de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, ya sea a través de sus sectores central o paraestatal, cuando se ubiquen en los Niveles de Operaciones III y IV y obtengan autorización de la Comisión.

Las Entidades tendrán prohibido recibir en garantía de los préstamos que otorguen a sus Socios, sus acciones o certificados de aportación, según se trate.

En ningún caso las Entidades podrán autorizar a sus Socios o Clientes la expedición de cheques a su cargo, en los términos que dispone el Título Primero Capítulo IV de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Asimismo, a las Entidades les estará prohibido realizar aquellas operaciones que no les estén expresamente autorizadas.

Artículo 37.- La Comisión, después de haber escuchado la opinión de la Federación respectiva y previa audiencia de la Entidad interesada, podrá declarar la revocación de la autorización otorgada de conformidad con el artículo 9o., según corresponda, en los casos siguientes:

I. Si no presenta el testimonio de la escritura o bases constitutivas para su aprobación a que se refiere el artículo 10, fracción I, dentro del término de noventa días hábiles a partir de que haya sido otorgada la autorización, o bien, si no inicia sus operaciones dentro de los noventa días hábiles siguientes a partir de la aprobación de dicho testimonio, o al darse esta última no estuviere pagado el capital mínimo de la Entidad;

II. Si no acredita a la Comisión la celebración de un contrato de afiliación o de supervisión auxiliar con una Federación en los términos de esta Ley, así como si no mantiene vigentes dichos contratos;

III. Si no acredita a la Comisión la adhesión al Fondo de Protección respectivo, o bien, la constitución del sistema de protección a que se refiere el último párrafo del artículo 105;

IV. Si la Entidad genera pérdidas que la ubiquen por debajo de su capital mínimo;

La Comisión podrá establecer un plazo que no será menor de sesenta días hábiles ni mayor de noventa días hábiles, para que se reintegre el capital en la cantidad necesaria para mantener la operación de la Entidad dentro de los límites legales;

V. Cuando el número de Socios llegare a ser inferior al fijado como mínimo en esta Ley y en las disposiciones aplicables;

VI. Si efectúa operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o por las disposiciones que de ella emanen, o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas de los mercados en que opera, o si abandona o suspende sus actividades;

VII. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones de la Federación respectiva, o en su caso de la Comisión, la Entidad ejecuta operaciones distintas a las permitidas, no mantiene las proporciones legales de activo y capitalización, no se ajusta a la regulación prudencial aplicable, o bien, si a juicio de la Comisión no cumple adecuadamente con las funciones para las que fue autorizada, o por poner en peligro con su administración los intereses de sus Socios o Clientes, o de su objeto social, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;

VIII. Cuando por causas imputables a la Entidad, no aparezcan debida y oportunamente registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado;

IX. Si la Entidad se niega reiteradamente a proporcionar información, o bien, de manera dolosa, presenta información falsa, imprecisa o incompleta a la Federación respectiva o a la Comisión;

X. Si la Entidad obra sin autorización de la Comisión, en los casos en que la Ley así lo exija;

XI. Si se disuelve, liquida o quiebra;

XII. En caso de que no realice tres aportaciones mensuales al Fondo de Protección en un plazo de un año, y

XIII. En cualquier otro establecido por la Ley.

La declaración de revocación se inscribirá en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio social de la Entidad de que se trate y se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en dos periódicos de amplia circulación del ámbito geográfico en que operaba.

La revocación incapacitará a la Entidad de que se trate para realizar sus operaciones a partir de la fecha en que se notifique la misma y se pondrá en estado de disolución y liquidación sin necesidad del acuerdo de la asamblea de Socios.

La Comisión podrá promover ante la autoridad judicial para que designe al liquidador, si en el plazo de sesenta días hábiles de publicada la revocación no hubiere sido designado. Cuando la propia Comisión encuentre que existe imposibilidad de llevar a cabo la liquidación de la Entidad, podrá hacerlo del conocimiento del juez competente para que ordene la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio, la que surtirá sus efectos transcurridos ciento ochenta días hábiles a partir del mandamiento judicial. Los interesados podrán oponerse a esta cancelación dentro del citado plazo de sesenta días hábiles, ante la propia autoridad judicial.

Capítulo II
De las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Artículo 38.- La constitución de las Cooperativas se llevará a cabo con arreglo a lo dispuesto en el Título Segundo Capítulo I de la Ley General de Sociedades Cooperativas, con excepción de lo siguiente:

I. El acta constitutiva y sus modificaciones, deberán ser protocolizadas únicamente ante notario o corredor público;

II. Las Cooperativas contarán con personalidad jurídica, patrimonio propio y podrán celebrar actos jurídicos a partir de la inscripción de su acta constitutiva en el Registro Público de Comercio que corresponda a su domicilio social;

III. El número mínimo de Socios no será menor de cien para las Entidades con Nivel de Operaciones I, y de doscientos para las Entidades con Nivel de Operaciones II a IV, y

IV. Podrán participar como Socios personas morales, con excepción de las Instituciones Financieras a que se refiere el artículo 43 de esta Ley. En todo caso, dichas personas morales únicamente podrán emitir un voto en la asamblea de Socios de la Cooperativa de que se trate, salvo en el caso de la institución fundadora a que se refiere el artículo 40 de esta Ley.

Artículo 39.- De manera alternativa a lo establecido por la Ley General de Sociedades Cooperativas, las Cooperativas podrán establecer en sus bases constitutivas la participación de delegados electos por los Socios para que asistan a las asambleas a que se refiere la presente Ley, en representación de los propios Socios. El sistema para la elección de delegados que al efecto se establezca, deberá garantizar la representación de todos los Socios de manera proporcional, pudiendo para tal efecto agrupar en zonas a sus sucursales u otras unidades operativas.

Artículo 40.- La Cooperativa podrá integrar a una institución fundadora, la cual tendrá como finalidad apoyarla financieramente y participar de manera permanente en sus órganos de administración y gobierno. No podrán participar en tales órganos las instituciones que realicen actividades políticas partidistas.

La institución fundadora estará conformada como una persona moral sin fin de lucro; estará representada en la asamblea general y en el consejo de administración por un número de votos que no podrá ser mayor al quince por ciento del total, y en el comité de vigilancia por un número de votos que no será mayor al treinta por ciento del total, y no podrá recibir préstamos por parte de la Cooperativa.

Las aportaciones que realice la institución fundadora al capital social de la Cooperativa se harán a título de donación, y deberán ser destinadas a una reserva especial, misma que no podrá ser distribuida entre los Socios. En ningún momento la Cooperativa podrá reembolsar dichas aportaciones a la institución fundadora.

En caso de que la Cooperativa llegara a liquidarse y existan remanentes, deberán destinarse al Fondo de Protección de la Confederación que corresponda.

Capítulo III
De las Sociedades Financieras Populares

Artículo 41.- Las Sociedades Financieras Populares serán sociedades anónimas, tendrán duración indefinida y establecerán su domicilio en territorio nacional, pudiendo prestar servicios tanto a sus Socios como a sus Clientes, en los términos que esta Ley establece. Sólo podrán utilizar esta denominación las sociedades autorizadas para operar en los términos de esta Ley.

Cuando se trate de sociedades de capital variable, el capital mínimo obligatorio con arreglo a esta Ley, estará integrado por acciones sin derecho a retiro. El monto del capital variable en ningún caso podrá ser superior al del capital pagado sin derecho a retiro.

Artículo 42.- El capital mínimo de las Sociedades Financieras Populares deberá estar íntegramente suscrito y pagado al momento de iniciar operaciones, o a más tardar dentro de los noventa días hábiles siguientes a la aprobación por parte de la Comisión, del testimonio de su escritura o bases constitutivas, lo que ocurra primero.

Artículo 43.- Las acciones representativas del capital social de las Sociedades Financieras Populares podrán ser adquiridas por cualquier persona, con excepción de las Instituciones Financieras a que se refiere la fracción IV del artículo 2o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las uniones de crédito podrán participar en el capital social de las Sociedades Financieras Populares, en los términos señalados en este Capítulo, debiendo en todo caso para efectos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, restar de su capital social, el importe correspondiente al capital invertido en la Sociedad Financiera Popular de que se trate.

Las acciones serán de igual valor, conferirán a sus tenedores los mismos derechos y obligaciones, y deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas.

Artículo 44.- Ninguna persona física o moral podrá adquirir, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de acciones por más del tres y diez por ciento del capital social de una Sociedad Financiera Popular, respectivamente. Para efectos de lo señalado en este artículo, se considerarán como una sola persona a aquellas que tengan vínculos patrimoniales entre sí, o que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado, o civil.

Artículo 45.- Las personas físicas y morales podrán adquirir o transmitir la propiedad de acciones de una Sociedad Financiera Popular hasta por un monto equivalente al tres por ciento del capital social de dicha Sociedad. En caso de que una persona moral pretenda adquirir o transmitir hasta el diez por ciento del capital social de una Sociedad Financiera Popular, deberá solicitar la autorización de la Comisión, previo dictamen favorable de la Federación que la supervise de manera auxiliar.

Artículo 46.- Las personas que adquieran o se les haya transmitido la propiedad de acciones de una Sociedad Financiera Popular, por más del uno por ciento del capital social de la Entidad, no podrán recibir créditos de la misma, pero sí podrán acceder a las demás operaciones o servicios de la Entidad. Las personas morales que posean hasta el cinco por ciento del capital de la Sociedad Financiera Popular y que cuenten con más de cincuenta socios, podrán recibir créditos, previo acuerdo de las dos terceras partes del consejo de administración.

TÍTULO TERCERO
DE LOS ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN
Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 47.- Las Entidades estarán sujetas a la supervisión de la Comisión, la que tendrá en lo que no se oponga a esta Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley que la rige y la Ley de Instituciones de Crédito. Dichas facultades podrán ser ejercidas directamente por la Comisión y de manera auxiliar por las Federaciones autorizadas conforme al presente Título.

La Comisión establecerá mediante disposiciones de carácter general la forma en que las Federaciones ejercerán las facultades de supervisión auxiliar de las Entidades.

Artículo 48.- La Federación se constituirá con la agrupación voluntaria de Entidades, y deberá estar autorizada por la Comisión, para el desempeño de las facultades de supervisión auxiliar. Dichas facultades serán indelegables.

Artículo 49.- La Confederación se constituirá con la agrupación voluntaria de Federaciones, y deberá estar autorizada por la Comisión, para el desempeño de las facultades de administración del Fondo de Protección a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley. Además será el órgano de colaboración del Gobierno Federal para el diseño y ejecución de los programas que faciliten la actividad de ahorro y crédito popular.

Artículo 50.- Los Organismos de Integración serán instituciones de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, podrán adoptar cualquier naturaleza jurídica, siempre que no tenga fines lucrativos. Las actividades de las Federaciones y las Confederaciones serán las propias de su objeto y se abstendrán de realizar actividades políticas partidistas.

Artículo 51.- La solicitud de autorización para operar como Federación y Confederación, deberá presentarse ante la Comisión, acompañando la documentación e información que dicha Comisión establezca mediante disposiciones de carácter general. Las autorizaciones que, en su caso, otorgue la Comisión serán por su propia naturaleza intransmisibles.

La Comisión contará con un plazo de noventa días naturales para emitir resolución respecto de las solicitudes de autorización que le hayan sido presentadas. Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo la solicitud de autorización, si no comunica lo contrario dentro del periodo mencionado.

Las autorizaciones de Federaciones y Confederaciones deberán publicarse en el **Diario Oficial de la Federación** y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operará el Organismo de Integración de que se trate.

Artículo 52.- Las Confederaciones y Federaciones podrán además realizar las siguientes actividades:

I. Fungir como representantes legales de sus afiliadas ante personas, organismos, autoridades e instituciones tanto nacionales como extranjeras;
II. Prestar entre otros, los servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación;
III. Contratar créditos con el objeto de canalizarlos a las Federaciones y Entidades afiliadas que lo requieran;
IV. Promover la superación y capacidad técnica y operativa de sus afiliadas, así como de sus empleados, y
V. Homologar, en lo procedente, reglamentos, trámites y mecanismos operativos, así como sistemas contables e informáticos.

De igual forma, podrán integrar bases de datos para dar seguimiento al comportamiento crediticio de los acreditados de las Entidades, la calificación de riesgos, y en general el funcionamiento de las Entidades. Las Confederaciones y Federaciones únicamente utilizarán dicha información para el cumplimiento de su objeto, debiendo abstenerse de proporcionar información, cuando a su juicio ésta pueda ser usada para fines distintos de los antes mencionados.

Artículo 53.- Los requisitos mínimos que deberá cumplir un Organismo de Integración para ser autorizado, serán:

I. Para Federaciones, tener cuando menos la solicitud de diez Entidades que deseen afiliarse. Para constituir una Confederación se requerirá la solicitud de cuando menos cinco Federaciones.

   Para efectos del cómputo mínimo requerido conforme a lo señalado en el párrafo anterior, cuando los socios de una Entidad o Federación que forme parte de una Federación o una Confederación, respectivamente, adquieran directa o indirectamente acciones o certificados de participación con derecho a voto de otra Entidad o Federación, que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento del capital pagado, tengan el control de las asambleas generales, estén en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración, o por cualquier otro medio controlen a las mencionadas Entidades o Federaciones, se considerarán como una sola Entidad o una sola Federación, según corresponda.

   En caso de que el número de Entidades o Federaciones no sea el señalado conforme al primer párrafo de esta fracción, la Comisión evaluando el caso, podrá otorgar la autorización sin cumplir con el número de afiliados requerido.

   En cualquier caso, al término de ciento veinte días naturales contados a partir de la fecha en que sean autorizadas, las Federaciones y las Confederaciones deberán tener afiliadas, respectivamente, al número mínimo de Entidades y Federaciones a que se refiere esta fracción.

   Asimismo, para el caso en que la Comisión revoque la autorización otorgada a una Entidad o a una Federación, las Federaciones y las Confederaciones contarán con un plazo de doscientos cuarenta días naturales contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la revocación de que se trate, para tener afiliadas, respectivamente, al número mínimo de Entidades y Federaciones a que se refiere esta fracción. Dicho plazo podrá prorrogarse a juicio de la Comisión;

II. El proyecto de estatutos, en el que deberá indicarse su objeto y organización interna, entre otros. Los estatutos que deberán ser acordes con los principios de la presente Ley y demás disposiciones aplicables;
III. El ámbito geográfico en el que operará;
IV. El programa general de operación, que permita a la Comisión evaluar si el Organismo de Integración podrá cumplir adecuadamente con su objeto. Dicho programa deberá contener, por lo menos:
   a) Los planes de trabajo;
   b) Las políticas de afiliación;
   c) La información y documentación que acredite que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo su objeto;
   d) La relación de sus principales administradores y directivos, incluyendo al contralor normativo, debiendo acompañar el curriculum vitae de los mismos;
V. El proyecto de reglamento interior, conforme al cual ejercerá sus facultades de conformidad con esta Ley y las reglas que al efecto haya emitido la Comisión;
VI. Para las Federaciones que no pretendan afiliarse a una Confederación, la aprobación de alguna Confederación para que sus Entidades afiliadas participen en el Fondo de Protección administrado por aquélla, y
VII. La demás documentación que la Comisión considere necesaria para otorgar su autorización.

Las modificaciones que se pretendan efectuar a los estatutos, así como al reglamento interior del Organismo de Integración, deberán someterse a la previa aprobación de la Comisión, la cual contará con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles para emitir su resolución al respecto. Dicho plazo comenzará a contar, a partir de la fecha en que sean presentados los documentos a la Comisión. Se entenderá que la Comisión resuelve en sentido negativo si no comunica lo contrario a Organismos de Integración correspondiente, dentro del periodo mencionado.

Artículo 54.- Las Federaciones o Confederaciones no podrán afiliar a personas físicas, ni realizar operaciones con el público directamente o por interpósita persona.

Artículo 55.- Cada Organismo de Integración formulará su reglamento interior, que deberá contener, entre otras, las normas aplicables a:

I.- Tratándose de una Federación:
   a) La admisión, suspensión y exclusión de los afiliados;
   b) La forma y metodología en que ejercerá las funciones de supervisión auxiliar sujetándose a las reglas de carácter general que emita la Comisión;
   c) Las reglas prudenciales que en adición a las emitidas por la Comisión deberán observar sus Entidades afiliadas, y en su caso, las Entidades no afiliadas que supervise;
   d) Los derechos y obligaciones de los afiliados, así como de las Entidades no afiliadas sobre las que se ejerzan las funciones de supervisión auxiliar;
   e) La forma de determinar las cuotas que le deberán aportar las Entidades;
   f) Las aportaciones que las Entidades deberán cubrir para el Fondo de Protección, o bien, para el sistema de protección de ahorradores a que se refiere el último párrafo del artículo 105;
   g) Las medidas correctivas mínimas a las que deberán sujetarse las Entidades, incluyendo la facultad de nombrar a personas que se encarguen de la administración de la Entidad en sustitución de su consejo de administración y director o gerente general, o de quienes ejerzan tales funciones;
   h) Los mecanismos voluntarios de solución de controversias entre las Entidades y sus Clientes;
   i) El programa de control y corrección interno para prevenir conflictos de interés y uso indebido de la información, que se establezca conforme a las reglas de carácter general que emita la Comisión;
   j) Los procedimientos aplicables para el caso de que las Entidades incumplan sus obligaciones, incluyendo penas convencionales a su cargo y a favor de la Federación, y
   k) Los préstamos que podrán otorgarse entre sí las Entidades afiliadas conforme a lo señalado en el artículo 36, fracción III.

II.- Tratándose de una Confederación:
   a) La forma y metodología en que se ejercerá la función para administrar el Fondo de Protección;
   b) Los derechos y obligaciones de las Federaciones que la integren;
   c) Las reglas prudenciales que en adición a las emitidas por la Comisión deberán observar las Entidades afiliadas y las no afiliadas;

d) Las aportaciones que las Entidades deberán cubrir para el Fondo de Protección;
e) El programa de control y corrección interno, y
f) Los procedimientos aplicables para el caso de que las Federaciones incumplan sus obligaciones, incluyendo penas convencionales a su cargo y a favor de la Confederación.

Artículo 56.- Los Organismos de Integración proporcionarán a sus afiliadas, la información sobre los servicios que ofrecen, y sobre el Fondo de Protección, con el objeto de fortalecer la cultura financiera en general y del ahorro popular en particular, el conocimiento y desarrollo de sus intermediarios, y el fortalecimiento de esquemas de financiamiento para individuos y micro, pequeñas y medianas empresas.

Artículo 57.- Los Organismos de Integración autorizados llevarán un registro de Entidades o Federaciones afiliadas o, en su caso, de aquéllas sobre las que ejerzan funciones de supervisión auxiliar, el cual deberá proporcionarse a la Comisión mediante los medios que ésta señale en disposiciones de carácter general, a efecto de que ésta determine los medios para hacerlo del conocimiento público.

Artículo 58.- Las Entidades, en su relación con los Organismos de Integración, tendrán las obligaciones siguientes:

I. Aportar las cuotas periódicas que fije la asamblea general de afiliados de la Federación para su sostenimiento, cubrir el costo de supervisión auxiliar, y las aportaciones para la constitución del Fondo de Protección, en los términos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen;
II. Proporcionar a la Federación la información y documentación que le requiera para efectos de la supervisión auxiliar;
III. En general cumplir con las estipulaciones contenidas en el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, según se trate, así como con la regulación prudencial que establezca la Comisión y, en su caso, la Confederación o la Federación;
IV. Informar tanto a la Comisión como al Organismo de Integración respectivo, por conducto de cualquiera de los órganos de administración, director o gerente general de la propia Entidad, cuando se presuma fundadamente que se están llevando a cabo cualquiera de las conductas que señala el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de esta Ley. En todo caso, la información a que se refiere la presente fracción deberá ser hecha del conocimiento de la Comisión de manera directa;
V. Asistir, a través de sus representantes, a las sesiones de la asamblea general de afiliados del Organismo de Integración correspondiente y/o reuniones convocadas por la misma;
VI. Cumplir con las resoluciones adoptadas por la asamblea general de afiliados del Organismo de Integración correspondiente, y
VII. Las demás que le señale esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 59.- Los Organismos de Integración estarán sujetos a la supervisión de la Comisión, la que tendrá en lo que no se oponga a esta Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere su propia Ley y la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 60.- La Comisión, previa audiencia del Organismo de Integración de que se trate, podrá revocar, a su juicio, la autorización otorgada a las Federaciones para ejercer la función de supervisión auxiliar, y a las Confederaciones para manejar el Fondo de Protección, en los casos siguientes:

I. Si no inicia operaciones dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento de la autorización;
II. Si no cumple, tratándose de Federaciones, diligentemente la labor de supervisión auxiliar que les fue encomendada;
III. Si conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 53 de esta Ley, no cumplen con el número mínimo de Entidades o Federaciones afiliadas, o si el número de Entidades o Federaciones afiliadas fuera menor a aquél que la Comisión autorizó; en términos de la misma;
IV. Si efectúan operaciones en contravención a lo dispuesto por esta Ley o por las disposiciones que de ella emanen, o si sus actividades se apartan de las sanas prácticas, o si abandona o suspende sus actividades;
V. Si a pesar de las observaciones de la Comisión, reiteradamente incumplen con las actividades objeto de la autorización;
VI. Si no proporcionan a la Comisión la información requerida, o bien presentan de manera dolosa, información falsa o incompleta, que no permita conocer la situación real de las Entidades;
VII. Si se manejan de manera irregular los recursos que integran el Fondo de Protección;
VIII. Si obran sin autorización de la Comisión, en los casos en que la Ley así lo exija;
IX. Si la Federación no acredita a la Comisión, que sus Entidades afiliadas participan en el Fondo de Protección administrado por alguna Confederación, y
X. Si se disuelve, liquida o quiebra.

Las declaraciones de revocación se inscribirán en el Registro Público de Comercio, previa orden de la Comisión, y se publicarán en el **Diario Oficial de la Federación** y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que operaba el Organismo de Integración de que se trate. La revocación incapacitará al Organismo de Integración para realizar sus operaciones a partir de la fecha en que se notifique la misma, y se pondrá en estado de disolución y liquidación.

Artículo 61.- Las Entidades afiliadas a una Federación cuya autorización hubiere sido revocada por la Comisión, deberán solicitar su afiliación a una Federación distinta o sujetarse al régimen de Entidad no afiliada en un término no mayor a diez días hábiles a partir de la fecha en que surta sus efectos la revocación antes citada.

Capítulo II
De las Federaciones
Sección Primera
De su organización y objeto

Artículo 62.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47, la supervisión auxiliar de las Entidades a cargo de las Federaciones tendrá por objeto revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y legal de las Entidades, conste o deba constar en los registros, a fin de que se ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rigen y a las sanas prácticas de la materia, en los términos que indique la Comisión en disposiciones de carácter general.

La supervisión consistirá en verificar que las Entidades cumplan con las disposiciones de esta Ley, con las reglas prudenciales emitidas por la Comisión, con los contratos de afiliación o de supervisión auxiliar, según se trate y con las demás disposiciones aplicables.

Artículo 63.- Las Federaciones deberán contar con una asamblea general de afiliados que será el órgano supremo de la Federación y estará integrado por los representantes de las Entidades afiliadas. Además contarán con un consejo de administración, un gerente general, un consejo de vigilancia del que se designará un contralor normativo, un Comité de Supervisión y un auditor legal.

La Comisión, de acuerdo a los criterios que determine en reglas de carácter general, podrá exceptuar a las Federaciones de alguno de los órganos o personas antes indicados.

Estos órganos, el gerente general y el contralor normativo, así como el auditor legal, tendrán las atribuciones que se señalen en esta Ley, en los estatutos sociales, en las reglas que emita la Comisión y demás disposiciones aplicables.

A las asambleas deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la Confederación a la que se encuentre afiliada.

Artículo 64.- La asamblea general de afiliados de la Federación podrá estar integrada, a elección de las Entidades:

I. Por un representante de cada Entidad afiliada, o

II. A través de un sistema de representación proporcional, en el que se asignará a cada Entidad afiliada el número de votos que le correspondan, considerando el número de socios y/o los activos totales de cada Entidad. En ningún caso, una Entidad podrá representar más del veinte por ciento del total de votos.

Artículo 65.- El consejo de administración de la Federación estará integrado por consejeros electos por la asamblea general de afiliados de la Federación, cuyo número no será menor de cinco ni mayor de quince, quienes deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20. Los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección.

Dicho consejo de administración podrá estar conformado hasta en un treinta por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de una Entidad o Confederación.

Los consejeros tendrán la obligación de comunicar al presidente del consejo sobre cualquier situación en la que se pueda derivar un conflicto de interés y abstenerse de participar en la deliberación y resolución correspondiente.

Artículo 66.- El consejo de administración nombrará gerente general de la Federación a la persona que reúna los requisitos siguientes:

I. Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos cuyo desempeño requiera conocimientos y experiencia en materias financiera y administrativa, y

II. No tener alguno de los impedimentos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 21.

Artículo 67.- El Comité de Supervisión será el encargado de ejercer la supervisión auxiliar de las Entidades afiliadas y de las no afiliadas que hayan celebrado el contrato respectivo, conforme a lo señalado en los artículos 82 y 87.

Este comité estará formado por personas designadas por el consejo de administración de la Federación respectiva, de entre los cuales se elegirá un presidente, el que deberá reportar los resultados de su gestión al consejo de administración y a la Comisión.

Los miembros del Comité de Supervisión únicamente podrán ser removidos de su cargo, contando con la aprobación de la Comisión, quien escuchará al interesado.

Para ser miembro del Comité de Supervisión será necesario:

a) Tener reconocida experiencia en materias financiera y administrativa;
b) No ser asesor o consultor de alguna Entidad;
c) No tener litigio pendiente o adeudos vencidos con alguna Entidad u Organismo de Integración;
d) No ser empleado, funcionario o miembro del consejo de administración o de vigilancia de alguna Entidad, o funcionario o miembro del consejo de administración de la Federación;
e) No haber sido sentenciado por delitos intencionales patrimoniales o inhabilitado para ejercer el comercio, o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el sector público Federal, Estatal o Municipal, en el Sistema Financiero Mexicano o en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular;
f) No estar sujeto a concurso o declarado en quiebra, o encontrarse inhabilitado para ejercer el comercio;
g) No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil con algún miembro del consejo de administración, consejo de vigilancia o comisario o con el director o gerente general de alguna Entidad, y
h) Cualquier persona que desempeñe un cargo público, de elección popular o dirigencia partidista.

Las Federaciones, contando con la autorización de la Comisión, podrán acordar entre ellas el establecimiento de comités de supervisión comunes. Esta autorización estará sujeta, a la capacidad de dicho comité para llevar a cabo sus funciones, y al crecimiento de las Federaciones que acuerden su establecimiento.

En el caso de comités de supervisión comunes, éstos estarán integrados por un número impar de personas, no pudiendo ser menor a cinco, quienes serán nombradas y removidas de manera equitativa por los consejos de administración de las Federaciones participantes.

Artículo 68.- Son facultades del Comité de Supervisión, además de las conferidas en esta Ley y en las reglas que al efecto establezca la Comisión, las siguientes:

I. Solicitar a los órganos de la Entidad, la información necesaria para la supervisión auxiliar;
II. Proponer las políticas y los lineamientos respecto a la supervisión auxiliar, contando con la aprobación del consejo de administración, y
III. Las demás que la asamblea general o los estatutos de la Federación determinen.

Artículo 69.- Son obligaciones del Comité de Supervisión, además de las conferidas en esta Ley y en las reglas que al efecto establezca la Comisión, las siguientes:

I. Expedir a las sociedades, un dictamen respecto del cumplimiento de los requisitos para constituirse como Entidades;
II. Llevar a cabo las tareas de supervisión auxiliar de las Entidades afiliadas a la Federación que corresponda, así como de las Entidades no afiliadas sobre las cuales se les hubiere encomendado su supervisión auxiliar, y emitir los reportes que correspondan;
III. Evaluar y vigilar el cumplimiento de la regulación prudencial;
IV. Realizar visitas de inspección a las Entidades;
V. Determinar la aplicación del programa de medidas correctivas mínimas y supervisar su cumplimiento;
VI. Informar a la Federación y a la Comisión que procederá en términos del artículo 75, así como cuando haya procedido conforme a lo señalado en el artículo 77 de esta Ley;
VII. Informar al Comité Técnico y a la Comisión respecto de la situación financiera, operativa y legal de la Entidad, que a su juicio, fuera susceptible de ser intervenida gerencialmente por la Comisión;
VIII. Reportar al consejo de administración de la Federación sobre su gestión, así como las irregularidades detectadas a las Entidades en el desempeño de sus actividades de supervisión auxiliar, y
IX. Las demás que los estatutos de la Federación determinen.

Artículo 70.- La vigilancia interna de la Federación estará a cargo de un consejo de vigilancia, o su equivalente, cuyas responsabilidades y obligaciones deberán determinarse en los estatutos de la Federación correspondiente.

Tratándose del consejo de vigilancia, éste será encabezado por un contralor normativo, quien será elegido por el consejo de administración y aprobado por la asamblea general, y será el responsable de vigilar que los funcionarios y empleados de la Federación, cumplan con la normatividad aplicable.

El contralor normativo realizará las siguientes funciones:

I. Verificar que las Federaciones cumplan con la regulación aplicable;

II. Recibir los informes del Comité de Supervisión y los dictámenes de los auditores externos para su conocimiento y análisis;

III. Informar a la Comisión, al consejo de administración y a la asamblea general del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, así como en cualquier momento de los hallazgos e irregularidades de que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y

IV. Proponer al consejo de administración el programa de control y corrección interno de la Federación y sus modificaciones, a efecto de prevenir conflictos de interés y el uso indebido de la información.

El contralor normativo asistirá con voz pero sin voto a las sesiones del consejo de administración de la Federación.

Los miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20.

Artículo 71.- Las Federaciones deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, gerente general, miembros del Comité de Supervisión, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración de la documentación comprobatoria relativa.

En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Federación de que se trate y bajo protesta de decir verdad que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 21, tratándose de consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo; y 67 incisos c), d), e), f), g) y h), para los miembros del Comité de Supervisión.

Las Federaciones deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, gerente general, miembros del Comité de Supervisión, miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación.

Tratándose de consejeros, gerente general y miembros del Comité de Supervisión y del consejo de vigilancia, incluyendo al contralor normativo, la Comisión tendrá la facultad de veto.

Sección Segunda

De su funcionamiento y de las medidas correctivas

Artículo 72.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 47, las Entidades estarán obligadas a:

I. Proporcionar a la Federación que ejerza sobre ellas la supervisión auxiliar, todos los documentos, información, registros, correspondencia y sistemas de almacenamiento de datos necesarios para la verificación, en los términos del contrato de afiliación o de supervisión auxiliar que corresponda, y

II. Cumplir con las medidas correctivas a que se refiere este Capítulo, permitir la práctica de visitas y auditorías para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley, de las disposiciones que de ella emanen y de los contratos citados.

Artículo 73.- En el ejercicio de sus funciones de supervisión auxiliar, el Comité de Supervisión de la Federación clasificará a las Entidades en alguna de las cuatro categorías a que se refiere el artículo 74 de esta Ley, según su adecuación a los requerimientos de capitalización emitidos por la Comisión. Dicha Comisión establecerá mediante reglas de carácter general los rangos de capitalización que determinarán cada una de tales categorías.

La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, establecerá las medidas correctivas mínimas con que deberán cumplir las Entidades, así como sus características y plazos para su cumplimiento de acuerdo con la categoría en que hubiesen sido clasificadas. El Comité de Supervisión de la Federación deberá verificar que las Entidades cumplan con las medidas correctivas mínimas que les correspondan y tendrá el derecho de ordenar a éstas, la implementación de medidas especiales adicionales a las anteriores.

Estas medidas tendrán por objeto prevenir, y en su caso, normalizar oportunamente las anomalías financieras o de cualquier otra índole, que las Entidades presenten, derivadas de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad o solvencia, o pongan en riesgo los intereses de los ahorradores.

Artículo 74.- De manera enunciativa y no limitativa, las Entidades deberán cumplir con las medidas que se indican a continuación, dependiendo de la categoría de capitalización en que se encuentren clasificadas:

I. Las Entidades clasificadas dentro de la categoría uno, no podrán celebrar operaciones que las lleven a ser clasificadas dentro de una categoría de capitalización inferior;

II. Las Entidades que se clasifiquen dentro de la categoría dos, deberán, entre otras acciones:

a) Suspender las aportaciones al fondo de obra social;

b) Suspender el pago de dividendos o excedentes o cualquier otro mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales a los Socios;

c) Presentar un plan de restauración de capital que deberá ser aprobado por la Federación;

d) Limitar el crecimiento de los activos en riesgo de la Entidad;

e) Someter a aprobación de la Federación correspondiente, cualquier transacción material distinta de las que corresponden a su negocio natural, incluyendo las que tienen que ver con cualquier inversión, expansión o adquisición, y

e) Revisar e instrumentar adecuaciones a las políticas de compensaciones adicionales y extraordinarias al salario de los funcionarios de niveles superiores de las Entidades, así como a las políticas de contratación de personal de las mismas.

III. Las Entidades clasificadas dentro de la categoría tres, estarán sujetas a las mismas acciones obligatorias que las establecidas para las Entidades clasificadas dentro de la categoría dos, y adicionalmente deberán:

a) Restringir sus operaciones y actividades con las personas a que se refiere el artículo 35 de esta Ley, y

b) Constituir un encaje sobre la captación de nuevos pasivos, y condicionar las nuevas operaciones activas que realice a la obtención de garantías reales.

IV. Las Entidades clasificadas dentro de la categoría cuatro, les será aplicable lo dispuesto en el artículo 75 de esta Ley.

Las Entidades deberán prever lo relativo a la implementación de medidas correctivas dentro de sus estatutos sociales.

Artículo 75.- En caso de que una Entidad fuese clasificada en la categoría cuatro, el Comité de Supervisión de conformidad con el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar, solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración, debiendo informarlo al Comité Técnico. Este último, de conformidad con los contratos de referencia, designará a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad, quienes deberán contar con las facultades a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, y procederá a la selección de alguno de los mecanismos señalados en el artículo 90.

Artículo 76.- Cuando de los dictámenes del Comité de Supervisión se desprenda alguna operación que se considere irregular, que no afecte la estabilidad o la solvencia de la Entidad y no ponga en riesgo los intereses de los ahorradores, dicho Comité, previa audiencia de la Entidad de que se trate, ordenará a la Entidad la aplicación de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme a lo dispuesto en el Título Sexto de este ordenamiento.

Artículo 77.- El Comité de Supervisión de la Federación, previa audiencia de la Entidad de que se trate y de conformidad con el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar que ésta haya celebrado con la Entidad, solicitará la remoción del director o gerente general y del consejo de administración, informando esta situación al Comité Técnico, cuando se presenten causas graves, que afecten la estabilidad o la solvencia de la Entidad y pongan en riesgo los intereses de los ahorradores. En este caso, el Comité Técnico, de conformidad con los contratos de referencia, designará a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad, quienes deberán contar con las facultades a que se refiere el artículo 79 de esta Ley, y procederá a la selección de alguno de los mecanismos a que se refiere el artículo 90.

Entre las causales que motivarán la remoción a que se refiere el párrafo anterior, se encuentran:

I. Si la Entidad reiteradamente incumple con la regulación prudencial establecida por la Comisión, Confederación o Federación;

II. Si reiteradamente, a pesar de las observaciones efectuadas por la Federación, la Entidad realiza operaciones irregulares, ilegales o distintas a las que le están permitidas;

III. Si sus actividades se apartan de las sanas prácticas de los mercados en que opera;

IV. Si por causas imputables a la Entidad no aparecen debida y oportunamente registradas en su contabilidad las operaciones que haya efectuado y, por tanto, no se refleja su verdadera situación financiera;

V. Si la Entidad proporciona dolosamente información falsa o incompleta a la Federación;

VI. Si la Entidad reiteradamente no proporciona a la Comisión y/o Federación, los informes, y documentos que sobre su organización, operaciones, contabilidad, inversiones o patrimonio les soliciten la Comisión o la Federación para fines de regulación, supervisión, control, inspección, vigilancia, estadística y demás funciones que conforme a esta Ley u otras disposiciones legales y administrativas, les corresponda ejercer;

VII. Si suspende en forma total o parcial, la prestación de sus servicios sin la aprobación de la Federación, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor;

VIII. Si la Entidad ejecuta u omite actos que impidan la prestación continua de los servicios que desarrolle;

IX. Si presta servicios distintos a los señalados en el contrato de afiliación o de supervisión auxiliar respectivo;

X. Si la Entidad no aplicó las medidas correctivas que le fueron determinadas, y

XI. Las demás que se hayan pactado en el contrato de afiliación o en el de supervisión auxiliar, según sea el caso.

Las personas designadas en los términos de este artículo deberán rendir cuentas al Comité Técnico y podrán ser removidas por éste.

Artículo 78.- Cuando a juicio de la Comisión existan irregularidades de cualquier género en las Entidades y determine que se encuentran en riesgo los intereses de los ahorradores o bien se ponga en peligro su estabilidad o solvencia, el presidente de la Comisión podrá de inmediato declarar la intervención con carácter de gerencia y designar a la persona física que se haga cargo de la Entidad respectiva, con el carácter de interventor-gerente.

El interventor-gerente deberá informar al Comité Técnico, del estado en que se encuentre la Entidad, a fin de que éste adopte alguno o varios de los mecanismos a que se refiere el artículo 90.

Artículo 79.- El interventor-gerente tendrá todas las facultades que correspondan al consejo de administración y al director o gerente general de la Entidad, estando obligados éstos a proporcionarle toda la información y otorgarle las facilidades que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

También tendrá plenos poderes generales para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias y querellas y desistirse de estas últimas, previo acuerdo con el presidente de la Comisión y para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, y revocar los que estuvieren otorgados por la Entidad intervenida y los que él mismo hubiere conferido.

El interventor-gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de Socios ni al consejo de administración; pero la asamblea de Socios podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que le compete y lo mismo podrá hacer el consejo para estar informado por el interventor-gerente sobre el funcionamiento y las operaciones que realice la Entidad y para opinar sobre los asuntos que el mismo interventor-gerente someta a su consideración. El interventor-gerente podrá citar a asamblea de Socios y reuniones del consejo de administración con los propósitos que considere necesarios o convenientes.

En caso de no encontrarse presente el director o gerente general al momento de la intervención, el interventor-gerente se entenderá con cualquier funcionario de la Entidad que se encuentre presente.

En el caso que señala el párrafo anterior, el director o gerente general será responsable de los actos y operaciones que hubiere realizado contraviniendo lo dispuesto en ésta u otras leyes aplicables.

El oficio que contenga el nombramiento de interventor-gerente deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio social de la Entidad intervenida, sin más requisitos que el oficio respectivo de la Comisión. Cuando ésta acuerde levantar la intervención, lo comunicará así al encargado del Registro Público de Comercio, a efecto de que se cancele la inscripción respectiva.

Artículo 80.- En aquellos casos previstos en los artículos 75, 77 y 78, las personas que tengan a su cargo la administración, podrán determinar la suspensión parcial de sus operaciones o el cierre de oficinas y sucursales, con aprobación del Comité Técnico, debiendo tomar las medidas necesarias para que la Entidad no celebre nuevas operaciones de ahorro y crédito y no se cubran las obligaciones a su cargo hasta en tanto se adopte algún mecanismo de los previstos en la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley.

Lo anterior, con excepción del pago a los ahorradores que podrá ser hasta por el cincuenta por ciento del monto garantizado por el Fondo de Protección para la Entidad de que se trate, de conformidad con lo que determine el Comité Técnico, siempre que los depósitos sean líquidos y exigibles. Dichos pagos se descontarán del monto garantizado a que se refiere el artículo 106.

El monto de los depósitos que no hubieran sido pagados conforme a lo anterior, se renovarán a las mismas tasas de interés pactadas originalmente y hasta la fecha en que se adopte el mecanismo correspondiente.

Sección Tercera

De la afiliación

Artículo 81.- Las Entidades podrán afiliarse a una Federación autorizada por la Comisión para supervisarlas de manera auxiliar. La Federación, a su vez, podrá afiliarse a una Confederación autorizada por la Comisión para que administre el Fondo de Protección a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero.

La Federación publicará semestralmente en el **Diario Oficial de la Federación** y en dos periódicos de amplia circulación en el ámbito geográfico en el que opera, la lista de sus Entidades afiliadas.

Artículo 82.- Para efectos de lo señalado en el artículo 81 anterior, la Entidad celebrará un contrato de afiliación con la Federación, en el que se establecerá, entre otras estipulaciones la conformidad por parte de la Entidad con los términos y condiciones en que se ejercerá la facultad de supervisión auxiliar, previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Federación, y el reconocimiento de la Entidad para sujetarse a las medidas correctivas y mecanismos previstos en la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley, que instrumente la Federación.

Artículo 83.- Para formalizar el contrato de afiliación deberá cumplirse cuando menos con lo siguiente:

I. Exhibir acta del acuerdo de asamblea de la Entidad en la que se haya acordado la afiliación correspondiente;
II. Contar con el dictamen favorable de la Federación, y
III. Contar con la autorización de la Comisión, para operar como Entidad.

La formalización de dicho convenio deberá efectuarse a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se les haya notificado la autorización para operar como Entidad y deberán enviar un ejemplar del mismo a la Comisión a través de la Federación respectiva.

Artículo 84.- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento a la Federación correspondiente su desafiliación, la cual únicamente será reconocida previo dictamen de un auditor externo designado por la Federación y con cargo a la Entidad, que determine la viabilidad financiera de la misma.

Artículo 85.- La Federación a través del Comité de Supervisión, podrá dictaminar la desafiliación de una Entidad cuando ésta incumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 58 fracción VI, así como en los casos previstos en su reglamento interior.

Artículo 86.- La Entidad que solicite su desafiliación, no tendrá derecho a que se le reintegren las aportaciones que haya efectuado con anterioridad al Fondo de Protección, pero podrá seguir disfrutando de los derechos inherentes al mismo, en caso de que se afilie a otra Federación que a su vez esté afiliada a la misma Confederación.

Para los efectos de los artículos 84 y 85, la Federación continuará ejerciendo sobre la Entidad desafiliada, las labores de supervisión auxiliar, debiendo esta última cubrir el costo de esa supervisión en términos del artículo 88 de esta Ley, hasta en tanto celebre un nuevo contrato de afiliación con una Federación distinta, o se sujete al régimen de Entidad no afiliada, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Sección Cuarta
De las Entidades no afiliadas

Artículo 87.- Las sociedades que, habiéndose organizado con arreglo a esta Ley para operar como Entidades, no celebren contrato de afiliación con una Federación, serán consideradas como Entidades no afiliadas.

La Comisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9o., asignará a las Entidades no afiliadas una Federación para que las supervise de manera auxiliar, debiendo celebrarse al efecto, un contrato de supervisión auxiliar entre dicha Federación y la Entidad no afiliada.

La formalización del contrato a que se refiere el párrafo anterior, deberá efectuarse a más tardar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se haya notificado la asignación de la Federación que supervisará de manera auxiliar a la Entidad, la cual deberá enviar un ejemplar del mismo a la Comisión a través de la Federación respectiva.

Artículo 88.- En el contrato de supervisión auxiliar que celebre la Entidad no afiliada, deberá establecerse, entre otras estipulaciones, la conformidad por parte de la Entidad con los términos y condiciones en que se ejercerá la facultad de supervisión auxiliar, previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Federación, y el reconocimiento de la Entidad para sujetarse a las medidas correctivas y mecanismos previstos en la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley, que instrumente la Federación.

La Entidad no afiliada tendrá todas las obligaciones de las Entidades afiliadas inherentes a la supervisión auxiliar, incluyendo la de cubrir el costo de la supervisión auxiliar.

Artículo 89.- Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, las Entidades no afiliadas estarán sujetas a lo siguiente:

I. Participar en un Fondo de Protección en términos del Título Tercero de esta Ley, o en su caso, a constituir un sistema de protección a ahorradores conforme a lo señalado en el último párrafo del artículo 105, y

II. La Federación que las supervise de manera auxiliar podrá prestarles servicios complementarios a un costo que no podrá ser inferior al que corresponda a una Entidad afiliada.

Sección Quinta

De la Escisión, Fusión, Venta, Disolución y Liquidación

Artículo 90.- Para los efectos de esta Ley, se podrán utilizar los siguientes mecanismos:

I. La escisión de la Entidad;

II. La fusión de la Entidad;

III. La venta de la Entidad, y

IV. La disolución y liquidación de la Entidad, y el consecuente pago de los depósitos de dinero a sus ahorradores, en los términos de esta Ley.

Artículo 91.- El Comité Técnico dispondrá de un término que no excederá de ciento ochenta días naturales contados a partir de la aplicación de las medidas a que se refieren los artículos 75, 77 y 78, para determinar de entre los mecanismos señalados en el artículo 90, aquél que resulte en un menor costo para el Fondo de Protección. En este sentido, dicho Comité fijará los plazos que considere adecuados para dar cumplimiento a cada una de las acciones que formen parte del mecanismo seleccionado.

La selección del mecanismo que se adopte deberá realizarse con base en un estudio técnico, elaborado por un auditor externo y aprobado por el Comité Técnico, que justifique la idoneidad de dicho mecanismo.

Artículo 92.- Para el caso de que el Comité Técnico determine como mecanismo a seguir, la escisión, fusión o venta de la Entidad, el Fondo de Protección podrá otorgar apoyos financieros tendientes a cubrir los costos derivados de la aplicación de los mecanismos adoptados.

En ningún caso, en los documentos en que se implementen los actos necesarios para llevar a cabo la escisión, fusión o venta de la Entidad, podrá establecerse a cargo del Fondo de Protección, el pago de cantidades que excedan del importe que se tendría que cubrir por los depósitos de dinero de los ahorradores en términos del artículo 106 de esta Ley.

Tales apoyos financieros deberán quedar garantizados con los títulos representativos del capital social de la Entidad, para lo cual la persona que tenga a su cargo la administración podrá efectuar la afectación en garantía correspondiente.

La garantía a favor del Fondo de Protección se considerará de interés público y preferente a cualquier derecho constituido sobre los títulos y el ejercicio de los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a los títulos representativos del capital social de la Entidad, corresponderán al Fondo de Protección. El producto que se derive del ejercicio de los derechos patrimoniales, será a favor del Fondo de Protección.

Artículo 93.- Si la Entidad requiere ser capitalizada para implementar los mecanismos de escisión, fusión o venta, el Fondo de Protección, en ejercicio de los derechos corporativos de los títulos representativos del capital social de las Entidades conforme al artículo 92, podrá efectuar las aportaciones de capital necesarias de acuerdo a lo siguiente:

I. Deberá realizar los actos tendientes a aplicar las partidas positivas del capital contable de la Entidad a la absorción de pérdidas que tenga la misma;

II. Efectuada la aplicación a que se refiere la fracción anterior, procederá a reducir el capital social y a realizar un aumento que suscribirá y pagará el Fondo de Protección, y

III. Una vez hechas las aportaciones por parte del Fondo de Protección, éste deberá otorgar a los anteriores Socios el derecho a adquirir títulos representativos del capital social de la Entidad conforme a los porcentajes de que eran titulares hasta la fecha en que el propio Fondo de Protección haya suscrito y pagado los nuevos títulos, previo pago de la proporción de pérdidas que les corresponda.

Para efectos de lo anterior, el Fondo de Protección publicará el aumento de capital que se realice. Los Socios a que se refiere la fracción III del artículo anterior, contarán con un plazo de treinta días hábiles a partir de la publicación mencionada, para adquirir del Fondo de Protección los títulos que correspondan.

En beneficio del interés público, en los estatutos y en los títulos representativos del capital social de las Entidades, deberá preverse expresamente lo dispuesto en el artículo 92, así como el consentimiento de los Socios a las condiciones previstas en el mismo.

Artículo 94.- Para el caso de que el Comité Técnico determine como mecanismo a seguir la disolución y liquidación de la Entidad y el consecuente pago de los depósitos de dinero, los pasivos a cargo de la Entidad serán cubiertos de conformidad con lo señalado en el Capítulo IV de este Título.

Artículo 95.- Las Entidades se disolverán por las causas siguientes:

I. Por el consentimiento de la asamblea de Socios;
II. Porque el número de Socios llegue a ser inferior al mínimo que establece la ley aplicable;
III. Por imposibilidad de seguir realizando el objeto de la Entidad;
IV. Porque se le revoque la autorización para operar;
V. Por resolución del Comité Técnico en términos de esta Sección, y
VI. Por resolución judicial.

Artículo 96.- La disolución, liquidación y en su caso concurso mercantil de las Entidades, se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable, según corresponda a su naturaleza jurídica, en lo que no se oponga a lo establecido por esta Ley, y por el Título Octavo, Capítulo II de la Ley de Concursos Mercantiles, con las excepciones siguientes:

I. El Comité Técnico, será el encargado de adoptar las decisiones relativas a las facultades del liquidador y síndico. Dicho cargo podrá recaer en el interventor-gerente, en caso de que la Entidad se encuentre intervenida por la Comisión, a partir de que la misma se encuentre en estado de liquidación o se declare el concurso mercantil, según se trate, o en quien el propio Comité Técnico decida;
II. A partir de la fecha en que entre en liquidación una Entidad o se le declare en concurso mercantil, los pagos derivados de sus operaciones se suspenderán hasta en tanto el Comité Técnico citado resuelva lo conducente, y
III. Podrán demandar la declaración de concurso mercantil de una Entidad, solicitando que inicie en la etapa de quiebra, el Comité Técnico o la Comisión en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 97.- A partir de la fecha en que se admita la demanda de concurso mercantil de alguna Entidad, en los términos del artículo 96 fracción III, ésta deberá suspender la realización de cualquier tipo de operaciones.

El Comité Técnico del Fondo de Protección, será quien le solicite al juez la implementación de las medidas de apremio necesarias. Corresponderá al Comité Técnico proponer al juez la designación, remoción o sustitución, en su caso, del síndico del concurso mercantil de una Entidad.

Las propuestas de enajenación que presente el síndico, con la aprobación del Comité Técnico, no podrán ser objetadas por la Entidad.

Cuando se declare el concurso mercantil de una Entidad, el procedimiento se iniciará en todos los casos en la etapa de quiebra.

Capítulo III
De la Organización y Funcionamiento de las Confederaciones

Artículo 98.- Las Confederaciones, además de su objeto señalado en el artículo 49, tendrán las facultades de homologar las políticas de supervisión auxiliar de sus Federaciones afiliadas dentro de los términos de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen; dar seguimiento al cumplimiento de tales políticas, y supervisar a las Federaciones en la prestación de servicios distintos a la supervisión auxiliar.

Las Confederaciones publicarán semestralmente en el **Diario Oficial de la Federación**, la lista de sus Federaciones afiliadas, con quienes deberán celebrar el contrato de afiliación respectivo. En dicho contrato se establecerá, entre otras estipulaciones, la conformidad por parte de la Federación con los términos en que se manejará el Fondo de Protección previstos en esta Ley, en las disposiciones que de ella emanen, así como en el reglamento interior de la Confederación.

Artículo 99.- Las Confederaciones deberán contar con una asamblea general que será el órgano supremo de la Confederación, y estará integrada por los representantes de las Federaciones afiliadas. Las Confederaciones contarán además con los órganos señalados en el artículo 63, salvo por lo que se refiere al Comité de Supervisión, los cuales se regirán conforme a lo previsto en el mismo.

Artículo 100.- La asamblea general podrá estar integrada, a elección de las Federaciones afiliadas:

I. Por un representante de cada Federación afiliada, o
II. A través de un sistema de representación proporcional, en el que se asignará a cada Federación afiliada el número de votos que le correspondan, considerando el número de Entidades, Socios y/o sus activos totales. En ningún caso, una Federación podrá representar más del veinte por ciento del total de votos.

Artículo 101.- El consejo de administración de la Confederación estará integrado por consejeros electos por la asamblea general, cuyo número no será menor de cinco ni mayor de quince, quienes deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20.

Los consejeros fungirán por un periodo máximo de hasta cinco años con posibilidad de una sola reelección. El presidente del consejo de administración tendrá voto de calidad en caso de empate.

Dicho consejo de administración podrá estar conformado hasta en un treinta por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de una Entidad o Federación.

Los consejeros tendrán la obligación de comunicar al presidente del consejo sobre cualquier situación en la que se pueda derivar un conflicto de interés y abstenerse de participar en la deliberación y resolución correspondiente.

Artículo 102.- El consejo de administración de la Confederación nombrará al gerente general, quien deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 66.

Artículo 103.- La vigilancia interna de la Confederación estará a cargo de un consejo de vigilancia y un contralor normativo, de un auditor interno o su equivalente, mismo que deberá determinarse en los estatutos de la Confederación correspondiente.

Los miembros del consejo de vigilancia, el auditor interno o su equivalente, deberán cumplir con los requisitos que para ser consejero de una Entidad señala el artículo 20.

Artículo 104.- Las Confederaciones deberán verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en esta Ley, por parte de las personas que sean designadas como consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y el contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, con anterioridad al inicio de sus gestiones. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, criterios relativos a los requisitos que las citadas personas estén obligadas a cumplir y lineamientos para su debido acreditamiento, así como para la integración de la documentación comprobatoria relativa.

En todo caso, las personas a que se refiere el párrafo anterior deberán manifestar por escrito a la Confederación de que se trate y bajo protesta de decir verdad, que no se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 21 de esta Ley.

Las Confederaciones deberán informar a la Comisión la designación de nuevos consejeros, gerente general, miembros del consejo de vigilancia y contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación.

Tratándose de consejeros, gerente general y miembros del consejo de vigilancia, incluyendo al contralor normativo, del auditor interno o su equivalente, la Comisión tendrá la facultad de veto.

Capítulo IV
Del Fondo de Protección

Artículo 105.- Las Entidades deberán participar en el sistema de protección a ahorradores denominado Fondo de Protección, que deberá constituirse por cada Confederación de conformidad con lo señalado en el artículo 107.

Para tales efectos, las Entidades afiliadas a una Federación deberán participar en el Fondo de Protección constituido por la Confederación de la cual la Federación sea integrante.

Las Federaciones que no formen parte de una Confederación, deberán convenir con alguna Confederación que sus Entidades afiliadas participen en su Fondo de Protección. La Comisión procederá en términos del artículo 37, con las Federaciones que no logren convenir lo anterior.

Tratándose de Entidades no afiliadas, éstas deberán solicitar a alguna Confederación participar en su Fondo de Protección, y en caso de que ésta acepte, la Entidad deberá convenir con alguna Federación miembro de la Confederación respectiva la celebración de un contrato de supervisión auxiliar.

Excepcionalmente y a juicio de la Comisión, las Entidades no afiliadas podrán establecer su propio Fondo de Protección, cumpliendo con los requisitos establecidos en las disposiciones de carácter general que al efecto emita la Comisión, el cual en ningún caso podrá brindar menores beneficios para los ahorradores que los previstos en el presente Capítulo.

Artículo 106.- El Fondo de Protección tendrá como fin primordial procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por una cantidad equivalente a cuatro mil, seis mil, ocho mil y diez mil unidades de inversión para los Niveles de Operaciones I, II, III y IV, respectivamente, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Entidad, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.

Asimismo, tendrá como fin otorgar apoyo financiero a las Entidades que se ubiquen en los supuestos señalados en el artículo 92, siempre y cuando esta opción se considere razonablemente menos costosa que el pago de los depósitos de dinero de los ahorradores.

Excepcionalmente, el Fondo de Protección podrá otorgar apoyos preventivos de liquidez a las Entidades que participen en el mismo, siempre y cuando se cuente para ello con:

I. Que la Entidad esté cumpliendo, o haya cumplido con las medidas correctivas que la Federación le haya impuesto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de esta Ley;
II. Un estudio técnico elaborado por auditor externo y aprobado por el Comité Técnico, que justifique la viabilidad de la Entidad, la idoneidad del apoyo y que resulte en un menor costo para el Fondo;
III. Un programa de restauración de capital, y
IV. El otorgamiento de garantías a satisfacción del Fondo de Protección.

La suma de los montos de los apoyos preventivos de liquidez que otorgue el Fondo de Protección, en ningún momento podrá exceder del quince por ciento del patrimonio de dicho Fondo.

Una vez cubierto el pago por parte de la Entidad de los apoyos otorgados, el Comité Técnico podrá levantar las medidas que le hayan sido impuestas a la Entidad, de conformidad con lo establecido en el programa de restauración de capital.

Las Entidades tendrán la obligación de informar a sus Socios, Clientes, así como al público en general, sobre los términos y condiciones del Fondo de Protección en el que participen.

Artículo 107.- Cada Confederación deberá constituir un fideicomiso de administración y garantía, en cuyo contrato deberá señalarse como fideicomitente a la Confederación de que se trate, como fideicomitentes por adhesión a las Entidades que participen en el Fondo respectivo y como fiduciaria a alguna institución de crédito. De igual forma, deberá preverse la existencia de un Comité Técnico que tendrá las facultades que se establecen en el artículo 111 de esta Ley, correspondiéndole además la adopción de las medidas tendientes a la administración y destino de los recursos existentes en el Fondo de Protección para el evento de que fuera revocada la autorización de la Confederación respectiva.

Artículo 108.- El Fondo de Protección se constituirá e integrará con las aportaciones mensuales que deberán cubrir las Entidades por este concepto a la Confederación correspondiente, mismas que se determinarán tomando en consideración el Nivel de Operaciones que podrá efectuar cada Entidad. Dichas aportaciones serán de entre 1 y 3 al millar anual sobre el monto de pasivos de la Entidad que sean objeto de protección conforme a lo dispuesto por el artículo 106 de esta Ley. El rango dentro del cual se ubicarán las aportaciones y la forma para calcular y pagar mensualmente la aportación respectiva, serán determinados por la Comisión a través de reglas de carácter general.

Los recursos que integren el Fondo de Protección, deberán invertirse en valores gubernamentales de amplia liquidez o en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, cuyas características específicas preserven cuando menos, su valor adquisitivo conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor, de conformidad con lo que determine la Comisión a través de reglas de carácter general.

Las Federaciones respectivas deberán entregar al Comité Técnico la información que éste requiera para determinar las aportaciones, de conformidad con el artículo 111, fracción I, de esta Ley.

El Comité Técnico podrá acordar la suspensión temporal del pago de las aportaciones al Fondo de Protección, cuando los recursos que integren el mismo representen cuando menos el cinco por ciento del total de depósitos de dinero de todas las Entidades que estén protegidos por dicho Fondo.

Artículo 109.- En el contrato de fideicomiso respectivo deberá preverse que para el cumplimiento de sus fines, el fiduciario tendrá, sin perjuicio de las demás atribuciones y obligaciones que las leyes le establecen, las siguientes:

I. Pagar hasta donde alcancen los recursos del Fondo, en forma subsidiaria, los depósitos de dinero a cargo de las Entidades, con los límites y condiciones a que se refiere esta Ley y los que se establezcan en las disposiciones de carácter general que emita la Comisión y en el propio contrato de fideicomiso;

II. Absorber los costos que se deriven de la aplicación de alguno de los mecanismos dispuestos en el artículo 90;

III. Realizar las operaciones y contratos de carácter mercantil o civil que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Fideicomiso;

IV. Coordinar, y en su caso, participar en procesos de fusión, escisión, venta, disolución y liquidación de las Entidades;

V. Comunicar a la Comisión y a la Federación respectiva las irregularidades que por razón de sus competencias les corresponda conocer;

VI. Otorgar financiamiento a las Entidades en los términos de esta Ley, como parte de los apoyos de liquidez a que se refiere el artículo 106, y

VII. Las demás que ésta y otras leyes prevean para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 110.- El Comité Técnico deberá estar integrado por cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes, que serán designados por el consejo de administración de la Confederación y aprobados por la asamblea general de la misma. Las Entidades podrán estar representadas en dicho Comité Técnico hasta por un máximo de tres miembros, cada uno debiendo representar a Entidades distintas.

El nombramiento de los miembros del Comité Técnico sólo podrá recaer en personas que reúnan los requisitos que fije la Comisión mediante reglas de carácter general.

Artículo 111.- El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades:

I. Calcular mensualmente el monto de las aportaciones que se pagarán para la constitución e integración del Fondo de Protección;
II. Instruir al fiduciario, sobre los valores gubernamentales de amplia liquidez o los títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, en los que deberá invertir los recursos del Fideicomiso en términos del artículo 108, segundo párrafo;
III. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Fideicomiso;
IV. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el fiduciario sobre el manejo del patrimonio fideicomitido;
V. Hacer públicas las bases conforme a las cuales se procederá a pagar a los ahorradores, en los casos en que sea procedente dicho pago;
VI. Nombrar a las personas que se encargarán de la administración de la Entidad en sustitución del consejo de administración y del director o gerente general en el supuesto previsto en los artículos 75 y 77, quienes deberán cumplir con los requisitos que se refieren los artículos 20 y 23, respectivamente;
VII. Aprobar los casos en que proceda otorgar apoyos financieros a las Entidades en los términos del artículo 92 y 106;
VIII. Seleccionar alguno de los mecanismos a que se refiere la Sección Quinta, Capítulo II, Título Tercero de esta Ley, que corresponda en su caso a la Entidad;
IX. Determinar la forma y términos en que se ejercerán en su caso, los derechos corporativos y patrimoniales inherentes a los títulos a que se refiere el artículo 92;
X. Proponer o designar, en su caso, al liquidador o síndico, en caso de que una Entidad se encuentre en estado de liquidación o concurso mercantil, y
XI. Las demás que ésta y otras leyes prevean para el cumplimiento de su objeto, así como las que se prevean en el contrato constitutivo del Fondo.

Artículo 112.- Cuando alguna Entidad no cumpla en tiempo y forma con las aportaciones fijadas por el Comité Técnico del Fondo, deberá pagar los intereses moratorios que se establezcan en el contrato de fideicomiso correspondiente.

Para el cálculo de los intereses señalados, se deberá considerar por lo menos el interés que hubiesen generado las aportaciones no pagadas si se hubiesen aportado al Fondo de Protección.

Artículo 113.- Las Confederaciones, deberán informar mensualmente a la Comisión y a los ahorradores mediante avisos colocados en un lugar visible de las sucursales de las Entidades, sobre el estado que guarde el Fondo de Protección cuya vigilancia les haya sido encomendada, así como de los pagos que se hayan tenido que efectuar con arreglo a este Capítulo.

Artículo 114.- El Comité Técnico del Fondo podrá solicitar al Comité de Supervisión de la Federación que realice las visitas de inspección necesarias, a efecto de constatar la situación financiera, contable y legal de la o las Entidades participantes en los mecanismos a que se refiere el artículo 90.

Artículo 115.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106, se considerará el principal y los accesorios del depósito de dinero en cuestión que no hubieren sido pagados, independientemente de las tasas de interés pactadas para los depósitos de dinero a cargo de la Entidad, y descontando el saldo insoluto de los créditos con respecto de los cuales sea titular el ahorrador.

El monto a ser pagado a cada depositante de acuerdo a lo establecido en este Capítulo quedará fijado en unidades de inversión a partir de la fecha en que se declare la disolución y liquidación de la Entidad o se decrete su concurso mercantil. El pago de los depósitos se realizará en moneda nacional, por lo que la conversión del monto denominado en unidades de inversión se efectuará utilizando el valor vigente de la citada unidad en la fecha en que se cubra el pago correspondiente.

En caso de que un ahorrador tenga más de una cuenta en una misma Entidad y la suma de los saldos de éstas excediera la cantidad señalada en el artículo 106, el Fondo de Protección únicamente procurará cubrir dicho monto de cobertura, dividiéndolo a prorrata entre el número de cuentas.

La forma y términos en que se cubrirán las cantidades que correspondan se establecerán en las reglas de carácter general que al efecto emita la Comisión.

TÍTULO CUARTO
DE LA REGULACIÓN PRUDENCIAL Y DE LA CONTABILIDAD
Capítulo I
De la Regulación Prudencial

Artículo 116.- La Comisión emitirá lineamientos mínimos de regulación prudencial a los que deberán sujetarse las Entidades, en temas tales como provisionamiento de cartera, coeficientes de liquidez, las inversiones en obras de beneficio mayoritario, administración integral de riesgos, controles internos, procesos crediticios, mejores prácticas financieras y aquellos otros que juzgue convenientes para proveer a la solvencia financiera y la adecuada operación de las Entidades. También emitirá reglas relativas al

capital mínimo que deberán mantener las Entidades, así como los requerimientos de capitalización aplicables en función de los riesgos de crédito y, en su caso, de mercado en que incurran las Entidades.

Asimismo la Comisión también estará facultada para establecer las bases sobre las cuales deberán invertirse los excedentes de captación que tengan las Entidades del Nivel de Operaciones IV, así como para determinar la parte de los pasivos que deberá estar invertida en depósitos de efectivo, en valores de amplio mercado o en ambos tipos de inversiones.

Las Federaciones y Confederaciones deberán considerar como mínimo dichos lineamientos y reglas al momento de establecer las reglas prudenciales a que deberán sujetarse sus afiliadas y en su caso, las no afiliadas.

Capítulo II
De la Contabilidad

Artículo 117.- Todo acto o contrato que signifique variación en el activo, en el pasivo, en resultados o capital de una Entidad, o implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad. La contabilidad, los libros, y demás documentos correspondientes, así como el plazo que deberán conservarse se regirán por las reglas de carácter prudencial que al efecto expida la Comisión.

Las Entidades podrán microfilmar o grabar en cualquier medio que les autorice la Comisión, todos aquellos libros, registros y documentos en general que obren en su poder relacionados con los actos de la propia Entidad, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación o grabación, su manejo y conservación establezca la Comisión.

Los negativos originales de cámara o las imágenes grabadas por cualquier otro medio autorizado por la Comisión, obtenidos de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, así como las impresiones obtenidas de dichos sistemas o medios, debidamente certificadas por el funcionario autorizado de la Entidad, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados o conservados a través de cualquier otro medio autorizado.

Artículo 118.- La Comisión, mediante disposiciones de carácter general, quedará facultada para establecer la forma y los términos en que las Entidades deberán presentar y, en su caso, publicar sus estados financieros. La formulación y difusión de tales estados financieros será bajo la responsabilidad del consejo de administración de las Entidades, quien deberá cuidar que éstos revelen la verdadera situación financiera de la Entidad, y quedará sujeto a las sanciones correspondientes en el caso de que las publicaciones no se ajusten a esa situación.

Dichos estados financieros deberán ser presentados a la Federación que la supervise de manera auxiliar, junto con la información que dicha Federación les solicite al respecto, con la anticipación que determine la Comisión en reglas de carácter general.

La Federación, o en su caso la Comisión, podrán ordenar que se publiquen las correcciones a los estados financieros que considere necesarias, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución o del acuerdo correspondiente.

Artículo 119.- Los estados financieros anuales de las Entidades deberán ser dictaminados a su costa por un auditor externo independiente, quien será designado por la Entidad supervisada. El Comité de Supervisión tendrá la facultad de veto respecto a la designación efectuada. La Comisión en disposiciones de carácter general podrá eximir de dicho dictamen a las Entidades que tengan asignado los Niveles de Operaciones I y II.

El mencionado auditor, deberá comunicar a la Federación sobre los informes y demás elementos de juicio en los que sustente sus dictámenes. Si durante o como resultado de la auditoría, se encontraren irregularidades que afecten la estabilidad y solvencia de las Entidades, el auditor estará obligado a comunicar dicha situación a la Comisión y al Comité de Supervisión de la Federación. La propia Comisión mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer las características y requisitos que deberán cumplir los auditores externos, así como el alcance mínimo de sus dictámenes.

TÍTULO QUINTO
DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES
Capítulo Único

Artículo 120.- La Comisión tendrá además de las facultades que se le atribuyen en otros artículos de esta Ley, las que se señalan en este Capítulo.

Las Entidades, Federaciones y Confederaciones, deberán proporcionar a la Comisión toda la información que ésta les requiera para el adecuado cumplimiento de su tarea de supervisión.

Asimismo, la Comisión deberá solicitar la opinión de la Secretaría en relación con las disposiciones que aquélla emita en materia de créditos con partes relacionadas y requerimientos de capitalización; y del Banco de México, en materia de coeficientes de liquidez y operaciones en moneda extranjera. Asimismo,

cuando para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley, lo estime conveniente podrá solicitar la opinión de las mismas.

Artículo 121.- La documentación que utilicen las Entidades, Federaciones y Confederaciones relacionada con su objeto, deberá sujetarse a las disposiciones de esta Ley, las que emanen de ella y las demás que le sean aplicables. La Comisión podrá objetar en todo tiempo la utilización de la mencionada documentación, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, oscuridad o por cualquier otra circunstancia que pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios.

La Comisión podrá ordenar la suspensión de publicidad que realicen los sujetos de esta Ley, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, oscuridad o competencia desleal entre las mismas, o que por cualquier otra circunstancia pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios.

Artículo 122.- La Comisión podrá en todo tiempo acordar que se proceda a la remoción, de los miembros del consejo de administración, directores o gerentes generales, miembros del consejo de vigilancia o comisario, contralor normativo, miembros del Comité de supervisión, directores, gerentes o quienes ejerzan sus funciones en los términos de esta Ley, así como las demás personas que con sus actos puedan obligar a las Federaciones y Confederaciones, cuando considere que tales personas no cuentan con la suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley y a las disposiciones de carácter general que de ella deriven.

La propia Comisión podrá además, con acuerdo de su Junta de Gobierno, en el último supuesto señalado en el párrafo anterior, inhabilitar a las personas citadas para desempeñar un empleo, cargo, mandato o comisión en cualquiera de las Entidades u Organismos de Integración sujetos a esta Ley, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables.

Para imponer la inhabilitación la Comisión deberá tomar en cuenta:

I. La gravedad de la infracción y la conveniencia de evitar estas prácticas;
II. El nivel jerárquico, los antecedentes, la antigüedad y las condiciones del infractor;
III. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivados de la infracción, y
IV. La reincidencia.

Para la amonestación, suspensión, remoción, veto e inhabilitación, la Comisión deberá oír previamente al interesado y al representante de la Entidad, Federación o Confederación, según se trate.

Las resoluciones de la Comisión a que se refiere este artículo podrán ser recurridas ante la Secretaría dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que la misma se hubiere notificado. La Secretaría podrá revocar, modificar o confirmar, la resolución recurrida, con audiencia de las partes.

Artículo 123.- En los términos de la fracción VII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y de la Comisión, celebrará convenios con las Entidades Federativas, a efecto de que éstas ejerzan las funciones que se acuerde para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 124.- La Secretaría dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las Entidades, actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del Código Penal Federal, incluyendo la obligación de dichas Entidades de presentar a esa Secretaría, reportes sobre las operaciones y servicios que realicen con sus Socios o Clientes, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan.

Dichas disposiciones deberán considerar, entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de los Socios o Clientes, de las operaciones y servicios de las Entidades mencionadas, que tomen en cuenta sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones y los instrumentos monetarios con que las realicen, y su relación con las actividades de los Socios o Clientes; las plazas en que operen, y los usos y prácticas prevalecientes en el mercado; la debida y oportuna capacitación de su personal; y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias Entidades. El cumplimiento de la obligación de presentar reportes previstos en tales disposiciones, no implicará transgresión a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley.

Las disposiciones señaladas deberán ser observadas oportunamente por los miembros de los consejos de administración, consejos de vigilancia o comisarios, del Comité de Supervisión, auditores externos, funcionarios y empleados de las Entidades. La violación de las mismas, será sancionada por la Comisión de conformidad con lo establecido en el presente Título.

Tanto los servidores públicos de la Secretaría y de la Comisión, como los miembros de los consejos de administración, consejos de vigilancia o comisarios, del Comité de Supervisión, auditores externos, funcionarios y empleados de las Entidades y, en su caso, de los Organismos de Integración, deberán abstenerse de dar noticia o información de las operaciones previstas en el presente artículo, a personas,

Dependencias o Entidades distintas de las autoridades competentes expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

TÍTULO SEXTO
DE LAS SANCIONES, PENAS CONVENCIONALES Y DELITOS
Capítulo I
De las Sanciones y Penas Convencionales

Artículo 125.- El incumplimiento o la violación a las normas de la presente Ley y a las disposiciones que emanen de ella, serán sancionados con multa que impondrá administrativamente la Comisión y se hará efectiva por la Secretaría.

Corresponderá a la Junta de Gobierno de la Comisión la imposición de sanciones, la que podrá delegar esta atribución en el presidente y los demás servidores públicos de la misma, en razón de la naturaleza de la infracción o del monto de las multas y tendrá asimismo la facultad indelegable de condonar, en su caso, total o parcialmente las multas impuestas.

Para efectos de las multas establecidas en el presente Capítulo se entenderá por días de salario, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción.

En caso de reincidencia, se podrá aplicar multa equivalente al doble de la establecida para esa infracción.

Las Federaciones en su reglamento interior a que se refiere el artículo 55, establecerán penas convencionales a aplicarse a las Entidades afiliadas o sobre las que se ejerzan la función de supervisión auxiliar, en los términos estipulados con tales Entidades en el contrato respectivo. Dichas penas convencionales deberán ajustarse a los parámetros dispuestos en el presente Capítulo. A un solo acto u omisión de una Entidad no podrá aplicarse pena convencional y además las multas a que se refieren los artículos siguientes, por lo que las Federaciones y Comisión estarán coordinadas para el ejercicio de sus facultades.

Artículo 126.- Para la aplicación de las penas convencionales por parte de las Federaciones, así como de las multas previstas en este Capítulo, la Federación o, en su caso la Comisión, según se trate, deberán oír previamente al interesado y tomar en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de esta Ley.

Artículo 127.- Las penas convencionales y multas deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. En caso de que el interesado promueva cualquier medio de defensa establecido, y la pena o multa resultare confirmada total o parcialmente, según lo que proceda, su importe deberá ser cubierto inmediatamente una vez notificado de la resolución correspondiente.

Artículo 128.- En contra de las multas impuestas por la Comisión procederá el recurso de revocación, mismo que deberá interponerse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación y deberá agotarse antes de proceder por cualquier otro medio de impugnación.

Este recurso deberá interponerse ante la Comisión. En el escrito de impugnación, deberán expresarse el acto impugnado y los agravios que el mismo cause, ofreciendo en caso de contar con ellas, las pruebas que se juzguen convenientes.

Los actos y resoluciones de la Comisión podrán ser recurridos por los interesados, en los términos previstos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con excepción del Recurso de Revocación relativo a multas en el que será aplicable el Código Fiscal de la Federación, en su parte conducente.

Artículo 129.- Cuando no se expresen en el mencionado escrito el acto reclamado o los agravios causados, la autoridad competente podrá desechar por improcedente el recurso interpuesto. Si se omitieron las pruebas, se tendrán por no ofrecidas.

La resolución del recurso de revocación podrá ser: desechar por improcedencia, confirmar o mandar reponerlo por uno nuevo que lo sustituya, o revocar el acto impugnado, y deberá ser emitida en un plazo que no exceda a cuarenta y cinco días hábiles posteriores a aquél en que se interpuso el recurso cuando deba ser resuelto por el presidente de la Comisión, ni de sesenta días hábiles cuando se trate de recursos competencia de la Junta de Gobierno.

Lo dispuesto en este Capítulo, no excluye al infractor de la imposición de sanciones que conforme a ésta u otras leyes le fueren aplicables por la comisión de delitos.

Artículo 130.- El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, se sancionará con la imposición de las multas a que se refiere este Capítulo conforme a lo siguiente:

I. De 100 a 500 días de salario a las Entidades y Federaciones que no cumplan con el pago de las aportaciones fijadas por la asamblea general de afiliadas de la Federación, y en su caso de la Confederación, para el sostenimiento de las mismas;

II. De 100 a 500 días de salario a las Entidades que incumplan con los requerimientos, solicitudes de informes, acuerdos o resoluciones dictadas por la Federación, en el curso de los procedimientos de amigable composición y juicio arbitral de estricto derecho. En el caso del cumplimiento de resoluciones en amigable composición o en juicio arbitral, se entenderá que la Entidad incumple cuando transcurran quince días hábiles sin que hubiere ejecutado la resolución respectiva;

III. De 200 a 500 días de salario a las Entidades y Federaciones que no presenten a tiempo sus informes o la información requerida, por las Federaciones o Confederaciones;

IV. De 300 a 3,000 días de salario a las Entidades, Federaciones o Confederaciones que hagan caso omiso de los requerimientos de la Comisión o de la Secretaría a que se refiere esta Ley;

V. De 500 a 2,000 días de salario a las Entidades que no cumplan con las aportaciones para cubrir el Fondo de Protección;

VI. De 500 a 2,000 días de salario a las Entidades, Federaciones o Confederaciones que realicen publicidad engañosa o confusa;

VII. De 500 a 3,000 días de salario a las Entidades que obstaculicen las facultades que esta Ley y otras disposiciones aplicables le confieren a la Secretaría o a la Comisión;

VIII. De 500 a 4,000 días de salario a las Entidades que realicen operaciones prohibidas o distintas a las que les corresponden, de conformidad con el Nivel de Operaciones que le hubiera asignado la Comisión;

IX. De 500 a 3,000 días de salario a las Entidades, Federaciones o Confederaciones que no cumplan con los servicios y operaciones que se hayan pactado con sus Socios o Clientes, Entidades o Federaciones, según sea el caso;

X. De 500 a 4,000 días de salario a las Federaciones o Confederaciones que realicen actividades distintas a las de su objeto;

XI. De 1,000 a 2,000 días de salario a las Entidades que no lleven su contabilidad de acuerdo con los términos fijados por la Comisión;

XII. De 1,000 a 3,000 días de salario por el uso de las palabras a que se refiere el artículo 6o. de esta Ley, en el nombre de personas morales y establecimientos distintos a los autorizados para ello conforme al mismo precepto, y

XIII. De 1,000 a 3,000 días de salario a las Entidades, Federaciones y Confederaciones que no permitan las visitas de inspección de las Federaciones o de la Comisión, según se trate, o bien que obstruyan las labores de supervisión.

Artículo 131.- A las Federaciones que no cumplan con lo señalado en la presente Ley, se les impondrán las sanciones siguientes:

I. De 1,000 a 5,000 días de salario a las Federaciones que omitan aplicar a las Entidades las penas convencionales que correspondan en los términos del contrato respectivo;

II. De 3,000 a 6,000 días de salario a las Federaciones que oculten u omitan informar a la autoridad de problemas de insolvencia o liquidez por parte de las Entidades;

III. De 5,000 a 10,000 días de salario a las Federaciones que emitan dictamen favorable a favor de sociedades que no cumplen con los requisitos de esta Ley. La misma sanción se aplicará a las Confederaciones que afilien a Federaciones no autorizadas por la Comisión;

IV. De 5,000 a 10,000 días de salario a las Federaciones que no presenten los informes periódicos que la Comisión establezca en las disposiciones de carácter general respecto de las Entidades que supervisa;

V. De 5,000 a 10,000 días de salario a las Federaciones que no lleven a cabo las auditorías a los estados financieros de las Entidades en los términos señalados por esta Ley y las disposiciones que de ella emanen;

VI. De 1,000 a 5,000 días de salario al contralor normativo que no lleve a cabo las funciones de vigilancia conforme a lo que establece esta Ley;

Igual sanción se impondrá a la Federación o Confederación que por cualquier medio impida que el contralor normativo realice sus funciones de conformidad a lo previsto en esta Ley, y

VII. De 1,000 a 5,000 días de salario al consejero independiente que actúe en las sesiones del consejo de administración en contravención a la presente Ley y a las disposiciones que emanen de ella.

Artículo 132.- Se sancionará con multa de 1,000 a 5,000 días de salario a los notarios, registradores, o corredores públicos que tramiten o inscriban actos que incluyan operaciones prohibidas por esta Ley, o bien autoricen la celebración de operaciones reguladas por esta Ley a personas distintas a las Entidades, Federaciones y Confederaciones. La misma multa se impondrá cuando las personas mencionadas con anterioridad, actúen sin que medie la autorización de la Comisión para los casos en que ésta sea necesaria.

Capítulo II
De los Delitos

Artículo 133.- Se impondrá pena de prisión de 2 a 10 años y multa hasta de 5,000 días de salario a los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones que causen un perjuicio económico a algún Socio o Cliente por haber dispuesto para sí o para otro de la información a la que tiene acceso. Quien cometa esta conducta será responsable de cubrir los daños y perjuicios que hubiere causado.

Se impondrá hasta el doble de la pena antes señalada a los funcionarios antes mencionados o miembros del Comité Técnico que dispongan indebidamente para sí o para otro de los recursos que integran el Fondo y causen un perjuicio económico a los socios o clientes.

Artículo 134.- Se impondrá pena de prisión de 6 meses a 5 años y multa hasta de 2,000 días de salario:

I. A las personas que con el objeto de obtener un crédito, proporcionen a una Entidad datos falsos sobre sus activos o pasivos;

II. A los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos de algún integrante, autoricen u otorguen un crédito;

III. A los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones, que falsifiquen o alteren los estados financieros de las Entidades, y

IV. A los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades que hayan sido sancionadas con anterioridad por no proporcionar los estados financieros o la información requerida por la Federación o por la Comisión para sus labores de supervisión y vigilancia; y vuelvan a cometer dicha conducta. La misma pena se aplicará a quienes proporcionen dolosamente información falsa, imprecisa o incompleta.

Artículo 135.- Se impondrá pena de prisión de 6 meses a 5 años y multa hasta de 2,000 días de salario a los funcionarios de las Entidades que otorguen créditos a personas físicas o morales cuya insolvencia sea conocida. La misma pena se impondrá a los funcionarios de las Entidades que renueven los créditos vencidos a los Socios o Clientes que se encuentren en estado de insolvencia.

Artículo 136.- Se impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y multa hasta de 1,000 días de salario a los funcionarios, integrantes de los órganos de administración o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones que hayan sido beneficiados por su participación en el otorgamiento de créditos o que soliciten dinero o cualquier otra cosa para agilizar la tramitación o aprobación de algún crédito o servicio que se ofrezca.

Artículo 137.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se entenderá que las Entidades y los Organismos de Integración forman parte del Sistema Financiero, por lo que serán aplicables a dichos sujetos las sanciones previstas en dicho artículo.

Artículo 138.- Se impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y multa hasta de 5,000 días de salario a la persona física o a los consejeros, funcionarios y administradores de las personas morales que capten recursos del público en contravención de lo dispuesto por el artículo 7o. de esta Ley. Este delito se perseguirá únicamente mediante querella.

Para determinar la comisión de este delito, la autoridad competente podrá revisar la contabilidad y demás documentación de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, a las operaciones mencionadas, en cuyo caso, ordenará la suspensión inmediata de operaciones y procederá a la clausura de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral de que se trate. El procedimiento de inspección, suspensión de operaciones y clausura anterior es de interés público.

Artículo 139.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los delitos previstos en el presente Capítulo, que:

a) Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;

b) Permitan a los funcionarios o empleados de las Entidades, Federaciones o Confederaciones, alteren o modifiquen registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito;

c) Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse informar a sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;

d) Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito, o

e) Inciten u ordenen no presentar la petición correspondiente, a quien esté facultado para ello.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 5o., párrafos primero, tercero y quinto; 7o., párrafo primero; 8o., párrafo primero; 40, último párrafo; 45 Bis-3, párrafo primero; 51; 53 párrafo sexto, y se DEROGAN la fracción III del artículo 3o.; el párrafo segundo del artículo 6o.; los artículos 38-A a 38-Q; la fracción VII del artículo 40; el párrafo segundo del artículo 78, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 3o.-.....

I a II.-**.....**

III**.-** (Se deroga)

IV a VI.-**.....**

Artículo 5o.- Se requerirá autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la constitución y operación de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se trate de uniones de crédito.

.....

Tratándose de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México.

.....

Sólo las sociedades que gocen de autorización en los términos de esta Ley, podrán operar como almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito y empresas de factoraje financiero.

Artículo 6o.- .....

Segundo párrafo.- (Se deroga)

.....

Artículo 7o.- Las palabras organización auxiliar del crédito, almacén general de depósito, arrendadora financiera, unión de crédito, empresa de factoraje financiero, casa de cambio u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo podrán ser usadas en la denominación de organizaciones auxiliares del crédito o de las sociedades que se dediquen a actividades auxiliares del crédito, a las que haya sido otorgada la autorización, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

.....

Artículo 8o.- Las sociedades que se autoricen para operar como organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, deberán constituirse en forma de sociedad anónima, organizadas con arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes disposiciones que son de aplicación especial:

I a XII.- **.....**

Artículo 38-A.- (Se deroga)

Artículo 38-B.- (Se deroga)

Artículo 38-C.- (Se deroga)

Artículo 38-D.- (Se deroga)

Artículo 38-E.- (Se deroga)

Artículo 38-F.- (Se deroga)

Artículo 38-G.- (Se deroga)

Artículo 38-H.- (Se deroga)

Artículo 38-I.- (Se deroga)

Artículo 38-J.- (Se deroga)

Artículo 38-K.- (Se deroga)

Artículo 38-L.- (Se deroga)

Artículo 38-N.- (Se deroga)

Artículo 38-O.- (Se deroga)

Artículo 38-P.- (Se deroga)

Artículo 38-Q.- (Se deroga)

Artículo 40.- .**.....**

I a VI.- **.....**

VII.- (Se deroga)

VIII a XVII.- **.....**

.....

Las actividades a que se refieren las fracciones IX a XIII de este artículo, se efectuarán por medio de departamento especial.

Artículo 45 Bis-3.- Para constituirse y operar como Filial se requiere autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la

Comisión Nacional Bancaria y del Banco de México tratándose de almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y casas de cambio, o autorización de la Comisión Nacional Bancaria cuando se trate de Uniones de Crédito. Por su naturaleza estas autorizaciones serán intransmisibles.

.....

Artículo 51.- Las organizaciones auxiliares del crédito, sólo podrán descontar su cartera con o sin su responsabilidad, en instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico y organizaciones auxiliares del crédito del mismo tipo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar excepciones a esta disposición, oyendo a la Comisión Nacional Bancaria y al Banco de México.

Artículo 53.- .....

.....

.....

.....

.....

Las organizaciones auxiliares del crédito no podrán pagar los dividendos decretados por sus asambleas generales de accionistas, antes de dar por concluida la revisión de los estados financieros por la Comisión Nacional Bancaria. Sin embargo, dicho organismo, discrecionalmente, podrá autorizar el reparto parcial de dichos dividendos, en vista de la información y documentación que se le presenten.

.....

Artículo 78.- .....

I a X.- **.....**

Segundo párrafo (Se deroga)

.....

.....

.....

.....

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 26, 33 y 59; se deroga el artículo 87; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 10 y una fracción III al artículo 21 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:

Artículo 10.- .....

Se aplicará como legislación supletoria en materia de sociedades cooperativas, las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles en lo que no se oponga a la naturaleza, organización y funcionamiento de aquéllas.

Artículo 21.- .....

I. y II.- **.....**, y

III.- De ahorro y préstamo.

Artículo 26.- Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda.

Artículo 33.- Las sociedades cooperativas que tengan por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se regirán por esta Ley, así como por lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Artículo 59.- El Fondo de Educación Cooperativa será constituido con el porcentaje que acuerde la Asamblea General, pero en todo caso dicho porcentaje no será inferior al 1% de los excedentes netos del mes.

Artículo 87.- (Se deroga)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El artículo Primero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, con excepción de lo señalado en los artículos Transitorios siguientes.

El artículo Segundo del presente Decreto entrará en vigor a los dos años de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

El artículo Tercero del presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, con excepción del artículo 26 contenido en el mismo, el cual entrará en vigor a los dos años de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito y las Sociedades Cooperativas que tengan intención de sujetarse a los términos establecidos en la Ley de Ahorro y Crédito

Popular, deberán registrarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en un término no mayor a seis meses contados a partir de la publicación de este Decreto en el **Diario Oficial de la Federación**, manifestando al efecto su nombre, denominación, domicilio, número de socios y demás datos que sobre su actividad solicite dicho organismo.

TERCERO.- Las Sociedades de Ahorro y Préstamo, las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro, así como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y aquéllas que cuenten con secciones de ahorro y préstamo, constituidas con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, contarán con un plazo de dos años a partir de la fecha que establece el primer párrafo del artículo PRIMERO Transitorio anterior para solicitar de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para operar como Entidad, sujetándose a lo dispuesto por el artículo OCTAVO Transitorio y debiendo obtener el dictamen favorable de alguna Federación, con arreglo a lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Concluido el plazo anterior, las sociedades y las Uniones de Crédito que no hubieren obtenido la autorización referida deberán abstenerse de captar recursos, en caso contrario se ubicarán en los supuestos de infracción previstos por la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por las disposiciones que resulten aplicables.

CUARTO.- Las Sociedades de Ahorro y Préstamo y las Uniones de Crédito que capten depósitos de ahorro continuarán sujetas a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de lo establecido en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, hasta en tanto no se sujeten a lo señalado en el artículo TERCERO Transitorio.

QUINTO.- Los Organismos de Integración que sean autorizados conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la misma, contarán con un plazo de dos años a partir de su autorización, para cumplir con el número mínimo de diez Entidades y cinco Federaciones afiliadas, en términos del artículo 53 de la misma ley, según se trate.

SEXTO.- Sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5o. de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el Gobierno Federal podrá entregar recursos a los Fondos de Protección conforme se integren las Entidades a los mismos y en función del monto de los ahorradores de las Entidades. Dicha aportación será por única vez y a través de los mecanismos que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos a que hace referencia el párrafo anterior, no serán aplicables a las Entidades señaladas en el quinto párrafo del artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

SÉPTIMO.- Las Entidades autorizadas en los primeros dos años a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección, siempre y cuando hayan realizado aportaciones durante un plazo de 2 años.

Respecto de aquéllas que se constituyan con posterioridad a los dos primeros años de entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, podrán utilizar los recursos del Fondo de Protección a partir del cuarto año siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Lo dispuesto en este artículo deberá incluirse en el contrato de fideicomiso de los Fondos de Protección. Las Entidades deberán informar a sus Socios, Clientes y al público en general la fecha a partir de la cual iniciará la vigencia del sistema del Fondo de Protección respectivo, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

OCTAVO.- Para efectos de la fracción I del artículo 53 de la misma Ley, las Federaciones que soliciten su autorización dentro de un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, deberán presentar los documentos en que, a juicio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se manifieste la intención de cuando menos diez sociedades que cumplan con los requisitos del artículo 10o., con excepción de las fracciones II y IX, para afiliarse a dicha Federación.

NOVENO.- A partir de la fecha de inicio de vigencia establecida en el primer párrafo del artículo PRIMERO Transitorio, las Federaciones autorizadas administrarán de forma provisional los Fondos de Protección, hasta que dichas Federaciones formen parte de alguna Confederación autorizada o convengan con alguna de ellas el traspaso de los recursos que integran dichos fondos en los términos del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Concluido un plazo de dos años a partir del inicio de vigencia de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las Federaciones que no se encuentren en los supuestos contemplados en el párrafo anterior, podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una prórroga que no podrá exceder de dos años para continuar administrando el Fondo de Protección de sus Entidades, de lo contrario se ubicarán en la causal de revocación prevista por la fracción IX del artículo 60 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. En este último caso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con arreglo a las disposiciones de carácter general que emita al efecto, determinará el destino de los recursos que integran los Fondos de Protección respectivos.

DÉCIMO.- Al momento de instalarse el primer consejo de administración de una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo conforme a los términos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se determinarán por insaculación a los consejeros electos por la asamblea que fungirán en su encargo únicamente durante la primera mitad del periodo de duración determinado por la Entidad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación por mitad del consejo de administración.

Cuando el número de integrantes sea impar, se elegirá por insaculación durante la instalación del consejo de administración, al miembro excedente que formará parte de la primera mitad, a fin de proceder en periodos subsecuentes a la renovación parcial del mismo. En el caso del consejo de vigilancia, se procederá de la misma forma.

DÉCIMO PRIMERO.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 65 y 101 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se establecerá un periodo de transición a efecto de que los Organismos de Integración se ajusten al mismo, conforme a lo siguiente:

I. Durante los dos primeros años a partir de que obtengan el dictamen favorable, su consejo de administración podrá estar conformado hasta en un setenta y cinco por ciento del total de sus miembros, por consejeros o funcionarios de la Entidad, Federación o Confederación, según sea el caso, y

II. A partir del segundo año y hasta el final del tercer año, dicho porcentaje se reducirá hasta un cincuenta por ciento y a partir del cuarto año este porcentaje podrá ser hasta de un treinta por ciento.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomará las medidas pertinentes y proveerá lo necesario en términos de las disposiciones aplicables, para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros estén en posibilidad de cumplir con las funciones conferidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

DÉCIMO TERCERO.- Las solicitudes de autorización presentadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constituir y operar Sociedades de Ahorro y Préstamo, y que no hayan sido resueltas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se entenderán resueltas en sentido negativo, por lo que los interesados correspondientes podrán iniciar el procedimiento para obtener la autorización a que se refiere el artículo 9o. de la misma Ley.

Las solicitudes a que hace referencia el párrafo anterior serán devueltas a los interesados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de un plazo que no excederá de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la publicación de este Decreto en el **Diario Oficial de la Federación**.

DÉCIMO CUARTO.- Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de ciento ochenta días naturales para emitir la resolución a que se refiere el artículo 9 de la Ley citada, respecto de las solicitudes de autorización para operar como Entidad que le sean remitidas por las Federaciones.

DÉCIMO QUINTO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación de este Decreto para emitir todas las reglas y disposiciones de carácter general que deban ser formuladas según se señala en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

DÉCIMO SEXTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.

México, D.F., a 30 de abril de 2001.- Dip. **Ricardo García Cervantes**, Presidente.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Dip. **Manuel Medellín Milán**, Secretario.- Sen. **Yolanda González Hernández**, Secretaria.- Rúbricas**"**.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

OFICIO mediante el cual se concede autorización a Bank of Antigua Limited, para establecer en territorio nacional una oficina de representación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Secretaría Particular.- 101 - 778.

Bank of Antigua Limited 1000 Airport Boulevard West Indies Saint John's, Antigua y Barbuda

Hago referencia a sus diversos escritos, el último de ellos de fecha 15 de enero de 2001, mediante los cuales solicitan autorización de esta Secretaría para establecer en nuestro país una oficina de representación, de conformidad con lo dispuesto por las Reglas Aplicables al Establecimiento y Operación

de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 30 de mayo de 2000.

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7o. de la Ley de Instituciones de Crédito y 6o. fracción XXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después de escuchar las opiniones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México, esta Dependencia concede la siguiente autorización, en los términos que se indican:

PRIMERO.- En uso de la facultad que le confiere el artículo 7o. de la Ley de Instituciones de Crédito, esta Secretaría concede autorización a Bank of Antigua Limited, para establecer en territorio nacional una oficina de representación.

SEGUNDO.- En uso de la facultad que le confiere el artículo 105 de la Ley de Instituciones de Crédito, esta Dependencia concede autorización para que la citada oficina ostente la denominación: "Bank Of Antigua Limited, Saint John's, Antigua y Barbuda, Oficina de Representación en México".

TERCERO.- La presente autorización es, por su propia naturaleza jurídica, intransmisible.

CUARTO.- Esta Secretaría les manifiesta que no tiene inconveniente en que el señor David Nanes Schnitzer, actúe como representante de esa Institución en el país.

QUINTO.- La oficina de representación de Bank of Antigua Limited, en su operación y funcionamiento deberá observar en todo momento las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, las Reglas Aplicables al Establecimiento y Operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior, las orientaciones que de acuerdo con la política financiera señalen el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia Secretaría, así como las demás que por su naturaleza le resulten aplicables.

SEXTO.- En su oportunidad se servirán dar aviso a esta Dependencia, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, del domicilio y fecha de apertura de la oficina de representación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 18 de mayo de 2001.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.

(R.- 144920)

TASAS de recargos para el mes de junio de 2001.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TASAS DE RECARGOS PARA EL MES DE JUNIO DE 2001

Con fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 6o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001, y considerando que el cálculo previsto en este último precepto ha dado como resultado una tasa inferior a la establecida en el mismo, esta Secretaría da a conocer las siguientes tasas de recargos para el mes de junio de 2001:

I. 1.54% cuando se trate de autorización de pago a plazo, ya sea diferido o en parcialidades de las contribuciones y sus accesorios, y

II. 2.31% en los casos de mora y de intereses a cargo del fisco federal.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 22 de mayo de 2001.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría, el Subsecretario de Ingresos, **Rubén Aguirre Pangburn**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DECRETO por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

SE EXTINGUE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO Y SE ABROGA SU LEY ORGÁNICA

Artículo 1o.- Se decreta la extinción del organismo descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México, el cual conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación.

Artículo 2o.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, mediante la debida consolidación de su patrimonio y designará al liquidador responsable de ese proceso, quien realizará las siguientes funciones:

I. Ejercerá las atribuciones de apoderado general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, con todas las facultades generales y aun las especiales que de acuerdo con la Ley requieran poder o cláusula especial, así como para delegar su representación mediante poderes generales o especiales;

II. Levantará y certificará el acta de entrega-recepción de los bienes y recursos del Organismo;

III. Administrará los activos remanentes hasta su enajenación, donación o reversión;

IV. Llevará a cabo la regularización y tramitará la desincorporación de los activos remanentes, inclusive las casas habitación que han estado en posesión legítima de jubilados y pensionados de la empresa o sus sucesores para que, en su caso, se realice la donación correspondiente a Entidades Federativas, Municipios, pensionados y jubilados, instituciones públicas o privadas y asociaciones que no persigan fines de lucro, a fin de que sean utilizados para beneficio social, incluida la de asentamientos humanos con la intervención de las autoridades competentes, o bien, se proceda a su reversión al Gobierno Federal, o a su enajenación, sujetándose a lo previsto por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Asentamientos Humanos.
En el caso de reversión, los Gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y Municipios, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, para adquirir los bienes remanentes;

V. Dará cumplimiento a los asuntos pendientes según lo establecido en los diversos títulos de concesión del servicio público de transporte ferroviario, relacionados entre otros, con la protección del entorno, con base en las auditorías ambientales y los programas de restauración ambiental;

VI. Atenderá lo relativo a los juicios laborales, civiles, mercantiles y de cualquier otra índole que se encuentran en curso, así como a la resolución de los demás asuntos laborales en trámite. El Gobierno Federal responderá de manera subsidiaria, y en su caso, de manera solidaria a las obligaciones que pudiesen resultar al término de los juicios mencionados;

VII. Concluirá los expedientes relativos a la liberación y ocupación del derecho de vía, así como la atención a las disputas que se presenten, buscando solucionarlas en forma conciliatoria, rápida y oportuna;

VIII. Someterá anualmente al dictamen del auditor designado por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, los estados financieros del proceso de liquidación;

IX. Informará periódicamente a las Secretarías de Contraloría y Desarrollo Administrativo; de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes y de manera semestral al Congreso de la Unión, sobre el avance y estado que guarde el proceso;

X. Levantará y actualizará el inventario de los activos pertenecientes al Organismo, así como respecto de los pasivos a su cargo, y

XI. Las demás inherentes a sus funciones.

Artículo 3o.- Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo ejercerán las funciones que en el ámbito de sus atribuciones establecen los ordenamientos legales.

Artículo 4o.- Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al Contrato Colectivo de Trabajo aplicable y a la Ley, serán respetados. En toda época, el Gobierno Federal garantizará complementariamente el pago vitalicio de las pensiones otorgadas a los trabajadores jubilados y pensionados, de Ferrocarriles Nacionales de México, en el caso de que el fondo de jubilaciones sea insuficiente.

Artículo 5o.- Se abroga la Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 14 de enero de 1985.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a la fecha de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Segundo.- El pago de las pensiones no podrá ser retenido por ninguna circunstancia, salvo por decisión judicial.

México, D.F., a 26 de abril de 2001.- Sen. **Enrique Jackson Ramírez**, Presidente.- Dip. **Ricardo Francisco García Cervantes**, Presidente.- Sen. **Sara Castellanos Cortés**, Secretario.- Dip. **Manuel Medellín Milán**, Secretario.- Rúbricas**"**.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.

BANCO DE MEXICO

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones Aplicables a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy conforme al procedimiento establecido en el numeral 1 de las Disposiciones mencionadas, fue de $9.1735 M.N. (NUEVE PESOS CON UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente
México, D.F., a 1 de junio de 2001.
BANCO DE MEXICO

Gerente de Inversiones y Cambios Nacionales	Director de Disposiciones de Banca Central
Ricardo Medina Alvarez	**Fernando Corvera Caraza**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASAS de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASAS DE INTERES DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

	TASA BRUTA		**TASA BRUTA**
I. DEPOSITOS A PLAZO FIJO		II. PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
A 60 días		A 28 días	
Personas físicas	5.78	Personas físicas	5.35
Personas morales	5.78	Personas morales	5.35
A 90 días		A 91 días	
Personas físicas	5.30	Personas físicas	5.72
Personas morales	5.30	Personas morales	5.72
A 180 días		A 182 días	
Personas físicas	5.62	Personas físicas	5.91
Personas morales	5.62	Personas morales	5.91

Las tasas a que se refiere esta publicación, corresponden al promedio de las determinadas por las instituciones de crédito para la captación de recursos del público en general a la apertura del día 1 de junio de 2001. Se expresan en por ciento anual y se dan a conocer para los efectos a que se refiere la publicación de este Banco de México en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 11 de abril de 1989.

México, D.F., a 1 de junio de 2001.
BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones	Subgerente de Información

de Banca Central	para el Análisis Financiero
Fernando Corvera Caraza	**Maximino Chávez Sandoval**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASA de interés interbancaria de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO

Según resolución de Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 23 de marzo de 1995, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del propio Banco del 9 de enero de 1997, dirigida a las instituciones de banca múltiple, se informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, obtenida el día de hoy, fue de 12.3000 por ciento.

La tasa de interés citada se calculó con base a las cotizaciones presentadas por: BBVA Bancomer, S.A., Banca Serfin S.A., Banco Internacional S.A., Banco Nacional de México S.A., Citibank México S.A., IXE Banco, S.A., Banco Interacciones S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A., Banco Mercantil Del Norte S.A. y Bancrecer S.A.

México, D.F., a 1 de junio de 2001.

BANCO DE MEXICO

Gerente de Inversiones y Cambios Nacionales	Director de Disposiciones de Banca Central
Ricardo Medina Alvarez	**Fernando Corvera Caraza**
Rúbrica.	Rúbrica.

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 147/94, relativo a la segunda ampliación de ejido, promovido por un grupo de campesinos del poblado Francisco Sarabia, Municipio de Tuzantán, Chis.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Vistos para resolver los autos del juicio agrario número 147/94, que corresponde al expediente número 3068-A, relativo a la solicitud de segunda ampliación de ejido, promovida por un grupo de campesinos del poblado denominado "Francisco Sarabia", ubicado en el Municipio de Tuzantán, Estado de Chiapas, en cumplimiento a las ejecutorias dictadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintidós de mayo de dos mil, en los amparos directos números DA 1261/98 y D.A. 1271/98, promovidos por Pablo Hoffman Córdova y Edith Hoffmann Heinsohn de Rahmig, el primero y Tomás y Marión de apellidos Edelmann Blass, el segundo, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por Resolución Presidencial de cuatro de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el veinticinco de julio del mismo año, se dividió el ejido del poblado "San Antonio Xochiltepec", del Municipio de Tuzantán, Estado de Chiapas, asignándose una fracción de 972-04-00 (novecientas setenta y dos hectáreas, cuatro áreas), de terrenos de humedad, de temporal y de monte, al núcleo denominado "Francisco Sarabia", compuesto por 74 (setenta y cuatro) campesinos, más la parcela escolar.

SEGUNDO.- Por Resolución Presidencial de treinta y uno de enero de mil novecientos cuarenta, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el veintiuno de marzo del mismo año, se concedieron al poblado que nos ocupa, por concepto de ampliación de ejido, 1,907-56-00 (mil novecientas siete hectáreas, cincuenta y seis áreas), para beneficiar a 264 (doscientos sesenta y cuatro) campesinos; ejecutándose dicha resolución el treinta de abril del propio año.

TERCERO.- En escrito de diecisiete de febrero de mil novecientos setenta y ocho, un grupo de campesinos radicados en el poblado de referencia solicitó al Gobernador del Estado segunda ampliación de ejido, señalando como predios presuntamente afectables las fincas "El Portillo" y "Hannover", del Municipio de Tuzantán, "Irlanda" y "Santa Anita", del Municipio de Tapachula, Estado de Chiapas así como un terreno nacional innominado colindante con el ejido.

CUARTO.- La Comisión Agraria Mixta instauró el expediente el catorce de abril de mil novecientos setenta y ocho, con el número 3068-A.

La publicación de la solicitud se hizo en el número 18 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas, el tres de mayo de mil novecientos setenta y ocho.

QUINTO.- El Comité Particular Ejecutivo, designado en la solicitud, se integró por Rodolfo Argüeyo A., Santos Gordillo G. y Luis Vázquez M., como presidente, secretario y vocal respectivamente, a quienes el Ejecutivo Local expidió los nombramientos correspondientes.

SEXTO.- Mediante acta levantada el veinticinco de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, el investigador designado por la Comisión Agraria Mixta en el Estado para efectuar una inspección ocular con respecto al aprovechamiento de los terrenos entregados por dotación y ampliación de ejidos al poblado promovente, hizo constar que tanto las tierras de cultivo como las de uso común se encontraban "debidamente aprovechadas".

SEPTIMO.- La diligencia censal practicada arrojó 112 (ciento doce) capacitados, según acta de clausura levantada el veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y ocho.

OCTAVO.- En acta de asamblea levantada el trece de julio de mil novecientos ochenta y uno, la cual aparece firmada por 47 (cuarenta y siete) de los solicitantes, éstos tomaron el acuerdo de "renunciar definitivamente a nuestro propósito de ampliación", solicitando que se cancelara el expediente respectivo.

NOVENO.- La Comisión Agraria Mixta emitió dictamen el cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y uno, en el sentido de que era de negarse la acción intentada por el grupo peticionario, en razón de haberse desistido éste de su propósito.

DECIMO.- El veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y uno el Gobernador del Estado dictó mandamiento aprobando "...en todas sus partes el dictamen emitido por la Comisión Agraria Mixta", negando la segunda ampliación de ejidos solicitada, "...porque en el expediente hay constancias de que los propios solicitantes desisten de la acción".

Dicho mandamiento fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas el dieciocho de noviembre del mismo año.

No aparece de autos que el Delegado Agrario en la Entidad Federativa haya emitido opinión al respecto.

DECIMOPRIMERO.- Mediante oficio de veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y dos, el presidente de la Consultoría Regional del Cuerpo Consultivo Agrario en el Estado de Chiapas solicitó al Delegado Agrario en dicha Entidad que se investigaran "...las razones que motivaron a los campesinos para desistir de la acción y de no encontrarse alguna causal de improcedencia se realizaran los trabajos técnicos e informativos previstos en las fracciones II y III del artículo 286 de la Ley Federal de Reforma Agraria"; habiéndose comisionado para el efecto al licenciado Alfonso Gamboa González, quien levantó acta de la asamblea efectuada el veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y tres, en la cual se tomó el acuerdo de desconocer el documento firmado el trece de julio de mil novecientos ochenta y uno, solicitando "...que se integre nuevamente el expediente y se sigan los trámites correspondientes...".

DECIMOSEGUNDO.- La Coordinación Regional de Abatimiento del Rezago Agrario, Zona Costa-Istmo, Xoconusco y Sierra, mediante oficio de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, encomendó al topógrafo José Francisco Cox Sandoval la realización de trabajos técnicos e informativos complementarios, quien rindió su informe el quince de mayo de mil novecientos noventa y tres, en el cual manifiesta haber investigado 43 (cuarenta y tres) predios particulares, con superficies que varían de 3-00-00 (tres hectáreas) a 299-67-67 (doscientas noventa y nueve hectáreas, sesenta y siete áreas, sesenta y siete centiáreas), clasificadas de temporal, dedicados al cultivo de café, excepto uno de ellos "...que se dedica al cultivo de maíz y zacate estrella, así como al agoste de 122 (ciento veintidós) cabezas de ganado mayor y 50 (cincuenta) de menor".

Los predios investigados fueron: "El Portillo", "Rancho Viejo", "Independencia", "San Ramón", "El Chaparral", "Las Barrancas", "Lindavista", antes "El Calmo", "Las Delicias", "Cabañas del Miramar", "El Horizonte", "La Perla", "Las Maravillas", "San Enrique", "El Campamento", "El Triángulo", "Génova", "Las Chispas", "Santa Anita", "Hamburgo", "Sonora", "Irlanda", "El Recuerdo", "Samaria", "El Suspiro", "La Ceiba", "Nogales", "Las Palmas", "Villa Las Rosas", "Comitán", "Fracción II de la finca Germania hoy Miramar", "Germania", "San Cristóbal y Anexas", "San Cristóbal Fracción Santa Bárbara", "San Cristóbal Fracción La Aurora", "Germania", "Hannover hoy Río Negro", "Hannover II", "Santa Sofía", "Tiro Seguro" (formado por nuevas fracciones), "San Mateo", "Los Capulines", "El Amatillo" y "El Brasil".

Con respecto a los predios señalados en la solicitud, el comisionado consigna lo siguiente:

La finca "El Portillo", propiedad de Mario López Lena Barrios, con superficie de 299-67-67 (doscientas noventa y nueve hectáreas, sesenta y siete áreas, sesenta y siete centiáreas), amparada por certificado de inafectabilidad número 10127, expedido el dieciocho de marzo de mil novecientos cuarenta y siete, "...se encuentra cultivada con plantaciones de café de las variedades marago, catoahi y robusta (..) observándose instalaciones para la maquila, galleras, bodegas, cocina, oficina y casa principal..."

Las fincas "Hannover fracción I", y "Hannover Fracción II", propiedad de Ana María Rodríguez Avalos Contreras y de Juan Contreras Cepeda respectivamente, con superficie de 151-43-47 (ciento cincuenta y una hectáreas, cuarenta y tres áreas, cuarenta y siete centiáreas) cada una, sumando en total 302-86-94 (trescientas dos hectáreas, ochenta y seis áreas, noventa y cuatro centiáreas), amparadas por certificado

de inafectabilidad agrícola número 76203, expedido el diez de noviembre de 1981, según el comisionado ambas fracciones forman una sola unidad topográfica, sin delimitación entre ellas, estando cultivadas con café de diversas variedades.

Por lo que hace a la finca "Irlanda", con superficie de 299-36-76 (doscientas noventa y nueve hectáreas, treinta y seis áreas, setenta y seis centiáreas), amparada por certificado de inafectabilidad agrícola número 09997, expedido el diez de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco, la misma aparece dividida en cuatro fracciones, propiedad respectivamente de Ralf Otto Ernest Peters Grethel, Walter Peters Grethel, Imgard Peters Grethel y Compañía Peters Grethel, dedicadas al cultivo de café de diversas variedades, formando una sola unidad topográfica, siendo la producción total comercializada por una sola persona.

La finca "Santa Anita", ubicada en el Municipio de Huehuetán, Chiapas, propiedad de Edith Emilia Hoffmann Heinsohn de Rahmig, con superficie de 213-48-99 (doscientas trece hectáreas, cuarenta y ocho áreas, noventa y nueve centiáreas), amparada por certificado de inafectabilidad agrícola número 108110, expedido el cuatro de junio de mil novecientos cincuenta y cinco, forman según el comisionado una sola unidad topográfica con la finca "las Chispas", ubicada también en el Municipio de Huehuetán, perteneciente a Pablo Hoffmann Córdova, la cual tiene una superficie de 169-62-94 (ciento sesenta y nueve hectáreas, sesenta y dos áreas, noventa y cuatro centiáreas) y está amparada por certificado de inafectabilidad agrícola número 107712, expedido el veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, arrojando ambas superficies un total de 383-11-93 (trescientas ochenta y tres hectáreas, once áreas, noventa y tres centiáreas), por lo que se rebasa en 83-11-93 (ochenta y tres hectáreas, once áreas, noventa y tres centiáreas) el límite legal de la pequeña propiedad "...ya que estos terrenos de la familia Hoffmann son administrados por una sola persona y su producto y comercialización es manejado como una sola...".

El comisionado anota que igual situación guardan otras fincas no señaladas por los promoventes como objeto de afectación, denominadas: "Hamburgo", ubicada en el Municipio de Huixtla, Chiapas, con superficie de 287-09-22 (doscientas ochenta y siete hectáreas, nueve áreas, veintidós centiáreas) propiedad de Bárbara Guadalupe Blass de Edelmann, con certificado de inafectabilidad agrícola número 01353, expedido el veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y dos; y "Sonora", ubicada en el propio Municipio de Tapachula, Chiapas, con superficie de 220-23-87 (doscientas veinte hectáreas, veintitrés áreas, ochenta y siete centiáreas), propiedad de Eberhard Edelmann Dopp, amparada por certificado de inafectabilidad agrícola número 01358, expedido el veintitrés de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, cuyos productos y comercialización son manejados por una sola persona; sumando la superficie total de ambos predios 507-33-09 (quinientas siete hectáreas, treinta y tres áreas, nueve centiáreas); por lo que rebasan en 207-33-09 (doscientas siete hectáreas, treinta y tres áreas, nueve centiáreas) el límite de la pequeña propiedad.

Lista asimismo el comisionado dos predios, tampoco señalados por los promoventes, que encontró inexplotados: uno denominado "El Amatillo", ubicado en el Municipio de Tuzantán, Chiapas, propiedad de Salvador Puón Soto, con superficie registral de 60-19-32 (sesenta hectáreas, diecinueve áreas, treinta y dos centiáreas) el cual "...tiene aproximadamente dos a cuatro años de encontrarse abandonado sin causa justificada...", estando los terrenos cubiertos de monte bajo con altura de dos a cinco metros, no habiéndose observado ganado alguno; y otro denominado "El Brasil", ubicado en el mismo Municipio de Tuzantán, propiedad de Manuela Lay Aguilar de Puón, con superficie registral de 36-21-87 (treinta y seis hectáreas, veintiun áreas, ochenta y siete centiáreas), en el que sólo encontró 6-00-00 (seis hectáreas) cultivadas con cacao, estando la superficie restante de 30-21-87 (treinta hectáreas, veintiun áreas, ochenta y siete centiáreas) "...cubierta de monte alto, ya que se observaron árboles de 12 a 20 metros de altura y grosor de 0.20 metros a 0.80 metros (...) por lo que se deduce que este predio está inexplotado desde hace más de diez años sin causa justificada; no se observó ganado y tampoco se encontró construcción alguna y sus linderos no se encuentran delimitados".

Consigna por último el comisionado en su informe que dentro del radio de siete kilómetros del poblado en cuestión se ubican los ejidos "Xochiltepec", "Villa Hidalgo", "Flor de un Día", Chamulapita", "Tepehuitz", "Tuzantán", "Guadalupe Victoria", "El Triunfo", "Nueva Sonora", "Berriozábal", "Tenochitlán", "Agua Prieta", "San Cristóbal", "Manacal", "Zaragoza" y "Antonio Las Chicharras".

Al informe acompañó: las actas de inspección ocular levantadas el veintinueve y el treinta de julio de mil novecientos noventa y dos en cada uno de los predios investigados, firmadas por los propietarios o sus representantes, certificando la veracidad de las mismas la autoridad municipal del lugar; constancias expedidas por el Delegado del Registro Público de la Propiedad en Huixtla, Chiapas, con respecto a los datos de inscripción de los predios investigados; y copias de los oficios notificatorios girados a los propietarios el veintitrés de julio de mil novecientos noventa y dos los que aparecen firmados de recibidos

por sus destinatarios o representantes; quienes exhibieron copias certificadas de sus escrituras de propiedad y planos de sus predios, recibos fiscales y certificados de inafectabilidad.

Según acta levantada en el poblado que nos ocupa el treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y dos, el Comité Particular Ejecutivo y la totalidad de los solicitantes manifestaron su entera conformidad con los trabajos realizados por el ingeniero José Francisco Cox Sandoval, certificando dicha acta y la veracidad de su contenido la autoridad judicial del lugar.

DECIMOTERCERO.- Por instrucciones de la misma Coordinación Regional para el Abatimiento del Rezago Agrario, fue comisionado el licenciado Gabriel Citalán Trujillo, para que recabara de los registros públicos de Huxitla y de Tapachula, Chiapas, la historia registral de los predios particulares investigados; habiendo informado los encargados de dichos registros el seis y el veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres, respectivamente, con respecto a veintiséis predios el primero y trece predios el segundo, cuyas superficies fluctúan entre 3-00-00 (tres hectáreas) y 299-67-67 (doscientas noventa y nueve hectáreas, sesenta y siete áreas, sesenta y siete centiáreas), incluyéndose en los informes los datos registrales de los nueve predios relacionados en el resultando anterior.

DECIMOCUARTO.- El Cuerpo Consultivo Agrario emitió su dictamen el seis de octubre de mil novecientos noventa y tres, en el sentido de que procedía negar la acción agraria intentada "...por falta de fincas afectables entre las tocadas por el radio legal respectivo".

DECIMOQUINTO.- Una vez turnado el expediente a este Tribunal Superior, por auto de veintiuno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se radicó en el mismo, registrándose con el número 147/94 y fueron notificados los solicitantes y la Procuraduría Agraria.

DECIMOSEXTO.- Con sendos escritos de seis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, Pablo Hoffmann Córdova, propietario del predio "Las Chiapas y Anexos" y Emilia Hoffmann Heinsohn, propietaria del predio "Santa Anita", presentaron diversas pruebas documentales, consistentes en copias certificadas de sus escrituras de propiedad y de los certificados de inafectabilidad que amparan sus predios, así como constancias expedidas por Bancomer, S.A. de Tapachula, con respecto a los servicios financieros solicitados a dicho Banco para cubrir necesidades de sus fincas y recibos fiscales expedidos por el Gobierno de Chiapas; formulando alegatos tendientes a demostrar la explotación de dichos predios.

DECIMOSEPTIMO.- Mediante escrito de siete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, Ramón, Eliecer Armando, Miguel Angel, Martha Adelina, Adela Concepción y Cecilia Natalia, todos de apellido Puón Lay, sucesores hereditarios de Manuela Lay Aguilar, propietaria de los predios "El Brasil" y "El Amatillo", exhibieron copias certificadas de los títulos de propiedad y planos de dichos predios, del testamento de dicha señora, boletas del pago de impuestos prediales y constancias expedidas por la autoridad municipal de Tuzantán, Chiapas y por la Asociación Agrícola Local de Productores de Cacao del mismo lugar, relativas a la explotación de los mismos con ganadería y cultivos de maíz y cacao. Asimismo exhibieron copia del certificado de inafectabilidad agrícola número 0926173, expedido el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos a Manuela Lay Aguilar, con respecto al primero de dichos predios, amparando una superficie de 36-21-87 (treinta y seis hectáreas, veintiun áreas, ochenta y siete centiáreas) de temporal; así como copia del certificado de inafectabilidad ganadera número 279329, sin fecha de expedición, otorgado a Manuela Lay viuda de Puón con respecto al segundo de estos predios, amparando una superficie de 57-00-00 (cincuenta y siete hectáreas) de agostadero de buena calidad.

DECIMOCTAVO.- Por escrito de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, compareció Ramón Puón Lay, por su propio derecho, exhibiendo copias fotostáticas de diversos documentos e inconformándose con el procedimiento que se ventila en este expediente.

DECIMONOVENO.- Por acuerdo de veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cinco, se dispuso conceder a los propietarios de los predios "las Chispas y su Anexo Santa Anita", "Sonora" y "Hamburgo", "El Amatillo" y "El Brasil", el plazo de treinta días señalado en el artículo 419 de la Ley Federal de Reforma Agraria para que rindieran pruebas y formularan alegatos en relación con la posible cancelación de los certificados de inafectabilidad que amparan dichos predios; habiéndose notificado ese proveído incidental el primero de junio de mil novecientos noventa y cinco por el Actuario del Tribunal Unitario del Distrito 4, con sede en Tapachula, Chiapas, a Eberhard Hedelmann Doop, propietario del predio "Sonora"; y a Bárbara Guadalupe Blass de Edelmann, propietaria del predio "Hamburgo", a Ramón Puón Lay, albacea de las sucesiones de Salvador Puón Soto, propietario del predio "Brasil" y de Manuela Lay Aguilar, propietaria del predio "El Amatillo"; y por rotulón fijado en los estrados del propio Tribunal Unitario el mismo primero de junio de mil novecientos noventa y cinco a Pablo Hoffmann Córdova y a Edith Emilia Hoffmann Heinsohn de Rahmig, propietarios de los predios "Santa Anita" y "Las Chispas"; notificándose también a Ramón, Eliecer Armando, Miguel Angel, Martha Adelina, Adela Concepción y Cecilia Natalia Puón Lay, causahabientes por sucesión testamentaria de Salvador Puón Soto y de Manuela Lay Aguilar.

El señalado término de treinta días corrió del dos de junio al tres de julio de mil novecientos noventa y cinco, según razón puesta por el Secretario General de Acuerdos de este Tribunal Superior.

VIGESIMO.- Mediante escrito de veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y cinco, Tomás Edelmann Blass, como apoderado legal de Bárbara Guadalupe Blass de Edelmann y Eberhard Edelmann Doop, propietarios de las fincas "Hamburgo" y "Sonora", respectivamente, alegó la incompetencia de este Tribunal Superior para conocer del procedimiento de cancelación aludido en el resultando anterior, así como la falta de "...fundamento y motivación..." de dicho procedimiento; ofreciendo sin embargo, ad cautelam, las siguientes pruebas:

a) Copias certificadas de las escrituras de propiedad y planos de los referidos predios;

b) Copias certificadas de las actas de nacimiento de Bárbara Guadalupe Blass Bewueber y de matrimonio de dichos propietarios.

c) Copias certificadas de los planos de los predios en mención y del plano del predio inscrito en el Registro Agrario Nacional;

d) Copia certificada del certificado de inafectabilidad 01353, expedido el veintiuno de julio de mil novecientos cuarenta y dos;

e) Copia certificada del recibo de pago del impuesto predial, fechado el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco;

f) Constancia expedida por el Banco Unión el quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco y constancia expedida por la Unión Agrícola Regional de Productores de Café Tacana, el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

g) Copia certificada del poder general otorgado al compareciente.

Además ofreció la pericial en materia de topografía, formulando el cuestionario correspondiente; la inspección ocular en los predios pertenecientes a sus representados; la testimonial y la presuncional en su doble aspecto legal y humano; habiendo formulado los alegatos de su intención.

VIGESIMOPRIMERO.- Por escrito de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, presentado el veintinueve del propio mes ante este Tribunal, Pablo Hoffmann Córdova y Edith Emilia Hoffmann Heinsohn de Rahmig, propietarios de los predios "Las Chispas" y "Santa Anita", respectivamente, ofrecieron pruebas y formularon alegatos, sosteniendo la incompetencia de este Tribunal para conocer del procedimiento de cancelación de los certificados de inafectabilidad que amparan dichos predios y "...en su defecto la falta de fundamento y motivación..." de ese procedimiento.

Las pruebas ofrecidas fueron:

a) Copias certificadas de las escrituras de propiedad y planos de los predios que se dejan mencionados;

b) Copias certificadas del acta de nacimiento de Edith Emilia Hoffmann Heinhson de Rahmig;

c) Copias certificadas de los certificados de inafectabilidad números 107712 y 108110 relativos a los mismos predios;

d) La pericial en materia de topografía, conforme al cuestionario que en el propio escrito formulan;

e) La pericial contable, con arreglo a los puntos que al respecto consignan los oferentes;

f) La de reconocimiento o inspección ocular que el personal de este Tribunal llevara a cabo en cada uno de los predios de los oferentes.

g) La testimonial, al tenor del interrogatorio que formularían a las personas que presentarían en el local del Tribunal;

h) Las fotografías, escritos y demás documentos que llegaran a aportar en el presente juicio; y

i) La presuncional, en su doble aspecto legal y humana.

En el mismo escrito produjeron los alegatos de su intención.

Mediante escrito presentado el dos de junio de mil novecientos noventa y cinco, recibido el siete del propio mes, ofrecieron nuevas pruebas documentales, consistentes en: recibos de pago del impuesto predial que abarcan los trimestres a cuarto de mil novecientos noventa y cinco; constancias expedidas por Bancomer, S.A., el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco; constancias expedidas por Seguros Inbursa, S.A.; cartas de recomendación expedidas por Exportadora de Café California, el dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco; cartas expedidas por la Unión Agrícola de Productores de Café Tacana, el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco; y copia simple del acuerdo de inafectabilidad de veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el primero de diciembre de ese año.

VIGESIMOSEGUNDO.- En escrito de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, recibido en este Tribunal el veintinueve del mismo mes, Ramón Puón Lay, por su propio derecho y en representación de Eliecer Armando Miguel Angel, Martha Adelina, Adela Concepción y Cecilia Natalia, todos de apellido Puón Lay, desahogaron la vista que se les mandó dar con el acuerdo de este Tribunal, alegando ser falso que sus predios "El Amatillo" y "El Brasil" se hubieran realizado trabajos técnicos e informativos, como resultado de los cuales dichos predios "se encontraron abandonados por sus

propietarios y sin señales de explotación durante un periodo mayor de dos años consecutivos, sin causa de fuerza mayor que lo justificara"; ofreciendo como pruebas.

- La inspección ocular de sus referidos inmuebles;
- Los informes que rindieran el Presidente y el Juez Municipal de Tuzantán, con respecto a la explotación continua de dichos predios:
- Constancias expedidas por el Presidente de la Asociación Local de Productores de Cacao sobre la explotación ganadera de los mismos predios;
- Constancia extendida por el Recaudador de Hacienda del Estado en el Municipio de Tuzantán, sobre el trabajo ininterrumpido de los predios en el ramo de café y cacao;
- Constancia del Comisariado Ejidal de Tuzantán, relativa a la explotación con ganadería del rancho "El Amatillo" y en el ramo de café y cacao el rancho "El Brasil";
- Constancia expedida por el Juez Municipal de Tuzantán, sobre la explotación de los predios en cuestión;
- Constancia del Comisariado Ejidal de la Primera Sección del poblado solicitante, sobre la explotación consecutiva del predio "El Amatillo" en ramo de ganadería y del predio "El Brasil" en el ramo de café y cacao;
- Constancias suscritas por el Presidente Municipal de Tuzantán sobre la explotación de los repetidos predios;
- Los trece documentos y trece fotografías exhibidos como probanzas con escrito de siete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

En el propio escrito formuló el compareciente los alegatos que consideró pertinentes.

Las testimoniales ofrecidas por los propietarios, así como las periciales topográfica y contable y las inspecciones judiciales, fueron desahogadas en sus términos.

VIGESIMOTERCERO.- El seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, este Tribunal Superior pronunció sentencia, en los siguientes términos:

"PRIMERO.- Procede cancelar y se cancelan parcialmente los certificados de inafectabilidad agrícola números 107712 y 108110, que amparan los predios "SANTA ANITA" y "LAS CHISPAS", ubicados ambos en el Municipio de Huehuetán, Estado de Chiapas, propiedad de Edith Emilia Hoffmann Heinsohn de Reahmig y Pablo Hoffmann Córdova, respectivamente, por lo que hace al excedente de 83-11-93 (ochenta y tres hectáreas, once áreas, noventa y tres centiáreas) que globalmente considerados arrojan dichos predios sobre el límite legal de la pequeña propiedad, con base en el artículo 418 fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria.

"SEGUNDO.- Procede cancelar y se cancelan parcialmente los certificados de inafectabilidad agrícola números 01353 y 01356, que amparan respectivamente los predios "HAMBURGO" Y "SONORA", propiedad de Bárbara Guadalupe Blass de Edelmann y Eberhard Edelmann Doop, respectivamente, ubicados el primero en el Municipio de Huixtla y el segundo en el Municipio de Tapachula, Estado de Chiapas, por lo que hace al excedente de 207-33-09 (doscientas siete hectáreas, treinta y tres áreas, nueve centiáreas) que globalmente considerados arrojan dichos predios sobre el límite legal de la pequeña propiedad, con base en el artículo 418 fracción I de la Ley Federal de Reforma Agraria.

"TERCERO.- Es procedente la segunda ampliación de ejido promovida por campesinos del poblado denominado "FRANCISCO SARABIA", del Municipio de Tuzantán, Estado de Chiapas.

"CUARTO.- Es de concederse y se concede al poblado "FRANCISCO SARABIA", del Municipio de Tuzantán, Estado de Chiapas, segunda ampliación de ejido en una superficie total de 290-45-02 (doscientas noventa hectáreas, cuarenta y cinco áreas, dos centiáreas) de terrenos de temporal que se tomarán en la forma siguiente: 83-11-93 (ochenta y tres hectáreas, once áreas, noventa y tres centiáreas) de los predios "Santa Anita" y "Las Chispas", propiedad respectivamente de Edith Emilia Hoffmann Heinsohn de Reahmig y Pablo Hoffmann Córdova, ubicados en el Municipio de Huehuetán, Chiapas; superficie excedente del límite legal de la pequeña propiedad que arrojan dichos predios considerados como una unidad topográfica y económica, con fundamento en el artículo 209 de la Ley Federal de Reforma Agraria; y 207-33-09 (doscientas siete hectáreas, treinta y tres áreas, nueve centiáreas) de la unidad topográfica y económica constituida por los predios denominados "Hamburgo" y "Sonora", propiedad respectivamente de Bárbara Guadalupe Blass de Edelmann y Eberhard Edelmann Dopp, ubicados dichos predios, el primero en el Municipio de Huixtla, y el segundo en el Municipio de Tapachula, Estado de Chiapas, superficies excedentes del límite legal de la pequeña propiedad que arrojan estos predios, con el mismo fundamento legal antes invocado; para beneficiar a los 112 (ciento doce) campesinos capacitados cuyos nombres se anotan en el considerando segundo del presente fallo".

Inconformes con la sentencia de mérito, Edith Emilia Hoffmann Heinsohn de Reahming y Pablo Hoffmann Córdoba, propietarios de los predios "SANTA ANITA" y "LAS CHISPAS", que comprenden la superficie de 83-11-93 (ochenta y tres hectáreas, once áreas, noventa y tres centiáreas), que mandaba afectar la sentencia impugnada, por una parte y por la otra, Tomás y Marion de apellidos Edelmann Blass,

propietarios de los predios "HAMBURGO" y "SONORA", que comprenden la superficie de 207-33-09 (doscientas siete hectáreas, treinta y tres áreas, nueve centiáreas), que mandaba afectar también la sentencia de referencia, interpusieron sendos juicios de garantías ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que fueron registrados con los números D.A. 1261/98 y 1271/98, respectivamente. El Tribunal Federal de mérito pronunció las ejecutorias relativas el veintidós de mayo de dos mil, ambas en los siguientes términos:

"UNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE a Pablo Hoffman Córdoba y Edith Hoffmann de Rahming (a Tomás Edelmann Blass y a Marion Edelmann Blass, como causahabientes de Eberhard Edelmann Dopp y Bárbara Guadalupe Blass de Edelmann), en contra de la sentencia dictada el seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete por el Tribunal Superior Agrario en el expediente número 147/94."

En la parte relativa de ambas ejecutorias dictadas en los referidos juicios de garantías, el Tribunal Colegiado consideró que:

"...resultan fundados y suficientes para conceder la protección solicitada los conceptos de violación en los que sustancialmente alegan los quejosos, por una parte, que la fracción I del artículo 418 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en que pretendió apoyarse la autoridad responsable totalmente inaplicable al caso, ya que de ninguna manera se colma la hipótesis prevista en dicha fracción para efecto de la cancelación de los certificados de inafectabilidad de los quejosos. Y por otra, que tampoco se surten los extremos del artículo 209 de la Ley de la Reforma Agraria ya que no constituye motivo de cancelación de los certificados de inafectabilidad, que amparan dos pequeñas propiedades en explotación, se trabajen juntas por cada uno de sus propietarios con un mismo objetivo (...) para que pueda cancelarse un certificado de inafectabilidad, aun en forma parcial, el titular del certificado (sic) extensiones de tierra que, sumadas a la amparada por el certificado, resulten en una superficie mayor a la de la que la ley considera inafectable, precisamente por dejar de ser, el predio resultante, una pequeña propiedad y constituirse en una propiedad afectable para efectos agrarios. Ahora bien, en el presente caso, como afirman los quejosos, no se satisfacen los extremos de dicho precepto legal en cuanto que no existe, en los asuntos del procedimiento agrario, prueba alguna con la que se pudiera válidamente determinar que los ahora quejosos, titulares de los certificados de inafectabilidad agraria 107712 y 108110 (01258 y 01353), hubieran adquirido extensión alguna, de cualquier superficie o extensión, de tal forma que no puede aplicarse lo dispuesto por el mencionado precepto legal, en la fracción que la responsable considera como la que se surte en la especie (...) Por el contrario, está probado en autos que cada uno de los quejosos es propietario, individualmente, de los predios que defienden en este juicio de garantías, circunstancia que fue reconocida por la propia responsable en la resolución, reclamada en el resultando duodécimo visible a fojas 106 de los autos del Tribunal Superior Agrario.- En las relatadas circunstancias es claro que la situación de los quejosos no encuadra en la hipótesis de la norma invocada por la responsable para decretar la nulidad parcial de los certificados de inafectabilidad agrícola de los que son titulares, lo que es suficiente para otorgarles la protección de la Justicia Federal que solicitan.- Por otra parte, también asiste la razón a los quejosos cuando afirman que los predios que defienden no pueden considerarse, como resolvió la responsable afectables proindiviso y en interdependencia, ya que se trata de pequeñas propiedades "...en explotación personal así como su administración por cada uno de nosotros los propietarios (...) que legítimamente adquirimos cada uno de nosotros en términos de ley...".- En efecto, el artículo 209 que sirve de fundamento legal al Tribunal responsable, contienen varios extremos que deben colmarse para considerar que se está en presencia de dos o más predios que resultan afectables para la dotación de ejidos (...).- Ahora bien, en el presente caso quedó demostrado con las pruebas desahogadas en el procedimiento agrario, que los predios que defienden los quejosos no se encuentran en las hipótesis antes mencionadas, para considerarlos como un solo predio y, por tanto, afectables para la dotación solicitada por el poblado tercero perjudicado (...).- En este caso, como se mencionaba, no quedó plenamente probado que los predios en cuestion se encontraban proindiviso, ya que independientemente de que ambos terrenos tienen diversos propietarios, la posesión o aprovechamiento de ellos en común no se establece en tanto que quedó demostrada su explotación individual con las pruebas topográfica, testimonial, pericial contable y de inspección judicial que se desahogaron durante el procedimiento agrario".

VIGESIMOCUARTO.- En principio de cumplimiento de las ejecutorias de mérito, por autos de diecinueve de junio de dos mil, este Tribunal Superior ordenó.

En relación a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo D.A. 1261/98: "PRIMERO.- Se deja parcialmente insubsistente la sentencia definitiva de seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, emitida por este Tribunal Superior Agrario en el expediente del juicio agrario 147/94, que corresponde al expediente administrativo agrario 3068-A, relativo a la segunda ampliación de ejido al

poblado "Francisco Sarabia", del Municipio de Tuzantán, Estado de Chiapas, únicamente por lo que se refiere a la superficie de 83-11-93 hectáreas que defienden los aquí quejosos."

En relación a la ejecutoria pronunciada en el amparo directo D.A. 1271/98; "PRIMERO.- Se deja parcialmente insubsistente la sentencia definitiva de seis de noviembre de mil novecientos noventa y siete, emitida por este Tribunal Superior Agrario en el expediente del juicio agrario 147/94, que corresponde al expediente administrativo agrario 3068/A, relativo a la segunda ampliación de ejido al poblado "Francisco Sarabia", Municipio de Tuzantán, Estado de Chiapas, Ahora bien, cabe hacer la aclaración que con motivo del diverso juicio de amparo 1261/98, promovido por Pablo Hoffmann Córdova y Edith Hoffmann Heinshn de Rahmig, mediante acuerdo aprobado en esta misma Sesión Plenaria, este Organo Jurisdiccional dejó parcialmente insubsistente la citada sentencia por cuanto hace a la superficie de 83-11-93 hectáreas, que sumadas a las 207-33-09 hectáreas que defienden los aquí quejosos hacen un total de 290-45-02 hectáreas, superficie con que originalmente fue dotado el poblado al rubro citado, de tal manera que ha quedado totalmente insubsistente la sentencia impugnada." y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- Esta sentencia se dicta en cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintidós de mayo de dos mil, en los amparos directos números D.A. 1261/98 y D.A. 1271/98, promovidos por Pablo Hoffmann Córdova y Edith Hoffmann Heinsohn de Rahmig, el primero y por Tomás y Marion de apellidos Edelmann Blass, el segundo, a fin de restituir a los quejosos en el pleno goce de las garantías individuales violadas, con fundamento en los artículos 80, 104 y 105, de la Ley de Amparo.

TERCERO.- La capacidad individual y colectiva de los solicitantes quedó acreditada en los términos del artículo 197 fracción II y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que la diligencia censal arrojó un número de 112 (ciento doce) campesinos del poblado que nos ocupa con capacidad agraria individual.

CUARTO.- Se observaron en el presente juicio las formalidades procesales establecidas por los artículos 272, 275, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 304 y demás relativos de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Quedó igualmente acreditada la procedibilidad de la acción ejercitada, mediante la inspección ocular que se llevó a cabo en los terrenos concedidos por concepto de dotación y primera ampliación al ejido en donde radica el grupo de solicitantes, verificándose que dichos terrenos estaban debidamente aprovechados; quedando satisfecho el supuesto del artículo 241, del ordenamiento legal antes invocado.

QUINTO.- Los trabajos técnicos e informativos realizados por el topógrafo José Francisco Cox Sandoval, siguiendo instrucciones de la Coordinación Regional de Abatimiento del Rezago Agrario, de los que informó el quince de mayo de mil novecientos noventa y tres, revelaron la existencia de 16 (dieciséis) núcleos ejidales ubicados dentro del radio de siete kilómetros del poblado gestor, cuyos terrenos son inafectables de conformidad con lo establecido por los artículos 52 y 53 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por cuanto a los predios particulares ubicados dentro del mismo radio, del informe rendido por el propio comisionado se desprende que se trata en su mayoría de propiedades inafectables, dada su extensión, calidad de tierras y tipo y grado de explotación, ajustándose a lo dispuesto por los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria; siendo de advertirse que veinte de dichos predios se encuentran amparados por certificado de inafectabilidad.

SEXTO.- Con respecto a los predios señalados en la solicitud como susceptibles de afectación, caben las consideraciones siguientes:

La finca "El Portillo", del Municipio de Tuzantán, Chiapas, con superficie de 299-67-67 (doscientas noventa y nueve hectáreas, sesenta y siete áreas, sesenta y siete centiáreas), propiedad anterior de Mario López Lena Castillo y posteriormente de María Hilda López Lena Barrios de Martínez, Magda Alicia López Lena Barrios Jakel, Mario López Lena Barrios y Sonia López Lena Barrios, según informe del Delgado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Huixtla, Chiapas, proporcionado el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, amparada por certificado de inafectabilidad agrícola número 10127, expedido el dieciocho de marzo de mil novecientos cuarenta y siete, se encuentra dedicada al cultivo de cafetales, contando con las instalaciones adecuadas para su beneficio, según consigna este comisionado en su informe de quince de mayo de mil novecientos noventa y tres y en el acta de inspección ocular que levantó con relación a dicho predio el veintinueve de julio de mil novecientos

noventa y dos; por lo que esta finca es inafectable conforme a lo dispuesto por los artículos 249 fracción III, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

La finca "Hannover", del mismo Municipio de Tuzantán, compuesta de dos fracciones con superficie registral de 151-43-17 (ciento cincuenta y una hectáreas, cuarenta y tres áreas, diecisiete centiáreas) cada una, propiedad anteriormente de Ana María Rodríguez Avalos Contreras y Juan Contreras Cepeda, respectivamente y con posterioridad de Ana María Avalos de Contreras y Gerhardet Alexander Carlos Veerkamp Kahle, en el mismo orden, según informe del Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Huixtla, Chiapas, proporcionado el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, tampoco resulta afectable, por encontrarse dichas fracciones cultivadas con cafetales, según el informe rendido por el propio comisionado y el acta de éste levantó el treinta de julio de mil novecientos noventa y dos, sin que destruya esta consideración la circunstancia de formar ambas fracciones una sola unidad topográfica, sin línea divisoria entre ellas, atentas las mismas disposiciones legales que en el párrafo anterior se mencionan, no siendo de tomarse en cuenta el excedente de 2-86-94 (dos hectáreas, ochenta y seis áreas, noventa y cuatro centiáreas), al no rebasar el límite tolerable establecido por el artículo 3o. del Reglamento de Inafectabilidad Agrícola y Ganadera, en relación con el artículo 1o. inciso f) del propio ordenamiento.

Resulta asimismo inafectable la finca "Irlanda", ubicada en el Municipio de Huehuetán, Chiapas, compuesta por cuatro fracciones que arrojan un total de 299-36-76 (doscientas noventa y nueve hectáreas, treinta y seis áreas, setenta y seis centiáreas), de temporal propiedad de Ralf Otto Ernest Peters Grethel, Walter Peters Grethel, Imgard Peters Grethel y Compañía Peters Grethel, toda vez que dichas fracciones se encuentran dedicadas al cultivo de café, teniendo la infraestructura adecuada para su objeto; no importando que forman una sola unidad topográfica y económica, ya que su extensión no excede el límite señalado por el artículo 249 fracción III de la Ley Federal de Reforma Agraria para la pequeña propiedad, tratándose de explotaciones de café atento además lo establecido por los artículos 250 y 251 del mismo ordenamiento.

SEPTIMO.- Con respecto a la finca denominada "Santa Anita", del Municipio de Huehuetán, propiedad de Edith Emilia Hoffmann Heinsohn de Rahmig, con superficie escritural de 213-48-99 (doscientas trece hectáreas, cuarenta y ocho áreas, noventa y nueve centiáreas), de temporal, asimismo señalada en la solicitud que originó este expediente, el comisionado, ingeniero José Francisco Cox Sandoval, asienta en su informe de quince de mayo de mil novecientos noventa y tres, que dicha finca forma una sola unida topográfica con la finca "Las Chispas", del mismo Municipio, perteneciente a Pablo Hoffmann Córdova, la cual tiene una superficie registral de 169-62-94 (ciento sesenta y nueve hectáreas, sesenta y dos áreas, noventa y cuatro centiáreas) de temporal, sin que exista línea divisoria entre ambos predios, los que son administrados por una sola persona y su producto y comercialización manejados también como una unidad; por lo que el propio comisionado considera que la extensión global de ambos predios, o sean 383-11-93 (trescientas ochenta y tres hectáreas, once áreas, noventa y tres centiáreas) rebasa en 83-11-93 (ochenta y tres hectáreas, once áreas, noventa y tres centiáreas) el límite legal de la pequeña propiedad señalado por el artículo 249 fracción III de la Ley Federal de Reforma Agraria.

La inspección ocular ofrecida por los propietarios, fue desahogada el cinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, por el Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuatro, según acta relativa de esa fecha, en la que se hace constar, respecto de la finca "SANTA ANITA", que ésta colinda al sur con la finca "Las Chispas" y "...no se encuentra cercada sino que tiene como delimitantes cercos vivos; (...) el casco de la finca se encuentra en una superficie aproximada de 2-00-00 hectáreas y cuenta con las siguientes instalaciones: la casa principal llamada también "la casa grande", que es donde viven los propietarios de la finca, esta construcción tiene todos los servicios necesarios para llevar una vida cómoda, tiene sala, comedor, cocina, una recámara principal, estancia, un baño, estudio, además tiene un anexo de tres recámaras que sirven para recibir a las visitas; en la parte de atrás se aprecia un gallinero y un jardín, hortalizas para el cultivo de legumbres para el uso de la finca; un poco más abajo de la casa principal se hallan "dos pequeñas presas (...) para reserva que alimenta a las turbinas del beneficio y el dínamo que abastece de luz a la finca; se menciona también que hay otras instalaciones, tales como la casa del administrador, beneficio húmedo que sirva para procesar el café y que consta de sifón recibidor, tanques de fermentación pulperos y canales para el transporte del producto y al lavado y secado de los patios que son tres; hay casillas para guardar el café ya seco, construidas de madera forrada de lámina de zinc; en la parte de más abajo se observan las oficinas administrativas y bodegas para guardar el café seco; y en los bajos están las secadoras y maquinaria antigua, contando con el beneficio seco antiguo; se puede ver que hay otra bodega de material de ladrillo con la planta bajo terminada con instalaciones para el beneficio seco moderno, que consta de un motor para ser trabajado a maquinaria, que es toda nueva y sirve asimismo de bodega y cochera. Existen dos construcciones: una

que sirve de capilla y la otra que es utilizada como clínica del Seguro Social, que está bien equipada y que es atendida por un médico de dicha institución...".

Por cuando al predio " Las Chispas" el Actuario comisionado señala que "...colinda al norte y al oriente con la finca "SANTA ANITA", (---) se halla cercada con cerco vivo, cuenta con un apiario en producción, almacigo con aproximadamente con 35,000 plantas de café; dentro de los terrenos se manejan cuatro aboneras para material orgánico que producen fertilizante natural para las tierras; se observó gente trabajando en ellas; en el casco de dicha finca se observaron 24 cuartos que se utilizan para que vivan los trabajadores en tiempo de cosecha; (...) hay además 11 construcciones que son aprovechadas por la gente que labora en la finca apreciándose que están habitadas y tienen los servicios necesarios para ser utilizados actualmente; cuenta dicha finca con cocina de las llamadas "cocinas para solteros" y tiene una tortilladora que abastece del producto a la gente que vive allí; además dos tiendas de abarrotes que expenden diversidad de productos; hay luz eléctrica y radio de comunicación puestos por el propietario de la finca; fueron tomadas fotografías que serán agregadas a esta inspección judicial, para darle mayor explicación a la diligencia del estado en que se hallan dichas fincas...".

El acta que se menciona aparece firmada por el Actuario aludido y por los dos propietarios de los predios investigados.

Por lo que hace a la prueba pericial topográfica ofrecida por los propietarios, ésta tuvo por objeto "...determinar la pequeña propiedad, deslinde de medidas y colindancias y explotación de los inmuebles analizados...", según manifiesta el perito de los propietarios, Ingeniero Rafael Bejarano Buyoli, en su dictamen de veintitrés de julio de mil novecientos noventa y cinco; y también "...determinar las delimitaciones y linderos entre fincas, así como caminos de comunicación internos...". De acuerdo con el dictamen complementario rendido por el propio perito el veintinueve de agosto del citado año, entre ambas fincas hay rondas de separación de dos metros aproximadamente y los predios se delimitan con mojoneras de concreto, estando delimitados por "...cercas vivas y naturales, sin poder precisar su antigüedad..."; delimitaciones que admite el propio perito del núcleo gestor, Ingeniero Carlos Alberto Zenteno Blanco, en su dictamen de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, según el cual las mojoneras que señalan el límite de los predios "...pueden tener unos 30 años de antigüedad..."; anotando también este último perito, que existen caminos vecinales y brechas que comunican a las dos fincas y que en la finca "Las Chispas" se tienen los viveros, mismos que abastecen a las dos fincas para la resiembra, agregando, "...se puede apreciar que el predio se encuentra debidamente explotado." Este último perito acompañó a su informe fotografías de las mojoneras y brechas que separan ambas fincas y de los señalamientos con árboles pintados para marcar la división; advirtiéndose de las mismas que la pintura de los señalamientos y la limpieza de las brechas es reciente.

Por lo que respecta a la pericial contable ofrecida asimismo por los propietarios, el perito designado por éstos, Luis Daniel Nolasco de Gyves, manifiesta en su dictamen de diez de agosto de mil novecientos noventa y cinco, que cada una de las fincas en estudio lleva su propio sistema contable y tiene su propio registro tanto en la Secretaría de Hacienda como en el Instituto Mexicano del Seguro Social, situación que confirma el perito Jorge Francisco Gómez Ventura, designado por el Tribunal Unitario en rebeldía del núcleo solicitante, en su dictamen de seis de junio de mil novecientos noventa y seis.

Por lo que hace a la testimonial ofrecida por los propietarios de los dos predios que nos vienen ocupando, a cargo de Roberto Vázquez Muguerza, Jesús Hernández Flores y Nelson Rodolfo Arango Sinto, desahogada durante la audiencia relativa, celebrada en el Tribunal Unitario Agrario que diligenció el despacho correspondiente, reveló que la cosecha levantada en el predio "Las Chispas", se beneficia, almacena y comercializa, en la finca "Santa Anita", según lo manifestaron dichos testigos al deponer sobre los hechos respecto de los cuales versó la prueba.

OCTAVO.- Por lo que respecta a los predios "El Amatillo", con superficie escritural de 60-19-32 (sesenta hectáreas, diecinueve áreas, treinta y dos centiáreas), amparado por certificado de inafectabilidad ganadera número 279320, y "El Brasil", con superficie escritural de 36-21-87 (treinta y seis hectáreas, veintiun áreas, ochenta y siete centiáreas), amparado por certificado de inafectabilidad agrícola número 0926173, ambos ubicados en el Municipio de Tuzantán, Chiapas, antes propiedad de Manuela Lay Aguilar viuda de Puón y actualmente de sus herederos Ramón, Eliecer Armando, Miguel Angel, Martha Adelina, Adela Concepción y Cecilia Natalia, todos de apellido Puón Lay, cabe considerar que las pruebas documentales ofrecidas por estos últimos en escritos de siete de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro y veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, consistentes en constancias expedidas por el Presidente Municipal de Tuzantán, Chiapas, por el Juez Municipal en funciones del mismo lugar y por el Recaudador de Hacienda del Estado en el mismo Municipio, en el sentido de que los predios "El Amatillo" y "El Brasil" vienen siendo explotados por dichos propietarios el primero con ganadería y el segundo con cultivos de café, dichas constancias carecen de valor probatorio, al ser expedidas por autoridades que no tienen competencia para ello, por referirse a materias ajenas a sus funciones; ello de acuerdo con la jurisprudencia siguiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"CERTIFICACIONES OFICIALES.- La Suprema Corte de Justicia ha sentado jurisprudencia en el sentido de que las certificaciones expedidas por las autoridades sobre asuntos ajenos a sus funciones, no tiene ningún valor jurídico, y para utilizar su dicho en lo que no se refiere a dichas funciones es preciso promover la prueba testimonial con arreglo a derecho" (tesis número 59, Página 105, Octava Parte, de la compilación 1917-1975).

Por cuanto a la constancia que expide el Presidente de la Asociación Local de Productores de Cacao, la misma es ineficaz para acreditar la explotación a que se refiere, dado que se trata de un testimonio que debe ser recibido conforme a las disposiciones que rigen la prueba testimonial.

Por lo que respecta a las trece fotografías exhibidas por los mismos interesados para acreditar la explotación de ganado vacuno y porcino, así como de cultivos de maíz y cacao en sus terrenos, dichas fotografías carecen de valor probatorio al no estar autentificadas por la autoridad agraria competente.

Ahora bien, aunque los inmuebles de referencia fueron encontrados en estado de abandono y sin explotación al parecer por más de dos años, según consigna el comisionado ingeniero José Francisco Cox Sandoval en el informe que rindió el quince de mayo de mil novecientos noventa y tres, mencionado en el resultando duodécimo, la inspección ocular practicada por el licenciado Abelardo Monzón Hernández actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 4, con sede en la Ciudad de Tapachula, Chiapas, según acta que levantó el seis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, dicho comisionado hizo constar lo siguiente: "...nos constituimos primeramente en el predio denominado "EL AMATILLO", y después de recorrerlo completamente . . . se da fe que el citado predio tiene una superficie aproximada de 60-00-00 hectáreas... cultivada en unas partes de maíz, cuya cosecha ya fue recogida, pero se aprecia que ya se sembró nuevamente ... . en aproximadamente 20-00-00 hectáreas); asimismo se observó que hay otra fracción de terreno que está cultivada de mango, sin poder especificar la especie, con partes de pastura natural que se utiliza también para que paste (sic) el ganado la otra parte del terreno se aprecia con pastura natural y es aprovechada para que se alimenten las cabezas del mismo ganado, contándose 20 cabezas de ganado vacuno pastando en los potreros; en relación a las instalaciones se menciona que en aproximadamente 00-50-00 hectáreas se halla construido el casco de la finca, el cual cuenta con una casa de ladrillo de aproximadamente 20 metros de frente por 12 metros de fondo, con piso de cemento techo de lámina de zinc en partes y teja de barro en otras, con dos habitaciones y pasillos, así como un baño; se apreciaron además dos toriles donde duerme el ganado, con chiquero para los becerros, un baño para ganado, así como también una porqueriza ... con 28 puercos grandes y 60 chicos; ... una bomba para agua y un pozo artesiano con brocal de concreto. A continuación nos trasladamos al predio "EL BRASIL", el cual después de haber sido recorrido se hace constar lo siguiente: cuenta con una superficie aproximada de 36-00-00 hectáreas, las cuales se hayan cultivadas de café y cacao, con árboles frutales y maderables, dándose fe que la cosecha de café ha sido recogida en forma parcial, o sea se dio la primera mano de corte del mismo haciéndose mención de que se apreciaron aproximadamente 4-00-00 hectáreas que no están cultivadas; solicitando la palabra el C. Eliecer Armando Puón Lay, manifestó que no las ha cultivado por falta de recursos económicos, así como también que como son tierras de temporal es necesario dejar que se enmonten para poder volver a cultivar y produzcan ... . En este acto solicita la palabra el C. Rodolfo Argüello Aguilar, Presidente del Comité Particular Ejecutivo y manifiesta que el C. Comandante de la Policía Municipal de Tuzantán, Chiapas, le dijo que los puercos que están en el predio denominado "EL AMATILLO", son propiedad de la Presidencia Municipal, así como también la bomba de agua que está allí mismo, sin poderlo acreditar en este momento por no contar con la documentación a su alcance, pero que lo hará en su momento 'procesal oportuno; que es todo lo que tiene que manifestar, con lo que se da por terminada la presente diligencia...".

Como el acta antes referida, levantada por el Actuario del Tribunal Unitario, constituye prueba plena conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en este caso, en relación dicho numeral con el artículo 129 y con el artículo 212 del citado ordenamiento, sin que haya sido desvirtuada por constancias fehacientes, debe concluirse que los citados predios "EL AMATILLO" y "EL BRASIL" son pequeñas propiedades debidamente explotadas y por lo mismo inafectables de conformidad con los artículos 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y, en consecuencia, también resulta improcedente la cancelación de los certificados de Inafectabilidad Agrícola números, 279320 y 0926173, sin fecha de expedición, pero que fueron inscritos en el Registro Agrario Nacional el primero de abril de mil novecientos ochenta y seis, que amparan los predios antes citados, respectivamente.

NOVENO.- Por lo que se refiere a las fincas denominadas "Hamburgo", con superficie registral de 287-09-22 (doscientas ochenta y siete hectáreas, nueve áreas, veintidós centiáreas), ubicada en el Municipio de Huixtla, Chiapas, y "Sonora", con extensión de 220-23-87 (doscientas veinte hectáreas, veintitrés áreas, ochenta y siete centiáreas), ubicada en el Municipio de Tapachula, Chiapas, propiedad de Tomás y Marion de apellidos Edelmann Blass, causahabientes de Eberhard Edelmann Dopp y Bárbara Guadalupe

Blass de Edelmann, respectivamente, el comisionado, Ingeniero José Francisco Cox Sandoval, manifestó en su informe de quince de mayo de mil novecientos noventa y tres, que dichas fincas "...forman una sola unidad topográfica y no existe línea alguna que las divida entre sí físicamente..."; además, de que "...el producto y comercialización es manejado por una sola persona..." y no existe en el predio "Sonora" instalaciones para la maquila del café, ni contratos con la finca "Hamburgo" para esa maquila. El informe de que se trata es respaldado por los datos que anota el comisionado en el acta de inspección ocular que levantó en relación a los predios en cuestión el veintinueve de julio de mil novecientos noventa y dos, la cual corre agregada a los autos (fojas 329). Con base en esto, el comisionado señala, que al sumar las superficies de los dos predios, que debe considerarse como una sola propiedad, resulta una superficie total de 507-33-09 (quinientas siete hectáreas, treinta y tres áreas, nueve centiáreas), por lo que, considerando el tipo de explotación, calidad y extensión, excede en 207-33-09 (doscientas siete hectáreas, treinta y tres áreas, nueve centiáreas), los límites de la pequeña inafectable para el caso.

En cuanto a las pruebas ofrecidas por los propietarios, se tiene lo siguiente: la inspección judicial fue desahogada el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco en los predios antes mencionados, por el actuario del Tribunal Unitario Agrario Distrito cuatro, según acta relativa de esa fecha, de la cual se desprende que en la finca "Hamburgo" se encuentran las principales instalaciones para el beneficio y guarda del café cosechado, así como el casco de la finca, la iglesia, la escuela, la clínica, taller de reparaciones, bodegas, planta de energía eléctrica, la casa principal que ocupan las habitaciones de los propietarios y las oficinas administrativas; mientras que en la fracción "Sonora" se localizan las viviendas de los trabajadores, los viveros y otras construcciones, así como una pista de aterrizaje.

La prueba pericial topográfica, por su parte, dio como resultado, de acuerdo a los dictámenes de los peritos de tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco, que efectivamente, como lo señala el comisionado de la Secretaría de la Reforma Agraria, no existe delimitación física entre los predios "Hamburgo" y "Sonora" con alambrados de púas y postes; pero que sí existen mojoneras de concretos, brechas y árboles de primavera, y que, independientemente de esa delimitación, ambas fincas constituyen una unidad administrativa y agroindustrial, o sea, una unidad económica.

En cuanto a la pericial contable, se debe señalar que ésta dio como resultado que cada predio tiene su propio registro estatal, por lo que hace a sus obligaciones fiscales, e igualmente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La testimonial viene a corroborar los resultados de las anteriores pruebas, en cuanto a que el beneficio del producto se encuentra en el predio "Hamburgo", así como las oficinas, bodegas, cocina, taller y demás instalaciones comunes a ambos predios.

Ahora bien, el artículo 209, de la Ley Federal de Reforma Agraria, establece que "... se considerarán como una sola propiedad (...) los inmuebles que siendo de varios dueños sean poseídos proindiviso..."; pero que "...no se considerarán como un solo predio los terrenos de pequeños propietarios que personalmente exploten sus tierras y se organicen en cooperativas de comercialización de su producción agrícola (...), o que exploten colectivamente sus tierras, mientras no transmitan su propiedad a la cooperativa." De donde resulta que en el caso de los predios "Santa Anita" y "Las Chispas", por una parte y "Sonora" y "Hamburgo", por la otra, no se dan las hipótesis legales que constituye las condiciones sine qua non para determinar la afectabilidad de un predio rústico. Pues sí es cierto que existen elementos para inferir una explotación colectiva respecto de los predios en cuestión, tal hecho no los constituye como un solo predio para efectos de derecho agrario; ya que la ley establece como excepción el que los propietarios exploten personalmente sus tierras y lo hagan en cooperativas de comercialización de su producción y no transmitan su propiedad a la cooperativa.

En el presente caso quedó probado en los autos, mediante las pruebas desahogadas en el procedimiento agrario, como son las inspecciones oculares practicadas por el comisionado de las autoridades agrarias y por el actuario del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuatro; así como con las periciales topográfica y contable, valoradas en los términos del artículo 202, en relación con el 129 y 212 y 211 respectivamente del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, que el predio "Santa Anita" respecto del diverso "Las Chispas" y el predio "Sonora" respecto del denominado "Hamburgo", no se encuentran en las hipótesis legales mencionadas, para considerarlos como un solo predio, y por tanto, afectables para la ampliación del núcleo solicitante, como enseguida se mostrará.

En la especie, no se trata de predios que pertenezcan a un solo dueño, sino de predios cuyos propietarios se acreditaron individualmente su propiedad, en los términos de las escrituras públicas que acompañaron a sus escritos de prueba y alegatos y a las constancias recabadas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, por la propia autoridad agraria, que hacen prueba plena de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Además, independientemente de que los predios pudieran estar proindiviso, lo cual no quedó plenamente probado, lo cierto es que el artículo 209, de la Ley Federal de Reforma Agraria, excluye de dicha presunción legal a

aquellos predios que, siendo pequeñas propiedades sean explotados especialmente por sus dueños, mientras se conserven en propiedad de cada uno de sus dueños, sin transmitirla a la entidad social que lleve a cabo la explotación.

Lo que la ley pretende evitar, es la existencia de un terreno afectable de un solo propietario que, para evitar la afectación, simulará pequeñas propiedades de aparentes (no reales) propietarios, cuando en realidad estuviera siendo aprovechado en beneficio del que es único dueño y poseedor, condicionando la explotación colectiva de la tierra a una afectiva y real propiedad y posesión, a favor de cada uno de quienes se ostenten como tales. De esta forma, la calidad de posesión proindiviso se establece en un predio cuando dos o más personas las poseen, sin que exista la división ni material ni jurídica, o idealmente, ya que los propietarios de los predios no los han dividido y los aprovechan en común y sin distinguir de cuál es el que posee cada uno, independientemente de la calidad de propietarios, que respecto de cada inmueble, tengan en lo individual.

Para los efectos de la disposición contenida en el artículo 209, de la Ley Federal de Reforma Agraria, la posesión proindiviso, no se confunde con la copropiedad, aunque ésta pueda comprender a aquélla, sino que se diferencia de ella en que cada uno de los predios tiene un dueño perfectamente determinado, pero es poseído por ambos sin que exista división para su aprovechamiento o usufructo, de tal forma que se posea como si fuera un solo bien.

Lo que el Legislador busca con el texto de ese precepto es, que la pequeña propiedad no sólo reúna el requisito de la propiedad individual, sino de la posesión y aprovechamiento del terreno por cada uno de sus propietarios, evitando la simulación de predios afectables, como si no lo fueran.

Así pues, no quedó plenamente probado que los predios del caso se encontraran proindiviso; pues independientemente de que los cuatro terrenos tienen diferentes propietarios, la posesión o aprovechamiento de ellos en común, no se establece en tanto quedó demostrada su explotación individual con las pruebas periciales topográfica y contable e inspecciones oculares practicadas en dichos terrenos durante el procedimiento agrario. En efecto, los medios de prueba de referencia pusieron de manifiesto que entre los predios "Santa Anita" y "Las Chispas", por una parte y los predios "Sonora" y "Hamburgo", por la otra, existen señalamientos efectivos que permiten diferenciarlos con toda claridad, entre sí, como son "cercos vivos", o sea de árboles, y, sobre todo, por mojoneras de concreto, que pueden tener una antigüedad de más de treinta años, como lo afirmó el propio perito del poblado solicitante; así como de que cada predio es independiente respecto del otro en materia administrativa, contable, fiscal y de seguridad social.

En cuanto a los deslindes o señalamientos efectivos sobre el terreno, en los cuatro predios que nos ocupan, debe destacarse que si la exigencia del inciso a), de la fracción III, del artículo 210, de la Ley Federal de Reforma Agraria, fuera que tales señalamientos efectivos fueran necesariamente lienzos de postes y alambre, cuando se tratara de predios dedicados a la agricultura, habría que señalar que éstos obstaculizarían su explotación eficiente, ya que entorpecerían el traslado de la maquinaria agrícola de un predio a otro, y éste no es el propósito de la ley al exigir la delimitación efectiva para desvirtuar la presunción de delimitación. Por tanto, debe considerarse que la existencia de mojoneras colocadas antes de la publicación de la solicitud de tierras relativa, es suficiente, máxime si existen además "cercos vivos". Al exigir la ley "deslindes o señalamientos efectivos sobre los terrenos", se refiere a señalamientos permanentes, ya que sólo estos pueden ser efectivos. En efecto, la función de las mojoneras es delimitar un predio de otro en forma permanente, y constituyen el señalamiento efectivo por excelencia para deslindar un predio de otro, porque no son movibles. Los alambrados en cambio, se pueden trasladar de un lugar a otro, de acuerdo con las necesidades de la explotación. Las mojoneras que delimitan a los cuatro predios que nos ocupan, puede tener más de treinta años, según lo señaló el propio perito del poblado solicitante, en mil novecientos noventa y cinco; es decir, pudieron haber sido colocadas desde mil novecientos sesenta y cinco, trece años antes de la publicación de la solicitud de tierras correspondientes.

En vista de lo anterior, al no haber quedado probado en autos, las hipótesis de afectabilidad previstas en el artículo 209, de la Ley Federal de Reforma Agraria, de aplicación transitoria, resultan inafectables los predios "Santa Anita", "Las Chispas", "Sonora" y "Hamburgo", ubicados en el Municipio de Huehuetán, los dos primeros, en el de Tapachula, el tercero y en Huixtla, el cuarto, todos del Estado de Chiapas, por tratarse de pequeñas propiedades en explotación, de conformidad con los artículos 249 y 250, del ordenamiento legal invocado y, en consecuencia, también resulta improcedente la nulidad de los acuerdos de inafectabilidad de veintiuno de enero de mil novecientos cincuenta y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el siete de mayo del mismo año; veinte de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el veintidós de diciembre de mil novecientos del mismo año; de treinta de julio de mil novecientos cuarenta y uno, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el ocho de septiembre del mismo año y de trece de marzo de mil novecientos cuarenta, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del mismo año; ni la cancelación de los certificados de Inafectabilidad Agrícola números, 108110, 107712, 01358 y 01353, que amparan a los predios antes citados, respectivamente.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria vigente, y 1o., 7o. y fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la solicitud de segunda ampliación de ejidos solicitada por un grupo de campesinos del poblado denominado "Francisco Sarabia", Municipio de Tuzantán, Estado de Chiapas.

SEGUNDO.- No ha lugar a declarar la nulidad de los acuerdos de inafectabilidad de veintiuno de enero de mil novecientos cincuenta y tres, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el siete de mayo del mismo año; de veinte de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintidós de diciembre del mismo año; de treinta de julio de mil novecientos cuarenta y uno, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el ocho de septiembre del mismo año y de trece de marzo de mil novecientos cuarenta, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el trece de agosto del mismo año; ni la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola números, 108110, 107712, 01358 y 01353, que amparan los predios "Santa Anita", "Las Chispas", "Sonora" y "Hamburgo", ubicados en el Municipio de Huehuetán, los dos primeros, en el de Huixtla, el tercero y en el de Tapachula, el cuarto, todos del Estado de Chiapas, propiedad de Edith Emilia Hoffmann Heinsohn de Reahmig y Pablo Hoffmann Córdova, Tomás Hedelmann y Marion de los mismos apellidos, respectivamente.

TERCERO.- Es improcedente la cancelación de los certificados de inafectabilidad agrícola números 279320 y 0926173, sin fecha de expedición, pero que fueron inscritos en el Registro Agrario Nacional el primero de abril de mil novecientos ochenta y seis, que amparan los predios "El Amatillo" y "El Brasil", ubicados en el Municipio de Tuzantán, Chiapas, propiedad de Manuela Lay Aguilar y hoy de sus herederos Ramón, Eliecer Armando, Miguel Angel, Martha Adelina, Adela Concepción y Cecilia Natalia, de apellidos Puón Lay y de la sucesión de Salvador Puón Soto, respectivamente.

CUARTO.- Se niega la segunda ampliación de ejidos solicitada por un grupo de campesinos del poblado "Francisco Sarabia", Municipio de Tuzantán, Estado de Chiapas, por no existir predios susceptibles de afectación dentro del radio legal.

QUINTO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas; los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; asimismo, comuníquese al Registro Público de la Propiedad correspondiente y háganse en éste las cancelaciones a que haya lugar y al Registro Agrario Nacional.

SEXTO.- Con testimonio de la presente sentencia notifíquese el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para conocimiento del cumplimiento que se da a las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo directo números D.A. 1261/98 y D.A. 1271/98.

SEPTIMO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Chiapas y a la Procuraduría Agraria. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firmando los Magistrados que lo integran con la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a cuatro de agosto de dos mil.- El Magistrado Presidente, **Luis O. Porte Petit Moreno**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos, Marco Vinicio Martínez Guerrero, Luis Angel López Escutia, Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbricas.- La Secretaria General, **Claudia Dinorah Velázquez González**.- Rúbrica.

SEGUNDA SECCION

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 18 y 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA

ARTÍCULO 1.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo sucesivo la Secretaría, como Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le asignan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO 2.- Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la Secretaría contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:

I. Secretario;
II. Subsecretario de Planeación y Política Ambiental;
III. Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental;
IV. Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental;
V. Oficial Mayor;
VI. Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia;
VII. Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;
VIII. Coordinación General Jurídica;
IX. Coordinación General de Comunicación Social;
X. Coordinación General de Delegaciones;
XI. Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable;
XII. Dirección General de Planeación y Evaluación;
XIII. Dirección General de Estadística e Información Ambiental;
XIV. Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial;
XV. Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables;
XVI. Dirección General de la Industria;
XVII. Dirección General de Fomento Ambiental del Desarrollo Urbano, Transporte, Servicios y Turismo;
XVIII. Dirección General de Energía y Actividades Extractivas;
XIX. Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental;
XX. Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes;
XXI. Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros;
XXII. Dirección General de Vida Silvestre;
XXIII. Dirección General de Federalización y Descentralización de Servicios Forestales y de Suelo;
XXIV. Dirección General de Recursos Humanos;
XXV. Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto;
XXVI. Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios;
XXVII. Dirección General de Informática y Telecomunicaciones;
XXVIII. Delegaciones Federales, y
XXIX. Órganos Desconcentrados:
    a) Comisión Nacional del Agua;
    b) Instituto Mexicano de Tecnología del Agua;
    c) Instituto Nacional de Ecología;
    d) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y
    e) Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

La Secretaría contará con una Unidad de Contraloría Interna, órgano interno de control, que se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 15 de este Reglamento.

La Secretaría contará asimismo, con las unidades subalternas que se señalen en el Manual de Organización General de la Dependencia y, en su caso, en el de sus órganos desconcentrados, previa autorización de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

ARTÍCULO 3.- La Secretaría, a través de sus unidades administrativas, conducirá sus actividades en forma programada y con base en las políticas que establezca el Presidente de la República para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo y de los programas a cargo de la Secretaría y de las entidades del sector coordinado.

En el ejercicio de sus atribuciones, las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría actuarán de manera coordinada, se apoyarán entre sí y se proporcionarán, a la brevedad posible, los informes, datos o cooperación técnica que requieran.

CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS FACULTADES DEL SECRETARIO

ARTÍCULO 4.- Corresponde originalmente al Secretario, la representación, trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la Secretaría, quien podrá para la mejor distribución y desarrollo del trabajo,

conferir sus facultades delegables a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos que deberán ser publicados en el **Diario Oficial de la Federación**.

ARTÍCULO 5.- El Secretario tendrá las facultades indelegables siguientes:

I. Fijar, dirigir y controlar las políticas de la Secretaría, incluidos sus órganos desconcentrados y las entidades del sector, de conformidad con la legislación aplicable y con las políticas nacionales, objetivos y metas que determine el Presidente de la República, así como emitir las disposiciones de carácter general, normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conforme a las leyes competan a la Dependencia;

II. Acordar con el Presidente de la República, los asuntos encomendados a la Secretaría y a las entidades del sector que así lo ameriten, desempeñar las comisiones y funciones que le confiera y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas;

III. Proponer al Presidente de la República los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, declaratorias, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría y del sector;

IV. Proponer al Presidente de la República las políticas y acciones que requiera la instrumentación de los programas sectoriales a su cargo;

V. Dar cuenta al Congreso de la Unión, una vez abierto el período de sesiones ordinarias, del estado que guarda su ramo e informar, además, cuando cualquiera de las Cámaras lo citen, así como en los casos que se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a las actividades de la Secretaría y del sector;

VI. Refrendar para su validez y observancia constitucionales, los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes expedidos por el Presidente de la República, sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría;

VII. Representar al Presidente de la República en los juicios constitucionales de amparo, en los términos de los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 19 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la propia Constitución y su Ley Reglamentaria, en los casos en que lo determine el Titular del Ejecutivo Federal;

VIII. Suscribir, en el ámbito de su competencia y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con la legislación aplicable, los instrumentos internacionales a formalizarse con gobiernos extranjeros u organismos internacionales;

IX. Establecer las bases y lineamientos generales a que deban sujetarse las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados en su caso, para el otorgamiento de conformidad con la legislación aplicable, de las concesiones, de las asignaciones, de los permisos, de las autorizaciones y de las licencias en las materias de la competencia de la Secretaría;

X. Coordinar los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados;

XI. Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y adscribir orgánicamente sus unidades administrativas, así como, en su caso, las de sus órganos desconcentrados y conferir las facultades que fueren necesarias para el cumplimiento de los asuntos de su competencia;

XII. Expedir el Manual de Organización General de la Secretaría y, en su caso, el de sus órganos desconcentrados, disponer su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, así como aprobar y expedir los demás manuales de procedimientos y de servicios al público, necesarios para el mejor funcionamiento de la Secretaría;

XIII. Establecer las políticas que normen, ordenen y agilicen la relación de las delegaciones federales con las oficinas centrales de la Secretaría y con sus órganos desconcentrados; así como con los sectores público, social y privado;

XIV. Expedir el nombramiento de los servidores públicos superiores de la Secretaría y resolver sobre su remoción, así como designar encargados de ejercer temporalmente las facultades de dichos servidores públicos;

XV. Designar a los representantes de la Secretaría ante las comisiones, congresos, organizaciones, instituciones y foros nacionales e internacionales en los que participe ésta, así como establecer los lineamientos conforme a los cuales dichos representantes deberán actuar;

XVI. Establecer, dentro del marco de competencia de la Secretaría, las medidas necesarias para el eficaz cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación del desarrollo nacional y

de descentralización, así como de programación, presupuestación, contabilidad, supervisión y evaluación;

XVII. Establecer, dentro del marco de competencia de la Secretaría, los consejos consultivos, comités y grupos de trabajo necesarios para promover la participación pública en el desahogo de los asuntos relacionados con el desarrollo sustentable, la protección ambiental y la gestión integral de los recursos naturales;

XVIII. Aprobar el anteproyecto de programa de presupuesto anual de egresos de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados, presentándolo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones aplicables, así como dar los lineamientos para la formulación de los correspondientes a las entidades paraestatales del sector;

XIX. Determinar el número, competencia e integrantes de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como designar a los servidores públicos que deban presidirlos, cuando corresponda esta atribución a la Secretaría;

XX. Solicitar las expropiaciones de bienes necesarios para el desarrollo de los programas de la Secretaría y la protección al medio ambiente;

XXI. Autorizar la celebración de acuerdos, bases de coordinación o de concertación y de cooperación técnica y, en general, todos aquellos actos en los que la Secretaría forme parte y, en su caso, designar al servidor público que deba suscribirlos en su representación;

XXII. Expedir las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría y proveer a su cumplimiento en los términos de la legislación aplicable;

XXIII. Resolver los recursos administrativos que le correspondan, de acuerdo con la legislación aplicable;

XXIV. Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación o aplicación de este Reglamento y sobre los casos no previstos en él;

XXV. Expedir los acuerdos secretariales, avisos, circulares y demás actos que con tal carácter le atribuyan expresamente las disposiciones legales aplicables, o aquellos que le encomiende el Presidente de la República;

XXVI. Establecer las bases y lineamientos a que deban sujetarse las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados, para proporcionar al público, conforme a la legislación aplicable, la información ambiental que les sea solicitada, y

XXVII. Constituir y presidir los Consejos o Comités Consultivos o Técnicos y Comités Internos constituidos para desarrollar coordinadamente las atribuciones de las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados o para la atención de asuntos específicos y, en su caso, designar al servidor público que deba representarlo o suplirlo en dichos consejos.

CAPÍTULO TERCERO

DE LAS FACULTADES DE LOS SUBSECRETARIOS

ARTÍCULO 6.- Los Subsecretarios tendrán las facultades siguientes:

I. Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas a su cargo;

II. Desempeñar las funciones y las comisiones que el Secretario les delegue o encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;

III. Someter a la aprobación del Secretario aquellos estudios y proyectos de disposiciones jurídicas, bases y reglas de carácter general, normas, lineamientos y políticas que se elaboren en el área de su responsabilidad y que así lo ameriten;

IV. Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a las instrucciones, a los ordenamientos legales y a las disposiciones que resulten aplicables;

V. Dirigir, programar y coordinar las labores de las unidades administrativas a su cargo y establecer mecanismos de integración e interrelación, que propicien el óptimo desarrollo de las responsabilidades competencia de la Secretaría;

VI. Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto, así como de planeación que les correspondan;

VII. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento del servicio administrativo en las unidades que se les hubieran adscrito y proponer al Secretario la delegación en servidores públicos subalternos, de facultades que se les hayan encomendado;

VIII. Expedir, en su caso, las normas oficiales mexicanas competencia de las unidades administrativas que les sean adscritas, así como participar y, en su caso, presidir, cuando sean designados para ello, los comités, subcomités y grupos de trabajo en donde se analicen

y elaboren las normas oficiales mexicanas que sean competencia de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IX. Proponer, en el ámbito de sus facultades, las políticas, lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos conforme a las cuales las unidades administrativas que les sean adscritas y los órganos desconcentrados desarrollarán los programas aprobados por el Secretario;

X. Proponer en lo que competa a las unidades administrativas que les sean adscritas, a la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, la adopción de políticas y lineamientos en foros y temas internacionales competencia de la Secretaría, así como programas y proyectos de cooperación técnica con países, organismos internacionales y entidades extranjeras con los que se suscriban convenios dentro de la competencia de la Secretaría;

XI. Proponer al Secretario las políticas, lineamientos, sistemas y procedimientos que deban regir en las unidades administrativas que se les hubieren adscrito; comunicar a éstas los acuerdos respectivos y apoyar técnicamente la desconcentración y delegación de facultades de dichas unidades;

XII. Otorgar, prorrogar, revocar, modificar, suspender, anular y declarar la nulidad, ineficacia y extinción parcial o total de las concesiones competencia de las unidades administrativas que les sean adscritas, así como autorizar la sustitución de sus titulares, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XIII. Proporcionar la información, datos y la cooperación técnica que les sean requeridos por otras dependencias de la Administración Pública Federal, de acuerdo con las normas y políticas que hubiere expedido o señalado el Secretario;

XIV. Resolver los recursos administrativos que conforme a las disposiciones legales y reglamentarias les correspondan;

XV. Recibir en acuerdo ordinario a los titulares de las unidades administrativas que se les hubieren adscrito y en acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor público subalterno, así como conceder audiencia al público;

XVI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que les sean señalados por delegación, encomienda o les correspondan por suplencia;

XVII. Proponer al Secretario, con la participación que, en su caso, corresponda a la Coordinación General Jurídica, lineamientos de carácter técnico administrativo para el otorgamiento de las concesiones, asignaciones, permisos, autorizaciones y licencias competencia de las unidades administrativas que les sean adscritas, y

XVIII. Las demás que les confiera el Titular de la Secretaría y las que les señalen las disposiciones legales y reglamentarias relativas, así como las que competen a las unidades administrativas que se les hubieren adscrito.

CAPÍTULO CUARTO

DE LAS FACULTADES DEL OFICIAL MAYOR

ARTÍCULO 7.- El Oficial Mayor tendrá las facultades siguientes:

I. Definir las políticas generales de administración aplicables al sector;

II. Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario le delegue o encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades;

III. Desarrollar sistemas de información de recursos humanos, financieros, materiales e informáticos, para el cumplimiento de los objetivos del sector;

IV. Coordinar y supervisar la expedición de los nombramientos del personal de la Secretaría, los movimientos de personal y las resoluciones de los casos de terminación de sus efectos, así como la imposición de las sanciones y medidas disciplinarias en caso de irregularidades o faltas de carácter laboral;

V. Definir y administrar las Condiciones Generales de Trabajo, difundirlas entre el personal de la Secretaría y vigilar su cumplimiento; así mismo, conducir las relaciones laborales de la Secretaría, conforme a los lineamientos que emita el Secretario y aplicar los sistemas de estímulos y recompensas que determinen los ordenamientos legales;

VI. Emitir los lineamientos para la formulación de los manuales de organización, procedimientos y de servicios al público de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados; así como autorizar los cambios en la estructura organizacional propuestos por los titulares de las unidades administrativas;

VII. Planear y administrar las políticas de desarrollo humano de la Secretaría, considerando el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales, de seguridad e higiene del personal y contribuir en su calidad de vida;

VIII. Definir las políticas para la capacitación de los servidores públicos de la Secretaría, con base en las prioridades estratégicas del sector;

IX. Planear, diseñar, instalar y dar seguimiento a sistemas de evaluación de indicadores del desempeño y gestión de las unidades administrativas de su adscripción, así como proponer al Secretario los cambios en la organización o en sus procesos;

X. Definir las directrices y la normatividad para la programación y presupuestación, así como vigilar su aplicación;

XI. Establecer lineamientos, sistemas y procedimientos para la organización, funcionamiento, desarrollo, efectividad, simplificación, desconcentración y descentralización administrativa de la Secretaría;

XII. Integrar el Programa Operativo Anual de la Secretaría y someterlo a la consideración del Secretario, así como el anteproyecto de programa de presupuesto anual, gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su autorización y modificaciones y asignar el presupuesto anual a cada unidad administrativa y órgano desconcentrado, conforme al presupuesto aprobado a la Dependencia;

XIII. Administrar el ejercicio y control presupuestal, así como la contabilidad de la Secretaría y la evaluación programática-presupuestal;

XIV. Presentar la cuenta anual de la Hacienda Pública Federal del Sector y participar en la parte que corresponda a la Secretaría en la realización del Informe Presidencial;

XV. Intervenir, en los términos que señalan las disposiciones legales aplicables, en la gestión de créditos y aportaciones de origen externo para financiar programas de la Secretaría y efectuar las gestiones para su reembolso;

XVI. Intervenir en los procesos de planeación y programación de la obra pública, así como autorizar los arrendamientos y adquisiciones de bienes y servicios;

XVII. Efectuar los arrendamientos y adquisiciones de bienes y servicios, así como autorizar y regular la adquisición y el suministro;

XVIII. Suscribir, previa consulta con la Coordinación General Jurídica, los convenios y contratos que afecten el presupuesto de la Secretaría y los demás actos de administración que requieran ser documentados;

XIX. Promover el desarrollo tecnológico y la automatización de los procesos de administración del sector para facilitar el acceso a la información;

XX. Proporcionar a las unidades administrativas de la Secretaría, los servicios de apoyo técnico administrativo;

XXI. Establecer, controlar y evaluar el programa interno de protección civil para el personal, instalaciones, bienes e información de la Secretaría, así como emitir las normas de operación, desarrollo y vigilancia del programa;

XXII. Expedir certificaciones de los documentos originales o copias autorizadas que obren en los archivos de la Oficialía Mayor, previa consulta con la Coordinación General Jurídica;

XXIII. Conducir el proceso de modernización administrativa y el Programa de Desarrollo Informático de la Secretaría;

XXIV. Proponer al Secretario la designación o remoción, en su caso, de los representantes de la Secretaría ante las comisiones o comités mixtos de carácter laboral;

XXV. Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de Obras, de Enajenación Baja o Destino Final de Bienes Muebles, Técnico de Contratación de Servicios de la Secretaría;

XXVI. Recibir en acuerdo ordinario a los titulares de las unidades administrativas que se le adscriban y, en acuerdo extraordinario, a cualquier otro funcionario subalterno, así como conceder audiencia al público;

XXVII. Dirigir, en los asuntos de su competencia, la formulación de los anteproyectos de reglamentos, decretos y ordenamientos jurídicos, con la participación de la Coordinación General Jurídica;

XXVIII. Establecer y aplicar los programas de simplificación administrativa;

XXIX. Autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los trámites relativos al otorgamiento y ejercicio de los subsidios con cargo al presupuesto de la Secretaría;

XXX. Conducir la instrumentación, realización o gestión de los actos y procedimientos administrativos, programáticos y presupuestales que, en su carácter de coordinadora sectorial, corresponda llevar a cabo a la Secretaría, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables;

XXXI. Vigilar que los recursos presupuestales autorizados para la adquisición, arrendamiento y contratación de equipos, materiales y servicios, se apliquen de acuerdo a los programas y disposiciones jurídicas correspondientes;

XXXII. Definir y dirigir los estudios e investigaciones sobre las mejores prácticas de gobierno, con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales y proponer la celebración de convenios para la realización de intercambios técnicos y metodológicos, con la participación que, en su caso, corresponda a las Unidades Coordinadoras de Asuntos Internacionales y de Participación Social y Transparencia;

XXXIII. Elaborar la evaluación socio económica de los programas y proyectos de inversión pública a cargo de la Secretaría y solicitar la inclusión de éstos en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, conforme a las disposiciones que emita para tal efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXXIV. Emitir los dictámenes administrativos relacionados con las modificaciones a las estructuras orgánicas y ocupacionales, así como de las plantillas de personal operativo de la Secretaría, conforme a las disposiciones que establezcan el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal y las demás que para tal efecto emitan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus respectivas competencias, y

XXXV. Las demás que le confiera el Titular de la Secretaría y las que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias relativas, así como las que competan a las unidades administrativas que se le hubieren adscrito.

CAPÍTULO QUINTO

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS UNIDADES COORDINADORAS, DE LAS COORDINACIONES GENERALES Y DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

ARTÍCULO 8.- Al frente de cada una de las Unidades Coordinadoras y, de las Coordinaciones Generales, así como del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, respectivamente, habrá un Coordinador. Dichos coordinadores tendrán, en lo que corresponda, las facultades genéricas que el artículo 17 confiere a los Directores Generales.

ARTÍCULO 9.- La Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia tendrá las atribuciones siguientes:

I. Promover, apoyar y organizar la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales, a través de los órganos consultivos y de participación pública que determine el Secretario y, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes, apoyar la organización y funcionamiento de los consejos técnicos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Gestionar convenios y contratos de concertación y colaboración con organizaciones sociales, públicas y privadas, cuyos objetivos y actividades coadyuven a impulsar una participación corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental, así como a favorecer la preservación y restauración del ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la prevención del deterioro ambiental;

III. Diseñar, promover y evaluar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, mecanismos que generen condiciones de equidad de género, generacional y de etnia en la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de proyectos y acciones ambientales y del aprovechamiento de recursos naturales;

IV. Promover, apoyar y organizar, en coordinación con otras unidades administrativas competentes, foros de consulta, reuniones de análisis, talleres y grupos de trabajo para que se recaben y evalúen, propuestas, comentarios, planteamientos y recomendaciones de organizaciones y personas interesadas en la preservación y restauración del ambiente, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la prevención del deterioro ambiental;

V. Promover, apoyar y organizar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, espacios públicos de análisis, evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Secretaría en concordancia con los propósitos de transparencia institucional;

VI. Proporcionar, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Coordinación General Jurídica, orientación jurídica en materia ambiental a las personas, organizaciones, grupos sociales, estados y municipios sobre sus trámites, solicitudes, requerimientos y propuestas ante las unidades administrativas, órganos desconcentrados y delegaciones de la Secretaría, así como solicitar a éstos la información que requiera para tales efectos;

VII. Recibir y canalizar a las unidades administrativas correspondientes y verificar el seguimiento dado por éstas, a las solicitudes, requerimientos y propuestas que dirijan las personas, las organizaciones y grupos sociales, a la Presidencia de la República en asuntos competencia de la Secretaría, al Secretario y a la propia Unidad, así como aquéllos que determine el Titular de la Dependencia, informándole periódicamente de su avance;

VIII. Revisar, en coordinación con la Oficialía Mayor, las condiciones, oportunidad, transparencia y coordinación internas con las que se realizan los actos administrativos y se prestan los servicios competencia de la Secretaría, a efecto de promover la eficiencia, eficacia, racionalidad, simplificación y certidumbre de la actividad institucional;

IX. Evaluar, en colaboración con las unidades administrativas competentes, el desempeño e impacto de los diversos espacios de participación social de la Secretaría, generar indicadores sobre su avance, desempeño, efectividad e impacto en las políticas de la Secretaría, así como proporcionar oportunamente esta información al público;

X. Elaborar indicadores de gestión y calidad de los servicios que presta la Secretaría en colaboración con la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental;

XI. Promover prácticas administrativas y una cultura de servicio público, que garanticen el acceso a la información pública y faciliten la rendición de cuentas a la ciudadanía en todos los ámbitos de la función de la Secretaría, y

XII. Compilar, analizar y dar seguimiento a los casos de riesgo socioambiental que requieran de atención prioritaria a petición expresa del Secretario, con el fin de proponer acciones para su atención.

ARTÍCULO 10.- La Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales tendrá las atribuciones siguientes:

I. Proponer al Secretario para su aprobación, con el apoyo de las unidades administrativas de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados, conforme a sus respectivas competencias, la política general de la Secretaría en materia de asuntos internacionales, de acuerdo con los lineamientos que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores, de conformidad con la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento y la Ley sobre la Celebración de Tratados;

II. Ser el conducto formal de la Secretaría para la aprobación de programas, definición de actividades y participación en eventos y foros internacionales no gubernamentales y multinacionales y, en general, el control de la gestión de todas las actividades internacionales de la Secretaría, así como para la suscripción de acuerdos, con entidades extranjeras y organismos internacionales, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

III. Formular el capítulo en materia de asuntos internacionales de la Secretaría, para la integración del programa sectorial, darle seguimiento y evaluar su ejecución;

IV. Integrar y evaluar los programas y actividades que en materia internacional propongan las unidades administrativas de la Secretaría y, en su caso, someterlas a la aprobación del Secretario, así como coordinarlos, dar seguimiento y evaluar su ejecución;

V. Promover y participar con el apoyo de las unidades administrativas competentes, en las negociaciones para obtener el financiamiento externo que requiera la Secretaría, así como proponer, con la colaboración que le corresponda a la Coordinación General Jurídica, la suscripción de acuerdos y convenios de cooperación sobre donaciones y financiamiento internacional, llevando el registro y control del cumplimiento de los acuerdos respectivos, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VI. Coordinar y supervisar las políticas de la Secretaría en materia internacional, con el apoyo de las unidades administrativas competentes de la misma y constituirse en depositario y custodio de los acuerdos interinstitucionales en que la Secretaría sea parte, de conformidad con la legislación aplicable;

VII. Coordinar y supervisar, con apego a lo dispuesto por la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el funcionamiento de las representaciones de la Secretaría en el extranjero y ser el conducto formal de comunicación mediante el cual se les transmitirán los acuerdos, órdenes y disposiciones que dicten las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados, evaluar su establecimiento o supresión y aprobar sus programas y presupuestos de operación, conforme a las disposiciones aplicables;

VIII. Promover la constitución de empresas con capital nacional y extranjero, dedicadas a la conservación o al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que sean competencia de la Secretaría o a la provisión de bienes y servicios del o para el sector y dar seguimiento al otorgamiento de permisos y autorizaciones a extranjeros, así como sobre la

certificación ambiental de dichos bienes y servicios por origen, proceso o especificaciones de producto;

IX. Proponer las políticas de promoción internacional de la Secretaría relativas a la capacitación, desarrollo tecnológico y científico y coordinar las actividades de intercambio y cooperación económica, científica y tecnológica de la misma, así como coadyuvar con la Coordinación General de Comunicación Social en la difusión de dicha información al interior del sector;

X. Coordinar la integración de los informes que deban presentarse por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a organismos internacionales y la celebración de reuniones de seguimiento y evaluación de compromisos con organizaciones e instituciones nacionales en materia de asuntos internacionales que sean competencia de la Secretaría, así como con representaciones extranjeras y organismos gubernamentales y no gubernamentales internacionales;

XI. Asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría y a sus órganos desconcentrados, con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en materia de asuntos internacionales, así como analizar, evaluar y, en su caso, tramitar las solicitudes de proyectos de cooperación internacional que éstos le presenten;

XII. Promover, organizar y coordinar la participación de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados, en eventos o foros de carácter internacional, relacionados con las materias competencia de la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XIII. Proponer al Secretario para su aprobación, la designación de los servidores públicos que deban participar en foros y reuniones internacionales de interés para la Secretaría, así como los lineamientos formulados bajo la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por los que deberán regir su participación;

XIV. Participar en la promoción y difusión de las actividades internacionales realizadas por la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

XV. Integrar y difundir en el sector, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la oferta relativa a becas, cursos y seminarios provenientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gobiernos e instituciones extranjeras y organismos regionales e internacionales; asimismo coadyuvar en su gestión y llevar un registro actualizado de los participantes nacionales;

XVI. Dar seguimiento a los compromisos internacionales, en materia de áreas naturales protegidas competencia de la Federación y difundir su importancia en el ámbito internacional, y

XVII. Establecer mecanismos para la promoción de inversiones extranjeras públicas y privadas en proyectos de desarrollo sustentable, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 11.- La Coordinación General Jurídica tendrá las atribuciones siguientes:

I. Fijar, sistematizar, unificar y difundir para efectos administrativos, los lineamientos y criterios de interpretación y aplicación de las leyes y otras disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento y actividades de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados, con excepción de aquéllos que la legislación aplicable reserve a los mismos;

II. Atender los asuntos jurídicos de la Secretaría, coordinar y evaluar los de sus órganos desconcentrados, conocer los que le sean encomendados por el Secretario, así como participar en los Consejos o Comités Consultivos o Técnicos, con el carácter que determinen las disposiciones jurídicas aplicables y el Secretario;

III. Formular, revisar y someter a la consideración del Secretario, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones jurídicas de la competencia de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados;

IV. Dictaminar la procedencia jurídica de los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones que deba refrendar el Secretario;

V. Promover la actualización del marco jurídico en materia de preservación, conservación y protección del ambiente y del desarrollo sustentable, de acuerdo a los avances de la técnica, las innovaciones científicas, los usos, las prácticas y descubrimientos que se generen;

VI. Dictaminar jurídicamente los proyectos de normas oficiales mexicanas en el ámbito de competencia de la Secretaría y gestionar su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**;

VII. Proponer al Secretario los criterios y procedimientos para validar jurídicamente la información que proporcionen las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados, a petición de los solicitantes, de conformidad con la legislación aplicable;

VIII. Resolver, en su caso, los recursos administrativos competencia del Secretario y de su competencia y representar legalmente a la Secretaría y a su Titular en los procedimientos administrativos, de responsabilidades y jurisdiccionales en que se requiera su intervención,

con excepción de aquellos que estén expresamente encomendados a las unidades jurídicas de los órganos desconcentrados y los que, en su caso, existan en las delegaciones federales de la Secretaría;

IX. Solicitar la intervención del Procurador General de la República en todos aquellos asuntos contenciosos que le competan en los términos del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proporcionándole opinión jurídica y elementos de juicio en cada caso;

X. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas de la Secretaría y a sus órganos desconcentrados, actuar como órgano de consulta y realizar los estudios e investigaciones jurídicos que requiera el desarrollo de las atribuciones de la Secretaría;

XI. Compilar y promover la difusión de las normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de la Secretaría;

XII. Expedir cuando proceda, certificaciones de documentos que obren en los archivos de la Secretaría;

XIII. Designar dentro de los notarios autorizados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a los que deban intervenir en las operaciones inmobiliarias de la competencia de la Secretaría;

XIV. Dictaminar la procedencia jurídica de los convenios, contratos y demás actos jurídicos de las unidades administrativas que deriven en obligaciones para la Secretaría, así como llevar el control y registro de los mismos y de los que celebren los órganos desconcentrados;

XV. Auxiliar a las unidades administrativas de la Secretaría, en la realización de licitaciones públicas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XVI. Iniciar a petición de las unidades administrativas de la Secretaría, el procedimiento de rescisión de los contratos y convenios, tramitarlo y proponer la resolución correspondiente;

XVII. Establecer criterios en la resolución de recursos administrativos de su competencia y aquéllos que correspondan a otras unidades administrativas de la Secretaría y, cuando proceda, a sus órganos desconcentrados;

XVIII. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que, en materia de amparo, deben rendir el Presidente de la República, en los casos en los que se hubiere conferido la representación presidencial y el Secretario, así como los relativos a los demás servidores públicos que sean señalados como autoridades responsables; asimismo los escritos de demanda o contestación según proceda en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; intervenir cuando la Secretaría tenga carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo, así como formular, en general, incidentes, recursos y demás promociones que a dichos juicios se refieran;

XIX. Representar al Secretario ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, ante otras autoridades laborales, en los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del artículo 123 Constitucional; formular dictámenes, demandas de cese de los empleados de la Secretaría, contestación de demandas laborales, formulación y absolución de posiciones, desistimientos o allanamientos y, en general, todas las promociones que se requieran en el curso del procedimiento;

XX. Formular a nombre de la Secretaría, las denuncias y querellas que a su juicio correspondan y otorgar discrecionalmente el perdón, así como aprobar el otorgamiento de éste, solicitado por los jefes de las unidades jurídicas de los órganos desconcentrados y delegados federales de la Secretaría;

XXI. Solicitar de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en lo que corresponda a su competencia, la reivindicación de la propiedad federal administrada por la Secretaría, así como la destinada a ésta;

XXII. Participar con las unidades administrativas competentes en la aplicación de las disposiciones jurídicas en materia laboral y de responsabilidades de los servidores públicos;

XXIII. Tramitar y someter a la consideración del Secretario, los expedientes relativos a los procedimientos previstos en la Ley de Expropiación y otras disposiciones legales aplicables, en los casos de afectaciones de todo tipo que realice la Secretaría;

XXIV. Gestionar en el **Diario Oficial de la Federación**, las publicaciones de los instrumentos legales que emita la Secretaría y sus órganos desconcentrados;

XXV. Realizar los trámites legales para la adquisición, regularización y protección jurídica de los bienes inmuebles administrados por la Secretaría o destinados a ésta, así como llevar un catálogo de los mismos;

XXVI. Coordinar y establecer los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos para el mejor desempeño de las unidades jurídicas de las delegaciones federales de la Secretaría y de los órganos desconcentrados, a fin de que su actuación se realice en forma coordinada y dentro de la estricta legalidad;

XXVII. Convocar, conducir y coordinar la integración y funcionamiento del Comité Jurídico Ambiental, que se integrará con los titulares de las unidades jurídicas de los órganos desconcentrados, de las delegaciones federales de la Secretaría y de las entidades del sector, así como por los servidores públicos que asesoren jurídicamente a las unidades administrativas de la Dependencia;

XXVIII. Designar, autorizar y delegar en los servidores públicos adscritos a la Coordinación, facultades para ejercer las atribuciones anteriores, así como para representar, contestar demandas, denunciar, querellarse, comparecer a audiencias y a todo tipo de diligencias y actuaciones jurisdiccionales, ofrecer pruebas, interponer recursos y, en general, realizar todo tipo de actos tendientes a la defensa de los intereses de la Secretaría, y

XXIX. Opinar sobre la designación y remoción de los titulares de las unidades jurídicas de los órganos desconcentrados y de las delegaciones federales de la Secretaría.

ARTÍCULO 12.- La Coordinación General de Comunicación Social tendrá las atribuciones siguientes:

I. Diseñar y llevar a cabo las actividades de difusión, comunicación, prensa y relaciones públicas de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados;

II. Elaborar y aplicar el programa editorial de la Secretaría, mediante el diseño, producción y distribución de los libros, folletos y demás material documental o didáctico;

III. Coordinar con otras dependencias de la Administración Pública Federal y con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, según corresponda, la divulgación de la información, publicaciones y publicidad de la Dependencia, así como concertarla con los sectores social y privado;

IV. Diseñar la estrategia que rija y sistematice las actividades de comunicación social de la Secretaría, dentro del marco de estrategia de comunicación establecida por la Secretaría de Gobernación;

V. Asegurar el uso adecuado de la imagen gráfica de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados, en lo que concierne al escudo, logotipo y colores y asesorar en su uso a quienes lo requieran;

VI. Establecer los mecanismos para dar seguimiento, monitoreo y análisis de cobertura en los medios de comunicación, respecto a los temas que competan a la Secretaría;

VII. Proponer la estrategia de comunicación para la prevención y manejo de situaciones especiales o crisis, en coordinación con la Secretaría de Gobernación;

VIII. Promover la presencia de funcionarios de la Secretaría, dentro de los tiempos oficiales de radio y televisión y, en general, en los medios de comunicación para dar a conocer o difundir acciones de interés para la opinión pública, así como para la promoción del desarrollo sustentable;

IX. Realizar estudios de opinión, cualitativos y cuantitativos, tanto en la opinión pública general, como entre sus principales audiencias, con la finalidad de diseñar estrategias de comunicación, así como llevar a cabo el monitoreo y la evaluación de su penetración en los medios;

X. Actuar como vocero oficial de la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos expedidos por la Secretaría de Gobernación, y

XI. Informar oportunamente sobre las actividades que realiza el Secretario, proveer su divulgación entre los medios de comunicación y coordinar el diseño de estrategias de comunicación en el extranjero.

ARTÍCULO 13.- La Coordinación General de Delegaciones tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar, en los términos que instruya el Secretario, las acciones operativas de la Secretaría en las entidades federativas, a través de sus delegaciones federales, con la participación que corresponda a las Subsecretarías, Oficialía Mayor y Coordinación General Jurídica;

II. Señalar criterios para conducir las relaciones entre las Unidades Administrativas de la Secretaría y las delegaciones federales;

III. Fijar criterios y lineamientos, en base a las políticas que determine el Secretario, respecto de la concertación de las delegaciones federales con los sectores social y privado;

IV. Participar en la celebración de acuerdos de coordinación y convenios de concertación, según corresponda, conjuntamente con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, con los gobiernos estatales y municipales, así como con organizaciones de los

sectores social y privado para promover el ejercicio de las atribuciones asignadas a la Secretaría;

V. Proponer y participar en el diseño, instrumentación y seguimiento de normas, programas y disposiciones de observancia general que corresponda aplicar a las delegaciones federales;

VI. Elaborar y organizar un sistema de información estratégica para la toma de decisiones de las unidades administrativas de la Secretaría en la adecuación y desarrollo eficiente de los programas a cargo de las delegaciones federales;

VII. Coadyuvar con la Oficialía Mayor, en la formulación y actualización de los manuales de organización de las delegaciones federales, así como revisar y proponer las modificaciones a la estructura y funciones de las mismas;

VIII. Coordinar el programa de desconcentración y simplificación administrativa de los servicios que prestan las delegaciones federales de la Secretaría, y promover el programa de descentralización, en colaboración con las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Planeación y al Oficial Mayor, según corresponda;

IX. Participar en el sistema de información y estadística de los servicios que prestan las delegaciones federales, sin perjuicio de las atribuciones de la Dirección General de Estadística e Información Ambiental;

X. Promover y coordinar la realización de estudios en las delegaciones federales sobre asuntos que competen a la Secretaría;

XI. Coordinar la integración de los programas de trabajo de las delegaciones federales;

XII. Promover, a través de las delegaciones federales, la realización de eventos orientados al estudio, difusión y comprensión de la política ambiental y ecológica del país;

XIII. Diseñar y operar un sistema de diagnóstico permanente de la organización, estructura y funcionamiento en las delegaciones federales de la Secretaría;

XIV. Proponer al Secretario la modificación o creación de delegaciones federales de la Secretaría, a efecto de atender los asuntos cuyo tratamiento involucre una o varias regiones geográficas;

XV. Recabar información respecto a la imagen y operación de las delegaciones federales de la Secretaría en cada entidad federativa, en base a los lineamientos que emita la Coordinación General de Comunicación Social;

XVI. Supervisar y evaluar el funcionamiento y operación de las delegaciones federales;

XVII. Diseñar, implantar, coordinar y administrar un sistema de gestión de calidad y rendición de cuentas en cada una de las delegaciones federales;

XVIII. Proporcionar a las delegaciones federales las políticas y normatividad que emitan las unidades administrativas centrales;

XIX. Promover y gestionar ante las unidades administrativas correspondientes, el suministro a las delegaciones federales de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos requeridos para el ejercicio de sus atribuciones, y

XX. Apoyar y proponer, en su caso, las giras que el Secretario y otros servidores públicos de la Secretaría realicen en las entidades federativas.

ARTÍCULO 14.- El Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable tendrá las atribuciones siguientes:

I. Promover la coordinación de la Secretaría con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal para el diseño y desarrollo de programas de educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable;

II. Formular, coordinar y supervisar el desarrollo de los programas y proyectos de educación y capacitación para el desarrollo sustentable, en apoyo de las actividades de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados;

III. Participar con la Secretaría de Educación Pública para establecer y fortalecer programas educativos en materia ambiental, en los diversos niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, con el fin de fomentar el desarrollo de una cultura ambiental y formar y actualizar los cuadros de profesionales que se requieren para acceder al desarrollo sustentable;

IV. Coordinar las estrategias y procedimientos de educación y capacitación técnica y académica, para el fortalecimiento institucional de la Secretaría y sus órganos desconcentrados;

V. Formular y aplicar, en colaboración con la Coordinación General de Comunicación Social, los proyectos de comunicación educativa dirigidos a la formación de una concientización pública y a fomentar la participación ciudadana para el desarrollo sustentable;

VI. Programar la realización conjunta de actividades en materia de educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable que soliciten las distintas áreas de la Secretaría y

sus órganos desconcentrados, así como de las entidades federativas y municipales que lo requieran y, en su caso, otorgarles asistencia técnica;

VII. Promover, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados, el aprovechamiento de las instalaciones y equipo de que dispone la Secretaría para realizar actividades de educación y capacitación;

VIII. Promover y realizar estudios e investigaciones sobre educación y capacitación para el desarrollo sustentable, publicar y difundir, por sí o a través de terceros, sus resultados, con la intervención de la Coordinación General de Comunicación Social;

IX. Promover, convocar y organizar el otorgamiento de premios y reconocimientos que establezca la Secretaría en materia ambiental y desarrollo sustentable y, en su caso, fungir como secretario técnico en los comités de evaluación;

X. Promover y participar, conjuntamente con universidades, centros de investigación superior y otras entidades nacionales e internacionales, en el diseño y desarrollo de programas de educación y capacitación para la gestión ambiental, y la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

XI. Impulsar y apoyar la formación de promotores ambientales en el país, así como la organización de redes de individuos e instituciones que desarrollen proyectos de educación ambiental y capacitación para el desarrollo sustentable;

XII. Formular, organizar, dirigir, supervisar y evaluar programas de educación y capacitación para el desarrollo sustentable, entre los propietarios, poseedores y usuarios de los recursos naturales;

XIII. Proponer al Secretario la suscripción de acuerdos y convenios de cooperación para la realización de proyectos conjuntos, así como para la obtención de donaciones, comodatos y financiamiento en apoyo de los proyectos y servicios, con la intervención, en su caso, de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, y

XIV. Aplicar, con la participación de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, las políticas de educación y capacitación en materia ambiental.

CAPÍTULO SEXTO

DEL CONTRALOR INTERNO

ARTÍCULO 15.- El Contralor Interno, titular del órgano interno de control, será designado en términos del artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades designados en los mismos términos.

Con sujeción a su presupuesto autorizado, los órganos desconcentrados contarán, en su caso, con una Contraloría Interna en los términos del párrafo anterior. En el supuesto de que algún órgano desconcentrado no cuente con dicha Contraloría o bien que la propia Contraloría no cuente con alguna de las áreas señaladas en el párrafo precedente, las atribuciones que correspondan a cada una de éstas se ejercerán por la Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría.

Los servidores públicos a que se refieren los párrafos anteriores, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones jurídicas aplicables, conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Para el debido cumplimiento de las facultades a cargo del Contralor Interno, de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades y los Contralores Internos de los órganos desconcentrados, los servidores públicos de la Secretaría o de los órganos desconcentrados, según corresponda, estarán obligados a proporcionarles el auxilio que les sea requerido.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES GENERALES

ARTÍCULO 16.- A cargo de cada una de las Direcciones Generales habrá un Director General, quien asumirá su dirección técnica y administrativa y será el responsable ante las autoridades superiores de su correcto funcionamiento. Los Directores Generales serán auxiliados por los Directores Generales Adjuntos, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento y demás servidores públicos que requieran las necesidades del servicio.

ARTÍCULO 17.- Los Directores Generales tendrán las facultades genéricas siguientes:

I. Programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas y el desempeño de las atribuciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo;

II. Acordar con su superior jerárquico inmediato la resolución de los asuntos relevantes cuya tramitación se encuentre dentro del ámbito de su competencia;

III. Formular estudios, dictámenes, opiniones e informes que les sean encomendados por la superioridad en aquellos asuntos que sean de su competencia;

IV. Proponer al personal a su cargo, previa evaluación que realicen de conformidad con la normatividad aplicable, y enviar los proyectos de nombramiento o contratación a la unidad administrativa competente, para su formalización;

V. Intervenir en el desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su cargo, así como en la contratación del servicio externo que fuese necesario; autorizar dentro del ámbito de su competencia, licencias de conformidad con las necesidades del servicio y participar directamente en los casos de sanciones, remoción y cese del personal de su responsabilidad, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VI. Elaborar proyectos sobre la creación, modificación, organización, fusión o extinción de las unidades administrativas a su cargo;

VII. Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia, a las demás unidades administrativas de la Secretaría;

VIII. Coordinarse con los titulares de las otras unidades administrativas de la Secretaría, cuando así se requiera para su mejor funcionamiento e integrarse, bajo los lineamientos que establezca la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, a los órganos de participación ciudadana que determine el Secretario;

IX. Formular el Programa Operativo Anual y el anteproyecto del presupuesto, en base a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos a la unidad administrativa a su cargo, conforme a las normas establecidas por la Oficialía Mayor, así como ejercer el presupuesto autorizado;

X. Formular, conforme a los lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor, los proyectos de manuales de organización, procedimientos y servicios correspondientes a la unidad administrativa a su cargo;

XI. Analizar y compilar el marco normativo que regule el ejercicio de sus atribuciones y proponer cuando se requiera, la creación o modificación de las disposiciones jurídicas conducentes;

XII. Proponer los anteproyectos de normas oficiales mexicanas que procedan en la materia de su competencia, así como participar y, en su caso, presidir, cuando sean designados para ello, los comités, subcomités y grupos de trabajo en donde se analicen y elaboren las normas oficiales mexicanas responsabilidad de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XIII. Analizar y resolver, en las materias de su competencia, sobre las solicitudes de autorización y registro para el uso de materiales, equipos, procesos, métodos de prueba, mecanismos, procedimientos o tecnologías alternativas, así como expedir la conformidad de las evaluaciones de las normas oficiales mexicanas y la aprobación y supervisión de las personas acreditadas que se requieran para la evaluación de la conformidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XIV. Proponer, conforme a su competencia, al Subsecretario de su adscripción, la participación de la Secretaría en foros internacionales, así como los mecanismos para cumplir las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos de los que el país sea parte, y los programas y proyectos de cooperación técnica con países, organismos internacionales y entidades extranjeras con los que se suscriban convenios en materias de la competencia de la Secretaría, de acuerdo a las políticas y lineamientos que establezca la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

XV. Participar en la coordinación de acciones con las demás dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como en la concertación e inducción con los sectores social y privado para la realización de las actividades de su competencia;

XVI. Apoyar al Subsecretario de su adscripción en la formulación de las políticas, lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos que se requieran para el ejercicio de las atribuciones encomendadas a la unidad administrativa a su cargo, así como para el diseño, ejecución y evaluación de los programas del sector, de los programas y proyectos estratégicos que de ellos deriven y de los correspondientes programas operativos anuales;

XVII. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las facultades a su cargo, cuando sean objeto de desconcentración o delegación;

XVIII. Recibir en acuerdo ordinario a los directores, subdirectores y jefes de departamento o su equivalente y, en acuerdo extraordinario, a cualquier otro servidor público subalterno y conceder audiencia al público;

XIX. Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que les sean requeridos internamente o por otras dependencias, de acuerdo con las políticas y normas que establezca el Secretario;

XX. Aplicar los sistemas de información para el cumplimiento de sus funciones y para proporcionar la información ambiental al público, conforme a los lineamientos que establezca la Dirección General de Estadística e Información Ambiental, así como designar peritos a solicitud de autoridades judiciales y administrativas, quienes podrán elaborar los dictámenes técnicos que les hayan sido requeridos;

XXI. Elaborar conforme a las disposiciones legales aplicables y someter a consideración del Subsecretario al que se encuentren adscritos, los lineamientos de carácter técnico administrativo para la expedición, suspensión, otorgamiento, modificación, nulidad, anulabilidad, ineficacia o revocación de los actos jurídicos en las materias de su competencia y llevar el control administrativo de los mismos;

XXII. Expedir cuando proceda, previo pago de derechos, certificaciones de documentos que obren en los archivos de la Dirección General a su cargo;

XXIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por delegación, encomienda o les correspondan por suplencia;

XXIV. Expedir los oficios mediante los cuales se comisione al personal que realice las diligencias que ordene el Titular de la Secretaría, su superior jerárquico o aquéllas que les competan, y

XXV. Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría, así como las que les confieran las disposiciones jurídicas aplicables y sus superiores jerárquicos en el ámbito de sus atribuciones.

ARTÍCULO 18.- La Dirección General de Planeación y Evaluación tendrá las atribuciones siguientes:

I. Participar en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, ejerciendo las funciones que deriven de dicha participación, así como coordinar, con la contribución de las unidades administrativas correspondientes, la formulación e integración del Programa Sectorial de Medio Ambiente;

II. Formular y aplicar las políticas y lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos para desarrollar el proceso de planeación, para supervisar el cumplimiento de los objetivos, políticas, estrategias y metas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y otros instrumentos de planeación, así como para el desarrollo y mejora de capacidades institucionales;

III. Elaborar, con la participación de las unidades administrativas correspondientes, los criterios para evaluar la política nacional de protección al ambiente, la conservación y restauración de los ecosistemas, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y la difusión y comunicación de sus resultados;

IV. Establecer y coordinar las políticas y lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, así como sistemas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las medidas y acciones en materia de programación, presupuestación, ejecución y evaluación del Programa Sectorial de Medio Ambiente y demás programas a cargo de la Secretaría;

V. Definir, en colaboración con las unidades administrativas competentes, las acciones que deban ser coordinadas, concertadas e inducidas, en los diferentes ámbitos de la planeación para promover el desarrollo sustentable;

VI. Incorporar al proceso de planeación, los programas de normalización en las materias de la competencia de la Secretaría, con la participación de las unidades administrativas competentes y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VII. Establecer y promover la aplicación de los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos para el cumplimiento de las disposiciones en materia de presupuestación, ingresos, financiamiento y deuda, con la participación de la Oficialía Mayor, a fin de lograr la consecución de las metas sectoriales;

VIII. Coordinar la integración de propuestas para promover la adopción de instrumentos de política fiscal que atiendan objetivos ambientales;

IX. Integrar, con la participación que corresponda a la Oficialía Mayor, a la Dirección General de Estadística e Información Ambiental, y las demás unidades administrativas y órganos desconcentrados, la información relativa a la Secretaría para integrar el informe presidencial, así como elaborar el informe de ejecución anual del Plan Nacional de Desarrollo, la memoria

de labores de la Secretaría, y los demás que procedan de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y

X. Definir lineamientos ambientales para ser aplicados en los procesos operativos y toma de decisiones de las dependencias de la Administración Pública Federal para mejorar su desempeño en la ejecución de sistemas de manejo ambiental.

ARTÍCULO 19.- La Dirección General de Estadística e Información Ambiental tendrá las atribuciones siguientes:

I. Diseñar y establecer los lineamientos sobre la calidad de la información y los mecanismos de acceso público y, en general, del marco conceptual del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, con la participación que corresponda a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y delegaciones federales de la Secretaría y las entidades del sector, con la colaboración de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, la contribución de las instituciones de investigación y educación superior y organizaciones sociales y en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

II. Administrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales;

III. Desarrollar y actualizar el sistema nacional de indicadores ambientales, con la participación que corresponda al Instituto Nacional de Ecología, así como elaborar periódicamente informes públicos, tomando en cuenta la interacción de las actividades humanas con el estado del medio ambiente, y con las respuestas políticas y acciones de la sociedad;

IV. Promover, en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología, el diseño y aplicación de metodologías para la valuación económica del costo de la contaminación del ambiente y del agotamiento de los recursos naturales y coordinar e integrar de manera sistemática la información estadística que resulte de dichas metodologías;

V. Formular criterios metodológicos para la integración de variables ambientales dentro de los sistemas de información sectorial y económica, en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y proponer lo conducente a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

VI. Desarrollar servicios de información para la gestión ambiental, en coordinación con las distintas áreas de la Secretaría;

VII. Supervisar la operación de los sistemas de registro, estadísticos y geomáticos, en congruencia con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales;

VIII. Evaluar, conjuntamente con las unidades administrativas competentes, la información contenida en los registros y generada por los sistemas estadísticos y geomáticos para adecuarla a los requerimientos de los usuarios, en congruencia con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales;

IX. Realizar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, investigaciones, encuestas y muestreos estadísticos;

X. Establecer coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para la obtención de la información requerida por la Secretaría para el ejercicio de sus atribuciones y proponer la celebración, en los casos que proceda, de los convenios respectivos con los gobiernos estatales, municipales y con instituciones privadas;

XI. Elaborar, con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, el informe bienal de la situación general en materia del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;

XII. Formular con la participación de las demás unidades administrativas de la Dependencia, los sistemas de información para la gestión ambiental en congruencia con el programa de desarrollo informático de la Secretaría elaborado por la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones;

XIII. Formular los criterios y lineamientos que coadyuven a asegurar la integridad y confiabilidad de la información, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, con la intervención que en su caso corresponda a la Coordinación General Jurídica y a la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones;

XIV. Fungir como instancia interna de coordinación y operación de los sistemas de información que puedan ser consultados por el público en general, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XV. Proponer a la Coordinación General de Comunicación Social, lineamientos del contenido de información para la elaboración del programa editorial de la Secretaría;

XVI. Administrar la biblioteca y hemeroteca de la Secretaría, así como establecer las normas y procedimientos de funcionamiento de los demás centros de información de la dependencia y sus órganos desconcentrados;

XVII. Administrar el sitio Internet de la Dependencia, con la colaboración de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y delegaciones federales de la Secretaría, y

XVIII. Integrar y administrar el acervo de información geomática de la Secretaría con la participación que a las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados les corresponda para apoyar los trabajos de planeación y ordenamiento ecológico del territorio, así como proporcionar los servicios de consulta que requieran.

ARTÍCULO 20.- La Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular con la colaboración de las unidades administrativas de la Secretaría y del Instituto Nacional de Ecología, políticas e instrumentos de política ambiental y modelos regionales de planeación y gestión participativa encaminados a propiciar el desarrollo sustentable;

II. Promover, a través de instrumentos de política y de gestión ambiental y de la coordinación con los tres órdenes de gobierno, la incorporación de las consideraciones ambientales en la toma de decisiones de los sectores productivos;

III. Diseñar con la colaboración de las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados, los instrumentos de coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política ambiental nacional y de los programas de la Secretaría;

IV. Formular y promover, con la colaboración técnica del Instituto Nacional de Ecología y la participación de las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados, los programas de ordenamiento ecológico general del territorio, marino y regional en que participe la Federación y realizar su seguimiento, así como prestar el apoyo técnico para la formulación y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico regionales y locales a cargo de las entidades federativas y municipios que lo soliciten;

V. Participar en la instrumentación de los acuerdos o convenios de coordinación que celebre la Secretaría con gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como con otras Secretarías para formular, aplicar, dar seguimiento y evaluar la política ambiental y de recursos naturales;

VI. Proyectar con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Secretaría, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, las acciones para la descentralización y el fortalecimiento institucional en materia ambiental;

VII. Participar en la formulación e integración de los programas regionales y especiales en los que intervenga la Secretaría y evaluar periódicamente su efectividad;

VIII. Opinar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sobre la realización de proyectos y programas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a zonas de alta marginación situadas en regiones en las que se ubiquen las áreas naturales protegidas competencia de la Federación;

IX. Participar, en colaboración con la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, en los consejos de desarrollo sustentable y promover la constitución de consejos regionales y organismos similares de planeación participativa de las regiones para promover la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales;

X. Participar con las unidades administrativas competentes, en el diseño y desarrollo de sistemas regionales de información ambiental, en congruencia con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos Naturales;

XI. Coadyuvar con el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, en el desarrollo de programas de capacitación comunitaria para la protección y el aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales, en función de las necesidades de gestión y protección ambiental detectadas en las regiones del país;

XII. Promover la aplicación de las inversiones públicas y privadas para el cumplimiento de los programas de la Secretaría, y

XIII. Diseñar, establecer, promover y evaluar políticas, lineamientos y modelos de actuación sobre manejo de riesgo ambiental a nivel nacional, con la participación que corresponda a las unidades administrativas, órganos desconcentrados y delegaciones federales de la Secretaría, en coordinación con otras dependencias federales y en colaboración con los gobiernos de las entidades federativas y municipios.

ARTÍCULO 21.- La Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables tendrá las atribuciones siguientes:

I. Diseñar y promover, en el ámbito de competencia de la Secretaría, instrumentos de fomento y normatividad ambiental respecto del aprovechamiento sustentable, conservación y restauración de los suelos, el agua, la biodiversidad terrestre y acuática, los bosques, la flora y fauna silvestres, los recursos pesqueros y sus ecosistemas, especialmente los sujetos a protección especial y sus hábitats críticos, los recursos genéticos y el desarrollo sustentable de las actividades del sector primario siguientes: agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura, recolección, caza y pesca;

II. Determinar las causas, elementos y efectos de los problemas ambientales de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y del aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción, a través de estudios e investigaciones, con la participación de las correspondientes unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, de las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal y de los gobiernos estatales y municipales;

III. Coordinar y concertar con instituciones de investigación y de educación superior, organizaciones no gubernamentales, empresas y particulares, la elaboración de estudios, análisis, diagnósticos y propuestas sobre la problemática ambiental relacionada con las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción;

IV. Diseñar normas, criterios e instrumentos de fomento que apoyen la adopción de tecnologías ambientalmente sustentables en las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y en el aprovechamiento en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos a que se refiere la misma fracción;

V. Dictaminar los proyectos normativos e instrumentos de fomento ambiental que se generen en las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, así como opinar sobre los que se generen en otras dependencias federales, respecto de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I cuando puedan tener efectos ambientales y en el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción;

VI. Formular o promover, con la participación de la Coordinación General Jurídica conforme a su competencia, la elaboración y modificación de disposiciones jurídicas y administrativas, así como de instrumentos de fomento ambiental para lograr objetivos de desarrollo sustentable de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y garantizar la protección, conservación y restauración de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción;

VII. Impulsar la integración de un sistema normativo y de fomento ambiental respecto de los aspectos ambientales de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y del aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción, en el que participen los gobiernos federal, estatales y municipales, así como proponer las reformas jurídicas para tal efecto;

VIII. Promover regulaciones para salvaguardar la diversidad biológica y el acceso, manejo y aprovechamiento de los recursos genéticos, de la flora y de la fauna silvestres y otros recursos biológicos, así como elaborar las normas oficiales mexicanas para la regulación ambiental de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales citados en la misma fracción;

IX. Diseñar instrumentos de fomento ambiental de carácter económico, social, ecológico y jurídico para promover el desarrollo sustentable en las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción;

X. Diseñar criterios y lineamientos ambientales para la elaboración de proyectos de desarrollo sustentable en las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción, así como impulsar su aplicación con las entidades federativas y municipios;

XI. Participar en consejos consultivos, comités y otros grupos colegiados, para la elaboración de instrumentos de fomento y normatividad ambiental de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I, y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los

recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción, así como coordinar los grupos de trabajo correspondientes;

XII. Participar en representación de la Secretaría, en la elaboración de normas oficiales mexicanas que corresponda expedir a otras dependencias de la Administración Pública Federal, respecto de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción, así como en los correspondientes órganos nacionales e internacionales de normalización;

XIII. Promover la participación de las comunidades rurales, propietarios y poseedores de los recursos naturales, así como de los productores del sector primario, en el diseño e instrumentación de normas y programas de fomento ambiental y desarrollo sustentable en las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I, y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción;

XIV. Impulsar la difusión, capacitación y adiestramiento de los encargados de la aplicación y certificación de los instrumentos normativos y de fomento ambiental para el desarrollo sustentable de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción;

XV. Elaborar y suscribir acuerdos de seguimiento y aplicación respecto a normas e instrumentos de fomento ambiental en las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción, con las autoridades federales, estatales y municipales;

XVI. Promover, en coordinación con otras unidades administrativas de la Secretaría, la celebración de contratos, convenios y acuerdos de cooperación con organismos internacionales y nacionales, públicos o privados; para allegarse fondos, apoyos, cooperación y asistencia técnica para el diseño e instrumentación de medidas de fomento para el desarrollo sustentable de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción, en su caso, bajo las políticas y lineamientos que emita la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

XVII. Proponer ante las autoridades competentes, la expedición de declaratorias y programas ante situaciones de emergencia o extraordinarias para regular el desarrollo sustentable de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

XVIII. Organizar y coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la celebración de congresos, ferias, seminarios, foros, exposiciones, certámenes nacionales e internacionales que fomenten la cultura del desarrollo sustentable de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción, y

XIX. Evaluar los efectos ambientales generados por la aplicación de las normas e instrumentos de fomento ambiental para el desarrollo sustentable de las actividades del sector primario a que se refiere la fracción I y el aprovechamiento sustentable en dichas actividades de los recursos naturales y genéticos citados en la misma fracción.

ARTÍCULO 22.- La Dirección General de la Industria tendrá las atribuciones siguientes:

I. Diseñar y promover, en el ámbito de competencia de la Secretaría, instrumentos de fomento y normatividad ambiental para proteger los recursos naturales y los ecosistemas, respecto de la contaminación al suelo, al agua y a la atmósfera, visual, térmica, lumínica, sonora, vibraciones y de olores, así como de los residuos sólidos y peligrosos, que generen las actividades de los sectores industrial y del consumo;

II. Determinar las causas, elementos y efectos de los problemas ambientales de las actividades de los sectores industrial y del consumo, así como respecto al aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades a través de estudios e investigaciones, con la participación de las correspondientes unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, de las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal y de los gobiernos estatales y municipales;

III. Coordinar y concertar con instituciones de investigación y de educación superior, organizaciones no gubernamentales, empresas y particulares, la elaboración de estudios, análisis, diagnósticos y propuestas sobre la problemática ambiental de las actividades de los

sectores a que se refiere la fracción I, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

IV. Diseñar normas, criterios e instrumentos de fomento que apoyen la adopción de tecnologías ambientalmente sustentables en las actividades del sector industrial y del consumo, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

V. Dictaminar los proyectos normativos e instrumentos de fomento ambiental que se generen en las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, así como opinar sobre los que se generen en otras dependencias federales, respecto de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I cuando puedan tener efectos ambientales, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

VI. Formular o promover, con la participación de la Coordinación General Jurídica conforme a su competencia, la formulación y modificación de disposiciones jurídicas y administrativas, así como de instrumentos de fomento ambiental para lograr objetivos de desarrollo sustentable respecto de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I y garantizar la protección, conservación y restauración de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

VII. Impulsar la integración de un sistema normativo y de fomento ambiental respecto de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I y para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades, en el que participen los gobiernos federal, estatales y municipales, así como proponer las reformas jurídicas para tal efecto;

VIII. Diseñar instrumentos de fomento ambiental de carácter económico, social, ecológico y jurídico para promover el desarrollo sustentable en las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

IX. Diseñar criterios y lineamientos ambientales para la elaboración de proyectos productivos en el sector industrial e impulsar su aplicación con la participación de las entidades federativas y municipios;

X. Participar en consejos consultivos, comités y otros grupos colegiados, para la elaboración de instrumentos de fomento y normatividad ambiental para el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores industrial y del consumo y para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades, así como coordinar los grupos de trabajo respectivos;

XI. Participar en representación de la Secretaría, en la elaboración de normas oficiales mexicanas que corresponda expedir a otras dependencias de la Administración Pública Federal, así como en los órganos nacionales e internacionales de normalización, respecto al desarrollo sustentable de las actividades de los sectores industrial y del consumo y para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

XII. Promover la participación del sector industrial y de los consumidores en el diseño e instrumentación de normas y programas de fomento ambiental para el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores industrial y del consumo, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

XIII. Impulsar la capacitación y adiestramiento de los encargados de la aplicación y certificación de los instrumentos normativos para el desarrollo sustentable de las actividades industriales con criterios de industria limpia, sistemas de administración ambiental, mecanismos de prevención de riesgos y autorregulación;

XIV. Elaborar y suscribir acuerdos de seguimiento, aplicación y evaluación con autoridades federales, estatales y municipales, respecto de la elaboración y modificación de normas e instrumentos de fomento ambiental para el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores industrial y del consumo, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

XV. Promover la celebración de contratos, convenios y acuerdos de cooperación con organismos internacionales y nacionales, públicos o privados; para allegarse fondos, apoyos, cooperación y asistencia técnica para el diseño e instrumentación de medidas de fomento para el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores industrial y del consumo, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades, en su caso, bajo las políticas y lineamientos que emita la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

XVI. Proponer, ante las autoridades competentes, la instrumentación de programas para regular el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores industrial y del consumo, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades, conforme a las disposiciones legales aplicables;

XVII. Organizar y coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la celebración de congresos, ferias, seminarios, foros, exposiciones, certámenes nacionales e internacionales que fomenten la cultura del desarrollo sustentable en las actividades de los sectores industrial y del consumo, así como en el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades, y

XVIII. Evaluar los efectos ambientales generados por la aplicación de las normas e instrumentos de fomento ambiental para el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores industrial y del consumo, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades.

ARTÍCULO 23.- La Dirección General de Fomento Ambiental del Desarrollo Urbano, Transporte, Servicios y Turismo tendrá las atribuciones siguientes:

I. Diseñar y promover, en el ámbito de competencia de la Secretaría, los instrumentos de fomento y la normatividad ambiental para proteger los recursos naturales y los ecosistemas, respecto de la contaminación a la atmósfera, al agua y al suelo, visual, lumínica, térmica, sonora, vibraciones y de olores, así como de los residuos sólidos y peligrosos, que generen las actividades de los sectores del desarrollo urbano, el transporte, los servicios y el turismo;

II. Determinar las causas, elementos y efectos de los problemas ambientales de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como respecto al aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades, a través de estudios e investigaciones, con la participación de las correspondientes unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, de las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal y de los gobiernos estatales y municipales;

III. Coordinar y concertar con instituciones de investigación y de educación superior, organizaciones no gubernamentales, empresas y particulares, la elaboración de estudios para el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

IV. Diseñar normas, criterios e instrumentos de fomento que apoyen la adopción de tecnologías ambientalmente sustentables en las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

V. Dictaminar los proyectos normativos e instrumentos de fomento ambiental que se generen en las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, así como opinar sobre los que se generen en otras dependencias federales, respecto de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I cuando puedan tener efectos ambientales, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

VI. Formular o promover con la participación de la Coordinación General Jurídica conforme a su competencia, la formulación y modificación de disposiciones jurídicas y administrativas e instrumentos de fomento ambiental para lograr objetivos de desarrollo sustentable en las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I y garantizar la protección, conservación y restauración de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

VII. Impulsar la integración de un sistema normativo y de fomento ambiental respecto del desarrollo sustentable de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y

ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades, en el que participen los gobiernos federal, estatales y municipales, así como proponer las reformas jurídicas para tal efecto;

VIII. Diseñar instrumentos de fomento ambiental de carácter económico, social, ecológico y jurídico para promover el desarrollo sustentable en las actividades a que se refiere la fracción I, así como el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

IX. Diseñar criterios y lineamientos ambientales para la elaboración de programas y proyectos para el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades e impulsar su aplicación con las entidades federativas y municipios;

X. Participar en consejos consultivos, comités y otros grupos colegiados, para la elaboración de instrumentos de fomento y normatividad ambiental respecto al desarrollo sustentable de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como del aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

XI. Promover la participación de los responsables de la infraestructura urbana, servicios y transporte en el diseño e instrumentación de normas y programas de fomento ambiental y desarrollo sustentable de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como del aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

XII. Representar a la Secretaría en actos de normalización de otras dependencias de la Administración Pública Federal y en órganos de normalización nacionales e internacionales, respecto de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como del aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

XIII. Impulsar la difusión, capacitación y adiestramiento de los encargados de la aplicación y certificación de los instrumentos normativos, para el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como en el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades, con criterios de sistemas de administración ambiental, mecanismos de prevención de riesgos y convenios de autorregulación;

XIV. Elaborar y suscribir acuerdos de seguimiento, aplicación y evaluación, respecto de la elaboración y modificación de normas e instrumentos de fomento ambiental para el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

XV. Definir, a través de la coordinación con autoridades federales, estatales y locales, el cumplimiento de la normatividad ambiental y los resultados de la aplicación de instrumentos de fomento ambiental para el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades;

XVI. Promover, en coordinación con otras unidades administrativas de la Secretaría, la celebración de contratos, convenios y acuerdos de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales y nacionales, públicos o privados, en apoyo de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades, en su caso, bajo las políticas y lineamientos que emita la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

XVII. Proponer, ante las autoridades competentes, la expedición de declaratorias y programas para situaciones de emergencia o extraordinarias respecto del desarrollo sustentable de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

XVIII. Organizar y coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la celebración de congresos, ferias, seminarios, foros, exposiciones, certámenes nacionales e internacionales que fomenten la cultura del desarrollo sustentable de las actividades de los

sectores a que se refiere la fracción I, así como del aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades, y

XIX. Evaluar los efectos ambientales generados por la aplicación de las normas e instrumentos de fomento ambiental para el desarrollo sustentable de las actividades de los sectores a que se refiere la fracción I, así como para el aprovechamiento sustentable y la protección de los recursos naturales y ecosistemas de la contaminación y residuos generados en dichas actividades.

ARTÍCULO 24.- La Dirección General de Energía y Actividades Extractivas tendrá las atribuciones siguientes:

I. Diseñar y promover, en el ámbito de competencia de la Secretaría, los instrumentos de fomento y de normatividad de la seguridad y la protección ambiental, así como para salvaguardar los recursos naturales y los ecosistemas, respecto de la contaminación a la atmósfera, al agua y al suelo, visual, térmica, lumínica, sonora, vibraciones y de olores, y de los residuos sólidos y peligrosos, que generen las actividades de los sectores de energía y de actividades extractivas;

II. Determinar las causas, elementos y efectos de los problemas ambientales generados por los sectores de energía y actividades extractivas, respecto del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y de la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas, a través de estudios e investigaciones, con la participación de las correspondientes unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, de las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal y de los gobiernos estatales y municipales;

III. Coordinar y concertar con instituciones de investigación y de educación superior, organizaciones no gubernamentales, empresas y particulares, la elaboración de estudios relacionados con los problemas ambientales generados por los sectores de energía y actividades extractivas, así como respecto del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y de la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas;

IV. Diseñar normas, criterios e instrumentos de fomento que apoyen la adopción de tecnologías ambientalmente sustentables en los sectores de energía y actividades extractivas, así como en el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y en la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas;

V. Dictaminar los proyectos normativos e instrumentos de fomento ambiental que se generen en las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, así como opinar sobre los que se generen en otras dependencias federales, relacionados con los sectores de energía y actividades extractivas cuando puedan tener efectos ambientales, así como respecto del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y de la prevención, remediación y control de la contaminación que generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas;

VI. Formular o promover, con la participación de la Coordinación General Jurídica conforme a su competencia, la formulación y modificación de disposiciones jurídicas y administrativas para lograr objetivos de desarrollo sustentable en los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y de la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas;

VII. Impulsar la integración de un sistema normativo y de fomento ambiental respecto de los sectores de energía y actividades extractivas, así como del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y de la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas, en el que participen los gobiernos federal, estatales y municipales, así como promover las modificaciones jurídicas necesarias para tal efecto;

VIII. Diseñar instrumentos de fomento ambiental de carácter económico, social, ecológico y jurídico para promover el desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas;

IX. Diseñar criterios y lineamientos ambientales para la elaboración de programas y proyectos de desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas e impulsar su aplicación con las entidades federativas y municipios;

X. Participar en consejos consultivos, comités y otros grupos colegiados, para la elaboración de instrumentos de fomento y normatividad ambiental para el desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas, asimismo, coordinar los grupos de trabajo respectivos;

XI. Promover la participación de los responsables de las industrias de los sectores energético y de actividades extractivas, en el diseño e instrumentación de normas y programas de fomento ambiental y desarrollo sustentable aplicables a los sectores de energía y actividades extractivas, así como al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y a la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas;

XII. Impulsar la difusión, capacitación y adiestramiento de los encargados de la aplicación y certificación de los instrumentos normativos y de fomento ambiental, para el desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas, con criterios de industria limpia, sistemas de administración ambiental, mecanismos de prevención de riesgos y convenios de autorregulación;

XIII. Elaborar y suscribir acuerdos de seguimiento, aplicación y evaluación, respecto de la elaboración y modificación de normas e instrumentos de fomento ambiental respecto de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes;

XIV. Promover, en coordinación con otras unidades administrativas de la Secretaría, la celebración de contratos, convenios y acuerdos de cooperación y asistencia técnica con organismos internacionales y nacionales, públicos o privados para apoyar el desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas, en su caso, bajo las políticas y lineamientos que emita la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

XV. Proponer, ante las autoridades competentes, la expedición de declaratorias y programas para el desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

XVI. Organizar y coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la celebración de congresos, ferias, seminarios, foros, exposiciones, certámenes nacionales e internacionales que fomenten la cultura del desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas, y

XVII. Evaluar los efectos ambientales generados por la aplicación de las normas e instrumentos de fomento ambiental para el desarrollo sustentable de los sectores de energía y actividades extractivas, así como para el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales no renovables y la prevención, remediación y control de la contaminación generada por dichos sectores, que afecte los recursos naturales y los ecosistemas.

ARTÍCULO 25.- La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental tendrá las atribuciones siguientes:

I. Aplicar la política general sobre impacto y riesgo ambiental, así como participar en su formulación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría;

II. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y los informes preventivos de las obras o actividades competencia de la Federación y expedir, cuando proceda, las autorizaciones para la realización de las obras o actividades de que se trate;

III. Modificar, suspender, anular, nulificar y revocar las autorizaciones en materia de impacto ambiental y, en su caso, los estudios de riesgo respectivos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Supervisar el proceso de consulta pública en torno a los proyectos que se sometan al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en su caso, organizarlo con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Poner a disposición del público los informes preventivos y manifestaciones de impacto ambiental y solicitar la publicación en la Gaceta Ecológica, de la información relevante del proyecto de obra o actividad de que se trate;

VI. Requerir el otorgamiento de seguros y garantías respecto al cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones de impacto ambiental;

VII. Emitir observaciones y recomendaciones sobre los estudios de riesgo ambiental que se incluyan, en su caso, en las manifestaciones de impacto ambiental, así como dictaminar los correspondientes programas de prevención de accidentes, y

VIII. Establecer, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, los lineamientos generales de carácter técnico y administrativo para la expedición, trámite y revisión de la documentación relativa a la presentación de manifestaciones de impacto ambiental y de los estudios de riesgo que, en su caso, se incluyan.

ARTÍCULO 26.- La Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes tendrá las atribuciones siguientes:

I. Aplicar la política general de gestión de la calidad del aire y manejo sustentable de cuencas atmosféricas y sobre materiales, sustancias y residuos peligrosos y actividades altamente riesgosas, así como participar en su formulación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría;

II. Expedir, suspender, anular, nulificar o revocar total o parcialmente las licencias de funcionamiento, constancias y registros a fuentes fijas de contaminación atmosférica de jurisdicción federal, así como las autorizaciones para la realización de actividades altamente riesgosas y el manejo de materiales y residuos peligrosos;

III. Ser el conducto de recepción y respuesta en un solo trámite, de las solicitudes de autorizaciones, licencias, constancias y registros de su competencia y de las que corresponda expedir a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental para la operación y funcionamiento de establecimientos industriales;

IV. Participar con la Dirección General de Estadística e Información Ambiental, en el establecimiento y actualización de una base de información relativa a emisiones y transferencias de sustancias y residuos peligrosos y de contaminantes específicos en aire y suelo, así como en la integración de la información al registro de emisiones y transferencia de contaminantes a la atmósfera de la Secretaría y determinar las reglas e instructivo de reporte de la cédula de operación anual;

V. Coadyuvar con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Secretaría, en la promoción ante los gobiernos estatales y de los municipios, del fortalecimiento institucional local en materia de gestión de la calidad del aire, así como de la evaluación de riesgos ambientales a nivel local y la reducción de residuos en la fuente;

VI. Apoyar a la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia en la orientación y fortalecimiento de la participación pública en programas de prevención y control de la contaminación atmosférica y de la originada por sustancias y residuos peligrosos;

VII. Organizar el seguimiento y cuantificación de los avances en el abatimiento de emisiones y descargas contaminantes al aire a fin de alcanzar el manejo sustentable de las cuencas atmosféricas, con la colaboración del Instituto Nacional de Ecología y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

VIII. Proponer la aplicación de instrumentos de prevención y control integrado de la contaminación, de acuerdo con principios de modernización de la regulación ambiental y de manejo sustentable de cuencas atmosféricas;

IX. Participar y representar a la Secretaría en las instancias de coordinación para la gestión de la calidad del aire y manejo de cuencas atmosféricas;

X. Participar en la elaboración de dictámenes de programas de contingencias ambientales;

XI. Conducir y evaluar las políticas nacionales sobre protección de la capa de ozono, con la participación que corresponda a la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

XII. Participar en la definición y desarrollo de las estrategias de acción climática emprendidas por la Secretaría y otras dependencias de la Administración Pública Federal, con la colaboración de la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas;

XIII. Emitir observaciones y recomendaciones sobre los estudios de riesgo ambiental de actividades altamente riesgosas, con excepción de los que sean incluidos, en su caso, en las manifestaciones de impacto ambiental, así como dictaminar y aprobar, en coordinación con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, los correspondientes programas de prevención de accidentes;

XIV. Apoyar a la Dirección General de la Industria en la promoción del cambio tecnológico del sector industrial con un enfoque preventivo, para inducir procesos más limpios y competitivos, en lo que se refiere a la calidad del aire, materiales y residuos peligrosos y actividades altamente riesgosas;

XV. Coadyuvar con la Dirección General de Fomento Ambiental del Desarrollo Urbano, Transporte, Servicios y Turismo en la promoción ante los gobiernos estatales y municipales, de principios de prevención de la contaminación y ecoeficiencia aplicables a residuos no considerados como peligrosos;

XVI. Participar con la Dirección General de Estadística e Información Ambiental, en el establecimiento de los requerimientos y elementos para obtener información relevante sobre sustancias y residuos peligrosos;

XVII. Expedir, anular, nulificar y revocar total o parcialmente las autorizaciones para la instalación y operación de sistemas para la recolección, almacenamiento, transporte, reuso, tratamiento, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos;

XVIII. Autorizar, suspender, condicionar, anular, nulificar y revocar total o parcialmente, las autorizaciones para la importación y exportación de materiales y residuos peligrosos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

XIX. Participar en la celebración y ejecución de convenios con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como con los grupos sociales interesados, para el cumplimiento de las atribuciones del Gobierno Federal relativas al manejo de los materiales y residuos peligrosos y actividades altamente riesgosas;

XX. Coadyuvar con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la determinación de las medidas necesarias para el manejo adecuado de materiales y residuos peligrosos, la atención de emergencias ambientales, así como para la prevención y control de accidentes que involucren materiales y residuos peligrosos y los que puedan causar graves desequilibrios ecológicos y participar en su aplicación;

XXI. Aplicar el procedimiento de notificación relativo a la importación y exportación de materiales y residuos peligrosos, en cumplimiento de los tratados internacionales en los que el país sea parte y respecto a los accidentes que los involucren, con la participación que, en su caso, corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XXII. Dar cumplimiento a los compromisos y proyectos internacionales relacionados con el manejo sustentable de cuencas atmosféricas y substancias y residuos peligrosos, con la colaboración del Instituto Nacional de Ecología y conforme a los lineamientos que establezca la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

XXIII. Participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales aplicables para la regulación y autorización del proceso, uso, importación y exportación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, conjuntamente con las dependencias que participen en los organismos intersecretariales competentes a cargo de dichas actividades;

XXIV. Apoyar a las autoridades federales competentes, en la formulación y ejecución de programas para prevenir accidentes que puedan causar desequilibrios ecológicos;

XXV. Elaborar programas para la identificación, evaluación y restauración de sitios contaminados por materiales y residuos peligrosos, así como evaluar, dictaminar y resolver sobre la utilización de tecnologías y substancias para la recuperación de los suelos contaminados por dichos materiales y residuos peligrosos, y

XXVI. Apoyar a la Dirección General de Fomento Ambiental del Desarrollo Urbano, Transporte, Servicios y Turismo, en la promoción ante las autoridades municipales de restricciones a los

usos urbanos relacionados con las actividades altamente riesgosas, así como en el establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda.

ARTÍCULO 27.- La Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros tendrá las atribuciones siguientes:

I. Ejercer los derechos de la Nación sobre los bienes nacionales siguientes: zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito natural de aguas marítimas;

II. Conservar, restaurar y proteger el desarrollo sustentable de los bienes nacionales citados en la fracción I y de los ambientes costeros siguientes: humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar y de sus litorales o zonas federales;

III. Llevar a cabo los programas para la protección ambiental y el desarrollo sustentable de los bienes nacionales y ambientes costeros a que se refieren las fracciones I y II, así como participar en la formulación de normas oficiales mexicanas para su regulación ambiental;

IV. Aplicar las políticas y lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos para el uso, administración, aprovechamiento y conservación de los bienes nacionales a que se refiere la fracción I;

V. Emitir opinión respecto de las manifestaciones de impacto ambiental de obras y actividades que se pretendan establecer o realizar en los bienes nacionales o en los ambientes costeros a que se refieren las fracciones I y II;

VI. Participar con las autoridades competentes, en la delimitación de los recintos portuarios que afecten los bienes nacionales a que se refiere la fracción I;

VII. Organizar, integrar y mantener actualizado el inventario, catálogo y catastro de los bienes nacionales y ambientes costeros a que se refieren las fracciones I y II;

VIII. Organizar y administrar el registro y padrón de destinatarios, concesionarios, permisionarios y ocupantes de los bienes nacionales a que se refiere la fracción I, así como reunir, revisar y determinar los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos para su elaboración, operación y manejo;

IX. Establecer lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos para realizar y en su caso, autorizar los trabajos de deslinde, delimitación, amojonamiento, zonificación y equipamiento de los bienes nacionales a que se refiere la fracción I;

X. Otorgar, anular, nulificar y revocar total o parcialmente la aprobación de los proyectos de construcción, ampliación, reparación, adaptación o demolición de obras, acciones y servicios en los bienes nacionales a que se refiere la fracción I, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal;

XI. Participar en la formulación y, en su caso, celebración de acuerdos y convenios de coordinación y concertación relativos a los bienes nacionales y ambientes costeros a que se refieren las fracciones I y II, en su caso, conforme a los lineamientos que emita la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia;

XII. Proponer los lineamientos técnicos y participar en la celebración de los convenios y acuerdos de coordinación, para otorgar a los municipios costeros la administración y custodia de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas;

XIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de desincorporación del dominio público de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, formular los proyectos de decreto correspondientes, con la intervención que corresponda a la Coordinación General Jurídica y coordinar su tramitación, así como intervenir en representación del Gobierno Federal en la enajenación y afectación de dichos bienes;

XIV. Conocer sobre las solicitudes de destino que sobre los bienes nacionales a que se refiere la fracción I, le formulen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, elaborando los proyectos de acuerdo con la participación que, en su caso, corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal;

XV. Otorgar, revocar y declarar la extinción de los permisos y autorizaciones sobre el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes nacionales referidos en la fracción I y autorizar las modificaciones a las condiciones y bases de dichos actos administrativos, así como las solicitudes de cesión de derechos y obligaciones en la materia;

XVI. Proponer al Subsecretario de su adscripción, el otorgamiento, prórroga, revocación, extinción y rescate de las concesiones y destinos para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes nacionales referidos en la fracción I y las modificaciones a sus condiciones y bases,

así como las autorizaciones de cesión de derechos y obligaciones, con la participación que en su caso corresponda a la Coordinación General Jurídica;

XVII. Promover y gestionar ante las dependencias competentes, la realización de avalúos de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas;

XVIII. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los criterios para fijar el monto de los derechos federales, que de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, deban cubrirse por el uso, aprovechamiento o explotación de los bienes nacionales referidos en la fracción I, así como revisarlos y proponer sus modificaciones y los mecanismos para su eficiente recaudación;

XIX. Establecer y aplicar lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos, sobre limpieza, conservación y mantenimiento de los bienes nacionales referidos en la fracción I, y

XX. Proporcionar a la Coordinación General Jurídica los elementos necesarios para que promueva las acciones legales que deban realizarse respecto a los bienes nacionales referidos en la fracción I.

ARTÍCULO 28.- La Dirección General de Vida Silvestre tendrá las atribuciones siguientes:

I. Aplicar, con la participación que corresponda a las entidades del sector, la política para conservar y proteger la biodiversidad y de manejo y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestres y de su hábitat, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, así como participar en su formulación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Secretaría;

II. Proponer a la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, la celebración de acuerdos con los gobiernos de las entidades federativas y municipios que soliciten la descentralización de la administración y promoción de acciones y funciones de la Secretaría en materia de vida silvestre, así como participar en la ejecución de dichos instrumentos, de conformidad con los ordenamientos jurídicos aplicables;

III. Asesorar técnicamente a los gobiernos de las entidades federativas y municipios que lo soliciten, sobre la adopción de políticas y acciones para el manejo, aprovechamiento, control y conservación en materia de vida silvestre;

IV. Elaborar, establecer y regular, con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los calendarios de épocas hábiles de caza y de aprovechamiento de aves canoras y de ornato;

V. Proponer, promover y autorizar el establecimiento y desarrollo de exhibiciones de ejemplares de especies locales o regionales, en condiciones representativas de su hábitat natural;

VI. Expedir, suspender, modificar, anular, nulificar o revocar total o parcialmente, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, permisos, licencias, dictámenes, opiniones técnicas, registros y autorizaciones para la captura, colecta, investigación, aprovechamiento, posesión, manejo, importación, exportación y circulación o tránsito dentro del territorio nacional de ejemplares y derivados de vida silvestre, así como los quelonios, mamíferos marinos y las especies sujetas a algún régimen de protección especial, procedentes del o destinadas al extranjero y de reproducción y repoblación, incluyendo especies exóticas;

VII. Proponer el establecimiento, modificación y levantamiento de vedas de vida silvestre y las relativas a la captura, manejo, transporte, cautiverio y protección de los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, con la participación del Instituto Nacional de Ecología;

VIII. Dictaminar, conforme a las atribuciones de la Secretaría, el proyecto de la Carta Nacional Pesquera que formule la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

IX. Proponer, promover y autorizar el establecimiento de unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;

X. Establecer, conducir y difundir el Subsistema Nacional de Información de Vida Silvestre, así como integrar y mantener actualizado el inventario de poblaciones y especies silvestres, en coordinación con las instancias correspondientes y bajo los lineamientos de la Dirección General de Estadística e Información Ambiental;

XI. Proponer y promover, con la participación de las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Secretaría y las entidades del sector, así como de la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el desarrollo de programas de educación y capacitación para la conservación, manejo y aprovechamiento de flora y fauna silvestres y acuáticas;

XII. Coordinarse con las unidades administrativas competentes de la Secretaría para aplicar los lineamientos y resoluciones derivados de los acuerdos, convenios y convenciones internacionales, de los que México sea parte en materia de vida silvestre;

XIII. Emitir opinión sobre las manifestaciones de impacto ambiental que se presenten en materia de vida silvestre, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

XIV. Elaborar y actualizar, con la participación de las unidades administrativas competentes, catálogos de especies de vida silvestre;

XV. Promover y aplicar los planes de recuperación de las especies de vida silvestre en riesgo;

XVI. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la determinación del destino de los ejemplares de flora y fauna silvestres vivos, decomisados, entregados voluntariamente o rescatados y devueltos por otros países, así como opinar sobre el destino de partes y productos de especies de flora y fauna silvestres;

XVII. Administrar centros para la conservación e investigación de la vida silvestre;

XVIII. Otorgar la certificación de ejemplares, productos y servicios provenientes de unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;

XIX. Autorizar los planes o programas, para la conservación, manejo, aprovechamiento, restauración, propagación, recuperación, siembra, introducción, reintroducción, control, transplante y repoblamiento de especies de vida silvestre;

XX. Atender los asuntos relativos al manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares y poblaciones de vida silvestre que se tornen perjudiciales, en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología;

XXI. Establecer y aplicar las medidas de sanidad relativas a la vida silvestre, y

XXII. Promover el trato digno y respetuoso a la fauna silvestre.

ARTÍCULO 29.- La Dirección General de Federalización y Descentralización de Servicios Forestales y de Suelo tendrá las atribuciones siguientes:

I. Ejercer los actos de autoridad relativos a la aplicación de la política de aprovechamiento sustentable, conservación, protección y restauración de los recursos forestales y de los suelos, así como participar en la formulación de la misma, con las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación y del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables;

II. Operar mecanismos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para apoyar la gestión institucional de éstas en la descentralización de los actos de autoridad en materia forestal y de suelos;

III. Apoyar a las unidades administrativas de la Secretaría y a las entidades del sector, en la consolidación del proceso de descentralización a los estados, en materia forestal y de suelos, así como coadyuvar en el seguimiento de las acciones derivadas de dicho proceso;

IV. Formular y evaluar los programas de restauración para el rescate de suelos en zonas degradadas no forestales, así como evaluar los resultados de los programas de reforestación que ejecuten otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

V. Coordinar la aplicación de los criterios ambientales para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, con la participación que corresponda a otras unidades administrativas competentes, a las entidades del sector y a los gobiernos de las entidades federativas y municipales;

VI. Autorizar, suspender, revocar, anular y nulificar el cambio de utilización de terrenos forestales, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables;

VII. Integrar y mantener actualizado el inventario en materia de suelos, en coordinación con las autoridades competentes y entidades del sector, así como establecer y operar el sistema de monitoreo de la calidad del suelo;

VIII. Conducir y apoyar técnicamente la realización de los programas sectoriales en materia forestal y de suelos, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal y con los gobiernos estatales y municipales participantes;

IX. Conocer las operaciones y evaluar los resultados de los programas institucionales en materia forestal y de suelos, de las entidades del sector;

X. Evaluar para efecto del registro correspondiente, la prestación eficiente de los servicios técnicos forestales de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XI. Otorgar, modificar, suspender, revocar, anular, nulificar y cancelar las autorizaciones relativas a la forestación y al aprovechamiento de recursos forestales maderables;

XII. Otorgar, suspender, anular, nulificar y revocar total o parcialmente las autorizaciones en materia de sanidad forestal y expedir la documentación fitosanitaria que se requiera para la movilización, importación y exportación de productos y subproductos forestales, en coordinación con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, así

como efectuar las notificaciones para llevar a cabo los trabajos de saneamiento forestal a que están obligados los propietarios o poseedores de terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal;

XIII. Expedir, tramitar y revisar la documentación relativa al ejercicio de las actividades forestales de su competencia;

XIV. Proponer, dar seguimiento y evaluar el establecimiento o levantamiento de vedas forestales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y con base en los estudios técnicos que al efecto elabore;

XV. Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas del Distrito Federal y de los municipios, para la ejecución de programas de combate de incendios forestales;

XVI. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la realización de estudios y propuestas para el establecimiento y manejo de áreas naturales protegidas en terrenos forestales;

XVII. Autorizar y validar la documentación y los sistemas de control previstos en las disposiciones jurídicas aplicables para acreditar la legal procedencia de las materias primas forestales;

XVIII. Realizar los actos de autoridad que correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, para la protección y conservación de los recursos genéticos forestales, así como recibir los avisos para realizar actividades de recolección, producción, almacenamiento y distribución de germoplasma forestal, con fines comerciales o de investigación;

XIX. Administrar los terrenos nacionales forestales, cuya administración no corresponda a otra dependencia;

XX. Integrar y mantener actualizado el inventario forestal nacional y elaborar la zonificación de los terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, con base en el ordenamiento ecológico del territorio;

XXI. Elaborar, bajo los lineamientos de la Dirección General de Estadística e Información Ambiental, el Subsistema Nacional de Información del Sector Forestal para incorporarlo en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos Naturales, y a los sistemas de información estadísticos y de información geográfica y documental;

XXII. Establecer, integrar, operar y mantener actualizado el Registro Forestal Nacional, conforme a la información que reciba de las delegaciones federales de la Secretaría, así como expedir los certificados de inscripción previstos en las disposiciones jurídicas aplicables;

XXIII. Autorizar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, los programas de manejo para la reforestación y los avisos para el aprovechamiento de recursos forestales no maderables para fines comerciales, así como realizar su control y evaluación y, en su caso, aprobar sus modificaciones;

XXIV. Desarrollar y conservar las obras de infraestructura vial que se realicen en los terrenos forestales;

XXV. Integrar la balanza de disponibilidad, consumo de productos, subproductos e insumos de origen forestal, así como participar en la formulación de los lineamientos de política para su mejor uso y consumo nacional;

XXVI. Autorizar el establecimiento, desarrollo y aprovechamiento de plantaciones forestales comerciales, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría y de la Administración Pública Federal;

XXVII. Representar a la Secretaría en los organismos, comités o consejos que asignen recursos o subsidios al desarrollo de plantaciones forestales comerciales, y

XXVIII. Dar cumplimiento en lo que corresponda a sus atribuciones, a los compromisos y proyectos internacionales en materia forestal y de manejo sustentable de recursos forestales y del suelo, conforme a los lineamientos de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales.

ARTÍCULO 30.- La Dirección General de Recursos Humanos tendrá las atribuciones siguientes:

I. Cumplir y promover la observancia de las normas y políticas en materia de administración de personal dictadas por el Secretario y por las dependencias competentes de la Administración Pública Federal;

II. Diseñar y llevar los sistemas y procedimientos para la administración del personal de la Secretaría y conducir sus relaciones laborales, de conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Emitir las normas y procedimientos a que se sujetarán los trámites para el ingreso y movimientos del personal de la Secretaría, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, así como normar y administrar los procedimientos para la selección, nombramiento,

contratación, pago, inducción, capacitación y desarrollo, prestaciones, servicios y movimientos del personal de la Secretaría y vigilar su cumplimiento;

IV. Aplicar los sistemas de estímulos y recompensas que establece la legislación aplicable, los descuentos al personal de la Secretaría, así como las medidas disciplinarias y sanciones administrativas previstas en las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Establecer los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos conforme a los cuales los órganos desconcentrados de la Secretaría deberán proceder en lo relativo a recursos humanos;

VI. Expedir, previa verificación de la existencia de los puestos y plazas correspondientes y de los recursos presupuestales autorizados para el efecto, los nombramientos del personal de la Secretaría, con excepción de los que deba realizar el Titular de manera indelegable, autorizar los movimientos de personal y resolver los casos de terminación de sus efectos, así como imponer las sanciones y medidas disciplinarias respectivas en caso de irregularidades o faltas de carácter laboral;

VII. Suscribir, previa verificación de la existencia de recursos presupuestales autorizados para ese efecto, los contratos de prestación de servicios profesionales o técnicos, por honorarios y eventuales que celebre la Secretaría con terceros;

VIII. Proponer, aplicar y vigilar el cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo;

IX. Representar a la Secretaría ante las comisiones mixtas que correspondan, así como participar en la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo;

X. Registrar y controlar la plantilla de personal de la Secretaría;

XI. Normar y expedir las credenciales oficiales del personal de la Secretaría y regular las que expidan los órganos desconcentrados;

XII. Gestionar y atender las prestaciones económicas y sociales de los trabajadores;

XIII. Diseñar y proponer el Programa Institucional de Capacitación para el personal de la Secretaría;

XIV. Apoyar a la Coordinación General Jurídica en la resolución de conflictos que se susciten en materia laboral, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

XV. Establecer normas y lineamientos para el pago de las remuneraciones al personal de la Secretaría, así como aplicar los descuentos y retenciones conforme a los ordenamientos legales establecidos, y en su caso, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente, y

XVI. Organizar, dirigir y evaluar la prestación del servicio social en la Secretaría, conforme a las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 31.- La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto tendrá las atribuciones siguientes:

I. Difundir, entre las unidades administrativas de la Secretaría y las entidades del sector, las políticas, los lineamientos, las directrices y los criterios técnicos para la programación y el presupuesto;

II. Controlar y evaluar el ejercicio presupuestal de la Secretaría y llevar a cabo la evaluación programática presupuestal y proponer las medidas correctivas pertinentes;

III. Instrumentar, realizar o gestionar, según corresponda, los actos y procedimientos administrativos, programáticos y presupuestales que deba llevar a cabo a la Secretaría respecto de las entidades del sector, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Integrar con la participación de las unidades administrativas de la Secretaría, el manual de organización general, los manuales de organización específicos y los de procedimientos y servicios al público, así como mantenerlos actualizados;

V. Integrar y formular el programa operativo anual y el anteproyecto del presupuesto de la Secretaría y el de sus órganos desconcentrados, en base a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y enviarlos para su autorización, previo acuerdo del Oficial Mayor y del Secretario;

VI. Dictaminar y gestionar el registro, ante las dependencias competentes, de las estructuras orgánicas de las unidades administrativas de la Secretaría, las de sus órganos desconcentrados, y sus modificaciones; así como establecer políticas, lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos para la productividad de la Secretaría;

VII. Formular los estudios relativos a sueldos y salarios, en coordinación con las autoridades competentes;

VIII. Comunicar, en base al presupuesto aprobado a la Secretaría y sus órganos desconcentrados, la asignación anual correspondiente a cada unidad responsable;

IX. Llevar a cabo el proceso de programación presupuestal de la Secretaría con la participación de la Dirección General de Planeación y Evaluación;

X. Coordinar la aplicación de los lineamientos que en materia de modernización y desarrollo administrativo dicten el Secretario y las dependencias competentes;

XI. Observar en el proceso de programación y presupuestación en lo conducente a los lineamientos internos que al efecto emita la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental;

XII. Analizar, validar y gestionar las solicitudes de radicación de recursos y modificaciones presupuestales que presenten las unidades responsables de la Secretaría y sus órganos desconcentrados;

XIII. Establecer la coordinación con las instituciones financieras que operan créditos externos, con la participación de las unidades administrativas competentes;

XIV. Participar en los términos que señalen las disposiciones legales aplicables, en la gestión de créditos y aportaciones externas para financiar programas a la Secretaría y su reembolso;

XV. Realizar la operación financiera de la Secretaría, mediante el registro y pago vía cuentas por liquidar certificadas u otros instrumentos establecidos para tal fin, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XVI. Registrar la contabilidad de las operaciones presupuestarias para efectos de seguimiento y operación del sistema integral de contabilidad gubernamental de la Secretaría;

XVII. Integrar, elaborar y presentar la cuenta de la Hacienda Pública Federal de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados;

XVIII. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la autorización del programa de inversiones de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados;

XIX. Formular los informes de evaluación programático-presupuestales que presenta la Secretaría y sus órganos desconcentrados;

XX. Registrar, gestionar y actualizar, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, los ingresos derivados de sus actividades, y elaborar la declaración informativa anual de las contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos fiscales generados por la Secretaría, y

XXI. Participar en la constitución, registro, control y gestoría financiera de los fideicomisos, mandatos, actos y contratos análogos que tramite la Secretaría, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 32.- La Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular y proponer las políticas, los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, los sistemas y los procedimientos para la administración de los recursos materiales de la Secretaría y procurar la desconcentración, simplificación y descentralización administrativa;

II. Coordinar la formulación de los programas anuales de adquisición de bienes y servicios, integrar el anteproyecto del programa de presupuesto anual de adquisiciones y el ajuste correspondiente por cada una de las unidades administrativas de la Secretaría;

III. Llevar a cabo las adquisiciones y suministros de bienes y servicios de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como contribuir a que las adquisiciones que realicen los órganos desconcentrados de la Secretaría se lleven a cabo conforme a las normas y procedimientos;

IV. Establecer normas y lineamientos generales de carácter técnico y administrativo para compras consolidadas de la Secretaría;

V. Tramitar la documentación comprobatoria de pagos por operaciones realizadas que afecten el presupuesto y, supervisar que se cumplan las condiciones y garantías que se deban otorgar;

VI. Administrar y operar los almacenes de la Secretaría;

VII. Aplicar y supervisar los sistemas de control de los inventarios generales de los bienes a cargo de la Secretaría; dictaminar y realizar su afectación, baja y destino final y, en su caso, celebrar los convenios y contratos en materia de seguros y cesión de derechos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Llevar a cabo los trámites necesarios para mantener actualizado el censo y registro de los inmuebles federales asignados a la Secretaría, de conformidad con los lineamientos que dicte la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;

IX. Integrar y establecer, conforme a los lineamientos aplicables en la materia, los proyectos de conservación y mantenimiento de los inmuebles con que cuentan las unidades administrativas de la Secretaría en el Distrito Federal, y consolidar las necesidades de conservación y mantenimiento que realicen las delegaciones federales para tramitar la autorización y radicación de los recursos correspondientes;

X. Celebrar, previo acuerdo con el Oficial Mayor, los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, ubicados en el Distrito Federal, para el uso de la Secretaría, así como llevar a cabo el registro de los mismos y los que se celebren en las entidades federativas;

XI. Tramitar ante las autoridades competentes las solicitudes de bienes y servicios de informática de las unidades administrativas de la Secretaría, en base al dictamen técnico de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones;

XII. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los convenios y contratos de bienes y servicios adjudicados a los proveedores y prestadores de servicios, conforme a las normas y políticas establecidas y vigilar que se cumplan las condiciones, calidad, precio y oportunidad convenidas;

XIII. Normar y operar la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de los inmuebles y sus contenidos, así como de bienes y valores de la Secretaría o aquellos que estén a su servicio;

XIV. Administrar el equipo de transporte de la Secretaría;

XV. Implantar y coordinar, conforme al Sistema Nacional de Protección Civil, el programa interno de protección civil de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados;

XVI. Coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en el establecimiento de las normas, las políticas y los procedimientos para el manejo de los servicios documentales institucionales, en los que se incluyen los servicios bibliotecarios, hemerográficos y el sistema de archivos;

XVII. Participar con la Dirección General de Estadística e Información Ambiental en la celebración de convenios de préstamo interbibliotecario e intercambio de información con los sectores público, social y privado, y

XVIII. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, en acuerdo con la Oficialía Mayor, de los Comités de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría.

ARTÍCULO 33.- La Dirección General de Informática y Telecomunicaciones tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer lineamientos generales en materia de informática y telecomunicaciones, así como integrar e instrumentar el programa de desarrollo informático de la Secretaría;

II. Proponer estrategias, sistemas y procedimientos en materia de tecnología de la información y telecomunicaciones para las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría;

III. Diseñar y establecer políticas, normas y programas para mantener actualizada la infraestructura de cómputo, telecomunicaciones y equipos auxiliares de la Secretaría y evaluar su funcionamiento en congruencia con los requerimientos de las unidades administrativas;

IV. Dictaminar sobre la contratación, adquisición, instalación, operación y mantenimiento de los equipos de procesamiento electrónico de datos y de los servicios de comunicación de voz, datos e imágenes, incluyendo sus programas, equipos auxiliares y de transmisión, destinados a las unidades administrativas de la Secretaría, en concordancia con las políticas y los lineamientos en materia de informática;

V. Dictaminar y evaluar los servicios informáticos que proporcionan a las unidades administrativas de la Secretaría, las empresas prestadoras de servicios, con la participación de los responsables de la función informática de dichas unidades administrativas;

VI. Proponer los programas y presupuestos anuales destinados a proporcionar los servicios informáticos y de comunicaciones, en base a los requerimientos de las unidades administrativas de la Secretaría;

VII. Definir, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, los servicios informáticos relacionados con la obtención y análisis de información y para la resolución de problemas derivados de sus actividades operativas, conforme al programa de desarrollo informático institucional;

VIII. Desarrollar e instrumentar en colaboración con las unidades administrativas usuarias, los controles sobre la información derivada de los procesos informáticos desarrollados directamente por la Secretaría o a través de proveedores externos;

IX. Diseñar y programar las bases de datos del sistema informático de la Secretaría, conforme a las determinaciones del Comité Interno que para tal efecto se establezca;

X. Diseñar y establecer las políticas, normas y procedimientos en materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones;

XI. Implantar los estándares para la adquisición, contratación y licenciamiento de equipamiento, software y servicios; para el diseño, programación y documentación de aplicaciones de cómputo; así como para la gestión vía Internet de trámites ante las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría;

XII. Establecer programas de capacitación y certificación en cómputo y comunicaciones para el personal técnico y usuario;

XIII. Implantar políticas de seguridad en las instalaciones de cómputo y comunicaciones y en los sitios de internet e intranet de la Secretaría;

XIV. Vigilar la observancia de la normatividad que en materia de equipamiento auxiliar de comunicaciones, corresponda al otorgamiento del servicio;

XV. Aplicar las políticas de ahorro y austeridad acordadas por el Ejecutivo Federal en materia de telecomunicaciones y servicios de cómputo;

XVI. Coadyuvar a través de la informática y las telecomunicaciones en el proceso de modernización, simplificación y desconcentración de las atribuciones de la Secretaría;

XVII. Establecer y operar los mecanismos para la investigación y difusión del avance tecnológico en materia de informática y telecomunicaciones;

XVIII. Controlar la asignación de bienes informáticos, conforme a la normatividad aplicable;

XIX. Definir los servicios informáticos relacionados con la obtención y análisis de información en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, y

XX. Promover la participación de la Secretaría en eventos nacionales e internacionales en materia de informática, telecomunicaciones, Internet y gobierno electrónico, en su caso, conforme a los lineamientos de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales.

CAPÍTULO OCTAVO
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES

ARTÍCULO 34.- La Secretaría para el ejercicio de las atribuciones que le han sido asignadas, contará con delegaciones federales en cada una de las entidades federativas o en las regiones que establezca el Titular de la Secretaría, de conformidad con el acuerdo que expida al efecto.

Las delegaciones federales para la realización de sus actividades, tendrán la estructura administrativa que el Secretario determine.

ARTÍCULO 35.- Al frente de cada Delegación habrá un Delegado, quien será nombrado y removido libremente por el Secretario y será auxiliado por el personal que las necesidades del servicio requieran y estén previstas en el presupuesto.

El Delegado Federal en cada entidad federativa o región, tendrá la representación de la Secretaría para desempeñar las funciones que directamente le encomiende el Secretario.

Los Delegados Federales tendrán, respecto de la unidad administrativa a su cargo, las facultades que se señalan en el artículo 17.

ARTÍCULO 36.- Las Delegaciones Federales tendrán las atribuciones siguientes, dentro de su circunscripción territorial:

I. Coordinar en el ámbito territorial de la entidad federativa o región correspondiente, la ejecución de los programas y acciones relativas a las atribuciones que en este Reglamento se le otorgan, con apego a las normas y lineamientos que determine el Secretario y las unidades administrativas centrales competentes, así como informar de los avances y resultados de su ejercicio;

II. Elaborar diagnósticos relativos a la problemática local o regional en las materias competencia de la Secretaría;

III. Contribuir en las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos estatales para el desarrollo integral de las regiones;

IV. Proponer y gestionar ante el Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal, la coordinación y concertación intersectorial de los programas y proyectos de conservación ambiental y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

V. Proponer, opinar y, en su caso, suscribir los acuerdos y convenios de coordinación que se lleven a cabo con los gobiernos de las entidades federativas, así como con los sectores privado y social. Igualmente, participar en los mecanismos de coordinación y concertación que se establezcan;

VI. Proponer, opinar y, por acuerdo del Secretario, suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y convenios de concertación con los sectores social y

privado, así como auxiliar a las unidades administrativas centrales de la Secretaría, en la formulación y seguimiento de convenios y contratos que se ejecuten en la entidad federativa de su circunscripción;

VII. Informar y dar seguimiento a las acciones de desconcentración y descentralización del sector en el ámbito estatal o regional;

VIII. Apoyar a los organismos desconcentrados de la Secretaría, en la ejecución de los programas, competencia de la misma;

IX. Otorgar permisos, licencias, autorizaciones, y sus respectivas modificaciones, suspensiones, cancelaciones, revocaciones o extinciones, de conformidad con lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables, siguiendo los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos establecidos por las unidades administrativas centrales de la Secretaría, en las siguientes materias:

a) Uso, explotación y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, que determinen las unidades administrativas centrales competentes;

b) Manifiestos y documentación sobre manejo de materiales y residuos peligrosos;

c) Informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental, licencias de funcionamiento, licencias ambientales únicas respecto de obras y actividades públicas y privadas, con excepción de aquellas que corresponden a la industria del petróleo y petroquímica, así como a los tratadores de residuos peligrosos;

d) Aprovechamientos de recursos forestales, avisos e informes de forestación y programas integrados de manejo ambiental y forestación, reforestación, modificaciones o cancelaciones de los programas de manejo forestal, medios de marqueo para el señalamiento de la madera en rollo y otorgar la documentación fitosanitaria forestal que se requiera para la exportación, importación y movilización de productos y subproductos forestales, así como efectuar las notificaciones en los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal relativas al saneamiento;

e) Autorizaciones de cambio de utilización de terrenos forestales. Cuando se pretendan otorgar autorizaciones de cambio de utilización de terrenos forestales mayores a 10 hectáreas, se requerirá la opinión previa de la Dirección para la Federalización de los Recursos Forestales y el Manejo del Suelo;

f) Aprovechamiento cinegético y de aves canoras y de ornato;

g) Aprovechamiento de fauna silvestre terrestre;

h) Taxidermistas, organizadores y asistentes cinegéticos;

i) Recolección, almacenamiento y transporte de residuos peligrosos así como los biológicos-infecciosos;

j) Prestación de servicios a terceros para el almacenamiento de residuos peligrosos, incluyendo los biológico-infecciosos, y

k) Combustión a cielo abierto en zonas de jurisdicción federal para adiestramiento de incendios.

X. Llevar a cabo los registros y, en su caso otorgarlos, de fauna silvestre, clubes, asociaciones de cazadores y taxidermistas, así como los refrendos respectivos;

XI. Integrar y actualizar los inventarios de recursos naturales y fuentes contaminantes, así como realizar los monitoreos correspondientes;

XII. Administrar las áreas naturales protegidas que le asigne la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas;

XIII. Participar en el Sistema Nacional de Protección Civil, así como formular y establecer su programa interno de protección civil;

XIV. Constituirse en enlace con las autoridades estatales y municipales para prevenir, controlar y coordinar las situaciones de emergencia ocasionadas por fenómenos climatológicos, hidrológicos, incendios forestales, plagas y enfermedades que afecten a las áreas forestales;

XV. Operar programas de administración y conservación de los recursos naturales, competencia de la Secretaría;

XVI. Proporcionar la información y datos técnicos que le sean solicitados por las autoridades superiores de la Secretaría, órganos desconcentrados y otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XVII. Contratar las obras, estudios y servicios relacionados con éstas, que figuren en el presupuesto de la Delegación, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, así como supervisar su ejecución;

XVIII. Integrar y establecer, conforme a los lineamientos aplicables en la materia, los proyectos de conservación y mantenimiento de los inmuebles con que cuente la Delegación;

XIX. Celebrar, previo cumplimiento de la normatividad en la materia, los contratos de arrendamiento de inmuebles necesarios para la Secretaría, y notificar de su formalización a la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios;

XX. Recibir las solicitudes e integrar los expedientes relativos a los aprovechamientos o servicios competencia de la Secretaría, así como entregar las resoluciones emanadas de las unidades administrativas centrales competentes, de conformidad con los lineamientos de carácter técnico y administrativo que señalen las mismas;

XXI. Operar el Registro Forestal en la entidad federativa que corresponda, así como expedir los certificados de inscripción, sus modificaciones, suspensiones y cancelaciones, así como remitir dichos informes a la unidad administrativa central para integrar el Registro Forestal Nacional;

XXII. Operar y actualizar el Inventario Nacional Forestal en la entidad federativa que corresponda, revisar y validar la cartografía forestal y de zonificación, así como efectuar la supervisión del muestreo de campo y monitoreos de ecosistemas forestales;

XXIII. Realizar el control y evaluación de los aprovechamientos de recursos forestales maderables y no maderables, así como operar, cuando corresponda a la Secretaría, los programas forestales, de conformidad con los lineamientos que emitan las unidades administrativas centrales. Asimismo, otorgar constancias de recibo de avisos de aprovechamientos de recursos forestales no maderables con fines comerciales y realizar las notificaciones en materia de sanidad forestal;

XXIV. Suscribir convenios relativos a los trámites de expropiación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad particular;

XXV. Operar los sistemas de administración de recursos humanos, de registro contable y de evaluación programático-presupuestal, siguiendo los lineamientos que señalen las unidades administrativas centrales de la Secretaría;

XXVI. Aplicar y evaluar los programas de desarrollo regional sustentable, de conformidad con los lineamientos de carácter técnico y administrativo que señalen las unidades administrativas centrales de la Secretaría;

XXVII. Suscribir los instrumentos jurídicos de concertación para el otorgamiento de subsidios con cargo al presupuesto de la Secretaría; conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y previa autorización del Oficial Mayor y del titular de la unidad administrativa de la Secretaría que tenga a su cargo el ejercicio de dichos subsidios;

XXVIII. Otorgar permisos para ejercer el comercio ambulante en las playas y la zona federal marítimo terrestre, debiéndose observar lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables, y

XXIX. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

Las Delegaciones Federales de la Secretaría podrán contar, de acuerdo con su presupuesto autorizado, con una unidad jurídica, la que ejercerá, en el ámbito de la circunscripción territorial correspondiente, las atribuciones mencionadas en el artículo 11 fracciones VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII y XXV de este Reglamento; siguiendo los lineamientos que, en su caso, determine la Coordinación General Jurídica.

Para otorgar el perdón a que se refiere la fracción XX del artículo 11 de este Reglamento, las unidades jurídicas de las Delegaciones Federales deberán obtener previamente la aprobación expresa del Titular de la Coordinación General Jurídica.

CAPÍTULO NOVENO

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

ARTÍCULO 37.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de sus asuntos, la Secretaría contará con los órganos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados, con atribuciones específicas para resolver sobre las materias que a cada uno se determine, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El Titular de la Secretaría podrá revisar, confirmar, modificar, revocar o nulificar, en su caso, los actos y resoluciones dictadas por los órganos desconcentrados.

ARTÍCULO 38.- Los órganos desconcentrados estarán a cargo de un titular, cuya denominación se precisa en cada caso, los que tendrán las facultades genéricas que se señalan en el artículo 39 de este Reglamento y las establecidas en otras disposiciones legales cuya aplicación les competa. Los titulares serán los representantes legales del desconcentrado de que se trate con facultades para celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que se requieran para el ejercicio de las atribuciones del órgano

respectivo, así como para establecer la debida coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría y del sector, en la ejecución de sus programas y acciones.

Los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Presidente de la República.

ARTÍCULO 39.- Los titulares de los órganos desconcentrados tendrán las facultades genéricas siguientes:

I. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del órgano desconcentrado;

II. Formular los manuales de organización, procedimientos y servicios del órgano desconcentrado, de conformidad con los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo que al efecto establezca el Oficial Mayor de la Secretaría;

III. Formular, en coordinación con la Oficialía Mayor, los anteproyectos de programa-presupuesto del órgano desconcentrado y una vez aprobado, verificar su correcta y oportuna ejecución;

IV. Intervenir en la designación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su cargo, así como en la contratación del servicio externo que fuese necesario; autorizar dentro del ámbito de su competencia, licencias de conformidad con las necesidades del servicio; y participar, directamente en el caso de sanciones, remoción y cese del personal de su responsabilidad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

V. Proponer los anteproyectos de normas oficiales mexicanas en las materias de su competencia, así como participar y, en su caso, presidir, cuando sean designados para ello, los comités en donde se analicen y elaboren las normas oficiales mexicanas, responsabilidad de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y

VI. Las demás que les otorguen las disposiciones jurídicas aplicables.

Los subprocuradores, directores generales, subdirectores generales, coordinadores de proyectos especiales, gerentes nacionales, gerentes regionales, gerentes estatales, directores ejecutivos, directores y jefes de unidad del nivel inmediato inferior al titular del respectivo órgano desconcentrado tendrán, respecto a la unidad administrativa a su cargo, las facultades antes señaladas y en lo conducente las previstas en el artículo 17 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 40.- El Titular de la Secretaría tendrá la facultad para crear consejos o comités consultivos o técnicos en los órganos desconcentrados, determinando su integración, organización y funcionamiento.

CAPÍTULO DÉCIMO

DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ARTÍCULO 41.- La Comisión Nacional del Agua tendrá las atribuciones que se establecen en la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento, este Ordenamiento, y las demás disposiciones aplicables, las cuales serán ejercidas por las unidades administrativas que la integran, sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Director General de dicha Comisión.

ARTÍCULO 42.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Nacional del Agua contará con las unidades administrativas siguientes:

I. Consejo Técnico;
II. Dirección General;
III. Subdirección General de Administración;
IV. Subdirección General de Administración del Agua;
V. Subdirección General de Operación;
VI. Subdirección General de Programación;
VII. Subdirección General de Construcción;
VIII. Subdirección General Técnica;
IX. Unidad Jurídica;
X. Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal;
XI. Unidad de Programas Rurales y Participación Social;
XII. Unidad de Comunicación Social;
XIII. Unidad de Agua Potable y Saneamiento;
XIV. Gerencias Nacionales;
XV. Coordinaciones de Proyectos Especiales;
XVI. Coordinación de Gerencias Regionales;
XVII. Gerencias Regionales, y
XVIII. Gerencias Estatales.

El Director General de la Comisión Nacional del Agua tendrá las facultades que le confieren la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y el presente ordenamiento. Asimismo, el Director General de la Comisión Nacional del Agua presidirá el Consejo Técnico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

De igual forma, previa autorización de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, podrá establecer coordinaciones de proyectos especiales, necesarios para la ejecución de programas a su cargo.

Igualmente, tendrá facultades para autorizar la celebración de acuerdos y bases de coordinación, convenios de concertación, colaboración, reasignación y de cooperación técnica, anexos de ejecución y, en general todos aquellos actos en los que la Comisión sea parte; y, en su caso, designar al servidor público que deberá suscribirlos en su nombre y en representación de la Comisión.

La Comisión Nacional del Agua contará con una Contraloría Interna, órgano interno de control, que se regirá conforme a lo dispuesto por el artículo 52 de este Reglamento.

Asimismo, contará con una Dirección General Adjunta, la que ejercerá las atribuciones que determine el Titular de la Comisión, así como las facultades que se mencionan en el artículo 17 de este Reglamento y las que expresamente se le deleguen.

Para el despacho de los asuntos de su competencia, las unidades administrativas de la Comisión Nacional del Agua contaran con los subgerentes, jefes de proyecto, jefes de departamento y demás servidores públicos que se requieran y que sean autorizados conforme al presupuesto aprobado.

ARTÍCULO 43.- La Subdirección General de Administración tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer, operar y controlar los sistemas, procedimientos y servicios para el manejo de sus recursos humanos, materiales y financieros en base a los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, establecidos por la Oficialía Mayor de la Secretaría;

II. Coordinar y supervisar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Comisión, de acuerdo con sus objetivos y los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos, que al efecto señale su titular;

III. Llevar a cabo el proceso sistemático de registro contable y presupuestal de las operaciones que se realicen, a fin de producir periódicamente los estados financieros y de ejercicios presupuestales que se requieran;

IV. Establecer los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos para el proceso interno de control del ejercicio presupuestal y contabilidad;

V. Atender la capacitación del personal de la Comisión, en base a la planeación de los recursos humanos, en coordinación con las unidades administrativas competentes;

VI. Formular los manuales de organización, procedimientos y servicios correspondientes a la Comisión, de conformidad con los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo establecidos por el Director General de la Comisión;

VII. Adquirir y distribuir los bienes, así como suministrar los servicios necesarios, de acuerdo con la normatividad vigente y a los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo establecidos por el Director General de la Comisión;

VIII. Establecer y aplicar, una vez que haya sido sancionado el procedimiento por el Consejo Técnico, la forma en la que se distribuirán los fondos provenientes de las multas impuestas por la Comisión, previstas en las leyes aplicables respectivas;

IX. Autorizar los convenios y contratos que afecten el presupuesto de la Comisión;

X. Manejar la Tesorería de la Comisión;

XI. Coordinar las acciones administrativas tendientes a desconcentrar y descentralizar las funciones y responsabilidades centralizadas;

XII. Coordinar el proceso de elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en la parte que corresponda a la Comisión y de los demás informes relacionados con ella, y

XIII. Expedir credenciales o constancias de identificación del personal adscrito a la Comisión.

ARTÍCULO 44.- La Subdirección General de Administración del Agua, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Administrar y custodiar las aguas nacionales, así como los bienes que se vinculan a éstas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, con excepción de los encomendados a la Subdirección General de Operación, así como vigilar el cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, y proveer lo necesario para la preservación de su calidad y cantidad, para lograr su uso integral sustentable y para fomentar la capacitación de cuadros para esos fines;

II. Otorgar, modificar, suspender, revocar o caducar en los términos de la legislación aplicable, las concesiones, asignaciones, así como los permisos de descarga, perforación de pozos y extracción de materiales pétreos, que existan en los cauces, vasos y zonas federales, autorizaciones y reconocimiento de derechos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia, que sean competencia de la Comisión Nacional del Agua;

III. Llevar el Registro Público de Derechos de Agua, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Realizar la inspección y verificar la medición del volumen de aguas nacionales que extraen los usuarios, así como la medición del volumen y calidad de las que descarguen a los cuerpos receptores propiedad de la Nación, así como verificar la calidad de estas últimas;

V. Verificar el cumplimiento, por parte de los usuarios de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, de las obligaciones establecidas en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas aplicables, para lo cual podrá, mediante su personal autorizado, realizar lo siguiente:

a) Ordenar y practicar visitas domiciliarias;
b) Ordenar el acceso: a las instalaciones, a los puntos de aprovechamiento y descarga, a los medidores y a los registros;
c) Requerir todo tipo de documentación, registros, controles, datos e informes, y
d) Practicar cualquier otro medio de verificación previsto en las disposiciones legales aplicables.

VI. Establecer, previa opinión de la Subdirección General Técnica, las condiciones particulares de descarga, que deben satisfacer las aguas residuales;

VII. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de las condiciones particulares de descarga, que deben satisfacer las aguas residuales vertidas directamente en aguas y bienes nacionales, o en cualquier terreno cuando dichas descargas puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos y, en su caso, ordenar la suspensión de la actividad que dé origen a la descarga y realizar la inspección y vigilancia de las descargas de aguas residuales;

VIII. Integrar la información necesaria para que la Unidad Jurídica de la Comisión denuncie ante las autoridades competentes los actos que puedan ser constitutivos de delitos relacionados con el uso o aprovechamiento de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes;

IX. Promover las medidas necesarias para evitar que basura, desechos o residuos, materiales, sustancias tóxicas y lodos producto de los tratamientos de aguas residuales, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo y los bienes sujetos a protección, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

X. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Federación en materia de prevención y control de la contaminación del agua, en coordinación, en su caso, con las autoridades competentes, así como llevar a cabo su inspección y sanción, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XI. Llevar el control de los pagos realizados por los contribuyentes con motivo de sus obligaciones derivadas del cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y de las disposiciones fiscales aplicables, así como proporcionar, a la Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal, las bases para la determinación de los créditos fiscales de que tenga conocimiento;

XII. Establecer, en coordinación con la Unidad Jurídica, los criterios para la aplicación de sanciones administrativas. Calificar las infracciones e imponer las sanciones distintas a las que constituyan créditos fiscales, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XIII. Expedir credenciales o constancias de identificación para auditores, inspectores, verificadores, visitadores y auxiliares técnicos que los acredite como tales; para la realización de las visitas de inspección o verificación de los bienes que administra la Comisión Nacional de Agua; para notificadores que hagan del conocimiento de los interesados los actos y resoluciones emitidos por dicha Comisión; así como para el personal ejecutor que dé cumplimiento material a las sanciones distintas a las económicas, impuestas a los infractores de la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento;

XIV. Emitir el certificado de uso no alternativo del agua, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Derechos y en base al dictamen que emita la Subdirección General Técnica;

XV. Ordenar la clausura de aprovechamientos y descargas, la remoción y demolición de obras, así como la suspensión de los procesos que dan origen a dichas descargas, cuando proceda conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

XVI. Ordenar la suspensión de los títulos de concesión, asignación o permiso para la explotación, uso o aprovechamiento de los bienes que administra la Comisión Nacional del Agua, cuando proceda conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

XVII. Instruir los procedimientos administrativos que se deriven de: la realización de visitas de inspección, requerimientos de documentación e información y, en general, del incumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XVIII. Realizar la ejecución material de las resoluciones de imposición de clausura de aprovechamientos y descargas, de remoción y demolición de obras, así como de la suspensión del proceso generador de las descargas de aguas residuales solicitando en su caso el apoyo de la fuerza pública, y

XIX. Aplicar, en coordinación con la Subdirección General Técnica, las resoluciones de imposición de sanciones en que se ordene la clausura de aprovechamientos, descargas, remoción y demolición de obras.

ARTÍCULO 45.- La Subdirección General de Operación tendrá las atribuciones siguientes:

I. Realizar estudios y proyectos, así como construir, vigilar, administrar, operar, conservar y rehabilitar la infraestructura de sistemas de riego, de temporal tecnificado, drenaje agrícola, acueductos y demás obras complementarias que correspondan al Gobierno Federal;

II. Fomentar y apoyar la incorporación de nuevas áreas al riego y las obras complementarias que correspondan al Gobierno Federal, las que se realizarán por sí o en coordinación con los gobiernos estatales, municipales o particulares o, en su caso, a través de la concesión o asignación en los términos de las disposiciones legales aplicables;

III. Administrar, operar, conservar y mantener, por sí o por terceros, mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que, en su caso, se requiera y demás instrumentos legales que al efecto se celebren, las obras de infraestructura hidroagrícola de captación, conducción, almacenamiento y distribución de agua, así como de los servicios respectivos y fomentar la capacitación de cuadros para los mismos fines;

IV. Promover la organización, consolidación y desarrollo técnico de asociaciones de usuarios, operadores de distritos o unidades de riego y drenaje, y sancionar los reglamentos respectivos;

V. Intervenir, con la participación de los usuarios y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en los estudios, proyectos, construcción, administración, operación, conservación y mejoramiento de los sistemas de riego, las unidades de drenaje y los sistemas de control de avenidas y protección contra inundaciones de áreas productivas;

VI. Operar la infraestructura hidráulica para el control de avenidas y protección contra inundaciones de áreas productivas, tomando las medidas preventivas necesarias y coordinando sus acciones con las autoridades competentes en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables y con el apoyo del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas;

VII. Programar y efectuar la distribución del agua en bloque y determinar los volúmenes y los lugares de entrega, de común acuerdo con los usuarios, en los términos de la ley de la materia, los reglamentos respectivos y los programas para el efecto autorizados;

VIII. Coordinar la administración, operación, rehabilitación, mantenimiento y conservación de las obras e instalaciones necesarias para el suministro de agua en bloque del Distrito Federal y de las entidades federativas correspondientes;

IX. Propiciar, en coordinación con los sectores público, social y privado interesados, el uso eficiente del agua en riego, así como la plena utilización de la infraestructura hidroagrícola y fomentar la capacitación de cuadros para esos fines, y

X. Proporcionar a los usuarios, de acuerdo a sus posibilidades, la asesoría técnica necesaria para el diseño, construcción, operación y administración de sistemas de riego.

ARTÍCULO 46.- La Subdirección General de Programación tendrá las atribuciones siguientes:

I. Definir los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos en el ámbito de la programación para elaborar el Programa Nacional Hidráulico con la participación que corresponda a otros sectores e instancias de gobierno y a los usuarios, así como integrar programas, proyectos de inversión y estudios necesarios para mejorar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos;

II. Formular, actualizar y vigilar el Programa Nacional Hidráulico en los términos previstos por las disposiciones jurídicas aplicables, desglosado por subprogramas específicos, regionales, de cuenca, estatales y sectoriales;

III. Definir y establecer, en el ámbito de su competencia, las estrategias y políticas para regular el uso y aprovechamiento del agua, así como elaborar los balances hidráulicos que se requieran;

IV. Proponer los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos que permitan dar unidad y congruencia a las acciones del Gobierno Federal en materia de aguas nacionales, y asegurar y vigilar la coherencia entre los respectivos programas y la asignación de recursos para su ejecución;

V. Proponer los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo para la integración, evaluación y actualización de estudios y proyectos de infraestructura hidráulica que permitan jerarquizar las inversiones necesarias, dentro de un marco de congruencia nacional, regional y estatal;

VI. Elaborar estudios y proyectos, por sí o a través de terceros, que sirvan de base para la formulación de programas y presupuestos de la Comisión Nacional del Agua;

VII. Establecer lineamientos internos de carácter técnico y administrativo para integrar el programa operativo anual y los presupuestos, de la Comisión Nacional del Agua;

VIII. Elaborar los anteproyectos de los programas y presupuestos de la Comisión y evaluar la ejecución de los programas y presupuestos aprobados, en coordinación y en base a los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo establecidos por la Oficialía Mayor de la Secretaría;

IX. Definir políticas para el financiamiento y amortización de las inversiones;

X. Intervenir, en el ámbito de su competencia, en la concertación de créditos u otros mecanismos de financiamiento nacionales e internacionales, en coordinación con las autoridades competentes;

XI. Gestionar, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el financiamiento de contratos para el desarrollo de obras y servicios hidráulicos, así como dar seguimiento a los mismos, ante los agentes financieros designados por dicha Dependencia;

XII. Proponer, en coordinación con las autoridades competentes, las bases de cooperación técnica y científica con gobiernos y organismos internacionales, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

XIII. Participar en la creación y desarrollo de los consejos de cuenca, así como promover y acreditar la organización, capacitación y participación de los usuarios en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XIV. Promover y fomentar la participación de terceros en el financiamiento, construcción y operación de la infraestructura hidráulica federal, así como en la prestación de los servicios respectivos, y

XV. Desarrollar, implementar y administrar el Sistema de Información Geográfica del Agua y el Banco de Información del Sector Hidráulico, de conformidad con el Programa Institucional de Desarrollo Informático del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y demás disposiciones legales aplicables, así como proponer los lineamientos para el intercambio de información.

ARTÍCULO 47.- La Subdirección General de Construcción tendrá las atribuciones siguientes:

I. Estudiar, normar, proyectar, promover y, en su caso, construir, en el ámbito de su competencia, todo tipo de obras de infraestructura hidráulica, incluyendo las de generación de energía eléctrica y las obras complementarias correspondientes, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios o los particulares;

II. Promover e intervenir en las obras para dotación de agua potable, alcantarillado, saneamiento y de tratamiento de aguas residuales a centros de población o industriales y turísticos, desde los estudios y diseños, por sí o mediante el otorgamiento de la asignación o concesión que, en su caso, se requieran o en los términos del convenio que se celebre, incluyendo los que se convengan en tratados internacionales;

III. Fomentar y apoyar la construcción de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que realicen los municipios, así como de los sistemas de riego, drenaje o control de avenidas y protección de inundaciones, a centros de población, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Intervenir, con la participación de los usuarios, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en el control de avenidas y protección contra inundaciones a centros de población;

V. Apoyar técnicamente a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como a los particulares y fomentar la capacitación de cuadros para el estudio, proyecto y ejecución, en su caso, de obras de infraestructura hidráulica;

VI. Promover la realización de obras en la materia y llevar a cabo su operación transitoria, hasta su entrega definitiva a los responsables de la operación, conservación y mantenimiento;

VII. Ejecutar, en la esfera de su competencia, el programa Lago de Texcoco en la zona federal a su cargo y en la cuenca hidrológica del propio lago, así como realizar los programas y obras para disminuir tolvaneras originadas en dicha cuenca;

VIII. Estudiar y proyectar las obras de drenaje y control de ríos de la Cuenca del Valle de México, así como construir las obras y realizar las acciones que para su desarrollo se requieran, en la esfera de su competencia;

IX. Construir y normar las obras e instalaciones necesarias para el suministro de agua en bloque a las áreas urbanas del Valle de México, y en especial el área metropolitana de la Ciudad de México, hasta los sitios que se convenga con las autoridades del Distrito Federal y entidades federativas correspondientes;

X. Establecer lineamientos internos de carácter técnico y administrativo para la elaboración de proyectos y obras dentro del ámbito de su competencia, y

XI. Realizar, previo convenio que se celebre con los gobiernos estatales o municipales, con la participación correspondiente de la Unidad de Programas Rurales y Participación Social, los programas de construcción de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el medio rural.

ARTÍCULO 48.- La Subdirección General Técnica tendrá las atribuciones siguientes:

I. Crear, mantener y promover las capacidades técnicas básicas que se requieran para que las obras, acciones y programas de la Comisión sean de calidad;

II. Proponer los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos que permitan dar unidad a las acciones del Gobierno Federal en materia de aguas nacionales y coordinar su aplicación;

III. Proponer la reglamentación para la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, el establecimiento o supresión de zonas de veda y la declaración de reserva de las aguas nacionales, así como vigilar su cumplimiento;

IV. Fomentar el uso eficiente del agua y operar los servicios necesarios para su preservación, conservación y mejoramiento de calidad en todas las fases del ciclo hidrológico e impulsar una cultura del agua que considere a este elemento como un recurso vital y escaso;

V. Delimitar y demarcar las zonas federales, en forma congruente con la declaratoria correspondiente;

VI. Normar, organizar, dirigir, realizar y difundir los estudios, trabajos y servicios hidrológicos, geohidrológicos, así como los de monitoreo de la calidad de las aguas nacionales y el inventario de disponibilidad y uso;

VII. Desarrollar y operar, directamente o por contrato o convenio con terceros, redes hidrométricas y geohidrológicas e integrar para todas las cuencas hidrológicas del territorio un sistema de información sobre cantidad, calidad y usos del agua en las diversas fases del ciclo hidrológico, como base para planear y administrar los recursos hidráulicos;

VIII. Formular programas integrales de protección de los recursos hidráulicos en cuencas hidrológicas y acuíferos, considerando las relaciones existentes entre los usos del suelo y la cantidad y calidad del agua, en coordinación con las unidades administrativas competentes;

IX. Promover y verificar que los proyectos de nuevas obras de infraestructura hidráulica cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de impacto ambiental;

X. Realizar las acciones necesarias para elevar la eficiencia en la utilización del agua e incrementar su disponibilidad, mediante el desarrollo de los estudios y ejecución de programas de saneamiento, tratamiento y rehuso de aguas residuales, así como establecer las bases técnicas para regular el control de descargas y aprovechamiento de las aguas residuales;

XI. Fijar lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos para proporcionar seguridad a las construcciones y equipos que constituyen la infraestructura hidráulica a cargo de la Comisión y vigilar su cumplimiento;

XII. Fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de agua, su aplicación y la formación y capacitación de recursos humanos para los mismos fines;

XIII. Promover la conservación del agua mediante la recarga de acuíferos, la protección y saneamiento de cuencas alimentadoras, el control de la erosión, la estimulación de lluvia y el aprovechamiento de las aguas estuarinas, salobres y salinas;

XIV. Analizar y llevar el registro de la evolución de los almacenamientos en vasos y embalses y flujo de las corrientes en los ríos;

XV. Coordinar la revisión de los proyectos ejecutivos y cambios de proyectos de las obras que se realicen bajo la responsabilidad de la Comisión, así como realizar inspecciones y asesorías técnicas de las mismas durante las etapas de diseño, construcción, operación y las que se vayan a poner fuera de servicio;

XVI. Establecer las bases técnicas conforme a las cuales se determinarán los derechos federales por las extracciones de aguas nacionales y por el uso de bienes nacionales inherentes, así como por las descargas de aguas residuales;

XVII. Fomentar la evaluación y certificación de calidad de los proveedores de bienes y servicios del sector, divulgar los resultados respectivos y promover su uso;

XVIII. Dictaminar sobre la procedencia técnica de las solicitudes de usuarios respecto de nuevos aprovechamientos de aguas nacionales y modificación de los existentes, así como los permisos de descarga de aguas residuales, y establecer las condiciones particulares de descarga y sus modificaciones, a fin de que se integren al permiso o autorización correspondiente;

XIX. Expedir dictámenes técnicos respecto de la regulación de los aprovechamientos de aguas nacionales;

XX. Elaborar estudios básicos para las obras de infraestructura del almacenamiento y conducción del agua, así como formular criterios y autorizar los proyectos de todo tipo de obras que afecten el control de ríos o el riesgo de avenidas;

XXI. Otorgar permisos de construcción o modificación de obras en cauces, vasos y zonas federales, y coordinar el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, órgano interno de decisión en la materia;

XXII. Dictaminar respecto de la calidad de las aguas nacionales y resolver sobre las solicitudes relacionadas con dicha materia;

XXIII. Coordinar y promover la elaboración de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas del sector agua, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como establecer las políticas y procedimientos de la evaluación de la conformidad de las mismas;

XXIV. Aprobar organismos de certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XXV. Proponer las declaratorias de clasificación de los cuerpos de aguas nacionales;

XXVI. Promover y normar la integración de los comités técnicos de aguas subterráneas de los acuíferos del país, a fin de propiciar la estabilización y recuperación de los mismos por parte de los usuarios;

XXVII. Normar, organizar, dirigir, realizar y difundir, los estudios, trabajos y servicios meteorológicos;

XXVIII. Desarrollar y operar redes meteorológicas, directamente o por contrato o convenio con terceros;

XXIX. Operar, mantener actualizados, administrar y desarrollar los sistemas de registro, comunicaciones, cómputo y telemática requeridos para el funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional y los sistemas para su interacción con redes que permitan la comunicación, transmisión de datos, enlaces entre equipos de las redes de observación y los centros de concentración de datos y la operación continua de la red del área local;

XXX. Sistematizar y llevar a cabo el acopio de información meteorológica e implementar y operar modelos numéricos de la atmósfera y difundir de manera masiva los productos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional, así como actualizar, desarrollar e integrar la base de datos climatológicos, el banco de imágenes meteorológicas, de satélite y radar;

XXXI. Vigilar la evolución de meteoros que puedan incidir en los escurrimientos de los ríos y en los almacenamientos de los embalses, para prevenir daños por crecientes y proteger contra inundaciones a los centros de población y áreas productivas;

XXXII. Analizar y llevar el registro de la ocurrencia, magnitud y duración de las lluvias, para pronóstico de avenidas, prevención de inundaciones y previsión de sequías;

XXXIII. Elaborar y proporcionar el pronóstico del clima a muy corto, corto, mediano y largo plazos, emitiendo avisos y boletines; alertar a la población, al Servicio Nacional de Protección Civil y a los medios de comunicación sobre la ocurrencia de fenómenos extremos durante su formación, desarrollo y disipación;

XXXIV. Monitorear las condiciones atmosféricas y dar seguimiento a la evolución de humos y gases producidos en la atmósfera por incendios agrícolas y forestales, accidentes químicos, nubes radiactivas, gases de efecto invernadero y erupciones volcánicas;

XXXV. Promover entre la población los servicios y productos del Servicio Meteorológico Nacional, así como con usuarios específicos e instituciones y medios de comunicación;

XXXVI. Dar seguimiento a convenios de cooperación técnica con la Organización Meteorológica Mundial y otras instituciones del país y del extranjero, y

XXXVII. Formular y aplicar el programa de capacitación y entrenamiento del Servicio Meteorológico Nacional.

Para el ejercicio de las atribuciones referidas en las fracciones XXVII a XXXVII de este artículo, la Subdirección General Técnica contará con la Coordinación del Servicio Meteorológico Nacional, de la que dependerán directamente la Gerencia de Redes, Sistemas y Telecomunicaciones que ejercerá las atribuciones que se prevén en las fracciones XXVIII a XXX y la Gerencia de Meteorología que ejercerá las atribuciones señaladas en las fracciones XXXI a XXXVII.

Dichas Gerencias contarán con las Subgerencias, Jefaturas de Proyecto y Jefes de Departamento necesarios para el ejercicio de su atribuciones, de conformidad con el presupuesto aprobado.

ARTÍCULO 49.- La Unidad Jurídica estará a cargo de un Gerente que tendrá las atribuciones siguientes:

I. Representar legalmente al Titular y a las unidades administrativas de la Comisión, en los procedimientos judiciales y administrativos en que se requiera su intervención;

II. Atender y dirigir los asuntos jurídicos de la Comisión, de conformidad con los lineamientos internos que al efecto dicte la Secretaría, a través de su Coordinación General Jurídica;

III. Revisar, en el aspecto jurídico el otorgamiento de las asignaciones, concesiones, permisos y demás autorizaciones en materia hidráulica, previstas en las disposiciones jurídicas y demás ordenamientos aplicables, así como respecto de su suspensión, clausura, revocación, nulidad, caducidad, modificación y terminación;

IV. Dictaminar los expedientes de infractores a las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos, en lo que se refiere a la materia hidráulica y los demás ordenamientos legales aplicables;

V. Instruir los recursos que se interpongan en contra de actos o resoluciones de las unidades administrativas de la Comisión y someterlos a consideración del superior jerárquico que les corresponda, así como proponer a éste los proyectos de resolución a dichos recursos y resolver los recursos administrativos de su competencia, incluyendo los que se hagan valer contra actos o resoluciones fiscales que emita dicha Comisión;

VI. Representar, defender, contestar, rendir informes, demandar, denunciar, querellarse, allanarse, desistirse, desahogar pruebas, interponer recursos, otorgar perdón, certificar y realizar los trámites necesarios para defender los intereses de la Comisión y los que se requieran para el cumplimiento y la aplicación de la ley;

VII. Conciliar y, en su caso, fungir a petición de los usuarios, como árbitro en la solución de los conflictos relacionados con el agua, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua señalados como autoridades responsables, asimismo los escritos de demanda o contestación según proceda en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; intervenir cuando la Comisión tenga carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo, así como formular, en general, todas las promociones que a dichos juicios se refieran;

IX. Revisar los aspectos jurídicos de los contratos y convenios de la Comisión, así como suscribir aquellos que le ordene el Titular de la misma;

X. Representar legalmente al Secretario en los juicios de orden laboral, respecto de trabajadores de la Comisión, formular dictámenes, demandas de cese y contestación de demandas, formular y absolver posiciones, desistirse o allanarse y, en general, realizar todas aquellas promociones que se requieran en el curso del procedimiento;

XI. Intervenir en la tramitación de los expedientes relativos a las expropiaciones, en los casos de afectaciones de todo tipo que promueva la Comisión, así como en los referentes al pago de indemnización en efectivo y en especie;

XII. Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en la titulación de tierras afectadas por la realización de obras hidráulicas o que deban adjudicarse como compensación a particulares, ejidatarios y comuneros, y

XIII. Suscribir, en ausencia del Titular y demás servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, los informes previos y justificados que requieran las autoridades judiciales correspondientes, la interposición de recursos y desahogo de trámites, así como las resoluciones de recursos en los procedimientos administrativos correspondientes.

ARTÍCULO 50.- La Unidad de Revisión y Liquidación Fiscal estará a cargo de un Jefe de Unidad y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Requerir a los usuarios y contribuyentes que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Ordenar la práctica de visitas domiciliarias e inspecciones tendientes a comprobar el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Requerir la exhibición y entrega de toda clase de documentos e información, a efecto de llevar a cabo las revisiones de los créditos fiscales a cargo de los usuarios y contribuyentes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Determinar, actualizar y liquidar los créditos fiscales que corresponda cubrir a los usuarios y contribuyentes conforme a lo dispuesto por las disposiciones jurídicas aplicables y que sean competencia de la Comisión;

V. Notificar a los usuarios y contribuyentes las resoluciones que emita conforme a sus atribuciones;

VI. Imponer las sanciones que procedan y que constituyan crédito fiscal por violación a las disposiciones jurídicas aplicables, en base a lo que la Subdirección General de Administración del Agua le turne para el efecto;

VII. Atender las consultas de carácter fiscal presentadas por escrito por los usuarios y contribuyentes, así como las solicitudes de devolución, compensación y autorizaciones de pago de contribuciones a plazo, en parcialidades o diferido, respecto al cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables y asesorarlos para el debido cumplimiento de sus obligaciones;

VIII. Proporcionar a la Unidad Jurídica de la Comisión, toda la información, documentación y apoyo para el debido conocimiento de los asuntos impugnados mediante juicio o recursos administrativos;

IX. Revisar la situación fiscal de los usuarios y contribuyentes y, en su caso, proceder a la determinación, liquidación, notificación, cobro y recaudación de los créditos fiscales, como consecuencia de los informes proporcionados por la Subdirección General de Administración del Agua;

X. Expedir credenciales o constancias de identificación para auditores, inspectores, visitadores en general y notificadores que los acredite como tales;

XI. Emitir y notificar los adeudos fiscales que tengan los usuarios y contribuyentes con la Comisión Nacional del Agua;

XII. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el inicio y seguimiento hasta su conclusión, del procedimiento administrativo de ejecución, en los casos que proceda, remitiendo la documentación necesaria para los efectos procedentes;

XIII. Dictar las medidas de apremio que procedan, en los términos que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables;

XIV. Imponer las multas que procedan por infracciones a las disposiciones fiscales en materia hidráulica, así como condonarlas, en los términos que lo determinen los ordenamientos legales correspondientes;

XV. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los hechos de que tenga conocimiento que puedan constituir delitos fiscales, y

XVI. Otorgar subsidios en el pago del derecho por el uso de agua, a las personas que usen o aprovechen aguas nacionales, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía y siempre que demuestren ante la Comisión Nacional del Agua con los estudios técnicos que procedan, que el agua no tiene uso alternativo y que ésta expida el certificado respectivo.

ARTÍCULO 51.- La Comisión Nacional del Agua contará con una Contraloría Interna, órgano interno de control, al frente de la cual el Contralor Interno designado en los términos del artículo 37, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades, designados en los mismos términos.

Dichos servidores públicos ejercen las facultades a que se refiere el artículo 15 de este Reglamento, en el ámbito de competencia de la Comisión Nacional del Agua.

ARTÍCULO 52.- La Unidad de Programas Rurales y Participación Social, estará a cargo de un Jefe y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Participar en la elaboración de los proyectos constructivos para programar las acciones en materia de tenencia de la tierra;

II. Elaborar el censo de inmuebles y bienes distintos a la tierra que resulten afectados en la construcción de obras hidráulicas, así como tramitar los expedientes para la expropiación de inmuebles o su adquisición por la vía del derecho privado;

III. Intervenir, en coordinación con las autoridades competentes, en la entrega y titulación de inmuebles que deban adjudicarse como indemnización en especie a los afectados con la construcción de obras a cargo de la Comisión;

IV. Concertar con los afectados y las instancias correspondientes respecto del reacomodo o indemnización por la afectación de bienes inmuebles o bienes distintos a la tierra a consecuencia de la construcción de obras e instalaciones hidráulicas;

V. Realizar las gestiones y acciones necesarias, ante las autoridades competentes, para regularizar en favor del Gobierno Federal los inmuebles ocupados con obras e instalaciones hidráulicas a cargo de la Comisión;

VI. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los inmuebles ocupados con obras e instalaciones hidráulicas a cargo de la Comisión, así como proponer, ante las autoridades competentes, su desincorporación cuando no sean de utilidad para la realización de sus fines;

VII. Tramitar el pago de honorarios y gastos por la emisión de avalúos y justipreciaciones que realice la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, respecto de los inmuebles que requiera la Comisión;

VIII. Coordinar la participación entre los tres órdenes de gobierno para el desarrollo de infraestructura hidráulica y prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en comunidades rurales; así como promover y concertar la participación social de los usuarios en su planeación, programación, construcción, operación, conservación y mantenimiento;

IX. Promover y apoyar, mediante operativos preventivos y emergentes, la protección de fuentes de abastecimiento de agua para uso y consumo humano;

X. Propiciar la instalación de equipos de desinfección en sistemas de abastecimiento de agua;

XI. Orientar y coordinar las actividades de promoción, instalación y desarrollo de los consejos de cuenca, incluyendo sus comisiones y comités, y

XII. Coordinar y promover la descentralización de acciones, programas y recursos de la Comisión.

ARTÍCULO 53.- La Unidad de Comunicación Social estará a cargo de un Gerente y tendrá, en el ámbito de la competencia de la Comisión Nacional del Agua, las facultades que se señalan en el artículo 12 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 54.- La Unidad de Agua Potable y Saneamiento, estará a cargo de un Jefe y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Dirigir, estudiar, proyectar, programar, supervisar, construir y normar las obras hidráulicas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, de acuerdo con los programas establecidos por la Comisión Nacional del Agua;

II. Dirigir la administración de los estudios, proyectos y construcción de las obras para agua potable, alcantarillado y saneamiento;

III. Apoyar técnicamente a los gobiernos de los estados y municipios y a los particulares, en el estudio, proyecto y ejecución, en su caso, de obras de agua potable, alcantarillando y saneamiento;

IV. Autorizar los contratos para obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de estudios y obras;

V. Autorizar las convocatorias de las licitaciones públicas nacionales e internacionales para la asignación de estudios y obras, y

VI. Evaluar y supervisar los avances de las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

ARTÍCULO 55.- La Comisión Nacional del Agua contará, además, con las siguientes Gerencias Nacionales, que ejercerán las atribuciones de las Subdirecciones Generales o Unidades a las que se encuentren adscritas, y las que se les deleguen en términos de la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables:

I. Gerencia de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales;

II. Gerencia de Tenencia de la Tierra y Patrimonio Inmobiliario;

III. Gerencia de Servicios a Usuarios;

IV. Gerencia de Recaudación y Control;

V. Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua;

VI. Gerencia de Evaluación y Desarrollo;

VII. Gerencia de Proyectos de Infraestructura Hidroagrícola;

VIII. Gerencia de Contratación de Obra Pública;

IX. Gerencia de Construcción de Infraestructura Hidroagrícola;

X. Gerencia del Proyecto de Abastecimiento y Saneamiento del Agua del Valle de México;

XI. Gerencia de Estudios y Proyectos;
XII. Gerencia de Potabilización y Tratamiento;
XIII. Gerencia de Apoyo a la Construcción;
XIV. Gerencia de Distritos y Unidades de Riego;
XV. Gerencia de Distritos de Temporal Tecnificado;
XVI. Gerencia de Potabilización y Saneamiento;
XVII. Gerencia de Operación, Conservación e Ingeniería Industrial de Presas, Plantas de Bombeo y Acueductos;
XVIII. Gerencia de Agua Limpia;
XIX. Gerencia del Consultivo Técnico;
XX. Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos;
XXI. Gerencia de Aguas Subterráneas;
XXII. Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua;
XXIII. Gerencia de Ingeniería Básica y Normas Técnicas;
XXIV. Gerencia de Estudios para el Desarrollo Hidráulico Integral;
XXV. Gerencia de Planeación Hidráulica;
XXVI. Gerencia de Programación y Presupuesto;
XXVII. Gerencia de Financiamiento;
XXVIII. Gerencia de Personal;
XXIX. Gerencia de Recursos Financieros;
XXX. Gerencia de Recursos Materiales;
XXXI. Gerencia de la Coordinación de Descentralización;
XXXII. Gerencia de Coordinación de Informática y Telecomunicación;
XXXIII. Gerencia de Redes, Sistemas y Telecomunicaciones, y
XXXIV. Gerencia de Meteorología.

ARTÍCULO 56.- La Comisión Nacional del Agua contará además con las siguientes Coordinaciones de Proyectos Especiales, que ejercerán las atribuciones de las Subdirecciones Generales o Unidades a las que se encuentren adscritos, y las que se les deleguen en términos de la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables:

I. Coordinación de Participación Privada y Servicios;
II. Coordinación de Consejos de Cuenca;
III. Coordinación de Asuntos Fronterizos;
IV. Coordinación de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias;
V. Coordinación de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica;
VI. Coordinación del Programa de Modernización del Manejo del Agua, y
VII. Coordinación Ejecutiva para el Distrito de Riego 092 Río Pánuco y Pujal Coy Segunda Fase.

ARTÍCULO 57.- La Coordinación de Gerencias Regionales estará a cargo de un coordinador y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar la ejecución de los programas y acciones que correspondan a las Gerencias Regionales, conforme a las normas y lineamientos aplicables, así como informar de los avances y resultados de su ejercicio;
II. Elaborar diagnósticos relativos a la problemática regional en las materias competencia de la Comisión;
III. Contribuir en las acciones que convenga el Ejecutivo Federal con los gobiernos estatales, en las que participe la Comisión;
IV. Apoyar y coordinar la ejecución de los programas operativos de la Comisión que llevan a cabo las Gerencias Regionales, así como integrar la información, darles seguimiento y evaluar sus resultados;
V. Proporcionar la información y datos técnicos que le sean solicitados, y
VI. Operar los sistemas de administración de recursos humanos, de registro contable y de evaluación programático presupuestal aplicables a las Gerencias Regionales.

ARTÍCULO 58.- Las Gerencias Regionales se establecerán en el número, lugar y con la circunscripción territorial que determine el Titular de la Comisión y tendrán las atribuciones siguientes:

I. Ejercer, dentro del ámbito territorial que les corresponda, las atribuciones de las unidades administrativas a que se refieren los artículos 44 a 50 y 53 a 55 de este Reglamento, y las que expresamente se les deleguen, conforme a los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos que señale el Titular de la Comisión y las Subdirecciones Generales, en su caso;
II. Revisar, confirmar, modificar, revocar y nulificar, en su caso, en el ámbito de sus respectivas competencias, las resoluciones que dicten en el ejercicio de sus atribuciones las gerencias

estatales, ubicadas dentro de su circunscripción territorial, así como resolver los recursos administrativos que se interpongan contra dichas resoluciones, y

III. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables y el Director General de la Comisión.

Las Gerencias Regionales contarán con una Unidad Jurídica, la que ejercerá, en el ámbito de la circunscripción territorial correspondiente, las atribuciones mencionadas en el artículo 50 de este Reglamento, siguiendo los lineamientos que señale el Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión.

ARTÍCULO 59.- Las Gerencias Estatales se establecerán una en cada entidad federativa, excepto en aquellas en las que se establezcan como sede las gerencias regionales, las cuales ejercerán, además, las atribuciones señaladas en el presente artículo, en el ámbito de competencia territorial de la entidad federativa correspondiente.

Las Gerencias Estatales tendrán las atribuciones siguientes:

I. Ejercer en la entidad federativa correspondiente las atribuciones de las unidades administrativas a que se refieren los artículos 44 a 50 y 53 a 55 de este Reglamento, y las que expresamente se le deleguen, conforme a los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos que señale el titular de la Comisión y las Subdirecciones Generales, en su caso;

II. Mantener relación y vinculación con las delegaciones de la Secretaría, en los Estados, de conformidad con los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos que establezca la Secretaría, y

III. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables y el Director General de la Comisión.

Las Gerencias Estatales contarán con una Unidad Jurídica, la que ejercerá, en el ámbito de la circunscripción territorial correspondiente, las atribuciones mencionadas en el artículo 50 de este Reglamento, siguiendo los lineamientos que señale el Titular de la Unidad Jurídica de la Comisión.

ARTÍCULO 60.- Los Subdirectores Generales de la Comisión podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, revisar, confirmar, modificar, revocar y nulificar, en su caso, las resoluciones que dicten los Gerentes Nacionales y Regionales en el ejercicio de sus facultades, así como resolver los recursos administrativos que se interpongan contra dichas resoluciones.

Iguales facultades y para los mismos fines tendrá el titular de la Comisión, con respecto a las resoluciones que emitan los Subdirectores Generales y Gerentes de la propia Comisión.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO

DEL INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA

ARTÍCULO 61.- El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tendrá las atribuciones siguientes:

I. Realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación, rehabilitación y aprovechamiento sustentable del agua;

II. Aplicar, orientar, promover y coordinar programas de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica, consultoría especializada, información técnica y capacitación de alto nivel, construyendo, estableciendo, equipando y operando las instalaciones correspondientes;

III. Elaborar y coordinar los programas y proyectos de su competencia y los que le encomiende su Consejo Técnico, al que le corresponderá hacer la evaluación de los mismos;

IV. Prestar servicios de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica, capacitación, comunicación y asesoría y establecer vínculos con los organismos nacionales e internacionales de investigación y docencia, así como con los sectores social y privado;

V. Establecer, en coordinación con las autoridades competentes, los mecanismos de regulación para el cumplimiento de normas para certificar la calidad de los productos, servicios, equipos y maquinaria asociados con el uso y aprovechamiento del agua;

VI. Promover una nueva cultura del agua como un bien escaso, para el cuidado de su cantidad y calidad, mediante un manejo racional y un aprovechamiento sustentable;

VII. Participar en la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas en el ámbito de su competencia, y

VIII. Proponer orientaciones de política hidráulica nacional.

ARTÍCULO 62.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Instituto estará a cargo de un Director General y contará con un Consejo Técnico que presidirá el Director General de la Comisión Nacional del Agua, así como con las unidades administrativas subalternas siguientes, cuyas competencias se determinarán en el Manual de Organización:

I. Coordinación de Tratamiento y Calidad del Agua;
II. Coordinación de Tecnología de Riego y Drenaje;
III. Coordinación de Tecnología Hidrológica;
IV. Coordinación de Tecnología Hidráulica;
V. Coordinación de Desarrollo Profesional e Institucional, y
VI. Coordinación de Tecnología de Comunicación, Participación e Información.

Asimismo, podrá contar de acuerdo a su presupuesto autorizado con una Unidad Jurídica, la que atenderá y dirigirá los asuntos jurídicos del Instituto en el ámbito de su competencia.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua contará con una Contraloría Interna, órgano interno de control, al frente de la cual el Contralor Interno designado en los términos del artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de auditoría, y de auditoría de control y evaluación designados en los mismos términos.

Dichos servidores públicos ejercen las atribuciones a que se refiere el artículo 15 de este Reglamento, en el ámbito de competencia del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Las facultades en materia de auditoría conferidas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se ejercen por los titulares de las áreas de auditoría, y de auditoría de control y evaluación, de acuerdo con la planeación, programación y organización que determine el Contralor Interno.

Las facultades en materia de responsabilidades y quejas a que se refieren la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, serán ejercidas por la Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA

ARTÍCULO 63.- El Instituto Nacional de Ecología estará a cargo de un Presidente y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Brindar apoyo técnico y científico a las unidades administrativas de la Secretaría para formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de equilibrio ecológico y protección del medio ambiente;
II. Coordinar, promover y desarrollar la investigación científica para formular y conducir la política general de saneamiento ambiental, en coordinación con las áreas competentes de la Secretaría, con la Secretaría de Salud y demás dependencias competentes;
III. Coordinar, promover y desarrollar la investigación científica para administrar y promover la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, de especies y ecosistemas prioritarios, así como de las especies migratorias;
IV. Coordinar, promover y desarrollar la investigación científica para formular y conducir la política general en materia de prevención y control de la contaminación y manejo de materiales peligrosos;
V. Elaborar, promover, y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y de transporte, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría;
VI. Formular, en apoyo a las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los estudios de ordenamiento ecológico del territorio y regulación ambiental del desarrollo urbano, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades;
VII. Coadyuvar, con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en el desarrollo y promoción de instrumentos económicos fiscales, financieros y de mercado de política ambiental, así como de metodologías y procedimientos de evaluación económica del capital natural y de los bienes y servicios ambientales que presta y cooperar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para desarrollar un sistema integrado de contabilidad ambiental y económica;
VIII. Apoyar técnicamente a las unidades administrativas de la Secretaría para la aplicación de instrumentos de política ambiental que propicien el desarrollo sustentable;
IX. Coadyuvar con las unidades administrativas de la Secretaría, en la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y el agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas, para calcular el Producto Interno Neto Ecológico;
X. Contribuir al diagnóstico de la situación ambiental en relación con los compromisos internacionales, así como al diseño de políticas para cumplir con los mismos, en apoyo a la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

XI. Contribuir al diseño de instrumentos de política ambiental y de aprovechamiento de recursos naturales, así como evaluar, con la participación que corresponda a la Dirección General de Estadística e Información Ambiental y a otras unidades administrativas de la Secretaría y de otras dependencias y entidades, los costos y beneficios económicos, sociales y ambientales de la normatividad ambiental;

XII. Proponer, fomentar y desarrollar actividades e iniciativas que en materia ambiental promueva el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y demás instancias competentes en la materia;

XIII. Participar con otras unidades administrativas de la Secretaría, en el diseño de mecanismos de financiamiento que permitan llevar a cabo los proyectos de investigación para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y control de la contaminación, entre otros, en donde intervengan las unidades administrativas de la Secretaría;

XIV. Participar en los grupos de trabajo y comités técnicos y científicos creados en el seno de las instancias de coordinación metropolitanas;

XV. Constituir y coordinar al Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, así como desarrollar estudios-científicos que tengan por objeto identificar las especies en riesgo, determinar las especies y poblaciones prioritarias para la conservación y promover la declaración de hábitats críticos y áreas de refugio;

XVI. Dar apoyo técnico a los estudios que propongan y justifiquen el establecimiento y recategorización de las áreas naturales protegidas de competencia federal, zonas de restauración, así como la elaboración de los respectivos programas de manejo;

XVII. Proponer, impulsar y apoyar técnicamente la elaboración de normas en materia de ordenamiento ecológico, conservación de ecosistemas y especies de vida silvestre, contaminación y calidad ambiental;

XVIII. Otorgar apoyo técnico a los programas que se realicen en los centros de investigación de la vida silvestre;

XIX. Aplicar y promover programas y proyectos de rescate de la vida silvestre y ecosistemas, basados en la investigación existente y la normatividad vigente en la materia, en cooperación con el Consejo Técnico Consultivo Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre;

XX. Opinar en las autorizaciones de colecta e investigación científica sobre especies silvestres competencia de la Secretaría, en coordinación con la Comisión Nacional para el conocimiento y el uso de la Biodiversidad;

XXI. Emitir opiniones relacionadas con el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento de la vida silvestre con fines de utilización en la biotecnología y acceso a recursos genéticos, así como para el manejo, liberación al ambiente y tránsito por el territorio nacional de organismos vivos modificados y organismos genéticamente modificados;

XXII. Desarrollar un sistema de bases de datos ambientales, con la intervención que corresponda a la Dirección General de Estadística e Informática Ambiental;

XXIII. Desarrollar con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los sistemas de información geográfica para el ordenamiento ecológico general y regional del territorio nacional y los programas de ordenamiento ecológico marinos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XXIV. Participar en iniciativas, comités y consorcios ambientales científicos y de investigación, educación y capacitación, tanto nacionales como internacionales;

XXV. Promover el intercambio de científicos con instituciones de investigación y enseñanza media superior y superior, tanto nacionales como internacionales;

XXVI. Promover la celebración de convenios y proyectos de colaboración con dependencias e instituciones académicas y de investigación nacionales e internacionales, así como difundir sus resultados;

XXVII. Organizar, participar y presentar en conferencias y talleres nacionales e internacionales trabajos sobre los estudios científicos, desarrollos normativos y otras experiencias de gestión ambiental relevantes, relacionados con las actividades del Instituto y de las unidades administrativas de la Secretaría;

XXVIII. Preparar y publicar libros, catálogos, manuales, artículos e informes técnicos sobre los trabajos que realice en las materias de su competencia;

XXIX. Publicar y difundir la Gaceta Ecológica, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Dirección General de Estadística e Información Ambiental;

XXX. Elaborar, aplicar y evaluar, de conformidad con los lineamientos legales aplicables, su programa de desarrollo informático;

XXXI. Establecer, en coordinación con la Dirección General de Estadística e Información Ambiental y la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría, los mecanismos para garantizar el acceso del público a los resultados de la investigación ambiental;

XXXII. Establecer un servicio público de información científica ambiental, de conformidad con los lineamientos emitidos por la unidades administrativas competentes de la Secretaría;

XXXIII. Difundir los resultados de los proyectos, estudios, e investigaciones realizados en el Instituto a través de publicaciones científicas y del Sistema de Bases de Datos Ambientales;

XXXIV. Participar en la difusión de la información científica ambiental entre los sectores productivos, gubernamentales y sociales;

XXXV. Coadyuvar con el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable en la promoción y el desarrollo de planes y programas para la formación de especialistas ambientales en instituciones de educación media superior y superior;

XXXVI. Diseñar, promover e implementar cursos especializados de capacitación sobre aspectos técnicos, científicos y gerenciales de la gestión ambiental, para el personal operativo y para mandos medios y superiores del Instituto y de otras áreas de la Secretaría, así como para otras instituciones y dependencias, con la participación del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable y la Oficialía Mayor;

XXXVII. Diseñar, proponer y fomentar el desarrollo de capacidades de investigación y gestión ambiental en las entidades federativas y los municipios del País en coordinación con las unidades administrativas que le sean adscritas a la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental;

XXXVIII. Promover y desarrollar con instituciones académicas y de investigación la investigación jurídica en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en coordinación con la Coordinación General Jurídica de la Secretaría;

XXXIX. Desarrollar, en colaboración y coordinación con organismos internacionales, investigación científica en los asuntos de su competencia, y

XL. Diseñar, instrumentar y desarrollar, en coordinación con las Direcciones Generales de Informática y Telecomunicaciones y de Estadística e Información Ambiental, el programa de informática científica de la Secretaría, incluyendo bases de datos ambientales y biológicos, sistema de información geográfica, registro automatizado de datos ambientales, sistemas computarizados de monitoreo, modelos de simulación ambiental, procesos de gestión ambiental, normatividad informática, innovación tecnológica, así como la integración de un repositorio de sistemas de uso común para la Secretaría.

ARTÍCULO 64.- Para el ejercicio de sus atribuciones el Instituto contará con las unidades administrativas siguientes:

I. Dirección General de Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas;

II. Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana, Regional y Global;

III. Dirección General de Investigación en Política y Economía Ambiental;

IV. Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental;

V. Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y

VI. Unidad Ejecutiva de Administración.

ARTÍCULO 65.- La Dirección General de Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas tendrá las atribuciones siguientes:

I. Realizar los estudios para la formulación del programa de ordenamiento ecológico general del territorio y los programas de ordenamiento ecológico marinos y los ordenamientos ecológicos regionales de competencia federal;

II. Apoyar técnicamente la formulación y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico regionales y locales a cargo de las entidades federativas y municipios que lo soliciten, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría;

III. Desarrollar, en coordinación con la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, las metodologías y elementos técnicos de apoyo para el ordenamiento ecológico general y regional del territorio que coadyuven a la regulación de las actividades productivas y el manejo sustentable de los ecosistemas y de los recursos naturales;

IV. Establecer acuerdos y mecanismos de coordinación con instituciones académicas y gubernamentales, nacionales e internacionales y fomentar la investigación y cooperación técnica en temas relacionados al ordenamiento ecológico, el análisis geográfico de la

problemática ambiental, la conservación de ecosistemas y el manejo sustentable de la vida silvestre;

V. Participar en foros, proyectos de investigación y acuerdos internacionales relacionados con el ordenamiento ecológico, la conservación y manejo de la vida silvestre, y ecosistemas, con la participación, en su caso, de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

VI. Proponer y promover elementos técnicos y científicos para la celebración de convenios y acuerdos con los gobiernos de los estados y municipios, así como con los sectores social y privado, para la realización de acciones tendientes a la investigación, educación, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de flora y fauna silvestres;

VII. Coordinar la elaboración y desarrollo de las metodologías necesarias para la definición de regiones ecológicas del territorio nacional, y participar en los proyectos o iniciativas internacionales relacionados;

VIII. Diseñar y proponer, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos desconcentrados estudios de viabilidad técnica, financiera y social asociados a proyectos de conservación de ecosistemas y de áreas naturales protegidas;

IX. Proponer y apoyar técnicamente la realización de estudios de dinámicas de población de especies de vida silvestre prioritarias y migratorias, así como realizar proyectos de campo para su conservación o su recuperación;

X. Identificar con la participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, las especies y poblaciones en riesgo y determinar las especies de vida silvestre para su conservación, en colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad;

XI. Diseñar programas de conservación y coordinar, promover y realizar estudios de monitoreo de poblaciones de especies de vida silvestre en riesgo, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría;

XII. Proponer y apoyar técnicamente a las unidades administrativas competentes de la Secretaría en el desarrollo de temas para la formulación de normas para la conservación de especies de vida silvestre y comunidades biológicas prioritarias;

XIII. Realizar, conducir y promover estudios para la conservación, manejo o aprovechamiento, restauración, propagación, recuperación, siembra, introducción, reintroducción, control, traslocación, transplante y repoblamiento de especies de flora y fauna silvestres;

XIV. Actualizar las bases de datos y los sistemas de información geográfica para el ordenamiento ecológico, en coordinación con la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial y la Dirección General de Estadística e Información Ambiental;

XV. Dictaminar previamente a su autorización, las solicitudes para la colecta de especímenes con fines científicos y de investigación y de aprovechamiento con fines de utilización en biotecnología y acceso a recursos genéticos, así como para el manejo, liberación al ambiente y tránsito por el territorio nacional de organismos vivos modificados y organismos genéticamente modificados;

XVI. Integrar a los sistemas de ordenamiento ecológico los datos del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, en coordinación con la Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes y la Dirección General de Estadística e Información Ambiental, y

XVII. Instrumentar programas de recuperación de especies de vida silvestre en riesgo.

ARTÍCULO 66.- La Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana Regional y Global tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dirigir estudios para definir las tendencias espaciales y temporales sobre contaminación atmosférica a escala nacional;

II. Dirigir estudios tendientes a determinar los efectos de la contaminación ambiental en los ecosistemas, apoyar a la Secretaría de Salud en los correspondientes a la salud humana, así como difundir sus resultados;

III. Participar en el diseño, realización y evaluación de estudios acordados en las instancias de coordinación de las zonas conurbadas, en materia de calidad del aire;

IV. Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación de especialistas y para la investigación sobre ingeniería ambiental, ecotoxicología y salud ambiental;

V. Establecer vínculos de colaboración con centros e institutos de investigación similares establecidos en otros países y fomentar la cooperación técnica en temas relacionados a la ecotoxicología y la salud ambiental;

VI. Participar en representación de la Secretaría en foros, proyectos de investigación y acuerdos internacionales relacionados con la salud ambiental, la contaminación atmosférica y la seguridad química, bajo con la participación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

VII. Promover y participar conjuntamente con universidades, centros de investigación y otras entidades nacionales e internacionales, en la adaptación y utilización de modelos de simulación y pronóstico de la calidad del aire, así como toxicológicos para la evaluación de riesgos ambientales, en su caso, bajo los lineamientos de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

VIII. Coordinar la elaboración de las comunicaciones nacionales de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en la formulación de estrategias de acción climática, con la participación de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales y de las unidades administrativas competentes de otras Secretarías;

IX. Coordinar estudios sobre los beneficios compartidos derivados de la aplicación de medidas y estrategias para reducir simultáneamente la emisión de contaminantes tóxicos y de gases de efecto invernadero;

X. Dirigir estudios para la actualización y sistematización permanente de un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero;

XI. Participar en proyectos y actividades de cooperación internacional con investigaciones sobre calidad del aire y sobre el manejo y tratamiento de residuos peligrosos y sustancias tóxicas, con la participación que corresponda a la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

XII. Coordinar estudios sobre la vulnerabilidad del país al cambio climático y sobre las opciones de adaptación al mismo;

XIII. Proponer y evaluar proyectos de investigación sobre toxicología ambiental y de exposición personal, en colaboración con la Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental;

XIV. Realizar estudios sobre análisis comparativo de riesgos para apoyar a las diferentes áreas de la Secretaría en el establecimiento de prioridades ambientales;

XV. Desarrollar y operar, en colaboración con la Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, un sistema nacional de información de la calidad del aire, así como otros sistemas y bases de datos sobre contaminación y deterioro ambiental, y

XVI. Conducir, en colaboración con la Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, programas de investigación en materia de contaminación atmosférica y manejo de materiales y residuos peligrosos.

ARTÍCULO 67.- La Dirección General de Investigación en Política y Economía Ambiental tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dictaminar los análisis que sean puestos a consideración del Instituto o la Secretaría relativos al significado económico de los ecosistemas y los servicios ambientales, o bien, a productos y actividades contaminantes específicos;

II. Diseñar y proponer instrumentos económicos fiscales, financieros y de mercado, destinados a apoyar la internalización de los costos ambientales y articular las decisiones económicas y ambientales de los sectores productivos, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría y otras dependencias competentes de la Administración Pública Federal;

III. Promover y coordinar el análisis, el diseño y la aplicación de metodologías para la valuación económico ambiental de ecosistemas, recursos naturales y servicios ambientales;

IV. Conducir la realización de estudios sobre los determinantes y efectos económicos del cumplimiento de la normatividad ambiental, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados correspondientes de la Secretaría;

V. Proponer criterios para la obtención y uso eficiente de créditos externos y donaciones otorgadas por organizaciones y organismos internacionales destinados a resolver problemas ambientales y de manejo de recursos naturales en el territorio nacional, de conformidad con la legislación aplicable;

VI. Conducir estudios relativos a los efectos de la política ambiental sobre los hogares que viven en pobreza, colaborando con la Secretaría de Desarrollo Social en el diseño de programas de reducción de pobreza que tengan beneficios ambientales;

VII. Contribuir al desarrollo de un sistema nacional de indicadores de sustentabilidad, en coordinación con la Dirección General de Estadística e Información Ambiental y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

VIII. Promover y participar, conjuntamente con universidades, centros de investigación y otras entidades nacionales e internacionales, en la construcción, elaboración y operación de modelos que representen analíticamente la interacción de los sistemas biofísicos y los procesos económicos y sociales;

IX. Evaluar y utilizar en coordinación con las autoridades del sector energía, los modelos computacionales y de equilibrio general para evaluar diversos escenarios, futuros energético-ambientales, y de calidad de combustibles;

X. Proponer y desarrollar líneas de investigación aplicada sobre economía urbana, regional o sectorial que puedan coadyuvar a formular e implementar políticas, programas, normas, lineamientos, medidas, criterios y procedimientos en materia de gestión ambiental en coordinación con las Direcciones Generales competentes de la Secretaría;

XI. Participar en proyectos o actividades de cooperación internacional relacionados con la valuación económico ambiental de ecosistemas, recursos naturales y servicios ambientales, con la colaboración de la Dirección General del Sector Primario y Recursos Renovables y de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

XII. Conducir investigaciones relacionadas con el análisis de cuentas económico-ambientales, a partir de la evaluación de gastos incurridos en el cuidado ambiental y la estimación del desgaste del capital natural;

XIII. Desarrollar estudios relacionados con el mercado de bienes y servicios derivados de la vida silvestre, así como realizar estudios de valoración económica de ecosistemas, servicios ambientales y externalidades;

XIV. Realizar investigaciones, estudios y proyectos sobre la creación de mercados ambientales, diseño de instrumentos económicos, valuación de ecosistemas, recursos naturales y servicios ambientales, en coordinación con las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Normatividad y Fomento Ambiental, y

XV. Investigar el impacto de las políticas sectoriales sobre el ambiente, mediante estudios que establezcan los índices e indicadores necesarios para evaluar la relación entre las políticas y la calidad ambiental.

ARTÍCULO 68.- La Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental tendrá la siguientes atribuciones:

I. Establecer y coordinar los programas de evaluación de innovaciones tecnológicas orientadas a la reducción de emisiones atmosféricas, el manejo seguro de materiales peligrosos y la minimización de residuos;

II. Promover un sistema de certificación de laboratorios mexicanos a través de los procesos de acreditamiento y aprobación estipulados por Entidades de Acreditación y en cumplimiento a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

III. Proponer especificaciones técnicas y bases de diseño y operación de los sistemas de monitoreo atmosférico, así como promover, coordinar y supervisar el establecimiento de sistemas de monitoreo de la contaminación atmosférica en las entidades federativas;

IV. Proponer líneas de investigación aplicada en los campos de contaminación atmosférica y manejo de materiales peligrosos, y coadyuvar a formular e implementar políticas, programas, normas, lineamientos, medidas, criterios y procedimientos en materia de gestión ambiental del transporte y del desarrollo urbano;

V. Aplicar proyectos de monitoreo ambiental derivados de la Comisión Ambiental Metropolitana del Valle de México en coordinación con la Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes;

VI. Dirigir estudios tendientes a determinar la calidad del ambiente, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como difundir sus resultados;

VII. Establecer vínculos de colaboración con centros de investigación similares establecidos en otros países y fomentar la cooperación técnica en temas relacionados a la prevención y control de la contaminación y el manejo de residuos peligrosos;

VIII. Participar, en colaboración con la Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana, Regional y Global, en la adaptación y operación de modelos computacionales que apoyen la gestión de la calidad del aire;

IX. Representar a la Secretaría en foros internacionales relacionados con el manejo sustentable de cuencas atmosféricas e hidrológicas, así como con la conservación y manejo de materiales y residuos industriales, en colaboración con la Dirección General de Manejo Integral de Contaminantes y de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

X. Desarrollar y difundir a nivel nacional métodos de control de calidad en los procesos de medición y caracterización de contaminantes ambientales;

XI. Realizar investigaciones sobre contaminación atmosférica y de evaluación de la exposición personal;

XII. Realizar investigaciones sobre minimización de residuos tóxicos y peligrosos y restauración de suelos contaminados;

XIII. Desarrollar e implementar, en coordinación con la Dirección General de Investigación sobre la Contaminación Urbana, Regional y Global, el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire, así como otros sistemas y bases de datos sobre contaminación y deterioro ambiental, conforme a los lineamientos de la Dirección General de Estadística e Información Ambiental;

XIV. Generar datos, proporcionar y diseminar información científica sobre presencia y cantidad de contaminantes y residuos peligrosos en suelos y aire a nivel nacional, y

XV. Organizar, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, programas de capacitación técnica y científica en materia de contaminación atmosférica y manejo de materiales y residuos peligrosos, para profesionales mexicanos de los sectores público, privado y académico.

ARTÍCULO 69.- La Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos tendrá las atribuciones siguientes:

I. Representar legalmente al Presidente del Instituto y a sus unidades administrativas, en los procedimientos judiciales y administrativos en que se requiera su intervención;

II. Atender y dirigir los asuntos jurídicos del Instituto, de conformidad con los lineamientos internos que al efecto dicte la Secretaría, a través de su Coordinación General Jurídica;

III. Representar, defender, contestar, rendir informes, demandar, denunciar, querellarse, allanarse, desistirse, desahogar pruebas, interponer recursos, otorgar perdón, certificar y realizar los trámites necesarios para defender los intereses del Instituto y los que se requieran para el cumplimiento y la aplicación de la ley respectiva;

IV. Iniciar a petición de las unidades administrativas del Instituto el procedimiento de rescisión de los contratos y convenios, tramitarlo y proponer la resolución correspondiente;

V. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir los servidores públicos del Instituto señalados como autoridades responsables, asimismo los escritos de demanda o contestación según proceda en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; intervenir cuando el Instituto tenga carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo, así como formular, en general, todas las promociones que a dichos juicios se refieran;

VI. Dictaminar la procedencia jurídica de los convenios, contratos y demás actos jurídicos de las unidades administrativas que deriven en obligaciones para el Instituto, así como llevar el control y registro de los mismos;

VII. Representar legalmente al Secretario en los juicios de orden laboral, respecto de trabajadores del Instituto, formular dictámenes, demandas de cese y contestación de demandas, formular y absolver posiciones, desistirse o allanarse y, en general, realizar todas aquellas promociones que se requieran en el curso del procedimiento;

VIII. Designar, autorizar y delegar en los servidores públicos adscritos a la unidad, facultades para representar, contestar demandas, denunciar, querellarse, comparecer a audiencias y a todo tipo de diligencias y actuaciones jurisdiccionales, ofrecer pruebas, interponer recursos y, en general, realizar todo tipo de actos tendientes a la defensa de los intereses del Instituto;

IX. Revisar las bases e intervenir en los procesos de licitación que efectúe el Instituto;

X. Realizar los trámites legales para la adquisición, regularización y protección jurídica de los bienes inmuebles administrados por el Instituto o destinados a éste, así como llevar un catálogo de los mismos;

XI. Opinar sobre los proyectos de normas oficiales mexicanas en el ámbito de competencia del Instituto, así como opinar sobre los reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones legales en que intervenga el Instituto y que, en su caso, tenga que refrendar el Secretario;

XII. Compilar y promover la difusión de las disposiciones jurídicas relacionadas con las funciones del Instituto, y

XIII. Expedir, cuando proceda, certificaciones de documentos que obren en los archivos del Instituto.

ARTÍCULO 70.- La Unidad Ejecutiva de Administración tendrá las atribuciones siguientes:

I. Instrumentar, establecer, aplicar y controlar los sistemas, procedimientos y servicios técnicos, administrativos, presupuestales y contables para el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales que requiera el Instituto, de conformidad con los criterios, los

lineamientos y las normas que formulen las unidades administrativas competentes de la Secretaría;

II. Formular, en coordinación con la Oficialía Mayor de la Secretaría, el anteproyecto de programación-presupuesto en materia de administración, capacitación y desarrollo de personal, así como el de adquisiciones y suministro del Instituto y vigilar su correcta ejecución;

III. Gestionar ante las unidades administrativas competentes de la Secretaría la autorización, asignación y modificación al presupuesto de gasto corriente y de inversión del Instituto;

IV. Notificar, a las unidades administrativas del Instituto, las asignaciones presupuestales de gasto corriente y de inversión que le corresponden y evaluar su correcta ejecución;

V. Coordinar la formulación de los manuales de organización y de procedimientos de las unidades administrativas del Instituto, de conformidad con los criterios y lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor de la Secretaría;

VI. Definir y establecer políticas, normas y lineamientos en materia de reclutamiento, selección, inducción, nombramientos, contratación, prestaciones, remuneraciones, servicios, capacitación, desarrollo y movimientos del personal de las unidades administrativas del Instituto, de acuerdo a las disposiciones y criterios establecidos por la Oficialía Mayor de la Secretaría;

VII. Establecer normas y lineamientos para el pago de las remuneraciones al personal del Instituto y la aplicación de descuentos y retenciones autorizadas conforme a la ley aplicable vigente;

VIII. Promover, establecer y coordinar programas internos de bienestar social, así como fomentar la participación de los trabajadores y sus familias en actividades culturales, deportivas y recreativas;

IX. Coordinar la ejecución e instrumentación del programa de protección civil del Instituto, de conformidad con los criterios y lineamientos que determinen las unidades administrativas centrales de la Secretaría y demás autoridades competentes;

X. Proponer y aplicar políticas para la administración de recursos materiales y la prestación de servicios generales del Instituto, de conformidad con los lineamientos que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría;

XI. Integrar y aplicar el programa anual de adquisiciones y servicios del Instituto, de acuerdo con las normas, las políticas y los lineamientos de la Oficialía Mayor de la Secretaría;

XII. Suscribir los contratos y convenios relativos a la adquisición de bienes y servicios del Instituto;

XIII. Normar, aplicar y supervisar los sistemas de control de inventarios generales de bienes y dictaminar y vigilar su afectación, baja y destino final, y

XIV. Administrar, controlar y evaluar la aplicación de los recursos provenientes de créditos y aportaciones de origen externo para financiar el desarrollo de programas del Instituto y efectuar las gestiones para su reembolso.

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO

DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ARTÍCULO 71.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de un Procurador y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, recursos naturales, bosques, vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto;

II. Recibir, investigar y atender o, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes, las denuncias por el incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior;

III. Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales; así como brindarle asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la Secretaría;

IV. Coadyuvar con otras autoridades federales, así como con las estatales y municipales que lo soliciten, en el control de la aplicación de la normatividad ambiental;

V. Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su competencia;

VI. Expedir recomendaciones a las autoridades competentes para la debida aplicación de la normatividad ambiental y dar seguimiento a dichas recomendaciones;

VII. Promover y procurar, cuando proceda, la conciliación de intereses entre particulares y en sus relaciones con las autoridades, en asuntos derivados de la aplicación de las disposiciones jurídicas aplicables en las materias competencia de la Secretaría;

VIII. Ejercer las atribuciones de la Secretaría en materia de auditorías y peritajes ambientales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IX. Atender las solicitudes de las autoridades competentes o de los particulares, respecto de la formulación de dictámenes técnicos de daños o perjuicios ocasionados por infracciones a la normatividad ambiental;

X. Imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad, así como las sanciones que sean de su competencia en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XI. Investigar las infracciones a la normatividad ambiental y, en su caso, hacerlas del conocimiento de las autoridades correspondientes cuando no sean de su competencia;

XII. Denunciar ante el Ministerio Público Federal los actos, hechos u omisiones que impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente;

XIII. Coordinarse con las demás autoridades federales, estatales y municipales para el ejercicio de sus atribuciones, así como participar en la atención de contingencias y emergencias ambientales o que afecten los recursos naturales;

XIV. Participar con las autoridades competentes en la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas, estudios, programas y proyectos para la protección, defensa y restauración del medio ambiente y los recursos naturales;

XV. Canalizar a través del órgano de control interno, las irregularidades en que incurran servidores públicos federales en ejercicio de sus funciones, en contra del medio ambiente o los recursos naturales, para que intervenga en términos de las disposiciones jurídicas aplicables o en su defecto remita el asunto ante la autoridad que resulte competente;

XVI. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales para tramitar las quejas que se presenten por irregularidades en que incurran servidores públicos locales, en contra del ambiente o los recursos naturales, para que se proceda conforme a la legislación aplicable;

XVII. Sustanciar y resolver los recursos administrativos que le competan;

XVIII. Iniciar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones que procedan, ante las autoridades jurisdiccionales competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal;

XIX. Resolver sobre las solicitudes de reconsideración y conmutación de multas, en los términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables;

XX. Resolver las solicitudes de certificación de la legal procedencia para el traslado de ejemplares, partes y derivados de mamíferos y quelonios marinos, así como de especies acuáticas en riesgo o las declaradas en veda;

XXI. Verificar el cumplimiento de las restricciones no arancelarias en las materias competencia de la Secretaría, así como emitir el registro de verificación correspondiente;

XXII. Llevar a cabo las actividades de difusión, comunicación, prensa y relaciones públicas que le correspondan, de conformidad a las políticas de comunicación social de la Secretaría;

XXIII. Participar en los asuntos internacionales relacionados con su competencia, de conformidad a las políticas y lineamientos que emita la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría;

XXIV. Acceder a la información contenida en los registros y bases de datos de las unidades administrativas de la Secretaría, a efecto de investigar y detectar posibles infracciones a la normatividad ambiental;

XXV. Recopilar, sistematizar y, en su caso, publicar la información derivada del ejercicio de sus atribuciones;

XXVI. Expedir reconocimientos y, en su caso, certificaciones a las personas físicas o morales con actividad económica, que cumplan con las disposiciones jurídicas ambientales y las que vayan más allá de ese cumplimiento, y

XXVII. Coordinar y concertar la ejecución de instrumentos económicos y financieros que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, en el ámbito de su competencia.

Las atribuciones anteriores serán ejercidas a través de las unidades administrativas de la Procuraduría, sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de su Titular.

ARTÍCULO 72.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Procuraduría contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes:

I. Procurador;
II. Subprocuraduría de Auditoría Ambiental;
III. Subprocuraduría de Verificación Industrial;
IV. Subprocuraduría de Recursos Naturales;
V. Subprocuraduría Jurídica;
VI. Dirección General de Planeación y Coordinación de Auditorías;
VII. Dirección General de Operación y Control de Auditorías;
VIII. Dirección General de Auditoría del Riesgo Ambiental y Prevención de Accidentes;
IX. Dirección General Técnica Industrial;
X. Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación;
XI. Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre;
XII. Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal;
XIII. Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre;
XIV. Dirección General de Inspección y Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Marinos;
XV. Dirección General de Delitos Ambientales Federales y Litigio;
XVI. Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta;
XVII. Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social;
XVIII. Dirección General de Administración;
XIX. Dirección General de Coordinación de Delegaciones;
XX. Unidad de Comunicación Social, y
XXI. Delegaciones de la Procuraduría en las entidades federativas y la Delegación en la Zona Metropolitana del Valle de México, que tendrá competencia en el Distrito Federal y los municipios conurbados siguientes: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, La Paz, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. La Delegación de la Procuraduría en el Estado de México tendrá representación y competencia en los restantes municipios del Estado de México.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente contará con una Contraloría Interna, órgano interno de control, al frente de la cual estará el Contralor Interno designado en los términos del artículo 37 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de sus facultades, se auxiliará por los titulares de las áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades designados en los mismos términos. Dichos servidores públicos ejercen las atribuciones a que se refiere el artículo 15 de este Reglamento, en el ámbito de competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos competencia de la Procuraduría, ésta contará con Inspectores Federales quienes tendrán facultades para actuar en los asuntos que se les ordene de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 73.- Al frente de cada una de las Subprocuradurías habrá un Subprocurador, designado por el Secretario a propuesta del Procurador. Los Subprocuradores tendrán las facultades genéricas siguientes:

I. Representar los intereses de la sociedad y brindarle asesoría en asuntos competencia de las unidades administrativas de su adscripción;
II. Acordar con el Procurador la atención de los programas y el despacho de los asuntos de las unidades administrativas de su adscripción;
III. Desempeñar las comisiones que el Procurador les encomiende y representar a la Procuraduría en los actos que él mismo determine;
IV. Someter a la consideración del Procurador, los proyectos de acuerdos e instrumentos jurídicos de coordinación, de colaboración administrativa y los convenios de concertación en las materias competencia de las unidades administrativas de su adscripción;
V. Proponer proyectos de recomendaciones para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección al medio ambiente y los recursos naturales, a las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, estatales y municipales;
VI. Solicitar ante las autoridades competentes, en lo que corresponda a las unidades administrativas de su adscripción, la revocación, modificación, suspensión o cancelación de autorizaciones, permisos, asignaciones, licencias o concesiones cuando las actividades autorizadas se conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológico, lo perturben significativamente, o contravengan las disposiciones jurídicas aplicables;

VII. Establecer las políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir en las unidades administrativas de su adscripción;

VIII. Apoyar técnicamente la desconcentración y la delegación de facultades en las unidades administrativas bajo su responsabilidad;

IX. Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a ellos adscritas y proponer su reorganización, fusión o extinción, conforme a las políticas emitidas por el Procurador y con apego a las disposiciones jurídicas aplicables;

X. Coordinar a las unidades administrativas a su cargo y establecer mecanismos de integración e interrelación para el correcto desempeño de sus responsabilidades;

XI. Someter a la consideración del Procurador los manuales de organización interna, procedimientos y servicios de las unidades administrativas a su cargo, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Administración;

XII. Proponer al Procurador la delegación de facultades en servidores públicos subalternos;

XIII. Formular los anteproyectos de programa presupuesto que les correspondan, verificando su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades administrativas de su adscripción;

XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que les sean otorgados por delegación o les correspondan por suplencia;

XV. Recibir en acuerdo ordinario a los Directores Generales de su adscripción y en acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor público subalterno, así como conceder audiencias al público, conforme a los manuales administrativos correspondientes;

XVI. Proporcionar la información, datos y cooperación técnica requerida por otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, así como por otras unidades administrativas de la Secretaría;

XVII. Suscribir, previo acuerdo del Procurador, convenios y contratos en materia de obra pública, servicios y capacitación, de conformidad con la legislación aplicable y conforme a los lineamientos que al respecto emitan la Subprocuraduría Jurídica y la Dirección General de Administración;

XVIII. Promover y coordinar programas dirigidos a la profesionalización de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría, y

XIX. Formular, evaluar, supervisar y dar seguimiento a los programas, procedimientos y acciones operativas instaurados por las Delegaciones.

ARTÍCULO 74.- Al frente de cada Dirección General habrá un Director General.

ARTÍCULO 75.- La Dirección General de Planeación y Coordinación de Auditorías, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y proponer las políticas y estrategias para la realización de auditorías ambientales;

II. Formular y desarrollar los programas de auditoría ambiental, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

III. Promover, inducir y concertar con particulares, grupos, cámaras y asociaciones empresariales y demás organizaciones con actividades económicas la realización de auditorías ambientales;

IV. Verificar que se cumplan los criterios que deben satisfacer las unidades de verificación en materia de auditoría ambiental;

V. Participar en el Comité de Evaluación de las entidades de acreditación, conforme al reglamento respectivo;

VI. Desarrollar programas de capacitación técnica para la realización de auditorías ambientales, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría;

VII. Promover la cooperación y comunicación nacional e internacional para el desarrollo técnico en materia de auditorías ambientales, en su caso, de conformidad a los lineamientos de política emitidos por la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría;

VIII. Emitir dictámenes técnicos sobre las solicitudes para la obtención de estímulos fiscales, en actividades de prevención y control de la contaminación ambiental, y

IX. Formular, coordinar y administrar los programas de apoyo, reconocimiento y certificación que la Procuraduría otorgue a las personas físicas o morales con actividad económica.

ARTÍCULO 76.- La Dirección General de Operación y Control de Auditorías, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar y realizar, en su caso, por sí misma o a través de terceros, considerando las disposiciones en materia de secretos industriales, auditorías y peritajes ambientales a las empresas y entidades públicas y privadas, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables;

II. Emitir observaciones sobre las medidas preventivas y correctivas, acciones, estudios, proyectos, obras, procedimientos y programas propuestos por el auditor y que realizará la empresa o entidad auditada;

III. Convenir las medidas correctivas y preventivas que podrán adoptar las empresas inscritas en el programa de auditoría ambiental;

IV. Formular, de conformidad con los lineamientos que establezca la Subprocuraduría Jurídica, los proyectos de convenios para concertar las acciones que se deriven de las auditorías y peritajes ambientales;

V. Dar seguimiento por sí o a través de terceros autorizados, a las acciones acordadas en los convenios derivados de auditorías y peritajes ambientales;

VI. Promover con particulares la realización de auditorías ambientales;

VII. Definir la permanencia o reincorporación de organizaciones con actividades económicas en el programa de auditoría ambiental;

VIII. Definir y emitir los criterios técnicos y de procedimiento mediante los cuales los Delegados atenderán y resolverán las solicitudes para desarrollar auditorías ambientales.

ARTÍCULO 77.- La Dirección General de Auditoría del Riesgo Ambiental y Prevención de Accidentes, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Evaluar y jerarquizar, dentro de la Auditoría Ambiental, las propuestas de minimización de riesgos ambientales, que busquen exceder los estándares establecidos por la normatividad ambiental vigente, y que sean presentadas voluntariamente por las organizaciones inscritas en el programa de Auditoría Ambiental;

II. Revisar el desempeño de los planes de acción de las empresas inscritas en el programa de auditoría ambiental;

III. Monitorear la percepción social sobre riesgos ambientales de las empresas inscritas en el programa de auditoría ambiental;

IV. Integrar una base de datos de emergencias ambientales;

V. Atender las solicitudes de información técnica sobre fugas, derrames, incendios y explosiones, relacionadas con el uso, manejo y transporte de sustancias químicas;

VI. Establecer vínculos de comunicación con las autoridades federales, estatales o municipales o con los particulares, a fin de que coadyuven en la solución de problemas causados por emergencias o contingencias ambientales;

VII. Atender las peticiones de dictámenes técnicos y periciales que le requieran en el ámbito de su competencia, la Dirección General de Delitos Ambientales y Litigio, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público Federal y los interesados de conformidad con la legislación aplicable, y

VIII. Solicitar información a las unidades administrativas de la Secretaría, dependencias de la Administración Pública Federal, estatales y municipales, e instituciones de investigación y científicas para atender las peticiones a que se refiere la fracción anterior.

ARTÍCULO 78.- La Dirección General Técnica Industrial, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Identificar los sistemas, equipos y procesos industriales que deberán ser sometidos a verificación del cumplimiento de la normatividad ambiental;

II. Elaborar y actualizar un catálogo de medidas correctivas correspondientes a las infracciones de la normatividad ambiental y fijar los plazos de su cumplimiento;

III. Definir los criterios respecto de la determinación de las sanciones económicas de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Establecer las especificaciones del equipo de trabajo y de seguridad de los Inspectores Federales;

V. Evaluar y emitir dictámenes técnicos en apoyo de las Delegaciones, en los casos que determine el Subprocurador de Verificación Industrial;

VI. Apoyar a las Delegaciones en la evaluación de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, del nivel de contaminación de los suelos, y de las actividades altamente riesgosas;

VII. Elaborar los manuales y material didáctico, así como ejecutar o coordinar la realización de programas para la capacitación del personal de la Procuraduría en la realización de sus funciones;

VIII. Orientar a los operadores de las fuentes de contaminación y riesgo sobre el cumplimiento de la normatividad ambiental;

IX. Dar seguimiento a la situación que guardan cada uno de los establecimientos sujetos a verificación;

X. Coordinar las acciones de muestreo y análisis de residuos peligrosos y suelos, derivados del programa de inspección y vigilancia en materia industrial;

XI. Coordinar la operación de la red de laboratorios de análisis ambientales a cargo de la Procuraduría;

XII. Establecer, previo acuerdo del Procurador, las políticas, lineamientos, estrategias y procedimientos para el desarrollo y operación de la red de laboratorios de la Procuraduría, así como de los programas de control de calidad de análisis necesarios;

XIII. Participar en la definición de las técnicas apropiadas para el análisis de residuos peligrosos y suelos, de conformidad a la normatividad jurídica aplicable;

XIV. Coordinar el proceso de acreditamiento y certificación ante la Entidad de Acreditación correspondiente y el Centro Nacional de Metrología, de la red de laboratorios, equipos, métodos analíticos y recursos humanos empleados en la misma;

XV. Planear, establecer, vigilar y mantener actualizada la transferencia y administración electrónica de datos analíticos;

XVI. Formular y desarrollar los programas de capacitación para el personal de los laboratorios a cargo de la Procuraduría, en coordinación con las áreas competentes de la Secretaría;

XVII. Determinar los lineamientos técnicos para la custodia de muestras de residuos peligrosos y suelos;

XVIII. Definir las características técnicas del equipo de muestreo y de los contenedores de las muestras que utilicen las Delegaciones de la Procuraduría;

XIX. Promover la realización de la intercalibración de los laboratorios acreditados, dedicados al análisis de residuos peligrosos, suelos y materiales peligrosos;

XX. Atender las peticiones de dictámenes técnicos y periciales que le requieran, en el ámbito de su competencia, la Dirección General de Delitos Ambientales Federales y Litigio, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público Federal y los interesados, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y

XXI. Solicitar información a las unidades administrativas de la Secretaría, dependencias de la Administración Pública Federal, estatales y municipales, e instituciones de investigación y científicas para atender las peticiones a que se refiere la fracción anterior.

ARTÍCULO 79.- La Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular y conducir la política de inspección y vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental en las materias de contaminación atmosférica, ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica, olores, contaminación visual en fuentes y zonas de jurisdicción federal, materiales y residuos peligrosos y actividades altamente riesgosas;

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y programas ambientales en las materias a que hace referencia en la fracción anterior;

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y programas ambientales en materia de restauración de suelos;

IV. Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, control, mitigación, restauración o compensación señaladas en las resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias en materia de prevención y control de la contaminación e impacto ambiental por obras y actividades industriales;

V. Supervisar y evaluar los procedimientos de inspección y verificación en las materias a que se refieren las fracciones I a IV, instaurados por las Delegaciones de la Procuraduría;

VI. Concertar con instituciones públicas y privadas la realización de programas de capacitación, difusión, orientación e investigación en beneficio del cumplimiento de la normatividad ambiental, en las materias a que se refieren las fracciones I a IV;

VII. Coordinar la descentralización de funciones de inspección y vigilancia, a que se refieren las fracciones I a IV;

VIII. Formular los manuales de procedimientos para la realización de inspecciones y verificaciones en las materias a que se refieren las fracciones I a IV;

IX. Coordinar, supervisar y evaluar la verificación del cumplimiento de las restricciones no arancelarias relativas a los materiales y residuos peligrosos que se exportan o importan al país, así como emitir el registro de verificación correspondiente;

X. Investigar en coordinación con la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, los hechos relacionados con denuncias ambientales, que le sean remitidas para su atención;

XI. Acceder y analizar la información contenida en los registros y bases de datos de las diferentes unidades administrativas de la Secretaría, a efecto de investigar y detectar posibles infracciones a la normatividad ambiental;

XII. Atender las peticiones de dictámenes técnicos y periciales que le requieran, en el ámbito de su competencia, la Dirección General de Delitos Ambientales Federales y Litigio, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público Federal y los interesados de conformidad con la legislación aplicable, y

XIII. Solicitar información a las unidades administrativas de la Secretaría, dependencias de la Administración Pública Federal, estatales y municipales, e instituciones de investigación y científicas para atender las peticiones a que se refiere la fracción anterior.

ARTÍCULO 80.- La Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular y conducir la política de inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas y programas ambientales en materia de ordenamiento ecológico del territorio de competencia federal, del uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, así como en materia de impacto ambiental, cuando las obras o actividades puedan afectar o afecten los recursos forestales, la vida silvestre, los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo o alguna de las zonas, áreas o recursos naturales competencia de la Secretaría;

II. Vigilar y promover el cumplimiento de los programas de ordenamiento ecológico del territorio en las zonas de competencia federal, emitiendo en su caso los dictámenes correspondientes; así como someter a consideración del Procurador la emisión de recomendaciones a las autoridades competentes para que observen las disposiciones establecidas en los programas de ordenamiento ecológico;

III. Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, control, mitigación, restauración o compensación señaladas en las resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias derivadas de las disposiciones jurídicas sobre impacto ambiental, cuando las obras o actividades puedan afectar o afecten los recursos forestales, la vida silvestre, los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo o alguna de las zonas, áreas o recursos naturales competencia de la Secretaría;

IV. Verificar que las obras o actividades que deban someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental cuenten con la autorización en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables en la materia, cuando las obras o actividades puedan afectar o afecten los recursos forestales, la vida silvestre, los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo o alguna de las zonas, áreas o recursos naturales competencia de la Secretaría;

V. Participar en la aplicación de las medidas necesarias para prevenir y, en su caso, atender las contingencias ambientales, en el ámbito de su competencia;

VI. Investigar en coordinación con la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, los hechos relacionados con denuncias ambientales, que le sean remitidas para su atención;

VII. Determinar la aplicación de medidas de urgente aplicación, preventivas, correctivas y de seguridad en las materias a que se refiere la fracción I;

VIII. Elaborar dictámenes técnicos y evaluaciones que sirvan de base para establecer las medidas correctivas, de seguridad o de urgente aplicación, en las materias a que se refiere la fracción I;

IX. Vigilar que la ocupación, uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, de playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, de cayos y arrecifes, se efectúe al amparo de los títulos de concesión, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino, así como verificar que tal uso o aprovechamiento se realice en los términos del título o acuerdo correspondiente;

X. Vigilar el cumplimiento de las acciones de administración, protección, restauración y recuperación que se dicten en materia de zona federal marítimo terrestre, de playas marítimas, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas;

XI. Acceder y analizar la información contenida en los registros y bases de datos de las unidades administrativas de la Secretaría, a efecto de investigar y detectar posibles infracciones a la normatividad ambiental, en el ámbito de su competencia;

XII. Atender las peticiones de dictámenes técnicos y periciales que le requieran, en el ámbito de su competencia, la Dirección General de Delitos Ambientales y Litigio, los órganos

jurisdiccionales, el Ministerio Público Federal y los interesados de conformidad con la legislación aplicable, y

XIII. Solicitar información a las unidades administrativas de la Secretaría, dependencias de la Administración Pública Federal, estatales y municipales, e instituciones de investigación y científicas para atender las peticiones a que se refiere la fracción anterior.

ARTÍCULO 81.- La Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular y conducir la política de inspección y vigilancia en materia forestal y de áreas naturales protegidas;

II. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia forestal y a las áreas naturales protegidas, así como promover la participación en dicha vigilancia de las autoridades federales, estatales y municipales, de universidades, centros de investigación y demás organizaciones de los sectores público, social y privado;

III. Investigar en coordinación con la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, los hechos relacionados con denuncias ambientales, que le sean remitidas para su atención;

IV. Vigilar el cumplimiento de las vedas forestales;

V. Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al aprovechamiento de las plantaciones forestales comerciales y a los programas de forestación y reforestación;

VI. Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas que regulan los cambios de utilización de los terrenos forestales y la realización de las actividades productivas primarias, de almacenamiento y transformación o industriales que se lleven a cabo sobre recursos forestales y áreas naturales protegidas;

VII. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la formulación de los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo para la expedición, trámite y revisión de la documentación relativa al ejercicio y control de las actividades forestales y áreas naturales protegidas;

VIII. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la elaboración de los programas de restauración ecológica y vigilar su cumplimiento;

IX. Determinar el destino de los bienes decomisados, partes y derivados en materia forestal, conforme a la normatividad aplicable en la materia;

X. Determinar y aplicar las medidas necesarias para prevenir y en su caso atender las contingencias ambientales que afecten los ecosistemas forestales y las áreas naturales protegidas;

XI. Acceder y analizar la información contenida en los registros y bases de datos de las diferentes unidades administrativas de la Secretaría, a efecto de investigar y detectar posibles infracciones a la normatividad ambiental;

XII. Atender las peticiones de dictámenes técnicos y periciales que le requieran, en el ámbito de su competencia, la Dirección General de Delitos Ambientales Federales y Litigio, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público Federal y los interesados de conformidad con la legislación aplicable, y

XIII. Solicitar información a las unidades administrativas de la Secretaría, dependencias de la Administración Pública Federal, estatales y municipales, e instituciones de investigación y científicas para atender las peticiones a que se refiere la fracción anterior.

ARTÍCULO 82.- La Dirección General de Inspección y Vigilancia de la Vida Silvestre, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular y conducir la política de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de vida silvestre y de las restricciones no arancelarias de aquellas mercancías sujetas a regulación por parte de la Secretaría;

II. Verificar el cumplimiento de disposiciones jurídicas, vedas y demás relativas al aprovechamiento extractivo y no extractivo de la vida silvestre, con fines de subsistencia, caza deportiva, colecta científica y de enseñanza, así como a la importación y exportación de los mismos e instaurar y sustanciar los procedimientos administrativos correspondientes;

III. Verificar el cumplimiento de las disposiciones contendidas en los calendarios de aprovechamiento de vida silvestre que al respecto expida la Secretaría;

IV. Promover la participación de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de universidades, centros de investigación y demás organizaciones de los sectores público, privado y social en las actividades relacionadas con el aprovechamiento de la vida silvestre;

V. Coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, en la promoción del establecimiento de vedas al aprovechamiento de poblaciones de la vida silvestre y su modificación o levantamiento, así como el establecimiento de regulaciones no arancelarias;

VI. Vigilar el cumplimiento de disposiciones jurídicas y programas de manejo relativos al registro y desarrollo de actividades de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, poblaciones exóticas y el establecimiento de confinamientos de ejemplares que al efecto se establezcan;

VII. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable al control fitozoosanitario de la vida silvestre y en materia de importación y exportación de los recursos forestales, en el ámbito de competencia de la Secretaría;

VIII. Emitir el Registro de Trámite de Verificación para comprobar el cumplimiento de las restricciones no arancelarias en puertos, aeropuertos y fronteras, en el ámbito de competencia de la Secretaría;

IX. Investigar en coordinación con la Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, los hechos relacionados con denuncias ambientales, que le sean remitidas para su atención;

X. Atender las consultas de importadores, exportadores y público en general, relacionadas con el comercio exterior y tráfico de recursos naturales y de las mercancías sujetas a regulación no arancelaria por parte de la Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que al respecto tenga la Secretaría de Economía;

XI. Verificar el cumplimiento de las regulaciones al comercio internacional establecidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y en demás convenios y tratados internacionales en la materia, sin perjuicio de las atribuciones que al respecto tenga la Secretaría de Economía;

XII. Determinar el destino de los bienes decomisados y ordenar su retorno cuando así lo requiera el país de origen;

XIII. Integrar y sistematizar la información derivada de las acciones realizadas por la Procuraduría referente a la inspección de la vida silvestre y de las mercancías sujetas a regulación no arancelaria por parte de la Secretaría;

XIV. Elaborar documentos técnicos, informes, programas de trabajo y de difusión de las actividades relativas a su competencia, así como colaborar en la elaboración de guías y manuales;

XV. Determinar y aplicar las medidas necesarias para prevenir y, en su caso, atender las contingencias ambientales que afecten a la vida silvestre, en el ámbito de su competencia;

XVI. Emitir los lineamientos conforme a los cuales las Delegaciones determinarán el destino de los bienes decomisados, con base en la normatividad aplicable;

XVII. Acceder y analizar la información contenida en los registros y bases de datos de las unidades administrativas de la Secretaría, a efecto de investigar y detectar posibles infracciones a la normatividad ambiental;

XVIII. Atender las peticiones de dictámenes técnicos y periciales que le requieran en el ámbito de su competencia, la Dirección General de Delitos Ambientales Federales y Litigio, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público Federal y los interesados, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y

XIX. Solicitar información a las unidades administrativas de la Secretaría, Dependencias de la Administración Pública Federal, estatales y municipales, e instituciones de investigación y científicas para atender las peticiones a que se refiere la fracción anterior.

ARTÍCULO 83.- La Dirección General de Inspección y Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Marinos tendrá las atribuciones siguientes:

I. Formular y conducir la política de inspección y vigilancia en materia de conservación y protección de quelonios y mamíferos marinos, de especies acuáticas en riesgo y las que se encuentren en áreas naturales protegidas que incluyan ecosistemas costeros o marinos;

II. Vigilar el cumplimiento de las restricciones al uso de artes, métodos y equipos de pesca prohibidos, cuando su utilización afecte o pueda afectar las especies o ecosistemas a que se refiere la fracción I;

III. Realizar la vigilancia para impedir que se introduzcan en cuerpos de agua de jurisdicción federal, especies de flora y fauna acuáticas sin la autorización correspondiente;

IV. Participar con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la fijación de las artes, métodos y equipos de pesca prohibidos;

V. Vigilar el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a la acuacultura que se realice en los cuerpos de agua de jurisdicción federal, así como a la colecta de larvas, postlarvas, crías, huevos, semillas o alevines para el abasto de las actividades acuícolas en general;

VI. Investigar los hechos relacionados con contingencias ambientales en materia de flora y fauna acuática y ecosistemas costeros y marinos, así como participar en su atención;

VII. Verificar el cumplimiento de las vedas de especies acuáticas en riesgo, así como de la normatividad aplicable en las zonas de refugio para proteger especies acuáticas y las de las areas naturales protegidas que incluyan ecosistemas costeros o marinos;

VIII. Vigilar el cumplimiento de normatividad aplicable a la protección, conservación y aprovechamiento para fines recreativos o de exhibición de los quelonios y mamíferos, así como la que regula especies acuáticas en riesgo;

IX. Realizar actos de inspección cuando se detecten o denuncien actividades o prácticas de pesca depredatorias que pongan en riesgo inminente el equilibrio ecológico;

X. Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas para proteger a los delfines en las operaciones de pesca de atún con cerco en aguas de jurisdicción federal o las realizadas por embarcaciones de bandera mexicana en aguas internacionales o de jurisdicción de otro estado;

XI. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de quienes en las zonas litorales o embalses, mantengan existencias de productos pesqueros en veda o los transporten desde las zonas litorales o embalses en donde se ha establecido la veda;

XII. Inspeccionar y, en su caso, certificar el uso de los excluidores de tortuga marina para las actividades pesqueras conforme a la normatividad aplicable;

XIII. Recibir, investigar y atender o, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes, las denuncias de la ciudadanía y de los sectores público, social y privado, por el incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en el ámbito de su competencia;

XIV. Determinar el destino de los bienes decomisados en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a la normatividad aplicable;

XV. Acceder y analizar la información contenida en los registros y bases de datos de las diferentes unidades administrativas de la Secretaría, de conformidad con la legislación aplicable, a efecto de investigar y detectar posibles infracciones a la normatividad ambiental;

XVI. Atender las peticiones de dictámenes técnicos y periciales que le requieran, en el ámbito de su competencia, la Dirección General de Delitos Ambientales y Litigio, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público Federal y los interesados de conformidad con la legislación aplicable, y

XVII. Solicitar información a las unidades administrativas de la Secretaría, dependencias de la Administración Pública Federal, estatales y municipales, sectores social y público e instituciones de investigación y científicas para atender las peticiones a que se refiere la fracción anterior.

ARTÍCULO 84.- Las Direcciones Generales de Inspección de Fuentes de Contaminación; de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre; de Inspección y Vigilancia Forestal; de Vida Silvestre, y de Recursos Pesqueros y Marinos, en las materias de su respectiva competencia, tendrán además las atribuciones genéricas siguientes:

I. Programar, ordenar y realizar las visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las normas jurídicas aplicables, así como para requerir la presentación de documentación e información que requieran y hacer las recomendaciones respectivas;

II. Substanciar el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia;

III. Determinar las infracciones a las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables;

IV. Ordenar las medidas de seguridad que procedan, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o a la salud pública, así como las medidas de urgente aplicación, señalando los plazos para su cumplimiento;

V. Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes al procedimiento de inspección y vigilancia, imponiendo las sanciones y medidas técnicas que en su caso procedan, y dar seguimiento al cumplimiento de las mismas;

VI. Expedir certificaciones en los asuntos de su competencia;

VII. Acordar, cuando sea procedente, la admisión de los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos que emitan y otorgar o denegar la suspensión del acto recurrido, turnándolo en su caso, a la Subprocuraduría Jurídica para la formulación de la resolución que corresponde emitir al superior jerárquico;

VIII. Solicitar, en su caso, ante las autoridades competentes, la revocación o suspensión de autorizaciones, permisos, asignaciones, licencias o concesiones conforme a la legislación aplicable a la materia;

IX. Resolver las oposiciones a los actos de trámite en el procedimiento de inspección, que se aleguen por los interesados durante dicho procedimiento;

X. Formular dictámenes técnicos y peritajes en las materias de su competencia;

XI. Suscribir los convenios que den por terminado los procedimientos administrativos que tengan por objeto satisfacer el interés público, siempre y cuando no sean contrarios a las leyes aplicables ni verse sobre materias que no sean susceptibles de transacción;

XII. Atraer los procedimientos administrativos iniciados por las Delegaciones de la Procuraduría en las entidades federativas, considerando criterios de importancia y trascendencia que se justificarán en cada caso, para continuar su substanciación y concluirlos, y

XIII. Investigar los hechos relacionados con las denuncias en el ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 85.- La Dirección General de Delitos Ambientales Federales y Litigio, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Expedir la certificación de la documentación que obre en los archivos de la Procuraduría;

II. Establecer las formalidades que deberán observarse en la emisión de los dictámenes técnicos y peritajes que se requieran para la substanciación de los procedimientos civiles, penales y administrativos;

III. Representar legalmente al Procurador y a las unidades administrativas de la Procuraduría, en los procedimientos judiciales y administrativos en que se requiera su intervención;

IV. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir los servidores públicos de la Procuraduría señalados como autoridades responsables; asimismo los escritos de demanda o contestación, según proceda en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; intervenir cuando la Procuraduría tenga carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo, así como formular, en general, todas las promociones que a dichos juicios se refieran;

V. Suscribir documentos en ausencia del Procurador, Subprocuradores y Directores Generales de la Procuraduría y desahogar los trámites que correspondan a los casos urgentes relativos a términos, rendición de informes previos y justificados, interposición de recursos y recepción de toda clase de notificaciones;

VI. Representar a la Secretaría, en coordinación con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de ésta, en asuntos laborales que se substancien ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de servidores públicos adscritos a la Procuraduría, formulando dictámenes y demandas de cese de la relación laboral, contestando demandas, formulando absolución de posiciones, desistimientos o allanamientos y, en general, realizar toda clase de promociones que se requieran en el curso del procedimiento;

VII. Iniciar, en el ámbito de las atribuciones de la Procuraduría, las acciones que procedan, ante las autoridades jurisdiccionales competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal;

VIII. Ejercitar las acciones necesarias ante los órganos judiciales correspondientes, a efecto de obtener la reparación de los daños y deterioro ambientales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IX. Formular, organizar y desarrollar programas de capacitación en materia de atención de ilícitos ambientales en coordinación con la unidades administrativas competentes de la Secretaría;

X. Formular denuncias o querellas ante el Ministerio Público por hechos u omisiones delictuosas en los que la Procuraduría resulte afectada o aquéllos que afecten al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre, los recursos genéticos, las cuencas o los ecosistemas; así como solicitar la coadyuvancia al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional en el procedimiento penal;

XI. Fungir como enlace entre las unidades administrativas de la Procuraduría y la Procuraduría General de la República;

XII. Coadyuvar en el procedimiento penal proporcionando todos los datos o elementos de prueba con que cuente, que conduzcan a acreditar los elementos del cuerpo del delito y a establecer la probable o plena responsabilidad del inculpado, según el caso, y la procedencia y monto de la reparación del daño;

XIII. Participar con las Delegaciones en las entidades federativas, en los operativos y diligencias en donde intervengan servidores públicos de la Procuraduría en apoyo del Ministerio Público;

XIV. Proponer al Subprocurador de su adscripción, las solicitudes para recabar de las unidades administrativas de la Secretaría, de las autoridades federales, estatales y municipales, los elementos periciales, documentales y en general, los necesarios para sustentar la presentación de denuncias ante el Ministerio Público por la comisión de delitos ambientales, así como recabar dichos elementos de las unidades administrativas y de las delegaciones de la Procuraduría;

XV. Acceder y analizar la información contenida en los registros y bases de datos de las unidades administrativas de la Secretaría, a efecto de investigar y detectar posibles infracciones a la normatividad ambiental;

XVI. Formular y proponer al Procurador, los manuales de operación para detectar y denunciar las actividades y operaciones dolosas que afecten o puedan afectar al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre, las cuencas o los ecosistemas, y

XVII. Ordenar a las Delegaciones de la Procuraduría, la realización de visitas de inspección para detectar hechos, actos u omisiones que puedan ser constitutivos de delitos ambientales.

Las atribuciones a las que hacen referencia las fracciones III, IV, VII y VIII del presente artículo podrán ser ejercidas por el Director General a través de servidores públicos subordinados, previa acreditación.

ARTÍCULO 86.- La Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Suscribir documentos en ausencia del Procurador, Subprocuradores y Directores Generales de la Procuraduría, en relación con la substanciación de procedimientos administrativos;

II. Promover, a solicitud de las unidades administrativas correspondientes de la Procuraduría, ante las autoridades competentes, la revocación, modificación, suspensión o cancelación de autorizaciones, permisos, licencias, concesiones o la inscripción de los registros, cuando las actividades autorizadas se conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológico o perturben significativamente el proceso ecológico o por violaciones a la normatividad ambiental;

III. Coadyuvar con las unidades administrativas competentes de la Procuraduría, en la formulación de las recomendaciones que procedan a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estatales y municipales, sobre las resoluciones que se emitan para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en las materias competencia de la Procuraduría;

IV. Apoyar a las unidades administrativas competentes de la Procuraduría en la realización de inspecciones;

V. Proponer al Procurador los lineamientos internos de carácter jurídico, que deberán observarse en la realización de inspecciones y auditorías ambientales, así como en la emisión y ejecución de resoluciones y determinación de las sanciones que procedan;

VI. Sustanciar los procedimientos administrativos y, en general, todos los recursos establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos cuya aplicación corresponda a la Procuraduría, recibiendo y desahogando pruebas y alegatos y, en su caso, proponer la resolución que proceda al superior jerárquico;

VII. Sustanciar cuando proceda conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, el procedimiento para la revocación o modificación de sanciones administrativas y proponer al superior jerárquico la resolución correspondiente;

VIII. Sustanciar el procedimiento de conmutación de sanciones previsto en la legislación aplicable y proponer al superior jerárquico la resolución correspondiente;

IX. Llevar el seguimiento de los actos y procedimientos administrativos que realicen las unidades administrativas de la Procuraduría para vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental;

X. Solicitar a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** de los actos competencia de la Procuraduría y expedir la certificación de la documentación que obre en los archivos de ésta;

XI. Determinar los contenidos jurídicos de los programas de capacitación de la Procuraduría y participar en su desarrollo;

XII. Asesorar a las unidades administrativas de la Procuraduría y establecer, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento de la misma, conjuntamente con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría;

XIII. Preparar para firma del Subprocurador Jurídico las opiniones que sobre la legislación ambiental soliciten otras dependencias del Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipios;

XIV. Elaborar, conjuntamente con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, los anteproyectos de disposiciones jurídicas que se realicen dentro de la competencia de la Procuraduría;

XV. Proponer las bases y requisitos legales a que deban ajustarse los acuerdos, convenios, contratos y demás actos competencia de la Procuraduría, así como intervenir en su estudio, formulación, otorgamiento, revocación, rescisión o modificación, y

XVI. Dictaminar los convenios, contratos y demás actos jurídicos que suscriba el Procurador, así como otros convenios y contratos de adquisiciones, servicios y obra pública, de conformidad con la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 87.- La Dirección General de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Orientar y asesorar a la ciudadanía y a los diversos grupos de la sociedad en lo relativo a la protección y defensa del ambiente, en coordinación con la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría;

II. Establecer y operar el sistema de denuncia popular en coordinación con las Subprocuradurías, la Dirección General de Coordinación de Delegaciones y las Delegaciones de la Procuraduría en las entidades federativas;

III. Recibir, atender, investigar y, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes las denuncias en materia ambiental;

IV. Solicitar y recabar información de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de particulares, para el seguimiento y conclusión de las denuncias ambientales;

V. Conciliar los intereses entre particulares y de éstos con las autoridades, en la aplicación de las normas, criterios y programas ambientales;

VI. Solicitar la intervención de las autoridades administrativas competentes para la realización prioritaria de inspecciones, verificaciones y dictámenes para resolver las denuncias ambientales;

VII. Preparar y difundir informes respecto de denuncias ambientales y programas de participación social, competencia de la Procuraduría;

VIII. Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes al procedimiento de denuncia ambiental, y

IX. Expedir la certificación de la documentación que obre en los archivos de la Procuraduría.

ARTÍCULO 88.- Corresponden a la Dirección General de Administración las atribuciones siguientes:

I. Establecer, operar y controlar los sistemas, procedimientos y servicios técnicos, administrativos, presupuestales y contables para el manejo de los recursos humanos, financieros, materiales y de informática que requieran la Procuraduría y sus unidades administrativas, de conformidad con los criterios, lineamientos y normas que se formulen en las unidades administrativas competentes de la Secretaría;

II. Gestionar ante las unidades administrativas competentes de la Secretaría, la autorización, asignación y modificaciones al presupuesto de gasto corriente y de inversión de la Procuraduría;

III. Comunicar las asignaciones presupuestales de gasto corriente y de inversión que les correspondan a las distintas unidades administrativas de la Procuraduría;

IV. Formular los manuales generales de organización y procedimientos administrativos de la Procuraduría y mantenerlos actualizados, atendiendo a los criterios y lineamientos que determine la Oficialía Mayor de la Secretaría;

V. Estudiar y proponer las políticas para atender los requerimientos de personal de las unidades administrativas de la Procuraduría e intervenir, en su caso, en la selección, nombramiento, contratación y reubicación del mismo, así como llevar su registro y control, atendiendo a los lineamientos, normas y requisitos que determine la Oficialía Mayor de la Secretaría;

VI. Tramitar los nombramientos, contrataciones, promociones, transferencias, reubicaciones, comisiones, suspensiones, licencias, permisos y bajas del personal de la Procuraduría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y con las normas, criterios y lineamientos que determine la Oficialía Mayor de la Secretaría;

VII. Formular, en coordinación con la Oficialía Mayor de la Secretaría, el anteproyecto del programa de presupuesto en materia de administración, capacitación y desarrollo de personal de la Procuraduría;

VIII. Intervenir en los estudios relativos a la asignación de sueldos y salarios al personal de la Procuraduría;

IX. Integrar el anteproyecto del programa de presupuesto anual de adquisiciones de la Procuraduría y vigilar su correcta ejecución, de conformidad con los lineamientos que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría y las disposiciones jurídicas aplicables;

X. Administrar los recursos materiales de la Procuraduría, atendiendo a los lineamientos que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría;

XI. Adquirir bienes y suministros para el funcionamiento de la Procuraduría, controlar sus activos y vigilar el óptimo aprovechamiento de sus recursos materiales, con el apoyo de la Oficialía Mayor de la Secretaría;

XII. Efectuar, atendiendo a los lineamientos que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría, las adquisiciones, contratación de servicios y abastecimiento de recursos materiales y suministro de los servicios generales que requiera la Procuraduría, así como gestionar su pago, atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables;

XIII. Registrar, controlar y actualizar los inventarios asignados a la Procuraduría;

XIV. Conservar, mantener y reutilizar los bienes asignados a la Procuraduría;

XV. Proporcionar los servicios generales necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Procuraduría, con base en las normas que establezca la Oficialía Mayor de la Secretaría;

XVI. Apoyar a las delegaciones de la Procuraduría en las entidades federativas, en la operación y actualización de sus registros contables, en el pago de las remuneraciones al personal adscrito a las mismas y en la operación de sus sistemas de control de los bienes de activo fijo y de consumo;

XVII. Integrar y proporcionar la información que soliciten las áreas de Oficialía Mayor y demás dependencias competentes respecto de la aplicación y el aprovechamiento de recursos asignados;

XVIII. Celebrar convenios y contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XIX. Coordinar la ejecución del subprograma de formación administrativa y desarrollo del personal de la Procuraduría, y

XX. Expedir las credenciales para la identificación de los Inspectores Federales adscritos a la Procuraduría.

ARTÍCULO 89.- Corresponden a la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, en el ámbito de competencia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las atribuciones siguientes:

I. Coordinar en los términos que acuerde el Procurador, las acciones operativas de la Procuraduría en las entidades federativas, a través de sus Delegaciones;

II. Apoyar a los funcionarios de las unidades administrativas centrales de la Procuraduría en sus relaciones con las Delegaciones;

III. Fijar criterios y lineamientos con base en las políticas que determine el Procurador, para una adecuada coordinación de las Delegaciones con las representaciones federales en los Estados, así como con las autoridades estatales y municipales y con las organizaciones sociales y privadas;

IV. Programar, concertar y apoyar las giras que el Procurador y otros servidores públicos de la Procuraduría realicen en las entidades federativas;

V. Coadyuvar con la Dirección General de Administración, en la formulación y actualización de los manuales de organización de las Delegaciones;

VI. Apoyar a las Delegaciones ante las unidades administrativas centrales de la Procuraduría, respecto de las solicitudes de nombramientos del personal y suministro de recursos materiales, financieros e informáticos requeridos para el mejor desempeño de sus atribuciones;

VII. Promover y coordinar el programa de desconcentración y simplificación administrativa de los servicios que prestan las Delegaciones;

VIII. Promover el sistema de gestión de calidad en las Delegaciones;

IX. Promover, a través de las Delegaciones, la realización de eventos orientados al estudio, difusión y capacitación para la aplicación de la normatividad ambiental;

X. Proponer al Procurador las modificaciones a la estructura y funcionamiento de las Delegaciones, coordinando su estudio, diseño y aplicación con la Dirección General de Administración;

XI. Coordinarse con la Subprocuraduría Jurídica, para proporcionar a las Delegaciones la información sobre modificaciones o adiciones a la normatividad aplicable;

XII. Apoyar en la integración de los programas de trabajo de las Delegaciones;

XIII. Proponer y participar en el diseño, instrumentación y seguimiento de normas, programas y disposiciones de observancia general de carácter interno que corresponda ejecutar a las Delegaciones en el ámbito de su competencia, en coordinación con la Subprocuraduría Jurídica;

XIV. Operar un sistema permanente de diagnóstico funcional de y en apoyo de las Delegaciones de la Procuraduría;

XV. Recabar y difundir hacia el interior de la Procuraduría información respecto de la operación y desempeño de las Delegaciones;

XVI. Practicar periódicamente visitas de supervisión a las Delegaciones para evaluar su funcionamiento y operación;

XVII. Realizar el diagnóstico de cada una de las Delegaciones, derivado del análisis de la información recabada, proponiendo al Procurador las acciones estratégicas para el mejor desempeño de sus funciones, y

XVIII. Coordinarse con las unidades administrativas centrales competentes para la realización de acciones de inspección y vigilancia competencia de la Procuraduría, en las entidades federativas.

ARTÍCULO 90.- La Unidad de Comunicación Social, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Elaborar, proponer, ejecutar, dirigir y evaluar las actividades de información, difusión y relaciones públicas de la Procuraduría a través de los medios de comunicación nacionales y extranjeros;

II. Evaluar y aprobar el diseño de las campañas de difusión de la Procuraduría, intervenir en la contratación y supervisión de los medios de comunicación que se requieran para su realización, así como ordenar la elaboración de los elementos técnicos necesarios;

III. Organizar y supervisar entrevistas y conferencias con la prensa nacional e internacional, relacionadas con asuntos de la competencia de la Procuraduría, así como emitir boletines de prensa;

IV. Editar y distribuir a los medios de comunicación los libros, revistas y folletos que se elaboren en las diversas unidades administrativas de la Procuraduría;

V. Establecer enlace con las delegaciones de la Procuraduría con el propósito de unificar criterios en cuanto a información y difusión, y

VI. Brindar al público en general el servicio de consulta biblio-hemerográfica y de catálogo por vía Internet.

Las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas bajo la coordinación y de conformidad con los lineamientos de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría.

ARTÍCULO 91.- Al frente de cada una de las Delegaciones de la Procuraduría habrá un Delegado, quien será designado por el Procurador y estará auxiliado por los Subdelegados, Subdirectores, Jefes de Departamento, inspectores federales y demás personal necesario para el desempeño de sus atribuciones, que autorice el presupuesto respectivo.

Los Delegados de la Procuraduría tendrán la representación para desempeñar las actividades derivadas de la competencia de la Procuraduría en su respectiva circunscripción.

Corresponden a los Delegados de la Procuraduría, en el ámbito de las atribuciones de la Procuraduría, las facultades establecidas en el artículo 17 de este Reglamento.

ARTÍCULO 92.- Corresponden a las delegaciones de la Procuraduría, las siguientes atribuciones en el ámbito de su circunscripción territorial, sin perjuicio de su ejercicio por las unidades administrativas centrales de la Procuraduría:

I. Elaborar diagnósticos relativos a la problemática local en las materias competencia de la Procuraduría;

II. Proporcionar a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, que lo soliciten, asesoría y apoyo técnico en las materias competencia de la Procuraduría;

III. Asesorar y apoyar a personas físicas y morales y grupos sociales, a efecto de promover su participación en la ejecución de los programas que desarrolle la Procuraduría en el Estado respectivo y en el Distrito Federal;

IV. Recibir, atender, investigar y, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes, las quejas y denuncias de la ciudadanía y de los representantes de los sectores público, social y privado, en las materias competencia de la Procuraduría;

V. Solicitar ante las autoridades competentes, la revocación, modificación, suspensión, o cancelación de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones cuando las actividades

autorizadas se conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológico, lo perturben significativamente, o contravengan las disposiciones jurídicas aplicables;

VI. Actuar como conciliador en los casos de conflicto de intereses entre particulares y entre éstos con las autoridades, en asuntos de la competencia de la Procuraduría;

VII. Coordinar y realizar en su caso, por sí misma o a través de terceros, las auditorías o peritajes necesarios para prevenir emergencias y contingencias derivadas de las actividades que constituyan un riesgo al ambiente, así como dar seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas resultantes de la auditoría ambiental;

VIII. Programar, ordenar y realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las normas jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, los recursos naturales, los bosques, la vida silvestre, los quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, el uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, áreas naturales protegidas, así como el impacto ambiental y el ordenamiento ecológico de competencia federal y establecer mecanismos, instancias y procedimientos administrativos que procuren el logro de tales fines;

IX. Substanciar y resolver el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, proveyendo conforme a derecho;

X. Determinar, de conformidad con los lineamientos que establezca el Procurador, las infracciones a la legislación en las materias competencia de la Procuraduría;

XI. Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes al procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, imponiendo las sanciones y medidas técnicas que procedan, de conformidad con los lineamientos que al efecto emita el Procurador;

XII. Ordenar las medidas de seguridad que procedan, cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o la salud pública, así como las medidas de urgente aplicación, señalando los plazos para su cumplimiento;

XIII. Efectuar las inspecciones procedentes para verificar los hechos materia de las denuncias, relacionadas con los asuntos competencia de la Procuraduría;

XIV. Formular de conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección General de Delitos Ambientales Federales y Litigio, e informando previamente a ésta, las denuncias o querellas ante el Ministerio Público por hechos u omisiones delictuosas en los que la Procuraduría resulte afectada, o aquéllos que afecten al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre, los recursos genéticos, las cuencas o los ecosistemas; así como solicitar la coadyuvancia al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional en el procedimiento penal;

XV. Coadyuvar en el procedimiento penal proporcionando, todos los datos o elementos de prueba con que cuente, que conduzcan a acreditar los elementos del cuerpo del delito y a establecer la probable o plena responsabilidad del inculpado, según el caso, y la procedencia y monto de la reparación del daño;

XVI. Ejercitar, de conformidad con los lineamientos emitidos por la Dirección General de Delitos Ambientales Federales y Litigio, e informando previamente a ésta, las acciones necesarias ante los órganos judiciales correspondientes, a efecto de obtener la reparación de los daños o deterioro ambientales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XVII. Proponer a la Subprocuraduría competente, para aprobación del Procurador, el destino de los bienes decomisados, conforme a la normatividad aplicable;

XVIII. Coadyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales en el control de la aplicación de la legislación ambiental, en los términos de los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren;

XIX. Promover ante las autoridades competentes, la adopción de medidas preventivas o correctivas que resulten procedentes para preservar el ambiente, con base en los resultados de las inspecciones que se realicen; cuando por la naturaleza del asunto sea necesario elevarlo a rango de recomendación, propondrá al Procurador el ejercicio de esta función;

XX. Suscribir convenios y contratos en materia de prestación de servicios, prestación de servicios profesionales, capacitación y arrendamiento, de conformidad con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, y aquéllos que no impliquen la utilización, erogación o recepción de recursos financieros o materiales, de acuerdo con la legislación aplicable y los lineamientos que al respecto determinen la Subprocuraduría Jurídica y la Dirección General de Administración;

XXI. Acordar, cuando sea procedente, la admisión de los recursos de revisión que se interpongan en contra de los actos que emita, así como otorgar o denegar la suspensión del acto

recurrido, turnándolo en su caso a la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta para la formulación de la resolución que corresponde emitir al superior jerárquico;

XXII. Solicitar, en su caso, ante las autoridades competentes, la revocación o suspensión de autorizaciones, permisos, asignaciones, licencias o concesiones conforme a la legislación aplicable en la materia;

XXIII. Suscribir los convenios que den por terminado los procedimientos administrativos que tengan por objeto satisfacer el interés público, siempre y cuando no sean contrarios a las leyes aplicables ni versen sobre materias que no sean susceptibles de transacción, dando aviso de manera inmediata a la Dirección General de Procedimientos Administrativos y Consulta;

XXIV. Recibir los avisos de inventarios de existencias de especies pesqueras en veda;

XXV. Resolver las solicitudes de certificación de la legal procedencia para el traslado de mamíferos y quelonios marinos, de las especies en riesgo y las declaradas en veda, dando aviso según corresponda, a la Dirección de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre o a la de Recursos Pesqueros y Marinos, y

XXVI. Verificar el cumplimiento de las restricciones no arancelarias en las materias competencia de la Secretaría, en los puntos de entrada y salida del territorio nacional y emitir el registro de verificación para comprobar el cumplimiento de las mismas.

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

ARTÍCULO 93.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas estará a cargo de un Presidente, tendrá las atribuciones que en materia de áreas naturales protegidas se establecen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en la materia, así como en este Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, tendrá a su cargo la formulación y ejecución de los proyectos y programas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a las zonas de alta marginación situadas en las regiones en que se ubiquen dichas áreas naturales protegidas.

ARTÍCULO 94.- Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas contará con las siguientes unidades administrativas:

I. Presidente;
II. Dirección General de Desarrollo y Promoción;
III. Dirección General de Manejo para la Conservación de Áreas Naturales Protegidas;
IV. Dirección Jurídica;
V. Dirección de Administración y Efectividad Institucional;
VI. Dirección de Evaluación y Seguimiento, y
VII. Direcciones de Áreas Naturales Protegidas.

ARTÍCULO 95.- El Presidente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tendrá las facultades siguientes:

I. Dirigir la política administrativa de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación y promover la participación de los sectores público, social y privado en su administración;

II. Designar y remover a los directores de las áreas naturales protegidas, de conformidad con los lineamientos establecidos para su elección, así como coordinar, dirigir y evaluar a éstos en las acciones de administración de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación;

III. Expedir el certificado de los predios que se destinen voluntariamente a acciones de conservación y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad;

IV. Otorgar, revocar y declarar la extinción de las licencias, permisos, autorizaciones y demás actos necesarios en materia de áreas naturales protegidas competencia de la Federación;

V. Otorgar, revocar y declarar la extinción de las concesiones relativas a inmuebles federales cuya administración le competa a la Comisión, tales como estaciones de campo y centros de información;

VI. Aprobar los proyectos de programas y de presupuestos relativos a la Comisión a su cargo, conforme a las normas establecidas por la Oficialía Mayor, así como ejercer el presupuesto autorizado o asignado;

VII. Promover y gestionar el establecimiento de áreas naturales protegidas competencia de la Federación, y

VIII. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

ARTÍCULO 96.- La Dirección General de Desarrollo y Promoción tendrá las atribuciones siguientes:

I. Planear y coordinar la ejecución de las políticas y programas en materia de establecimiento, preservación, conservación, restauración, uso sustentable y financiamiento de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación y sus zonas de influencia, con la participación de los sectores público, social y privado;

II. Coordinar la elaboración de los estudios técnicos justificativos, por sí o a través de terceros, para el establecimiento de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, así como los proyectos de las declaratorias correspondientes;

III. Promover y fomentar mecanismos e instrumentos de financiamiento para el establecimiento, administración, manejo y conservación de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación;

IV. Participar en las acciones de cooperación internacional y dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de áreas naturales protegidas competencia de la Federación, conforme a los lineamientos de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales;

V. Aplicar la política de comunicación social en materia de áreas naturales protegidas competencia de la Federación, así como coordinar y ejecutar el programa editorial de la Comisión, mediante el diseño, producción y distribución de libros, folletos y demás material documental en la materia, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emitan las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría;

VI. Coordinar la difusión de programas y proyectos en materia de educación y capacitación para la conservación de las áreas naturales protegidas a nivel nacional e internacional;

VII. Coordinar las acciones administrativas tendientes a desconcentrar y descentralizar las funciones de la Comisión, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Gestionar, en su caso, la expropiación y adquisición por la vía del derecho privado, de inmuebles para el establecimiento de áreas naturales protegidas competencia de la Federación, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IX. Asesorar a las entidades federativas y municipios que lo requieran, en el establecimiento de áreas naturales protegidas de competencia local;

X. Coordinar las acciones de concertación que lleven a cabo los directores de las áreas naturales protegidas con los afectados por el establecimiento de áreas naturales protegidas competencia de la Federación, y

XI. Coordinar los estudios y proyectos de obra pública necesarios para el manejo de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, así como construir, vigilar, administrar, operar, conservar y rehabilitar las obras correspondientes.

ARTÍCULO 97.- La Dirección General de Manejo para la Conservación de Áreas Naturales Protegidas tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar el manejo y la administración de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como proveer lo necesario para lograr su conservación;

II. Dirigir y supervisar los programas y proyectos de la Comisión en materia de uso, aprovechamiento sustentable, restauración, preservación, conservación y saneamiento, así como los proyectos productivos de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación;

III. Proponer, con soporte en el dictamen técnico emitido por el director del área natural protegida de que se trate, el otorgamiento, modificación, suspensión, revocación o la caducidad, en los términos de legislación aplicable, de las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones en materia de áreas naturales protegidas competencia de la Federación;

IV. Emitir previamente a las autorizaciones de impacto ambiental en áreas naturales protegidas, los dictámenes técnicos y opiniones que correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Coordinar la elaboración y modificación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología, de conformidad con la legislación aplicable;

VI. Emitir opinión respecto a los aprovechamientos, servicios y obras que se pretendan autorizar, por parte de las autoridades competentes, en las áreas naturales protegidas competencia de la Federación;

VII. Promover, formular y ejecutar el desarrollo de proyectos y programas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, aplicables a las zonas de alta marginación situadas en las regiones en que se ubiquen las áreas naturales protegidas

competencia de la Federación recibiendo, en lo conducente la opinión de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial;

VIII. Administrar, cuando se le asignen, los terrenos propiedad de la Federación, que se encuentren en las áreas naturales protegidas;

IX. Participar en la elaboración de los ordenamientos ecológicos generales, regionales, locales y marinos en donde se ubiquen las áreas naturales protegidas de interés de la Federación, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría;

X. Integrar y mantener actualizado un sistema de información geográfica en materia de áreas naturales protegidas;

XI. Dirigir la elaboración de los estudios de riesgo ambiental y la ejecución del programa para la atención de contingencias ambientales en áreas naturales protegidas competencia de la Federación, en coordinación con las autoridades competentes;

XII. Promover y coordinar la instalación y el funcionamiento de los consejos asesores de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación;

XIII. Concertar y coordinar las acciones que correspondan, con los afectados y las autoridades competentes, respecto de la reubicación o indemnización por la afectación de bienes inmuebles o bienes distintos a la tierra, ubicados en áreas naturales protegidas competencia de la Federación, y

XIV. Auxiliar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en la verificación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, así como coadyuvar con la misma en sus acciones de inspección y vigilancia en la materia.

ARTÍCULO 98.- La Dirección Jurídica tendrá las atribuciones siguientes:

I. Representar legalmente al Titular y a las unidades administrativas de la Comisión, en los procedimientos judiciales y administrativos en que se requiera su intervención;

II. Atender y dirigir los asuntos jurídicos de la Comisión, de conformidad con los lineamientos internos que al efecto dicte la Secretaría, a través de su Coordinación General Jurídica;

III. Revisar, en el aspecto jurídico, el otorgamiento de las asignaciones, concesiones, permisos y demás autorizaciones en materia de áreas naturales protegidas, previstas en las disposiciones jurídicas aplicables, así como respecto de su suspensión, clausura, revocación, nulidad, caducidad, modificación y terminación;

IV. Instruir los recursos que se interpongan en contra de actos o resoluciones de las unidades administrativas de la Comisión y someterlos a consideración del superior jerárquico que les corresponda, así como proponer a éste los proyectos de resolución a dichos recursos y resolver los recursos administrativos de su competencia y, notificar de los mismos a los interesados;

V. Representar, defender, contestar, rendir informes, demandar, denunciar, querellarse, allanarse, desistirse, desahogar pruebas, interponer recursos, articular y absolver posiciones, otorgar perdón, certificar y realizar los trámites necesarios para defender los intereses de la Comisión, en todo tipo de procedimientos judiciales y administrativos, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal y los que se requieran para el cumplimiento y la aplicación de la ley;

VI. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir los servidores públicos de la Comisión señalados como autoridades responsables, asimismo los escritos de demanda o contestación según proceda en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; intervenir cuando la Comisión tenga carácter de quejosa o intervenga como tercero perjudicado en los juicios de amparo, así como formular, en general, todas las promociones que a dichos juicios se refieran;

VII. Asesorar a las unidades administrativas de la Comisión, en la formulación de documentos e instrumentos jurídicos relacionados con sus ámbitos de competencia;

VIII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en el archivo de la Comisión, cuando deban ser exhibidos en procedimientos judiciales, contenciosos, administrativos y en general para cualquier proceso, procedimiento o averiguación;

IX. Tramitar la inscripción de las declaratorias de las áreas naturales protegidas en los registros públicos correspondientes, así como integrar y actualizar el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas;

X. Integrar el registro de los convenios y contratos en los cuales intervenga la Comisión, una vez formalizados;

XI. Revisar los proyectos de las declaratorias para el establecimiento de áreas naturales protegidas de interés de la Federación;

XII. Revisar los proyectos de convenios de concertación que se vayan a celebrar con grupos sociales y particulares interesados, en materia de áreas naturales protegidas competencia de la Federación;

XIII. Revisar las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollen dentro de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, y

XIV. Revisar previamente los acuerdos que se celebren con los gobiernos de los estados y municipios interesados, para la descentralización de la administración de las áreas naturales protegidas competencia de la Federación.

ARTÍCULO 99.- La Dirección de Administración y Efectividad Institucional tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer y aplicar los sistemas, procedimientos y servicios técnicos, administrativos, presupuestales y contables para el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales que requiera la Comisión, de conformidad con los criterios, lineamientos y normas que formulen las unidades administrativas competentes de la Secretaría;

II. Formular, en coordinación con la Oficialía Mayor de la Secretaría, el anteproyecto de programación-presupuesto en materia de administración, capacitación y desarrollo de personal, y el de adquisiciones y suministro de la Comisión, así como vigilar su correcta ejecución;

III. Gestionar ante las unidades administrativas competentes de la Secretaría la autorización, asignación y modificación al presupuesto de gasto corriente y de inversión de la Comisión;

IV. Notificar a las unidades administrativas de la Comisión las asignaciones presupuestales de gasto corriente y de inversión que le corresponden y evaluar su correcta ejecución;

V. Coordinar la formulación de los manuales de organización y de procedimientos de las unidades administrativas de la Comisión, de conformidad con los criterios y lineamientos establecidos por la Oficialía Mayor de la Secretaría;

VI. Establecer las políticas, las normas y los lineamientos en materia de reclutamiento, selección, inducción, nombramientos, contratación, prestaciones, remuneraciones, servicios, capacitación, desarrollo y movimientos del personal de las unidades administrativas de la Comisión, de acuerdo a las disposiciones y criterios establecidos por la Oficialía Mayor de la Secretaría;

VII. Establecer lineamientos para el pago de las remuneraciones al personal de la Comisión y aplicar descuentos y retenciones autorizadas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Promover y coordinar programas internos de bienestar social, así como fomentar la participación de los trabajadores y sus familias en actividades culturales, deportivas y recreativas;

IX. Proponer la desconcentración de los recursos financieros y materiales de la Comisión a las direcciones de las áreas naturales protegidas;

X. Coordinar la ejecución e instrumentación del programa de protección civil de la Comisión, de conformidad con los criterios y lineamientos que determinen las unidades administrativas centrales de la Secretaría y demás autoridades competentes;

XI. Proponer y aplicar políticas para la administración de recursos materiales y la prestación de servicios generales de la Comisión, de conformidad con los lineamientos que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría;

XII. Integrar y ejecutar el programa anual de la Comisión, en materia de adquisiciones, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, así como las políticas y lineamientos que emita la Oficialía Mayor de la Secretaría;

XIII. Intervenir en la suscripción de los contratos y convenios relativos a la adquisición de bienes y servicios de la Comisión;

XIV. Aplicar y supervisar los sistemas de control de inventarios generales de bienes y dictaminar y vigilar su afectación, baja y destino final;

XV. Administrar, controlar y evaluar la ejecución de los recursos provenientes de créditos y aportaciones de origen externo para financiar el desarrollo de programas de la Comisión y efectuar las gestiones para su reembolso;

XVI. Suministrar los bienes y servicios que requieran las unidades administrativas de la Comisión para el ejercicio de sus atribuciones, y

XVII. Establecer los criterios de medición de desempeño del personal de la Comisión, en coordinación con la Dirección de Evaluación y Seguimiento, así como establecer programas de profesionalización y mejora continua del mismo.

ARTÍCULO 100.- La Dirección de Evaluación y Seguimiento tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer sistemas, indicadores y procedimientos para medir los impactos de las acciones de conservación y sus avances en las áreas naturales protegidas competencia de la Federación, en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y otras autoridades competentes;

II. Planear y coordinar la incorporación de medidas e indicadores de desempeño en los programas de manejo de las áreas naturales protegidas, con la participación de los directores de las mismas, para evaluar su impacto en la conservación;

III. Evaluar y dar seguimiento a las acciones de conservación en las áreas naturales protegidas competencia de la Federación;

IV. Promover y gestionar la capacitación del personal de la Comisión en materia de desarrollo de medidas e indicadores de desempeño e impacto de las acciones de conservación de las áreas naturales protegidas;

V. Participar en la revisión y emitir opinión sobre los reportes y evaluaciones de las acciones de conservación que realice la Comisión, y

VI. Integrar y actualizar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

ARTÍCULO 101.- Las Direcciones de las Áreas Naturales Protegidas se establecerán en la circunscripción territorial que determine la declaratoria respectiva y tendrán las atribuciones siguientes:

I. Administrar, manejar y ejecutar las acciones para preservar los ecosistemas y sus elementos del área natural protegida correspondiente, conforme a los objetivos y lineamientos establecidos en el programa de manejo y el decreto del área respectiva;

II. Supervisar que las acciones que se realicen dentro del área natural protegida se ajusten a los propósitos de los ordenamientos legales aplicables en materia de protección y conservación de los recursos naturales;

III. Coordinar la formulación, ejecución, evaluación y, en su caso, modificación del programa de manejo correspondiente, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables;

IV. Intervenir en las acciones de deslinde y registro de los terrenos nacionales ubicados dentro del área natural protegida, así como administrarlos y vigilar que los inmuebles ubicados en las mismas se destinen a los usos que resulten compatibles con sus objetivos;

V. Promover la celebración de los instrumentos legales aplicables con los sectores público, social y privado, para ejercer acciones de administración, conservación, mejoramiento e investigación de los ecosistemas del área natural protegida de que se trate;

VI. Conformar el sistema de información con los datos biológicos, sociales, económicos y cartográficos del área natural protegida correspondiente;

VII. Ejercer, dentro del ámbito territorial que les corresponda, las facultades que expresamente se les deleguen, conforme a los lineamientos internos de carácter técnico y administrativo, sistemas y procedimientos que señale el Titular de la Comisión;

VIII. Auxiliar a las autoridades competentes en las acciones de inspección y vigilancia del área natural protegida;

IX. Promover los programas y proyectos para el desarrollo sustentable del área natural protegida correspondiente;

X. Fungir como Secretario Técnico del Consejo Asesor del área natural protegida de que se trate, así como dar seguimiento a las actividades que se deriven de los acuerdos del mismo;

XI. Emitir dictámenes técnicos de soporte, ante la Dirección General de Manejo para la Conservación de Áreas Naturales Protegidas, para el otorgamiento, modificación, extinción, revocación o anulación de concesiones, permisos o autorizaciones en materia de investigación, uso y aprovechamiento de recursos naturales, evaluación de impacto ambiental, prestación de servicios y ejecución de obras que se realicen en el área natural protegida, así como para el ordenamiento ecológico correspondiente;

XII. Establecer y ejecutar el programa interno de protección civil del área natural protegida correspondiente;

XIII. Intervenir en la elaboración de los ordenamientos ecológicos en que esté involucrada el área natural protegida de que se trate;

XIV. Proponer y capacitar al personal técnico encargado de la realización de los trabajos que se deriven del programa de manejo de la correspondiente área natural protegida;

XV. Supervisar las obras, estudios y servicios relacionados con el área natural protegida de que se trate, previa autorización de las unidades administrativas competentes de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XVI. Integrar y establecer, conforme a los lineamientos aplicables en la materia, los proyectos de conservación y mantenimiento de los inmuebles a su cargo;

XVII. Recibir las solicitudes e integrar los expedientes para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, así como entregar las resoluciones emanadas de las Subdirecciones Generales competentes de la Comisión, y

XVIII. Llevar el registro de los pagos realizados por los usuarios con motivo de sus obligaciones derivadas del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de áreas naturales protegidas competencia de la Federación.

ARTÍCULO 102.- Los Directores Generales de la Comisión podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, revisar, confirmar, modificar, revocar y nulificar, en su caso, las resoluciones que dicten los Directores de las Áreas Naturales Protegidas en el ejercicio de sus facultades, así como resolver los recursos administrativos que se interpongan contra dichas resoluciones.

Iguales facultades y para los mismos fines tendrá el Presidente de la Comisión, con respecto a las resoluciones que emitan los Directores Generales de la propia Comisión.

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA

ARTÍCULO 103.- Durante las ausencias del Secretario, el despacho y resolución de los asuntos correspondientes a la Dependencia estarán a cargo de los Subsecretarios de Planeación y Política Ambiental, de Fomento y Normatividad Ambiental y de Gestión para la Protección Ambiental, en el orden mencionado y, en ausencia de éstos, del Oficial Mayor. En los juicios de amparo en que deba intervenir el Secretario en representación del Presidente de la República o como Titular de la Dependencia, así como en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, será suplido indistintamente por los servidores públicos antes señalados y en el orden indicado o por el Titular de la Coordinación General Jurídica.

ARTÍCULO 104.- En las ausencias de los Subsecretarios y del Oficial Mayor, éstos serán suplidos, para el despacho de los asuntos de su competencia, por el Titular de la Unidad Coordinadora o por el Director General adscrito al área de su responsabilidad que al efecto sea designado por el Titular de la Dependencia o por el Servidor Público que vaya a ausentarse.

Las ausencias de los titulares de los órganos desconcentrados y de las unidades administrativas que los integran, serán suplidas por los servidores públicos del nivel jerárquico inmediato inferior que de ellos dependa en los asuntos de su respectiva competencia.

ARTÍCULO 105.- Durante las ausencias de los titulares de las unidades de coordinación, jefes de unidad, directores generales, subdirectores generales, gerentes nacionales, gerentes regionales, gerentes estatales, directores generales adjuntos, delegados, coordinadores de proyectos especiales, directores ejecutivos, subgerentes, directores de área, subdirectores, subdelegados, jefes de proyecto y jefes de departamento, éstos serán sustituidos por los servidores públicos de la jerarquía inmediata inferior que designen los correspondientes titulares de las unidades administrativas antes mencionadas.

ARTÍCULO 106.- Las ausencias de los Contralores Internos así como las de los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas señalados en este Reglamento, serán suplidas conforme a lo previsto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 5 de junio de 2000.

TERCERO.- El personal, los recursos, los expedientes en trámite, el archivo, el mobiliario y, en general, el equipo que las unidades administrativas a que se refiere el Reglamento Interior que se abroga, hubieren utilizado en el ejercicio de sus atribuciones, deberán trasladarse a las unidades administrativas que se crean en este Reglamento, distribuyéndose, en su caso, de conformidad con las atribuciones que a cada una de ellas corresponden y de acuerdo con los criterios que establezca la Oficialía Mayor.

CUARTO.- Los asuntos pendientes de resolución al entrar en vigor este Reglamento, que conforme al mismo deban pasar de una unidad administrativa a otra u otras, continuarán su trámite y serán resueltos por aquella o aquellas unidades administrativas a las que se les atribuya la competencia en el presente Reglamento Interior.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, **Víctor Lichtinger Waisman**.- Rúbrica.

TERCERA SECCION

SECRETARIA DE ENERGIA

REGLAMENTO Interior de la Secretaría de Energía.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 17, 18 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA

CAPÍTULO PRIMERO

De la Competencia y Estructura Orgánica

Artículo 1.- La Secretaría de Energía, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le encomiendan las leyes, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaría, para el ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus obligaciones como coordinadora de sector, realiza la intervención que proceda y sujeta sus relaciones con las entidades paraestatales agrupadas, conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1o., 8o. y 9o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 2.- La Secretaría de Energía, a través de sus unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades conforme a los objetivos, estrategias y programas establecidos en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, con base en las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades del desarrollo nacional determine el Ejecutivo Federal.

La Secretaría proveerá lo conducente para asegurar que el órgano de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas bajo su sector, ejerza con autonomía de gestión sus atribuciones de administración y conducción con base en la Planeación Nacional de Desarrollo y en las políticas, lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo Federal.

Artículo 3.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría de Energía cuenta con los servidores públicos y las unidades administrativas siguientes:

I.- Secretario del Despacho
- **a)** Dirección General de Asuntos Jurídicos;
- **b)** Dirección General de Asuntos Internacionales, y
- **c)** Unidad de Comunicación Social.

II.- Subsecretario de Electricidad
- **a)** Dirección General de Operación Financiera del Subsector Electricidad;
- **b)** Dirección General de Operaciones Productivas del Subsector Electricidad, y
- **c)** Dirección General de Instalaciones Eléctricas y Recursos Nucleares.

III.- Subsecretario de Hidrocarburos
- **a)** Dirección General de Operación Financiera del Subsector Hidrocarburos;
- **b)** Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos;
- **c)** Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos;
- **d)** Dirección General de Gas L.P., y
- **e)** Dirección General de Seguridad y Protección al Ambiente.

IV.- Subsecretario de Política Energética y Desarrollo Tecnológico
- **a)** Dirección General de Formulación de Política Energética, y
- **b)** Dirección General de Investigación y Desarrollo de Tecnología y Medio Ambiente.

V.- Oficial Mayor
- **a)** Dirección General de Recursos Humanos;
- **b)** Dirección General de Programación y Presupuesto;
- **c)** Dirección General de Recursos y Servicios Generales, y
- **d)** Unidad de Informática y Telecomunicaciones.

VI.- Órganos Administrativos Desconcentrados
- **a)** Comisión Reguladora de Energía;
- **b)** Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, y

c) Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.

Asimismo, la Secretaría cuenta con un Órgano Interno de Control que se regirá conforme a lo dispuesto por el Capítulo Duodécimo de este Reglamento.

Además, la Secretaría contará con las unidades subalternas que figuren en su presupuesto autorizado, cuya adscripción y funciones deberán especificarse y regularse en el Manual de Organización General de la propia Dependencia.

Artículo 4.- El Secretario y los miembros representantes de la Dependencia en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas, tienen la obligación de pronunciarse en las sesiones que celebren éstos o sus comités constituidos, sobre los asuntos de la entidad relacionados con la esfera de competencia de la Secretaría de Energía.

La representación a que alude este artículo tiene por objeto participar en la dirección y administración encomendada a dichos órganos de gobierno; apoyar y promover el mejoramiento y gestión de las entidades, y hacer posible que las mismas cumplan su cometido con la autosuficiencia y autonomía necesarias para el manejo eficiente, eficaz y productivo de sus operaciones.

La representación de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas recaerá en el Secretario o en los servidores públicos designados para tal efecto, los cuales no podrán tener nivel inferior a director de área o su equivalente tratándose de propietarios, y subdirector de área o su equivalente tratándose de suplentes, salvo lo que dispongan las leyes orgánicas de las entidades de que se trate.

Artículo 5.- Para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1o. de este Reglamento, las entidades paraestatales coordinadas se agruparán en los subsectores siguientes:

I.- Subsector Electricidad:

- **a)** Comisión Federal de Electricidad, y
- **b)** Luz y Fuerza del Centro.

II.- Subsector Hidrocarburos:

- **a)** Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios Pemex-Exploración y Producción, Pemex-Refinación, Pemex-Gas y Petroquímica Básica y Pemex-Petroquímica, así como empresas filiales.

III.- Subsector Tecnología Energética:

- **a)** Instituto Nacional de Investigaciones Eléctricas;
- **b)** Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y
- **c)** Instituto Mexicano del Petróleo.

Artículo 6.- Para la atención de los asuntos en que deban intervenir la Secretaría y sus entidades paraestatales sectorizadas y a fin de asegurar su participación ordenada, sin menoscabo a la autonomía de gestión de dichas entidades y con propósitos de congruencia sectorial, la Secretaría podrá integrar los comités siguientes:

I.- Comité de Planeación y Programación Sectorial, con objeto de acordar los lineamientos de coordinación para integrar y actualizar la aportación al Plan Nacional de Desarrollo; formular, conocer su ejecución y, en su caso, revisar el programa del sector de la energía; asegurar la congruencia de los programas institucionales y especiales con las políticas sectoriales y los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, y validar la documentación para integrar los informes del sector;

II.- Comité de Desarrollo y Tecnología, con objeto de coordinar la integración y, en su caso, actualización de una política de investigación y desarrollo tecnológico del sector;

III.- Comité Técnico Sectorial de Estadística y de Información Geográfica, con objeto de contribuir a la elaboración y ejecución de los programas nacional, sectorial y regionales de desarrollo de estadística y de información geográfica, y

IV.- Comité de Mejora Regulatoria, con objeto de coordinar la participación en la preparación del programa del sector referente a los anteproyectos de iniciativas de leyes y proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y otras disposiciones administrativas de alcance general, y asegurar la congruencia de los mismos con el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial y, en su caso, los Programas Institucionales, y el Programa de Mejora Regulatoria.

CAPÍTULO SEGUNDO

De las Atribuciones del Secretario

Artículo 7.- Corresponde originalmente al Secretario la representación de la Secretaría de Energía, el trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la misma. El Secretario, para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá conferir sus facultades delegables a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos relativos que deberán ser publicados en el **Diario Oficial de la Federación**, y autorizar por escrito a servidores públicos subalternos

para que realicen actos y suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus facultades delegables.

Artículo 8.- El Secretario tiene las atribuciones no delegables siguientes:

I.- Desarrollar, dirigir y controlar la conducción de la política energética del país, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, ordenar el control y verificación del cumplimiento de las políticas que se fijen por el Presidente de la República y realizar su evaluación;

II.- Dictar las políticas de importación y exportación en materia de energéticos así como de combustibles nucleares, con la participación que corresponda a otras dependencias;

III.- Celebrar convenios de todo tipo en el ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones y legislación aplicable;

IV.- Dirigir y aprobar el desarrollo de las actividades y eventos institucionales que corresponda instrumentar a la Secretaría, en sus relaciones con el Congreso de la Unión y sus integrantes, recibir las solicitudes de información y gestión sobre asuntos específicos que presenten y proveer lo conducente para asegurar una relación y comunicación permanente y oportuna, de conformidad con los lineamientos que emita la dependencia competente;

V.- Acordar con el Presidente de la República, los asuntos encomendados a la Secretaría y al sector correspondiente;

VI.- Desempeñar las comisiones y funciones que le confiera el Presidente de la República y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas;

VII.- Proponer al Ejecutivo Federal los anteproyectos de iniciativas de leyes y de reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas, sobre los asuntos de competencia de la Secretaría y del sector correspondiente;

VIII.- Proporcionar la información necesaria sobre el estado que guarda su ramo y el sector coordinado, para la integración del informe por escrito que presenta el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en la apertura de sesiones ordinarias de cada año;

IX.- Proporcionar la información necesaria sobre las acciones y resultados del Plan Nacional de Desarrollo y del programa sectorial, para la integración del informe que remite el Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el mes de marzo de cada año;

X.- Proponer la creación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal que corresponda coordinar a la Secretaría, así como emitir opinión sobre la transformación, fusión, escisión, enajenación, disolución, extinción y liquidación, según corresponda, de las entidades paraestatales coordinadas;

XI.- Someter a la consideración y aprobación del Presidente de la República, el programa sectorial y los demás programas y proyectos a cargo de la Secretaría que determine, conforme a la planeación nacional del desarrollo;

XII.- Refrendar para su validez y observancia constitucionales los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes Presidenciales, que correspondan;

XIII.- Representar al Presidente de la República en los juicios constitucionales, en los términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria, en los casos en que lo determine el titular del Poder Ejecutivo Federal y en los términos de este Reglamento;

XIV.- Dar cuenta al Congreso de la Unión, luego de que inicie el periodo ordinario de sesiones, del estado que guarda su ramo y sobre el avance y grado de cumplimiento de objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional y del resultado de las acciones previstas; así como informar, cuando le sea requerido por cualquiera de las Cámaras que lo integran, en los casos en que se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a su ramo o actividades;

XV.- Intervenir en el nombramiento y la remoción de los servidores públicos de la Dependencia, así como de los representantes en comisiones, entidades federativas y organismos nacionales e internacionales en que participe;

XVI.- Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría, así como de los comités necesarios, y adscribir orgánicamente las unidades administrativas de asesoría y de apoyo técnico de la misma, y expedir el Manual de Organización General de la Secretaría y los

demás manuales de organización, de procedimientos administrativos y de servicios al público;

XVII.- Aprobar el programa y el anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Secretaría, así como, en su caso, las modificaciones respectivas para su presentación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XVIII.- Presidir los órganos de gobierno, cuando así lo determinen las disposiciones jurídicas aplicables, y designar, cuando así proceda, a la persona que presida a los mismos;

XIX.- Comunicar, cuando proceda, al órgano de gobierno la indicación recibida del Presidente de la República, para que proceda a la designación del director general del organismo descentralizado y de la empresa de participación estatal mayoritaria correspondiente, y

XX.- Las demás que, con tal carácter, le facultan expresamente las disposiciones jurídicas aplicables o el Presidente de la República.

CAPÍTULO TERCERO

De las Atribuciones de los Miembros Representantes de la Secretaría en los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales Coordinadas

Artículo 9.- Los miembros representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas tendrán las atribuciones y obligaciones que les otorgan las disposiciones jurídicas aplicables, el Presidente de la República y el Secretario. El Secretario, en su calidad de coordinador sectorial, podrá establecer mediante acuerdo las obligaciones y funciones específicas de dichos servidores públicos.

CAPÍTULO CUARTO

De las Atribuciones Genéricas de los Subsecretarios y el Oficial Mayor

Artículo 10.- Los Subsecretarios y el Oficial Mayor tienen dentro del ámbito de su competencia, las atribuciones genéricas siguientes:

I.- Acordar con el Secretario los asuntos y la ejecución de los programas que le sean encomendados;

II.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la operación de las unidades administrativas que tengan adscritas, e informar al Secretario de las actividades que éstas realicen, de acuerdo con las políticas que el mismo establezca;

III.- Coordinar a los órganos administrativos desconcentrados que les son asignados por este Reglamento o por el Secretario; y auxiliar a éste, respecto de las materias de sus esferas de competencia, en la coordinación de aquéllos que le estén adscritos directamente;

IV.- Asegurar la correcta aplicación de los sistemas, normas y procedimientos de programación, control y evaluación de las unidades administrativas adscritas a su responsabilidad;

V.- Aprobar las normas, políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir en las unidades administrativas adscritas a su responsabilidad;

VI.- Resolver y suscribir los documentos relativos a los recursos administrativos e impugnaciones que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas o acciones realizadas por los servidores públicos de las unidades administrativas, así como las demás que legalmente les correspondan;

VII.- Definir e integrar las propuestas de programa y de presupuesto de las unidades administrativas de la Secretaría, así como de los demás programas que determine el Secretario en el ámbito de su competencia;

VIII.- Presentar para aprobación del Secretario, el programa de trabajo y aquellos estudios y proyectos que se elaboren y que así lo ameriten, respecto de las unidades administrativas a su cargo, así como verificar su correcta y oportuna ejecución;

IX.- Aprobar y difundir, previa autorización del Secretario, la información estadística y de cualquier otra índole relacionada con los asuntos y materias de sus respectivas competencias;

X.- Proporcionar la documentación y la cooperación técnica que les sean requeridas en las materias de su competencia, de acuerdo con los lineamientos, normas y políticas establecidas al respecto;

XI.- Aprobar la información y los documentos que se proporcionen por la Secretaría al Congreso de la Unión o a sus integrantes, en las materias y asuntos de su competencia;

XII.- Desempeñar las comisiones que el Secretario les encomiende y, por acuerdo expreso, representar a la Secretaría en cualquier acto que el titular de la Dependencia determine; así como ejercer las funciones que se les deleguen, realizar los actos que les correspondan por suplencia y aquellos otros que les instruya el Secretario, incluyendo la suscripción de los documentos relativos;

XIII.- Suplir al Secretario en los juicios de amparo, laborales, administrativos, civiles, penales y en todos aquellos en los que deba intervenir, relacionados con los asuntos de las esferas de sus competencias y de las unidades administrativas adscritas, sin requerir acuerdo o instrucción alguna, con independencia de las otras suplencias previstas en este Reglamento, así como suscribir los documentos correspondientes;

XIV.- Revisar y aprobar la información de su competencia, a fin de que pueda el Secretario dar cuenta al Congreso de la Unión del estado que guarda su ramo, informando del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijadas en la planeación nacional, y sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política económica y social, así como explicar las desviaciones ocurridas y las medidas que se adopten para corregirlas;

XV.- Intervenir y proporcionar la información respecto de las materias que le competan en la elaboración de la parte correspondiente del Plan Nacional de Desarrollo, que el Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión;

XVI.- Coordinar las actividades correspondientes y proporcionar los datos y la información para elaborar el programa anual, que servirán además de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales;

XVII.- Integrar y aprobar la información relativa a las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, en los capítulos correspondientes a las materias de su esfera de competencia, que se integrará al Informe que el Presidente de la República presenta anualmente ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país;

XVIII.- Integrar y aprobar los datos y la información relativa a su competencia, que formará parte del informe de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, que el Ejecutivo Federal remitirá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el mes de marzo de cada año;

XIX.- Integrar el programa bianual de mejora regulatoria en relación con la normatividad y trámites que aplican sus unidades administrativas, así como los reportes sobre los avances correspondientes, previamente a su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para registro y publicación;

XX.- Aprobar la información para su inscripción y actualización en el Registro Federal de Trámites y Servicios de cada trámite que aplican las unidades administrativas bajo su adscripción;

XXI.- Coordinar la elaboración y aprobar los anteproyectos de iniciativas de leyes y decretos legislativos, y de reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y demás actos administrativos de carácter general de naturaleza análoga que deban publicarse en el **Diario Oficial de la Federación**, así como coordinar la elaboración y aprobar sus correspondientes manifestaciones de impacto regulatorio, previamente a su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su dictamen y difusión entre los sectores interesados;

XXII.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales y de las demás disposiciones en los asuntos de su competencia;

XXIII.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, o de las que le sean señaladas por delegación, o le correspondan por suplencia. Tratándose de asuntos o actos jurídicos que incluyan a las Subsecretarías, o alguna de éstas con otra unidad administrativa de la Secretaría no adscrita a la Subsecretaría, los documentos tendrán que firmarse por los respectivos titulares participantes;

XXIV.- Autorizar, por escrito a servidores públicos subalternos de las unidades administrativas adscritas, la ejecución de atribuciones que se le hayan encomendado, e informar al Secretario con el mismo escrito de dicha autorización;

XXV.- Aprobar los programas anuales de normalización de los comités nacionales de normalización de la Dependencia, y

XXVI.- Las demás que les confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de sus atribuciones, así como todas las que competan a las unidades administrativas y órganos desconcentrados adscritos en este Reglamento o se les adscriban.

Artículo 11.- En su carácter de coordinadores de subsector de las entidades paraestatales referidas en el artículo 5 del presente Reglamento, así como de las que en un futuro se sectoricen en función a su objeto, los Subsecretarios tienen las atribuciones siguientes:

I.- Presentar a la aprobación del Secretario la clasificación de las entidades de su subsector, distinguiendo entre aquellas entidades de servicio institucional que cumplen una clara función social y las empresas públicas que, por el tipo de bienes o servicios que producen, tienen objetivos preponderantemente económicos y quedan sujetas a criterios de rentabilidad financiera; así como presentar los parámetros o indicadores para efectos de su desarrollo, operación y evaluación de gestión, previa la opinión de los titulares de las entidades involucradas, tomando en cuenta los elementos que aporten las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo para el control y seguimiento de la planeación y del gasto;

II.- Proponer al Secretario los lineamientos o las bases a que se sujetará la gestión de la coordinación sectorial con cada entidad de su subsector o grupo de entidades atendiendo a su objeto y peculiares circunstancias, así como el programa anual de información, visita y seguimiento, teniendo en cuenta la opinión del titular de la entidad;

III.- Asegurar que la Secretaría cuente con la representación en todos los órganos de gobierno de las entidades y sus subsidiarias de su competencia, y que sus miembros representantes cuenten con la información y documentación necesarias para pronunciarse y emitir su voto en el sentido acordado para reforzar la autonomía de gestión;

IV.- Proponer y, previa aprobación, designar a las personas y servidores públicos, así como coordinar con ellos las actividades inherentes a su designación, y proporcionarles la asistencia y el apoyo técnico requerido, cuando:

a) Deban ejercer las atribuciones que impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria o minoritaria;

b) Integren el consejo de administración o equivalente de las empresas de participación estatal en representación de la Administración Pública Federal, en adición a los representantes de la Secretaría previstos en el artículo 9 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y

c) Presidan los consejos de administración o equivalente de los organismos descentralizados no estratégicos o de las empresas de participación estatal prioritaria en representación de la Administración Pública Federal, cuando el Ejecutivo Federal haya delegado su designación al titular de la Secretaría.

V.- Autorizar, en su caso, al miembro representante de la Secretaría ante los órganos de gobierno, las observaciones o el voto para la aprobación de las estructuras básicas y estatutos internos orgánicos de las entidades de su competencia;

VI.- Proponer al Secretario y coordinar políticas de desarrollo para que las entidades integrantes del subsector a su cargo, en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, cumplan con su objeto con autosuficiencia y autonomía, y con los objetivos y programas establecidos con eficacia, eficiencia y productividad, así como promover normas autorregulatorias y apoyar ante las diversas dependencias involucradas la aprobación de las mismas;

VII.- Promover el establecimiento de comités mixtos de productividad en las entidades paraestatales coordinadas con la participación de representantes de los trabajadores, de la administración de la entidad (consejeros y equipo directivo) y de la Secretaría, para analizar las medidas relativas a la organización de los procesos productivos, de selección y aplicación de los adelantos tecnológicos y el uso de los demás instrumentos que permitan elevar la eficiencia de las mismas; así como supervisar el funcionamiento de dichos comités;

VIII.- Presentar la propuesta de constitución de comités o subcomités técnicos especializados de apoyo a los órganos de gobierno de las entidades coordinadas del subsector;

IX.- Coordinar el desempeño de las actividades de las entidades sectorizadas en materia de planeación y presentar la política del subsector, con las previsiones de la actividad económica y social y la propuesta de acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o concertación con los grupos sociales interesados, y la demás información requerida para formular el Plan Nacional de Desarrollo; así como atender los requerimientos que se formulen durante su ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan Nacional de Desarrollo;

X.- Apoyar y participar en la organización y desarrollo de los foros de consulta popular que se convoquen para la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo,

programa sectorial y demás programas que señale el Presidente de la República, y podrán invitar a participar en dichos foros a los miembros del Congreso de la Unión, en asuntos de su competencia;

XI.- Aprobar los documentos que señalen las relaciones que existan entre el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial y las políticas públicas con los proyectos de iniciativas de leyes y los reglamentos, decretos y acuerdos que formule el Ejecutivo Federal, en asuntos de su competencia;

XII.- Coordinar las actividades de las entidades sectorizadas para asegurar su participación y la presentación de sus propuestas en la elaboración, revisión, adecuación y ejecución del programa sectorial y demás programas que determine el Presidente de la República en materia de planeación, en los asuntos de sus respectivas competencias;

XIII.- Promover la participación y la presentación de propuestas por parte de los gobiernos de los estados y de opiniones de los grupos sociales interesados en la elaboración, revisión y adecuación del programa sectorial;

XIV.- Participar en los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales relativos a la planeación y al programa sectorial, y proponer criterios para su ejecución, conforme a sus atribuciones;

XV.- Proponer, por conducto del Secretario, las entidades paraestatales sectorizadas que tendrán que elaborar su respectivo programa institucional para su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo por determinación del Ejecutivo Federal;

XVI.- Proponer los lineamientos de política y proveer lo conducente para la elaboración de los programas institucionales que indique el Plan Nacional de Desarrollo y coordinar la participación de las diversas unidades administrativas de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados con la entidad que tenga asignada las funciones de planeación;

XVII.- Asegurar que los programas institucionales de las entidades sectorizadas se sometan a la consideración y autorización del órgano de gobierno de la entidad, y ser el conducto para obtener la aprobación del Secretario;

XVIII.- Proveer por sí, o a través de los miembros representantes de la Secretaría, lo conducente ante los órganos de gobierno y administración de las entidades sectorizadas para la oportuna y debida observancia del Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial, el programa institucional y demás programas que determine el Ejecutivo Federal, atendiendo a las propuestas que deberán presentar las diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría;

XIX.- Considerar las aportaciones y los elementos de juicio de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para el control y seguimiento de los objetivos y prioridades de la planeación; así como proponer o aplicar las medidas disciplinarias que procedan cuando se contravengan las disposiciones de la Ley de Planeación y las que de ella se deriven a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial y demás programas que determine el Ejecutivo Federal;

XX.- Conducir los procedimientos para que, en ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, programa sectorial y otros programas, puedan concertarse la realización de acciones con los representantes de los grupos sociales o con los particulares interesados, asegurando la participación de las diversas unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría; así como suscribir en representación de ésta los contratos o convenios de cumplimiento obligatorio que se celebren por las partes involucradas, conforme a sus atribuciones;

XXI.- Proponer las acciones a convenir con los gobiernos de las entidades federativas para la ejecución del programa sectorial y participar en los procedimientos de coordinación y, cuando proceda, suscribir los convenios correspondientes;

XXII.- Aprobar las políticas y criterios que normen el ejercicio de las atribuciones que las distintas leyes y reglamentos confieren a la Secretaría para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir y, en general, inducir acciones de los particulares en materia económica y social, a fin de asegurar su congruencia con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, programa sectorial y demás programas aprobados;

XXIII.- Establecer, con la participación del director general de la entidad correspondiente, los mecanismos y procedimientos que permitan a la Secretaría conocer y vigilar que las entidades sectorizadas conduzcan sus actividades conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al programa sectorial, y cumplan en su caso con lo previsto en el programa institucional;

XXIV.- Aprobar y presentar el informe anual de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial en los asuntos del subsector de su competencia;

XXV.- Proveer por sí, o a través de los miembros representantes de la Secretaría, lo conducente ante los órganos de gobierno y administración de las entidades sectorizadas para la oportuna elaboración de los programas anuales y los presupuestos para la ejecución del programa sectorial y, en su caso, del programa institucional;

XXVI.- Establecer, con la participación de la Oficialía Mayor y el director general de la entidad correspondiente, los mecanismos y procedimientos que permitan a la Secretaría conocer y verificar periódicamente que las entidades sectorizadas realizan y ejecutan sus programas anuales y presupuestos en congruencia con los objetivos y prioridades del programa sectorial; así como adoptar o recomendar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas;

XXVII.- Ejercer las atribuciones de orientación y coordinación de las acciones de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación del gasto de las entidades sectorizadas en la esfera de su competencia, emitir la conformidad por parte de la Secretaría sobre las propuestas de gasto público que realicen las entidades correspondientes para elaborar el anteproyecto de presupuesto y sus modificaciones en su caso, y aprobar la información general y datos estadísticos que se envíen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en su caso, al Congreso de la Unión, en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y sus disposiciones administrativas;

XXVIII.- Fijar la política de acción a realizar y los lineamientos específicos adicionales a los que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus subsectores respectivos, de acuerdo con el conocimiento de los mismos y en función de la capacidad operativa de sus entidades coordinadas, e integrar los documentos sectoriales que resuman y compatibilicen las acciones a desarrollar por las entidades bajo su coordinación para efectos de la programación y presupuestación anuales;

XXIX.- Aprobar los lineamientos específicos a que se sujetará la formulación de los presupuestos de las entidades del subsector, en congruencia con los lineamientos generales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como comunicar los mismos a los titulares de las entidades paraestatales coordinadas;

XXX.- Acordar, con los directores generales de las entidades paraestatales del subsector, los esquemas y procedimientos de coordinación y participación de la Secretaría en la elaboración de los programas institucionales a corto, mediano y largo plazos, y de los presupuestos anuales y sus modificaciones, así como asegurar su congruencia con el programa sectorial;

XXXI.- Aprobar los mecanismos de verificación periódica de los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las entidades y su congruencia con los objetivos y prioridades del programa sectorial, y ordenar las medidas que habrán de adoptarse para corregir las desviaciones detectadas o, en su caso, reformar los programas y presupuestos respectivos;

XXXII.- Promover la celebración y suscribir convenios de desempeño para asumir compromisos de cumplimiento de metas y objetivos congruentes con los programas institucionales, entre las entidades de su subsector y la Administración Pública Federal Centralizada, e informar al titular de la coordinadora de sector y al órgano de gobierno de cada entidad firmante, de sus resultados y avances;

XXXIII.- Obtener la autorización del Secretario para la presentación, ante el órgano de gobierno de las entidades coordinadas, de los programas y presupuestos, y acordar, en su caso, el sentido del voto que exprese el Consejero Representante de la Secretaría en las sesiones correspondientes para su aprobación;

XXXIV.- Remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su conformidad si ésta no se emitió en la revisión del órgano de gobierno, los anteproyectos de presupuesto de gasto financiamiento aprobados por el órgano de gobierno de las entidades sectorizadas de su competencia, con el fin de que se integren al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación;

XXXV.- Asegurar que el programa financiero aprobado por el órgano de gobierno se remita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sólo en la parte conducente a la suscripción de créditos externos, para su autorización y registro en los términos de la ley de la materia;

XXXVI.- Hacer compatible los requerimientos de información de las secretarías globalizadoras de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y de otras dependencias, racionalizando los flujos de información, incluyendo los requerimientos de

información de la coordinadora de sector que se demanden por las distintas direcciones generales bajo su adscripción;

XXXVII.- Coordinar reuniones con los Comisarios Públicos para el mejor conocimiento de la operación de las entidades del subsector y revisar los informes y opiniones presentados al órgano de gobierno, o en su caso comités, y conocer en detalle los resultados de las evaluaciones del desempeño general, de las visitas y auditorías realizadas a las entidades del subsector de su competencia, así como analizar los elementos de juicio que aporte la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para el control y seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y los distintos programas aplicables;

XXXVIII.- Orientar y supervisar las actividades relativas a la programación, presupuestación y evaluación del gasto, y de los resultados de las entidades paraestatales ubicadas en el ámbito de su competencia;

XXXIX.- Recomendar, por sí o a través del representante de la Secretaría en el órgano de gobierno, mediante su participación en las sesiones de éste, medidas adicionales sobre los sistemas establecidos por el titular de la entidad en materia de control;

XL.- Asegurar que en las entidades y sus subsidiarias de su competencia estén debidamente integrados los consejos de vigilancia y comités de control y auditoría;

XLI.- Establecer y vigilar la operación de los mecanismos de coordinación intrasectorial que propicien la complementación de las actividades de las entidades paraestatales ubicadas en el ámbito de su competencia;

XLII.- Proponer al Secretario, así como emitir opinión y presentar las bases sobre la creación, transformación, disolución, liquidación, fusión, escisión, extinción o enajenación de la participación de las entidades paraestatales que correspondan al ámbito de su competencia, así como recomendar la forma y términos para realizar lo anterior, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y criterios y normas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XLIII.- Asegurar que los organismos descentralizados sectorizados en la esfera de su competencia formulen su programa de mejora regulatoria en relación con la normatividad y trámites que aplican, y se presenten los reportes periódicos sobre los avances correspondientes, así como mantengan inscrita y actualizada la información de dichos trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios;

XLIV.- Supervisar las actividades y expedir las disposiciones que se deriven de la aplicación de los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales y sus disposiciones reglamentarias en el ámbito de su competencia;

XLV.- Revisar las manifestaciones de impacto regulatorio que elaboren los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal coordinados, sobre anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores;

XLVI.- Autorizar la presentación de las manifestaciones de impacto regulatorio a que se refiere la fracción anterior, ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por parte de los servidores públicos de los organismos descentralizados responsables de suscribir y enviar a la referida Comisión, los documentos antes mencionados;

XLVII.- Designar a los presidentes de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de la Dependencia;

XLVIII.- Presentar para consideración del Secretario, el programa anual de normalización correspondiente;

XLIX.- Informar al Secretario sobre la instalación de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización que se constituyan en las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados correspondientes, así como informar periódicamente sobre los trabajos y resultados que se realicen, y

L.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de sus atribuciones.

CAPÍTULO QUINTO

De las Atribuciones Genéricas de los Directores Generales y Jefes de Unidad

Artículo 12.- Al frente de cada dirección general y unidad habrá un director general y un jefe de unidad, respectivamente, quienes se auxiliarán por los directores y subdirectores de área, y jefes de departamento, así como por el personal técnico y administrativo necesario que figure en el presupuesto autorizado.

Los directores y subdirectores de área y los jefes de departamento quedan facultados para ejercer las funciones que son competencia del jefe de unidad o director general titular del área en la que presten sus servicios, respecto al trámite de los asuntos hasta dejarlos en estado de resolución en la esfera de sus respectivas responsabilidades y previo acuerdo de dicho titular. Los directores de área podrán suscribir, a nombre de la unidad o dirección general, los documentos que les autorice el titular de la misma, a fin de simplificar trámites y procedimientos administrativos que son de su competencia.

Artículo 13.- Corresponden a cada uno de los directores generales y jefes de unidad las siguientes atribuciones genéricas:

I.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades encomendadas a la unidad administrativa a su cargo;

II.- Acordar con su superior inmediato el despacho de los asuntos relevantes de su responsabilidad;

III.- Formular estudios, dictámenes e informes que le sean encomendados por la superioridad;

IV.- Proponer a su superior inmediato la organización de la unidad administrativa a su cargo, así como las modificaciones que correspondan, conforme a las normas y lineamientos técnicos y administrativos establecidos, y en su caso ejecutarlos;

V.- Establecer los mecanismos de coordinación, programación, control, evaluación y de mejoramiento de la eficiencia operativa en la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las disposiciones de organización y funcionamiento de la Secretaría;

VI.- Proporcionar, conforme a derecho, los informes y la cooperación técnica que le requieran otras dependencias y entidades de la Administración Pública y los particulares;

VII.- Integrar el archivo de la unidad administrativa a su cargo, conforme a las normas establecidas, y expedir cuando proceda, copias certificadas de documentos que obren en el mismo;

VIII.- Elaborar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público correspondientes a la unidad administrativa a su cargo, conforme a los lineamientos establecidos;

IX.- Participar en la instrumentación y operación de los sistemas sectoriales de información, planeación, programación, evaluación y control;

X.- Presentar a su superior inmediato el programa de trabajo de la unidad administrativa a su cargo, así como ejecutarlo en forma correcta y oportuna;

XI.- Desempeñar las comisiones que determinen las autoridades superiores y, por acuerdo expreso, representar a la Secretaría, así como participar, cuando se les designe, en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales;

XII.- Intervenir en la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su cargo; autorizar los movimientos internos del personal y cuando proceda las licencias, considerando las necesidades del servicio, y participar directamente o a través de un representante en los casos de sanciones, remoción y cese de su personal en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las Condiciones Generales de Trabajo;

XIII.- Proporcionar la información y documentación requeridas para la elaboración de los informes previos y justificados que en materia de amparo deban rendir cuando sean señalados como autoridades responsables y, en su caso, suscribirlos;

XIV.- Preparar la información y los documentos requeridos, en los asuntos de su competencia, para integrar el programa bianual de mejora regulatoria en relación con la normatividad y trámites que aplican, y para formular los reportes sobre los avances correspondientes;

XV.- Preparar la información y los documentos correspondientes para su inscripción y actualización en el Registro Federal de Trámites y Servicios de cada trámite que aplican;

XVI.- Participar en la elaboración de los anteproyectos de iniciativas de leyes y decretos legislativos; preparar con la asesoría de la Dirección de Legislación los anteproyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y demás actos administrativos de carácter general de naturaleza análoga que deban publicarse en el **Diario Oficial de la Federación**, y formular las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes a los documentos mencionados, previamente a su

envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su dictamen y difusión entre los sectores interesados;

XVII.- Preparar los documentos que señalen las relaciones que existan entre el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial y las políticas públicas con los anteproyectos de iniciativas de leyes y decretos legislativos, y los anteproyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que formule el Ejecutivo Federal, en asuntos de su competencia.

XVIII.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, o de las que le sean señaladas por delegación, o le corresponda por suplencia;

XIX.- Participar en los comités o subcomités y comisiones de conformidad a las disposiciones de ley y reglamentarias en el ámbito de sus atribuciones, o en los que le encomiende el Secretario o su superior jerárquico, y

XX.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de sus atribuciones.

CAPÍTULO SEXTO

De las Unidades Administrativas adscritas a la Oficina del Secretario

Artículo 14.- El Director General de Asuntos Jurídicos tiene las siguientes atribuciones:

I.- Representar legalmente al Secretario, a la Secretaría y a sus unidades administrativas ante los órganos jurisdiccionales en los procedimientos de cualquier índole, cuando se requiera su intervención, y en general fungir como órgano representativo de la dependencia cuando por la legislación o por lo dispuesto en este Reglamento no corresponda a otra unidad administrativa, así como atender los asuntos de orden jurídico que correspondan a la Secretaría;

II.- Representar al Secretario y, en sus ausencias, a los Subsecretarios, al Oficial Mayor y a las unidades administrativas de la Secretaría ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; interponer los recursos y realizar toda clase de actos procesales en términos del Código Fiscal de la Federación;

III.- Promover los juicios de amparo y en su caso desistirse de los mismos; elaborar los proyectos de los informes previos y justificados que deban rendirse por el Presidente de la República en los casos en que se hubiere conferido la representación Presidencial y por el Secretario; apoyar en la elaboración de los relativos a los demás servidores públicos de la dependencia, que sean señalados como autoridades responsables. Interponer todos los recursos y medios de defensa procedentes, ofrecer pruebas, asistir a las audiencias, formular alegatos y dar seguimiento a los juicios de amparo en que la Secretaría sea parte o tenga interés jurídico. Presentar demandas o contestaciones en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, así como realizar todos aquellos actos procesales para la debida tramitación del juicio en los términos de ley;

IV.- Ejercitar toda clase de acciones administrativas y judiciales, formular denuncias o querellas, así como, en su caso otorgar el perdón legal; solicitar del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal, asimismo las acciones que se requieran siempre que no estén encomendadas a otras Unidades Administrativas y vigilar la secuencia de las diligencias o juicios respectivos. Promover e intervenir en las reclamaciones y juicios en que la Secretaría tenga interés y en general, en aquellos que puedan afectar los bienes encomendados a la misma;

V.- Conocer del procedimiento administrativo, con motivo de los recursos que se interpongan en contra de las determinaciones de esta Unidad Administrativa y dictar las resoluciones correspondientes;

VI.- Iniciar, tramitar y contestar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje los juicios laborales, así como todos aquellos actos procesales para la debida tramitación del juicio, relativos al personal de la Secretaría; ejercer las acciones, los recursos correspondientes y representar legalmente al Secretario en los mismos;

VII.- Instrumentar las actas administrativas correspondientes, con motivo del incumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría, así como emitir opinión, en caso de proceder la aplicación de alguna sanción;

VIII.- Tramitar y contestar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa los juicios de nulidad, interponer los recursos y realizar toda clase de actos procesales en términos del Código Fiscal de la Federación, en representación del Secretario y las unidades administrativas de la Secretaría;

IX.- Presentar para aprobación del Secretario, los anteproyectos de iniciativas de ley y decretos legislativos, y los correspondientes a reglamentos, decretos, acuerdos y demás

disposiciones jurídicas de observancia general en las materias de competencia de la Secretaría, incluyendo las relativas a convenciones sobre asuntos de carácter internacional, teniendo en cuenta las propuestas que hagan las unidades administrativas de la propia Secretaría, así como emitir opinión sobre los anteproyectos que elaboren las entidades paraestatales coordinadas y que requieran la autorización del Secretario;

X.- Emitir opinión o preparar informes sobre los proyectos de iniciativas de ley y los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurídicos que sean turnados a la Secretaría por otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XI.- Asesorar jurídicamente al Secretario, apoyar legalmente el ejercicio de las atribuciones de las unidades administrativas de la Secretaría y actuar como órgano de consulta de las mismas;

XII.- Emitir opinión sobre los convenios, contratos y, en general, todo tipo de actos jurídicos que deban celebrar las diversas unidades administrativas de la Secretaría;

XIII.- Emitir opinión y registrar los documentos, previo a su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, cuando lo soliciten las diversas unidades administrativas, los órganos desconcentrados de la Secretaría y las entidades paraestatales del sector, así como ordenar la publicación en dicho Diario Oficial de los documentos de las unidades administrativas de la Secretaría, y

XIV.- Autorizar la difusión y publicación de las disposiciones jurídicas aplicables a la Secretaría y los criterios de interpretación.

Los actos de autoridad que emita en el ámbito de su competencia, derivados del ejercicio de la aplicación de las leyes y disposiciones administrativas aplicables, los podrán suscribir en forma indistinta los Directores de Legislación, de lo Contencioso y de Estudios y Consultas, así como los subdirectores de área previstos en el Manual de Organización General de la Secretaría.

Las atribuciones señaladas de la fracción II a la VIII del presente artículo también podrán ser ejercidas, en forma indistinta, por los Directores de lo Contencioso, de Legislación y de Estudios y Consultas, asimismo, por los subdirectores de área y jefes de departamento adscritos a la Dirección de lo Contencioso previstos en el Manual de Organización General de la Secretaría.

Artículo 15.- El Director General de Asuntos Internacionales tiene las siguientes atribuciones:

I.- Apoyar y asesorar al Secretario y a las unidades administrativas de la Secretaría, en la atención de asuntos de carácter internacional en materia de hidrocarburos, energía eléctrica, nuclear y otras fuentes de energía;

II.- Proponer al Secretario, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría y entidades coordinadas respectivas en los ámbitos de su respectiva competencia, los lineamientos de estrategia que seguirá la Secretaría en el ámbito internacional, conforme a la política energética nacional y a las orientaciones de política exterior que fije la Secretaría de Relaciones Exteriores;

III.- Coordinar la participación de las unidades administrativas de la Secretaría y de las entidades paraestatales coordinadas en las reuniones internacionales de carácter bilateral y multilateral a las que concurran, y cuidar su congruencia con la política sectorial y con los principios de política exterior del país;

IV.- Coordinar la participación del sector en los organismos internacionales en los que nuestro país es Estado Miembro, y cuidar su congruencia con la política sectorial y con los principios de política exterior del país;

V.- Fungir como enlace ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, difundir y promover las actividades que el Organismo ofrece, procurando mayores oportunidades para la participación nacional y, previa opinión de las unidades administrativas de la Secretaría que corresponda, integrar la participación del sector en dichas actividades en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría de Relaciones Exteriores;

VI.- Participar en las actividades de colaboración que cada una de las entidades paraestatales del sector y la propia Secretaría, desarrollan con la comunidad internacional, así como dar seguimiento a las mismas y mantener informadas a las unidades administrativas de la Secretaría que corresponda;

VII.- Organizar en el país, con la participación que corresponda a los Subsecretarios y a las entidades paraestatales sectorizadas, seminarios, mesas redondas, conferencias y otras actividades con la participación de expertos nacionales o extranjeros en temas de interés para el sector;

VIII.- Elaborar el programa anual de participación en reuniones y foros internacionales, coordinando su ejecución con la Secretaría de Relaciones Exteriores;

IX.- Negociar y promover, previa opinión de las unidades administrativas de la Secretaría y entidades sectorizadas correspondientes, la suscripción y ejecución de los convenios internacionales de carácter bilateral y multilateral en los temas prioritarios para el sector, con base en la Ley sobre la Celebración de Tratados, así como compilar y llevar un registro actualizado de dichos convenios y demás documentos relativos;

X.- Coordinar con las unidades administrativas y las dependencias y entidades correspondientes, el seguimiento y la observación de los tratados e instrumentos internacionales en el ámbito de competencia de la Secretaría, y

XI.- Solicitar, por conducto de la Oficialía Mayor, y tomar en cuenta la opinión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, previamente a la suscripción de tratados internacionales suscritos en el ámbito de competencia de la Secretaría.

Artículo 16.- El Jefe de la Unidad de Comunicación Social tiene las siguientes atribuciones:

I.- Diseñar y ejecutar la política de comunicación social de la Secretaría, conforme a los lineamientos que fije la dependencia competente;

II.- Dirigir y evaluar los programas y actividades de información, difusión y divulgación;

III.- Conducir las relaciones con los medios de comunicación, así como intervenir en la contratación y supervisión de dichos medios cuando se requiera;

IV.- Captar, analizar y procesar la información de los medios de comunicación, referente a los acontecimientos de interés para la responsabilidad de la Secretaría, y difundirla entre las unidades administrativas que corresponda;

V.- Organizar y supervisar entrevistas y conferencias con los medios de comunicación relacionadas con asuntos de competencia de la Secretaría, así como emitir boletines de prensa;

VI.- Apoyar y asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría y a las entidades paraestatales coordinadas, en las materias de su competencia;

VII.- Difundir información técnica generada por las distintas áreas de la Secretaría o por fuentes externas para su consulta y aprovechamiento por el sector;

VIII.- Difundir entre los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, los programas y actividades que generen las distintas áreas de la Secretaría;

IX.- Establecer enlace con las entidades paraestatales del sector coordinado por la Secretaría y con sus órganos administrativos desconcentrados, para fines de alcance sectorial relacionados con la información y difusión de comunicación social;

X.- Establecer enlace con las unidades de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Presidencia de la República, sobre los programas y actividades de información, difusión y divulgación que se realicen, y

XI.- Establecer los lineamientos para la producción de los materiales impresos y audiovisuales elaborados por unidades administrativas de la Secretaría, así como coordinar su edición e impresión.

CAPÍTULO SÉPTIMO

De las Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría de Electricidad

Artículo 17.- El Director General de Operación Financiera del Subsector Electricidad tiene las siguientes atribuciones:

I.- Diseñar y elaborar los criterios de clasificación de las entidades del subsector, comprendiendo aquellas que cumplen una función social y las que tienen objetivos preponderantemente económicos;

II.- Elaborar los estudios necesarios para la creación, transformación, disolución, liquidación, fusión, escisión, extinción o enajenación de las entidades paraestatales o de la participación estatal correspondiente, en el ámbito de su competencia, así como para recomendar la forma y términos para realizar lo anterior, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y criterios y normas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones respectivas;

III.- Llevar el registro de las personas designadas para ejercer las atribuciones que impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria o minoritaria, y conservar la información correspondiente al desempeño de su responsabilidad, así como preparar los documentos y brindar la asesoría necesaria para la adecuada realización de su función;

IV.- Proponer la compatibilidad de los requerimientos de información, racionalizando los flujos de las distintas dependencias, conjuntamente con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo;

V.- Preparar y proporcionar la información y documentación que requieran los miembros representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas, incluyendo la información presupuestal, financiera y de inversión a fin de que puedan pronunciarse y emitir su voto en las sesiones de dichos órganos;

VI.- Fungir como enlace entre la Secretaría y las diversas unidades administrativas de los órganos desconcentrados de ésta y las entidades del subsector que tengan asignadas las funciones de planeación, incluyendo entrega y recibo de información;

VII.- Preparar la información e integrar la documentación requerida para la elaboración, revisión y adecuación del aporte del subsector al Plan Nacional de Desarrollo, del programa sectorial y demás programas que determine el Presidente de la República. En su carácter de enlace entre la Secretaría y las diversas unidades administrativas de los órganos desconcentrados de ésta y las entidades del subsector que tengan asignadas las funciones de planeación, asegurar su participación y consolidar sus propuestas;

VIII.- Elaborar, con la asesoría técnica de la Dirección General de Formulación de Política Energética, los lineamientos de políticas y proveer la información requerida para la elaboración de los programas institucionales;

IX.- Obtener de las unidades administrativas que tengan asignadas la función de planeación de las entidades sectorizadas los datos e informes, integrar y consolidar la información, y preparar el informe anual de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial en los asuntos del subsector de su competencia; así como los requeridos para los informes que deban rendir el Presidente de la República y el Secretario en los términos de los artículos 69 y 93 Constitucionales, respectivamente;

X.- Fungir como enlace entre la Secretaría y la unidad encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar las actividades respecto al gasto público de las entidades sectorizadas correspondientes a su subsector; así como entre la Secretaría y las unidades administrativas correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en sus respectivas competencias;

XI.- Diseñar, elaborar y someter a su aprobación los lineamientos específicos a que se sujetará la formulación de los presupuestos de las entidades paraestatales coordinadas del subsector; así como los esquemas específicos de coordinación y participación de la Secretaría en la elaboración de los programas institucionales y los presupuestos, así como sus modificaciones, en congruencia con los lineamientos generales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XII.- Establecer los mecanismos para la supervisión de las actividades relativas a la programación, presupuestación y evaluación del gasto y de los resultados de las entidades paraestatales ubicadas en el ámbito de su competencia;

XIII.- Recibir y remitir a las unidades administrativas y dependencias del Ejecutivo Federal respectivas, los informes de modificación de precios y tarifas aprobados por los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas del subsector;

XIV.- Captar, analizar, integrar, en su caso validar y remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, según proceda, la información de las entidades sectorizadas y la documentación que le fueren solicitadas en materia de gasto público y deuda; así como vigilar que dichas entidades cumplan con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y Ley General de Deuda Pública, sus disposiciones administrativas, políticas y lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aquellas que establezca la Secretaría acordes con las necesidades y características del subsector correspondientes;

XV.- Ejercer las atribuciones que en su carácter de coordinadora de sector corresponden a la Secretaría en materia de control, evaluación, auditoría y responsabilidades previstas en las leyes; entre otras, autorizar la ministración de recursos por concepto de subsidios y aportaciones a las entidades, aprobar a éstas el otorgamiento de subsidios, donativos, gratificaciones, obsequios y ayudas de cualquier clase, remitir con la aprobación la información financiera y general requerida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las entidades sectorizadas del subsector de su competencia. Asimismo, preparar la exposición de motivos del subsector en materia de presupuesto y la información consolidada, y apoyar a la Oficialía Mayor con la información necesaria que deban rendir las entidades sectorizadas para efectos de la Cuenta Pública;

XVI.- Definir con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con la participación de la entidad correspondiente, los proyectos adicionales a los estratégicos y prioritarios, y las unidades de medida y la denominación de las metas que se utilizarán en la elaboración de los programas anuales que servirán de base para la formulación del anteproyecto de presupuesto de las entidades sectorizadas y el Catálogo de Unidades de Medida y Denominación de Metas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XVII.- Integrar la información y elaborar el documento que se remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre los anteproyectos de presupuesto de gasto y financiamiento aprobados por el órgano de gobierno de las entidades sectorizadas de su competencia, con el fin de que se integren al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que será remitido a la aprobación de la Cámara de Diputados;

XVIII.- Realizar las acciones acordadas con los directores generales de las entidades paraestatales coordinadas, sobre los esquemas y procedimientos de coordinación y participación de la Secretaría en la elaboración de los presupuestos anuales y sus modificaciones, así como asegurar su congruencia con el programa sectorial y con el presupuesto autorizado, y el cumplimiento de los proyectos estratégicos, y

XIX.- Elaborar para su aprobación, los mecanismos de verificación periódica de los resultados de la ejecución de los presupuestos de las entidades y su congruencia con los objetivos y prioridades del programa sectorial, y proponer las medidas que habrán de adoptarse para corregir las desviaciones detectadas o, en su caso, reformar los presupuestos respectivos.

Artículo 18.- El Director General de Operaciones Productivas del Subsector Electricidad tiene las siguientes atribuciones:

I.- Diseñar, elaborar y previa aprobación, asegurar la aplicación y observancia de las políticas de desarrollo establecidas por el Secretario;

II.- Elaborar las propuestas de lineamientos o bases de gestión de la Secretaría con cada entidad paraestatal coordinada de su subsector de acuerdo a su objeto y peculiares circunstancias, así como el programa anual de información, visita y seguimiento, teniendo en cuenta la opinión del titular de la entidad;

III.- Opinar sobre la información que se integre al Documento de Prospectiva del Sector Eléctrico;

IV.- Proponer la política de investigación y desarrollo tecnológico en las entidades coordinadas del subsector, conforme a los lineamientos y recomendaciones de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de Tecnología y Medio Ambiente;

V.- Proporcionar la información y documentación que requieran los miembros representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas del subsector, en materia de operaciones productivas, a fin de que puedan pronunciarse y emitir su voto en las sesiones de dichos órganos;

VI.- Llevar el registro de los servidores públicos o personas independientes designados miembros de los consejos de administración o equivalentes en las empresas de participación estatal, y de los designados miembros presidentes de los consejos de administración o equivalentes en los organismos descentralizados no estratégicos o en las empresas de participación estatal prioritaria, así como requerir, integrar, custodiar y analizar la información correspondiente al desempeño de su responsabilidad, cargo o comisión, y preparar los documentos y brindar la asesoría necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones y tareas;

VII.- Realizar opinión sobre las observaciones de los miembros representantes de la Secretaría ante los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas, para la aprobación de las estructuras básicas y estatutos internos orgánicos de las entidades;

VIII.- Integrar la información y elaborar las propuestas de políticas de desarrollo para que las entidades coordinadas del subsector, cumplan con su objeto con autosuficiencia y autonomía, y con los objetivos y programas establecidos con eficacia, eficiencia y productividad;

IX.- Elaborar propuestas para el establecimiento de comités mixtos de productividad en las entidades paraestatales coordinadas, de constitución de comités o subcomités técnicos especializados de apoyo a los órganos de gobierno, así como dar seguimiento a sus funciones y desempeño;

X.- Integrar la información y elaborar los documentos que se presenten ante los órganos de gobierno y administración de las entidades paraestatales coordinadas para la exacta

observancia de la obligatoriedad del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial; así como llevar a cabo las acciones de promoción de las acciones para la concertación o coordinación con los representantes de los grupos sociales interesados y con los particulares o con los gobiernos de los estados, según corresponda, para la ejecución del plan y programa mencionados;

XI.- Proponer esquemas y procedimientos de coordinación y participación de la Secretaría con las entidades paraestatales coordinadas, en la elaboración de los programas institucionales a corto, mediano y largo plazos, así como asegurar su congruencia con el programa sectorial;

XII.- Proponer los mecanismos de verificación periódica de los resultados de la ejecución de los programas de las entidades y su congruencia con los objetivos y prioridades del programa sectorial, y realizar las medidas que habrán de adoptarse para corregir las desviaciones detectadas o, en su caso, reformar los programas respectivos;

XIII.- Proponer la celebración de convenios de desempeño para asumir compromisos de cumplimiento de metas y objetivos congruentes con los programas institucionales, entre las entidades de su subsector y la Administración Pública Federal Centralizada;

XIV.- Participar en las reuniones que se coordinen con los Comisarios Públicos para el mejor conocimiento de la operación de las entidades del subsector y apoyar en la revisión de los informes y opiniones presentados al órgano de gobierno, o en su caso comités, y llevar a cabo el seguimiento correspondiente;

XV.- Proponer las recomendaciones que se realicen a los miembros representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno, sobre medidas adicionales de los sistemas establecidos por el titular de la entidad en materia de control;

XVI.- Realizar propuestas para asegurar que en las entidades y sus subsidiarias de su competencia estén debidamente integrados los consejos de vigilancia y comités de control y auditoría;

XVII.- Proponer mecanismos de coordinación intrasectorial que propicien la complementación de las actividades de las entidades paraestatales ubicadas en el ámbito de su competencia;

XVIII.- Realizar propuestas para la creación, transformación, disolución, liquidación, fusión, escisión, extinción o enajenación de la participación de las entidades paraestatales que correspondan al ámbito de su competencia, así como para recomendar la forma y términos para realizar lo anterior, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y criterios y normas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XIX.- Opinar e intervenir en la revisión de las manifestaciones de impacto regulatorio que elaboren los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal coordinados del subsector, sobre anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores;

XX.- Someter a consideración del Subsecretario de Electricidad, las autorizaciones para la presentación de las manifestaciones de impacto regulatorio a que se refiere la fracción anterior, ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por parte de los servidores públicos de los organismos descentralizados responsables de suscribir y enviar a la referida Comisión, los documentos antes mencionados, y

XXI.- Las demás que se deriven de las disposiciones jurídicas que otorgan atribuciones a la Secretaría en su carácter de coordinadora de sector, y de los lineamientos o bases de gestión y programas anuales aprobados, relacionadas con el conocimiento de la operación y evaluación de sus resultados de las entidades paraestatales del subsector.

Artículo 19.- El Director General de Instalaciones Eléctricas y Recursos Nucleares tiene las siguientes atribuciones:

I.- Formular, con la asesoría técnica de la Dirección General de Formulación de Política Energética, políticas y programas en materia de su competencia y promover su cumplimiento;

II.- Fomentar y vigilar la observancia de condiciones técnicas y de seguridad, y demás normas relacionadas con las instalaciones eléctricas conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia;

III.- Acordar con las entidades paraestatales coordinadas del Subsector Electricidad, los programas de verificación o comprobación de sus instalaciones eléctricas;

IV.- Realizar visitas de verificación o comprobación de las instalaciones eléctricas, a fin de comprobar que se cumplan con las normas legales y disposiciones contenidas en los ordenamientos respectivos y con las establecidas para su operación, salvo aquellas que sean del ámbito de competencia de otras unidades administrativas y, en su caso coordinar con las entidades federativas la verificación del cumplimiento con las normas oficiales mexicanas;

V.- Aprobar y hacer el seguimiento operativo de las unidades de verificación de instalaciones eléctricas para servicio de alta tensión y de suministros en lugares de concentración pública;

VI.- Dictaminar, para acuerdo superior, sobre el otorgamiento, modificación y cancelación de autorizaciones para la explotación y beneficio de minerales radiactivos;

VII.- Opinar sobre los estudios de factibilidad de explotación de minerales radiactivos;

VIII.- Proponer, para aprobación superior, la expedición y publicación de las declaratorias, con base en las determinaciones que se indican en el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, así como coordinar y supervisar las actividades relativas al artículo 18 de dicha ley excepto en lo dispuesto en la fracción III;

IX.- Proponer, previa opinión de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de Tecnología y Medio Ambiente, las políticas para el uso pacífico de la energía nuclear;

X.- Evaluar, apoyar y dar seguimiento a las tareas relacionadas con la gestión de desechos radiactivos, y los planes y programas de emergencias radiológicas de los confinamientos de desechos radiactivos;

XI.- Coordinar las actividades interinstitucionales para el transporte de combustible nuclear;

XII.- Participar, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en la elaboración de normas oficiales mexicanas en materia de exploración, explotación y beneficio de minerales radiactivos, el aprovechamiento de los combustibles nucleares y los usos de la energía nuclear;

XIII.- Solicitar a las unidades de verificación aprobadas por la Secretaría, los apoyos necesarios a fin de verificar que las instalaciones eléctricas, cumplan con las normas legales aplicables y disposiciones contenidas en los ordenamientos respectivos;

XIV.- Establecer los lineamientos para la verificación o comprobación de las instalaciones eléctricas en los lugares que se determinen de concentración pública, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia;

XV.- Aplicar las sanciones en las materias de su competencia, así como supervisar, sancionar y, en su caso, suspender en los términos y condiciones jurídicas aplicables a las unidades de verificación aprobadas por la Secretaría;

XVI.- Conocer y resolver, en la esfera de su competencia, los recursos administrativos que se interpongan en contra de los actos que emita;

XVII.- Solicitar y aprobar a las entidades de la Administración Pública Paraestatal del sector coordinado, los programas de verificación o comprobación de sus instalaciones eléctricas;

XVIII.- Aprobar, los programas para la prevención de accidentes de quienes realicen actividades altamente riesgosas que puedan causar graves desequilibrios ecológicos y que sean remitidos para ello por la Dirección General de Seguridad y Protección al Ambiente en los términos de las disposiciones jurídicas, en lo conducente a las normas oficiales mexicanas en materia de electricidad;

XIX.- Expedir normas oficiales mexicanas, así como promover y participar en la elaboración de las mismas, con objeto de satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad en materia de electricidad, en lo concerniente a instalaciones de utilización de energía eléctrica;

XX.- Proponer al Subsecretario del ramo para su aprobación, el programa anual de normalización, mismo que deberá dar a conocer a las distintas áreas involucradas para asegurar su oportuna participación;

XXI.- Presidir los Comités Consultivos Nacionales de Normalización de la Dependencia que le designe el Subsecretario del ramo;

XXII.- Participar en los Comités Consultivos Nacionales de Normalización en las materias relacionadas con el ejercicio de sus atribuciones, así como en los subcomités y grupos de trabajo respectivos;

XXIII.- Participar con las unidades administrativas de la Secretaría, en la elaboración de los anteproyectos de normas oficiales mexicanas que les correspondan;

XXIV.- Proponer al Subsecretario del ramo la modificación o cancelación de las normas oficiales mexicanas, cuando no subsistan las causas que motivaron su expedición;

XXV.- Cumplir con lo señalado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, en particular con los capítulos II y V, comprendidos en el Título Tercero de ambos ordenamientos, en lo referente a la elaboración y modificación de las normas oficiales mexicanas, así como al funcionamiento y competencia de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización;

XXVI.- Verificar o comprobar la aplicación y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que en la materia de su competencia se expidan;

XXVII.- Promover y convenir con los colegios de profesionistas en las ramas afines a instalaciones eléctricas, la instrumentación y observancia de las normas oficiales mexicanas que emita la Dependencia;

XXVIII.- Realizar la evaluación de la conformidad respecto de las normas oficiales mexicanas relativas a las materias que correspondan a su ámbito de aplicación, así como aprobar a las personas acreditadas que se requieran para dicha evaluación;

XXIX.- Elaborar los anteproyectos de iniciativas de leyes y de reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y demás actos administrativos de carácter general de naturaleza análoga que deban publicarse en el **Diario Oficial de la Federación**, así como elaborar sus correspondientes manifestaciones de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por parte del Oficial Mayor de la Secretaría, a efecto de obtener su dictamen y difusión entre los sectores;

XXX.- Elaborar las manifestaciones de impacto regulatorio y la información y los documentos relativos a los trámites que aplican para su inscripción y actualización en el Registro Federal de Trámites y Servicios;

XXXI.- Promover la difusión de las disposiciones jurídicas, así como los formatos de trámites e información correspondiente, en las materias de su competencia;

XXXII.- Formular las consultas y solicitudes necesarias ante otras dependencias del Ejecutivo Federal, derivadas de la aplicación de los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales y sus disposiciones reglamentarias en el ámbito de su competencia;

XXXIII.- Suscribir documentos relativos a visitas de verificación o comprobación, así como las resoluciones en el ámbito de su competencia, incluyendo recursos administrativos, sanciones, clausuras, revocaciones de permisos y aprobaciones de unidades de verificación, laboratorios de prueba y organismos de certificación, que constituyan actos de autoridad en el ejercicio de la aplicación de las leyes y disposiciones administrativas aplicables.

Los actos de autoridad que emita en el ámbito de su competencia, derivados del ejercicio de la aplicación de las leyes y disposiciones administrativas aplicables, relativos a visitas de verificación o comprobación, así como resoluciones, incluyendo sanciones, clausuras y revocaciones de permisos, al igual que aprobaciones de unidades de verificación, laboratorios de prueba y organismos de certificación, los podrán suscribir y realizar los Directores de Normalización y Supervisión Eléctrica y de Recursos Nucleares, de acuerdo con las asignaciones de responsabilidades que les confiera el Director General o los manuales de organización que se publiquen en el **Diario Oficial de la Federación**. Las respuestas de quejas o atención ciudadana y de prevención, los podrán suscribir los directores y subdirectores de área previstos en el Manual de Organización General de la Secretaría, adscritos a esta Dirección General.

El Director General y los directores mencionados podrán representar legalmente a la Secretaría, tanto a su titular por sí como a éste actuando en representación del Presidente de la República, al Subsecretario de Electricidad y a la propia Dirección General, ante los particulares y cualquier órgano jurisdiccional, en los trámites y procedimientos de cualquier índole cuando se requiera su intervención conforme a las disposiciones legales y administrativas en las materias a que se refiere este precepto.

CAPÍTULO OCTAVO

De las Unidades Administrativas adscritas a la Subsecretaría de Hidrocarburos

Artículo 20.- El Director General de Operación Financiera del Subsector Hidrocarburos tiene las siguientes atribuciones:

I.- Diseñar y elaborar los criterios de clasificación de las entidades del subsector, comprendiendo aquellas que cumplen una función social y las que tienen objetivos preponderantemente económicos;

II.- Elaborar los estudios necesarios para la creación, transformación, disolución, liquidación, fusión, escisión, extinción o enajenación de las entidades paraestatales o de la participación estatal correspondiente, en el ámbito de su competencia, así como para recomendar la forma y términos para realizar lo anterior, de conformidad a las disposiciones jurídicas

aplicables y criterios y normas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones respectivas;

III.- Llevar el registro de las personas designadas para ejercer las atribuciones que impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que integren el capital social de las empresas de participación estatal mayoritaria o minoritaria, y conservar la información correspondiente al desempeño de su responsabilidad, así como preparar los documentos y brindar la asesoría necesaria para la adecuada realización de su función;

IV.- Proponer la compatibilidad de los requerimientos de información, racionalizando los flujos de las distintas dependencias, conjuntamente con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo;

V.- Preparar y proporcionar la información y documentación que requieran los miembros representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas, incluyendo la información presupuestal, financiera y de inversión a fin de que puedan pronunciarse y emitir su voto en las sesiones de dichos órganos;

VI.- Fungir como enlace entre la Secretaría y las diversas unidades administrativas de los órganos desconcentrados de ésta y las entidades del subsector que tengan asignadas las funciones de planeación, incluyendo entrega y recibo de información;

VII.- Preparar la información e integrar la documentación requerida para la elaboración, revisión y adecuación del aporte del subsector al Plan Nacional de Desarrollo, del programa sectorial y demás programas que determine el Presidente de la República. En su carácter de enlace entre la Secretaría y las diversas unidades administrativas de los órganos desconcentrados de ésta y las entidades del subsector que tengan asignadas las funciones de planeación, asegurar su participación y consolidar sus propuestas;

VIII.- Elaborar, con la asesoría técnica de la Dirección General de Formulación de Política Energética, los lineamientos de políticas y proveer la información requerida para la elaboración de los programas institucionales;

IX.- Obtener de las unidades administrativas que tengan asignadas la función de planeación de las entidades sectorizadas los datos e informes, integrar y consolidar la información, y preparar el informe anual de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial en los asuntos del subsector de su competencia; así como los requeridos para los informes que deban rendir el Presidente de la República y el Secretario en los términos de los artículos 69 y 93 Constitucionales, respectivamente;

X.- Fungir como enlace entre la Secretaría y la unidad encargada de planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar las actividades respecto al gasto público de las entidades sectorizadas correspondientes a su subsector; así como entre la Secretaría y las unidades administrativas correspondientes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en sus respectivas competencias;

XI.- Diseñar, elaborar y someter a la aprobación los lineamientos específicos a que se sujetará la formulación de los presupuestos de las entidades paraestatales de su competencia; así como los esquemas específicos de coordinación y participación de la Secretaría en la elaboración de los programas institucionales y los presupuestos, así como sus modificaciones, en congruencia con los lineamientos generales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XII.- Establecer los mecanismos para la supervisión de las actividades relativas a la programación, presupuestación y evaluación del gasto y de los resultados de las entidades paraestatales ubicadas en el ámbito de su competencia;

XIII.- Recibir y remitir a las unidades administrativas y dependencias del Ejecutivo Federal respectivas, los informes de modificación de precios y tarifas aprobados por los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas del subsector;

XIV.- Captar, analizar, integrar, en su caso validar y remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, según proceda, la información de las entidades sectorizadas y la documentación que le fueren solicitadas en materia de gasto público y deuda; así como vigilar que dichas entidades cumplan con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y Ley General de Deuda Pública, sus disposiciones administrativas, políticas y lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aquellas que establezca la Secretaría acordes con las necesidades y características del subsector correspondientes.

XV.- Ejercer las atribuciones que en su carácter de coordinadora de sector corresponden a la Secretaría en materia de control, evaluación, auditoría y responsabilidades previstas en las leyes; entre otras, autorizar la ministración de recursos por concepto de subsidios y aportaciones a las entidades, aprobar a éstas el otorgamiento de subsidios, donativos, gratificaciones, obsequios y ayudas de cualquier clase, remitir con la aprobación la información financiera y general requerida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las entidades sectorizadas del subsector de su competencia. Asimismo, preparar la exposición de motivos del subsector en materia de presupuesto y la información consolidada, y apoyar a la Oficialía Mayor con la información necesaria que deban rendir las entidades sectorizadas para efectos de la Cuenta Pública;

XVI.- Definir con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con la participación de la entidad correspondiente, los proyectos adicionales a los estratégicos y prioritarios, y las unidades de medida y la denominación de las metas que se utilizarán en la elaboración de los programas anuales que se servirán de base para la formulación del anteproyecto de presupuesto de las entidades sectorizadas y el Catálogo de Unidades de Medida y Denominación de Metas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XVII.- Integrar la información y elaborar el documento que se remitirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre los anteproyectos de presupuesto de gasto y financiamiento aprobados por el órgano de gobierno de las entidades sectorizadas de su competencia, con el fin de que se integren al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que será remitido a la aprobación de la Cámara de Diputados;

XVIII.- Realizar las acciones acordadas con los directores generales de las entidades paraestatales coordinadas, sobre los esquemas y procedimientos de coordinación y participación de la Secretaría en la elaboración de los presupuestos anuales y sus modificaciones, así como asegurar su congruencia con el programa sectorial y con el presupuesto autorizado, y el cumplimiento de los proyectos estratégicos, y

XIX.- Elaborar para su aprobación, los mecanismos de verificación periódica de los resultados de la ejecución de los presupuestos de las entidades y su congruencia con los objetivos y prioridades del programa sectorial, y proponer las medidas que habrán de adoptarse para corregir las desviaciones detectadas o, en su caso, reformar los presupuestos respectivos.

Artículo 21.- El Director General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos tiene las siguientes atribuciones:

I.- Diseñar, elaborar y previa aprobación, asegurar la aplicación y observancia de las políticas de desarrollo establecidas por el Secretario;

II.- Elaborar las propuestas de lineamientos o bases de gestión de la Secretaría con cada entidad paraestatal coordinada de su subsector de acuerdo a su objeto y peculiares circunstancias, así como el programa anual de información, visita y seguimiento, teniendo en cuenta la opinión del titular de la entidad;

III.- Opinar sobre la información que se integre a los Documentos de Prospectiva del Gas Natural y del Gas Licuado de Petróleo;

IV.- Proponer la política de investigación y desarrollo tecnológico en las entidades coordinadas del subsector, conforme a los lineamientos y recomendaciones de la Dirección General de Investigación y Desarrollo de Tecnología y Medio Ambiente;

V.- Proporcionar la información y documentación que requieran los miembros representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas del subsector, en materia de operaciones productivas, a fin de que puedan pronunciarse y emitir su voto en las sesiones de dichos órganos;

VI.- Llevar el registro de los servidores públicos o personas independientes designados miembros de los consejos de administración o equivalentes en las empresas de participación estatal, y de los designados miembros presidentes de los consejos de administración o equivalentes en los organismos descentralizados no estratégicos o en las empresas de participación estatal prioritaria, así como requerir, integrar, custodiar y analizar la información correspondiente al desempeño de su responsabilidad, cargo o comisión, y preparar los documentos y brindar la asesoría necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones y tareas;

VII.- Realizar opinión sobre las observaciones de los miembros representantes de la Secretaría ante los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas, para la aprobación de las estructuras básicas y estatutos internos orgánicos de las entidades;

VIII.- Integrar la información y elaborar las propuestas de políticas de desarrollo para que las entidades coordinadas del subsector, cumplan con su objeto con autosuficiencia y

autonomía, y con los objetivos y programas establecidos con eficacia, eficiencia y productividad;

IX.- Elaborar propuestas para el establecimiento de comités mixtos de productividad en las entidades paraestatales coordinadas, de constitución de comités o subcomités técnicos especializados de apoyo a los órganos de gobierno, así como dar seguimiento a sus funciones y desempeño;

X.- Integrar la información y elaborar los documentos que se presenten ante los órganos de gobierno y administración de las entidades paraestatales coordinadas para la exacta observancia de la obligatoriedad del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial; así como llevar a cabo las acciones de promoción de las acciones para la concertación o coordinación con los representantes de los grupos sociales interesados y con los particulares o con los gobiernos de los estados, según corresponda, para la ejecución del Plan y programa mencionados;

XI.- Proponer esquemas y procedimientos de coordinación y participación de la Secretaría con las entidades paraestatales coordinadas, en la elaboración de los programas institucionales a corto, mediano y largo plazos, así como asegurar su congruencia con el programa sectorial;

XII.- Proponer los mecanismos de verificación periódica de los resultados de la ejecución de los programas de las entidades y su congruencia con los objetivos y prioridades del programa sectorial, y realizar las medidas que habrán de adoptarse para corregir las desviaciones detectadas o, en su caso, reformar los programas respectivos;

XIII.- Proponer la celebración de convenios de desempeño para asumir compromisos de cumplimiento de metas y objetivos congruentes con los programas institucionales, entre las entidades de su subsector y la Administración Pública Federal Centralizada;

XIV.- Participar en las reuniones que se coordinen con los Comisarios Públicos para el mejor conocimiento de la operación de las entidades del subsector y apoyar en la revisión de los informes y opiniones presentados al órgano de gobierno, o en su caso comités, y llevar a cabo el seguimiento correspondiente;

XV.- Proponer las recomendaciones que se realicen a los miembros representantes de la Secretaría en los órganos de gobierno, sobre medidas adicionales de los sistemas establecidos por el titular de la entidad en materia de control;

XVI.- Realizar propuestas para asegurar que en las entidades y sus subsidiarias de su competencia estén debidamente integrados los consejos de vigilancia y comités de control y auditoría;

XVII.- Proponer mecanismos de coordinación intrasectorial que propicien la complementación de las actividades de las entidades paraestatales ubicadas en el ámbito de su competencia;

XVIII.- Realizar propuestas para la creación, transformación, disolución, liquidación, fusión, escisión o extinción de las entidades paraestatales que correspondan al ámbito de su competencia, o enajenación de la participación estatal en las mismas, así como para recomendar la forma y términos para realizar lo anterior, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y criterios y normas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XIX.- Opinar e intervenir en la revisión de las manifestaciones de impacto regulatorio que elaboren los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal coordinados del subsector, sobre anteproyectos de leyes, decretos legislativos y actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores;

XX.- Someter a consideración del Subsecretario de Hidrocarburos, las autorizaciones para la presentación de las manifestaciones de impacto regulatorio a que se refiere la fracción anterior, ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, por parte de los servidores públicos de los organismos descentralizados responsables de suscribir y enviar a la referida Comisión, los documentos antes mencionados, y

XXI.- Las demás que se deriven de las disposiciones jurídicas que otorgan atribuciones a la Secretaría en su carácter de coordinadora de sector, y de los lineamientos o bases de gestión y programas anuales aprobados, relacionadas con el conocimiento de la operación y evaluación de sus resultados de las entidades paraestatales del subsector.

Artículo 22.- El Director General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos tiene las siguientes atribuciones:

I.- Formular y actualizar las políticas de desarrollo en materia de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos para las entidades paraestatales coordinadas del Subsector Hidrocarburos;

II.- Integrar, para aprobación superior, en coordinación con la Dirección General de Operación Financiera del Subsector Hidrocarburos, la información requerida para el Plan Nacional de Desarrollo y programa sectorial en materia de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos;

III.- Examinar y opinar sobre los estudios de cuantificación y verificación de las reservas de hidrocarburos;

IV.- Examinar y opinar sobre las acciones y políticas de exploración, evaluación de las reservas y los ritmos de extracción de hidrocarburos para asegurar la explotación racional de los mismos y promover su uso eficiente;

V.- Corroborar la factibilidad de los proyectos de inversión en exploración y explotación de hidrocarburos y su congruencia con los lineamientos de la política de energía;

VI.- Realizar estudios sobre el comportamiento y evolución de los mercados de hidrocarburos, así como su impacto en la política energética nacional y la economía en su conjunto;

VII.- Elaborar los dictámenes técnicos respecto de las solicitudes de expropiación u ocupación temporal de terrenos de interés petrolero;

VIII.- Proporcionar a las instancias superiores y al representante de la Secretaría ante los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas del Subsector Hidrocarburos, la información necesaria para el adecuado conocimiento de éstas en materia de exploración y explotación de hidrocarburos y mercado petrolero;

IX.- Realizar propuestas para la creación, transformación, disolución, liquidación, fusión, escisión o extinción de las entidades paraestatales que correspondan al ámbito de su competencia, o enajenación de la participación estatal en las mismas, así como para recomendar la forma y términos para realizar lo anterior, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y criterios y normas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

X.- Dar seguimiento a los programas operativos de exploración y explotación de hidrocarburos;

XI.- Realizar la evaluación de las entidades paraestatales coordinadas del Subsector Hidrocarburos, en materia de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos e informar sobre los resultados a las instancias superiores;

XII.- Elaborar a partir de la información proporcionada por las entidades paraestatales coordinadas del Subsector Hidrocarburos, el Balance Nacional de Hidrocarburos y analizar su evolución histórica y su probable desarrollo futuro;

XIII.- Coadyuvar en el seguimiento y supervisión de las actividades encomendadas al Instituto Mexicano del Petróleo;

XIV.- Conocer y opinar sobre los procesos de programación y presupuestación en materia de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos;

XV.- Proponer, en coordinación con la Dirección General de Operación Financiera del Subsector Hidrocarburos, los lineamientos específicos en materia de gasto a que se sujetará la formulación de los anteproyectos de presupuestos de las entidades paraestatales coordinadas del Subsector Hidrocarburos, que realicen funciones de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos;

XVI.- Conocer y opinar sobre los informes de modificación de precios y tarifas propuestos por las dependencias competentes o los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas del Subsector Hidrocarburos, remitidos por la Dirección General de Operación Financiera del Subsector Hidrocarburos;

XVII.- Llevar y mantener actualizados el registro y catastro petroleros;

XVIII.- Otorgar y registrar las asignaciones de áreas terrestres y marinas para la exploración y explotación de hidrocarburos;

XIX.- Examinar las solicitudes de autorización para la exploración y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos, atendiendo a criterios de optimización, sustentabilidad, preservación, factibilidad y congruencia, así como elaborar los dictámenes correspondientes;

XX.- Otorgar, previo estudio y dictamen de la solicitud de autorización correspondiente, los permisos para la realización de obras y trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos, así como para la construcción y operación de ductos y otras instalaciones petroleras;

XXI.- Dar seguimiento al desarrollo y avance físico-financiero de las obras y trabajos realizados al amparo de cada permiso otorgado por esta unidad administrativa y realizar la vigilancia de los mismos, conforme a lo dispuesto en el Capítulo XI del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo;

XXII.- Emitir los lineamientos para la acreditación de peritos petroleros e integrar el registro correspondiente;

XXIII.- Llevar un registro de trámites y servicios específicos que se realizan y proporcionan por la unidad administrativa a las entidades y otras personas, así como mantener un programa permanente de simplificación y mejora de los mismos, y

XXIV.- Ejercer las atribuciones previstas en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, su Reglamento y demás disposiciones administrativas en materia de hidrocarburos, excepto aquellas que correspondan a otra unidad administrativa de la Secretaría.

Artículo 23.- El Director General de Gas L.P., tiene las siguientes atribuciones:

I.- Otorgar los permisos en materia de gas licuado de petróleo, salvo cuando se trate de ventas de primera mano, transporte y distribución por ductos, conforme a los ordenamientos jurídicos respectivos;

II.- Fomentar y vigilar la observancia de condiciones técnicas y de seguridad y demás normas relacionadas con el transporte, almacenamiento y distribución del gas L.P., excepto cuando se realice por medio de ductos;

III.- Realizar visitas de verificación o comprobación de las instalaciones relativas al transporte, almacenamiento y distribución de gas L.P., a fin de comprobar que se cumplan con las normas legales y disposiciones contenidas en los ordenamientos respectivos, salvo aquellas que sean del ámbito de competencia de otras unidades administrativas y, en su caso coordinar con las entidades federativas la verificación del cumplimiento con las normas oficiales mexicanas;

IV.- Aprobar y hacer el seguimiento operativo de las personas acreditadas en materia de gas L.P., excepto cuando se realice por medio de ductos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo y las normas oficiales mexicanas aplicables;

V.- Solicitar a las unidades de verificación aprobadas por la Secretaría, los apoyos necesarios a fin de verificar que los titulares de los permisos de transporte, almacenamiento y distribución de gas L.P., excepto cuando se realicen por medio de ductos, cumplan con las normas legales aplicables y disposiciones contenidas en los ordenamientos respectivos;

VI.- Aplicar las sanciones en las materias de su competencia, establecidas en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, así como en otras disposiciones jurídicas aplicables;

VII.- Conocer y resolver, en la esfera de su competencia, los recursos administrativos que se interpongan en contra de los actos que emita;

VIII.- Participar en la revisión y determinación de los componentes del precio de venta del gas L.P., con la Comisión Reguladora de Energía, la Dirección General de Operación Financiera del Subsector de Hidrocarburos y la Dirección General de Formulación de Política Energética;

IX.- Solicitar y aprobar a las entidades de la Administración Pública Paraestatal del sector coordinado, los programas de verificación o comprobación de sus instalaciones destinadas al transporte, almacenamiento y suministro de gas L.P., excepto cuando se realice por medio de ductos;

X.- Aprobar los programas para la prevención de accidentes de quienes realicen actividades altamente riesgosas que puedan causar graves desequilibrios ecológicos y que sean remitidos para ello por la Dirección General de Seguridad y Protección al Ambiente en los términos de las disposiciones jurídicas, en lo conducente a las normas oficiales mexicanas aplicables al transporte, almacenamiento y distribución de gas L.P., excepto cuando se realice por medio de ductos;

XI.- Expedir normas oficiales mexicanas, así como promover y participar en la elaboración de las mismas, con objeto de satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad en lo concerniente al trasporte, almacenamiento y distribución de gas L.P., excepto cuando se realice por medio de ductos;

XII.- Presentar al Subsecretario del ramo para su aprobación, el programa anual de normalización, mismo que deberá dar a conocer a las distintas áreas involucradas para asegurar su oportuna participación;

XIII.- Presidir los Comités Consultivos Nacionales de Normalización en materia de gas L.P., excepto cuando se realice por medio de ductos, que le designe el Subsecretario del ramo;

XIV.- Participar en los Comités Consultivos Nacionales de Normalización en las materias relacionadas con el ejercicio de sus atribuciones, así como en los subcomités y grupos de trabajo respectivos;

XV.- Participar con las unidades administrativas de la Secretaría, en la elaboración de los anteproyectos de normas oficiales mexicanas que les correspondan;

XVI.- Proponer al Subsecretario del ramo la modificación o cancelación de las normas oficiales mexicanas, cuando no subsistan las causas que motivaron su expedición;

XVII.- Cumplir con lo señalado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, en particular con los capítulos II y V, comprendidos en el Título Tercero de ambos ordenamientos, en lo referente a la elaboración y modificación de las normas oficiales mexicanas, así como al funcionamiento y competencia de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización;

XVIII.- Verificar o comprobar la aplicación y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que en materia de gas L.P., se expidan, excepto cuando se realice por medio de ductos;

XIX.- Realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de gas L.P., excepto cuando se realice por medio de ductos, así como aprobar a las personas acreditadas que se requieran para dicha evaluación;

XX.- Elaborar los anteproyectos de iniciativas de leyes y de reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y demás actos administrativos de carácter general de naturaleza análoga que deban publicarse en el **Diario Oficial de la Federación**, así como elaborar sus correspondientes manifestaciones de impacto regulatorio, para su envío a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por parte del Oficial Mayor de la Secretaría a efecto de obtener su dictamen y difusión entre los sectores;

XXI.- Elaborar las manifestaciones de impacto regulatorio y la información y los documentos relativos a los trámites que aplican para su inscripción y actualización en el Registro Federal de Trámites y Servicios;

XXII.- Promover la difusión de las disposiciones jurídicas, así como los formatos de trámites e información correspondiente, en materia de gas L.P., excepto cuando se realice por medio de ductos;

XXIII.- Formular las consultas y solicitudes necesarias ante otras Dependencias del Ejecutivo Federal, derivadas de la aplicación de los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales y sus disposiciones reglamentarias en el ámbito de su competencia, y

XXIV.- Suscribir documentos relativos a visitas de verificación o comprobación, así como las resoluciones en el ámbito de su competencia, incluyendo recursos administrativos, sanciones, clausuras, revocaciones de permisos y aprobaciones de unidades de verificación, laboratorios de prueba y organismos de certificación, que constituyan actos de autoridad en el ejercicio de la aplicación de las leyes y disposiciones administrativas aplicables.

Los actos de autoridad que emita en el ámbito de su competencia, derivados del ejercicio de la aplicación de las leyes y disposiciones administrativas aplicables, relativos a visitas de verificación o comprobación, así como resoluciones, incluyendo sanciones, clausuras y revocaciones de permisos, al igual que aprobaciones de unidades de verificación, laboratorios de prueba y organismos de certificación, los podrán suscribir y realizar los Directores de Operación y Supervisión, Normalización, Apoyo Legal y Enlace, Estadística y Asuntos Especiales, de acuerdo con las asignaciones de responsabilidades que les confiera el Director General o los manuales de organización que se publiquen en el **Diario Oficial de la Federación**. Las respuestas de quejas o atención ciudadana y de prevención, los podrán suscribir los directores y subdirectores de área previstos en el Manual de Organización General de la Secretaría.

El Director General y los directores mencionados podrán representar legalmente a la Secretaría, tanto a su titular por sí como a éste actuando en representación del Presidente de la República, al Subsecretario de Hidrocarburos y a la propia Dirección General, ante los particulares y cualquier órgano jurisdiccional, en los trámites y procedimientos de cualquier índole, cuando se requiera su intervención conforme a las disposiciones legales y administrativas en las materias a que se refiere este precepto.

Artículo 24.- El Director General de Seguridad y Protección al Ambiente tiene las siguientes atribuciones:

I.- Representar a la Secretaría en materia de hidrocarburos, ante las dependencias y organismos intergubernamentales de seguridad y protección al ambiente en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

II.- Participar, y en su caso coordinar a las entidades paraestatales del Subsector Hidrocarburos, en la formulación de los acuerdos y compromisos de sus empresas en materia de seguridad física, protección civil, seguridad e higiene en el trabajo y protección al ambiente;

III.- Establecer lineamientos en materia de seguridad y protección al ambiente, que permitan la conducción corporativa de las empresas del Subsector Hidrocarburos, a través de programas y de la evaluación de sus resultados;

IV.- Vigilar que las entidades paraestatales del Subsector Hidrocarburos, cumplan con las disposiciones y normas de seguridad y de protección al ambiente y dar seguimiento al cumplimiento de los programas adoptados para tal efecto;

V.- Someter a aprobación de la Dirección General de Gas L.P., de la Dirección General de Instalaciones Eléctricas y Recursos Nucleares y de la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus atribuciones, los programas para la prevención de accidentes de quienes realicen actividades altamente riesgosas que puedan causar graves desequilibrios ecológicos y que sean remitidos para ello por la autoridad competente, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

VI.- Apoyar a la Dirección General de Investigación y Desarrollo de Tecnología y Medio Ambiente en la identificación de necesidades de investigación en el área de seguridad industrial y protección al medio ambiente;

VII.- Elaborar las manifestaciones de impacto regulatorio y la información a inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios, y

VIII.- Participar en la concertación de programas y acciones instrumentadas por la autoridad ambiental, que apliquen al Subsector Hidrocarburos, para prevenir y controlar la contaminación del medio marino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO NOVENO

De la Subsecretaría de Política Energética y Desarrollo Tecnológico y sus Unidades Administrativas adscritas

Artículo 25.- El Subsecretario de Política Energética y Desarrollo Tecnológico tiene las siguientes atribuciones:

I.- Coordinar, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Secretario, la planeación del sector energético, y fungir como enlace entre la Secretaría y las diversas dependencias de la Administración Pública Federal y oficinas de la Presidencia de la República en los asuntos relacionados con la planeación nacional del desarrollo y la política energética del país;

II.- Presentar para aprobación superior, propuestas de política energética nacional que contribuyan al desarrollo económico y social del país y a posicionar e incrementar la competitividad del sector energético mexicano;

III.- Impulsar y coordinar las políticas de investigación y desarrollo tecnológico del sector y de sus entidades y proponer lineamentos de política que contribuyan a fomentar la investigación y el desarrollo tecnológicos en materia de hidrocarburos, electricidad, energía nuclear y energías renovables;

IV.- Coordinar el desarrollo y actualización de la plataforma de información energética del sector, así como la construcción y operación de los instrumentos que sustenten los análisis y la planeación estratégica;

V.- Promover la realización de estudios que permitan analizar la situación y perspectivas del mercado de energía, así como coordinar las actividades para sistematizar y difundir la información sectorial, con objeto de contar con elementos para la formulación de políticas y programas para el desarrollo del sector;

VI.- Promover la realización de estudios técnicos e investigaciones para impulsar el desarrollo tecnológico del sector, promover el desarrollo de fuentes de energía renovables y minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente de las actividades relacionadas con la exploración, producción, transmisión y uso de la energía, y coordinar aquellos que no sean responsabilidad directa de las entidades del sector;

VII.- Organizar, coordinar y realizar los foros de consulta popular para la elaboración, actualización y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, del programa sectorial y demás programas que señale el Presidente de la República;

VIII.- Preparar y presentar a la aprobación del Secretario la información y los documentos requeridos para la formulación, revisión y adecuación del Plan Nacional de Desarrollo, así como presentar a la dependencia competente la propuesta de la Secretaría;

IX.- Establecer las bases metodológicas y proporcionar la asesoría técnica requerida a las unidades administrativas de la Secretaría en la participación que corresponda a la esfera de sus competencias respectivas para la elaboración y revisión del programa sectorial; integrar dicho programa, presentarlo a aprobación del Secretario; obtener el dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y someter por conducto del Titular de la Dependencia a la consideración y aprobación del Presidente de la República, para su posterior publicación en el **Diario Oficial de la Federación**;

X.- Apoyar y participar, con las Subsecretarías, en los procedimientos de coordinación y concertación de acciones para la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo, programa sectorial y demás programas, así como para proveer a su exacta observancia;

XI.- Integrar la información y elaborar el documento para aprobación del Secretario, que se remite al Ejecutivo Federal para el informe que rinde el Presidente de la República a la Comisión Permanente, sobre las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y programa sectorial;

XII.- Participar con las Subsecretarías en la elaboración, revisión y adecuación de los programas institucionales que tengan que formular las entidades sectorizadas, y cuidar que dichos programas mantengan congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial y la política energética del país;

XIII.- Preparar y presentar a la aprobación del Secretario el informe anual de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, y remitir a la dependencia competente que integrará el Informe que el Ejecutivo Federal proporciona a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión;

XIV.- Integrar la información y elaborar los documentos, que se remiten al Ejecutivo Federal para el informe que rinde el Presidente de la República al Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país;

XV.- Impulsar el desarrollo de modelos y metodologías que permitan fortalecer la capacidad de planeación y de coordinación de políticas de la Secretaría, proponer mecanismos que aseguren la congruencia entre la planeación estratégica del sector y la programación y presupuestación que realizan las entidades, así como proponer indicadores y metodologías para seguir de manera general el proceso de planeación de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, en los aspectos relacionados con la formulación, seguimiento y evaluación de políticas energéticas;

XVI.- Participar, en coordinación con las Subsecretarías de la Dependencia, en el análisis y dictamen sobre la procedencia de las inversiones asociadas a los principales proyectos de los Subsectores Electricidad e Hidrocarburos, en congruencia con lo establecido en las prospectivas y en los lineamientos de política energética del país;

XVII.- Apoyar la participación de los miembros representantes de la Secretaría en los consejos de administración de las entidades del sector y participar en aquellos que determine el Secretario;

XVIII.- Coordinar la elaboración anual del Balance Nacional de Energía; la integración del Programa Estratégico de Energía de Largo Plazo, el Anuario Estadístico del Sector Energético y el Anuario Estadístico Petroquímico;

XIX.- Aprobar los documentos de Prospectiva del Sector Eléctrico, de Gas Natural y de Gas Licuado de Petróleo;

XX.- Fomentar, en el ámbito de su competencia, el análisis y difusión de las innovaciones tecnológicas y su posible incorporación en el sistema productivo nacional;

XXI.- Proponer lineamientos de política que contribuyan a la diversificación de las fuentes de energía y al aprovechamiento del potencial de energía renovable del país y al desarrollo sustentable y que promuevan el aprovechamiento integral del potencial de generación, cogeneración y uso eficiente de energía entre las entidades del sector, así como proponer, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, incentivos y mecanismos regulatorios que impulsen el ahorro de energía y el desarrollo de fuentes de energía renovable;

XXII.- Coordinar la evaluación del impacto y la interrelación de la política energética con las políticas de protección ambiental y de acción climática que establezcan las autoridades competentes para mantener su congruencia en el ámbito federal;

XXIII.- Representar a la Secretaría en los grupos de trabajo, en comités intersecretariales y en los organismos y foros que determine el Secretario en materia de energía, ciencia y tecnología, y cambio climático;

XXIV.- Fomentar, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, la participación de los particulares en el sector de la energía, y

XXV.- Fungir como enlace entre la Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el desarrollo de las acciones y programas de información estadística y geográfica.

Artículo 26.- El Director General de Formulación de Política Energética tiene las siguientes atribuciones:

I.- Efectuar el diagnóstico del sector energético y proporcionar a las dependencias y entidades del sector, la asesoría técnica necesaria para la planeación estratégica y para la formulación y aplicación de la política energética;

II.- Formular, con la participación de las unidades administrativas de la Secretaría y las entidades sectorizadas, una visión integrada de los requerimientos de energía del país a corto, mediano y largo plazos, proponer lineamientos generales que permitan optimizar el suministro y el aprovechamiento de los recursos energéticos, e integrar la propuesta del Programa Estratégico de Energía de Largo Plazo;

III.- Integrar y consolidar la información y los documentos requeridos para la formulación, revisión y adecuación del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, que le proporcionen las unidades administrativas de la Secretaría en los asuntos de su competencia;

IV.- Integrar y consolidar la información y el proyecto de programa sectorial y, en su caso, sus revisiones y adecuaciones, con las propuestas que le proporcionen las Subsecretarías y la Oficialía Mayor;

V.- Realizar, en colaboración con las Direcciones Generales de cada ramo, el análisis y estudio de los proyectos de programas institucionales de las entidades sectorizadas, y preparar las opiniones sobre la congruencia de los mismos con el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial y la política energética del país;

VI.- Integrar y consolidar la información y el proyecto de informe anual de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, con las propuestas que le proporcionen las Subsecretarías y la Oficialía Mayor;

VII.- Elaborar estudios e integrar lineamientos de política para coordinar y orientar las acciones de planeación en las entidades paraestatales que promuevan la participación de los particulares dentro del sector de la energía;

VIII.- Impulsar y coordinar el desarrollo de estudios e investigaciones multidisciplinarias sobre el sector energético, y su relación con el desarrollo económico y social del país, así como con el medio ambiente;

IX.- Integrar los documentos de Prospectiva de Gas Natural y de Gas Licuado de Petróleo, con la participación de las unidades administrativas de la Secretaría y las entidades públicas y privadas que intervienen en el sector, en congruencia con los lineamientos de política energética, así como someterlos a su aprobación;

X.- Revisar, con la participación de las unidades administrativas de la Secretaría que corresponda, el documento de Prospectiva del Sector Eléctrico y someterlo a su aprobación;

XI.- Analizar, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, la congruencia de las inversiones asociadas a los principales proyectos del sector, de acuerdo a lo previsto en las prospectivas correspondientes y con los lineamientos de la política energética del país; así como la congruencia de las políticas comerciales y de precios y tarifas energéticos con la política energética nacional;

XII.- Integrar el Anuario Estadístico Petroquímico y el Anuario Estadístico del Sector Energético con la participación de las entidades públicas y privadas que intervienen en el sector, en congruencia con los lineamientos de política energética;

XIII.- Integrar, sistematizar y difundir la información del sector relacionada con la actividad energética;

XIV.- Elaborar anualmente el Balance Nacional de Energía, con base en la información proporcionada por las entidades públicas y privadas sobre la producción, transformación, distribución y consumo de energía, así como de materiales energéticos;

XV.- Elaborar y revisar los programas sectorial y regionales de desarrollo de estadística y de información geográfica, a través de los procedimientos participativos establecidos en la materia;

XVI.- Recopilar, sistematizar y difundir la información geográfica y estadística del sector, así como la realización de los trabajos necesarios para la participación de la Secretaría en el Servicio Nacional de Información Geográfica, y

XVII.- Elaborar, con la colaboración de las unidades administrativas de la Secretaría, los lineamientos de coordinación de las entidades paraestatales del sector en cuanto a la captación, generación y presentación de datos de carácter sectorial para los sistemas de información.

Artículo 27.- El Director General de Investigación y Desarrollo de Tecnología y Medio Ambiente, tiene las siguientes atribuciones:

I.- Formular, con intervención de los institutos de investigación y las entidades del sector, una visión integrada de los requerimientos de investigación y desarrollo tecnológicos del sector energético del país a corto, mediano y largo plazos, y proponer lineamientos que permitan su fomento y difusión para contribuir al desarrollo sustentable, al crecimiento económico y a incrementar la competitividad del país;

II.- Diseñar, elaborar, someter a aprobación y asegurar la aplicación y observancia de las políticas sobre investigación y desarrollo tecnológico en el sector energético establecidas por el Secretario;

III.- Integrar la información y elaborar las propuestas de políticas de desarrollo para que los institutos de investigación del sector cumplan con los objetivos y programas establecidos con eficacia, eficiencia y productividad;

IV.- Integrar la información y proporcionar la asesoría requerida para el desempeño de las actividades en materia de planeación del desarrollo tecnológico del sector;

V.- Diseñar mecanismos para estimular la vinculación de los programas y actividades de investigación y desarrollo tecnológico del sector con el sistema productivo nacional, con el sector educativo y con otras instituciones de investigación científica y tecnológica, así como para contribuir a la difusión y adopción de los desarrollos tecnológicos en materia energética;

VI.- Promover la realización de estudios técnicos e investigaciones para impulsar el desarrollo tecnológico del sector, promover el desarrollo de fuentes de energía renovables y minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente de las actividades relacionadas con la exploración, producción, transmisión y uso de la energía;

VII.- Efectuar, con la participación de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, el diagnóstico de la evolución de la diversificación de las fuentes de energía y del aprovechamiento del potencial de energía renovable del país y proponer lineamientos de política que promuevan el aprovechamiento integral del potencial de generación, cogeneración y el ahorro y el uso eficiente de energía entre las entidades del sector, y que contribuyan a la diversificación de las fuentes de energía y al aprovechamiento del potencial de energía renovable del país y al desarrollo sustentable;

VIII.- Efectuar el diagnóstico del estado del cumplimiento de la normatividad ambiental en materia energética y de las principales tendencias en el diseño y la aplicación de normas ambientales, y diseñar un sistema de evaluación del impacto y la interrelación de la política energética con las políticas de protección ambiental y de acción climática que establezcan las autoridades competentes para mantener su congruencia en el ámbito federal;

IX.- Participar en los grupos de trabajo, comités intersecretariales y foros sobre política de investigación y desarrollo tecnológico, uso de fuentes alternas de energía, normatividad ambiental en materia energética y cambio climático, así como representar, en su caso, a la Secretaría;

X.- Brindar apoyo técnico a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en lo relativo a la protección al ambiente en el manejo de materiales, procesos y residuos radiactivos, y proponer, junto con la Dirección General de Instalaciones Eléctricas y Recursos Nucleares, las políticas para el uso pacífico de la energía nuclear;

XI.- Estudiar, analizar y emitir opinión sobre las observaciones de los miembros representantes de la Secretaría ante los órganos de gobierno de los institutos de investigación sectorizados, para la aprobación de sus estructuras básicas y estatutos internos orgánicos, y

XII.- Impulsar y coordinar el desarrollo de modelos y metodologías que permitan fortalecer la capacidad de planeación de largo plazo de la Secretaría.

CAPÍTULO DÉCIMO

De la Oficialía Mayor y sus Unidades Administrativas adscritas

Artículo 28.- El Oficial Mayor tiene las siguientes atribuciones:

I.- Proponer al Secretario políticas, acciones de innovación y modernización administrativa en los asuntos de su competencia, para elevar la calidad de los servicios que presta la unidad administrativa a su cargo y las adscritas, atendiendo a las necesidades y requerimientos de sus usuarios;

II.- Proponer al Secretario y coordinar las acciones de reingeniería de procesos y de mejora continua para asegurar una eficiente y efectiva organización y funcionamiento productivo y profesional de la Secretaría, mediante programas de mediano y largo plazos que, con la participación de otras unidades administrativas, permitan la modernización operativa;

III.- Coordinar las actividades de las unidades administrativas establecidas en las fracciones I y V del artículo 3 de este Reglamento, para presentar la información y los documentos requeridos para la formulación, revisión y adecuación del Plan Nacional de Desarrollo;

IV.- Coordinar las actividades de las unidades administrativas establecidas en las fracciones I y V del artículo 3 de este Reglamento, para presentar la información para la formulación, revisión y adecuación del programa sectorial y demás programas que determine el Presidente de la República;

V.- Preparar y aportar, a las Subsecretarías y unidades administrativas de enlace en la materia, la información requerida por éstas o por las entidades para la elaboración, revisión y adecuación de los programas institucionales de las entidades sectorizadas, conforme a sus atribuciones;

VI.- Coordinar las actividades de las unidades administrativas establecidas en las fracciones I y V del artículo 3 de este Reglamento, para presentar la información para la preparación del informe anual de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial;

VII.- Obtener de las Subsecretarías los datos e información necesarias, coordinar las actividades de las unidades administrativas de la Secretaría y presentar la información de ésta y del sector para la Cuenta de la Hacienda Pública Federal que presenta el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, previa aprobación del Secretario;

VIII.- Integrar la exposición de motivos sectorial y el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y de las entidades sectorizadas para su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

IX.- Fungir como enlace entre la Secretaría y las unidades administrativas que tengan asignadas la función de presupuesto y contabilidad de las entidades sectorizadas, a fin de preparar la Cuenta Pública;

X.- Integrar la información y elaborar el documento para aprobación del Secretario, que se remite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la formulación del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación;

XI.- Autorizar y suscribir los convenios y contratos en los que la Secretaría sea parte y que afecten su presupuesto interno, y en general fungir como órgano representativo de la dependencia en todos los asuntos de administración y presupuestales, así como suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, o de las que le sean señaladas por delegación, o le correspondan por suplencia, vigilando el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en los asuntos de su competencia;

XII.- Establecer las bases y lineamientos para la constitución y operación de los procesos de administración de los recursos humanos, financieros, materiales, de servicios generales e informáticos de la dependencia; así como el otorgamiento de servicios sociales a los trabajadores de la Secretaría y a sus familiares derechohabientes, y a la prestación de servicios de apoyo general administrativo;

XIII.- Coordinar el proceso interno de programación, presupuestación, control y evaluación de la Secretaría; y asegurar a las unidades administrativas de la Dependencia la orientación y el apoyo técnico efectivos, así como presentar para aprobación del Secretario, el programa y presupuesto anuales de la dependencia y sus modificaciones;

XIV.- Autorizar el ejercicio del presupuesto de la Secretaría, coordinar los trabajos de seguimiento del ejercicio presupuestal, así como emitir las bases y los lineamientos para el establecimiento y operación del proceso de contabilidad;

XV.- Establecer las bases y lineamientos para que las unidades administrativas de la Secretaría proporcionen la información programática y presupuestal necesaria para atender

oportunamente las tareas de planeación institucional y generar los reportes sobre el seguimiento del ejercicio presupuestario;

XVI.- Coordinar con los Subsecretarios los procedimientos y términos en que deberán proporcionar las entidades paraestatales de sus respectivos subsectores, la información programática y presupuestal requerida para cumplir con las obligaciones que le competen;

XVII.- Fungir como enlace entre la Secretaría y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; apoyar técnicamente a las unidades administrativas y coordinar el proceso de mejora regulatoria de la Secretaría; integrar y someter a la opinión de dicha Comisión el programa bianual de mejora regulatoria, coordinar el seguimiento del programa y remitir los reportes periódicos sobre los avances del mismo; suscribir y enviar en representación de la Secretaría los anteproyectos de iniciativas de leyes y decretos legislativos, y de reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, instructivos, directivas, manuales, disposiciones administrativas que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y demás actos administrativos de carácter general de naturaleza análoga que deban publicarse en el **Diario Oficial de la Federación**, así como enviar a dicha Comisión sus correspondientes manifestaciones de impacto regulatorio para su dictamen y difusión entre los sectores interesados;

XVIII.- Proporcionar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la información a inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios, y notificar cualquier modificación a la misma dentro de los términos previstos, así como proveer se incorpore y se mantenga actualizada la información requerida en los distintos registros a cargo de la mencionada Comisión, incluyendo el electrónico;

XIX.- Coordinar el seguimiento del programa de mejora regulatoria de la Secretaría y del sector coordinado, así como la suscripción de los asuntos relacionados con la misma, las manifestaciones de impacto regulatorio y la información a inscribirse en el Registro Federal de Trámites y Servicios;

XX.- Acordar la designación, o en su caso la remoción, y las reglas de actuación de los representantes de la Secretaría ante las comisiones mixtas que se integren;

XXI.- Conducir las relaciones laborales de la Secretaría y las relaciones con el Sindicato Nacional de la misma, teniendo en cuenta los programas de mediano y largo plazos de modernización administrativa de la Secretaría; así como presentar al Secretario las propuestas de Condiciones Generales de Trabajo, una vez recogidas las necesidades y los requerimientos de las distintas unidades administrativas de la Dependencia;

XXII.- Dar a conocer y promover el adecuado cumplimiento de las Condiciones Generales de Trabajo, con posterioridad a su aprobación;

XXIII.- Establecer, conforme a lo dispuesto en la ley de la materia, las bases y lineamientos para el otorgamiento de estímulos y recompensas y, conjuntamente con los titulares de las distintas unidades administrativas, asegurar el oportuno otorgamiento de los mismos, así como acordar la imposición de sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal de la Secretaría en materia laboral, de acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo y las demás disposiciones jurídicas aplicables;

XXIV.- Establecer, teniendo en cuenta a las distintas unidades administrativas de la Dependencia, las políticas en materia de capacitación, de profesionalización y de desarrollo laboral del personal de la Secretaría;

XXV.- Establecer las bases para la elaboración y actualización del Manual de Organización General de la Secretaría y de los demás manuales de organización, de procesos administrativos y de servicios al público, y presentarlos al Secretario para aprobación; así como asegurar la adecuada difusión y entendimiento por los servidores públicos;

XXVI.- Someter a la consideración del Secretario, con el dictamen técnico y la opinión de congruencia con los programas de mediano y largo plazos de modernización operativa de la Secretaría, los cambios en la organización de las unidades administrativas que propongan sus titulares, así como disponer que las modificaciones autorizadas se incorporen en los manuales de organización y de procedimientos correspondientes;

XXVII.- Emitir normas y lineamientos para regular las adquisiciones, la administración de los almacenes, la asignación, utilización, conservación, aseguramiento, reparación, mantenimiento, rehabilitación y aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles al servicio de la Secretaría;

XXVIII.- Establecer, controlar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil para el personal, instalaciones, bienes e información de la Secretaría, así como emitir las normas necesarias para su operación, desarrollo y vigilancia, y

XXIX.- Coordinar y evaluar la operación de los procesos de desarrollo informático y de telecomunicaciones de la Secretaría.

Artículo 29.- El Director General de Recursos Humanos tiene las siguientes atribuciones:

I.- Proponer, para aprobación superior, las políticas a que se sujetará la prestación de servicios administrativos en materia de recursos humanos, organización, capacitación y profesionalización y servicios sociales de la Secretaría;

II.- Establecer y operar los sistemas de administración de recursos humanos, capacitación, profesionalización y de servicios sociales para los trabajadores de la Secretaría, así como para su modernización y llevar el seguimiento de su operación;

III.- Fijar normas y criterios para la selección, contratación, inducción, desarrollo, control, capacitación y profesionalización del personal de la Secretaría, asimismo, asegurar su cumplimiento oportuno;

IV.- Autorizar los nombramientos del personal de la Secretaría, los cambios de adscripción entre unidades administrativas, los casos de terminación de los efectos del nombramiento y las bajas en el empleo, así como llevar a cabo los trámites y registros que se deriven;

V.- Realizar la liquidación y el pago de las remuneraciones al personal de la Secretaría, determinar la aplicación de descuentos y los casos de suspensión de pago, y realizar los descuentos y sus correspondientes pagos cuando así lo determinen las autoridades judiciales, así como operar el sistema de estímulos y recompensas y los mecanismos para la aplicación del Reglamento de Escalafón;

VI.- Establecer y operar el sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos de mando de la Secretaría;

VII.- Ordenar que se efectúen los pagos y enteros que resulten procedentes en favor de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de la representación sindical autorizada y de los particulares, de las cantidades por concepto de retenciones hechas por su cuenta al personal de la Secretaría;

VIII.- Expedir hojas de servicios, constancias, credenciales y demás documentos relativos al personal de la Secretaría;

IX.- Proponer a las autoridades superiores las Condiciones Generales de Trabajo y sus modificaciones, difundir las disposiciones legales y administrativas que regulan la actuación de los servidores públicos, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones laborales e imponer y registrar las sanciones a que se haga acreedor el personal de la Secretaría;

X.- Proponer a la superioridad la designación, o en su caso, remoción de los representantes de la Secretaría ante la Comisión Mixta de Escalafón y ante las comisiones mixtas que se integren, fijar las reglas de su actuación, así como mantener actualizado el sistema de escalafón para los trabajadores de la dependencia;

XI.- Establecer y coordinar los procesos para disponer oportunamente de información de las entidades paraestatales del sector, en materia de servicios personales, organización y modernización;

XII.- Apoyar con estudios en materia de organización y estructura ocupacional, la creación de entidades paraestatales y órganos desconcentrados, así como realizar las gestiones necesarias ante las dependencias competentes, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, para la autorización y registro de sus estructuras orgánicas y salariales;

XIII.- Formular, para aprobación superior, las políticas de organización y funcionamiento de la Secretaría, así como los lineamientos generales para la organización sectorial;

XIV.- Promover la modernización de la organización y funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría, mediante el diseño de estructuras orgánicas, métodos, sistemas y procesos que eleven la calidad de los servicios y procesos sustantivos y administrativos, y presentar las propuestas a las autoridades competentes para su autorización;

XV.- Integrar y mantener actualizado el Manual de Organización General de la Secretaría y el Manual de Organización General del Sector Energía; así como coordinar la elaboración y actualización de los demás manuales de organización, de procedimientos, de trámites y de servicios al público de las unidades administrativas de la Secretaría;

XVI.- Establecer y operar el sistema de aseguramiento de la calidad de los servicios y procesos de las unidades administrativas de la Secretaría;

XVII.- Coordinar y promover, de acuerdo con las disposiciones generales que emitan las dependencias competentes, las políticas, normas y lineamientos a que deberán sujetarse las

entidades paraestatales coordinadas en sus acciones de servicio civil de carrera y de desarrollo de recursos humanos, y

XVIII.- Coordinar y promover en el sector la aplicación del sistema de sueldos y prestaciones de los servidores públicos.

Artículo 30.- El Director General de Programación y Presupuesto tiene las siguientes atribuciones:

I.- Coadyuvar con las unidades administrativas y con entidades sectorizadas en las actividades relacionadas con la programación anual, de conformidad con los lineamientos de reforma al sistema presupuestal;

II.- Apoyar a las unidades administrativas competentes de la Secretaría en la realización de estudios que permitan hacer compatibles los objetivos, metas y recursos que establece la programación y presupuestación anuales, con los programas de mediano plazo del sector;

III.- Asegurar que se cumplan las normas por las unidades administrativas de la Secretaría y las entidades sectorizadas, para la elaboración, evaluación, revisión y adecuación de los programas y presupuestos anuales y los demás programas que determine el Secretario;

IV.- Llevar el registro presupuestal y contable del ejercicio de las transferencias autorizadas a las entidades paraestatales coordinadas y elaborar el informe que se debe proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su inclusión en la Cuenta Pública;

V.- Asesorar y apoyar a las unidades administrativas de la Secretaría para integrar el programa institucional anual y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así como la información que se requiera para la Cuenta de la Hacienda Pública;

VI.- Analizar e integrar para su inclusión en la Cuenta de la Hacienda Pública la información que corresponda a las entidades sectorizadas y elaborar el documento que contenga la información que deberá presentarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VII.- Asesorar y apoyar a las unidades administrativas de la Secretaría para integrar la información que se requiera para la formulación, revisión y adecuación del programa sectorial y demás programas que determine el Presidente de la República, y preparar la propuesta de la Secretaría; así como asesorar y apoyar para establecer las medidas que resulten necesarias para su cumplimiento;

VIII.- Asesorar y apoyar a las unidades administrativas de la Secretaría para integrar la información que se requiera para la preparación del informe anual de las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, así como asesorar y apoyar para establecer las medidas que resulten necesarias para su cumplimiento;

IX.- Asesorar y apoyar a las unidades administrativas de la Secretaría para integrar el programa anual y el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, así como la información que se requiera para la Cuenta de la Hacienda Pública;

X.- Establecer e innovar normas y lineamientos en coordinación con las Subsecretarías, a que deben sujetarse las unidades administrativas de la Secretaría para la programación y presupuestación de sus actividades, así como asesorarlas en su formulación, seguimiento y evaluación;

XI.- Establecer y operar el sistema para la administración de los recursos financieros de la Secretaría, así como dar seguimiento a su operación;

XII.- Integrar y someter para aprobación superior el programa y el presupuesto anual de la Secretaría;

XIII.- Establecer las normas y lineamientos para el ejercicio, seguimiento, control y evaluación del presupuesto de la Secretaría; dictaminar las solicitudes de modificación, y en su caso, tramitar éstas ante las dependencias competentes;

XIV.- Definir, aplicar y vigilar el trámite de pago de los compromisos de la Secretaría, de conformidad con estándares de calidad y servicio;

XV.- Comunicar a las entidades paraestatales coordinadas las asignaciones de recursos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondientes a las transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, y

XVI.- Expedir a favor de las entidades paraestatales coordinadas las cuentas por liquidar certificadas para ejercer las transferencias fiscales autorizadas.

Artículo 31.- El Director General de Recursos y Servicios Generales tiene las siguientes atribuciones:

I.- Adquirir o arrendar los bienes y contratar los servicios que requiera el funcionamiento de la Secretaría, de acuerdo con el programa que al efecto se integre;

II.- Proporcionar la información necesaria sobre los bienes inmuebles a cargo de la Secretaría, a fin de mantener actualizados los catálogos e inventarios de los bienes y recursos de la Nación;

III.- Dictaminar los casos no sujetos a licitación pública relativos a la adquisición y arrendamiento de bienes, a la contratación de servicios y a la enajenación de bienes muebles que deben ser autorizados por las autoridades superiores;

IV.- Celebrar los contratos de obra pública y de servicios asociados que realice la Secretaría, llevar a cabo la administración de las obras en los casos que se determinen, así como controlar y dar seguimiento a su ejecución en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

V.- Apoyar el establecimiento, control y evaluación del Programa Interno de Protección Civil para el personal, instalaciones, bienes e información de la Secretaría, así como aplicar y difundir las normas que emitan las autoridades competentes para la operación, desarrollo y vigilancia del programa;

VI.- Coordinar, de acuerdo a estándares de calidad, el servicio de vigilancia e intendencia en las áreas comunes de los inmuebles que ocupa la Secretaría;

VII.- Establecer e innovar normas, sistemas y el proceso de administración de los recursos materiales de la Secretaría, a fin de asegurar el uso racional y óptimo aprovechamiento de los mismos;

VIII.- Ejecutar los procesos de destino final de los bienes muebles, autorizados conforme a la normatividad vigente;

IX.- Operar el programa de aseguramiento de los bienes patrimoniales de la Secretaría;

X.- Participar en las actividades de carácter sectorial en materia de adquisiciones y recursos materiales, que le encomiende el Oficial Mayor;

XI.- Elaborar y difundir las normas para la integración y modernización de los archivos de las unidades administrativas, administrar el archivo general de la Secretaría conforme a la normatividad vigente y el archivo y custodia de los contratos y convenios que suscriba la Secretaría, así como expedir, cuando proceda, copias certificadas de los documentos que lo integran;

XII.- Establecer y aplicar un control para el uso de las diferentes salas de juntas de la Dependencia, otorgando a las áreas usuarias los servicios y apoyos que requieran para el desarrollo de sus reuniones, en un marco de calidad y eficiencia;

XIII.- Establecer y aplicar un control a través de una oficialía de partes para la recepción y distribución de la correspondencia de la Dependencia, tanto de entrada como de salida, procurando su mejora continua, y

XIV.- Coordinar y modernizar la integración y funcionamiento de un centro documental y de publicaciones del sector.

Artículo 32.- El Jefe de la Unidad de Informática y Telecomunicaciones tiene las siguientes atribuciones:

I.- Formular, promover, coordinar e instrumentar los programas, estrategias, políticas y normas necesarias para encauzar y modernizar la actividad y desarrollo de la informática y las telecomunicaciones en la Secretaría;

II.- Organizar y dirigir la operación del Centro de Cómputo de la Secretaría, y proporcionar eficientemente los diversos servicios de procesamiento de información y de comunicación a las unidades administrativas de la Secretaría, de conformidad con estándares de calidad;

III.- Desarrollar, y en su caso, coordinar y apoyar técnicamente las tareas de diseño, construcción, implantación y operación de los sistemas y aplicaciones de informática y telecomunicaciones que requieran las áreas de la Secretaría, coadyuvando a la innovación de su funcionamiento;

IV.- Desarrollar en coordinación con la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría, los programas de capacitación de personal para lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos informáticos disponibles;

V.- Determinar en coordinación con la Dirección General de Recursos y Servicios Generales las acciones que coadyuven en la adquisición y contratación de bienes y servicios informáticos y de telecomunicaciones, que se requieran para expandir, sustituir o complementar los equipos, paquetes y sistemas con que cuenta la Secretaría;

VI.- Llevar a cabo las acciones necesarias en materia de coordinación, concertación y gestión con organismos y empresas nacionales e internacionales relacionadas con la informática y las telecomunicaciones;

VII.- Gestionar ante las autoridades correspondientes, los trámites y permisos que se requieran para el funcionamiento y operación de los bienes y servicios informáticos que se adquieran y contraten, así como su actualización permanente;

VIII.- Mantener en óptimas condiciones de uso el equipo instalado;

IX.- Coordinar el Comité de Informática;

X.- Opinar, en su caso, en los supuestos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Información Estadística y Geográfica, y

XI.- Realizar las acciones necesarias de promoción en las unidades administrativas de la Secretaría y, en su caso de las entidades paraestatales coordinadas, sobre los métodos y normas técnicas aprobados para la captación de los datos objeto de registro, sobre administración de directorios de personas físicas o morales, catastros, padrones, inventarios y demás registros administrativos, civiles o financieros.

CAPÍTULO UNDÉCIMO

De los Órganos Administrativos Desconcentrados

Artículo 33.- Los órganos administrativos desconcentrados se sujetarán a sus ordenamientos específicos y al presente Reglamento, y en los términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal están jerárquicamente subordinados a esta Dependencia; y sus titulares acordarán por conducto del Subsecretario correspondiente, la resolución de los asuntos de la competencia de cada uno.

Estas unidades administrativas desconcentradas contarán con las unidades subalternas que figuren en su presupuesto, cuya adscripción y funciones deberán especificarse y regularse en su reglamento o manual de organización interno; incluyendo sus propios servicios de apoyo administrativo, legal y demás necesarios, a fin de salvaguardar su autonomía técnica y operativa. Asimismo, contarán cuando proceda con el órgano interno de control correspondiente.

Artículo 34.- Los titulares de los órganos desconcentrados de la Secretaría tienen, dentro del ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

I.- Representar a los órganos desconcentrados, y celebrar los actos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de su objeto. Para la mejor distribución y desarrollo del trabajo podrán, en ejercicio de sus facultades delegables, autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que realicen actos y suscriban documentos, siempre que ello no implique delegación de facultades;

II.- Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades encomendadas a la unidad administrativa a su cargo;

III.- Representar administrativamente a los órganos desconcentrados ante los órganos jurisdiccionales y administrativos en los procedimientos de cualquier índole, cuando se requiera su intervención, y en general fungir como órgano representativo de la dependencia;

La representación a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá ante los tribunales judiciales federales y del fuero común, las autoridades del trabajo, y ante cualquier otra autoridad, en todo trámite, así como intervenir en cualquier otro asunto en donde tengan interés; asimismo, para que designen representantes y sustituyan mediante oficio las atribuciones que se le confieren; interpongan denuncias y querellas, se desistan de ellas, otorguen el perdón legal, contesten demandas y reconvenciones que se entablen en contra de la unidad administrativa que representan; opongan excepciones dilatorias y perentorias, rindan toda clase de pruebas, nombren peritos, reconozcan firmas y documentos, presenten testigos, formulen preguntas y repreguntas, tachen de falsos a los que presente la contraria, articulen y absuelvan posiciones; recusen jueces superiores e inferiores; oigan autos y sentencias interlocutorias y definitivas, consientan de los favorables y pidan revocación, apelen, interpongan juicio de amparo y los recursos que las leyes de la materia establecen, y se desistan de ellos, así como promuevan toda clase de actos procesales necesarios en los términos de ley.

El titular del órgano desconcentrado y los directores previstos en su reglamento o estatuto interno o manual de organización general, representan legalmente a la Secretaría, tanto a su titular por sí como a éste actuando en representación del Presidente de la República, a los Subsecretarios de la Dependencia según el caso, y al propio órgano administrativo desconcentrado, ante los particulares y ante cualquier órgano jurisdiccional, en los trámites y procedimientos de cualquier índole cuando se requiera su intervención conforme a las leyes que corresponde aplicar en las materias de sus respectivas competencias.

La representación a que se refiere la presente fracción, la podrán realizar los titulares de las áreas de asuntos jurídicos de los organismos desconcentrados que corresponda; así como otros servidores públicos de conformidad a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que rijan su funcionamiento;

IV.- Celebrar contratos, convenios y, en general, toda clase de actos jurídicos directamente vinculados con el desarrollo de las atribuciones del órgano administrativo desconcentrado a su cargo, o relacionados con la administración de los recursos humanos, bienes muebles e inmuebles, materiales y financieros que le sean asignados para el cumplimiento de sus atribuciones;

V.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, o de las que le sean señaladas por delegación, para cumplir eficazmente con el desempeño de los asuntos que tiene encomendados la unidad administrativa a su cargo;

VI.- Suscribir títulos y operaciones de crédito relativas a la administración de los recursos del órgano desconcentrado que representan;

VII.- Nombrar y remover al personal técnico y administrativo, así como intervenir en el desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su cargo; autorizar los movimientos internos del personal, así como licencias considerando las necesidades del servicio, y participar directamente o a través de un representante en los casos de sanciones, remoción y cese de su personal en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las Condiciones Generales de Trabajo;

VIII.- Coordinar los trabajos y la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del órgano desconcentrado;

IX.- Elaborar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público correspondientes a la unidad administrativa a su cargo, conforme a los lineamientos establecidos;

X.- Evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas del órgano administrativo desconcentrado a su cargo y, en su caso, expedir o instruir la expedición de los lineamientos para el análisis, control y evaluación mediante los procedimientos respectivos, formando grupos de trabajo o unidades de apoyo que se hagan necesarios para tales efectos;

XI.- Planear y coordinar las estrategias de promoción, difusión e información que aseguren la comunicación, el conocimiento y el aprovechamiento de los programas, servicios técnicos y productos del órgano desconcentrado que representan, en los sectores público, social y privado;

XII.- Proporcionar la información requerida por la Secretaría, necesaria para la evaluación y diseño de la política energética;

XIII.- Definir los mecanismos y lineamientos para instrumentar el proceso interno de programación, presupuestación, evaluación, control presupuestario y contabilidad así como autorizar las erogaciones, vigilar el ejercicio del presupuesto asignado al órgano desconcentrado que representan;

XIV.- Preparar la información y los documentos requeridos, en los asuntos de su competencia, para integrar el programa bianual de mejora regulatoria en relación con la normatividad y trámites que aplican, y para formular los reportes sobre los avances correspondientes;

XV.- Preparar la información y los documentos correspondientes para su inscripción y actualización, por parte del Oficial Mayor, en el Registro Federal de Trámites y Servicios de cada trámite que aplican;

XVI.- Participar en la elaboración de los anteproyectos de iniciativas de leyes y decretos legislativos; preparar con la asesoría de la Dirección de Legislación los anteproyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares, lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y demás actos administrativos de carácter general de naturaleza análoga que deban publicarse en el **Diario Oficial de la Federación**, y formular las manifestaciones de impacto regulatorio correspondientes a los documentos mencionados, previamente a su envío, por parte del Oficial Mayor, a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su dictamen y difusión entre los sectores interesados;

XVII.- Participar en los comités o subcomités y comisiones de conformidad a las disposiciones de ley y reglamentarias en el ámbito de sus atribuciones, o en los que le encomiende el Secretario o su superior jerárquico;

XVIII.- Proponer al Subsecretario del ramo correspondiente para su aprobación el programa anual de normalización, mismo que deberá dar a conocer a las distintas áreas involucradas para asegurar su oportuna participación;

XIX.- Presidir, y en su caso designar al Presidente de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización correspondientes;

XX.- Participar en los Comités Consultivos Nacionales de Normalización en las materias relacionadas con el ejercicio de sus atribuciones, así como en los subcomités y grupos de trabajo respectivos;

XXI.- Participar, en su caso, con las unidades administrativas de la Secretaría, en la elaboración de los anteproyectos de normas oficiales mexicanas que les correspondan;

XXII.- Cumplir con lo señalado en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, en particular con los capítulos II y V, comprendidos en el Título Tercero de ambos ordenamientos, en lo referente a la elaboración y modificación de las normas oficiales mexicanas, así como al funcionamiento y competencia de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización;

XXIII.- Certificar, verificar, supervisar, vigilar e inspeccionar la aplicación y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que en la materia de su competencia se expidan;

XXIV.- Realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, relativas a las materias que correspondan al ámbito de aplicación del órgano desconcentrado que representan;

XXV.- Aprobar a las personas acreditadas que se requieran para la evaluación de la conformidad señalada en la fracción anterior;

XXVI.- Ejercer con estricto apego a los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, las atribuciones siguientes:

- **a)** Emitir las políticas, bases y lineamientos para la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza;
- **b)** Autorizar la erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones;
- **c)** Dictaminar directamente, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, salvo en los casos de las fracciones II, V y XII del propio precepto;
- **d)** Recibir para su consideración las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las propuestas de autorizaciones de los supuestos no previstos en dichas políticas, bases y lineamientos, que le presente el Comité a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
- **e)** En el caso de las contrataciones a que se refiere el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, determinar qué servidor público deberá autorizar los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, a que se refiere la fracción XVII de dicho precepto legal;
- **f)** Respecto a la suma de las operaciones que se realicen al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fijar, en casos excepcionales, un porcentaje mayor al veinte por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado en cada ejercicio presupuestal;
- **g)** Fijar las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y
- **h)** Suscribir convenios y contratos relacionados con el cumplimiento de sus atribuciones, en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

XXVII.- Ejercer con estricto apego a los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, las atribuciones siguientes:

- **a)** Emitir las políticas, bases y lineamientos para la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

b) Establecer, en caso de requerirse, el comité de obras públicas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual tiene las funciones que en dicho artículo se precisan;

c) Recibir para su consideración las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como las propuestas de autorizaciones de los supuestos no previstos en dichas políticas, bases y lineamientos, que le presente el Comité a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

d) Fijar las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

e) Autorizar, cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, un porcentaje de anticipo mayor, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

f) Designar a los servidores públicos que pueden ordenar la suspensión de los trabajos contratados y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, en términos del artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y

g) Suscribir convenios y contratos relacionados con el cumplimiento de sus atribuciones, en materia de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

XXVIII.- Ordenar la integración del archivo del órgano desconcentrado, conforme a las normas establecidas, y expedir, cuando proceda, copias certificadas de los documentos que obren en el mismo, así como las constancias establecidas en otros ordenamientos jurídicos aplicables;

XXIX.- Instaurar, tramitar y resolver los Procedimientos Administrativos que con motivo de sus atribuciones como autoridad, lleven a cabo, incluyendo todos los actos administrativos y jurídicos relacionados con el mismo;

XXX.- Proponer a la Secretaría actualizaciones al marco jurídico del sector, así como participar y coadyuvar con las instancias competentes, en la elaboración de anteproyectos de iniciativas de leyes y disposiciones administrativas relativas al ámbito de su competencia, y

XXXI.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y el Secretario, dentro de la esfera de sus atribuciones.

En el caso de la Comisión Reguladora de Energía, las atribuciones a que se refiere este artículo serán ejercidas por su Presidente o por la propia Comisión como órgano colegiado, conforme a las disposiciones jurídicas que rigen su actuación y en lo que no se opongan a las mismas. Las atribuciones que en materia de normalización se consignan en las fracciones XIX a XXV del presente artículo serán ejercidas por dicha Comisión.

Artículo 35.- La Comisión Reguladora de Energía es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que goza de autonomía técnica y operativa en los términos de su Ley. La Comisión tiene las atribuciones específicas que se establecen en su Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 36.- El Secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía tiene las atribuciones siguientes:

I.- Prevenir a los interesados para que subsanen la omisión de datos o la falta de cumplimiento de requisitos previstos en las disposiciones aplicables, cuando los escritos que se presenten ante la Comisión no los contengan o cumplan;

II.- Admitir a trámite o desechar los escritos iniciales que sean presentados ante la Comisión, incluyendo los relativos a recursos administrativos que se interpongan contra actos de la Comisión Reguladora de Energía, y cuando ésta carezca de competencia para conocer el asunto, remitir la promoción a la dependencia o entidad que sea competente;

III.- Realizar los actos necesarios para la tramitación de procedimientos administrativos que se lleven ante la Comisión, incluyendo la recepción y el turno de documentos, el control general de trámites y procedimientos, la notificación de actos administrativos y el registro de documentos cuando así proceda;

IV.- Expedir a petición de los interesados las constancias a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

V.- Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la Comisión;

VI.- En ausencia del Presidente de la Comisión ejercer las atribuciones previstas en el artículo 34 de este Reglamento; salvo lo dispuesto en contrario, o de acuerdo a los términos y a las excepciones a favor de otros servidores públicos establecidos, en el Reglamento Interior que

apruebe la Comisión Reguladora de Energía según la fracción IV del Artículo 7 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y se publique en el **Diario Oficial de la Federación**, y

VII.- Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y la Comisión, dentro de la esfera de sus atribuciones, así como todas las que competan a las unidades administrativas que se le adscriban.

El Secretario Ejecutivo será suplido en sus ausencias por el Director General que designe la Comisión Reguladora de Energía.

Artículo 37.- La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría. La Comisión tiene las atribuciones específicas que se establecen en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 38.- Al frente de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias hay un Director General, quien se auxiliará por los titulares de las áreas sustantivas, los jefes de departamento y de área, así como por el personal técnico y administrativo necesario, que figure en el presupuesto autorizado.

Artículo 39.- El Director General de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias tiene dentro del ámbito de su competencia las atribuciones siguientes:

I.- Vigilar que la exploración, explotación y beneficio de minerales radiactivos, el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear y, en general, todas las actividades relacionadas con la misma, se lleven a cabo con apego a las disposiciones jurídicas sobre seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares o radiactivas, de manera que se eviten riesgos a la salud humana y se asegure la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en los términos de la legislación aplicable;

II.- Expedir las autorizaciones, permisos, licencias y dictámenes de evaluación, a las instalaciones nucleares y radiactivas, prestadores de servicios de las mismas, así como al personal que en ellas laboren. Asimismo, está facultado para revocar, suspender y modificar éstas, y

III.- Suscribir, ejecutar y dar seguimiento a los convenios internacionales de carácter bilateral y multilateral, en materia de seguridad nuclear, seguridad radiológica y salvaguardias.

Los titulares de las unidades sustantivas, quedan facultados para ejercer las funciones que son competencia de la Dirección General, respecto al trámite de los asuntos pertenecientes a la esfera de sus respectivas responsabilidades hasta dejarlos en estado de resolución. Los titulares de las unidades sustantivas podrán suscribir, a nombre de la Dirección General, los documentos que les autorice el titular de la misma, a fin de simplificar los trámites y procedimientos administrativos que son de su competencia.

Artículo 40.- La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría. La Comisión tiene las atribuciones específicas que se establecen en su Decreto de creación y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 41.- El Director General de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía tiene las atribuciones siguientes:

I.- Identificar en el territorio nacional, áreas de oportunidad a favor del fomento del ahorro y uso eficiente de la energía, así como del aprovechamiento de las energías renovables en los sectores público, social y privado;

II.- Concertar convenios de colaboración con instituciones de educación superior, asociaciones de profesionistas y cámaras industriales y de comercio de las entidades federativas del país, para fomentar el desarrollo de programas conjuntos en materia de ahorro y uso eficiente de la energía;

III.- Coordinar con las áreas técnicas de la Comisión, el esquema de trabajo bajo el cual participen los consultores y empresas especializadas en la realización de acciones para fomentar el ahorro y uso eficiente de la energía;

IV.- Proponer los mecanismos y estrategias de financiamiento, sean públicos, privados, nacionales e internacionales, a fin de obtener mayor acceso a fondos que permitan la instrumentación de programas y acciones en materia de su competencia, así como coordinar la evaluación de los impactos energéticos, económicos y ambientales de los diversos programas de la Comisión, y

V.- Participar en los subcomités internos de la Comisión de Energía, en los que sea convocado y desempeñar las funciones que le sean establecidas por los órganos colegiados que operen en la Comisión, en el ámbito de sus atribuciones.

Para el buen desempeño de las funciones de la Comisión, el Director General se auxiliará de un Secretario Ejecutivo, Coordinadores, Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento, así como por el personal técnico administrativo necesario, que figure en el presupuesto autorizado.

Artículo 42.- Las ausencias de los titulares de los Órganos Desconcentrados serán suplidas por los servidores públicos que ellos mismos designen mediante acuerdo. Las ausencias del Presidente de la Comisión Reguladora de Energía serán suplidas por el comisionado que él mismo designe mediante acuerdo.

CAPITULO DUODÉCIMO

Del Órgano Interno de Control

Artículo 43.- Al frente del Órgano Interno de Control hay un Titular designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien en el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará por los Titulares de las Áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades, designados en los mismos términos.

Artículo 44.- Los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo previsto por el artículo 26, fracciones III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, relativas al control, evaluación, investigación, auditoría, visitas, trámite de quejas y denuncias, substanciación del procedimiento de responsabilidades, imposición de sanciones, resolución de recursos, calificación de los pliegos preventivos de responsabilidades, defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales federales, representando al Titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como denuncias ante las autoridades competentes de los hechos que pudieran constituir algún delito.

Artículo 45.- El Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Dependencia, recibirá y resolverá las inconformidades que se prevén en las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El Titular del Órgano Interno de Control resolverá los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones relativas a dichas inconformidades.

Artículo 46.- Las ausencias del Titular del Órgano Interno de Control, conforme al artículo 33, segundo y tercer párrafos del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, serán suplidas por los Titulares de las Áreas de Responsabilidades, Auditoría y Quejas, en ese orden, y durante la ausencia de éstos por aquél que designe el Titular de dicho órgano fiscalizador.

Artículo 47.- Con sujeción a su presupuesto autorizado, los órganos desconcentrados contarán con un Órgano Interno de Control, en los términos del artículo 43 del presente Reglamento, y en el caso de que algún órgano desconcentrado no cuente con dicha instancia fiscalizadora, las atribuciones a que se refiere este artículo se ejercerán por el Órgano Interno de Control en la Dependencia.

Artículo 48.- La Secretaría y sus órganos desconcentrados, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo quinto transitorio del Decreto de Reforma a las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de las Entidades Paraestatales y Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del 24 de diciembre de 1996, proporcionarán al Titular de su respectivo Órgano Interno de Control los recursos humanos y materiales que requiera para la atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos de la Secretaría y su órganos desconcentrados están obligados a proporcionar el auxilio que requiera el Titular de cada Órgano Interno de Control para el desempeño de sus atribuciones.

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO

De la Suplencia de los Servidores Públicos de la Secretaría

Artículo 49.- El Secretario será suplido en sus ausencias, indistintamente, por el Subsecretario de Electricidad o por el Subsecretario de Hidrocarburos o por el Subsecretario de Política Energética y Desarrollo Tecnológico, atendiendo a la materia de que se trate, y en los demás casos por el servidor público primeramente mencionado siempre que dicha suplencia no esté encomendada a otro; en ausencia de ellos por el Oficial Mayor. En los juicios de amparo en que deba intervenir en representación del Presidente de la República o como titular de la Secretaría, así como en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, será suplido por los servidores públicos antes señalados en el orden indicado y, sólo en ausencia de ellos, por el Director General de Asuntos Jurídicos o en forma indistinta por los Directores de lo Contencioso, de Legislación y de Estudios y Consultas.

También suplirán al Secretario en sus ausencias, los titulares de las unidades administrativas adscritas conforme al artículo 3 fracción I de este Reglamento, en todos los asuntos de sus respectivas competencias.

Artículo 50.- Los Subsecretarios y el Oficial Mayor serán suplidos en sus ausencias, para el despacho de los asuntos de su competencia, por el titular de la dirección general adscrita al área de su

responsabilidad que al efecto sea designado por el Secretario o por el servidor público que vaya a ausentarse.

Artículo 51.- Las ausencias de los directores generales, jefes de unidad, directores de área, subdirectores de área y jefes de departamento, serán suplidas por los servidores públicos de la jerarquía inmediata inferior que designen dichos funcionarios o en los términos establecidos en el Manual de Organización General de la Secretaría.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al decimoquinto día natural siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 1o. de junio de 1995 y sus reformas.

Artículo Tercero.- Los asuntos que se encuentren en trámite en las unidades administrativas establecidas en el Reglamento que se abroga, serán atendidos y resueltos por las unidades administrativas establecidas en el presente Reglamento, de acuerdo a sus respectivas atribuciones.

El Oficial Mayor coordinará las acciones necesarias y tomará las medidas correspondientes para la reasignación del personal, expedientes, archivo, mobiliario y, en general, equipo y demás recursos.

Artículo Cuarto.- Los trabajadores de base de la Secretaría de Energía serán readscritos a las unidades administrativas establecidas en el presente Reglamento, conforme lo determine su titular, respetándose en todos los casos sus derechos laborales conforme a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Artículo Quinto.- En tanto no se expidan los manuales que este Reglamento menciona, el Secretario de Energía queda facultado para resolver las cuestiones que se deban regular conforme a dichos documentos.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil uno.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Energía, **Tirso Ernesto Martens Rebolledo**.- Rúbrica.

AVISOS
JUDICIALES Y GENERALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en México, D.F.

EDICTO

En los autos del Juicio de Amparo número 392/2000-X, promovido por Delia Rull Ortega, por su propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y actuario adscrito a dicho Juzgado, con fecha veintisiete de abril del dos mil uno, se dictó un auto por el que se ordena emplazar a los terceros perjudicados Víctor Flores Zúñiga, María Guadalupe Colín García de Sánchez, Froylán Zárate Vázquez y Arturo Sánchez García, por medio de edictos, que se publicarán por tres veces, de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación**, y en el periódico de mayor circulación de esta ciudad, a fin de que comparezcan a este juicio a deducir sus derechos en el término de treinta días contados a partir del siguiente al en que se efectúe la última publicación, quedando en el Juzgado la demanda de garantías y anexos que se acompañan a la misma, apercibido que de no apersonarse al presente juicio, las ulteriores notificaciones aun las de carácter personal, se harán en términos de lo dispuesto por la fracción II, del artículo 30 de la Ley de Amparo, en acatamiento al auto de veinte de marzo y del citado con antelación, se procede a hacer una relación suscinta de la demanda de garantías, en la que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y como terceros perjudicados a Víctor Flores Zúñiga, María Guadalupe Colín García de Sánchez, Froylán Zárate Vázquez y Arturo Sánchez García, y precisa como acto reclamado lo siguiente: del Juez Vigésimo Tercero de lo Civil y del Secretario actuario o de acuerdos adscritos al Juzgado, reclamo la falta de emplazamiento a la suscrita, en el Juicio Ordinario Civil sobre prescripción positiva, promovido por Víctor Flores Zúñiga, en contra de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A. (BANOBRAS, S.A.), registrado bajo el número de expediente 1366/86, Primera Secretaría, así como todo lo actuado en dicho expediente hasta la sentencia definitiva de fecha 8 de agosto de 1987, y su ejecución, consistente en el otorgamiento de la escritura notarial número 22,982 de fecha 22 de octubre de 1998, otorgada a favor del actor Víctor Flores Zúñiga, ante el Notario Publico número 186 del Distrito Federal, licenciado Juan Manuel Asprón Pelayo. B) Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, la ejecución de la sentencia definitiva,

consistente en la cancelación y tildación en la sección "A", tomo 211, volumen 4º. A fojas 347, partida número 1128, así como la nueva inscripción en folio real número 9086762.

México, D.F., a 7 de mayo de 2001

El Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal

Lic. Sergio Guzmán Leyva

Rúbrica.

(R.- 143530)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito
Oaxaca, Oax.

EDICTO

Francisco Javier Sánchez Hurtado

Presente.

En el Juicio de Garantías número 754/2000, promovido por Francisco Abel Sánchez Hurtado, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil, así como de su respectivo ejecutor, residente en esta ciudad, en el que se señalaron como actos reclamados: **a).-** El auto de exequendum, dictado en el expediente mercantil número 265/98, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad de Oaxaca; **b).-** La diligencia de embargo de fecha 18 de agosto de 1998, efectuada en el inmueble ubicado en la calle Cinco de Febrero número trescientos seis, de la colonia Doctores de esta ciudad, descrita en el capítulo de antecedentes de esta demanda; **c).-** La inscripción de la diligencia de embargo en el Registro Público de la Propiedad de este Distrito Judicial del Centro, el cual grava el inmueble de mi propiedad, con el número de Partida 190, del Tomo 360, con fecha 29 de enero de 1999, de la Sección Segunda de ese Registro Público de la Propiedad; **d).-** La sentencia de condena, de fecha 10 de marzo de 1999, dictada en el expediente mercantil número 265,98, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad, en la cual se ordena el remate del inmueble de mi propiedad; **e).-** Los avalúos emitidos por los perito de las partes en dicho expediente mercantil, emitidos respecto al inmueble de mi propiedad que reclamo; **f).-** La audiencia de Remate en Pública Almoneda, que se señale y efectúe en el expediente mercantil número 265/998, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad, en la cual se saque a pública subasta, el inmueble de mi propiedad que reclamo; **g).-** La diligencia de adjudicación a una tercera persona, Del inmueble de mi propiedad que reclamo, que se decrete en el expediente mercantil número 265/998; por auto de esta fecha (veinte de marzo de dos mil uno), se ordenó emplazarlo por edictos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción II de la Ley de amparo, en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley invocada; edictos que serán publicados por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de mayor circulación de la República, así como otro en loa propia ciudad de Oaxaca de Juárez. En consecuencia, se le hace saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación y queda en la Secretaría del Juzgado a su disposición la copia simple de traslado que le corresponde respecto de la demanda, y que de no comparecer por sí o por apoderado, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista de acuerdos.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 20 de marzo de 2001.

La Secretaria

Lic. Dora Martha Toro Gurrión

Rúbrica.

(R.- 143533)

CALL CENTER, S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL DE LIQUIDACION AL 7 DE MAYO DEL 2001

Activo $ 0

Pasivo $ 0

Capital contable $ 0

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 247 fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles y para los efectos señalados por dicha disposición legal se lleva a cabo la publicación del balance final de liquidación de Call Center, S.A. de C.V., en liquidación con cifras al 16 de febrero del 2001.

México, D.F., a 7 de mayo del 2001.

Liquidador

Felipe Martínez Pérez

Rúbrica.

(R.- 143660)

AVISO NOTARIAL

Por acta número 22,079, de 3 de mayo de 2001, ante mí, Carlos Morales Fonseca repudió la herencia, Jorge Morales Fonseca, aceptó la herencia y Efraín Morales Moreno aceptó el cargo de albacea en el intestado de Francisca Fonseca Ramírez y formará el inventario y avalúo.

México, D.F., a 14 de mayo de 2001.

El Notario No. 82

Lic. Adalberto Perera Ferrer

Rúbrica.

(R.- 144077)

AVISO NOTARIAL

280,311

TOMAS LOZANO MOLINA, Notario Número Diez del Distrito Federal hago saber, para los efectos del artículo 873 del Código de Procedimientos Civiles que en escritura número 280,211 de fecha 08-05-2001, ante mí, se inició la tramitación notarial de la sucesión testamentaria a bienes de Luis Mora Vázquez, quien también era conocido como Luis de la Mora Vázquez.

María del Carmen Aguilar Villalpando de Mora (quien también acostumbra usar el nombre de Carmen Aguilar Villalpando de Mora) repudió en forma expresa la herencia y renunció igualmente al cargo de albacea de dicha sucesión Carmen Mora Aguilar de Ortega, (también conocida como María del Carmen) y Luis de la Mora Aguilar, reconocieron la validez del testamento, así como sus derechos otorgado por el autor de la sucesión, aceptaron la herencia dejada a su favor, así como el cargo de albaceas mancomunados que les fue conferido y manifestaron que en su oportunidad formularán el inventario correspondiente.

México, D.F., 20 de mayo de 2001.

Notario No. 10

Lic. Tomás Lozano Molina

Rúbrica.

(R.- 144095)

Estados Unidos Mexicanos

Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito

EDICTO

Al tercero perjudicado Marfe, Empresa en Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, o quienes sus derechos representen, en el expediente formado con motivo de la demanda de amparo indirecto promovida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, representada por María Cecilia Rojo Cabrera, contra el acto del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, respecto al toca civil número 433/2000, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora en el Juicio Ordinario Administrativo Federal B/2000, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; por proveído del veinticinco de abril del año en curso, se ordenó emplazarle, como en efecto se hace, por medio de edictos que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico de mayor circulación en la República Mexicana, para que en el plazo de diez días que establece el artículo 167 de la Ley de Amparo, siguientes al de la última publicación de este edicto, se apersone en el referido Juicio de Garantías antes este Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa, en su carácter de tercero perjudicado, si a sus derechos conviniere, en la inteligencia de que la copia de la demanda queda a disposición en la Secretaría de Acuerdos de este órgano jurisdiccional. Expido el presente en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de mayo del año dos mil.

El Secretario del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito.

Lic. Jaime Salvador Reyna Anaya

Rúbrica.

(R.- 144126)

Estados Unidos Mexicanos

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

México

Cuarta Sala Civil

EDICTO

National Oilwell L.P.

Por auto de fecha veintisiete de septiembre del dos mil, dictado en el cuaderno de amparo relativo al toca 2456/99/2, por ignorarse su domicilio, se les ordenó emplazar, a efecto de que dentro de los treinta días siguientes a la última publicación de este edicto, comparezcan ante la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal, en el amparo interpuesto por la parte actora Perforadata S.A.

de C.V., en contra de la resolución de fecha dieciocho de agosto del año próximo pasado, misma que obra en el toca 2456/99/2 y que confirma el fallo dictado por el Juez Quincuagésimo Tercero de lo Civil en el Distrito Federal en esta ciudad, el once de mayo del mismo año, relativo al Juicio Ordinario Mercantil, seguido por Perforadata, S.A. de C.V., en contra de National Oilwell L.P. quedando a su disposición las copias de la demanda de garantías en la Secretaría de la Cuarta Sala Civil.

Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación**, así como en el periódico El Heraldo de México.

Atentamente

México, D.F., a 5 de abril del 2001.

El Secretario de Acuerdos

Lic. Héctor Julián Aparicio Soto

Rúbrica.

(R.- 144128)

Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Primera Sala

EDICTO

C. Paulina Mondragón viuda de Sánchez

En cumplimiento a lo ordenado por auto de quince de los corrientes, dictado en el cuaderno de amparo respectivo, relativo al Juicio Especial Hipotecario, seguido por Banpais, S.A. en contra de Paulina Mondragón viuda de Sánchez, se ordenó emplazarla por este conducto, a efecto de hacerle de su conocimiento la interposición del Juicio de Garantías promovido por la parte actora, en contra de la sentencia dictada por esta Sala con fecha veinticuatro de octubre del año próximo pasado, en el toca 1111/2000-01, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la hoy quejosa, en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de junio del año próximo pasado, pronunciada por el ciudadano juez Vigésimo Séptimo Civil, en el expediente número 148/95, a efecto de que acuda ante el H. Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, en defensa de sus intereses, quedando a su disposición en la Secretaría de esta Sala las copias de traslado respectivas.

México, D.F., a 20 de febrero de 2001.

El Secretario de Acuerdos

Lic. Mario Alfredo Miranda Cueva

Rúbrica.

(R.- 144163)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California
Tijuana, B.C.

EDICTO

Emplazamiento a la quinto perjudicada Inmobiliaria Denisse, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, Moisés Guillermo Aguilar Romo, así como a éste en lo personal.

En el Juicio de Amparo 136/2000-A, promovido por Diana Sarabia Armendáriz, contra actos del juez Quinto de lo Civil con residencia en esta ciudad y otras autoridades, consistente en todo lo actuado en el Juicio Ejecutivo Mercantil número 041/94, así como sus consecuencias que son lanzamiento de un bien inmueble arrendado por la parte quejosa, sin haber sido oída y vencida en juicio; por auto de esta fecha se acordó emplazar a usted, en su carácter de tercero perjudicado, por medio de edictos que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico El Excélsior de la ciudad de México, Distrito Federal, haciéndole saber que deberá presentarse dentro del término de treinta días contados del siguiente de la última publicación, y si pasado dicho término no se apersonara, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal, le surtirán efectos por medio de lista; en la inteligencia de que se han señalado las once horas del día dieciséis de julio de dos mil uno, para la celebración de la audiencia constitucional, en el Juicio de Garantías antes mencionado.

Tijuana, Baja California, a 2 de abril de 2001.

La Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado

Lic. Verónica Zavala Hermosillo

Rúbrica.

(R.- 144170)

DELFIN DE JALISCO, S.A.

(EN LIQUIDACION)
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 30 DE ABRIL DE 2001

Activo	
Circulante	
Deudores diversos	
Saugatuck Corporation	$21,663,258
Suma el activo	$21,663,258
Capital contable	
Capital social	$ 8,000
Utilidades acumuladas	21,304,025
Utilidad del periodo de liquidación	351,233
Suma el capital	$21,663,258

Del remanente distribuible le corresponde a cada accionista la cantidad de $2,707.91 (dos mil setecientos siete pesos 91/100 M.N.) por cada peso de capital social aportado, previa entrega de los títulos originales representativos de las acciones de las que son poseedores.

Este balance se publica para los efectos del artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.

México, D.F., a 11 de mayo de 2001.
Liquidador
C.P. Rafael Pagaza Ramírez
Rúbrica.

(R.- 144176)

OSSO PUBLICACIONES, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 4 DE MAYO DE 2001
(en liquidación)

Activo		
Circulante		
Bancos	$ 187,434	
Deudores diversos	95,177	
Total del activo circulante	282,611	
Total del activo	$ 282,611	
Pasivo y capital contable		
Total pasivo	$	
Capital contable		
Capital social $ 50,000.00		
Resultado de ejercicios anteriores		236,997
Pérdida del ejercicio	. 4,386	
Total del capital contable	282,611	
Total del pasivo y capital contable		$282,611

México, D.F., a 4 de mayo de 2001.
Liquidador
María Teresa Amalia Casado Alverdi
Rúbrica.

(R.- 144188)

INDUSTRIAS INNOPACK, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de Administración y a los accionistas:

Hemos examinado los balances generales consolidados de Industrias Innopack, S.A. de C.V. y subsidiarias (hasta 1998 Industrias Clazago, S.A. de C.V.) al 31 de diciembre de 1998, 1999 y 2000 y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera, que les son relativos, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos, con base en nuestras auditorías.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la

administración y de la presentación de los estados financieros consolidados tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

En 2000, de acuerdo al Boletín D-4 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la empresa y subsidiarias registraron el efecto acumulado del Impuesto Sobre la Renta diferido disminuyendo el capital contable y reconociendo un pasivo a largo plazo, al inicio del año, por $10,863, según se detalla en la nota 11.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Industrias Innopack, S.A. de C.V. y subsidiarias al 31 de diciembre de 1998, 1999 y 2000, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los cambios en su situación financiera, por los años terminados en esas fechas, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México.

28 de febrero de 2001.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

C.P.C. Fernando Holguín Maillard

Rúbrica.

INDUSTRIAS INNOPACK, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

31 DE DICIEMBRE DE 1998, 1999 Y 2000

(miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2000)

Activo	**1998**	**1999**	**2000**
Activo circulante			
Efectivo y equivalentes	$ 47,387	91,698	211,654
Cuentas por cobrar (nota 5)	352,449	317,344	428,046
Inventarios (nota 6)	211,361	265,177	444,797
Otros activos circulantes	-	3,093	2,427
Total del activo circulante	611,197	677,312	1,086,924
Inmuebles, maquinaria y equipo (notas 7 y 8b y d)	1,752,236	1,992,870	2,097,044
Otros activos	78,898	60,734	90,485
Cuentas por cobrar a largo plazo (nota 2)	-	15,562	11,864
Impuesto Sobre la Renta diferido (nota 11)	-	-	21,217
	$2,442,331	2,746,478	3,307,534
Pasivo y capital contable			
Pasivo circulante			
Préstamos bancarios (nota 8a)	$311,815	60,460	60,604
Vencimientos circulantes			
Deuda a largo plazo (nota 8b)	93,117	142,371	148,891
Crédito bursátil (nota 8c)	-	-	209,414
Arrendamiento financiero (nota 8d)	14,855	28,684	39,192
Cuentas por pagar	261,975	424,706	647,122
Pasivos acumulados	32,196	19,074	18,503
Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo y Participación del Personal en las Utilidades (nota 11)	2,328	2,774	8,702
Compañías relacionadas (nota 4)	6,150	4,938	6,802
Total del pasivo circulante	722,436	683,007	1,139,230
Deuda a largo plazo y crédito bursátil excluyendo vencimientos circulantes (nota 8e)	661,569	707,132	360,456
Prima de antigüedad (nota 1g.)	3,018	2,527	7,431
Total del pasivo	1,387,023	1,392,666	1,507,117
Capital contable (nota 9)			
Capital social	908,452	1,229,343	1,614,685
Utilidades retenidas	89,974	191,873	324,990
Efecto acumulado del Impuesto Sobre la Renta diferido	-	-	(10,863)
Resultado acumulado por actualización	(53,410)	(193,663)	(260,138)
Inversión de los accionistas mayoritarios	945,016	1,227,553	1,668,674
Inversión de los accionistas minoritarios	110,292	126,259	131,743
Total del capital contable	1,055,308	1,353,812	1,800,417
Contingencias y compromisos (notas 12 y 13)			
	$2,442,331	2,746,478	3,307,534

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

INDUSTRIAS INNOPACK, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS

AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998, 1999 Y 2000

(miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2000)

	1998	**1999**	**2000**
Ventas netas	$ 1,295,290	1,576,480	2,021,948
Costo de ventas	988,428	1,176,196	1,570,173
Utilidad bruta	306,862	400,284	451,775
Gastos de operación	184,577	218,185	265,500
Utilidad de operación	122,285	182,099	186,275
Resultado integral de financiamiento (nota 10)	(66,271)	(80,909)	(40,812)
Otros (gastos) ingresos, neto (nota 2)	(6,331)	(4,348)	5,974
Utilidad antes de Impuestos y Participación de los Trabajadores en las Utilidades	49,683	96,842	151,437
Impuesto Sobre la Renta (nota 11)	2,186	2,559	4,264
Impuesto al Activo (nota 11)	199	-	-
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (nota 11)	163	1,156	1,604
Utilidad neta	47,135	93,127	145,569
(Pérdida) utilidad neta minoritaria	(6,436)	(8,772)	12,452
Utilidad neta mayoritaria	$ 53,571	101,899	133,117

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

INDUSTRIAS INNOPACK, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998, 1999 Y 2000
(miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2000)

	Capital social	**Utilidades retenidas**	**Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido**	**Resultado acumulado por actualización**	**Inversión en los accionistas minoritarios**	**Total del capital contable**
Saldos al 31 de diciembre de 1997	$786,612	36,403	-	(56,385)	18,209	784,839
Aumento de capital social (nota 9a)	121,840	-	-	-	-	121,840
Cambios del interés minoritario	-	-	-	-	94,223	94,223
Retención de activos no monetarios (nota1j)	-	-	-	2,975	4,296	7,271
Utilidad neta	-	53,571	-	-	(6,436)	47,135
Saldos al 31 de diciembre de 1998	908,452	89,974	-	(53,410)	110,292	1,055,308
Disminución de capital social (nota 9a)	(260,897)	-	-	-	-	(260,897)
Aumento de capital social (nota 9a)	260,897	-	-	-	-	260,897
Aumento de capital social (nota 9a)	320,891	-	-	-	-	320,891
Cambios del interés minoritario	-	-	-	-	38,985	38,985
Retención de activos no monetarios (nota 1j)	-	-	-	(140,253)	(14,246)	(154,499)
Utilidad neta	-	101,899	-	-	(8,772)	93,127
Saldos al 31 de diciembre de 1999	1,229,343	191,873	-	(193,663)	126,259	1,353,812
Aumento de capital social (nota 9a)	240,640	-	-	-	-	240,640
Aumento de capital social (nota 9a)	144,702	-	-	-	-	144,702
Retención de activos no monetarios neto del Impuesto Sobre la Renta diferido	-	-	-	(66,475)	(6,968)	(73,443)
Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido (nota 11)	-	-	(10,863)	-	-	(10,863)
Utilidad neta	-	133,117	-	-	(12,452)	145,569
Saldos al 31 de diciembre de 2000	$ 1,614,685	324,990	(10,863)	(260,138)	131,743	1,800,417

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

INDUSTRIAS INNOPACK, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998, 1999 Y 2000
(miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2000)

	1998	1999	2000
Actividades de operación			
Utilidad neta	$ 53,571	101,899	133,117
Más cargos que no requieren el uso de recursos			
Depreciación y amortización	139,352	193,286	222,669
Pérdida (utilidad) neta minoritaria	(6,436)	(8,772)	12,452
Recursos generados por la operación	186,487	286,413	368,238
Inversión neta (aplicada a) generada por las cuentas de operación	(72,482)	126,548	(51,147)
Recursos generados por actividades de operación	114,005	412,961	317,091
Actividades de financiamiento			
Préstamos bancarios, crédito bursátil y arrendamiento financiero	698,817	(142,709)	(120,090)
Aumento de capital	121,840	581,788	385,342
Disminución de capital	-	(260,897)	-
Cambios del interés minoritario	94,223	38,985	-
Recursos generados por actividades de financiamiento	914,880	217,167	265,252
Actividades de inversión			
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	(15,562)	3,698
Efecto neto en la adquisición de subsidiaria en el extranjero (nota 2)	(203,085)	-	-
Adquisiciones de inmuebles, maquinaria y equipo, neto	(853,244)	(591,843)	(420,072)
Otros activos	(5,727)	21,588	(45,743)
Recursos utilizados en actividades de inversión	(1,062,056)	(585,817)	(462,117)
(Disminución) aumento del año	(33,171)	44,311	120,226
Efectivo y equivalentes			
Al principio del año	80,558	47,387	91,698
Al fin del año	$ 47,387	91,698	211,924

Ver notas adjuntas a los estados financieros consolidados.

INDUSTRIAS INNOPACK, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
31 DE DICIEMBRE DE 1998, 1999 Y 2000
(miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2000)

(1) Actividades y estructura financiera, oferta privada, identificación de monedas, resumen de las principales políticas contables y cambio contable-

Actividades-

La actividad principal de Industrias Innopack, S.A. de C.V. (la empresa o Innopack), como entidad legal separada, es la de promover la constitución de toda clase de sociedades civiles y mercantiles, suscripción de capitales, adquirir o negociar cualquier título, acciones y partes sociales y participar en sociedades y no tiene empleados. La estructura accionaria es como sigue:

Accionista	% de participación
Claudio Zapata Gómez	54.6%
Tapazeca	14.9%
SC Clazago	12.4%
ZN México	6.8%
IFC	6.8%
EGI-Fund	4.5%
	100%

Las principales actividades de las compañías subsidiarias son la fabricación y venta de toda clase de envases, tapas de plástico y coronas metálicas. Los ingresos de las compañías subsidiarias provienen principalmente de cinco clientes a través de contratos de abastecimiento a largo plazo, en pesos y dólares (nota 13a).

Oferta privada-

La administración de la compañía realizó negociaciones con distintos fondos de inversión tendientes a aumentar su capital social, así como realizar una oferta privada de parte de las acciones representativas de su capital social con el objeto de fortalecer su estructura financiera, y financiar proyectos de crecimiento.

Identificación de monedas-

Para propósito de revelación en las notas a los estados financieros cuando se hace la referencia a pesos o “$”, se trata de pesos mexicanos; de igual manera, cuando se hace referencia a dólares se trata de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Resumen de las principales políticas contables y cambio contable

(a) Presentación de estados financieros-

Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México (PCGA), promulgados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (IMCP), los cuales incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera y están expresados en miles de pesos de poder adquisitivo constante, con base en los factores derivados del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), publicado por el Banco de México. Los índices que se utilizaron para efectos de reconocer la inflación fueron los siguientes:

31 de diciembre de:	INPC	% de inflación
2000	336.596	8.96
1999	308.919	12.32
1998	275.038	18.61

(b) Principios de consolidación, interés minoritario y conversión a pesos de la información financiera de las subsidiarias en el extranjero-

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos y resultados de las subsidiarias en las que se posee más del 50% de su capital social y/o cuando ejerce control (nota 2). Los saldos, inversiones en acciones y capitales y operaciones importantes entre las compañías del grupo se han eliminado en la preparación de los estados financieros consolidados y se reconoció el interés minoritario. La consolidación se efectuó con base en los estados financieros auditados de las compañías emisoras, los que fueron preparados de acuerdo con políticas contables uniformes con las de la tenedora.

Los estados financieros de las subsidiarias en el extranjero fueron incorporados a los estados financieros consolidados siguiendo los lineamientos establecidos en el Boletín B-15 Transacciones en moneda extranjera y conversión de estados financieros de operaciones extranjeras emitido por el IMCP. Conforme a estos lineamientos se consideró que estas entidades son independientes financiera y operativamente de Innopack. En términos generales, dichos estados son ajustados para reconocer los efectos de la inflación en la información financiera conforme a los PCGA en México, usando los índices de cada país y convertidos a pesos al tipo de cambio de la fecha del balance más reciente que se presenta.

Los estados de resultados consolidados incluyen los resultados de las subsidiarias que se mencionan en la nota 2 (ZIC y TCC) desde la fecha de su adquisición (registradas por el método de compra) y, en el caso de la venta parcial de las acciones, los resultados se reconocieron en base a la tenencia accionaria hasta la fecha de la operación.

(c) Equivalentes de efectivo-

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras y otros instrumentos de inmediata realización. Los intereses y las utilidades o pérdidas en valuación se incluyen en los resultados del ejercicio como parte del resultado integral de financiamiento.

El boletín sobre el manejo contable de instrumentos financieros promulgado por el IMCP, obligatorio para 2001, modifica el tratamiento contable de las inversiones temporales y contratos que den origen a activos y pasivos (incluyendo los derivados y los de cobertura cambiaria) se registran en el balance general y los gastos e ingresos se reconocen sobre las bases acumuladas. Asimismo, los instrumentos financieros se reconocen de acuerdo a la sustancia del contrato e intenciones de la empresa en (i) adquiridos con fines de negociación, (ii) disponibles para su venta, conservados a su vencimiento, valuados éstos (i y ii) a valores razonables o justos y el (iii) a su costo sujeto a amortización. En el caso de Innopack sus inversiones son básicamente del tipo (i) y(ii).

(d) Inventarios y costo de ventas-

Los inventarios se presentan a su costo de reposición o valor de mercado, el menor. El costo de reposición corresponde al precio de la última compra. El costo de ventas representa el costo de reposición al momento de la venta.

(e) Inmuebles, maquinaria y equipo-

Los inmuebles, maquinaria y equipo se actualizan mediante factores derivados del INPC. La maquinaria de origen extranjero es reexpresada a su valor específico neto de reposición en moneda extranjera considerado por los peritos en su avalúo de 1996, actualizada con base al índice de inflación del país de origen y el resultado se convierte a pesos al tipo de cambio de la fecha del balance general más reciente que se presenta. En el caso de activos fijos de origen extranjero de las subsidiarias fuera del país, éstos se valuaron a costos netos de reposición en la moneda del país de origen donde fueron adquiridos y se reexpresaron utilizando los índices de inflación de dicho país considerando como base los valores netos de reposición determinados en 1997 por los peritos independientes.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran a su valor presente y reexpresados por índices o a su valor específico si su procedencia es extranjera.

La depreciación se calcula usando el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos correspondientes determinada por la administración de la Compañía.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones se registran en los resultados cuando se incurren.

El resultado integral de financiamiento correspondiente a activos en periodo de construcción o instalación, se capitaliza como parte del valor de los activos (nota 7).

(f) Otros activos-

Los otros activos incluyen principalmente gastos preoperativos, reubicaciones de plantas, los costos de sistemas de cómputo y licencias y gastos de organización y se presentan a su valor actualizado con base en el INPC. La amortización se calcula por el método de línea recta, en un periodo de 2 a 10 años.

Los gastos preoperativos incluyen los costos y gastos que se incurren hasta el momento en que las plantas terminan el periodo de prueba e inician de manera formal sus ventas.

(g) Primas de antigüedad y pagos por separación del personal-

Las primas de antigüedad a las que tiene derecho el personal a su retiro por haber cumplido quince años o más de servicio, no se reconocen como costo de los ejercicios en que presta sus servicios dado que el pasivo acumulado, basado en estimaciones de la Compañía, es poco importante; sin embargo, el pasivo laboral de la subsidiaria TCC se reconoce como costo de los ejercicios en que presta sus servicios de acuerdo a cálculos actuariales.

Las demás compensaciones a que puede tener derecho el personal, por su naturaleza contingente, se reconocen en los resultados del ejercicio en que se pagan. Estos beneficios consisten principalmente de indemnizaciones (nota 12a).

(h) Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Activo (IMPAC), Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) y cambio contable-

El IMCP revisó el Boletín D-4 para el tratamiento contable de los efectos del ISR y PTU diferido, obligatorio a partir de 2000, aplicando el método de activos y pasivos que compara los valores contables y fiscales y se reconocen los efectos en el ISR diferido (activos y pasivos monetarios no circulantes) por las consecuencias fiscales futuras a las tasas fiscales vigentes -35%- (y cambios en las tasas cuando han sido legalmente establecidas), incluyendo el beneficio por pérdidas fiscales y la recuperación del IMPAC. Se establece la obligación de crear estimaciones para reconocer pérdidas en la recuperación de ISR activos. En el caso de la PTU diferida se calcula sobre las partidas temporales que surgen de la conciliación contable-fiscal; sin embargo, no hay efecto de PTU diferido ya que no hay diferencias temporales en las entidades con empleados.

Hasta 1999, los cargos a resultados por ISR y PTU incluían los importes a pagar y, adicionalmente, reconocían los efectos de ISR y PTU de las diferencias temporales importantes entre los resultados gravables y contables sobre las que razonablemente se estimaba que en un periodo definido se originaría un beneficio o un pasivo para efectos fiscales y no se compensaban con partidas temporales de naturaleza recurrente.

(i) Actualización del capital social y utilidades retenidas-

Se determina multiplicando las aportaciones y las utilidades por factores derivados del INPC, que miden la inflación acumulada desde las fechas en que se realizaron las aportaciones y se generaron las utilidades hasta el cierre del ejercicio más reciente. Los importes así obtenidos representan los valores constantes de la inversión de los accionistas.

(j) Resultado por tenencia de activos no monetarios-

Representa el resultado acumulado patrimonial original por la determinación de los efectos de la inflación y la diferencia entre el valor de los activos no monetarios actualizados mediante costos específicos (inventarios, inmuebles reexpresados por avalúos hasta 1996 y cierta maquinaria de origen extranjero) incluyendo el efecto del Impuesto Sobre la Renta diferido (por $35,778) y el determinado utilizando factores derivados del INPC.

(k) Resultado integral de financiamiento (RIF)-

El RIF incluye los intereses, las diferencias en cambios, los efectos de valuación de instrumentos financieros (protección cambiaria) y el efecto monetario.

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de su celebración o liquidación. Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las diferencias en cambios incurridas en relación con activos y pasivos contratados en moneda extranjera se llevan al RIF del ejercicio, o bien, son capitalizados (notas 1e. y 7).

Los efectos de la protección cambiaria (tasa de cambio contratada menos la del mercado a la fecha de los balances por el importe cubierto) se reconocen como una partida del RIF. La comisión y gastos relativos se amortizaron en función a tiempo del contrato de protección (menor a un año).

El efecto monetario se determina multiplicando la diferencia entre los activos y pasivos monetarios al inicio de cada mes, incluyendo los impuestos diferidos, por la inflación hasta el cierre del ejercicio. La suma de los resultados así obtenidos representa el efecto monetario del ejercicio provocado por la inflación, que se lleva al RIF o se capitaliza (notas 1e. y 7).

(l) Reconocimiento de ingresos-

Los ingresos relacionados con la venta de productos se reconocen conforme los productos se entregan a los clientes. La Compañía registra las provisiones necesarias para reconocer posibles pérdidas en la realización de las cuentas por cobrar.

(m) Contingencias-

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros consolidados. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización.

(n) Uso de estimaciones-

La preparación de los estados financieros, de conformidad con los PCGA, requiere que la administración efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes, así como los importes registrados de ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.

(o) Utilidad integral y utilidades por acción-

Este boletín, entra en vigor a partir de 2001, emitido por el IMCP, requiere la determinación y presentación de la utilidad neta integral en un solo renglón dentro del estado de variaciones en el capital contable, y la revelación de sus componentes en notas a los estados financieros. La utilidad neta integral se determina adicionando aquellos cambios reflejados directamente en el capital contable, excluyendo el efecto de contribuciones, reducciones y distribuciones de capital. Las partidas que pueden afectar la utilidad integral pueden ser los efectos de la retención de activos no monetarios.

(2) Entidades que se consolidan-

Compañías y actividad	**Participación en el capital social %**	**Fecha de constitución**	**Inicio de operaciones**
Industrias Innopack, S.A. de C.V. (Innopack) y las siguientes subsidiarias		octubre-1990	septiembre-1993
Tapas Innovativas Internacionales, S.A. de C.V. (TIN) Fabricación de tapas de plástico	99.99	julio-1994	octubre-1994
Bienes Internacionales, S.A. de C.V. (BIN) Inmobiliaria de TIN	99.99	julio-1994	octubre-1994
Envases Innovativos Internacionales, S.A. de C.V. (EIN) Fabricación de envases de plástico	99.99	mayo-1995	junio-1996
Inmuebles Innovativos, S.A. de C.V. (INI) Inmobiliaria de EIN	99.99	octubre-1995	enero-1996
Bienes Industriales del Norte, S.A. de C.V. Inmobiliaria (BNN) – Sin operaciones	99.99	junio-1996	Etapa preoperativa
Clazago Continental Innovative Containers, S.A. de C.V. (CCI)	99.99	octubre-1996	marzo-1997
Tenedora en un 50.01% de Envases Innovativos Peninsulares, S.A. de C.V. (EIP) Fabricación de envases y tapas de plástico	Simbolo	abril-1997	octubre-1997
Tapas Innovativas de Venezuela, S.A. (TIV) Fabricación de tapas de plástico	99.99	octubre-1996	julio-1997
Técnicos de Tapas Innovativas, S.A. de C.V. (TTI) Servicios administrativos y producción	99.99	noviembre-1997	enero-1998
Técnicos de Envases Innovativos, S.A. de C.V. (TEI) Servicios administrativos y producción	99.99	noviembre-1997	enero-1998
Envases Innovativos de México, S.A. de C.V. (EIM) Fabricación de envases de plástico	99.99	noviembre-1997	agosto-1998

Envases Innovativos de Tijuana, S.A. de C.V. (EIT) Fabricación de envases de plástico	50.00	noviembre-1997	agosto-1998
Adquiridas durante 1998:			
Zapata International Corporation (ZIC) (entidad extranjera) Tenedora en un 60% de Tapón Corona de Colombia, S.A. (TCC) Fabricación de coronas metálicas, envases y tapas de plástico	99.99	mayo-1966	mayo-1966
Técnicos Industriales de Toluca, S.A. de C.V. (TIT) Servicios administrativos y producción	99.99	abril-1998	abril-1998
Técnicos Industriales de Tijuana, S.A. de C.V. (TIJ) Servicios administrativos y producción	50.00	abril-1998	abril-1998
Adquiridas durante 1999:			
Envases Innovativos de Morelia, S.A. de C.V. (EIMO) Fabricación de envases de plástico	99.99	noviembre-1998	septiembre-1999
Técnicos Industriales de Morelia, S.A. de C.V. (TIM) Servicios administrativos y producción	99.99	noviembre-1998	septiembre-1999
Envases Innovativos de León, S.A. de C.V. (EIL) Fabricación de envases de plástico	99.99	julio-1999	mayo-2000
Envases Innovativos de Torreón, S.A. de C.V. (ETO) Fabricación de envases de plástico	99.99	julio-1999	octubre-2000
Adquiridas durante 2000:			
Corporación Innovativa, S.A. de C.V. (CIN) Servicios corporativos	99.99	enero-2000	enero-2000
Técnicos Industriales de Torreón, S.A. de C.V. (TITO) Servicios administrativos y producción	99.99	enero-2000	julio-2000
Técnicos Industriales de León, S.A. de C.V. (TIL) Servicios administrativos y producción	99.99	enero-2000	abril-2000
Envases Innovativos de Coatepec, S.A. de C. V. (EIC) Fabricación de envases de plástico	99.99	enero-2000	Etapa preoperativa
Técnicos Industriales de Coatepec, S.A. de C.V. (TIC) Servicios administrativos y producción	99.99	enero-2000	Etapa preoperativa
Envases Innovativos de Tampico, S.A. de C.V. (ETA) Fabricación de envases de plástico	99.99	enero-2000	Etapa preoperativa
Técnicos Industriales de Tampico, S.A. de C.V. (TITA) Servicios administrativos y producción	99.99	enero-2000	Etapa preoperativa

- Las inversiones en EIT, TIT y EIP, compañías donde se tiene el 50% de la inversión, se incluyen en la consolidación ya que Innopack ejerce control a través de la administración.

- CCI tenedora del 68.88% de EIP, en noviembre de 1998 vendió el 18.87% de las acciones a Grupo Peninsular. Esta operación generó una utilidad de $3.5 millones la cual se presenta en el estado de resultados como otros productos.

- TEI y TTI a partir del 1o. de enero de 1998 adquieren la responsabilidad laboral con los empleados de EIN y TIN, respectivamente y TIL y TITO (a partir de mayo y agosto de 2000) las de EIL y ETO, respectivamente, por lo que se constituyen como patrones sustitutos de dicho personal.

- EIT y TIJ vendió (en septiembre de 1999) el 50% del capital social a Grupo Corporación del Fuerte generando una pérdida de un millón de pesos la cual se presenta en el estado de resultados como otros gastos. La operación fue por $39.9 millones pagándose la mitad en efectivo y el remanente en 4 años a razón de pagos semestrales de $250 mil dólares. Al 31 de diciembre de 1999 y 2000 la cuenta por cobrar es por $2 y $1.5 miles de dólares, respectivamente.

- A partir de 1999 se encuentra en proceso la formalización de una coinversión en la empresa Graham Innopack de México Holding Company al 50% con Graham Packaging Latinoamerica, L.C.C. para la ampliación del mercado de envases para la industria alimenticia. La inversión aproximada será de $2 millones de dólares y se espera iniciar operaciones en 2001. Innopack consolidará proporcionalmente esta inversión de acuerdo al Boletín de Normas Internacionales de contabilidad, número 31 “Informes financieros de los intereses en negocios conjuntos”.

- En enero de 1998 la Compañía compró de su accionista, señor Claudio Zapata Gómez, el 100% de las acciones del capital social de ZIC propietaria del 60% del capital social de TCC, ambas empresas extranjeras, originándose un pasivo a favor del accionista. En ese mes se incrementó el capital social de Innopack mediante la capitalización de este pasivo (nota 9a.). El valor neto de los activos adquiridos es igual al precio pagado por la Compañía por lo que no se generó crédito mercantil alguno. El siguiente es un resumen de las cifras correspondientes a los estados financieros de ZIC y su subsidiaria TCC, al 31 de enero de 1998, fecha de adquisición por parte de Innopack:

		31 de enero de 1998
Activos circulantes	$	149,233
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto		260,893
Otros activos		1,410
Activo total	$	411,536
Pasivo total	$	208,468
Capital contable:		
Mayoritario		121,840
Minoritario		81,228
Capital contable		203,068
Pasivo y capital contable	$	411,536

(3) Posición en moneda extranjera y protección cambiaria-

Los activos y pasivos monetarios en dólares al 31 de diciembre de 1998, 1999 y 2000, se indican a continuación:

	Miles de dólares		
	1998	**1999**	**2000**
Activos:			
Circulantes	8,463	14,842	27,997
Pasivos:			
A corto plazo	39,511	48,989	73,265
A largo plazo	30,899	39,244	32,941
	70,410	88,233	106,206
Posición corta	(61,947)	(73,391)	(78,209)

Los tipos de cambio en relación con el dólar, al 31 de diciembre de 1998, 1999 y 2000, fueron de $9.86, $9.52 y $9.57, respectivamente. Al 29 de febrero de 2001, fecha de emisión de los estados financieros, el tipo de cambio era de $ 9.68.

Durante 1999, la Compañía comenzó a contratar instrumentos de protección contra riesgos cambiarios y al cierre del ejercicio el importe contratado fue de $10 millones de dólares. Asimismo, durante 2000 continuaron contratando coberturas con un importe total de $25 millones de dólares con vencimientos en abril, agosto y diciembre de ese mismo año, incurriendo en una pérdida de $19 de millones presentada en el estado de resultados como parte del resultado integral de financiamiento.

Al 31 de diciembre de 2000 la Compañía no cuenta con coberturas contra riesgos cambiarios.

Al 31 de diciembre de 1998, 1999 y 2000, las compañías tenían la posición de activos no monetarios de origen extranjero o cuyo costo de reposición se puede determinar únicamente en dólares como se muestra en la siguiente página.

	Miles de dólares		
	1998	**1999**	**2000**
Inventarios	3,312	4,158	7,713
Maquinaria y equipo	103,557	106,559	126,093
Anticipo de maquinaria y equipo	-	6,061	3,178

A continuación se resumen las principales transacciones efectuadas con el extranjero, por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 1998, 1999 y 2000:

	Miles de dólares		
	1998	**1999**	**2000**
Adquisiciones de maquinaria y equipo	47,805	41,328	26,489
Importación de mercancías	7,066	4,301	2,491
Exportación de mercancías	10,131	1,533	630
Regalías a cargo	248	757	769
Intereses ganados	496	42	1,373

Intereses a cargo	–	1,276	–
Refacciones	=	705	49

(4) Operaciones y saldos con compañías relacionadas-

Las operaciones realizadas con compañías relacionadas en los años terminados el 31 de diciembre de 1998, 1999 y 2000, fueron como sigue:

	1998	**1999**	**2000**
Servicios administrativos y asistencia técnica pagada	$ 13,304	25,012	4,446
Regalías pagadas	3,972	7,064	7,448
Intereses ganados	672	2,922	370
Compra de maquinaria y refacciones	-	4,065	-
Compra de acciones (nota 2)	121,840	-	-
Asistencia técnica cobrada	$ -	$ 1,395	$ -
	1998	**1999**	**2000**
Compra de materiales	-	$ 1,125	95
Intereses pagados	-	239	-
Otras	97	-	6,066

Otras operaciones con entidades relacionadas:

– TIN, TIV y EIP tienen celebrado un contrato de regalías por 10, 5 y 11 años, respectivamente, con Zapata Industries, Inc. (compañía relacionada), el cual establece pagos trimestrales de 2.7%, 3% y 3% sobre las ventas netas de los productos elaborados bajo dicha licencia.

– TIN tiene estipulada una regalía anual mínima solamente durante 1998, la cual fue de $80 mil dólares norteamericanos.

– EIN, TIN, EIM, EIT y TMO, hasta febrero de 2000, tienen celebrados contratos con S.C. Clazago, S.A. de C.V., por concepto de servicios administrativos, en el cual se estipula el pago de 1.9% sobre las ventas generadas por las mismas.

– Debido a la venta de acciones mencionada en la nota 2 a partir de octubre de 1999, la subsidiaria EIT suspendió el pago de los servicios a S.C. Clazago, S.A. de C.V.

– La tenedora efectúa cargos por proyectos específicos a ciertas subsidiarias por servicios financieros, asistencia técnica y diversos gastos.

Los saldos por cobrar y por pagar a compañías relacionadas, al 31 de diciembre de 1998, 1999 y 2000, se integran como sigue:

	1998	**1999**	**2000**
Cuentas por cobrar (nota 5)			
Zapata Innovative Plastics, Inc.	$ 934	11,490	31,641
Zapata Industries Inc. Plásticas.	8,534	6,741	–
Zapata Innovative Clousures, Inc.	4,172	9,077	12,724
SC Clazago	-	2,017	6,461
	$ 13,640	29,325	50,826
TIO	1,622	2,670	1,820
Graham Innopack México, S. de R.L.	–	–	621
Zapata Halzeton, Inc	–	–	459
Zapata Industries, Inc.	824	–	395
Metalpack, S.A. de C.V.	139	85	85
Otras	33	-	101
	$ 16,258	32,080	54,307
Cuentas por pagar			
Zapata Industries, Inc. Plastics	$ –	–	4,674
Tapón Corona Ibérica	–	166	1,301
Zapata World, Inc.	2,871	3,377	482
TNN	893	430	345
Zapata Group Services	981	407	–
Zapata Technologies, Inc.	827	558	–
SC Clazago, S.A. de C.V.	578	–	–
	$ 6,150	4,938	6,802

Entre las empresas relacionadas, así como con compañías del grupo, se realizan diversas transacciones que son eliminadas en la consolidación; sin embargo, de acuerdo con las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir de 1997 se requiere que los precios de estas transacciones sean comparables con los que se usarían con o entre partes independientes en operaciones similares. Las compañías realizarán el estudio para soportar que las operaciones entre compañías relacionadas y subsidiarias se llevan a cabo a precios de mercado (nota 12b.).

(5) Cuentas por cobrar-

	1998	**1999**	**2000**

Clientes	$ 216,321	208,352	297,261
Compañías relacionadas (nota 4)	16,258	32,080	54,307
Impuestos por recuperar	99,985	62,442	67,256
Otras cuentas por cobrar (*)	27,860	25,019	18,935
	360,424	327,893	437,759
Estimación para cuentas de cobro dudoso	7,975	10,549	9,713
	$ 352,449	317,344	428,046

*A partir de 1999 y 2000, incluye la porción circulante de la cuenta por cobrar a largo plazo en la venta de acciones de $5,186 y $4,786 miles, respectivamente, que se menciona en la nota 2.

(6) Inventarios-

	1998	**1999**	**2000**
Materias primas y materiales	$ 79,838	63,647	82,892
Producción en proceso	12,090	6,328	10,274
Productos terminados	64,243	35,987	60,252
Almacén de refacciones	6,575	15,236	29,541
Mercancías en tránsito	51,827	152,843	256,265
Anticipos a proveedores	617	1,267	6,228
	215,190	275,308	445,452
Estimación para obsolescencia	3,829	10,131	655
	$ 211,361	265,177	444,797

(7) Inmuebles, maquinaria y equipo-

	1998	**1999**	**2000**
Terrenos	$ 116,958	117,377	113,747
Edificios	348,989	328,038	494,920
Maquinaria y equipo	1,440,796	1,777,970	1,829,010
Equipo de transporte	9,248	11,884	16,902
Equipo de cómputo	10,903	12,912	15,612
Mobiliario y equipo	10,737	11,428	16,418
Construcciones y proyectos en proceso	78,187	38,372	100,952
Maquinaria y equipo en tránsito e instalación y anticipos	37,750	125,632	110,066
	2,053,568	2,423,613	2,697,627
Depreciación acumulada	301,332	430,743	600,583
	$ 1,752,236	1,992,870	2,097,044

Algunas subsidiarias celebraron contratos arrendamiento de maquinaria que se interpretó como de tipo operativo como se muestra a continuación (nota 13b.):

			Importe cargado a resultados (millones de pesos)		
Subsidiaria	**Año**	**Rentas (miles de dólares)**	**1998**	**1999**	**2000**
EIM	1998	12 rentas fijas trimestrales de $250 y $348.8	$ 2.5	12.2	16.8
ETO	2000	20 rentas trimestrales de $50, $65 y $122	–	–	3.2
EIL	2000	32 rentas trimestrales de $53, $103 y $137	$ –	=	10.2

– La maquinaria y equipo incluye capitalización del costo integral de financiamiento incurrido durante el periodo de prueba e instalación por $51.1 en 1998, $13.2 en 1999 y $30.2 en 2000 (en miles).

Durante 1999 concluyó la ampliación de 3 plantas y en 2000 inició y concluyó la construcción de plantas, cuyo costo, ubicación y fecha se muestra a continuación:

Subsidiaria	**Localización**	**Inversión estimada (millones de dólares)**	**Fecha de terminación**
EIN	Guadalajara	5	1999
EIM	Toluca	25	1999
EIT	Tijuana	6	1999
EIL	León	15	2000

ETO	Torreón	9	2000
EIC	Coatepec	20	2001
ETA	Tampico	17	2001

(8) Préstamos bancarios, deuda a largo plazo y crédito bursátil-

(a) **Préstamos bancarios-**

Los documentos por pagar a bancos son quirografarios sin garantía específica y se integran como se muestra a continuación:

	Compañía y Subsidiaria			
Institución	**tasa**	**1998**	**1999**	**2000**
En pesos:				
	8.69%			
	EIN	$ 24,143	–	–
	38%			
	TIN	12,846	–	–
En dólares:				
	8%			
	INK	156,199	6,535	34,500
	18%			
	TCC	118,627	53,925	26,104
		$ 311,815	60,460	60,604

(b) Deuda a largo plazo (créditos refaccionarios)-

Institución, garantía y tasa	**1998**	**1999**	**2000**
En pesos:			
Bancomer, S.A.			
Inmuebles de EIM y la maquinaria adquirida. TIIE más 2 puntos	$ 54,463	45,453	30,594
En dólares:			
Banque Paribas			
Maquinaria adquirida por EIM, EIN, EIT.			
Fija 6.40%	145,448	98,947	67,277
Banque Paribas			
Maquinaria adquirida por EIM, EIMO.			
Fija 6.11%	-	62,873	46,376
	$ 199,911	207,273	144,247
Bancomer, S.A.			
Maquinaria adquirida por EIM. Libor más 3.6 puntos	47,204	31,969	19,948
Banco Santander Mexicano, S.A.			
Maquinaria y equipo adquirida por EIL 7.82% anual	–	–	30,552
Banco Inverlat, S.A.			
Maquinaria y equipo adquirida EIN. Libor más 2 puntos	37,667	24,276	14,932
Banque Paribas			
Maquinaria y equipo adquirida EIN.	–	–	10,684
Northstar			
Maquinaria y equipo adquirida por EIN. Libor más 2 puntos	–	38,220	29,355
Banco Santander, S.A.			
Maquinaria y equipo adquirida por EIN 7.83% fija	–	36,852	–
Banco Mercantil del Norte, S.A.			
Maquinaria y equipo adquirida por EIN. Libor más 2.25 puntos	27,469	18,359	14,520
Banco Bilbao Vizcaya, S.A.			
Maquinaria y equipo adquirida por TIN. Libor más 3.75 puntos	–	12,587	6,966
Banco Nacional de México, S.A.			
Maquinaria y equipo adquirida por EIN. Libor más 2.75 puntos	19,316	12,450	9,662
Banco Mercantil del Norte, S.A.			
Maquinaria y equipo adquirida por TIN. Libor más 4 puntos	17,700	11,407	7,017

	$ 349,267	393,393	287,883
Banco Bilbao Vizcaya, S.A.			
Maquinaria y equipo adquirida por EIM, EIMO y EIN. Libor más 3.75 puntos	–	18,180	10,063
Banco Inverlat, S.A.			
Maquinaria y equipo adquirida por TIN. Libor más 2 puntos	4,900	3,275	2,159
En pesos colombianos:			
Bancos locales de Colombia			
Maquinaria y los inmuebles. Fija 22% y 11%			
	133,328	115,568	84,307
Saldo al 31 de diciembre	487,495	530,416	384,412
Menos vencimientos circulantes	93,117	142,371	148,891
Deuda a largo plazo excluyendo vencimientos circulantes	$ 394,378	388,045	235,521

(c) Crédito bursátil-

En 1998 se llevó al cabo una colocación pública de tres millones de pagarés quirografarios con valor nominal de cien pesos cada uno sin garantía específica y a mediano plazo (27 de julio de 2001) por $300 millones. Los intereses son pagaderos cada 28 días, siendo el primero en agosto de 1998. La tasa de interés es una combinación de la tasa que fija la Ley del Impuesto sobre la Renta para personas físicas, de la bancaria de equilibrio y de la de los certificados de Tesorería de la Federación. Al 31 de diciembre de 2000 solamente se han ejercido $209.4 millones ($228.1 en 1999 y $246.4 en 1998).

(d) Obligaciones por arrendamiento financiero-

La Compañía ha contraído pasivos por arrendamiento financiero de maquinaria y equipo (mismos que son la garantía de esta operación) que expiran en diferentes fechas durante los siguientes años y se integran como se muestra en la siguiente página.

Subsidiaria Arrendadora	**Valor maquinaria (miles de dólares)**	**Interés anual (%) y plazos**	**Rentas pendientes de pago al 31 de diciembre miles de dólares 1998**	**1999**	**2000**
EIM GE Capital	$ 2,954	8.79 fijo Trimestrales hasta 2001	$2,953	2,054	1,071
EIM GE Capital	1,018	9.24 fijo Trimestrales hasta 2004	–	965	852
EIM Banamex	1,177	Libor más 2 puntos Semestrales hasta 2004	–	1,177	941
EIM Ge Capital	608	9.21 fijo Trimestrales hasta 2004	–	588	454
EIN Banamex	1,519	Libor más 2.25 puntos Semestrales hasta 2004	–	1,519	1,216
TIN GE Capital	3,844	Libor más 3.48 puntos Semestrales hasta 2005	–	3,459	4,902
EIP Ge Capital	1,872	9.27 fijo Semestrales hasta 2004	-	1,767	2,086
	$ 12,992		$ 2,953	11,529	11,522
EIM Banamex	471	Libor más 2.5 puntos Semestrales Hasta 2004	–	–	358
EIM Banamex	713	Libor más 2.5 puntos Semestrales hasta 2005	–	–	545

EIL Ge Capital	1,514	LIOR mÁs 3.8% Trimestrales hasta 2005	–	–	1,514
EIT Ge Capital	3,207	9.75% fijo Semestrales hasta 2008	–	–	3,207
	$ 18,897		$ 2,953	11,529	17,146
En pesos					
Total			$ 35,656	119,604	164,127
Menos vencimientos circulantes			14,855	28,684	39,192
			$ 20,800	90,920	124,935

(e) Vencimientos anuales-

Los vencimientos anuales de la deuda a largo plazo, son como sigue:

Año de vencimiento	Deuda a largo plazo	Arrendamiento financiero	Total
2002	$ 100,777	31,907	132,684
2003	82,499	32,585	115,084
2004	40,707	29,347	70,054
2005	11,538	13,948	25,486
2006	–	8,983	8,983
2007	–	8,165	8,165
	$ 235,521	124,935	360,456

Los contratos de crédito refaccionarios y de arrendamiento financiero obligan a mantener ciertas razones financieras, mismas que han sido cumplidas por las compañías del Grupo (nota 13b.).

(9) Capital contable-

(a) Estructura del capital contable-

En asambleas generales ordinarias de accionistas de 1998, 1999 y 2000 se acordó modificar el capital social mediante aportaciones recibidas en efectivo, capitalización de pasivo o reembolso del capital social, así como cambiar las series y los valores nominales.

Los aumentos y disminuciones del capital social se indican a continuación:

Aumentos

Fechas	Histórico	Importe actualizado
Enero de 1998	85,771	121,840
Octubre de 1999	524,050	581,788
Agosto 2000	232,750	240,640
Octubre 2000	141,948	144,702

Los aumentos de capital efectuados durante 1999 incluyen una prima por $216 millones que fue considerada como capital social conforme acuerdo de accionistas.

Disminuciones

En asambleas generales extraordinarias de accionistas de 1999, se acordó disminuir el capital social, como se indica a continuación:

	Valor nominal del capital social	Actualización del capital social	Total
Octubre de 1999			
Antes de la reducción	$ 492,373	416,079	908,452
Reembolso	(103,947)	(71,465)	(175,412)
Reembolso	(50,658)	(34,827)	(85,485)
Después de la reducción	337,768	309,787	647,555

Después de estos movimientos, el capital social al 31 de diciembre de 2000, está integrado por acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, como se muestra a continuación:

	Acciones	Importe
Capital fijo sin derecho a retiro	50,000	$ 50
Capital variable ilimitado	618,259,910	1,236,466
	618,309,910	$ 1,236,516

El análisis del capital social y de utilidades retenidas es el siguiente:

	Capital	Utilidades

	social	retenidas
31 de diciembre de 1998		
En pesos originales	$ 492,373	(18,663)
Actualización	416,079	108,637
En pesos constantes	$ 908,452	89,974
31 de diciembre de 1999		
En pesos originales	$ 861,818	(24,301)
Actualización	367,525	216,174
En pesos constantes	$ 1,229,343	191,873
31 de diciembre de 2000		
En pesos originales	$ 1,236,516	103,401
Actualización	388,324	221,589
En pesos constantes	$ 1,614,685	324,990

(b) Restricciones al capital contable-

Simbolo La utilidad del ejercicio está sujeta a la separación de un 5%, para constituir la reserva legal, hasta que ésta alcance la quinta parte del capital social.

Las utilidades de las subsidiarias no pueden distribuirse a los accionistas hasta en tanto no las reciba la compañía tenedora como dividendos.

Simbolo El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los accionistas puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que dicho monto sea igual o superior al capital contable.

Simbolo Las utilidades sobre las que no se ha cubierto el Impuesto Sobre la Renta y las otras cuentas del capital contable originarán un pago de Impuesto Sobre la Renta a cargo de la Compañía, en caso de distribución, a la tasa del 35%.

Simbolo Los dividendos actualizados por inflación que se paguen a personas físicas o extranjeros están sujetos a la retención adicional de Impuesto Sobre la Renta a la tasa del 5%.

(10) Costo integral de financiamiento-

El costo integral de financiamiento se integra como sigue:

	1998	1999	2000
Intereses pagados	$ (157,793)	(195,994)	(114,442)
Intereses a cargo	22,351	49,380	33,295
Pérdida cambiaria	(39,012)	(105,824)	(130,234)
Utilidad cambiaria	37,130	84,645	114,931
Efecto monetario favorable	71,053	86,884	55,638
	$ (66,271)	(80,909)	(40,812)

(11) Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Activo (IMPAC), Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), pérdidas por amortizar y cambio contable en el reconocimiento del ISR diferido-

Las empresas deben pagar el impuesto que resulte mayor entre el ISR y el IMPAC. Ambos impuestos reconocen los efectos de la inflación, aunque en forma diferente de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México.

A partir de 1999 la tasa del ISR aumentó del 34 al 35%; sin embargo, se pagará el 32% (30% a partir del año 2000) y la diferencia del 3% (5% a partir del año 2000) se retendrá al momento de efectuar el pago de dividendos actualizados por inflación.

La PTU se calcula prácticamente sobre las mismas bases que el ISR; pero sin reconocer los efectos de la inflación y las variaciones cambiarias hasta que se cobren, paguen o venzan.

La Ley del IMPAC impone una tasa del 1.8% sobre los activos actualizados en los casos de inventarios e inmuebles, maquinaria y equipo y otros activos, menos ciertos pasivos. El IMPAC causado en exceso del ISR del ejercicio se puede recuperar en los siguientes diez ejercicios, actualizado por inflación, siempre y cuando en alguno de tales ejercicios el ISR exceda al IMPAC. Ciertas subsidiarias no causaron IMPAC porque sus deudas fueron superiores a los activos, son de reciente creación, están exentas por los primeros cuatro años o sus ingresos son menores a los establecidos para ser gravadas con este impuesto.

En 1998 ciertas subsidiarias obtuvieron un beneficio por deducción inmediata sobre inversiones realizadas en bienes nuevos por $119.89 millones para el ISR y $40.88 millones de impuesto para el IMPAC de los cinco años siguientes. En 2000, con motivo del cambio contable del registro del ISR diferido el beneficio se reconoce como un pasivo.

Es posible amortizar la pérdida fiscal de un ejercicio, actualizada por inflación, contra la utilidad gravable de los diez ejercicios fiscales inmediatos siguientes. Las pérdidas fiscales no tienen efecto en la PTU. Al 31 de diciembre de 2000, las pérdidas fiscales por amortizar se muestran a continuación:

Tenedora	**Importe Actualizado hasta el**

Año de origen	Original	31 de diciembre de 2000
1994	$ 1,066	3,180
1995	725	1,663
1996	217	379
1997	2,881	4,212
1998	46,781	63,107
1999	64,395	73,042
2000	63,769	66,294
	$ 179,834	211,877

Subsidiarias

Año de origen	Importe Original	Actualizado hasta el 31 de diciembre de 2000
1998	124,683	165,474
1999	28,823	27,157
2000	153,878	159,972
	$ 307,384	352,603
Total de las pérdidas fiscales	$ 487,218	564,480

De las pérdidas fiscales sufridas en las subsidiarias se aplicaron $12.9 y $17.6 (millones) a la utilidad gravable de 1998 y 1999, respectivamente, originando un beneficio fiscal de $4.4 y $6.2 (millones), respectivamente. En 2000 la aplicación del beneficio de $19.6 por la aplicación de $55.9, se incluye en el efecto diferido de ese año.

El efecto y la base de impuestos atribuible a la utilidad de operaciones por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000 fue diferente del que resultaría de aplicar la tasa del 35% de ISR a la utilidad de operaciones, como resultado de las partidas no temporales que se mencionan a continuación:

	Base	Impuesto
Utilidad contable antes de ISR y PTU	$ 151,437	53,003
Efectos de la inflación:		
Contables	(5,809)	(2,033)
Fiscales	31,381	10,984
No deducibles	3,495	1,223
Pérdidas fiscales	(217,036)	(75,963)
Cambio en la estimación de pérdidas	48,709	17,048
Impuesto cargado a resultados	$ 12,177	4,262

El Grupo no consolida sus resultados para efectos del ISR.

El análisis de ISR diferido es como sigue:

	Base		Efecto 35%	
	1999	2000	1999	2000
Partidas que producen:				
Activos				
Estimación para cuentas de cobro dudoso	$ 5,914	6,781	2,070	2,373
Provisiones de pasivos	10,195	6,779	3,568	2,373
Anticipos de clientes	7,490	–	2,622	–
Pérdidas fiscales por amortizar	347,444	564,480	121,605	197,568
Activo diferido	371,043	578,040	129,865	202,314
Estimación de valuación	(12,034)	(60,743)	(4,212)	(21,260)
Activo diferido neto	359,009	517,297	125,653	181,054
Pasivos				
Inventarios	263,937	376,665	92,378	131,833
Activos fijos (incluye deducción inmediata de maquinaria)	106,076	154,591	37,126	54,107
Otros activos	18,423	27,643	6,448	9,675
Pasivo diferido, neto	(29,429)	(41,602)	(10,299)	(14,561)
Efecto inicial, acumulado de ISR				(10,299)
Efecto neto en los resultados del ejercicio				4,262
El efecto inicial se registra como sigue:				
Capital contable (efecto inicial):				
Efecto acumulado de ISR diferido			$ 10,299	

ISR pasivo diferido 10,299

Por otra parte, el efecto de impuesto diferido proveniente de diferencias temporales reconocidas directamente en el capital contable sin pasar por los resultados del ejercicio ascendió a $35,778, el cual fue aplicado al impuesto diferido acumulado determinando un activo diferido neto de $21,217.

Las subsidiarias en el extranjero causan impuestos equivalentes al ISR e IMPAC y la PTU no se considera en las leyes de los países en que se encuentran domiciliadas.

La estimación de valuación de los activos diferidos al 31 de diciembre de 1999 y 2000 fue de $12,034 y $60,743, respectivamente. La Compañía evalúa la recuperabilidad de los impuestos diferidos activos a la luz de la existencia de diferencias temporales gravables que se espera se reviertan en el mismo periodo que la reversión esperada de las diferencias temporales deducibles o en periodos posteriores en los que puede aplicarse la pérdida fiscal y cuando exista, en la opinión de la administración de la Compañía, una alta probabilidad de que habrá utilidades gravables futuras suficientes para la recuperación de dichas diferencias temporales deducibles. Sin embargo, las cantidades de impuestos diferidos activos realizables pudieran reducirse si las utilidades gravables fueran menores.

La Compañía no ha reconocido un pasivo por impuestos diferidos relativo a las utilidades no distribuidas de sus subsidiarias, originado en 2000 y años anteriores, ya que actualmente no espera que esas utilidades no distribuidas se reviertan y sean gravables en el futuro cercano. Este pasivo diferido se reconocerá cuando la Compañía estime que recibirá dichas utilidades no distribuidas y sean gravables, como en el caso de venta o disposición de sus inversiones en acciones.

En 1999 y 1998 no se reconocieron ISR diferidos debido a que las partidas temporales se compensan con otras de naturaleza semejante.

(12) Contingencias-

a) El derivado de las obligaciones laborales (nota 1g., segundo párrafo).

b) Por los posibles efectos de impuestos omitidos y multas por las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta por las operaciones con partes relacionadas que están sujetas a la determinación de precios de transferencia por parte de las autoridades fiscales (nota 4).

c) Por la facultad de las autoridades fiscales de revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración del Impuesto Sobre la Renta presentada y, en su caso, de las posibles diferencias que pueden derivar al determinar posibles diferencias en criterios para calcular los impuestos.

(13) Compromisos-

a) Por el abastecimiento a largo plazo (nota 1) y regalías y servicios administrativos (nota 4).

b) Los derivados de construcción (nota 7), intereses y el servicio de las deudas, arrendamientos, compromisos y garantías otorgadas en las transacciones financieras (nota 8).

(R.- 144270)

HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.

SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO

DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS

A la Asamblea General de Accionistas:

Hemos examinado los balances generales de Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, al 31 de diciembre de 2000 y de 1999, y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación financiera que les son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la sociedad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los criterios contables emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión). La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los criterios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se explica en la nota 2, la sociedad está obligada a preparar y presentar sus estados financieros con base en las reglas y prácticas contables emitidas por la Comisión, aplicables a sociedades financieras de objeto limitado, las cuales, en los casos que se mencionan en dicha nota difieren con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, al 31 de diciembre de 2000 y 1999, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las reglas contables antes mencionadas.

México, D.F., a 2 de febrero de 2001.
PricewaterhouseCoopers, S. C.
Socio de Auditoría
C.P. Eduardo González Dávila Garay
Rúbrica.

HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO
INFORME DE LOS COMISARIOS

A la Asamblea General de Accionistas:

En nuestro carácter de comisarios y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los estatutos de la sociedad, rendimos a ustedes nuestro dictamen sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información que ha presentado a ustedes el Consejo de Administración, en relación con la marcha de la Sociedad, por el año terminado el 31 de diciembre de 2000.

Hemos asistido a las asambleas de accionistas y a las juntas del Consejo de Administración a las que hemos sido convocados y hemos obtenido de los directores y administradores, la información sobre las operaciones, documentación y registros que consideramos necesario examinar. Nuestra revisión ha sido efectuada de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas.

En nuestra opinión, los criterios y políticas contables y de información financiera seguidas por la sociedad y considerados por los administradores para preparar la información financiera presentada por los mismos a esta asamblea, son adecuados y suficientes y se aplicaron en forma consistente con el ejercicio anterior; por tanto, dicha información refleja en forma veraz, razonable y suficiente la situación financiera de Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado al 31 de diciembre de 2000, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación financiera, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las reglas y prácticas contables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

México, D.F., a 6 de febrero de 2001.
Muy atentamente

Comisario Serie A	Comisario Serie B
C.P. José A. Salazar Tapia	**C.P. Eduardo González Dávila Garay**
Rúbrica.	Rúbrica.

HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO
BALANCES GENERALES
(cifras expresadas en miles de pesos constantes del 31 de diciembre de 2000)

	31 de diciembre de	
Activo	**2000**	**1999**
Disponibilidades	$ 12,178	$ 1,163
Inversiones en valores (véase notas 3 y 7)	861,908	432,669
Cartera de crédito vigente		
Créditos a la vivienda	8,062,559	5,451,886
Cartera de crédito vencida	20,086	9,914
	8,082,645	5,461,800
Menos		
Estimación preventiva para riesgos crediticios	24,098	24,678
Cartera de crédito neta (nota 4)	8,058,547	5,437,122
Otras cuentas por cobrar-neto	11,699	8,948
Bienes adjudicados (nota 5)	14,854	7,834
Inmuebles, inmobiliario y equipo, neto (nota 6)	59,152	15,427
Impuestos diferidos (nota 9)	1,671	
Otros activos (neto)	50,782	8,079
Total activo	$ 9,070,791	$ 5,911,242
Pasivo		
Pasivos bursátiles (nota 7)	$ 309,243	$ 45,189
Préstamos bancarios y de otros organismos (nota 8)	7,724,906	5,357,700
Otras cuentas por pagar		
ISR por pagar	28,494	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (nota 16)	297,444	46,245
	325,938	46,245
Impuestos diferidos (nota 9)	4,276	
Total pasivo	8,364,363	5,449,134
Capital contable		
Capital contribuido		
Capital social (nota 12)	446,103	223,219

Capital ganado		
Reservas de capital	44,062	22,831
Utilidades retenidas		31,802
Resultados por valuación de títulos disponibles para la venta	603	
Insuficiencia en la actualización del capital contable	(28,057)	(28,057)
Utilidad neta	243,717	212,313
Compromisos (nota 11)	_____	_____
	260,325	238,889
Total capital contable	706,428	462,108
Total pasivo y capital contable (nota 12)	$ 9,070,791	$ 5,911,242
Cuentas de orden		
Mandatos (nota 14)	$ 639,913	$ 427,467
Garantías hipotecarias	9,127,738	5,436,296
Avales recibidos	1,647,036	975,046

Las diecisiete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Financieras de Objeto Limitado emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 fracciones III, XXXVI y XXXVII, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la décima tercera y décima cuarta de las reglas generales a que deberán sujetarse las sociedades a que se refiere la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales están sujeto a la aprobación del Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General
Lic. Víctor Manuel Requejo Hernández
Rúbrica.

Director de Finanzas
Lic. Eduardo Gastelú Martínez
Rúbrica.

Contador General
C.P. Enrique Fuentes Hernández
Rúbrica.

Director Adjunto de Contraloría y Auditoría
C.P. José Antonio García León
Rúbrica.

HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO
ESTADOS DE RESULTADOS
cifras expresadas en miles de pesos constantes del 31 de diciembre de 2000

	Año que terminó el 31 de diciembre de	
	2000	**1999**
Ingresos por intereses	$ 967,120	$ 723,047
Gastos por intereses	768,703	622,360
Pérdida por posición monetaria- neto	36,919	30,506
Margen financiero	161,498	70,181
Estimación preventiva para riesgos crediticios	1,601	17,883
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	159,897	52,298
Comisiones	448,163	409,306
Ingresos totales de la operación	608,060	461,604
Gastos de administración	227,904	159,792
Utilidad de la operación	380,156	301,812
Otros productos, neto	8,527	18,312
Utilidad antes de provisiones para Impuesto Sobre la Renta causado e Impuesto Sobre la Renta diferido	388,683	320,124
Impuesto Sobre la Renta causado (nota 13)	142,361	105,495
Impuesto Sobre la Renta diferido (nota 9)	2,605	2,316
	144,966	107,811
Utilidad neta	$ 243,717	$ 212,313

Las diecisiete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Financieras de Objeto Limitado emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 fracciones III, XXXVI y XXXVII, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la décima tercera y décima cuarta de las reglas generales a que deberán sujetarse las sociedades a que se refiere la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados

todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de resultados están sujetos a la aprobación del Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

Director General	Director de Finanzas
Lic. Víctor Manuel Requejo Hernández	**Lic. Eduardo Gastelú Martínez**
Rúbrica.	Rúbrica.
Contador General	Director Adjunto de Contraloría y Auditoría
C.P. Enrique Fuentes Hernández	**C.P. José Antonio García León**
Rúbrica.	Rúbrica.

HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
(nota 12)
cifras expresadas en miles de pesos constantes del 31 de diciembre de 2000

	Capital Contribuido		Capital ganado				
	Capital social	Reservas de capital	Utilidades retenidas	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Insuficiencia en la actualización del capital contable	Utilidad neta	Total capital contable
Saldos al 1 de enero de 1999	**$ 123,463**	**$ 8,211**			**($28,057)**	**$ 146,178**	**$ 249,795**
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas							
Aplicación del resultado del ejercicio anterior	99,756	14,620	$ 31,802			(146,178)	
Movimientos inherentes a la operación							
Utilidad neta del ejercicio						212,313	212,313
Saldos al 31 de diciembre de 1999	223,219	22,831	31,802		($28,057)	212,313	462,108
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas							
Aplicación del resultado del ejercicio anterior	191,082	21,231				(212,313)	
Capitalización de utilidades	31,802		(31,802)				
Movimientos inherentes a la operación							
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta				$ 603			603
Utilidad neta de ejercicio						243,717	243,717
Saldos al 31 de diciembre de 2000	$ 446,103	$ 44,062	$ -	$ 603	($ 28,057)	$ 243,717	$706,428

Las diecisiete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Financieras de Objeto Limitado emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracciones III, XXXVI y XXXVII, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la décima tercera y décima cuarta de las reglas generales a que deberán sujetarse las sociedades a que se refiere la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable están sujetos a la aprobación del Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

Director General
Lic. Víctor Manuel Requejo Hernández
Rúbrica.
Contador General
C.P. Enrique Fuentes Hernández

Director de Finanzas
Lic. Eduardo Gastelú Martínez
Rúbrica.
Director Adjunto de Contraloría y Auditoría
C.P. José Antonio García León

Rúbrica.

Rúbrica.

HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
cifras expresadas en miles de pesos constantes del 31 de diciembre de 2000

	Año que terminó el 31 de diciembre de	
Actividades de operación	**2000**	**1999**
Utilidad neta	$ 243,717	$ 212,313
Partidas aplicadas a resultados que no generaron o requirieron la utilización de recursos		
Estimación preventiva para riesgos	1,601	17,883
Depreciación y amortización	6,462	3,857
Impuestos diferidos	2,605	2,316
	254,385	236,369
(Aumento) o disminución de partidas relacionadas con la operación		
Cartera de créditos	(2,623,026)	(2,618,173)
Otras cuentas por cobrar	(2,751)	6,752
Bienes adjudicados	(7,020)	(5,831)
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	279,693	19,869
Otros activos	(43,435)	(5,927)
Recursos utilizados por la operación	(2,142,154)	(2,366,941)
Actividades de financiamiento		
Préstamos bancarios y de otros organismos	2,631,260	2,585,703
Recursos generados en actividades de financiamiento	2,631,260	2,585,703
Actividades de inversión		
Adquisición de activo fijo	49,455	9,996
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	(603)	
Recursos utilizados en actividades de inversión	48,852	9,996
Aumento de efectivo y equivalentes	440,254	208,766
Efectivo y equivalentes al principio del periodo	433,832	225,066
Efectivo y equivalentes al final del periodo	$ 874,086	$ 433,832

Las diecisiete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los presentes estados de cambios en la situación financiera se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para Sociedades Financieras de Objeto Limitado emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4, fracciones III, XXXVI y XXXVII, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la décima tercera y décima cuarta de las reglas generales a que deberán sujetarse las sociedades a que se refiere la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los orígenes y aplicaciones de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de cambios en la situación financiera están sujetos a la aprobación del Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que los suscriben.

Director General
Lic. Víctor Manuel Requejo Hernández
Rúbrica.

Director de Finanzas
Lic. Eduardo Gastelú Martínez
Rúbrica.

Contador General
C.P. Enrique Fuentes Hernández
Rúbrica.

Director Adjunto de Contraloría y Auditoría
C.P. José Antonio García León
Rúbrica.

HIPOTECARIA NACIONAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO
NOTAS SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
cifras expresadas en miles de pesos constantes del 31 de diciembre de 2000
(excepto por el valor nominal de las acciones)

Nota 1.- Actividades de la sociedad

Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V. es una sociedad autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para realizar operaciones como Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL) a partir del 8 de abril de 1994.

La principal actividad de Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V. consiste en captar recursos provenientes de la colocación de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así como la

asignación de créditos al sector inmobiliario, principalmente, con recursos del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI).

Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V. no tiene empleados, en consecuencia, no está sujeta a obligaciones de carácter laboral.

Nota 2.- Resumen de bases contables significativas

Las principales políticas contables de la sociedad se resumen como sigue:

a. **El registro de las operaciones y la agrupación de cuentas de los estados financieros se preparan de acuerdo con las reglas y prácticas establecidas en la Circular 1459 emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión). Estas reglas y prácticas difieren de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), en la presentación y clasificación de algunos rubros de los estados financieros como se indica en los incisos c., d. y f.**

b. La información financiera se actualiza siguiendo los lineamientos establecidos en el criterio de la Circular 1459, que consisten en expresar las cifras de los estados financieros en pesos de un mismo poder adquisitivo a la fecha del último ejercicio, mediante la utilización de los factores derivados de la aplicación del valor de las Unidades de Inversión (UDI) como sigue:

El balance general ha sido actualizado utilizando el valor de la UDI, publicada por el Banco de México.

Los estados de resultados y de variaciones en el capital contable han sido actualizados utilizando la UDI aplicable al momento en el cual se realizaron las operaciones.

El estado de cambios en la situación financiera identifica la generación y aplicación de recursos y los cambios principales en la estructura financiera relativas a las diferencias entre los saldos iniciales y finales en el balance general actualizados por la UDI.

c. Las inversiones en valores se muestran al costo de adquisición y se ajustan a su valor de mercado. En la fecha de su enajenación, se reconoce el resultado por compraventa por el diferencial entre el valor neto de realización y el valor en libros. Los intereses devengados se registran en resultados.

En el caso de los títulos registrados como disponibles para la venta el diferencial entre el valor neto de realización y el costo de adquisición se afecta en una cuenta específica del capital contable. Los PCGA requieren que se reconozcan como utilidad o pérdida en el ejercicio en que se generen.

d. Los créditos en unidades de inversión se valúan al valor de la UDI al cierre del ejercicio. El resultado de esta valuación está considerado dentro de la cartera de préstamos inmobiliarios.

Los PCGA clasifican los activos a corto y largo plazo dentro del balance general.

Los ingresos por intereses moratorios se registran cuando son cobrados y no conforme se devengan.

El refinanciamiento de intereses se incluye como parte de la cartera de préstamos inmobiliarios.

La estimación preventiva para riesgos crediticios representa la estimación para cubrir las posibles pérdidas derivadas de créditos irrecuperables determinada con base en estudios y proyecciones realizados.

Dicha estimación se reconoce en los resultados del periodo. Cuando existe evidencia suficiente de que un crédito no será recuperado, éste se castiga directamente contra la estimación; asimismo, cualquier recuperación de créditos previamente cancelada se realiza afectando dicha estimación.

Los intereses devengados no cobrados de créditos que se consideren como vencidos se provisionan al 100%.

El saldo insoluto de los créditos serán registrados como cartera vencida, cuando las amortizaciones no hayan sido liquidadas en su totalidad en los términos pactados originalmente bajo cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Los créditos con pagos periódicos parciales de principal e intereses que no hayan sido cubiertos en un periodo de 90 días, con excepción de los créditos para la vivienda.
- Los créditos de amortización única, que no hayan sido cubiertos en un periodo de 30 días.
- Si los adeudos se refieren a créditos con pago único de principal al vencimiento y con pagos periódicos de intereses y presentan 90 o más días de vencido el pago de intereses respectivo o 30 o más días de vencido el principal.
- Los créditos para la vivienda, con pagos periódicos parciales de principal e intereses que presenten 180 días naturales de vencimiento de la primera amortización no cubierta por el acreditado. El 30 de octubre de 2000 la Comisión emitió la Circular 1491, sustituyendo diversos criterios contables aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Limitado, destacando la modificación al plazo para considerar vencida la cartera de créditos para la vivienda de 180 a 150 días a partir de enero de 2002.
- Si los adeudos consisten en créditos revolventes y presentan 60 o más días de vencidos.
- Los intereses ordinarios devengados sobre créditos en los que se hayan pactado cobros periódicos parciales que no hayan sido cobrados, se consideran cartera vencida a los 90 días después de su fecha de exigibilidad.

Los intereses se reconocen como ingresos en el momento en que se devengan; sin embargo, la acumulación de intereses se suspende en el momento en que los intereses no cobrados y/o la totalidad del crédito se traspasan a cartera vencida. Los intereses devengados durante el periodo en que el crédito se consideró cartera vencida, se reconocen como ingresos hasta el momento en que se cobran.

Cuando un crédito es reestructurado en alguna de las condiciones originales del mismo, permanece como cartera vencida en tanto no exista evidencia de cumplimiento del deudor por un periodo razonable de tiempo.

e. En el caso de bienes adjudicados o recibidos como dación en pago, la dación en pago se registra al valor neto de realización del bien o al costo, el que sea menor. Se considera como partida monetaria, por lo que el valor registrado de estos bienes no está sujeto al reconocimiento de los efectos de la inflación.

Si el valor en libros del crédito del que se deriva la adjudicación es menor al valor del bien adjudicado, el valor del bien se ajustará al valor en libros que tenía el crédito. El valor registrado de estos bienes se castiga si existe evidencia suficiente de que el valor al que se puede realizar el bien es menor al valor registrado en libros.

f. El inmueble, mobiliario, equipo y gastos de instalación se registran a su costo de adquisición y se actualizan utilizando el valor de la UDI a la fecha del balance general.

La depreciación y amortización se calculan por el método de línea recta a las tasas que se señalan en la nota 6 y al 10%, en el caso de gastos de instalación.

g. La actualización del capital social y resultados acumulados representa la expresión monetaria requerida para mantener a valores constantes -en términos de poder adquisitivo monetario- las aportaciones de los accionistas y las utilidades acumuladas que les fueron retenidas. La actualización de estos conceptos está incluida en las partidas que les dieron origen.

h. El resultado por posición monetaria representa el efecto que ha producido la inflación sobre los activos y pasivos monetarios, los activos generan una pérdida y los pasivos una utilidad. El resultado acumulado al inicio de la actualización se presenta en el capital contable; el correspondiente al periodo se aplica al margen financiero.

i. A partir del 1 de enero de 2000 la compañía adoptó los lineamientos establecidos en el nuevo Boletín D-4 Tratamiento contable del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Activo y de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad, emitido por el IMCP. Como resultado de lo anterior, para el reconocimiento del ISR diferido la compañía cambió del método de pasivo parcial al de activos y pasivos integral, el cual consiste en determinar el ISR diferido, aplicando la tasa del ISR correspondiente a las diferencias entre el valor contable y fiscal de los activos y pasivos -diferencias temporales- a la fecha de los estados financieros. El efecto acumulado al inicio del ejercicio derivado del cambio mencionado no es importante.

j. Las operaciones de futuros con fines de negociación se registran en una parte activa y pasiva. El valor de la parte activa siempre será igual al de la parte pasiva, y ambas deberán actualizarse al cierre del ejercicio para reflejar el valor razonable de los derechos y obligaciones, el cual corresponderá al monto nominal al que se pactaría un contrato de igual naturaleza a la fecha de valuación. Por lo anterior, el reconocimiento de las fluctuaciones en el precio de los contratos se registrará directamente en la cuenta de margen.

Las fluctuaciones en la cuenta de margen generadas por movimientos en los precios de los contratos serán reconocidos por la Sociedad como resultados por intermediación, afectando en contrapartida el valor de la citada cuenta de margen.

k. Los saldos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de la fecha en que se efectúan y las fluctuaciones en cambios resultantes de estas operaciones se aplican a los resultados del año (véase nota 16).

Nota 3.- Inversiones en valores

Este rubro se integra como sigue:

	31 de diciembre de	
	2000	**1999**
Títulos para negociar	$211,693	$432,669
Títulos disponibles para la venta	650,215	
	$861,908	$432,669

El plazo promedio de las inversiones en valores es de 15 días (7 días en 1999).

Al 31 de diciembre de 2000 y de 1999 se tienen inversiones en valores restringidas por $121,828 y $48,735, respectivamente.

Nota 4.- Cartera de crédito

Este rubro se integra como se muestra a continuación:

	31 de diciembre de	
	2000	**1999**
Préstamos inmobiliarios*	$7,637,312	$5,353,426
Créditos simples	409,554	92,978
Intereses devengados	15,693	5,482
Total cartera de crédito vigente	8,062,559	5,451,886
Cartera de crédito vencida	20,086	9,914
Estimación preventiva para riesgos crediticios	(24,098)	(24,678)

Cartera de crédito- neto	$8,058,547	$5,437,122

*El plazo promedio de los créditos que se encuentran respaldados con garantía inmobiliaria es de 27 años.

	Días de vencimiento			
	De 181 a 365	Hasta 2 años	Mayores a 2 años	Total
Cartera vencida 2000	$ 15,460	$ 4,516	$ 110	$20,086
Cartera vencida 1999	8,997	117	800	9,914

Nota 5.- Bienes adjudicados

Los bienes adjudicados disponibles para su venta se integran como sigue:

	31 de diciembre de	
	2000	1999
Terreno	$ 3,416	$ 1,802
Edificio	11,438	6,032
	$ 14,854	$ 7,834

Nota 6.- Inmueble, mobiliario y eouipo

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 se integra como sigue:

	2000	1999	Tasa anual de depreciación (%)
Terreno	$ 3,737		
Edificio	35,038		3.33
Equipo de oficina	10,000	$ 6,230	10
Equipo de cómputo	19,614	14,296	30
Equipo de transporte	2,719	2,240	25
	71,108	22,766	
Depreciación acumulada	(11,956)	(7,339)	
	$ 59,152	$ 15,427	

Nota 7.- Pasivo bursátil

a. **El 10 de julio de 2000 la Comisión, en su oficio DGE-250-6262, autorizó a la Sociedad la inscripción de un programa de pagarés denominados Papel Comercial hasta por un monto de $200,000, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. (BMV). Al 31 de diciembre de 2000 se tiene dispuesto la totalidad del programa autorizado, con un plazo promedio de emisión de 43 días.**

b. **Con fecha 6 de octubre de 1999, la Comisión en su oficio DGE-420-5435, autorizó a la Sociedad la inscripción de pagarés de mediano plazo hasta por un monto de $100,000 que cotizarán en la BMV.**

c. **Al 31 de diciembre de 2000 la Sociedad ha realizado tres colocaciones de pagarés de mediano plazo denominados en UDI, con valor nominal de 100 UDIS cada una (la primera colocación por 152,350 pagarés, la segunda colocación por 145,200 pagarés y la tercera por 72,600 pagarés) con vencimientos el 26 de junio de 2003 y 23 de marzo de 2006 (22 de enero de 2001 el correspondiente a la colocación de 1999). El pasivo bursátil se íntegra como sigue:**

	31 de diciembre de	
	2000	1999
Monto inicial de la emisión de pagarés de mediano plazo	$100,000	$40,000
Valorización	7,683	4,321
Intereses devengados por pagar	1,560	868
	109,243	45,189
Papel comercial	200,000	
	$309,243	$45,189

d. **La emisión del pagaré de mediano plazo tiene la garantía de un contrato de caución bursátil por la totalidad del monto emitido; por tanto, al 31 de diciembre de 2000, se tiene registrada una inversión por $121,828 ($48,735 en 1999) en el rubro de inversiones en valores con restricción formal en cuanto a su disponibilidad hasta el vencimiento de las emisiones en circulación.**

Nota 8.- Préstamos bancarios y de otros organismos

Este rubro se integra como sigue:

	31 de diciembre de	
	2000	1999
Créditos para adquisición de vivienda otorgados con recursos de FOVI	$3,051,654	$3,313,824
Créditos para construcción de vivienda otorgados con recursos de FOVI	1,215,861	967,508

Créditos para la vivienda otorgados con recurso FOVI		
en UDI	2,816,025	645,844
Refinanciamiento de intereses	569,946	430,524
Otros préstamos bancarios	71,420	
	7,724,906	5,357,700
Menos- Corto plazo	569,834	196,162
Porción a largo plazo	$7,155,072	$5,161,538

Nota 9.- Impuestos diferidos

La conciliación entre la tasa real y efectiva del ISR al 31 de diciembre de 2000, se muestra a continuación:

	%
ISR a la tasa real (tasa legal)	35
Más (menos) efecto de ISR sobre	
Resultado por posición monetaria	(9)
Depreciación	2
Efecto neto de costo integral de financiamiento	10
Gastos no deducibles	(1)
Tasa efectiva	37

Al 31 de diciembre de 2000 las principales diferencias temporales sobre las que se reconoce ISR diferido se analizan como sigue:

Pagos anticipados	$11,057
Activos fijos	2,079
Bienes adjudicados	(919)
Resultado por valuación de futuros	(4,158)
Resultado por valuación de títulos	
Disponibles para la venta	(617)
	7,442
Tasa de ISR	35%
Impuesto diferido por pagar (neto)	$ 2,605

Nota 10.- Saldos y operaciones con partes relacionadas

a. Al 31 de diciembre de 2000 y de 1999 los saldos por cobrar a partes relacionadas se integran como sigue:

	2000	**1999**
Vivimex, S.A. de C.V.	$ 21,221	$18,639
Grupo Edificador Polgued, S.A. de C.V.	40,625	13,147
Inmobiliaria Villas de Coacalco, S.A. de C.V.	524	564
Promociones y Desarrollos Lomas de Coacalco, S.A. de C.V.	3,430	7,338
Inmobiliaria Villas de Santa Margarita, S.A. de C.V.		15,718
Fernando Téllez Cuevas	191	2,522
Inmobiliaria Lomas de Coacalco, S.A. de C.V.		521
Guillermo Rozen Fuller		174
Alta Calidad Inmobiliaria, S.A. de C.V.	30,913	4,680
Inmobiliaria Veracruzana, S.A. de C.V.	10,788	8,277
Vivienda Sogima, S.A. de C.V.	19,110	4,037
Inmobiliaria Riveras de Alamar, S.A. de C.V.	16,194	
Inmobiliaria Ericar, S.A de C.V.	4,664	
Impulsores Inmobiliarios de Santa Fe, S.A. de C.V.	22,954	
Impulsores Inmobiliarios de Tijuana, S.A. de C.V.	13,220	
	$183,834	$ 75,617

b. **La Sociedad ha otorgado créditos para la adquisición de viviendas edificadas en conjuntos habitacionales promovidos por los constructores antes mencionados por un importe de $162,540 en 2000 ($60,086 en 1999) que, de acuerdo con las reglas de operación del FOVI vigentes, deberán considerarse como créditos relacionados.**

c. Las principales operaciones efectuadas con partes relacionadas se detallan a continuación:

	2000	**1999**
Intereses cobrados	$ 13,542	$ 6,903
Arrendamientos pagados	(253)	(315)
Servicios administrativos correspondientes a las remuneraciones de los empleados que laboran en la prestadora de servicios	(109,578)	(55,930)

Nota 11.- Compromisos

Al 31 de diciembre de 2000, la Sociedad tiene registrado $21,453 como pagos anticipados por la participación en subastas por cuenta propia que representan 4,101 derechos para individualizar viviendas nuevas o usadas y 293 millones de UDIS en crédito con vencimiento por ejercer de 24 meses contados a partir de la fecha de la subasta.

Nota 12.- Capital contable

En asambleas generales extraordinarias de accionistas celebradas el 27 de marzo de 2000 y 23 de noviembre de 2000, se acordó aumentar el capital social de la Sociedad mediante la capitalización de utilidades acumuladas por $220,952.

En asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 16 de abril de 1999, se acordó aumentar el capital social de la Sociedad mediante la capitalización de utilidades acumuladas por $99,756.

Después de estos movimientos y al 31 de diciembre de 2000, el capital social, se integra como sigue:

Acciones (*)		
600,000	Capital mínimo fijo sin derecho a retiro serie A	$ 60,000
2,907,081	Capital variable serie B	290,708
		350,708
	Actualización	95,395
3,507,081		$446,103

(*) Acciones nominativas de $100 cada una.

La utilidad neta del año está sujeta a la disposición legal que requiere que el 10% de la utilidad de cada ejercicio sea destinada a incrementar la reserva legal, hasta que ésta sea igual al importe del capital social pagado.

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece un concepto especial en relación con el pago de dividendos, denominado Utilidad Fiscal Neta (UFIN), la cual se determina restando a la utilidad fiscal obtenida en cada ejercicio el ISR a cargo y las partidas no deducibles del mismo ejercicio.

Los pagos de utilidades estarán sujetos al pago de ISR, aplicando la tasa de 35% al resultado de multiplicar los dividendos por el factor de 1.5385, cuando las utilidades pagadas no provengan de la UFIN. El ISR que se pague será a cargo de la Sociedad. No se causará ISR si las utilidades pagadas provienen de la UFIN.

En apego a disposiciones de regulación específica emitidas por el FOVI, la Sociedad no podrá repartir dividendos hasta septiembre de 2001.

La utilidad neta del año está sujeta a los acuerdos de la asamblea de accionistas y a las modificaciones que, en su caso, resulten de la revisión de la Comisión.

En cumplimiento de las reglas emitidas por la SHCP, sobre los requerimientos de capital social para las Sociedades Financieras de Objeto Limitado, se deberá mantener un capital suscrito y pagado de 15% del importe del capital mínimo que se determine para las Instituciones de Banca Múltiple. Al 31 de diciembre de 2000 y de 1999 el capital social de Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado excede este parámetro.

Nota 13.- Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo (IMPAC) y Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU)

Entre los criterios contable y fiscal existen partidas que originan que la tasa real del ISR en el año se vea afectada en relación con la tasa que fijan las disposiciones fiscales vigentes (35%). Las diferencias más importantes que provocan ese efecto corresponden a la pérdida inflacionaria e interés deducible y a la ganancia inflacionaria e interés acumulable. Adicionalmente, a partir de 1999 se implementó un mecanismo para diferir el pago de este impuesto, siempre y cuando se reinviertan las utilidades. Por tanto, se aplicará una tasa de 30% (32% en 1999) a la utilidad fiscal reinvertida del ejercicio. El 5% restante (3% en 1999) se pagará hasta el momento en que se paguen las utilidades como dividendos.

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las empresas deben pagar el impuesto que resulte mayor entre el ISR y el IMPAC.

Debido a que la Sociedad no tiene empleados, no tiene responsabilidad por PTU.

Nota 14.- Contrato de mandato con FOVI

Hipotecaria Nacional, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, tiene celebrado un contrato de mandato con el Banco de México, en su carácter de fiduciario, en el FOVI, en la que la SOFOL será la encargada de llevar a cabo el otorgamiento, la administración y cobranza de los financiamientos para vivienda de interés social con un máximo de hasta 50,000 créditos con garantía hipotecaria. Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 la hipotecaria apoyó la subasta de 5,740 y 4,528 créditos, respectivamente.

Nota 15.- Normatividad emitida por FOVI

El 26 de abril de 2000 FOVI emitió una nueva normatividad operativa para Instituciones de Banca Múltiple y Sociedades Financieras de Objeto Limitado del ramo hipotecario, en la cual establece diversos parámetros, como:

- Cartera vencida.
- **Diversificación geográfica.**
- **Diversificación por acreditado.**

• Liquidez.

• Plazo para la colocación de cartera (aplicable hasta 2001).

• Créditos relacionados.

• Límites de apalancamiento.

• Límites máximos de participación en subastas del FOVI.

Al 31 de diciembre de 2000 la Sociedad cumple con todos los parámetros requeridos.

Nota 16.- Moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 la Sociedad tenía 9,906,865 y 8,641,706, respectivamente de dólares americanos.

Los dólares americanos se encuentran valuados al 31 de diciembre de 2000 y de 1999 a un tipo de cambio de $9.6098 y $9.4986 por dólar, respectivamente. A la fecha de emisión de estos estados financieros el tipo de cambio no ha tenido variación significativa.

Instrumentos financieros derivados - Al 31 de diciembre de 2000 se tenía registrada una operación de futuros con fines de negociación, con las siguientes características:

• El 9 de noviembre de 2000 se celebró una operación de futuros de dólares americanos para vender $211,693 (420 contratos de 50,000 dólares americanos) el 19 de marzo de 2001 a un tipo de cambio de $0.0992 dólares americanos por peso, con el propósito de afrontar futuras devaluaciones del peso con respecto al dólar americano.

• La Sociedad registró una pérdida en valuación por $4,158 al 31 de diciembre de 2000.

• La Sociedad constituyó una cuenta de margen que equivale al 4% del total del contrato celebrado para procurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, la cual al 31 de diciembre de 2000 valía $12,230 y se encuentra registrada en inversiones en valores.

• La estimación de la administración con respecto al riesgo contraído es que en marzo el tipo de cambio pactado se nivele con el de mercado, revirtiéndose con esto la pérdida registrada.

• A la fecha de presentación de estos estados financieros el tipo de cambio asciende a $0.1016 dólares americanos por peso.

Nota 17.- Unidades de inversión

La Sociedad tenía su posición en udis, como se muestra a continuación:

	31 de diciembre de	
	2000	**1999**
Activo		
Cartera de crédito	1,436,371	627,587
Pasivo		
Pasivo bursátil	(37,552)	(16,916)
Préstamos de otros organismos	(1,386,657)	(606,768)
Posición neta	12,162	3,903

Las UDIs se encuentran valuadas al 31 de diciembre de 2000 y de 1999 a razón de $2.909158 y $2.671267 por cada UDI, respectivamente.

Director General
Lic. Víctor Manuel Requejo Hernández
Rúbrica.

Director de Finanzas
Lic. Eduardo Gastelú Martínez
Rúbrica.

Contador General
C.P. Enrique Fuentes Hernández
Rúbrica.

Director Adjunto de Contraloría y Auditoría
C.P. José Antonio García León
Rúbrica.

(R.- 144277)

APASCO, S.A. DE C.V.

A los señores accionistas:

Hemos examinado los balances generales consolidados de Apasco, S.A. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2000 y 1999 y los estados consolidados de resultados, de variaciones en las cuentas de inversión de los accionistas y de cambios en la situación financiera, que les son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se menciona en la nota 2 a los estados financieros consolidados adjuntos, la Compañía adoptó las disposiciones del nuevo Boletín D-4, "Tratamiento contable del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Activo y de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad", a partir del 1 de enero de 2000. El efecto de la adopción de este boletín (en miles de pesos) fue reconocer un pasivo inicial a largo plazo por impuestos diferidos de $3,365,042, afectando la inversión de los accionistas en la cuenta denominada "Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido. Asimismo, la provisión para Impuesto Sobre la Renta del ejercicio disminuyó en $113,812.

También como se indica en la nota 2 a los estados financieros consolidados adjuntos, a partir de 2000 la Compañía reconoce el método de participación en la inversión en compañías asociadas extranjeras. Hasta 1999 dichas inversiones se valuaban a su costo original de adquisición en dólares americanos actualizados al cierre del ejercicio. El efecto de este cambio (en miles de pesos) disminuyó la inversión en compañías asociadas en $38,137, la actualización patrimonial en $36,734 y la utilidad del ejercicio en $1,403.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Apasco, S.A. de C.V. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2000 y 1999 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en las cuentas de inversión de los accionistas y los cambios en su situación financiera por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México.

México, D.F., a 22 de enero de 2001.

Ruiz, Urquiza y Cía., S.C.

CPC José A. Rangel

Rúbrica.

APASCO, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000

(miles de pesos)

Activo		
Circulante	**2000**	**1999**
Efectivo y valores realizables	$ 971,244	$ 2,000,741
Cuentas y documentos por cobrar-		
Clientes, neto	899,269	863,826
Otras	77,061	59,437
	976,330	923,263
Inventarios, neto	539,909	578,671
Pagos anticipados	21,648	35,276
Total del activo circulante	2,509,131	3,537,951
Inversión en acciones de compañías asociadas	1,697,889	795,620
Propiedades, planta y equipo, neto	10,833,056	10,814,053
Otros activos, neto	296,575	357,946
	$ 15,336,651	$ 15,505,570
Pasivo e inversión de los accionistas		
Circulante		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	$ 602,042	$ 317,196
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	495,555	399,975
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados	388,850	404,987
Impuesto Sobre la Renta	124,164	329,552
Participación de utilidades	155,270	143,605
Total del pasivo circulante	1,765,881	1,595,315
Deuda a largo plazo	1,146,947	1,883,636
Impuesto Sobre la Renta diferido	3,207,601	-
Impuesto Sobre la Renta pago diferido	70,456	53,210
Obligaciones de carácter laboral	71,408	58,067
Total del pasivo	6,262,293	3,590,228
Inversión de los accionistas:		
Capital social	5,744,239	5,751,760
Prima en suscripción de acciones	513,062	513,062
Reserva para recompra de acciones	640,094	463,233
Utilidades acumuladas	8,452,424	7,560,787
Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido	(3,365,042)	-
Resultado acumulado por actualización	(2,910,419)	(2,373,500)
Total de la inversión de los accionistas	9,074,358	11,915,342
	$ 15,336,651	$ 15,505,570

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales.

APASCO, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000
(miles de pesos, excepto utilidad por acción en pesos)

	2000	**1999**
Ventas netas	$ 9,191,336	$ 8,386,796
Costo de ventas	4,637,570	4,110,346
Utilidad bruta	4,553,766	4,276,450
Gastos de operación:		
Venta y administración	762,178	616,746
Depreciación y amortización	741,112	785,448
	1,503,290	1,402,194
Utilidad de operación	3,050,476	2,874,256
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses a cargo, neto	32,428	73,973
Resultado cambiario, neto	12,763	(83,825)
Utilidad por posición monetaria	(245,582)	(149,357)
	(200,391)	(159,209)
Otros gastos, neto	10,525	84,817
Utilidad antes de provisiones	3,240,342	2,948,648
Provisiones para:		
Impuesto Sobre la Renta	1,103,651	1,004,929
Impuesto Sobre la Renta diferido	(113,812)	-
Participación de utilidades	161,515	149,494
	1,151,354	1,154,423
Utilidad neta consolidada	$ 2,088,988	$ 1,794,225
Utilidad por acción	$ 8.22	$ 6.84
Promedio ponderado de acciones en circulación	253,991,918	262,199,416

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados.

APASCO, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000
(miles de pesos)

	Capital social		Prima en suscripción de acciones	Reserva para recompra de acciones	Utilidades acumuladas	Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta Diferido	Resultado acumulado por actualización	Total de la inversión de los accionistas
	Histórico	Actualización						
Saldos al 31 de diciembre de 1998	$ 227,334	$ 5,529,529	$ 513,062	$ 292,238	$ 6,625,344	$ -	$ (1,042,112)	$ 12,145,395
Dividendos pagados	-	-	-	-	(396,225)	-	-	(396,225)
Incremento de la reserva para recompra de acciones	-	-	-	462,557	(462,557)	-	-	-
Recompra de acciones	(4,569)	(534)	-	(291,562)	-	-	-	(296,665)
Utilidad integral del año	-	-	-	-	1,794,225	-	(1,331,388)	462,837
Saldos al 31 de diciembre de 1999	222,765	5,528,995	513,062	463,233	7,560,787	-	(2,373,500)	11,915,342
Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido	-	-	-	-	-	(3,365,042)	-	(3,365,042)
Dividendos pagados	-	-	-	-	(565,071)	-	-	(565,071)
Incremento de la reserva para recompra de acciones	-	-	-	632,280	(632,280)	-	-	-
Recompra de acciones	(7,242)	(279)	-	(455,419)	-	-	-	(462,940)
Utilidad integral del año	-	-	-	-	2,088,988	-	(536,919)	1,552,069
Saldos al 31 de diciembre de 2000	$ 215,523	$ 5,528,716	$ 513,062	$ 640,094	$ 8,452,424	$ (3,365,042)	$ (2,910,419)	$ 9,074,358

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados.

APASCO, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000
(miles de pesos)

	2000	1999
Operaciones		
Resultados-		
Utilidad neta consolidada	$ 2,088,988	$ 1,794,225
Más (menos)- Partidas en resultados que no requieren (generan) recursos-		
Depreciación y amortización	741,112	785,448
Impuesto Sobre la Renta diferido	(113,812)	-
Variación neta de las obligaciones de carácter laboral	3,625	(7,973)
Recursos obtenidos de resultados	2,719,913	2,571,700
Cambios en el capital de trabajo-		
(Aumento) disminución en-		
Cuentas y documentos por cobrar	(53,067)	62,012
Inventarios	2,112	(155,536)
Pagos anticipados	13,628	(12,148)
Aumento (disminución) en-		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	95,580	120,010
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados	(16,137)	123,100
Impuesto Sobre la Renta	(205,388)	181,670
Participación de utilidades	11,665	53,427
	(151,607)	372,535
Recursos generados por las operaciones	2,568,306	2,944,235
Financiamiento		
Variación en términos reales de la deuda	(270,864)	(390,679)
Efecto de variación de la deuda en pesos constantes	(180,979)	(358,593)
Impuesto Sobre la Renta diferido	3,321,413	-
Impuesto Sobre la Renta pago diferido	17,246	53,210
Dividendos pagados	(565,071)	(396,225)
Recompra de acciones	(462,940)	(296,665)
Disminución de la inversión de los accionistas por efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido	(3,365,042)	-
Recursos aplicados en actividades de financiamiento	(1,506,237)	(1,388,952)
Inversiones		
Adiciones a propiedades, planta y equipo, menos valor neto de retiros	(1,104,167)	(308,514)
Inversión en acciones de compañías asociadas	(943,013)	(16,045)
Efecto neto de la venta de compañía subsidiaria	-	11,560
Otros activos	(44,386)	(15,932)
Recursos aplicados en actividades de inversión	(2,091,566)	(328,931)
(Disminución) aumento neto de efectivo y valores realizables	(1,029,497)	1,226,352
Efectivo y valores realizables al inicio del año	2,000,741	774,389
Efectivo y valores realizables al final del año	$ 971,244	$ 2,000,741

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados.

APASCO, S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
expresadas en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000
(miles de pesos)

1. Actividades y eventos significativos de 2000

Las compañías se dedican a la fabricación y venta de cemento, concreto premezclado, agregados y productos complementarios.

Durante el año, el Consejo de Administración aprobó lo siguiente:

- La construcción de una nueva línea para la producción de cemento en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, que incrementará la capacidad instalada en aproximadamente 1.2 millones de toneladas anuales, con una inversión aproximada de US$100 millones, con el objeto de atender la demanda esperada en esa región.

- La construcción de una línea de producción de cemento blanco que tendrá una capacidad instalada de 180,000 toneladas anuales, con una inversión aproximada de US$48 millones, con el objeto de ampliar su gama de productos y brindar una mejor atención a sus clientes.

Asimismo, durante el segundo trimestre de 2000 el Consejo de Administración de la Compañía aprobó constituir una nueva sociedad tenedora de acciones, con objeto de simplificar la tenencia accionaria en compañías centroamericanas, que la Compañía tenía a esa fecha. La Compañía suscribió el 44.14% de esta nueva sociedad denominada Holcemca B.V. mediante la transferencia de sus inversiones en Cementos del Norte, en Honduras y Cemento de El Salvador, en El Salvador, con un valor aproximado de US$69 millones y la aportación en efectivo de aproximadamente US$108 millones.

2. Principales políticas contables

Las políticas contables que siguen las compañías están de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, los cuales requieren que la Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Las principales políticas contables se resumen a continuación:

Cambios en políticas contables-

Durante el ejercicio, la Compañía cambió sus políticas contables como sigue:

Adopción del nuevo boletín D-4-

La Compañía adoptó las disposiciones del nuevo boletín D-4, Tratamiento contable del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Activo y de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad, a partir del 1 de enero de 2000. El efecto de la adopción de este boletín, fue reconocer un pasivo inicial a largo plazo por impuestos diferidos de $3,365,042, afectando la inversión de los accionistas en la cuenta denominada Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido. Asimismo, la provisión de Impuesto Sobre la Renta del ejercicio disminuyó en $113,812. No se modificó la provisión de participación de utilidades pues no existen partidas que generen un pasivo o beneficio futuro. La aplicación de este nuevo principio no tuvo ningún efecto en la generación de flujo de efectivo.

Reconocimiento del método de participación-

A partir de 2000 la Compañía reconoce el método de participación en la inversión en compañías asociadas extranjeras. Para tal efecto utiliza estados financieros del mes anterior al que se reporta, los cuales se ajustan a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, y se convierten al tipo de cambio en vigor al cierre del ejercicio. El efecto de este cambio disminuyó la inversión en compañías asociadas en $38,137, la actualización patrimonial en $36,734 y la utilidad del ejercicio en $1,403. Hasta 1999 dichas inversiones se valuaban a su costo original de adquisición en dólares americanos valuados al cierre de cada año.

Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera-

Las compañías actualizan sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda al final del último ejercicio, reconociendo así los efectos de la inflación. Consecuentemente, las cifras de los estados financieros son comparables entre sí y con el año anterior, al estar todas expresadas en la misma moneda. Los estados financieros del año anterior han sido actualizados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000 y difieren de los originalmente presentados.

Bases de consolidación-

Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen los correspondientes a Apasco, S.A. de C.V. y sus subsidiarias en las cuales tiene control accionario y administrativo, habiéndose eliminado los saldos y transacciones de importancia entre las compañías del grupo.

Las principales compañías subsidiarias en las cuales se tiene una participación de 99.99% son las siguientes:

Cementos Apasco, S.A. de C.V.
Concretos Apasco, S.A. de C.V.
Cementos Veracruz, S.A. de C.V.
Cementos de Acapulco, S.A. de C.V.
Cal Hidratada Veracruzana, S.A. de C.V.
Comindumex, S.A. de C.V.
Gravasa, S.A. de C.V.
Bienes Raíces Ojo de Agua, S.A. de C.V.
Ecoltec, S.A. de C.V.
Desarrollos y Proyectos el Aromo, S.A. de C.V.

Valores realizables-

Los valores realizables se encuentran representados principalmente por depósitos a corto plazo en dólares americanos y valores gubernamentales y bancarios, registrados a su valor de mercado (costo más rendimiento acumulado).

Inventarios y costo de ventas-

Por su alta rotación, los inventarios de productos terminados y materias primas, quedan actualizados a precios de última compra o producción, sin exceder su valor de realización.

Los inventarios de refacciones y partes se actualizaron a valores de reposición, mediante índices de precios, últimas compras y cotizaciones. El costo de ventas se actualizó a valores de reposición, con base en los incrementos en el valor de los inventarios de refacciones y partes consumidos en el año.

Inversión en acciones de compañías asociadas-

A partir de 2000 la Compañía reconoce el método de participación en la inversión en acciones en compañías asociadas extranjeras. Hasta 1999 la Compañía registraba esta inversión a su costo original en dólares, ajustado al tipo de cambio de cierre del ejercicio.

La inversión en asociadas fue tratada como una entidad extranjera, debido a que sus operaciones son independientes financiera y operativamente de las de la Compañía; por lo tanto, sus estados financieros se ajustan por la inflación del país en que operan, y se convierten al tipo de cambio en vigor al cierre del ejercicio. Los efectos por conversión se incluyen en la actualización patrimonial.

Propiedades, planta y equipo-

Las propiedades, planta y equipo se registran originalmente a su costo de adquisición y/o construcción y se actualizan mediante la aplicación del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La maquinaria y equipo de procedencia extranjera se actualiza con base en el factor de deslizamiento de la moneda y la inflación del país de origen.

La depreciación de activos fijos se calcula bajo el método de línea recta, con base en los valores actualizados y aplicando tasas que corresponden a la vida útil económica estimada de los activos, considerando la capacidad real utilizada en cada ejercicio.

Otros activos-

Este rubro incluye principalmente gastos preoperativos, créditos mercantiles y gastos por colocación de deuda, que son amortizados en línea recta en periodos de cinco a veinte años, de acuerdo a la naturaleza de las partidas.

Impuesto Sobre la Renta y participación de utilidades-

A partir de 2000, la Compañía reconoce, a través del método de pasivo, el efecto diferido o anticipado del Impuesto Sobre la Renta aplicable al monto acumulado de las diferencias temporales entre la utilidad contable y fiscal; para efectos de participación de utilidades reconoce solamente aquellas partidas que se materializarán en el corto plazo.

Obligaciones de carácter laboral-

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, algunas subsidiarias tienen un pasivo por primas de antigüedad a empleados y obreros con una antigüedad mayor a 15 años. Además, están obligadas por contrato colectivo, al pago de primas de antigüedad a trabajadores que se retiren en forma voluntaria, bajo ciertas condiciones.

Se tiene constituido un plan de pensiones para empleados, el cual establece la edad de retiro a los 65 años con 10 de antigüedad en la empresa, o un retiro anticipado a los 60 años con 10 años de antigüedad, previa autorización del Comité de Administración del plan. El plan está financiado mediante aportaciones anuales a un fondo en fideicomiso.

Las compañías registran el pasivo por primas de antigüedad, pensiones y retiro voluntario, a medida que se devenga, de acuerdo con cálculos actuariales basados en el método de crédito unitario proyectado, utilizando tasas de interés real.

Por lo tanto, se está provisionando el pasivo que, a valor presente, cubrirá las obligaciones proyectadas a la fecha estimada de retiro de los empleados que laboran en las compañías. Los pagos por concepto de indemnizaciones a los empleados que son despedidos, se cargan a los resultados del ejercicio en que se efectúan.

Resultado acumulado por actualización -

La actualización de las aportaciones de capital de los accionistas, las utilidades acumuladas, la prima en suscripción de acciones, la reserva para recompra de acciones y el efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido, se determina aplicando el INPC, a partir de la fecha en que se hicieron las aportaciones o se retuvieron las utilidades y equivale a la cantidad necesaria para mantener la inversión de los accionistas en términos de su poder adquisitivo original.

El resultado acumulado por actualización corresponde básicamente al resultado por tenencia de activos no monetarios, que representa el cambio en el valor específico de dichos activos, en relación con la inflación, medida a través del INPC.

Reconocimiento de ingresos-

Los ingresos son reconocidos al momento en que se embarcan o entregan los productos al cliente y éste asume responsabilidad sobre los mismos. También se reconocen como ingresos aquellos pedidos efectuados y pagados por los clientes, en donde las fechas y condiciones de entrega del producto han sido pactadas con ellos.

Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos que afectan o provienen de una partida monetaria, se actualizan del mes en que ocurren hasta el cierre del año, con base en factores obtenidos del INPC. Aquellos que provienen de partidas no monetarias, se actualizan en función del activo que se está consumiendo o vendiendo.

Resultado integral de financiamiento-

El resultado integral de financiamiento incluye todos los conceptos de ingresos y gastos financieros, tales como intereses y resultados cambiarios o por posición monetaria, a medida que ocurren o se devengan.

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación y los activos y pasivos en moneda extranjera, se ajustan al tipo de cambio en vigor al cierre del ejercicio.

El resultado por posición monetaria, que representa la erosión de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo monetario neto al principio de cada mes, el factor de inflación derivado del INPC y se actualiza al cierre del ejercicio, también a través del INPC.

Utilidad por acción-

La utilidad por acción se determinó dividiendo la utilidad neta consolidada entre el promedio ponderado de acciones en circulación de cada ejercicio.

Utilidad integral-

El resultado integral comprende la utilidad neta del año y las partidas que representan una ganancia o pérdida, que de acuerdo a disposiciones específicas se presentan directamente en la inversión de los accionistas, tales como el resultado acumulado por actualización.

3. Nuevo principio contable

En el año 2001 entrará en vigor el nuevo boletín C-2, que establece la metodología de valuación y registro de los instrumentos financieros. Este boletín requiere que se registren como activos y pasivos los instrumentos financieros que se tengan contratados, afectando el resultado integral de financiamiento por el efecto de los mismos. Los instrumentos financieros que han sido designados y que funcionan efectivamente como una cobertura de activos o pasivos o de operaciones futuras, afectarán los activos o pasivos o las transacciones correspondientes, cuando ocurran. Al 31 de diciembre de 2000 no hay instrumentos financieros de importancia con estas características.

4. Reclasificaciones a los estados financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre de 1999 han sido reclasificados en ciertas cuentas, con el objeto de hacer comparable su presentación con la de los estados financieros al 31 de diciembre de 2000.

5. Posición y operaciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera, han sido valuados al tipo de cambio de $9.6098 por dólar, que corresponde al tipo de cambio oficial al 31 de diciembre de 2000.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 se tienen activos y pasivos denominados en moneda extranjera, como sigue:

	2000		1999
	Miles de pesos	Miles de dólares	Miles de dólares
Activo-			
Circulante	$ 581,427	60,504	159,493
Largo plazo	18,564	1,932	2,211
	599,991	62,436	161,704
Pasivo-			
Circulante	709,382	73,819	41,248
Largo plazo	1,146,947	119,351	182,000
	1,856,329	193,170	223,248
Posición pasiva neta en moneda extranjera	$ 1,256,338	130,735	61,544

Las principales operaciones realizadas por la Compañía en moneda extranjera, fueron las siguientes:

	Miles de dólares	
	2000	1999
Ingresos por ventas	3,190	14,367
Egresos-		
Compras de materias primas y cemento	1,210	1,535
Compras de activo fijo	18,413	1,699
Servicios de consultoría	9,711	5,363
Intereses	12,510	14,246
Honorarios	5,626	4,643
Arrendamientos	23,164	16,975
Otros	9,424	4,822
	80,058	49,283
Neto	(76,868)	(34,916)

Al 22 de enero de 2001, la posición en moneda extranjera, no auditada, es similar a la del cierre del ejercicio y el tipo de cambio oficial era de $9.7953 por dólar.

6. Inventarios

	2000	1999
Productos terminados	150,432	$ 138,815
Materias primas	139,840	176,106
Refacciones y partes	234,843	271,198
Anticipos a proveedores	28,464	15,895
	553,579	602,014
Estimación para inventarios obsoletos y de lento movimiento	(13,670)	(23,343)
	$ 539,909	$ 578,671

7. Propiedades, planta y equipo

	2000	1999
Terrenos y yacimientos	$ 837,924	$ 679,020
Edificios e instalaciones	4,441,438	4,461,977
Maquinaria y equipo	10,850,096	11,258,045
Equipo de transporte	1,451,044	1,544,213
Muebles y enseres	349,196	282,168
Obras en proceso y equipo en tránsito	620,012	128,692
	18,549,710	18,354,115
Depreciación acumulada	(7,716,654)	(7,540,062)
	$ 10,833,056	$ 10,814,053

Las adiciones a propiedades, planta y equipo a valor histórico en 2000 y 1999, ascendieron a $1,070,727 y $343,809, respectivamente.

Las tasas anuales promedio de depreciación son como sigue:

	2000	1999
Edificios e instalaciones	2.3%	2.3%
Maquinaria y equipo	2.9%	3.4%
Equipo de transporte	4.8%	5.0%
Muebles y enseres	11.1%	14.2%

8. Otros activos

	2000	1999
Gastos preoperativos	$ 310,790	$ 313,943
Créditos mercantiles	112,369	112,369
Gastos por colocación de deuda	52,409	52,409
Documentos por cobrar	17,729	19,747
Plan de opción de compra de acciones	17,247	17,247
Activo diferido por obligaciones de carácter laboral	9,716	-
Otros	127,294	93,528
	647,554	609,243
Amortización acumulada	(350,979)	(251,297)
	$ 296,575	$ 357,946

9. Entorno fiscal

Régimen de Impuesto Sobre la Renta y sobre activos-

La Compañía está sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Impuesto sobre Activos (IMPAC). El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como depreciación calculada sobre valores actualizados, la deducción de compras en lugar del costo de ventas, lo que permite deducir costos actuales y el efecto de la inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios, a través del componente inflacionario, el cual es similar al resultado por posición monetaria. La tasa del Impuesto Sobre la Renta es de 35%, teniendo la obligación de pagar el impuesto cada año a la tasa de 30% y el remanente al momento en que las utilidades sean distribuidas. Este remanente se registra como un pasivo (a corto o a largo plazo) dependiendo de la política de pago de dividendos.

Por otra parte, el IMPAC se causa a razón de 1.8% del promedio neto de la mayoría de los activos (a valores actualizados) menos ciertos pasivos y se paga únicamente por el monto en que exceda al ISR del año. Cualquier pago que se efectúe, es recuperable contra el monto en que el ISR exceda al IMPAC en los diez ejercicios subsecuentes.

Bases para la determinación del resultado fiscal-

La Compañía tiene autorización para presentar una declaración consolidada de ISR e IMPAC.

Las principales partidas que afectaron el resultado fiscal de las compañías en forma distinta al resultado contable, fueron las relativas a la depreciación fiscal actualizada en lugar de la depreciación contable y el efecto de las compras y el costo de ventas.

El cálculo para efectos de participación de utilidades no considera el componente inflacionario ni las fluctuaciones cambiarias no realizadas y considera la depreciación fiscal a valores históricos y no

actualizados. La participación de utilidades se determina en base a los resultados individuales de cada Compañía.

Efecto diferido-

El Impuesto Sobre la Renta diferido al 31 de diciembre de 2000 se integra como sigue:

Propiedades, planta y equipo y otros activos	$ 3,056,207
Inventarios	196,310
Reservas	(98,169)
Efecto acumulado por partidas especiales de consolidación fiscal	53,253
	$ 3,207,601

10. Deuda a largo plazo

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, la deuda a largo plazo se integra como sigue:

			2000		1999
	Tasa de interés	**Vencimiento**	**Miles de pesos**	**Miles de dólares**	**Miles de dólares**
Citibank, N.A.	LIBOR + 1.0	2003	$ 960,980	100,000	100,000
International Finance Corporation	9%	2007	605,417	63,000	72,000
International Finance Corporation	LIBOR + 2.1	2001	48,049	5,000	15,000
Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft Mbh	11.2% y LIBOR + 2.9	2002	58,265	6,063	9,396
Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.	11.2% y 9.5%	2001 y 2003	35,845	3,730	6,570
EXIMBANK	LIBOR + 0.5 y LIBOR + 0.62	2001 y 2002	27,246	2,835	6,010
Kreditansalt Für Wiederaufbau	LIBOR + 0.65	2002	13,187	1,372	3,671
			1,748,989	182,000	212,647
Menos- Porción circulante			602,042	62,649	30,647
			$ 1,146,947	119,351	182,000

En general, los préstamos vigentes establecen restricciones y obligaciones muy similares para la Compañía, las cuales al 31 de diciembre de 2000 se han cumplido. Las restricciones y obligaciones más importantes son:

Limitar el pago de dividendos, el cual está condicionado al cumplimiento de algunas razones financieras y al nivel de endeudamiento.

Cumplir con ciertas razones financieras.

No disponer ni permitir la existencia de gravámenes sobre los activos.

Limitar la inversión en activos fijos a las cantidades establecidas en los contratos.

Para financiar el programa de expansión que se menciona en la nota 1, el 21 de diciembre de 2000 se contrató una línea de crédito con el Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft de Alemania por US$38.6 millones a una tasa de interés de LIBOR más 0.6, de la cual no se realizó ninguna disposición al 31 de diciembre de 2000 y se habían dispuesto US$16.1 millones al 22 de enero de 2001.

11. Obligaciones laborales

El pasivo por obligaciones laborales se deriva del plan de pensiones y la prima de antigüedad al momento de retiro. El monto que resulta de cálculos actuariales, efectuados por actuarios externos bajo el método de crédito unitario proyectado, se reconoce en parte como un pasivo en libros y otra parte está siendo fondeada como sigue:

	2000	**1999**
Obligación por beneficios proyectados (OBP)	$ 139,559	$ 105,503
Fondo constituido	(49,172)	(37,364)
	90,387	68,139
Pasivo de transición por amortizar	(17,136)	(16,771)
Variaciones en supuestos por amortizar	(11,559)	6,699
Pasivo neto en libros	$ 61,692	$ 58,067

A la fecha, el monto provisionado sin considerar el fondo constituido es inferior a la obligación por servicios actuales, (OBA) (equivalente al OBP sin proyectar los sueldos a la fecha de retiro) en $7,829, originado principalmente en Cementos Apasco, S.A. de C.V. ya que su monto provisionado fue inferior al OBA en $9,716, razón por la cual se creó un pasivo adicional por dicho importe.

El costo neto del periodo se integra por:

	2000	**1999**
Costo de servicios del año	$ 11,413	$ 16,768
Amortización del activo de transición	969	1,067
Costo financiero del año	5,917	5,704
Amortización de variaciones en supuestos	(1,304)	-
	16,995	23,539
Déficit (rendimiento) de los activos del fondo	541	(6,872)

Costo neto del periodo	$ 17,536	$ 16,667

Las tasas utilizadas en las proyecciones actuariales son las siguientes:

	2000	1999
Tasa de rendimiento del fondo	6.5%	4.5%
Tasa de interés	4.5%	4.5%
Tasa de incremento de sueldos	1.5%	1.5%

El movimiento del pasivo neto fue como sigue:

	2000	1999
Saldo inicial	$ 58,067	$ 51,602
Provisión del año	17,536	16,667
Reducción especial de personal	-	1,216
Pagos	(841)	-
Aportación al fondo	(13,070)	(11,418)
Saldo final	$ 61,692	$ 58,067

El movimiento del fondo fue como sigue:

	2000	1999
Saldo inicial	$ 37,364	$ 19,074
Aportaciones	13,070	11,418
(Déficit) rendimientos	(541)	6,872
Pagos	(721)	-
Saldo final	$ 49,172	$ 37,364

Los periodos de amortización son como sigue:

Concepto	Años Remanentes
Variaciones en supuestos	Entre 6 y 33
Pasivo de transición	Entre 6 y 33

12. Inversión de los accionistas

En cumplimiento al acuerdo de la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 12 de abril de 2000, se efectuó el pago de un dividendo en efectivo de $536,222 ($2.10 pesos por acción en circulación), provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta (UFIN) consolidada, cuyo valor actualizado asciende a $565,071.

En cumplimiento al acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 24 de abril de 1997, se constituyó una reserva para recompra de acciones, proveniente de la cuenta de utilidades acumuladas para que, con cargo a dicha reserva, se adquieran acciones de la sociedad que representarán hasta el 3% del capital social. Posteriormente, por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de abril de 1999, se incrementó esta reserva para que la sociedad pudiera adquirir acciones que representarán hasta el 5% del capital social. Si dichas acciones no se colocan nuevamente, en el término de un año, se procederá a la cancelación del capital social respectivo.

En asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 12 de abril de 2000, se acordó incrementar la reserva en $600,000 a valor histórico, cuyo valor actualizado asciende a $632,280 para adquirir acciones que representen hasta el 5% del capital social a esa fecha. Durante 2000 y 1999 se recompraron 8,400,000 y 5,300,000 acciones en $445,587 y $265,708 (a valor histórico) cuyo monto actualizado asciende a $462,940 y $296,665, respectivamente, y se cancelaron 8,225,000 y 7,731,000 acciones, según asambleas generales ordinarias de accionistas celebradas el 12 y 21 de abril de 2000 y 1999, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2000, el capital social se encuentra representado por 250,000,000 acciones ordinarias Serie "Unica", sin valor nominal, de las cuales 244,656,000 se encuentran en circulación y 5,344,000 fueron objeto de recompra, encontrándose en Tesorería al 31 de diciembre de 2000. El capital mínimo fijo está representado por 165,716,299 acciones en circulación y el capital variable por 84,283,701 acciones en circulación. El capital social total suscrito y pagado a valor histórico, asciende a $215,523, de los cuales $40,000 corresponden al capital mínimo fijo.

La reserva legal, cuyo valor histórico asciende a $94,169 al 31 de diciembre de 2000, no es susceptible de distribuirse a los accionistas durante la existencia de la Compañía, excepto en la forma de dividendos en acciones.

Los dividendos que se paguen a personas físicas o residentes en el extranjero, estarán sujetos a retención del Impuesto Sobre la Renta a una tasa efectiva de 7.5% al 7.7%, la cual varía según el año en que las utilidades hayan sido generadas. Además, en caso de repartir utilidades que no hubieran causado el impuesto aplicable a la empresa, éste tendrá que pagarse al distribuir el dividendo. Por lo anterior, la Compañía debe llevar cuenta de las utilidades sujetas a cada tasa.

Las reducciones de capital causarán impuestos sobre el excedente del monto repartido contra su valor fiscal, determinado de acuerdo a lo establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

13. Compromisos contraídos

Como se menciona en la nota 1, la Compañía tiene un programa de expansión por un total de aproximadamente US$148 millones, de los cuales al 31 de diciembre de 2000 se han incurrido US$36.7 millones aproximadamente y existen compromisos contraídos para la adquisición de diversos equipos por US$59.8 millones aproximadamente. El financiamiento se ha obtenido de proveedores y de una línea de crédito contratada el 21 de diciembre de 2000 con el Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft de Alemania por US$38.6 millones (ver nota 10).

(R- 144493)

APASCO, S.A. DE C.V.

A los señores accionistas:

Hemos examinado los balances generales de Apasco, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2000 y 1999 y los estados de resultados, de variaciones en las cuentas de inversión de los accionistas y de cambios en la situación financiera, que les son relativos, por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.

Como se menciona en la nota 2 a los estados financieros adjuntos, la Compañía adoptó las disposiciones del nuevo Boletín D-4, Tratamiento contable del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Activo y de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad, a partir del 1 de enero de 2000. El efecto de la adopción de este boletín (en miles de pesos) fue reconocer un pasivo inicial a largo plazo por Impuesto Sobre la Renta diferido de $118,377 y una disminución de la inversión en acciones de subsidiarias de $3,246,665, afectando la inversión de los accionistas en la cuenta denominada Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido en $3,365,042. Asimismo, la provisión para Impuesto Sobre la Renta y la participación en la utilidad neta del año de subsidiarias, disminuyeron en $5,923 y $107,889, respectivamente.

También como se indica en la nota 2 a los estados financieros adjuntos, a partir de 2000 la Compañía reconoce el método de participación en la inversión en compañías asociadas extranjeras. Hasta 1999 dichas inversiones se valuaban a su costo original de adquisición, en dólares americanos actualizados al cierre del ejercicio. El efecto de este cambio (en miles de pesos) disminuyó la inversión en compañías asociadas en $38,137, la actualización patrimonial en $36,734 y la utilidad del ejercicio en $1,403.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados para ser utilizados por la asamblea de accionistas de la Compañía y, por lo tanto, reflejan la inversión en acciones de subsidiarias a través del método de participación. Para tener información completa sobre Apasco, S.A. de C.V. y Subsidiarias, se recomienda la lectura de los estados financieros consolidados.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Apasco, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2000 y 1999 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en las cuentas de inversión de los accionistas y los cambios en su situación financiera por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México.

22 de enero de 2001.

Ruiz, Urquiza y Cía., S.C.

C.P.C. José A. Rangel

Rúbrica.

APASCO, S.A. DE C.V.

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000

(miles de pesos)

Activo	**2000**	**1999**
Efectivo y valores realizables	$ 840,474	$ 1,852,756
Cuentas por cobrar a subsidiarias	4,231,417	2,864,855
Otras cuentas por cobrar	1,696,262	2,958,222
Total del activo circulante	6,768,153	7,675,833
Inversión en acciones de subsidiarias y asociadas	5,350,539	6,476,185
Propiedades, neto	102,528	105,554
Otros activos, neto	59,302	73,898
	$ 12,280,522	$ 14,331,470

Pasivo e inversión de los accionistas		
Porción circulante de la deuda a largo plazo	$ 581,263	$ 280,479
Cuentas por pagar y pasivos acumulados	334,495	225,718
Cuentas por pagar a subsidiarias	1,045,655	59,853
Total del pasivo circulante	1,961,413	566,050
Deuda a largo plazo	1,136,557	1,850,078
Impuesto Sobre la Renta diferido	108,197	-
Total del pasivo	3,206,167	2,416,128
Inversión de los accionistas		
Capital social	5,744,239	5,751,760
Prima en suscripción de acciones	513,062	513,062
Reserva para recompra de acciones	640,094	463,233
Utilidades acumuladas	8,452,424	7,560,787
Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido	(3,365,042)	-
Resultado acumulado por actualización	(2,910,419)	(2,373,500)
Total de la inversión de los accionistas	9,074,358	11,915,342
	$ 12,280,522	$ 14,331,470

Las notas adjuntas son parte integrante de estos balances generales.

APASCO, S.A. DE C.V.

ESTADOS DE RESULTADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999

expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000

(miles de pesos, excepto utilidad por acción en pesos)

	2000	**1999**
Participación en la utilidad neta del año de subsidiarias y asociadas	$ 2,003,181	$ 1,638,580
Ingresos por rentas	4,500	5,307
Gastos de operación		
Administración	16,346	17,606
Depreciación y amortización	10,876	10,876
	27,222	28,482
Utilidad de operación	1,980,459	1,615,405
Resultado integral de financiamiento		
Intereses ganados, neto	(630,777)	(961,477)
Resultado cambiario, neto	13,270	(81,950)
Pérdida por posición monetaria	410,412	643,256
	(207,095)	(400,171)
Otros gastos (ingresos), neto	17,492	(18,236)
Utilidad antes de provisiones	2,170,062	2,033,812
Provisiones para		
Impuesto Sobre la Renta	64,581	141,267
Impuesto Sobre la Renta diferido	(5,923)	-
Efecto por consolidación fiscal	22,416	98,320
	81,074	239,587
Utilidad neta del año	$ 2,088,988	$ 1,794,225
Utilidad por acción	$ 8.22	$ 6.84
Promedio ponderado de acciones en circulación	253,991,918	262,199,416

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados.

APASCO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE VARIACIONES EN LAS CUENTAS DE INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000
(miles de pesos)

	Capital social		Prima en suscripción de acciones	Reserva para recompra de acciones	Utilidades acumuladas	Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido	Resultado acumulado por actualización	Total de la inversión de los accionistas
	Histórico	Actualización						
Saldos al 31 de diciembre de 1998	$ 227,334	$ 5,529,529	$ 513,062	$ 292,238	$ 6,625,344	$ -	$ (1,042,112)	$ 12,145,395
Dividendos pagados	-	-	-	-	(396,225)	-	-	(396,225)
Incremento de la reserva para recompra de acciones	-	-	-	462,557	(462,557)	-	-	-
Recompra de acciones	(4,569)	(534)	-	(291,562)	-	-	-	(296,665)
Utilidad integral del año	-	-	-	-	1,794,225	-	(1,331,388)	462,837
Saldos al 31 de diciembre de 1999	222,765	5,528,995	513,062	463,233	7,560,787	-	(2,373,500)	11,915,342
Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido	-	-	-	-	-	(3,365,042)	-	(3,365,042)
Dividendos pagados	-	-	-	-	(565,071)	-	-	(565,071)
Incremento de la reserva para recompra de acciones	-	-	-	632,280	(632,280)	-	-	-
Recompra de acciones	(7,242)	(279)	-	(455,419)	-	-	-	(462,940)
Utilidad integral del año	-	-	-	-	2,088,988	-	(536,919)	1,552,069
Saldos al 31 de diciembre de 2000	$ 215,523	$ 5,528,716	$ 513,062	$ 640,094	$ 8,452,424	$ (3,365,042)	$ (2,910,419)	$ 9,074,358

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados.

APASCO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
expresados en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000
(miles de pesos)

	2000	**1999**
Operaciones		
Resultados-		
Utilidad neta del año	$ 2,088,988	$ 1,794,225
Más (menos)- Partidas en resultados que no requieren (generan) recursos-		
Participación en la utilidad neta del año de subsidiarias y asociadas	(2,003,181)	(1,638,580)
Depreciación y amortización	10,876	10,876
Impuesto Sobre la Renta diferido	(5,923)	-
Recursos obtenidos de resultados	90,760	166,521
Cambios en el capital de trabajo-		
(Aumento) disminución en-		
Cuentas por cobrar a subsidiarias	(380,760)	1,704,463
Otras cuentas por cobrar	1,261,960	283,090
Aumento (disminución) en-		
Cuentas por pagar y pasivos acumulados	108,777	134,974
	989,977	2,122,527
Recursos obtenidos de las operaciones	1,080,737	2,289,048
Financiamiento		
Variación en términos reales de la deuda	(237,537)	(350,061)
Efecto de variación de la deuda en pesos constantes	(175,200)	(340,843)
Impuesto Sobre la Renta diferido	114,120	-
Dividendos pagados	(565,071)	(396,225)
Dividendos recibidos	790,350	751,654
Recompra de acciones	(462,940)	(296,665)
Disminución de la inversión de los accionistas por efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido	(3,365,042)	-
	(3,901,320)	(632,140)
Inversiones		
Inversión en acciones de subsidiarias y asociadas	(1,438,364)	(411,164)
Disminución de la inversión en acciones de subsidiarias por efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido	3,246,665	-
Efecto neto de la venta de compañía subsidiaria	-	11,560
	1,808,301	(399,604)
(Disminución) aumento neto de efectivo y valores realizables	(1,012,282)	1,257,304
Efectivo y valores realizables al inicio del año	1,852,756	595,452
Efectivo y valores realizables al final del año	$ 840,474	$ 1,852,756

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados.

APASCO, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
expresadas en moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000
(miles de pesos)

1. Actividades y eventos significativos de 2000

La Compañía es tenedora de las acciones de un grupo de empresas dedicadas a la fabricación y venta de cemento, concreto premezclado, agregados y productos complementarios y es dirigida y operada por medio de la gestión del Consejo de Administración, por lo que no tiene empleados.

Durante el año el Consejo de Administración, a través de su subsidiaria Cementos Apasco, S.A. de C.V., aprobó lo siguiente:

- La construcción de una nueva línea para la producción de cemento en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, que incrementará la capacidad instalada en aproximadamente 1.2 millones de toneladas anuales, con una inversión aproximada de US$100 millones, con el objeto de atender la demanda esperada en esa región.

- La construcción de una línea de producción de cemento blanco que tendrá una capacidad instalada de 180,000 toneladas anuales, con una inversión aproximada de US$48 millones, con el objeto de ampliar su gama de producto y brindar una mejor atención a sus clientes.

Asimismo, durante el segundo trimestre de 2000 el Consejo de Administración de la Compañía aprobó constituir una nueva sociedad tenedora de acciones, con objeto de simplificar la tenencia accionaria en compañías centroamericanas que la Compañía tenía a esa fecha. La Compañía suscribió el 44.14% de esta nueva sociedad denominada Holcemca B.V. mediante la transferencia de sus inversiones en Cementos del Norte, en Honduras y Cemento de El Salvador, en El Salvador, con un valor aproximado de US$69 millones y la aportación en efectivo de aproximadamente US$108 millones.

2. Principales políticas contables

Las políticas contables que sigue la Compañía y sus subsidiarias están de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, los cuales requieren que la administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requiere presentar en los mismos. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Las principales políticas contables se resumen a continuación:

Cambios en políticas contables-

Durante el ejercicio, la Compañía cambió sus políticas contables como sigue:

Adopción del nuevo Boletín D-4-

La Compañía adoptó las disposiciones del nuevo Boletín D-4, Tratamiento contable del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Activo y de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad, a partir del 1 de enero de 2000. El efecto de la adopción de este boletín, fue reconocer un pasivo inicial a largo plazo por impuestos diferidos de $118,377 y una disminución de la inversión en acciones de subsidiarias de $3,246,665, afectando la inversión de los accionistas en la cuenta denominada Efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido en $3,365,042. Asimismo, la provisión de Impuesto Sobre la Renta y la participación en la utilidad neta del año de subsidiarias se disminuyeron en $5,923 y $107,889, respectivamente. La aplicación de este nuevo principio no tiene ningún efecto en la generación de flujo de efectivo.

Reconocimiento del método de participación-

A partir de 2000 la Compañía reconoce el método de participación en la inversión en compañías asociadas extranjeras. Para tal efecto, utiliza estados financieros del mes anterior al que se reporta, los cuales se ajustan a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México, y se convierten al tipo de cambio en vigor. El efecto de este cambio disminuyó la inversión en compañías asociadas en $38,137, la actualización patrimonial en $36,734 y la utilidad del ejercicio en $1,403.

Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera-

La Compañía actualiza sus estados financieros en términos de poder adquisitivo de la moneda al final del último ejercicio, reconociendo así los efectos de la inflación. Consecuentemente, las cifras de los estados financieros son comparables entre sí y con el año anterior, al estar todas expresadas en la misma moneda. Los estados financieros del año anterior han sido actualizados a moneda de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2000 y difieren de los originalmente presentados.

Valores realizables-

Los valores realizables se encuentran representados principalmente por depósitos a corto plazo en dólares americanos y valores gubernamentales y bancarios, registrados a su valor de mercado (costo más rendimiento acumulado).

Inversión en acciones-

La inversión en acciones de subsidiarias se registra utilizando el método de participación, el cual incluye el reconocimiento de los efectos de la inflación en las compañías subsidiarias.

Para tener información completa sobre Apasco, S.A. de C.V. y Subsidiarias, se recomienda la lectura de los estados financieros consolidados. A continuación se presenta información condensada básica de dichos estados financieros consolidados:

	2000	1999
Activos totales	$ 15,336,651	$ 15,505,570
Pasivos totales	$ 6,262,293	$ 3,590,228
Inversión de los accionistas	$ 9,074,358	$ 11,915,342
Ventas netas	$ 9,481,760	$ 8,660,845
Utilidad de operación	$ 3,050,476	$ 2,874,256
Utilidad neta consolidada	$ 2,088,988	$ 1,794,225

Inversión en acciones de compañías asociadas-

A partir de 2000 la Compañía reconoce el método de participación en la inversión en acciones en compañías asociadas extranjeras. Hasta 1999 la Compañía registraba esta inversión a su costo original en dólares, ajustado al tipo de cambio de cierre del ejercicio.

La inversión en asociadas fue tratada como una entidad extranjera, debido a que sus operaciones son independientes financiera y operativamente de las de la Compañía; por lo tanto, sus estados financieros se ajustan por la inflación del país en que operan y se convierten al tipo de cambio en vigor. Los efectos por conversión se incluyen en la actualización patrimonial.

Propiedades-

Las propiedades se registran originalmente a su costo de adquisición y/o construcción y se actualizan mediante la aplicación del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

La depreciación de activos fijos se calcula bajo el método de línea recta, con base en los valores actualizados y aplicando tasas que corresponden a la vida útil económica estimada de los activos.

Otros activos-

Este rubro incluye el crédito mercantil originado por adquisiciones efectuadas a un precio superior al valor en libros de las subsidiarias adquiridas, el cual se amortiza en línea recta en un periodo promedio de 8 años, que es el plazo en el cual se estima que se generarán los beneficios de la inversión. También incluye gastos por colocación de deuda que se amortizan en los plazos de vencimiento de la deuda relativa.

Impuesto Sobre la Renta-

A partir de 2000, la Compañía reconoce, a través del método de pasivo, el efecto diferido o anticipado del Impuesto Sobre la Renta aplicable al monto acumulado de las diferencias temporales entre la utilidad contable y fiscal.

Resultado acumulado por actualización-

La actualización de las aportaciones de capital de los accionistas, las utilidades acumuladas, la prima en suscripción de acciones, la reserva para recompra de acciones y el efecto acumulado de Impuesto Sobre la Renta diferido, se determina aplicando el INPC, a partir de la fecha en que se hicieron las aportaciones o se retuvieron las utilidades y equivale a la cantidad necesaria para mantener la inversión de los accionistas en términos de su poder adquisitivo original.

El resultado acumulado por actualización corresponde básicamente al resultado por tenencia de activos no monetarios, que representa el cambio en el valor específico de dichos activos, en relación con la inflación, medida a través del INPC.

Ingresos y gastos-

Los ingresos y gastos que afectan o provienen de una partida monetaria, se actualizan del mes en que ocurren hasta el cierre del año, con base en factores obtenidos del INPC. Aquellos que provienen de partidas no monetarias, se actualizan en función del activo que se está consumiendo.

Resultado integral de financiamiento-

El resultado integral de financiamiento incluye todos los conceptos de ingresos y gastos financieros, tales como intereses y resultados cambiarios o por posición monetaria, a medida que ocurren o se devengan.

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación y los activos y pasivos en moneda extranjera, se ajustan al tipo de cambio en vigor al cierre del ejercicio.

El resultado por posición monetaria, que representa la erosión de la inflación sobre el poder adquisitivo de las partidas monetarias, se determina aplicando al activo o pasivo monetario neto al principio de cada mes, el factor de inflación derivado del INPC y se actualiza al cierre del ejercicio, también a través del INPC.

Utilidad por acción-

La utilidad por acción se determinó dividiendo la utilidad neta entre el promedio ponderado de acciones en circulación de cada ejercicio.

Utilidad integral-

El resultado integral comprende la utilidad neta del año y las partidas que representan una ganancia o pérdida, que de acuerdo a disposiciones específicas se presentan directamente en la inversión de los accionistas, tales como el resultado por tenencia de activos no monetarios.

3. Nuevo principio contable

En el año 2001 entrará en vigor el nuevo Boletín C-2, que establece la metodología de valuación y registro de los instrumentos financieros. Este boletín requiere que se registren como activos y pasivos los instrumentos financieros que se tengan contratados, afectando el resultado integral de financiamiento por el efecto de los mismos. Los instrumentos financieros que han sido designados y que funcionan efectivamente como una cobertura de activos o pasivos o de operaciones futuras, afectarán los activos o

pasivos o las transacciones correspondientes, cuando ocurran. Al 31 de diciembre de 2000, no hay instrumentos financieros de importancia con estas características.

4. Reclasificaciones a los estados financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre de 1999 han sido reclasificados en ciertas cuentas, con el objeto de hacer comparable su presentación con la de los estados financieros al 31 de diciembre de 2000.

5. Posición y operaciones en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera, han sido valuados al tipo de cambio de $9.6098 por dólar, que corresponde al tipo de cambio oficial al 31 de diciembre de 2000.

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999 se tienen activos y pasivos denominados en moneda extranjera, como sigue:

	2000		1999
	Miles de pesos	Miles de dólares	Miles de dólares
Activo circulante	$ 483,905	50,355	149,162
Pasivo-			
Circulante	623,958	64,929	31,950
Largo plazo	1,136,557	118,271	178,757
	1,760,515	183,200	210,707
Posición pasiva neta en moneda extranjera	$ 1,276,610	132,845	61,545

Las principales operaciones realizadas por la Compañía en moneda extranjera, fueron las siguientes:

	Miles de dólares	
	2000	1999
Intereses pagados	17,646	14,130

Al 22 de enero de 2001, la posición en moneda extranjera, no auditada, es similar a la del cierre del ejercicio y el tipo de cambio oficial es de $9.7953 por dólar.

6. Propiedades

	2000	1999
Terrenos	$ 14,869	$ 14,869
Edificio e instalaciones	128,390	128,390
Muebles y enseres	34	34
	143,293	143,293
Depreciación acumulada	(40,765)	(37,739)
	$ 102,528	$ 105,554

La tasa anual promedio de depreciación de edificios e instalaciones en 2000 y 1999 fue del 2.23%.

7. Otros activos

	2000	1999
Créditos mercantiles	$ 97,145	$ 97,145
Gastos por colocación de deuda	52,409	52,409
Plan de opción de compra de acciones	17,247	17,247
	166,801	166,801
Amortización acumulada	(107,499)	(92,903)
	$ 59,302	$ 73,898

8. Cuentas y operaciones con compañías subsidiarias

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, las cuentas por cobrar y por pagar a compañías subsidiarias, son las siguientes:

	2000	1999
Cuentas por cobrar-		
Cementos Apasco, S.A. de C.V.	$ 4,114,661	$ 2,688,526
Desarrollos y Proyectos El Aromo, S.A. de C.V.	111,094	-
Cementos Veracruz, S.A. de C.V.	-	43,436
Cementos de Acapulco, S.A. de C.V.	-	96,325
Comindumex, S.A. de C.V.	-	23,250
Cal Hidratada Veracruzana, S.A. de C.V	-	2,066
Otras	5,662	11,252
	$ 4,231,417	$ 2,864,855
Cuentas por pagar-		
Concretos Apasco, S.A. de C.V.	$ 135,641	$ 55,817
Gravasa, S.A. de C.V.	13,967	4,036
Cementos Veracruz, S.A. de C.V.	423,749	-
Cementos Acapulco, S.A. de C.V.	103,329	-

Comindumex, S.A. de C.V.	304,195	-
Cal Hidratada Veracruzana, S.A. de C.V.	14,674	-
Bienes Raices Ojo de Agua, S.A. de C.V.	50,100	-
	$ 1,045,655	$ 59,853

Durante 2000 y 1999, las operaciones con compañías subsidiarias se derivaron de:

	2000	1999
Intereses ganados	$ 814,091	$ 1,039,204

9. Entorno fiscal

Régimen de Impuesto Sobre la Renta y sobre activos-

La Compañía está sujeta al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al impuesto sobre activos (IMPAC). El ISR se calcula considerando como gravables o deducibles ciertos efectos de la inflación, tales como depreciación calculada sobre valores actualizados y el efecto de la inflación sobre ciertos activos y pasivos monetarios, a través del componente inflacionario, el cual es similar al resultado por posición monetaria. La tasa del Impuesto Sobre la Renta es de 35%, teniendo la obligación de pagar el impuesto cada año a la tasa de 30% y el remanente al momento en que las utilidades sean distribuidas.

Por otra parte, el IMPAC se causa a razón de 1.8% del promedio neto de la mayoría de los activos (a valores actualizados) menos ciertos pasivos y se paga únicamente por el monto en que exceda al ISR del año. Cualquier pago que se efectúe, es recuperable contra el monto en que el ISR exceda al IMPAC en los diez ejercicios subsecuentes.

Bases para la determinación del resultado fiscal-

La Compañía tiene autorización para presentar una declaración consolidada de ISR e IMPAC.

Las principales partidas que afectaron el resultado fiscal de la Compañía, fueron el componente inflacionario y la participación en la utilidad neta del año de subsidiarias y asociadas, que no es acumulable para efectos fiscales.

Efecto diferido-

El Impuesto Sobre la Renta diferido al 31 de diciembre de 2000, se integra como sigue:

Propiedades y otros activos	$ 54,944
Efecto acumulado por partidas especiales de consolidación fiscal	53,253
	$ 108,197

10. Deuda a largo plazo

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, la deuda a largo plazo se integra como sigue:

			2000		1999
	Tasa de interés	Vencimiento	Miles de pesos	Miles de dólares	Miles de dólares
Citibank, N.A.	LIBOR +1.0	2003	$ 960,980	100,000	100,000
International Finance Corporation	9%	2007	605,417	63,000	72,000
International Finance Corporation	LIBOR + 2.1	2001	48,049	5,000	15,000
Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft Mbh	11.2% y LIBOR + 2.9	2002	58,265	6,063	9,396
Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V.	11.2% y 9.5%	2001 y 2003	35,845	3,730	6,570
EXIMBANK	LIBOR + 0.5	2001	9,264	964	2,891
			1,717,820	178,757	205,857
Menos- Porción circulante			581,263	60,486	27,100
			$ 1,136,557	118,271	178,757

En general, los préstamos vigentes establecen restricciones y obligaciones muy similares para la Compañía, las cuales al 31 de diciembre de 2000 se han cumplido. Las restricciones y obligaciones más importantes son:

- Limitar el pago de dividendos, el cual está condicionado al cumplimiento de algunas razones financieras y al nivel de endeudamiento.
- Cumplir con ciertas razones financieras.
- No disponer ni permitir la existencia de gravámenes sobre los activos.
- Limitar la inversión en activos fijos a las cantidades establecidas en los contratos.

Para financiar el programa de expansión de la subsidiaria Cementos Apasco, S.A. de C.V. que se menciona en la nota 1, el 21 de diciembre de 2000 se contrató una línea de crédito con el Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft de Alemania por US$38.6 millones a una tasa de interés de LIBOR más 0.6, de la cual no se realizó ninguna disposición al 31 de diciembre de 2000 y se habían dispuesto US$16.1 millones al 22 de enero de 2001.

11. Inversión de los accionistas

En cumplimiento al acuerdo de la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 12 de abril de 2000, se efectuó el pago de un dividendo en efectivo de $536,222 ($2.10 pesos por acción en circulación), provenientes de la cuenta de utilidad fiscal neta (CUFIN) consolidada, cuyo valor actualizado asciende a $565,071.

En cumplimiento al acuerdo de la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 24 de abril de 1997, se constituyó una reserva para recompra de acciones, proveniente de la cuenta de utilidades acumuladas para que, con cargo a dicha reserva, se adquieran acciones de la sociedad que representen hasta el 3% del capital social. Posteriormente, por acuerdo de la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 21 de abril de 1999, se incrementó esta reserva para que la sociedad pudiera adquirir acciones que representaran hasta el 5% del capital social. Si dichas acciones no se colocan nuevamente en el término de un año, se procederá a la cancelación del capital social respectivo.

En asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 12 de abril de 2000, se acordó incrementar la reserva en $600,000 a valor histórico, cuyo valor actualizado asciende a $632,280 para adquirir acciones que representen hasta el 5% del capital social a esa fecha. Durante 2000 y 1999 se recompraron 8'400,000 y 5'300,000 acciones en $445,587 y $265,708 (a valor histórico) cuyo monto actualizado asciende a $462,940 y $296,665, respectivamente, y se cancelaron 8'225,000 y 7'731,000 acciones, según asambleas generales ordinarias de accionistas celebradas el 12 y 21 de abril de 2000 y 1999, respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2000, el capital social se encuentra representado por 250'000,000 acciones ordinarias serie Unica, sin valor nominal, de las cuales 244,656,000 se encuentran en circulación y 5'344,000 fueron objeto de recompra, encontrándose en Tesorería al 31 de diciembre de 2000. El capital mínimo fijo está representado por 165,716,299 acciones en circulación y el capital variable por 84'283,701 acciones en circulación. El capital social total suscrito y pagado a valor histórico, asciende a $215,523, de los cuales $40,000 corresponden al capital mínimo fijo.

La reserva legal, cuyo valor histórico asciende a $94,169 al 31 de diciembre de 2000, no es susceptible de distribuirse a los accionistas durante la existencia de la Compañía, excepto en la forma de dividendos en acciones.

Los dividendos que se paguen a personas físicas o residentes en el extranjero, estarán sujetos a retención del Impuesto Sobre la Renta a una tasa efectiva de 7.5% al 7.7%, la cual varía según el año en que las utilidades hayan sido generadas. Además, en caso de repartir utilidades que no hubieran causado el impuesto aplicable a la empresa, éste tendrá que pagarse al distribuir el dividendo. Por lo anterior, la Compañía debe llevar cuenta de las utilidades sujetas a cada tasa.

Las reducciones de capital causarán impuestos sobre el excedente del monto repartido contra su valor fiscal, determinado de acuerdo a lo establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta.

12. Compromisos contraídos

Como se menciona en la nota 1, la subsidiaria Cementos Apasco, S.A. de C.V. tiene un programa de expansión por un total de US$148 millones, de los cuales al 31 de diciembre de 2000 se han incurrido en US$36.7 millones aproximadamente y existen compromisos contraídos para la adquisición de diversos equipos por US$59.8 millones aproximadamente. El financiamiento se ha obtenido de proveedores y de una línea de crédito contratada el 21 de diciembre de 2000 con el Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft de Alemania por US$38.6 millones (ver nota 10).

(R.- 144494)

Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Juzgado Primero de lo Concursal
Secretaría "A"
Exp. 371/2000

EDICTO

El ciudadano Juez Primero de lo Concursal de esta capital hace saber que el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, dictó Sentencia declarando en Estado de Quiebra a Impulsora de Turismo golfo de Caribe, citando a los presuntos acreedores para que presenten sus créditos dentro del plazo de cuarenta y cinco días contados a partir del día siguiente al de la última publicación de este edicto. Designándose como interventor provisional al ciudadano José Luis Chávez Franco.

Para su publicación por tres veces consecutivas en días hábiles, en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico Diario de México.

México, D.F., a 3 de mayo de 2001.

El C. Secretario de Acuerdos

Lic. José Angel Cano Gómez

Rúbrica.

(R.- 144628)

Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Juzgado Primero de lo Concursal
Exp: 174/2000
Sec. B
EDICTO

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha dieciocho de abril del año en curso se hace del conocimiento de las partes que en los autos del Juicio Suspensión de Pagos, promovido por Grupo Arsa, S.A. de C.V., Alta Resistencia, S.A. de C.V., Mexicana de Alta Resistencia, S.A. de C.V. y Componentes Precolados Mexicanos, S.A. de C.V. en el cuaderno principal tomo III del expedienté número 172/2000; por medio de la cual se decreta el levantamiento de la suspensión de pagos de Alta Resistencia, S.A. de C.V.

Para su publicación por tres veces consecutivas en el **Diario Oficial de la Federación** y en el periódico El Sol del México de esta ciudad.

México, D.F., a 22 de mayo de 2001.

El C. Secretario de Acuerdos
Lic. José Angel Cano Gómez
Rúbrica.

(R.- 144680)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
EDICTO

Luz Osornio de Perea.

En los autos del Juicio de Amparo número 489/1000 promovido Por José Juan Martínez Rivera y otros, contra actos del juez Trigésimo Tercero del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal y actuario adscrito a dicho Juzgado; al ser señalada como tercera perjudicada y desconocerse su domicilio actual, con fundamento en la fracción II, del artículo 30 de la Ley de Amparo, se ordena su emplazamiento al juicio de mérito por edictos, los que se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, se hace de su conocimiento que en la Secretaría de este Juzgado queda a su disposición copia simple de la demanda de amparo, y que cuenta con un término de treinta días, contados a partir de la última publicación de los presentes edictos, para que ocurra al Juzgado a hacer valer sus derechos.

Atentamente
México, D.F., a 8 de febrero del 2001.
El Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal
Lic. Rodolfo Sánchez Zepeda
Rúbrica.

(R.- 144718)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito
Tijuana, B.C.
EDICTO

Emplazamiento a Manuel Martínez Robles.

En el Juicio de Amparo número 753/2000, promovido por Juan Fernando Alatorre Cárdenas y coagraviado, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil de esta ciudad y otras autoridades, en los que reclaman el embargo trabado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil ventilado ante el juez responsable bajo el número 600/96, seguido por Antonio Rodríguez Soto en contra de Manuel Martínez Robles, Manuel Martínez Jiménez y Mariano Betancourt Martínez sobre un bien que, según afirman, es de su propiedad, identificado como condominio número 502, edificio B, construido sobre el lote 6, manzana 53, segunda sección del fraccionamiento El Lago de esta ciudad, se ordeno emplazar a usted por edictos que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación**; en el periódico Excélsior de la Ciudad de México, Distrito Federal, y en el periódico El Mexicano de esta ciudad, haciéndole saber que deberá comparecer al supradicho Juicio de Garantías dentro del término de treinta

días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, apercibido que de no efectuarlo así, las ulteriores notificaciones le surtirán por lista que se fijará en los estrados de este Juzgado, señalándose las nueve horas con treinta minutos del día uno de junio del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en el Juicio de Amparo ya identificado.

Tijuana, B.C. a 7 del mayo de 2001.

El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado

Lic. Jorge Ignacio Pérez Castañeda

Rúbrica.

(R.- 144720)

DECORACIONES Y MODA EN TELAS, S.A. DE C.V.

TELAS POTESTAS TRES, S.A. DE C.V.

ACUERDO SOBRE FUSION

Mediante asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 31 de diciembre de 2000 Decoraciones y Moda en Telas, S.A. de C.V. y Telas Potestas Tres, S.A. de C.V., resolvieron fusionarse actuando la primera como sociedad fusionante y la segunda como sociedad fusionada, conforme a las siguientes bases:

Telas Potestas Tres, S.A. de C.V., como sociedad fusionada se fusiona con y en Decoraciones y Moda en Telas, S.A. de C.V., subsistiendo esta última como sociedad fusionante, con base en los estados financieros de dichas sociedad al 31 de diciembre de 2000, mismos que fueron publicados por este medio el día 27 de marzo de 2001.

La sociedad fusionada, Telas Potestas Tres, S.A. de C.V. transmite en este acto a Decoraciones y Moda en Telas, S.A. de C.V. a título universal, la totalidad de su activo, pasivo y capital.

La fusión surtirá efectos respecto de la sociedad fusionada y fusionante, a partir del día 31 de diciembre de 2000.Respecto a los terceros, la fusión surtirá efectos a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la sociedad fusionada y fusionante.

La fusionante, Decoraciones y Moda en Telas, S.A. de C.V., reconoce todos los contratos civiles, mercantiles y de cualquier otra índole que haya celebrado la fusionada, Telas Potestas Tres, S.A. de C.V. con anterioridad a la fecha de la presente asamblea, por lo que asume todos los derechos y se hace cargo de todas y cada una de las obligaciones consignadas en dichos contratos o que hayan surgido de cualesquier otro acto jurídico celebrado por dicha sociedad con anterioridad a la fecha de celebración de la presente asamblea.

El capital social de Decoraciones y Moda en Telas, S.A. de C.V., se verá incrementado en su porción variable, en la cantidad de $4'110,000.00 (cuatro millones ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), mediante la emisión de 4'110,000 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, mismas que representarán el importe del capital social de la sociedad fusionada que se transmite a la fusionante.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 223 y 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se realiza la presente publicación.

México, D.F., a 31 de diciembre de 2000.

Delegado Especial

José Manuel Meillón del Pando

Rúbrica.

(R.- 144721)

Estados Unidos Mexicanos
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
México
Sexta Sala Civil
Toca Núm. 3887/99

EDICTO

Se notifica a: Mesonería del Distrito Federal.

Que en los autos del toca arriba anotado, del Juicio Ordinario Mercantil seguido por Pinturas Optimus, S.A. de C.V. contra Banco Bilbao Vizcaya México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBV-Probursa antes Multibanco Mercantil Probursa, S.A. y otros, se ordenó emplazar a usted, por medio de edictos, en virtud de ignorarse su domicilio y en su carácter de tercero perjudicado, la interposición del Juicio de Garantías ante el H. Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, a fin de que acuda ante la citada Autoridad Federal en defensa de sus intereses, dejando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de esta Sexta Sala, las copias simples correspondientes.

Sufragio Efectivo. No Reelección

México, D.F., a 22 de mayo de 2001.

La C. Secretaria de Acuerdos

Lic. Antigona Cuanalo Ramírez

Rúbrica.

(R.- 144723)

PRIMER AVISO NOTARIAL

Por escritura cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y dos, ante mí, de veinticuatro de mayo del año dos mil uno, Roberto Ochoa García y Alberto Ochoa García, en su carácter de únicos y universales herederos y el primero también en su carácter de albacea, en las sucesiones testamentarias acumuladas a bienes de Salvador Ochoa Núñez y Ramona García Díaz, manifestaron su conformidad en tramitar dichas sucesiones ante mí, reconocieron la validez de los testamentos otorgados, se reconocieron por sí y entre sí sus derechos hereditarios y aceptaron la herencia que les fue deferida, y el albacea manifestó que en su oportunidad procederá a formular el inventario de los bienes relictos.

México, D. F., a 24 de mayo de 2001.

Notario 25 del D.F.

Lic. Emiliano Zubiria Maqueo

Rúbrica.

(R.- 144724)

BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO DE RODRIGO M. QUEVEDO, MUNICIPIO ASCENSION, CHIHUAHUA

AVISO GENERAL DE ADQUISICIONES

Junta Rural de Agua y Saneamiento de Rodrigo M. Quevedo, Municipio de Ascensión, Chihuahua (JRAS)

Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua (JCAS)

La Junta Rural de Agua y Saneamiento (JRAS) de Rodrigo M. Quevedo, Municipio de Ascensión, Chihuahua ha solicitado apoyo del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), a través de su programa, Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF), fondeado por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), con el fin de sufragar parcialmente las inversiones del Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la Ciudad de Rodrigo M. Quevedo, Chihuahua.

La Ciudad de Rodrigo M. Quevedo esta ubicada en la parte noroeste del Estado de Chihuahua, en el Municipio de Ascensión, el cual colinda con el Municipio de Janos hacia el oeste; el de Nuevo Casas Grandes y Buenaventura hacia el sur; el de Ahumada y Juárez hacia el este; y el Condado Luna en el Estado de Nuevo México, EE.UU. hacia el norte. En 1999, la población de Rodrigo M. Quevedo se estimaba en 7,490 habitantes con un crecimiento anual de 4.64%.

El propósito del proyecto es de aumentar la cobertura de los servicios de alcantarillado y proporcionar los servicios de saneamiento a los habitantes de Rodrigo M. Quevedo mediante la rehabilitación y expansión del sistema de alcantarillado y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. El proyecto fue certificado por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza el 7 de diciembre de 2000 y comprende dos etapas de construcción de obras con un costo total estimado de US$5.2 millones.

El costo estimado de la etapa I del proyecto es de US$4.0 millones. Esta etapa comenzó en 1996, con obras financiadas por la JCAS y la JRAS, y se espera que concluya en el año 2002. El BDAN planea firmar un acuerdo de fondos no reembolsables por US$1.9 millones en junio del presente año para contribuir a esta primera etapa del proyecto. Estos fondos serán utilizados en asistencia para construcción y asistencia para administración de la construcción. Los costos definitivos de la Etapa II, que se llevará a cabo durante los años 2010 al 2012, se determinarán antes del año 2010.

Para las obras que se financiarán con recursos del BDAN, JRAS llevará a cabo licitaciones públicas conforme a las Políticas de Adquisición y Contratación del BDAN. Estas licitaciones se iniciarán tan pronto el BDAN firme el acuerdo de fondos no reembolsables y estarán abiertas a empresas de cualquier país.

Para mayor información acerca de este proyecto o para expresar su interés en recibir las convocatorias de licitación, los interesados deben dirigirse a:

Sr. Antonio Palacios Corral

Junta Rural de Agua y Saneamiento de Rodrigo M. Quevedo

Municipio de Ascensión, Chihuahua

Calle Internacional, S/N

Puerto Palomas, Chihuahua, México, C.P. 31830

Teléfono [52] (166) 6-01-05

Ad número 18PAL060401BEIF

San Antonio, Tex., a 29 de mayo de 2001.
Banco de Desarrollo de América del Norte
Gerente de Contratos y Adquisiciones
Arq. Erick Schlebach
Rúbrica.

(R.- 144857)

FIDEICOMISO QUE ADMINISTRA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley que creo el Fideicomiso Que administra el fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, el Comité Técnico del Fideicomiso, ha aprobado el Procedimiento de Pago que se deberá aplicar en beneficio de las personas plenamente identificadas como Ahorradores Afectados en el Estado Libre y Soberano de Durango, conforme a lo siguiente:

PROCEDIMIENTO DE PAGO A AHORRADORES AFECTADOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO

OBJETIVO:

Dentro del marco de simplificación administrativa se ha considerado que el procedimiento de pago a los Ahorradores Afectados sea sencillo en su comprensión y método, a la vez que ágil y apegado a los términos establecidos por la Ley; así mismo se ha puesto especial cuidado en que el procedimiento aquí contenido cumpla con los objetivos de veracidad y oportunidad en cuanto a los trámites a realizar por los Ahorradores, dada la importancia social y económica que para ellos representa.

Se ha buscado establecer mecanismos de coordinación de acciones entre el Fideicomiso mencionado y el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Durango.

Consecuentemente, a fin de prestar un mejor servicio a los Ahorradores Afectados de la sociedad denominada Cooperativa Caja Popular la número 1 de Durango, S.C.L., se ha buscado alcanzar una cobertura estatal eficiente con el apoyo y profesionalismo del Centro de Atención que al efecto se establece en el Estado Libre y Soberano de Durango.

MECANICA DE PAGO:

PRIMERO.- En todo momento se deberá cumplir las Bases Generales contenidas en el artículo 11 de la Ley y el Procedimiento se aplicará una vez hecha la publicación del presente en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de circulación nacional.

SEGUNDO.- Se pagará solo a aquellos Ahorradores Afectados plenamente identificados con base en las auditorias practicadas a las sociedades en los términos de la fracción II del artículo 8 de la Ley cuyo Saldo Neto de Ahorro sea hasta $ 190,000.00 (ciento noventa mil pesos 00/100 M.N.).

TERCERO.- En caso de existir discrepancia entre los documentos comprobatorios de los depósitos de los Ahorradores o títulos de crédito y los resultados de la auditoria fuente de la base de datos, se estará para efectos del pago, a lo siguiente:

a) Si el Ahorrador cuenta con un título de crédito, se considerará la cantidad que ampare el mismo.

b) Si el Ahorrador tiene documentos que comprueben sólo parte del Saldo Neto de Ahorro reflejado en la auditoria, se liquidará únicamente lo documentado**.**

c) Si un Ahorrador presenta un cheque sin fondos de la Sociedad expedido antes de la fecha de la auditoria efectuada, el pago deberá de realizarse conforme a la literalidad del mismo y únicamente por el 70% de su valor, a través del Centro de Atención Especial para casos atípicos.

d) Finalmente, si el Ahorrador es beneficiario de un título de crédito y cuenta con el mismo pero no aparece registrado en la auditoria, el caso deberá tratarse por separado en el Centro de Atención Especial, para casos atípicos.

CUARTO.- De acuerdo con la ley se pagará únicamente el 70% del Saldo Neto de Ahorro que resulte de restar de los saldos a favor (depósitos) los saldos en contra (préstamos); en dicho cálculo no se computarán intereses ni a favor ni en contra.

QUINTO.- Al aceptar su Saldo Neto de Ahorro, el Ahorrador deberá manifestar por escrito en los términos de la Base Quinta del artículo 11 de la Ley, que cede sus derechos de crédito, que renuncia al pago de intereses a su favor y que no se reserva acción ni derechos de ninguna especie en contra de la Sociedad insolvente de la que es acreedor, del Fideicomiso, la Institución Fiduciaria o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Gobierno Estatal.

El pago a los Ahorradores se efectuará contra la entrega de los títulos de crédito o documentos comprobatorios originales, así como la cesión de derechos y las renuncias mencionadas y la manifestación de separación voluntaria de la sociedad cooperativa, además de otros requisitos previstos por la Ley.

SEXTO.- Dentro de los sesenta días naturales a partir de la fecha de publicación del presente Procedimiento de Pago en el Diario Oficial de la Federación, en el Estado de Durango los

Ahorradores Afectados podrán acudir al Centro de Atención que designe el Gobierno del Estado de Durango y que hará de su conocimiento por los medios de comunicación social en base a lo indicado en el Punto Primero.

SEPTIMO.- Para ser identificado como Ahorrador Afectado de las sociedades a que se refiere el artículo 8 de la Ley, los interesados deberán acompañar a su solicitud de pago los siguientes documentos en fotocopia, presentando los originales para su cotejo:

- Copia certificada de su acta de nacimiento, o supletoriamente, Pasaporte, Credencial de Elector, Clave Unica de Registro de Población o Licencia de Conducir vigente expedida por el Gobierno del Estado de Durango.
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma.
- Comprobante de domicilio actualizado (Recibo telefónico, Estado de Cuenta Bancario, Recibo expedido por CFE, constancia municipal de residencia).
- Documento(s) que lo acrediten como socio.
- Títulos de Crédito o documentos comprobatorios que demuestren su depósito.
- Para el caso de que el Ahorrador Afectado sea contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, deberá presentar su declaración anual correspondiente a cada uno de los años en que fue Ahorrador de una Sociedad, hasta por un máximo de 5 años.

De no ser contribuyente del Impuesto Sobre la Renta o no estar obligado a presentar declaración, y por lo tanto no estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes conforme a las disposiciones fiscales aplicables, deberá manifestarlo así por escrito y bajo protesta de decir verdad, con apercibimiento de
las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante autoridad distinta de la Judicial.

OCTAVO.- El Ahorrador Afectado deberá realizar sus trámites personalmente, sin embargo podrá realizarlos por conducto de un representante legal sólo por causa grave y justificada que se acredite, o bien tratándose de un incapaz.

Para este efecto, además de lo anterior, bastará que su representante legal presente su identificación oficial con fotografía y firma y exhiba el documento que así lo acredite conforme a la Legislación Local o, en su caso, en los términos del Código Civil Federal.

NOVENO.- En el caso de que el Ahorrador Afectado haya fallecido, el trámite de pago deberá realizarlo el albacea de la sucesión, o en su caso, los herederos reconocidos por sentencia judicial, quienes además de los requisitos anteriores deberán presentar la siguiente documentación:

- Copia Certificada del acta de defunción del Ahorrador Afectado.
- Copia Certificada del documento judicial que acredite su cargo de albacea, o su calidad de heredero.
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma del albacea o de los herederos.

DECIMO.- Cuando habiendo fallecido el Ahorrador Afectado y al realizar su depósito en la sociedad hubiera designado beneficiarios, estos podrán presentarse a iniciar el procedimiento de pago, anexando a la solicitud fotocopias y presentando originales para su cotejo, de los siguientes documentos además de los requisitos a que se refiere el punto Séptimo anterior.

- Copia certificada del acta de defunción del Ahorrador Afectado.
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma del o de los beneficiarios.

DECIMO PRIMERO.- El encargado del Centro de Atención, verificará que la documentación esté completa y que cumpla con los requisitos señalados por este procedimiento.

DECIMO SEGUNDO.- Una vez que el Ahorrador Afectado o su representante o beneficiario se presente en el Centro de Atención en la fecha indicada y con su documentación, el orientador del mismo cotejará que se encuentre en la base de datos de la auditoria practicada a la Sociedad y de ser así se le entregará al Ahorrador Afectado o su representante o beneficiario, el formato solicitud para ser requisitado.

DECIMO TERCERO.- El Ahorrador Afectado, representante o beneficiario, entregará la solicitud debidamente requisitada adjuntando la documentación en original y copia en la ventanilla.

DECIMO CUARTO.- El encargado del Centro de Atención al recibir la solicitud y documentación en original y copia, verificará que aparezca registrado en la base de datos y cotejará que el Saldo Neto de Ahorro sea igual o menor a $ 190,000.00 (Ciento Noventa Mil Pesos 00/100, Moneda Nacional).

DECIMO QUINTO.- Realizado lo anterior, es decir si el Ahorrador Afectado, su representante o beneficiario cumple con los requisitos, le será entregado un contra recibo intransferible por la documentación entregada, para que acuda posteriormente, en la fecha que se le indique, a canjear el mismo, por su cheque nominativo no negociable, en el caso en que no entregue los documentos

originales en el acto, por lo mismo no se realizará el pago el mismo día hasta acreditar debidamente este hecho.

El contra recibo indicado es personal, intransferible y no endosable y en él se anotará el monto del saldo neto de ahorro y la fecha de su pago.

El cheque nominativo no negociable, sólo se proporcionará contra entrega del formato finiquito de pago elaborado al efecto para su firma de conformidad y endosos o cesiones respectivas, y que contiene cesión de derechos y la renuncia a las acciones procedimentales.

DECIMO SEXTO.- A la entrega del contra recibo, en la fecha que se haya predeterminado en el mismo, el beneficiario recibirá el cheque nominativo no negociable correspondiente.

DECIMO SEPTIMO.- En el caso en que la cuenta sea solidaria, para los efectos de los pagos, cualquiera de los acreedores podrá exigir el cumplimiento total de la obligación, pagándosele al primero que se presente.

DECIMO OCTAVO.- En el caso de que la cuenta sea mancomunada, para los efectos del pago se efectuará sólo a favor del representante común.

DECIMO NOVENO.- El pago a los Ahorradores de las sociedades que se encuentren en estado de quiebra, se efectuará de conformidad con las sentencias que les reconozcan su calidad de acreedores, observando en todo momento el procedimiento establecido en la Ley y el presente.

Unicamente se pagará a los Ahorradores que se encuentren reconocidos como acreedores en el procedimiento concursal, en términos del segundo párrafo del Artículo 11 de la Ley.

VIGESIMO.- Los ahorradores que se hayan abstenido de reclamar el crédito a su favor dentro del término fijado para tal efecto por el Juez que conozca del procedimiento de quiebra, podrán acogerse al contenido de la Ley de la materia si al ser reconocidos con posterioridad aún existen recursos remanentes, una vez que hubiesen cubierto los pagos a los Ahorradores reconocidos originalmente y aún no haya concluido el período para el procedimiento de pago.

VIGESIMO PRIMERO.- Los centros de atención que establezca el Gobierno del Estado de Durango tienen la obligación de asesorar y orientar en todo momento a los Ahorradores Afectados, con la finalidad de facilitarles y guiarles en la realización de sus trámites respecto al presente Procedimiento de Pago y para lo cual existirá un Centro de Atención Especial para recibir asuntos atípicos o de complejidad especial.

Las firmas que anteceden corresponden al Procedimiento de Pago derivado del Convenio de Coordinación celebrado con fecha 15 de Mayo de 2001 entre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Durango y el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. Este documento se firma en tres ejemplares autógrafos conservando en su poder uno el Estado y dos el Fideicomiso.

Durango, Dgo., a 28 de mayo de 2001.

	Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores
Representante Estatal del Gobierno Libre y Soberano de Durango	**Arnulfo Leura Zavala**
C.P. José R. Valenzuela Meraz	
Rúbrica. Rúbrica.	

(R.- 144864)

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal
Oficio 120.307.- 1578

Ing. Franz Guns Devos
Director General de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V.
Presente.

Se hace referencia a sus escritos de fechas 27 y 30 de abril del presente año, por medio de los cuales solicita el registro de las tarifas y reglas de aplicación que pretenden utilizar en la prestación de los servicios aeroportuarios y la cuota por extensión de servicios no cancelados, los concesionarios de los aeropuertos de Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz y Villahermosa, con vigencia a partir del 1 de junio de 2001, excepto para las que se aplicarán en el de Cancún, misma que iniciará el día 2 del mismo mes y año, y para cuyo efecto envía copia de la recomendación emitida en los Comités de Operación y Horarios de dichos aeropuertos, con motivo del incremento en esas tarifas, y de las inconformidades de algunas líneas aéreas. Sobre el particular, se le comunica que considerando:

- Que las tarifas de referencia se ajustan a las disposiciones aplicables de la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, y al apartado 3.1 de las Bases de Regulación Tarifaria contenidas en el anexo 7 de los Títulos de Concesión otorgados a las concesionarias de los aeropuertos que integran ese Grupo;

- Que las tarifas propuestas a registro se presentaron a consideración de los Comités de Operación y Horarios respectivos, quienes con excepción del Comité del Aeropuerto Tapachula, no se pronunciaron en cuanto a la modificación de las tarifas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 135 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, por lo que éstas se tienen por aceptadas.

- Que el Comité de Operación y Horarios del Aeropuerto de Tapachula, se pronunció en forma favorable al incremento de las tarifas en comento, no obstante las inconformidades de algunas líneas aéreas.

Con fundamento en los artículos 36 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 69 de la Ley de Aeropuertos; 136 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, y de conformidad con las concesiones otorgadas a las empresas: Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V., Aeropuerto de Cozumel, S.A. de C.V., Aeropuerto de Huatulco, S.A. de C.V., Aeropuerto de Mérida, S.A. de C.V., Aeropuerto de Minatitlán, S.A. de C.V., Aeropuerto de Oaxaca, S.A. de C.V., Aeropuerto de Tapachula, S.A. de C.V., Aeropuerto de Veracruz, S.A. de C.V., y Aeropuerto de Villahermosa, S.A. de C.V., esta Dirección General registra las tarifas que se anexan y forman parte del presente, así como la cuota por extensión de servicios no cancelados, iniciando su vigencia a partir del 1 de junio de 2001, excepto para las del Aeropuerto de Cancún que será a partir del 2 del mismo mes y año.

Por lo que se refiere a las reglas de aplicación para la prestación de los servicios en los aeropuertos que integran ese Grupo, en virtud de no haber propuesto modificación alguna a éstas, continúan vigentes las registradas con oficio 120.-1186/99 del 12 de noviembre de 1999; así como lo establecido en el oficio número 120.307.-2207 con fecha 25 de agosto de 2000, relativo a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) para aeronaves con matrícula XB.

Asimismo, se le comunica que a las tarifas registradas con este oficio, se les deberá aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo con la ley en esta materia, y deberán publicarse en el **Diario Oficial de la Federación** previamente a su aplicación, conforme a lo establecido en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos.

Son aplicables también los artículos 1, 6 fracción XII y conducentes de la Ley de Aeropuertos; 1, 133, 134, 135 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Aeropuertos; 21 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como los demás que para el caso específico establezcan las disposiciones legales aplicables.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 29 de mayo de 2001.

El Director General

Lic. Oscar S. Corzo

Rúbrica.

AEROPUERTO DE CANCUN, S.A. DE C.V.

TARIFAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS APLICABLES A PARTIR DEL 2 DE JUNIO DE 2001

CONCEPTO	HORARIO NORMAL		**HORARIO CRITICO**	
	NAL.	**INT.**	**NAL.**	**INT.**
SERVICIO DE ATERRIZAJE FACTOR DE COBRO ($/T.M.) POR TONELADA O FRACCION	11.70	30.20	17.50	45.20
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	8.10	16.40	12.10	24.60
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE PERMANENCIA PROLONGADA O PERNOCTA FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	1.00	2.00	1.10	2.20

SERVICIO DE PASILLOS TELESCOPICOS, AEROPUENTES, SALA MOVIL Y/O AEROCAR FACTOR DE COBRO ($/MEDIA HORA/UNIDAD) POR HORA Y POR UNIDAD	273.10	532.80	409.70	799.20
SERVICIO DE REVISION A LOS PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	2.10	2.70	3.20	4.00
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	125.70	14.40	125.70	14.40

Notas

TUA Internacional expresada en dólares americanos.

Los precios no incluyen IVA.

Horario crítico de 13:00 a 16:00 horas.

AEROPUERTO DE COZUMEL, S.A. DE C.V.

TARIFAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2001

CONCEPTO	HORARIO NORMAL	
	NAL.	**INT.**
SERVICIO DE ATERRIZAJE FACTOR DE COBRO ($/T.M.) POR TONELADA O FRACCION	13.20	31.30
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	9.10	17.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE PERMANENCIA PROLONGADA O PERNOCTA FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	0.90	1.80
SERVICIO DE PASILLOS TELESCOPICOS, AEROPUENTES, SALA MOVIL Y/O AEROCAR FACTOR DE COBRO ($/MEDIA HORA/UNIDAD) POR HORA Y POR UNIDAD	308.70	553.60
SERVICIO DE REVISION A LOS PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	2.40	2.80
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	125.70	14.40
CUOTA POR EXTENSION DE SERVICIOS NO CANCELADOS	2,149.10	2,149.10

Notas

TUA Internacional expresada en dólares americanos.

Los precios no incluyen IVA.

Las tarifas en horario extraordinario se incrementan 100% sobre las normales.

AEROPUERTO DE HUATULCO, S.A. DE C.V.

TARIFAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2001

CONCEPTO	HORARIO NORMAL	
	NAL.	**INT.**
SERVICIO DE ATERRIZAJE FACTOR DE COBRO ($/T.M.) POR TONELADA O FRACCION	13.20	31.30

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	9.10	17.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE PERMANENCIA PROLONGADA O PERNOCTA FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	0.90	1.80
SERVICIO DE PASILLOS TELESCOPICOS, AEROPUENTES, SALA MOVIL Y/O AEROCAR FACTOR DE COBRO ($/MEDIA HORA/UNIDAD) POR HORA Y POR UNIDAD	308.70	553.60
SERVICIO DE REVISION A LOS PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	2.40	2.80
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	125.70	14.40
CUOTA POR EXTENSION DE SERVICIOS NO CANCELADOS	2,149.10	2,149.10

Notas

TUA Internacional expresada en dólares americanos.

Los precios no incluyen IVA.

Las tarifas en horario extraordinario se incrementan 100% sobre las normales.

AEROPUERTO DE MERIDA, S.A. DE C.V.

TARIFAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2001

CONCEPTO	HORARIO NORMAL		**HORARIO CRITICO**	
	NAL.	**INT.**	**NAL.**	**INT.**
SERVICIO DE ATERRIZAJE FACTOR DE COBRO ($/T.M.) POR TONELADA O FRACCION	11.70	30.20	17.50	45.20
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	8.10	16.40	12.10	24.60
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE PERMANENCIA PROLONGADA O PERNOCTA FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	1.00	2.00	1.10	2.20
SERVICIO DE PASILLOS TELESCOPICOS AEROPUENTES, SALA MOVIL Y/O AEROCAR FACTOR DE COBRO ($/MEDIA HORA/UNIDAD) POR HORA Y POR UNIDAD	273.10	532.80	409.70	799.20
SERVICIO DE REVISION A LOS PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	2.10	2.70	3.20	4.00
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	125.70	14.40	125.70	14.40

Notas

TUA Internacional expresada en dólares americanos.

Los precios no incluyen IVA.

Horario crítico de 10:00 a 12:00 horas.

AEROPUERTO DE MINATITLAN, S.A. DE C.V.

TARIFAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS APLICABLES A PARTIR **DEL 1 DE JUNIO DE 2001**

CONCEPTO	HORARIO NORMAL	
	NAL.	**INT.**
SERVICIO DE ATERRIZAJE FACTOR DE COBRO ($/T.M.) POR TONELADA O FRACCION	13.20	31.30
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	9.10	17.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE PERMANENCIA PROLONGADA O PERNOCTA FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	0.90	1.80
SERVICIO DE PASILLOS TELESCOPICOS, AEROPUENTES, SALA MOVIL Y/O AEROCAR FACTOR DE COBRO ($/MEDIA HORA/UNIDAD) POR HORA Y POR UNIDAD	308.70	553.60

SERVICIO DE REVISION A LOS PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	2.40	2.80
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	125.70	14.40
CUOTA POR EXTENSION DE SERVICIOS NO CANCELADOS	2,149.10	2,149.10

Notas

TUA Internacional expresada en dólares americanos.

Los precios no incluyen IVA.

Las tarifas en horario extraordinario se incrementan 100% sobre las normales.

AEROPUERTO DE OAXACA, S.A. DE C.V.

TARIFAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2001

CONCEPTO	HORARIO NORMAL	
	NAL.	**INT.**
SERVICIO DE ATERRIZAJE FACTOR DE COBRO ($/T.M.) POR TONELADA O FRACCION	14.60	34.60
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	10.10	18.80
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE PERMANENCIA PROLONGADA O PERNOCTA FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	1.00	2.00
SERVICIO DE PASILLOS TELESCOPICOS, AEROPUENTES, SALA MOVIL Y/O AEROCAR FACTOR DE COBRO ($/MEDIA HORA/UNIDAD) POR HORA Y POR UNIDAD	341.30	612.10
SERVICIO DE REVISION A LOS PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	2.70	3.10
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	125.70	14.40
CUOTA POR EXTENSION DE SERVICIOS NO CANCELADOS	2,375.90	2,375.90

Notas

TUA Internacional expresada en dólares americanos.

Los precios no incluyen IVA.

Las tarifas en horario extraordinario se incrementan 100% sobre las normales.

AEROPUERTO DE TAPACHULA, S.A. DE C.V.

TARIFAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2001

CONCEPTO	HORARIO NORMAL	
	NAL.	**INT.**
SERVICIO DE ATERRIZAJE FACTOR DE COBRO ($/T.M.) POR TONELADA O FRACCION	13.20	31.30
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	9.10	17.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE PERMANENCIA PROLONGADA O PERNOCTA FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	0.90	1.80
SERVICIO DE PASILLOS TELESCOPICOS, AEROPUENTES, SALA MOVIL Y/O AEROCAR FACTOR DE COBRO ($/MEDIA HORA/UNIDAD) POR HORA Y POR UNIDAD	308.70	553.60
SERVICIO DE REVISION A LOS PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	2.40	2.80
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	125.70	14.40
CUOTA POR EXTENSION DE SERVICIOS NO CANCELADOS	2,149.10	2,149.10

Notas

TUA Internacional expresada en dólares americanos.

Los precios no incluyen IVA.

Las tarifas en horario extraordinario se incrementan 100% sobre las normales.

AEROPUERTO DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

TARIFAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2001

CONCEPTO	HORARIO NORMAL	
	NAL.	**INT.**
SERVICIO DE ATERRIZAJE FACTOR DE COBRO ($/T.M.) POR TONELADA O FRACCION	13.20	31.30
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	9.10	17.00
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE PERMANENCIA PROLONGADA O PERNOCTA FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	0.90	1.80
SERVICIO DE PASILLOS TELESCOPICOS, AEROPUENTES, SALA MOVIL Y/O AEROCAR FACTOR DE COBRO ($/MEDIA HORA/UNIDAD) POR HORA Y POR UNIDAD	308.70	553.60

SERVICIO DE REVISION A LOS PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	2.40	2.80
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	125.70	14.40
CUOTA POR EXTENSION DE SERVICIOS NO CANCELADOS	2,149.10	2,149.10

Notas

TUA Internacional expresada en dólares americanos.

Los precios no incluyen IVA.

Las tarifas en horario extraordinario se incrementan 100% sobre las normales.

AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA, S.A. DE C.V.

TARIFAS DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS APLICABLES A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2001

CONCEPTO	HORARIO NORMAL	
	NAL.	**INT.**
SERVICIO DE ATERRIZAJE FACTOR DE COBRO ($/T.M.) POR TONELADA O FRACCION	14.60	34.60
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	10.10	18.80
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN PLATAFORMA DE PERMANENCIA PROLONGADA O PERNOCTA FACTOR DE COBRO ($/T.M./HORA) POR TONELADA O FRACCION Y POR HORA	1.00	2.00
SERVICIO DE PASILLOS TELESCOPICOS, AEROPUENTES, SALA MOVIL Y/O AEROCAR FACTOR DE COBRO ($/MEDIA HORA/UNIDAD) POR HORA Y POR UNIDAD	341.30	612.10
SERVICIO DE REVISION A LOS PASAJEROS Y SU EQUIPAJE DE MANO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	2.70	3.10
TARIFA DE USO DE AEROPUERTO FACTOR DE COBRO ($/PASAJERO) POR PASAJERO	125.70	14.40
CUOTA POR EXTENSION DE SERVICIOS NO CANCELADOS	2,375.90	2,375.90

Notas

TUA Internacional expresada en dólares americanos.

Los precios no incluyen IVA.

Las tarifas en horario extraordinario se incrementan 100% sobre las normales.

(R.- 144892)